

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Departamento de Derecho Político



TESIS DOCTORAL

Fueros y revolución liberal en Navarra : (1808-1841)

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

María Cruz Mina Apat

DIRECTOR:

Pablo Lucas Verdu

Madrid, 2015

M^a. de la Cruz Mina Apat

TP
1983
—
093



v- 53-295411-3

FUEROS Y REVOLUCION LIBERAL, CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN EN NAVARRA.

(1.808 - 1.841)



BIBLIOTECA

Departamento de Derecho Político
Sección de Ciencias Políticas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
1983

Colección Tesis Doctorales. Nº

93/83

© María de la Cruz Mina Apat
Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía
Noviciado, 3 Madrid-8
Madrid, 1983
Xerox 9200 XB 480
Depósito Legal: M-9852-1983

FUEROS Y REVOLUCION LIBERAL: CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN

EN NAVARRA (1808-1841)

Tesis doctoral presentada por:

MARIA CRUZ MINA APAT

Dirigida por el catedrático de Derecho Político:

Dr. D. PABLO LUCAS VERDU

Universidad Complutense

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Madrid, enero 1980

ERRATAS

<u>Pág.</u>	<u>Línea</u>	<u>Dice:</u>	<u>Debe decir:</u>
XIII	12	opción política	opción política liberal
21	9	vehículo	vínculo
34	9	negado	denegado
41	20	eclesiástico, sólo	eclesiástico, éste sólo
45	19	1976	1796
84	11	ley	ley XXXV
106	28	ja	deja
128	18	directo	indirecto
133	12	por su presión	por la supresión
157	14	planificación	plantificación
159	7	sentado	sentando
196	22	esfuerzo	refuerzo
205	18	Eustaquio Sus-	Eustaquio Echave Sus-
257	15	constitucionalistas	constitucionales
264	12	no había-	nos había-
266	1	económico y	económico hay y
271	9	solicitando en el	solicitando su protección en el
272	24	estado de es-	estado de opinión de es-
273	2	posible del	posible dentro del
311	14	internacionalidad	intencionalidad
335	3	sustituye	sustituyente
356	11	al Congreso provincial	al Congreso la Diputación provincial
356	17	invertidas y apreciables	invertidas de estensas y apreciables
359	15	el fuero que	del fuero lo que
366	17-18	Orden y oponerse	orden existente y oponerse
372	7	Entonces en	Entonces tendremos en
379	6	banqueros.	banqueros:
388	10	(285). Para	(285) para
429	3	de lo del clero	de la del clero
441	21	rezaba sí:	rezaba así:
458	3	te que en	te en el Senado que
472	8 y 9	la paz asegura el orden	la paz segura ni posible el orden
474	10	resistir cuando	resistir. Cuando
477	5	recordaré que algunos	recordaré algunos
480	13	posibilidad	posibilidad
481	4	"Se cree	"¿Se cree
481	5	hombre	hombres
483	22	El Ministerio a conservar	El Ministerio decidido a conservar
486	33	días si	días: si
528 nota 207		5-XII-1840	10-XII-1840

I N T R O D U C C I O N

Los estudios sobre la crisis del Antiguo Régimen y la aparición del Estado liberal en España se han centrado fundamentalmente en el análisis de las limitaciones de la revolución burguesa y en la hegemonía de los moderados en dicho proceso. Pese al reconocimiento de las peculiaridades con respecto al modelo que venía siendo presentado como prototipo de revolución liberal, el francés, nuestra historiografía ha orillado una de las características más notables de la formación del Estado constitucional español: la permanencia de situaciones jurídicas particulares derivadas de la incorporación de los "derechos forales" a la unidad constitucional.

El mantenimiento de estos particularismos, que ha imposibilitado la unificación jurídica, ha convertido la igualdad de derechos y deberes entre los españoles que en los sucesivos textos constitucionales se proclamaba en una mera declaración formal, al establecer desigualdades,

sobre todo en materia fiscal, entre los ciudadanos de los territorios con fueros y los restantes de la Monarquía.

El tema no ha de verse vinculado con el problema de la descentralización del Estado. Los constituyentes españoles del pasado siglo no pretendieron construir una estructura de Estado que reconociera determinados ámbitos de autonomía para las regiones forales, sino que cayeron en la contradicción de tolerar, incluso de sancionar legalmente esos particularismos tras garantizar formalmente el respeto a los principios de la Constitución. La misma diferencia entre el sistema navarro derivado de la llamada Ley Paccionada y los originados en las Provincias Vascongadas de resultas de la Ley 21-VII-1876, así como el período de tiempo transcurrido entre una y otra ley, nos indican que los legisladores hispanos no se enfrentaron en bloque con la adecuación de los sistemas forales al ordenamiento constitucional, sino que tal adecuación se realizó en particular y en conexión con los diversos problemas internos de cada territorio, así como con los que en los distintos momentos tenía planteados la Monarquía.

La interpretación que este hecho ha recibido encierra no pocas contradicciones. Por un lado, los que reconocen la Constitución como expresión de la única soberanía nacional española, suelen aceptar al mismo tiempo la denominación de Ley Paccionada que se otorga a la Ley de modificación de fueros de Navarra de 1841. Por otro, desde los

territorios forales, y más concretamente desde Navarra, se sigue explicando la construcción de la unidad constitucional como resultado de un pacto entre entes soberanos.

Es ante esta problemática donde se inscribe el trabajo que aquí se presenta. El tema cobra especial interés en un momento en que el modelo de Estado centralista ha entrado definitivamente en crisis en España y la Constitución de 1978 abre las puertas a una nueva concepción de Estado. En este momento en que se están definiendo las futuras comunidades autónomas y se ha despertado el interés por la búsqueda y descubrimiento de identidades propias, Navarra se nos presenta como un caso excepcional, y no sólo porque su población está dividida a la hora de definir su identidad, sino porque considera que su aspiración al autogobierno no necesita de la legitimación constitucional, sino que su particular condición de provincia foral vinculada a la comunidad española por medio de un PACTO le marca un proceso propio a la autonomía que encuentra su legitimación en unos derechos forales, que sería necesario actualizar vía "reintegración foral plena", "mejoramiento del fuero" o renovación del pacto de 1841.

Estas argumentaciones encuentran su respaldo en una interpretación ideologizada de la historia reciente de Navarra, que ha conformado la representación popular de nuestro pasado y que es asumida de forma acrítica por todas las parcialidades políticas que en este momento actúan

en la provincia. Y es que la reflexión sobre el tema ha estado perturbada por necesidades políticas, que han sofocado cualquier análisis riguroso y profundo de la cuestión.

Para la historiografía clásica, Navarra fué un Reino independiente hasta 1512. En aquella fecha pactó su unión con Castilla pero manteniéndose REINO DE PCR SI; de tal forma que "teniendo el mismo rey físico tenían ambas Coronas, distintos reyes legales". En la guerra carlista, los vascos en general y los navarros en particular lucharon por la DEFENSA DE SUS FUEROS frente a un Estado liberal y centralista que trataba de arrebatárselos. El Convenio de Vergara, que puso fin a la contienda, fué un pacto por medio del cual los carlistas bajaron las armas a cambio de la conservación de sus fueros y la Ley Paccionada de 1841 fué el resultado de la concreción de ese PACTO entre entes soberanos y de la necesaria modificación de los fueros para hacerlos compatibles con la unidad constitucional. Si la citada ley es considerada por algunos como un "castigo", por otros como una "rénuncia generosa", todos coinciden en la idea de que fué un triunfo de la clase política navarra que logró salvar lo salvable del Fuero y conservarlo hasta nuestros días, frente a la intransigencia de los vascongados que por querer conservarlo todo no consolidaron un arreglo tan estable.

La anterior explicación de nuestro pasado inmediato presenta numerosas insuficiencias para el investiga-

dor de la Historia. Nadie pone en duda que Navarra fué un Reino hasta 1833, pero de ello no se deduce que fuese una formación política soberana. Si los Reinos fueron las unidades políticas medievales, la Monarquía como unión de los diversos Reinos, Principados y Señoríos que obedecen a un mismo rey sería el nuevo sujeto político en torno al cual se configuró el Estado moderno. Mantener que Navarra era un Reino independiente y soberano era atribuirle una personalidad política propia, incluso hacia el exterior, que por otra parte hubiera hecho imposible cualquier dinámica de enfrentamiento institucional entre el Reino y la Monarquía como la que se dió a final de siglo XVIII.

Una de las primeras incógnitas que había que despejar era, pues, el grado de vinculación, de dependencia, en definitiva, de integración del Reino con el resto de la Monarquía. ¿En qué medida era cierto, como se ha llegado a afirmar, que mientras en Castilla el rey era absoluto, en Navarra lo era constitucional?.

Por otra parte, si la ley de 1841 se presenta como "resto de los antiguos fueros y libertades" que se salvaron del naufragio liberal y centralista, tanto los que la interpretan como una "renuncia generosa en pro de la unidad de la patria española" como los que ven en ella un acto de "usurpación" presuponen una valoración positiva del régimen foral navarro en su totalidad. Pero la característica central del régimen foral no viene dada por el he-

cho de ser instituciones particulares las que lo configuran, sino porque esta institucionalización se realiza en el marco del Antiguo Régimen: Virrey, Consejo Real, Cortes estamentales, derecho de sobrecarta... tenían difícil traducción en el Estado liberal constitucional, y por consiguiente, conservar el régimen foral en su plenitud equivalía a conservar el Antiguo Régimen. En tal caso: ¿no había ningún sector social comprometido con las transformaciones que el régimen liberal implicaba? ¿o quizás ese sector social pensó en una alternativa política propia fracasando en el intento de una revolución liberal en el marco foral? La posibilidad de esto último estaría en relación con la pregunta anteriormente formulada: ¿qué grado de autonomía tenía el Reino?, o lo que es lo mismo ¿era el marco foral un marco económico y político autónomo?; ¿o es que quizás los liberales navarros, aun reconociendo el marco español intentaron mantener unos particularismos bajo pretextos forales?.

Por otra parte, la afirmación de que los fueros eran la expresión política de lo navarro y los carlistas lucharon por conservarlos, introduce un elemento de originalidad en la crisis del Antiguo Régimen en Navarra. Mientras se reconoce que en el resto de la Monarquía la tensión se produce entre Absolutismo y Liberalismo, se pretende que en Navarra y en los demás territorios vascos la lucha se diese entre centralización y particularismo. Pero

la confusión crece al constatar que también hubo liberales navarros, y si se afirma que la guerra era foral y los carlistas luchaban por los fueros, los liberales debieron de hacerlo en contra. Sin embargo serían los liberales navarros los que pactarían la nueva foralidad en 1841.

He aquí una nueva serie de incógnitas. En primer lugar ¿qué eran los fueros?, ¿expresión de la voluntad política de un pueblo o particularismos jurídicos, exenciones y privilegios propios del Antiguo Régimen?; en este último caso, ¿a quién beneficiaban?, ¿lucharon los carlistas realmente por los fueros?, ¿qué relación tenía la nueva foralidad salida de la ley de 1841 con la foralidad del Antiguo Régimen?, ¿en qué consistió la "renuncia generosa" o la "usurpación", según versiones, que supuso la transformación?. A ello había que añadir otras preguntas: ¿quién orquestó el cambio?, ¿supuso éste una transformación sociológica o se redujo a ser una transformación del aparato de poder de la misma élite o clase dominante?, ¿quién protagonizó la resistencia y qué sentido tuvo ésta?.

Por último, nos parece insuficiente la explicación dada a la distinta salida que la crisis tuvo en las cuatro provincias vascas. Si a corto plazo la intransigencia de las Vascongadas las liberó durante 35 años de contribuciones y quintas y conservaron sus órganos propios de gobierno; a largo plazo es indiscutible la mayor rentabilidad del arreglo foral navarro. ¿Se trataba exclusivamente,

como se ha mantenido, de visión de futuro de la clase política navarra o había otros condicionantes que explican el caso particular navarro dentro del contexto vasco?

Para dar respuesta a todas estas preguntas era necesario en primer lugar un análisis de las instituciones navarras del Antiguo Régimen, el grado de autogobierno que conferían, o lo que es lo mismo, su sistema de articulación con la Monarquía española. Sólo así sabríamos el contenido de la posible renuncia y el alcance de las transformaciones que la Ley de 1841 implicó. Había que aproximarse, también, a la realidad social navarra de fin del Antiguo Régimen para averiguar en lo posible el posicionamiento de los distintos sectores sociales ante la crisis del Estado absoluto y las transformaciones liberales.

En segundo lugar, la actuación de los navarros en los momentos de crisis, nos ayudaría a averiguar en qué medida mantenían una dinámica política propia o por el contrario seguían la general de la Monarquía. Si como parece la Guerra de la Independencia fue una guerra nacional española, era de interés conocer la respuesta de Navarra a la llamada de la Junta Suprema Central, de las Cortes de Cádiz y de la convocatoria electoral de 1813. El mismo interés presentaba lo sucedido a lo largo del Trienio Liberal. Apenas había datos sobre esta etapa histórica; sólo se apuntaba que la guerra realista tuvo en Navarra una motivación foral. Sin embargo, fue un momento decisivo en la cri

sis del Antiguo Régimen, en el que si no llega a ser por la ayuda extranjera se hubiera consolidado definitivamente en España el nuevo orden liberal. Si esos tres años eran una etapa excesivamente corta para analizar las transformaciones liberales, no lo eran para estudiar el posicionamiento de los distintos sectores sociales ante las mismas y sobre todo el comportamiento de la Navarra oficial.

En tercer lugar, era preciso revisar la documentación en torno a la guerra carlista para concretar el protagonismo que los fueros tuvieron en la contienda y ello tanto entre los partidarios de D. Carlos como entre los de Isabel II. Había que intentar aclarar la aparente contradicción de que a partir de 1839 fuesen los liberales navarros los que defendiesen los fueros insistiendo en el carácter foral de una causa contra la que ellos se habían pronunciado.

En definitiva, de lo que se trataba era de analizar la crisis del Antiguo Régimen en Navarra, el grado de particularismo o de diferenciación que el proceso supuso respecto del resto del Estado y de las otras provincias vascas y las causas que determinaron la permanencia de unas desigualdades jurídicas propias del Antiguo Régimen en un Estado liberal-constitucional jurídicamente igual por definición.

I N D I C E

<u>I.-FUEROS, ANTIGUO REGIMEN Y REVOLUCION BURGUESA</u>	<u>Págs.</u>
1.-Los regímenes forales	1
A.-Origen	5
B.-Los regímenes forales en la Edad Moderna	8
C.-El sistema foral navarro	14
a.-El Rey	15
b.-El Virrey	19
c.-El Consejo Real	21
d.-Las Cortes	26
e.-La Diputación	38
2.-Crisis institucional	42
A.-Ofensiva del poder central	43
a.-Contribuciones	45
b.-Quintas	48
c.-Aduanas	54
B.-Oligarquía navarra y revolución liberal	69
a.-Transformaciones de la propiedad agraria	70
a'.-Libertad de arrendamiento	70

	<u>Págs.</u>
b'.-Privatización de la propiedad comunal .	72
c'.-Desamortización eclesiástica	78
b.-Legislación liberal en las Cortes de 1817-1818	81
c.-Caducidad del sistema institucional	85
d.-Los navarros y el aparato político de la Monarquía	90

II.-DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA A LA PRIMERA

<u>GUERRA CARLISTA</u>	118
1.-Invasión francesa y revolución de Cádiz	118
A.-Constitución de Bayona	120
B.-Cortes de Cádiz	122
C.-Elecciones generales de 1813	128
D.-Nobleza, clero y pueblo ante la guerrilla ...	137
2.-Restauración de Fernando VII y restauración foral	146
3.-Trienio liberal y Guerra Realista	151
A.-La Diputación del Reino y la Constitución de 1812	152
B.-El régimen constitucional y los fueros	163
a.-Elecciones generales	163
a'.-Legislatura 1820-1821	163
b'.-Legislatura 1821-1822	167
b.-Política de la Diputación provincial	172
a'.-Contribuciones	176
b'.-Quintas	178

	<u>Págs.</u>
c'.--Deuda Pública	179
c.--Configuración de las fuerzas políticas navarras	187
a'.--Realistas	188
b'.--Liberales	193
c'.--Moderados	196
d.--Significado de la Guerra Realista	200
e.--La guerra y los fueros	205
4.--Década Ominosa y crisis foral	220
A.--Restauración foral y contrafueros	220
B.--Las últimas Cortes del Reino: 1828-1829 ..	224
C.--Alcance de la Real Orden 14-V-1829	227
 III.--<u>LA PRIMERA GUERRA CARLISTA</u>	 257
1.--Significado y causas de la guerra	257
A.--Base social	263
B.--Geografía del carlismo	280
2.--Los carlistas y los fueros	288
A.--Primeras proclamas	290
B.--Zumalacárregui y los fueros	304
C.--Declaraciones y práctica foral carlista ..	316
3.--Los liberales y los fueros	347
A.--El gobierno y la política transaccionista de la Diputación	347
a.--La Diputación del Reino ante el régimen liberal	347

	<u>Págs.</u>
b.-Primeros contrafueros	350
c.-Navarra y el Estatuto Real	352
d.-La Diputación y la Deuda Pública	355
e.-Fin de la autonomía judicial	360
f.-Elecciones generales 1836	364
B.-Exaltados y Moderados	366
C.-La primera Diputación provincial y los fueros	378
 IV.- <u>LOS FUEROS COMO INSTRUMENTO DE PACIFICACION:</u>	
<u>EL CONVENIO DE VERGARA</u>	423
1.-Iniciativa de los Moderados vascos: el FUERISMO como opción política	442
2.-Interés de Francia e Inglaterra por la conservación de los fueros	452
3.-Divisiones carlistas	458
4.-Política foral del gobierno	467
5.-La Diputación de Navarra y el Convenio de Vergara	484
A.-Ley 16-VIII-1841: ¿Ley Paccionada, PACTO-LEY o Ley ordinaria?	
B.-Alcance de la NUEVA FORALIDAD	504
 V.- <u>CONCLUSIONES</u>	532
 <u>APENDICES:</u>	
Nº 1: Acta de nombramiento de los comisionados que han de representar a Navarra en la Junta Suprema Central (22-IX-1808)	545

Nº 2: Oficio de Miguel de Balanza y Carlos Amatria, miembros de la Diputación del Reino y de la Junta Central transmitiendo a su Diputación un oficio de la comisión de Cortes en que piden nota de los sujetos navarros que podrían servir de Diputados en las Cortes de España y contestación de la Diputación (1º y 24-XI-1809)	546
Nº 3: Acta del acto de juramento de la constitución de 1812 por parte de la guarnición, el Ayuntamiento de Pamplona y la Diputación del Reino en Pamplona el 11-III-1820	549
Nº 4: Alocución a los navarros del Antiguo Diputado del Reino Pedro Clemente Ligües y Navascués al ser nombrado jefe político de la provincia	551
Nº 5: Felicitación dirigida a las Cortes de Madrid por la Diputación Provincial de Navarra con motivo de la instalación del Congreso (17-VII-1820)	553
Nº 6: Manifiesto de la Diputación Provincial de Navarra al Rey (30-XI-1821)	554
Nº 7: Bienes de la Iglesia en Navarra por municipios	557
Nº 8: Procedencia de los jefes carlistas de la Primera Guerra Civil	558
Nº 9: Escenario de las guerras carlistas	559
Nº 10: Los neocatólicos en 1º65. Resultado de las elecciones generales de diciembre de 1º65	560

Págs.

Nº 11: Memoria que la Diputación del Reino de Navarra ha formado para instrucción de los señores procuradores en las Cortes generales por dicho Reino sobre el estado de su Hacienda Pública y el modo de asegurar el pago de su deuda	561
Nº 12: Proclama del General Margto (30-VIII-1839)	567
Nº 13: Proclama del General Espartero en Vergara (1-IX-1839)	569
Nº 14: Exposición de la Diputación Provincial de Navarra a S.M. la Reina Gobernadora (24-X-1839)	571
Nº 15: Editorial del "Eco del Comercio" (28-VIII-1839)	573
Nº 16: Editorial de "El Correo Nacional" (4-X-1839)	577
Nº 17: Editorial de "El Piloto" (6-X-1839)	582
Nº 18: Bases propuestas por la Diputación Provincial de Navarra para la modificación de Fueros	585
Nº 19: Ley de modificación de los Fueros de Navarra de 16 de agosto de 1841	588
Nº 20: Dos ejemplos de la representación popular actual de la historia de Navarra	593
<u>FUENTES Y BIBLIOGRAFIA</u>	597

•

CAPITULO I: FUEROS, ANTIGUO REGIMEN Y REVOLUCION BURGUESA

I.-FUEROS, ANTIGUO REGIMEN Y REVOLUCION

1.-LOS REGIMENES FORALES

En la España de finales del siglo XVIII sólo las provincias Vascongadas y Navarra conservan los regímenes forales. La historiografía fuerista y nacionalista ha culpado a las guerras carlistas de ser las causantes de la abolición foral, llegando a la conclusión de que si no hubiera habido guerras, el régimen foral seguiría vigente. Interpretan las guerras carlistas como guerras de conquista y califican la situación resultante como la de un estado de fuerza contrario a todo derecho.

El proceso es mucho más complejo, y excesivamente simplista el atribuir la transformación al desenlace de una guerra. Para aproximarnos a su comprensión, es necesario salirse del marco local, incluso español y situarlo en el contexto europeo de quiebra del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal.

A partir del siglo XIII, en el seno de la sociedad estamental europea y en torno a la actividad comercial,

surge la burguesía como nueva clase social. Junto a la tierra, el capital aparece como nueva forma de propiedad y el afán de lucro y la acumulación se intensifican como motores del nuevo sistema económico que empieza a forjarse en el seno de la economía feudal.

Las transformaciones socioeconómicas condicionan transformaciones políticas, y en el siglo XVI, el Estado, como nueva forma de dominación política, es producto de la alianza del Rey con una burguesía todavía débil, frente a las clases privilegiadas: nobleza y clero.

A lo largo de la Edad Moderna van a coexistir con relativo equilibrio las instituciones económicas feudales con las incipientes instituciones capitalistas, pero en el siglo XVIII, el mundo feudal entra definitivamente en contradicción con el mundo burgués y la expansión económica de la burguesía condiciona cambios de estructura. La reforma "desde arriba" que intenta el Despotismo Ilustrado es desbordada por la "revolución desde abajo": la revolución burguesa.

Dejando aparte el caso inglés, en el que por distintos condicionamientos históricos se consolidan las instituciones modernas sin romper con el pasado y con un siglo de antelación, en el resto del occidente europeo, el proceso tiene lugar con distinto ritmo y distintas particularidades según los países, a lo largo del siglo XIX. Su

primer aldabonazo es la revolución francesa de 1789, que va a pasar a la historia como prototipo de revolución burguesa.

Desde un punto de vista económico, supuso el triunfo del capitalismo como sistema de producción y de cambio; desde un punto de vista social, el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases bajo la hegemonía de la burguesía y desde el punto de vista político, la culminación del proceso de centralización y homogeneización del Estado, resultado de la pretensión unificadora del ámbito político en que se lleva a efecto la actividad económica y como exigencia de la igualdad jurídica que se deduce de la proclamación de los derechos individuales. Y si en el siglo XVI una burguesía débil necesitó del apoyo del rey y de un gobierno fuerte, en este momento, social y económicamente dominante, va a conseguir el control directo del poder político a través del Estado liberal representativo, para realizar todas aquellas transformaciones institucionales que precisa.

La soberanía, que en el antiguo régimen era atributo del Rey, va a pasar a serlo de la Nación, categoría mística de pueblo unido, que en este momento hace su aparición histórica como sujeto político. A la comunidad de súbditos de un rey, sucede la comunidad nacional, y su expresión jurídica, el Estado de Derecho, consagra el principio de primacía de la ley como expresión de la voluntad nacio-

nal. Pero va a ser la burguesía la que va a articular los procedimientos para monopolizar la representación de la nación a través del sufragio censitario y va a identificar los intereses nacionales con sus propios intereses. A pesar de todo, es conveniente dejar claro desde una perspectiva histórica, el carácter revolucionario de la burguesía, que desde el siglo XIII venía siendo el motor de las transformaciones de la sociedad en un sentido progresivo.

Las tareas fundamentales de la revolución burguesa se pueden resumir en la puesta en práctica del principio fundamental del liberalismo económico, credo del primer capitalismo: "laissez-faire, laissez-passer": libertad de industria, libertad de comercio. Ello supone acabar con el sistema gremial de producción y de relaciones de trabajo, con los monopolios y reglamentaciones comerciales; así como la supresión de peajes, puertos y aduanas interiores, que dificultaban el intercambio comercial; todo ello en orden a construir un mercado nacional. Respecto al régimen de propiedad de la tierra, las desamortizaciones y desvinculaciones convertirán la propiedad feudal, vinculada y limitada, en propiedad privada burguesa, haciéndola a la vez capaz de entrar en el círculo comercial.

La forma concreta de realizarse el proceso variará en los distintos países, y vendrá condicionada por su peculiar desarrollo histórico. En España, este proceso,

que hemos visto arranca de final de la Edad Media, se aceleró en el siglo XVIII y una de las barreras a salvar en su desarrollo, posiblemente la que más resistencia iba a ofrecer, será la persistencia de los regímenes forales en Vascongadas y Navarra. Sobre todo, la existencia de aduanas interiores era un obstáculo a superar para la creación de un mercado nacional.

Antes de entrar en el estudio de las tensiones que el proceso generó entre la administración central y las provincias forales, conviene hacer un análisis del origen y de las causas de pervivencia en el siglo XIX de un orden institucional que tuvo su origen en la Edad Media.

A.-ORIGEN DE LOS REGIMENES FORALES

La peculiaridad política de las cuatro provincias vascas no tuvo otras características ni orígenes que los que habían sido propios de los distintos reinos y pueblos que por los diferentes procedimientos se habían incorporado a la corona de Castilla (1). Sus principales instituciones se configuran en la Baja Edad Media; responde a las necesidades socioeconómicas de los Reinos cristianos de la Reconquista y coincide en lo fundamental con la estructura jurídico-política de la sociedad europea medieval occidental.

En la España cristiana de la Baja Edad Media, la organización política de los distintos territorios estaba inspirada en una concepción corporativa del Estado (2): "siendo el reino un 'cuerpo místico político o civil' cuya cabeza es el rey y cuyos miembros son los estamentos"; de modo que es imposible el reino sin el rey y el rey sin el reino y nada sustancial puede decidir el uno sin el otro" (3).

Siguiendo al profesor García de Valdeavellano (4), en la Baja Edad Media se entendió que el poder del Príncipe encontraba su fundamento en un compromiso entre el monarca y el pueblo, siendo el respeto del ordenamiento jurídico del reino por parte del rey, la condición misma de la sujeción y obediencia de los súbditos a la autoridad regia. La monarquía como forma de gobierno resultaba así de un PACTO entre rey y pueblo. El poder regio quedaba supeditado a la observancia de las leyes, FUEROS, costumbres y privilegios del país. Todo mandato del rey contrario al ordenamiento vigente constituía un acto de fuerza llamado CONTRAFUERO, "desafuero" o "agravio" ("greuge" en Cataluña y en Valencia) que debía ser reparado.

La organización política respondía a la situación socioeconómica de la sociedad feudal basada en una economía rural y autárquica de pequeñas unidades económicas autosuficientes y cuya única forma de propiedad era la

tierra. El poder político, unido a la propiedad de la tierra estaba dividido. Nobleza y clero, estamentos privilegiados controlaban en sus dominios los instrumentos fundamentales de poder: la ley, y la administración de justicia, la hacienda y el ejército. El Rey no era más que un "primus inter pares" y su poder estaba limitado por el poder estamental, representado institucionalmente en la Cort o Curia regia.

Cuando a partir del siglo XIII aparezca la burguesía como nueva clase social y se establezca con apoyo del rey en los burgos o ciudades, su presencia socioeconómica va a quedar reflejada en el orden político. La Curia o Cort, integrada por el alto clero y la nobleza que asistía al rey va a derivar en las Cortes estamentales, llegando a un equilibrio institucional entre Monarquía por un lado; nobleza, clero y ciudades por otro. El rey gobernaba con la cooperación de las Cortes.

El carácter y naturaleza de estas asambleas ha sido y sigue siendo tema de discusión para los historiadores de las Instituciones y del Derecho. Mientras Martínez Marina vio en ellas auténticas asambleas representativas que limitaban el poder real y en las que conjuntamente con el rey radicaba la potestad legislativa; para el profesor Colmeiro se reducían a meros organismos consultivos (5).

Para el profesor García de Valdeavellano (6), las Cortes limitaban efectivamente el poder del rey, fiscalizaban su actuación en su adecuación al ordenamiento jurídico establecido y su consentimiento era necesario a la hora de exigir tributos, subsidios o DONATIVOS ("donatiu" en Cataluña). Sin embargo las cortes medievales nunca dispusieron de medios legales de imponer al rey la voluntad de los estamentos y en sus relaciones con el monarca mostraron siempre, al menos en la forma, acatamiento y sumisión. Si el estado era concebido como un "cuerpo político", los estamentos eran considerados como "brazos", y así se los llamó en la Corona de Aragón y en Navarra, pero el rey era la "cabeza", la encarnación personal de la autoridad del estado. Y será en torno a la figura del rey, y no de las Cortes como se irá forjando el estado moderno renacentista.

Es en el marco de esta formación social medieval, como hay que interpretar las teorías pactistas y las limitaciones del poder real, y no, haciendo abstracción histórica, ver en ellas el origen del sistema constitucional, aplicando a formaciones sociales feudales conceptos surgidos tras la revolución liberal.

B.-LOS REGIMENES FORALES EN LA EDAD MODERNA

En el siglo XVI se inicia el proceso de concen-

tración de poder político en manos del rey a costa de los poderes feudales (7). Rey y burguesía aparecen como aliados naturales frente a nobleza y clero, y el estado moderno absolutista será el resultado de esta alianza.

La recuperación del Derecho Romano será un primer paso de la unificación jurídica que culminará en el siglo XIX con las codificaciones napoleónicas. Un ejército permanente y profesional independizará al rey de los señores feudales y de las milicias concejiles, y una hacienda centralizada para cubrir las necesidades de un estado cada vez más burocratizado, será uno de los objetivos de todo Estado moderno.

La construcción del Estado moderno en forma de monarquías absolutas fue la salida obligada de las sociedades europeas medievales, si bien la forma de llevarse a efecto, condicionaría su evolución posterior. Mientras en Inglaterra, los poderes feudales fueron subordinados fácilmente a la corona y llegaron a formar parte del estado, en Francia la resistencia fue mayor (8). Por eso, no es casual que fuese allí, donde se formulara por Bodino la nueva teoría de la soberanía como atributo esencial del estado, cuyo titular era el monarca, que por lo mismo pasó a llamarse soberano.

En España a pesar de que los Reyes Católicos acabaron con el poder político feudal y consumaron la unión

de los reinos medievales peninsulares, excepto Portugal, no se produjo el más ligero intento de centralización administrativa. La unión fue meramente dinástica, e incluso la Corona de Aragón vio reforzado su orden institucional propio (9). Si los distintos reinos tendrían en adelante los mismos monarcas, no habría en teoría ningún cambio ni en su estructura ni en la forma de sus gobiernos. Es verdad que las políticas exteriores debían fundirse con toda probabilidad, pero los restantes aspectos seguirían llevando la misma vida que antes de la unión. La única diferencia residía en el hecho de que ahora ya no serían rivales sino asociados.

La nueva España era por lo tanto un estado plural, no unitario, estaba pues considerada como una unión entre iguales: EQUAE-PRINCIPALE, y cada uno de los territorios conservaba sus propias instituciones, leyes, usos y fueros. Los distintos reinos se regían y gobernaban como si el rey lo fuera solamente de cada uno de ellos.

Pero tras la simple fórmula de una confederación de vínculos, yacen unas realidades sociales, económicas y políticas de tal tipo que pueden trastornar las fórmulas. Los distintos reinos eran de hecho países con historias y particularidades propias, que se hallaban en situaciones muy diferentes de desarrollo histórico. La unión era pues una unión de socios esencialmente distintos, y lo que aún es más importante, notablemente diferentes en cuanto a ex-

tensión y fuerzas:

	<u>Km²</u>	<u>habitantes</u>
Corona de Castilla	378.000	8.304.000
Corona de Aragón	100.000	1.358.000
Reino de Navarra	12.000	185.000
		(10)

La superioridad demográfica y económica permitió a los sucesivos monarcas utilizar a Castilla en la tarea de edificar la Monarquía Española, asumir su dirección, imponer su lengua y su cultura y marchar a la conquista de un Imperio.

La expulsión de los judíos y la derrota de los comuneros en Villalar frenó las posibilidades de una burguesía naciente (11) y afianzó el poder social de la nobleza y la Iglesia. Con ello las necesidades de homogeneización jurídica, hacendística y monetaria del ámbito económico perdieron vigor, y la estructura socioeconómica de la España de los Austrias, bajo la hegemonía de nobleza y clero, incapaces de explotar las conquistas americanas de modo que fomentaran el desarrollo económico del país, no cuestionó la supervivencia de los particularismos forales.

A pesar de todo, en el mismo siglo XVI, la política castellana comenzaba a mirar como un obstáculo a su marcha las instituciones de los navarros (12). Para afianzarlas, desde el año 1528 venían solicitando las Cortes

del Reino la reimpresión del Fuero General; ésta no se realiza hasta 1686, y es sintomático que al hacerlo supriman el siguiente encabezamiento, que a modo de prólogo incluía la redacción antigua:

"Aquí comienza el primer libro de los fueros que fueron fayllados en Espaynna, assi como ganavan las tierras sin rey los montaynnesses. En el nombre de Ihesu Crispto, qui es et será nuestro salvamiento, empezamos pora siempre remembramiento de los fueros de Sobrarbe de cristiandad exalzamiento" (13).

La omisión de la referencia a España y al Fuero de Sobrarbe obedece según Yanguas y Miranda (14) a "quitarle cuanto pudiera contribuir a considerarlo de un origen que no fuese puramente navarro". Lo que nos hace pensar en la necesidad de defenderse de tendencias asimilacionistas para preservar su peculiar organización jurídico-política.

El mismo significado puede tener el encargo que la Diputación del Reino hace al Padre Moret en 1662 de una Historia general del Reino, desde una perspectiva "navarrista", para contrarrestar las interpretaciones de la misma que hasta el momento venían realizando los cronistas de la Corte.

La resistencia que oponían las oligarquías locales que controlaban el poder foral, a la desaparición de los regímenes privativos, es el mejor argumento para demos

trar que les eran favorables. Aparte del control que pudiera n ejercer sobre el territorio, las ventajas fundamentales eran de orden fiscal. Mientras en Cataluña, Aragón, Valencia, también en Navarra, con unas Cortes poderosas, las oportunidades de aumentar las contribuciones eran mínimas (15), en Castilla, unas Cortes mucho menos poderosas, y la existencia de algunas importantes fuentes de ingreso que escapaban a su control, hizo que sobre ésta última recayera el peso principal de la carga tributaria de España (16).

Con esta breve descripción del orden institucional medieval y de las causas que pudieron facilitar el mantenimiento de las organizaciones forales en la monarquía de los Austrias, ha quedado claro la similitud de la organización jurídico-política de los distintos reinos medievales. Interesaba dejar constancia de ello, pues la historiografía navarra, sobre todo del siglo XIX, con indudable carga ideológica e intencionalidad política quiso reforzar el hecho diferencial navarro haciendo hincapié en la originalidad de sus instituciones, presentándolas como producto genuino de la organización de un pueblo en todo diferente a los demás y con una trayectoria histórica totalmente diferencial: "unión equae-principale", "pacto", "contrafuero", "donativo", "reparación de agravios"... pasarán a ser instituciones "exclusivamente navarras", no haciendo mención del contexto histórico más amplio en que se dan, incluso de su carácter de importadas de otros reinos, demostrando

trando una vez más, cómo la ignorancia de la historia ajena es una de las muchas maneras de no saber bien la propia (17).

C.-EL SISTEMA FORAL NAVARRO

No pretendemos hacer aquí un análisis exhaustivo de las distintas instituciones forales navarras, ni de su evolución histórica, pero sí conviene dejar constancia de los aspectos de las mismas que nos faciliten la comprensión de las distintas posturas que los distintos sectores sociales van a mantener en torno al tema de la transformación foral, cuando la construcción del estado liberal la haga necesaria, así como el alcance del cambio institucional que supuso la ley de modificación de fueros de 1841.

Por otra parte, interesa su conocimiento, pues a lo largo del siglo XIX y XX, y como una constante que llega hasta nuestros días, las distintas fuerzas que toman parte en la lucha política navarra, en los distintos momentos históricos, van a hacer de la historiografía su arma política fundamental, y van a pretender legitimar planteamientos "navarristas", "vasquistas", "españolistas", "federalistas" o "unitarios" con argumentos históricos y con interpretaciones distintas de la "foralidad", de la anexión de Navarra a Castilla, de las guerras carlistas y la ley

de 1841.

Si esto no es una excepción en el siglo XIX español, que incluso los liberales de Cádiz tratan de justificar la revolución liberal con argumentos del pasado intentando realizar paradójicamente una "revolución tradicional" (18), en el caso del País Vasco reviste especial importancia, pues ya desde el siglo XVI la defensa de peculiaridades político-administrativas se realiza en base a argumentos históricos más o menos mitificados (19).

Pasamos a continuación a analizar las instituciones forales que configuran la organización político-administrativa de Navarra en el antiguo régimen.

a.-EL REY

Como se ha dicho anteriormente, una concepción corporativa del estado, inspira la organización foral en la que rey y reino, representado por sus tres estados, son los ejes institucionales, de modo que nada sustancial puede decidir el uno sin el otro.

Si esta concepción respondía a la organización social y política medieval en la que los instrumentos de poder estaban divididos, la centralización de estos instrumentos en manos del rey a lo largo de la Edad Moderna, so-

bre todo el monopolio de la fuerza a través de un ejército profesional y permanente, iba a acabar con este equilibrio institucional e inclinar la balanza en favor de uno de sus elementos: el rey.

Por eso, aunque formalmente nada pueda hacer el rey sin el reino, y las referencias a principios pactistas y limitaciones del poder sean argumentos constantes esgrimidos por las Cortes, cada vez más frecuentemente, el rey, ignorando limitaciones formales, siempre que sus necesidades políticas lo exijan, va a hacer valer su "poder de hecho" por encima del poder que "por derecho" le corresponda.

Por otro lado, el estado moderno se configura en torno a la figura del rey, que si ya en la Edad Media era la encarnación de la comunidad política, en este momento pasa a ser sujeto de su máxima atribución: la soberanía.

Que la soberanía reside en el rey, es una realidad plenamente reconocida por parte de las autoridades formales navarras y de la que queda constancia en las representaciones de la Diputación. Así, en 1757, para pedir el nombramiento por parte de la corporación de su secretario, que desde 1634 el rey había conferido perpetuamente a la familia Beltrán Garralda y sus herederos, ruega al rey "nos le cedan en plena propiedad o bien concedérmola V.M. por aquellos medios reservados a la Soberanía" (20). Y más claramente todavía en otra representación de 1781: "Nadie

ignora que V. M. es un Monarca que no reconoce superior en la tierra: que es el árbitro supremo de Navarra y sus naturales y que reina por amor en los corazones de todos; que todo lo puede, aunque por real designación (?) el sumo poder se halla en Navarra enlazado con la moderación de sus venerables fueros y patrias leyes" (21). Y en la ley LXV de las Cortes de 1828-1829 se lee: "La conservación y aumento de nuestra Santa Religión Católica, la fidelidad a V. Magestad, la defensa de sus derechos y SOBERANIA y la subsistencia de los derechos, Fueros, Leyes y costumbres de este Nobilísimo Reino se hallan tan profundamente gravados en el corazón de nuestros naturales." (22).

Es decir, la existencia de los regímenes forales, no cuestiona el principio de la soberanía del rey, como tampoco lo cuestiona la existencia de fueros para la nobleza, clero, órdenes militares, etc..., y es que según su formulación en Bodino, si bien la soberanía es absoluta y superior a la ley positiva, no es arbitraria ni injusta y está sometida a la ley divina y natural, debe respetar los contratos y propiedades y las leyes fundamentales del reino (23). En nuestro caso, los fueros que todo rey debía jurar.

Aunque formaba parte del dogma político de los navarros el principio de que sólo se podían hacer leyes concurriendo los dos poderes, el rey y el reino (24), la participación de las Cortes en la tarea legislativa se li-

mitaba a lo que podríamos llamar "derecho de petición" o iniciativa, a través de los "pedimentos de ley" que de nada servían si no eran decretados posteriormente por el rey o en su nombre el virrey; de tal forma, que si el rey no necesitaba de las Cortes para hacer ejecutiva cualquier disposición normativa y expedía por su propia autoridad provisiones y reales cédulas, nada, por el contrario podían hacer en este sentido las Cortes sin el rey.

Por otro lado, los instrumentos de control del rey sobre las Cortes eran decisivos: en su mano estaba la concesión de asiento, lo que vinculaba en cierto modo al agraciado con la corona; sólo él podía convocarlas, y sólo lo haría cuando las necesidades de su hacienda lo hicieran necesario para la obtención del donativo; a través del "mensaje de la corona" o "proposición" con que se abrían las sesiones, influía sobre los temas a tratar y presionaba sobre la cuantía del donativo; pero, sobre todo, como se ha dicho, a él correspondía sancionar y decretar los pedimentos de ley, sobre los que tenía derecho de veto absoluto.

Además de estas atribuciones relacionadas con la tarea legislativa, el rey mandaba la fuerza armada, velaba por la administración de justicia, que se realizaba en su nombre y nombraba a los altos cargos públicos, con la única limitación de que salvo cinco, llamados "castellanías" que siempre ocupaban los puestos clave, debían de ser natu

rales del reino.

Pero contaba además el rey con otros medios indirectos de control, no menos efectivos. La concesión de títulos nobiliarios, y el nombramiento de altos cargos no sólo en el reino, sino en la Corte y en las Indias, iba a recaer en proporción considerable en súbditos navarros, facilitado ello por el reconocimiento de "hidalguía universal" que disfrutaban los habitantes de los valles del norte de Navarra (25). Esto permitía al rey contar con la adhesión incondicional de una clase política agradecida por su encumbramiento. Si a ello se añade la fidelidad al trono que caracteriza a la jerarquía eclesiástica en el antiguo régimen (26), tendremos la explicación de porqué a pesar de las posibilidades de resistencia a las órdenes reales que el orden institucional brindaba a las Cortes, las situaciones conflictivas al parecer fueran mínimas.

Los órganos a través de los cuales ejercía el poder el rey fueron: el Virrey y el Consejo Real de Navarra.

b.-EL VIRREY

El virreinato es una institución que había hecho su aparición en el siglo XIV en la Corona de Aragón mediante la cual, catalanes y aragoneses habían regido su impe-

rio medieval (27).

El virreinato demostró ser una brillante solución al absentismo real, que junto con el establecimiento de un Consejo especial vinculado al rey, permitió tras la unión dinástica a Fernando el Católico el gobierno de los distintos reinos peninsulares, y más tarde el de los nuevos dominios americanos (28).

La institución, aunque con distinto nombre, no era nueva en Navarra, pues el absentismo real no tiene que esperar a la incorporación del reino a Castilla, sino que a lo largo de la Edad Media los reyes de la dinastía francesa residen regularmente fuera del reino y recurren a GOBERNADORES, por lo general franceses para que asuman sus funciones (29).

A partir de 1512, el VIRREY representaba al Rey en Navarra era nombrado libremente y sin limitaciones por éste último y su título expedido por la Cámara de Castilla. Al igual que el rey prestaba juramento antes de posesionarse de su cargo y ejercía por delegación todas las facultades que a aquel le correspondían: mandaba en todo lo militar, entendía en negocios de gobierno, convocaba las Cortes, sancionaba y decretaba los pedimentos de ley, expedía títulos a los alcaldes, presidía el Consejo Real y concedía dispensas de ley en algunos casos e indultos de varias penas (30).

c.-EL CONSEJO REAL DE NAVARRA

Los Consejos Reales se constituyeron en el siglo XIV tanto en Castilla como en Aragón con carácter de cuerpo consultivo que aconsejaba al rey en la gestión de los asuntos públicos y colaboraba con él en el gobierno y administración del estado (31).

Después de la unión dinástica, los Consejos de los distintos reinos, tanto por su carácter como por su composición hicieron de ellos el vínculo natural entre el rey y el reino.

El Consejo Real de Navarra, fué el único Consejo del rey, que no estuvo en la corte de Castilla. Tenía su sede permanente en Pamplona. Funcionó con arreglo a lo preceptuado principalmente por el propio monarca, bien en forma de ordenanzas minuciosas o por reales cédulas particulares (32). Defensor de la prerrogativa regia, desde 1525 estuvo compuesto de un regente y seis consejeros, nombrados todos por el rey; de los cuales, el regente y dos consejeros no eran naturales del reino.

La principal actividad del Consejo fue la judicial. La justicia se administraba en nombre del rey. Con carácter de tribunal supremo, entendió, en apelaciones en última instancia en todos los asuntos civiles y criminales. Pero también desarrolló actividades gubernativas e in

cluso de carácter legislativo. Por eso lo compara Salcedo Izu con las Audiencias americanas (33).

Tras Villalar (1521), las libertades municipales en Navarra siguen la misma suerte que en Castilla y el Consejo Real comenzó a inmiscuirse en la administración económica de los pueblos, enviando comisionados para su fiscalización con la denominación de "jueces de residencia" (34). Las Cortes protestaron de ello, y en 1604 propusieron la rendición anual de cuentas ante el Consejo, a cambio de la supresión de las residencias, pero el rey accedió a lo primero y denegó lo segundo, con lo que los municipios quedaron en peor situación que antes (35).

Hay que valorar esta fiscalización de la vida municipal por el rey a través del Consejo teniendo en cuenta la descentralización de la vida administrativa en el Antiguo Régimen y las atribuciones de sus ayuntamientos, que entre otras cosas, señalaban las tasas a las mercancías, fijaban la cuantía de los jornales, podían establecer arbitrios sobre consumos, administraban los bienes propios y comunes del pueblo, y cuando las rentas de éstos y los arbitrios no eran suficientes para cubrir el cupo correspondiente del donativo, se encargaban de hacer el "repartimiento" entre los particulares (36).

El Consejo decidía también sobre los casos de "insaculación", o sea determinar qué individuos podían o

no ser incluidos en las listas de regidores y alcaldes, e informaban sobre la terna de éstos últimos que era presentada por el Virrey para su nombramiento. Por último, su autorización era necesaria para la enajenación o permuta de los bienes vinculados: propios o comunes del municipio.

Las Cortes de Sangüesa de 1561 consiguieron ver decretado por el virrey el pedimento de la ley VII que ordenaba "no se cumplan Cédulas ni Provisiones Reales que vinieren firmadas de nuestra Real mano sin SOBRECARTA NUESTRA despachada en el NUESTRO REAL CONSEJO deste Reino de Navarra" (37), de tal forma que las disposiciones reales solamente fuesen ejecutivas después de haber comprobado que no lesionaban los fueros. Pero la vinculación y dependencia de este organismo respecto del rey, restaba valor a este instrumento de "garantía foral", de forma que: "por más claro que fuese el contrafuero, todas las órdenes se sobrecarteaban por el Consejo"... pues "no podía ser otra la conducta de unos jueces cuya fortuna dependía de la voluntad del gobierno y que nada tenía que esperar ni temer de las Cortes de Navarra " (38).

Por ello, en 1692 se consiguió que antes de otorgar sobrecarta, fuese consultada la Diputación. El dictamen emitido no era vinculante y la situación no varió "pu- diendo muy bien suceder que antes de mandar a Navarra una pragmática o real cédula, estuviese ya consultada con los que habían de sobrecartearla y seguro el poder ejecutivo

de que obtendría este requisito aún suponiendo orden terminante de otorgar sobrecarta; lo cual era sumamente fácil porque al fin los que la daban, debían sus puestos y destinos a la munificencia real que podía separarlos de ellos libremente si no cedían a sus exigencias" (39).

Además de esta intervención indirecta en la legislación, también el Consejo tuvo cierta actividad legislativa directa a través de los Autos acordados (40), "alterando con una plumada los más sagrados principios de la legislación sin que le sirviese de obstáculo el haber jurado su observancia" (41).

Frente a este Consejo Real con autoridad creciente a partir del siglo XVI, los otros dos tribunales reales existentes en Navarra: La Corte Mayor y la Cámara de Contos, especie de tribunal de cuentas, pierden importancia, y de ellos podía acudir en apelación al Real Consejo (42).

Con lo anteriormente visto, queda fuera de toda duda la suprema autoridad que el Consejo tenía en Navarra, fiel reflejo, por otra parte, de la confusión y concentración de poderes que caracteriza a la organización política del Antiguo Régimen.

Muchas veces las Cortes del Reino se propusieron arrancar al Consejo las atribuciones administrativas para transmitir las a la Diputación; pero tropezaron en el escollo de que en la sanción de las leyes intervenían como con

sultores los mismos individuos del Consejo, que eran demasiado celosos de su autoridad para dejarlo menoscabar en lo más mínimo (43).

Por eso, pudo afirmar Ilarregui al defender las transformaciones institucionales que supuso la ley de 1841: "...aunque la ley de modificación de fueros no tuviese otro mérito que el de haber concentrado en la Diputación del país las atribuciones de administración superior que se ejercían antes por el Consejo de Navarra, merecía el más distinguido aprecio de los hombres sensatos y amantes de la provincia. Recuérdese cuántas trabas y contrariedades hallaban los pueblos para mejorar su situación cuando dependían de aquel orgulloso tribunal, que no contento con tenerlos sujetos bajo su despótico dominio, les ponía graves penas por la menor infracción de sus arbitrarios preceptos" (44).

En el mismo sentido se expresa la Diputación provincial de Navarra en la exposición que el 5 de marzo de 1838 intenta hacer llegar a las Cortes: "...Por otro lado, un Tribunal Supremo llamado Consejo, más omnipotente que el de Castilla, de quien tenía todos sus vicios y ninguna de sus virtudes: que intervenía como consultor en la sanción de las leyes y nunca se sancionaban contra su voluntad: que las ejecutaba y las interpretaba a su arbitrio sin responsabilidad alguna: que tenía en su mano el gobierno municipal y económico de los pueblos: que hacía autos

acordados transformando las leyes: que imponía multas arbitrarías sin apelación..." (45).

Lo anteriormente dicho, es suficientemente expresivo para hacernos una idea de cómo se gobernaba Navarra en el antiguo régimen y del limitado papel, aunque indudable que podían tener Las Cortes, que a continuación pasamos a estudiar.

d.-LAS CORTES

En cuanto asambleas representativas de los estamentos sociales convocadas y presididas por el rey y las Cortes de Navarra se constituyeron más tarde que en los demás reinos de la Reconquista, y probablemente no antes de los primeros años del siglo XIV (46).

Las Cortes navarras, si fueron las últimas en constituirse, fueron posiblemente también unas de las últimas que en la Europa del siglo XIX seguían manteniendo su composición estamental.

Por su estructura, funcionamiento y competencias se acercaba más al modelo aragonés que al castellano (47), aunque se diferenciaban sin embargo de ambas en ser el eclesiástico, el primer estamento, en lugar del nobiliario (48). Esto quizá se deba a la función que cumplieron los monaste

rios sobre todo el de Leyre, en la consolidación de la monarquía navarra (49).

Constituídas por los tres "brazos": eclesiástico, nobiliario y ciudadano, presentan alguna diferencia en su composición a través de los años. Desde el siglo XVI, el estamento eclesiástico estaba formado por el obispo de Pamplona o en su nombre el vicario general, que lo presidía; los priores de San Juan de Jerusalén y de Roncesvalles, los abades de Iranzu, La Oliva, Leyre, Irache, Fitero, Urdax, Marcilla, y el deán de Tudela.

Para valorar la independencia de sus miembros respecto a la autoridad del rey, es conveniente recordar que por el derecho del patronato, desde tiempo de los Reyes Católicos, tanto el nombramiento de los obispos como el de los abades de los monasterios era una atribución de la Corona. Estos últimos eran nombrados por el rey a partir de una terna presentada por el capítulo general de la congregación (50). También sobre la designación del prior de Roncesvalles ejercía el mismo derecho (51).

El estamento de la nobleza o brazo militar se componía de los caballeros a quienes el rey había concedido este privilegio, que en algún tiempo fué vitalicio y después hereditario. Entre ellos se distinguían los de "nómina antigua" y "nómina moderna" según que éste derecho lo hubieran adquirido antes o después de la anexión a Casti-

lla.

En el siglo XVII, para paliar la crisis hacendística de la Monarquía de los Austrias, se intensificaron las ventas de cargos públicos, derechos señoriales, incluso administración de justicia. Navarra no fué una excepción a la regla y los asientos en Cortes y títulos nobiliarios fueron producto de compra-venta. Según Olave: "La nobleza se vendía a todo el que era lo bastante necio para comprarla y tenía dinero. D. Isidro Camargo en 1616 estuvo públicamente encargado de dicha expendurfa como subdelegado real y especial para otorgar estas gracias a cambio de maravedises; a los naturales de Navarra no les costaba ser nobles más que 3.000 reales, precio fijo" (52).

Los títulos y casas con derecho a asiento, que no era fijo, alcanzó su mayor número al parecer en la segunda mitad del siglo XVII, con unos 170 titulares, o más bien títulos, pues a cada uno de éstos no correspondía un individuo, sino que repetidamente se acumulaban en un sólo caballero o casa varios títulos de asiento y voto (53). De todas maneras, nunca excedieron de 50 los asistentes a unas mismas Cortes (54).

El brazo popular o de Universidades, estaba formado por los representantes de las villas y ciudades. El privilegio de asiento era de concesión real. Las ciudades y villas que tuvieron voto en Cortes fueron nueve en sus

comienzos, veintisiete en el momento de la anexión a Castilla y treinta y ocho fué el máximo alcanzado (55). Esta infrarrepresentación municipal puede tener su explicación en el hecho de ser éste el estamento "más contestatario". Así por lo menos lo dan a entender Narichalar y Manrique (56) y justificaría la mayor resistencia que hubo a la concesión de este tipo de asientos (57).

Al igual que la nobleza, durante el S. XVII algunas ciudades pudieron también comprar su asiento en Cortes. Así lo hizo Corella, que por un millón trece mil reales compró el título de ciudad, voto en Cortes, jurisdicción civil y criminal y el goce de la Bardena (58).

Los procuradores de las universidades eran nombrados casi siempre por y entre los miembros del regimiento o ayuntamiento y de los jurados locales y parece fueron "personas de distinción" (59); A veces, nobles que tenían a la vez asiento por su casa (60).

De todas maneras, para ver el "grado de popularidad" de los procuradores, conviene dejar claro, que aunque la gestión municipal funcionó en sus orígenes en forma de concejo abierto, en la Edad Moderna, fué introduciéndose al igual que en Castilla y Aragón la modalidad de la INSACULACION para la formación de ayuntamientos (61), que llegó a ser general, aunque variase de unos pueblos a otros. En las Cortes de 1828-29 se intentó legislar sobre las con

diciones para ser insaculado con un sentido restrictivo respecto a las anteriores disposiciones. Además de ser naturales del Reino, mayores de 25 años, saber leer y escribir, ser persona de buena vida y costumbres y no tener nota de blasfemo, borracho y jugador, se exigía estar en posesión de un patrimonio libre de 200 ducados, en las ciudades y buenas villas, y de 100 en los otros pueblos del reino, pero el virrey se negó a sancionar y decretar el pedimento de ley (62).

Se puede comprobar la representatividad conseguida por estos procuradores y el distinto grado de la misma en cada merindad, relacionando las 38 ciudades que llegaron a tener asiento en Cortes (63) y el número de fuegos que representaban, con el total de ayuntamientos y fuegos de la merindad (64).

MERINDAD DE AOIZ

Total de Ayuntamientos.....	32
Total de fuegos.....	7,089
Ayuntamientos con voto en Cortes.....	8
<u>Total de fuegos representados.....</u>	<u>2.283 -32'2%-</u>

MERINDAD DE ESTELLA

Total de ayuntamientos	40
Total de fuegos	11.081
Ayuntamientos con voto en Cortes ..	7
<u>Total de fuegos representados</u>	<u>2.935-26'8%</u>

MERINDAD DE PAMPLONA

Total de ayuntamientos	56
Total de fuegos	14.946
Ayuntamiento con voto en Cortes ...	10
<u>Total de fuegos representados</u>	<u>4.769-31'9%</u>

MERINDAD DE OLITE

Total de ayuntamientos	25
Total de fuegos	6.467
Ayuntamientos con voto en Cortes ..	5
<u>Total de fuegos representados</u>	<u>2.230-34'4%</u>

NERINDAD DE TUDELA

Total de ayuntamientos	183
Total de fuegos	6.724
Ayuntamientos con voto en Cortes	8
<u>Total de fuegos representados ..</u>	<u>4.806-71'8%-</u>

TOTAL DE NAVARRA

Total de ayuntamientos	183
Total de fuegos	46.180
Ayuntamientos con voto en Cortes	38
<u>Total de fuegos representados ..</u>	<u>17.023-36'8%-</u>

Una primera conclusión nos lleva a afirmar que sólo el 36'8 % de los fuegos o vecinos con casa abierta en Navarra estaban representados en el estamento de Universidades; pero si tenemos en cuenta el sistema selectivo y censitario para la formación de Ayuntamientos, su representatividad social era mucho menor.

No parece que pueda calificarse de imperativo el mandato concedido a los procuradores por las universidades, al menos de un modo absoluto (65) y la revocación sólo podía hacerse mientras no hubiesen empezado las Cortes y admitido los poderes de procurador (66). En 1781, acuer-

dan las Cortes que "no se admitan (poderes) no siendo absolutos... o incluyendo cláusula o cláusulas opuestas a la observancia del juramento de secreto" (67).

La convocatoria fué siempre regalía del soberano (68), así como fijar el lugar de reunión y aunque también tenían los reyes la facultad de cerrarlas, suspenderlas o poner plazo a sus reuniones, no se hizo tal cosa hasta 1801, en que se fijó un tiempo de 20 días y la prohibición de tratar otra cosa que no fuese el servicio o donativo(69).

Los reyes que comenzaron reuniendo Cortes anualmente (70) fueron espaciando la convocatoria paulatinamente y ya en la segunda mitad del siglo XVII no se reunieron más que siete veces, batiendo el récord en el siglo XVIII con sólo diez reuniones (71).

Las Cortes, al igual que las de los otros Reinos se abría con una especie de discurso de la Corona a cargo del virrey, que se decía PROPOSICION, en el que se indicaban los asuntos a tratar y las necesidades que habían de cubrirse con el servicio demandado. El fin que persigue es mover a un gran donativo, que para el rey era la única finalidad de la convocatoria. Sólo en las últimas Cortes de 1817 y 1828, sugiere también la reforma de leyes del reino (72).

La discusión de los asuntos era general, con los tres brazos reunidos, pero la votación se hacía separadamente en cada uno. Exigíase mayoría absoluta de los votantes de cada brazo de tal modo que si un sólo brazo no la conseguía, invalidaba la resolución de los otros dos. La fórmula oficial, según Yanguas y Miranda era que en la asamblea había DISCORDIA, en cuyo caso se repetía hasta tres veces la votación del brazo disidente. Si aquella se repetía en las tres votaciones el proyecto quedaba negado y no se hablaba más de la materia en aquellas Cortes (73).

Antes de la concesión del Donativo, y este era el mayor instrumento de presión con que contaban los estamentos, se procedía a la petición de REPARACION DE AGRAVIOS, es decir, a la anulación de las disposiciones dictadas por la Corona contrarias a los fueros o leyes del reino. No parece sin embargo, por lo menos después de la anexión a Castilla, que se llegase en ninguna ocasión a la situación límite de negar el donativo porque el rey se mantuviese firme en algún contrafuero (74). Cuando los agravios a reparar no eran tenidos en cuenta, así como otras leyes solicitadas y negadas se hacía al final de la reunión de Cortes el INSISTIMIENTO GENERAL. Y por no dilatar las reuniones no se insistía inmediatamente y se dejaba el encargo a la Diputación o se repetía el pedimento en la convocatoria siguiente (75).

De todas formas, los reyes no debieron ofrecer excesiva resistencia a admitir los contrafueros, y una gran parte de las leyes que se recogen en los Cuadernos de Cortes tienen este carácter negativo de reparación de agravios (76). Pero como da a entender Yanguas y Miranda, la sanción del contrafuero por parte del rey tenía un alcance muy limitado. Así al hacer referencia a las extralimitaciones de los aduaneros castellanos en Navarra dice: "Estos abusos se repetían sin cesar y Navarra no podía obtener de la preponderancia castellana otra satisfacción que la de un decreto de contrafuero de lo pasado, sin evitar el mal en lo sucesivo" (77).

La capacidad del "derecho de sobrecarta" para garantizar la foralidad de las disposiciones reales era bien limitada desde el momento que era una atribución del Consejo real nombrado por el rey y por consiguiente fiel al mismo. Mayor alcance fiscalizador han visto los foralistas en lo que instituido en 1569 pasó posteriormente a llamarse más solemnemente derecho de PRONULGACION, contenido en la ley 22, tit. III, libro I de la Novísima Recopilación (78) por el cual sólo podían imprimirse las leyes y ordenanzas del reino a pedimento de los tres estados. Ello tenía como finalidad evitar que las leyes salidas de las Cortes fuesen modificadas por el monarca al sancionarlas. Mientras el derecho de sobrecarta correspondía a las disposiciones emanadas del poder real el de promulgación correspon

día a las leyes que tuviesen su iniciativa en las Cortes (79).

No sabemos el alcance que tuvo, ni la práctica de esta institución, así como los conflictos, o situaciones límite a las que se pudo llegar. No sabemos tampoco en qué medida nos encontramos ante un puro formalismo.

Sin embargo, no hay que olvidar que los reyes gobernaban a través de provisiones y reales cédulas expedidas por su propia autoridad (80). No necesitaban de la cooperación de las cortes. Como indica Yanguas y Miranda, la función de éstas se reducía a ser "moderadoras de la autoridad real", pero estaba muy claro quién era el que mandaba: "Espedíanse ordenes o reales bédulas por el gobierno de Castilla, y se remitían a los virreyes de Navarra para su ejecución, a que no podían oponerse sin disgustar a su soberano, aunque todos ellos juraban la observancia de los fueros y leyes; y así era que ninguno prefería el honor y la religión a la amistad del César" (81).

Los historiadores de las instituciones forales navarras se han limitado a su descripción formal, y forzando interpretaciones han intentado equipararlas con las instituciones liberales modernas, viendo en las Cortes un auténtico legislativo. Esto último, como se ha tratado de hacer ver en las páginas anteriores no resiste ni el mero análisis formal. De todas formas, un estudio serio del or-

den institucional navarro en el antiguo régimen, requeriría no sólo detenerse en este aspecto descriptivo, sino llegar a un análisis de su funcionamiento. Sólo así podríamos saber el grado real de autogobierno que conferían.

De forma realista, Ilarregui recuerda "a aquellos que sin conocer el mecanismo gubernamental de nuestra provincia quieren levantarlo muy por encima de las modernas instituciones, que con el sistema adoptado para la sanción de las leyes, jamás llegaban éstas a obtenerla cuando así convenía a las aspiraciones de los reyes y de sus ministros; por manera que si vamos a examinar las peticiones hechas por los estamentos en el transcurso de tres siglos, se verá que en comparación de las otorgadas, son mucho más numerosas las que se dejaron de conceder o se concedieron de una manera que no podía ser aceptada por el país" (82).

De cualquier manera, en los últimos años de la Monarquía del antiguo régimen, cuando la crisis económica y las guerras potenciaron la crisis estructural y las tensiones entre la Administración central y Navarra se agudizaron, en situaciones límite, el poder central ignorando las prácticas tradicionales consiguió imponer sus decisiones. Así, cuando en 1803 la Diputación se niega a proceder a la leva decretada por el gobierno, se nombra una junta compuesta por el virrey, el regente y un ministro del Consejo, que ejecuta la orden y hace la quinta (83). Lo mismo sucede en la última etapa foral con la introducción en Na-

varra del Reglamento de Policía. La Diputación ve en él un contrafuero. Tras muchas reclamaciones "el virrey cerró la puerta a toda esperanza dictando un decreto en 11 de febrero de 1829 que decía: "A esto os decimos que sobre ello tenemos decretado lo más conveniente" (84).

Siguiendo a Yanguas y Miranda: En vísperas de la abolición foral, "las Cortes de Navarra nada conservaban de sus primitivas atribuciones sino un brillo exterior que ofuscaba la vista de los naturales del país y excitaba la envidia de los extraños que lo miraban de lejos"..... Tal era el estado del poder legislativo en Navarra y tal debía ser bajo la influencia de una monarquía que no reconocía límites en el ejercicio de la soberanía. Si alguna vez conseguían los navarros contener o neutralizar los efectos de un ataque ministerial contra sus fueros, consistía en los vicios del mismo gobierno" (85).

e.-LA DIPUTACION

En las cortes catalanas tiene su origen un órgano político-administrativo que se constituyó como una delegación permanente durante el tiempo que mediaba entre la reunión de unas cortes y las siguientes, cuidando de la re-

caudación del subsidio ("donatiu") que habían concedido al rey y del cumplimiento de los acuerdos votados. Si bien es ta Diputación de las Cortes comienza a funcionar en el si- glo XIII, no se consolida como órgano permanente y repre- sentativo hasta fines del siglo XIV (86).

De Cataluña pasa a Aragón y Valencia y en 1501 se establece en Navarra "una diputación de los tres brazos o estamentos para que cuidase de la observancia de los fue- ros, reclamando sus quebrantos y para la reforma del real patrimonio y de los cuarteles y alcabalas" (87). La insti- tución se afirmará en las Cortes de 1569 (88) pero solamen- te en 1593 en que el rey contribuye a su organización tomó un impulso definitivo.

Era nombrada al finalizar las reuniones de las Cortes y cesaba en el momento que se constituían las si- guientes. El número de diputados, la forma de nombrarlos y sus atribuciones variaron a lo largo del tiempo. A partir de 1678 se compone de siete miembros: uno por el brazo eclesiástico, que la preside y que coincide con el presi- dente de las Cortes, dos elegidos por el brazo militar con un voto cada uno, dos del brazo popular elegidos de entre sus miembros, pero con un sólo voto y otros dos en repre- sentación de la ciudad de Pamplona, también con un sólo vo- to.

Por el carácter de comisión delegada de los tres estados, sus competencias quedaban limitadas a los encargos recibidos de las Cortes. Además de la misión genérica de velar por la observancia del Fuero estaban encargadas del reparto y cobranza del donativo, de la administración de fondos (Vínculo, y más tarde Caminos), de la concesión de cartas de naturaleza a extranjeros, del examen de los poderes de los representantes de las universidades, del control de la sobrecarta, y en general de seguir todas las instrucciones que al final de cada reunión de Cortes éstas les entregaban y que incluían la reparación de agravios y los pedimentos de contrafuero (89).

Conforme se iban espaciando las convocatorias de Cortes, la Diputación iba ampliando sus atribuciones y reforzando su personalidad convirtiéndose en los últimos cincuenta años de su existencia en el centro de la vida política del reino (90).

Desde 1692, una ley obligaba al Consejo a consultar con la Diputación antes de dar sobrecarta, aunque el dictamen no era vinculante y en los momentos conflictivos de final del XVIII y principios del XIX se sobrecartearon ininterrumpidamente muchas reales cédulas por el Consejo sin comunicarlas a la Diputación o en contra de su dictamen (91).

En 1783 la Diputación pide que se le conceda la

dirección y manejo de los Caminos sin obligación de dar cuentas de la inversión de sus caudales más que a las Cortes. La Corona atendió la demanda y aunque ello iba a contribuir a agravar la crisis que la hacienda navarra venía padeciendo, ampliaba considerablemente las atribuciones administrativas de la corporación (92).

Al finalizar las Cortes de 1801, la Diputación quedó autorizada para negociar y aceptar el donativo "siempre que quedase salva la constitución del reino" (93), cediendo las Cortes en esta materia tan esencial, casi justificación principal de su actividad. Desde este momento la Diputación va a ser el eje de la vida política navarra en sus negociaciones con el poder central.

Comparando la composición, funcionamiento y sistema de votación de la Diputación con las Cortes parece llegarse a la conclusión de que la relación de fuerzas no era coincidente. Si en las últimas, la toma de decisiones por unanimidad daba al clero un control total, no es el caso en la Diputación. En ésta, a pesar de estar presidida por un miembro del estamento eclesiástico, sólo tenía un voto y para casos de desempate; los otros cuatro votos estaban en manos de la nobleza y universidades. Esto quizás explica la mayor inclinación de la Diputación a contemporizar, a llegar a compromisos con la administración central y en definitiva, a aceptar las transformaciones que el pro

ceso liberal imponía (94). Y cuando en 1809, 1820 y 1833 se plantee la disyuntiva entre Antiguo Régimen y Estado liberal, sin resistencia alguna en 1820, con alguna reticencia en 1809 y con intenciones negociadoras en 1833, será este órgano, depositario de la legitimidad foral, el que de forma más o menos explícita aceptará y ratificará la nueva legitimidad liberal.

2.-CRISIS INSTITUCIONAL

El Despotismo Ilustrado intenta desde el poder remover los obstáculos "tradicionales" que se oponen a la construcción de la sociedad moderna. Si hasta entonces las instituciones forales del País Vasco no habían tenido problemas serios de supervivencia, desde 1778, por el contrario, fueron sometidas a ataques sistemáticos por parte del poder central, que provocaron lesiones importantes en las mismas y que se agravaron a partir de 1796 bajo el gobierno de Godoy. Parece incluso, que únicamente los sucesos de 1808 pudieron salvarlas por el momento.

La suerte de los regímenes forales estaba ligada a la del Antiguo Régimen y éste iba a arrastrar en su desaparición a un orden institucional incompatible con la nueva forma de estado que comenzaba a forjarse.

Sin embargo, sería parcial e incompleto tratar de explicar este proceso exclusivamente como una agresión del poder central a los regímenes forales. No hay que perder de vista el doble aspecto que revistió: si por un lado, la política de los Borbones, forzada por necesidades muy concretas empujaba a la asimilación, hay que tener también en cuenta la presión de los sectores más influyentes de las regiones forales, y en especial de Navarra, por integrarse en el estado liberal español.

Esto no quiere decir que fuese una integración incondicional, y como veremos se va a tratar de sacar ventajas de la particularidad histórica para salvar del Fuero aquello que convenga. De ahí, los forcejeos, tensiones, negociaciones y transacciones entre la administración central y las autoridades forales (95). Si la guerra de la Independencia frenó el proceso asimilacionista, la guerra carlista, ajena en principio al conflicto foral, va a condicionar su desenlace y el alcance de la "nueva foralidad" que para Navarra supuso la ley de modificación de fueros de 1841.

A.-OFENSIVA DEL PODER CENTRAL

El historiador Josep Fontana (96) ha demostrado recientemente la incidencia que tuvo la crisis de la Ha-

cienda en la quiebra de la Monarquía Absoluta. La guerra con Inglaterra primero, y las guerras de la Convención con Francia obligaron por un lado a un aumento creciente de los presupuestos del estado, a la vez que provocaban una disminución del comercio con las colonias americanas con el consiguiente descenso en los ingresos por derechos de aduanas.

En este contexto de crisis hacendística y de compromisos militares hay que tratar de comprender la política abolicionista del poder central, frente a unas regiones forales que se resistían a contribuir en dinero y hombres a las necesidades del estado. A ello hay que añadir la política económica mercantilista y proteccionista propia del Despotismo Ilustrado que veía en la autonomía aduanera del País Vasco una espita de divisas y una competencia desleal para la industria y el comercio nacional.

Después de la Paz de Basilea, que pone fin a la guerra con Francia, Francisco de Zámora, consejero de Castilla y comisario regio en Navarra escribe a Godoy con la siguiente propuesta: "Si a esta paz, sigue la unión de las Provincias al resto de la Nación sin las trabas forales que las separan y hacen casi un miembro muerto del reino, había V.E. hecho una de aquellas grandes obras que no hemos visto desde el Cardenal Cisneros o el grande Felipe II Las aduanas de Bilbao, de San Sebastián y de la Fron

tera (Navarra) serían unas fincas de las mejores del reino. Las contribuciones catastrales de las tres Provincias, aún bajándolas mucho, pasarían de doscientos mil duros según mis cálculos. Se puede creer que no bajarían de 7.000 hombres las tropas que podríamos sacar de allí..." (97). La idea era tentadora: CONTRIBUCIONES, QUINTAS, supresión de ADUANAS. He aquí los tres frentes de batalla en torno a los cuales se va a centrar la polémica foral.

a.-CONTRIBUCIONES

El creciente déficit presupuestario se va a encontrar con un intocable sistema fiscal basado en exenciones a los estamentos privilegiados: clero y nobleza y con un pueblo esquilmado ya por los impuestos y sometido en la última decena del siglo a violentas crisis de subsistencia. En esta situación, la administración central va a dirigir su mirada en busca de nuevas fuentes de ingresos allí donde la presión fiscal es menor: en las "provincias exentas" para intentar acabar con los privilegios fiscales (98).

En 1776, se inicia la "ofensiva abolicionista" de Godoy. La R. O. del 1 de septiembre dejaba prácticamente en suspenso todo el edificio foral navarro. Por ella el gobierno, oyendo al Consejo de Estado, clausura las Cortes de Navarra reunidas desde 1794 y sobre los asuntos reclama

dos por éstas referentes a derechos de aduanas, quintas, extracción de vinos e introducción de muselinas, decide que "mientras en una Junta de Ministros se examinan radicalmente dichas materias, su trascendencia y enlaces con todos los demás puntos, casos y hechos representados por los Tres Brazos o Estados, y origen, causas y objetos de los fueros y exenciones en que se apoyan aquéllas representaciones para darles el valor que corresponda en beneficio de los pueblos de Navarra, no se haga novedad en el cumplimiento que han tenido y actualmente tienen y deben tener las Reales Pragmáticas, Cédulas y Reales Ordenes expedidas o comunicadas por las respectivas secretarías de Estado y del Despacho, Consejos y demás Tribunales a quienes corresponde" (99). Con ello no sólo se reduce a letra muerta la limitada capacidad de control de la foralidad implícito en el derecho de sobrecarta, sino que además se prevee la creación unilateral de una Junta para el examen de los Fueros, es fácil suponer con qué fines.

La R.O. I-IX-1796 no sería apremiante hasta la aprobación de la R.C. de 17 de julio de 1799. Sin embargo desde 1797 se expiden y obtienen sobrecarta por el Real Consejo varias reales cédulas, de las cuales unas imponen contribuciones y otras confirman las impuestas y dictan su ejecución. Los contrafueros se cometen ininterrumpidamente sobrecarteándose muchas reales cédulas por el Consejo sin comunicarlas a la Diputación (100).

Ante esta situación, la Diputación de Navarra mantiene una postura contemporizadora. Reconoce la necesidad de contribuir a las necesidades de la Corona, pero quiere hacerlo "con arreglo a fuero". Y mientras se exige la anulación y revocación de las cédulas relativas a contribuciones sobre legados y herencia, criados, caballerías etc. (101) y las reales cédulas sobre consolidación de vales pues "son arbitrios que vulneran la constitución del Reino" (102), proponen hacer el donativo con el sobrante de los propios, el importe de los baldíos y aun por medio del "repartimiento entre los vecinos sin excepción de persona alguna de cualquier clase y condición que sea" (103).

A quién beneficiaba la "fiscalidad foral" estaba claro, y así lo entendieron también los autores de un informe al ministro de Hacienda cuando decían que "por la falsa idea de sostener unos fueros dudosos del reino quieren con el repartimiento entre los vecinos allanar todos los fueros particulares" (104).

En la transacción resultante, la Diputación de Navarra lleva la peor parte: no sólo tiene que ceder en materia de contribuciones y regularizarlas, sino que acepta también como legítima la Junta para el examen de Fueros que se creó sin consultar al Reino (105).

El aumento de la presión fiscal del gobierno sobre Navarra venía también justificada por el déficit que

arrastraban las rentas de la Corona en Navarra en relación con los gastos que le ocasiona. Déficit que para el quinquenio 1802-1806 se elevaba a 726.087 reales de vellón anuales. Y la R. O. del 15 de febrero de 1806 trata de la necesidad de obtener recursos con que cubrir el déficit anual que resulta en la tesorería de Navarra. También en este caso la Diputación está dispuesta a atender las necesidades de la Corona "sin lesión de la Constitución", que sirva "para pagar las cargas ordinarias que tienen contra sí", los gastos de su propia administración (106).

En resumen, Navarra reconoció el principio que imponía la nueva concepción de estado de que los fueros no le eximían de contribuir a las cargas de la Monarquía, aun que haciendo valer su particular situación logró utilizar la vía de la negociación. Si no consiguió la suspensión de las cédulas de contribuciones, eludió su pago en la forma y cuantía que prescribían y aprovechando la debilidad del poder central, estuvo de hecho prácticamente exenta al sorprenderle la invasión francesa de 1808 sin finalizar los acuerdos (107).

b.-QUINTAS

La "contribución de sangre" va a ser otro punto de fricción en el proceso integrador y la polémica foral

girará en torno a distintas interpretaciones sobre las disposiciones que el Fuero General recogía en torno al servicio de armas.

El Fuero General de Navarra comienza con lo que podríamos llamar "pacto feudal". El libro I, título I, capítulo III, trata de "qué cosas son tenida los navarros de facer por su Rey, et eyll qué deve dar": "Dizir vos emos la memoria de los fueros que ha el rey de Navarra con sus navarros, et los navarros con su rey; es a saber, que los navarros siervan al rey como buenos vasayllos a buen seynor; el seynor que lis faga bien como buen seynor a buenos vassayllos" (108).

El servicio principal que el Rey exige, es el servicio de armas. La obligación no es igual para todos. Mientras "caballeros e infanzones" sólo deben seguir al rey con determinadas condiciones y por plazos fijados, los villanos lo deben hacer de forma incondicional: "segunt que lis fuere mandado deven yr los villanos" (109).

Las condiciones que la nobleza podía exigir al rey a la hora de prestarle servicio de armas eran las siguientes: la guerra tenía que ser defensiva, pues se hacía referencia al caso en que "las huestes entraran en su tierra" y pasaran el Ebro. Durante tres días la manutención corría por su cuenta y pasado ese plazo le correspondía al rey, que si no lo hacía podían caballeros e infanzones retirarse a sus casas (110).

Esta diferencia de "fuero" para uno y otro estamento iba a ser tenido en cuenta cuando en el siglo XVIII se introduzca el sistema de quintas y levass.

De todas maneras, la historia prueba que la exención contenida en el fuero respecto del servicio militar de la nobleza, o se entendió de otra manera que se explica en el capítulo citado o debió quedar éste sin uso desde los primeros años de la Reconquista, pues los reyes de Navarra hicieron la guerra fuera del país acaudillando grandes ejércitos, en los que la participación de la nobleza en aquellos tiempos era imprescindible. Así Sancho El Mayor participó en la famosa batalla de Calatañazor en el año 1002, y Sancho El Fuerte en la de las Navas de Tolosa en 1212. El mismo escudo de Navarra: las cadenas, testimonia esta realidad, ya que tiene su origen en el recuerdo de esta última batalla.

Durante la Monarquía de los Austrias, el ejército se profesionaliza y el rey se independiza de la nobleza a la hora de hacer la guerra. El grueso del ejército estaba formado por mercenarios. Todos los problemas que debieron presentarse en Navarra sobre este asunto, están en relación con el alojamiento y abastecimiento "de la gente de guerra" (111).

La cuestión se complica con la llegada de los Borbones. Su espíritu reformista alcanzó también al ejército

to y junto a la creación de nuevas academias militares y la reorganización del cuerpo de oficiales, en 1704 se introdujo la modalidad francesa de QUINTAS como sistema de reclutamiento. Se hacían listas de los mozos útiles de cada distrito y del total anual se elegía por sorteo uno de cada cinco, de ahí el término de "quinto" (112).

La medida fue impopular desde el principio y ya en 1773 hubo en Barcelona motines de protesta (113). Las regiones forales vascas van a intentar con distinto éxito eludir la obligación desentpolvando viejos principios del Fuero.

En 1770, en virtud de la real cédula 29-XI-1770, sobrecartada por el Real Consejo, se levantan en Navarra 340 hombres al parecer sin problemas (114). Pero en 1772, la real cédula 16 de mayo (115) provocó por primera vez la respuesta de la Diputación. En ella se mandaba que se observase en Navarra la ordenanza de reemplazos del ejército en cuanto a alistamiento y sorteo. Se consideró que la medida era contraria al principio foral de que "no sean compelidos los navarros a tomar las armas sino en el caso que entrasen en el reino hueste enemiga"; la Cámara de Castilla acudirá al mismo Fuero para recordar en primer lugar la obligación de fidelidad y servicio que todos los navarros tienen para con el rey; y en segundo lugar, que si se puede hablar de la existencia de exenciones o servicio condicionado, reza exclusivamente para la nobleza y no para el

resto del pueblo, que tiene la obligación incondicional de acudir al servicio de armas cuando el rey les llame. Además afirma el Consejo: "el derecho de levantar tropas es el más alto y eminente de la soberanía y por lo mismo imprescriptible" (116).

"Conforme el rey con el dictamen del Consejo, se despachó la sobrecédula del 15-II-1773, y desde entonces tuvo cumplida observancia en Navarra la ordenanza de reemplazos" (117).

Así concluye Ilarregui el apartado que dedica al servicio militar en su "Memoria sobre la ley de la modificación de los fueros de Navarra". Para probarlo incluye en un apéndice la cédula real citada. La cosa no debió de ser tan sencilla para el gobierno y el asunto de las quintas fue objeto de controversias, negociaciones diversas y transacciones más o menos condescendientes por uno y otro lado. En contra de lo que afirma Ilarregui parece que en 1772 y 1776, la Diputación objetó con éxito a las exigencias del gobierno y consiguió liberar a Navarra del levantamiento (118) lo que hace suponer que la cédula no se ejecutó.

Sin embargo en 1803, por la R.O. de 4-VII-1863 Vascongadas y Navarra han de engrosar el ejército con 2.000 hombres, de los cuales 800 corresponden a ésta última. La Diputación se niega a cumplir la orden. Es igual: un comisionado del gobierno procede a la leva de gente. El

asunto es grave, y se piden Cortes. En su lugar, se formará una junta compuesta por el virrey, el regente y un ministro del Consejo Real, que procede a la ejecución de la ley y hace la quinta (119).

En 1806 se vuelve a exigir a Navarra 1.498 hombres para el ejército, "dejando para las levass que cada provincia emplee los métodos más idóneos a su constitución". Tras negociar con el gobierno, éste acepta la oferta de 3.000 reales por cada hombre. Es la única ventaja que se le concede, existente por otra parte en otros reinos; y si se tiene en cuenta que el gobierno podía preferir este servicio pecuniario, Navarra queda nivelada con las demás provincias en lo que a quintas se refiere (120).

Esta transacción que supone la aceptación de la obligación del servicio militar, pero su compensación por una aportación en dinero, va a sentar precedente y se va a repetir en los próximos reemplazos y levass. Por eso los pueblos casi no lo advirtieron. Al no acudir los mozos personalmente, el dinero que los sustituía se confundía con el donativo. Sin embargo el sistema no podía menos de ser gravoso, sobre todo para una hacienda que se encontraba en una situación tan precaria como la navarra de fin del Antiguo Régimen. Por eso en el cuaderno de instrucciones que las Cortes de 1828-29 dejan a la Diputación, sobre el asunto de quintas acuerdan que si por fuerza mayor se hace preciso concederlas no se podrá solicitar que se conmute el

servicio por dinero. Simplemente se autoriza para que los pueblos puedan hacerlo por leva, sustitución u otros medios (121).

La práctica que se mantuvo los años siguientes no parece obedecer a un único criterio: "Procedióse pues por aquellos años a llenar en Navarra el servicio militar, dando unas veces hombres y redimiendo otras el contingente con dinero" (122).

De una forma o de otra, de lo que no hay duda es que con anterioridad a la guerra carlista, Navarra había aceptado la obligación del servicio militar. Sin embargo la impopularidad natural de las quintas va a ser utilizada por carlistas y posteriormente por todos aquellos contrarios a la ley de 1841: fueristas y nacionalistas, como argumento popular en contra del estado liberal. Lo "foral" era la exención, que como hemos visto, no puede deducirse más que a partir de una interpretación muy forzada y tergiversada del Fuero General, pues según éste, "lo foral" era el servicio incondicional de armas, salvo para la nobleza, siempre que el rey lo solicitara.

c.-ADUANAS

Si sobre CONTRIBUCIONES y QUINTAS pudo haber unanimidad entre la población navarra a la hora de defenderse

contra las exigencias del poder central, no sucedía lo mismo en el asunto de las ADUANAS, que va a provocar la división de la sociedad navarra y va a manifestar mejor que nada la crisis del Antiguo Régimen en el Reino.

En la España de los Austrias los distintos Reinos conservaron su régimen de aduanas propio. Tras la Guerra de Sucesión, los Decretos de Nueva Planta (1716) impusieron la unión aduanera entre los reinos de la Corona de Aragón y Castilla. En el siglo XVIII, no quedaban más aduanas interiores que las de las cuatro regiones forales vascas con el resto de la Monarquía.

La política económica de los Borbones, intenta la adaptación de España al incipiente capitalismo europeo. Presionada por las exigencias de una burguesía en ascenso tenía como objetivo la unificación del ámbito económico, o lo que es lo mismo, la creación de un mercado nacional. En este sentido en 1778 se liberalizó el comercio colonial; se fomentaron las manufacturas y se articularon medidas proteccionistas para evitar la competencia extranjera; para acabar con el desconcierto monetario se unificaron las monedas en todo el territorio... Pero entre todas las medidas, la política aduanera ocupaba un lugar central: prohibición de importar productos extranjeros competitivos, restricciones a la exportación de materias primas y medidas destinadas a perseguir el contrabando.

En este marco hay que situar toda la polémica que sobre la supresión de las aduanas interiores tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII y hasta 1841 que fueron definitivamente trasladadas a la frontera con Francia.

Conviene adelantar que su traslado no era exclusivamente un objetivo de la política económica del gobierno, sino que en él estaban interesados, por lo menos en lo que a Navarra se refiere, sus sectores sociales más influyentes: los grandes comerciantes y la nobleza terrateniente.

Si en 1717, tras los decretos de Nueva Planta en un intento de consumar la unificación aduanera, la Real Instrucción de 31 de agosto declaraba la supresión de todas las aduanas internas levantó tal polvareda en Navarra y Vascongadas que el gobierno de Felipe V no tuvo más remedio que transigir y restaurarlas (123), ya en las Cortes de 1757 cuando el gobierno invitó a Navarra a su traslado al Pirineo, aunque dominaron las voces opuestas, no faltaron escritos y anónimos que defendían con vigor la oportunidad de la medida (124). A partir de entonces esta opinión contraria al mantenimiento de las aduanas en el Ebro fue en aumento, solidarizándose en este punto con la administración central. La presión favorable al traslado va a reforzarse cuando en 1778 se liberalice el comercio con América y se exceptúe de él a las "provincias exentas", y cuando al año siguiente se exija el impuesto de extranje-

ría (15 %) a los productos que estas provincias introduzcan en Castilla, equiparándolos con los procedentes de países extranjeros.

La Navarra del Sur que tenía el mercado natural de sus excedentes agrarios: vino, aceite, aguardiente... en Aragón y Castilla y aspira a acceder al mercado americano, se va a enfrentar con la Navarra del Norte que vivía del comercio con Francia y del contrabando y con la ciudad de Pamplona, cuya feria franca de San Fermín ofrecía la oportunidad a naturales y forasteros de adquirir toda clase de productos extranjeros, y "cuya franquicia era utilizada para la introducción de géneros en partidas mucho mayores que las necesarias para el solo despacho a los días que dura la feria" (125).

Si en esta lucha de intereses, los primeros estaban respaldados por el poder central, contaban los segundos con un orden institucional favorable pudiendo emplear argumentos "forales", y durante muchos años los "foralistas" añorarán la independencia aduanera, e incluso los "neoforalistas de 1841" intentarán hacer ver el sacrificio que hicieron al renunciar a sus aduanas en pro de la unidad nacional.

La cuestión se plantea con toda su crudeza en las Cortes de 1780-1781, y a través de los memoriales, propuestas y contrapropuestas se obtiene una visión muy clara

de este enfrentamiento de intereses, de las razones del poder central a favor del traslado, así como de la caótica situación a que había conducido la política aduanera navarra, conformando un comercio totalmente pasivo y dependiente de Francia y que impedía cualquier desarrollo de la industria local (126).

A favor del traslado se leyó el 2 de enero de 1781 en las Cortes un escrito firmado por A. J. de Berriocha y Zarigaiz que en línea con el espíritu ilustrado de la época advierte que "el gran objetivo de una ECONOMIA NACIONAL queda frustrado por el sistema vigente de aduanas". Se queja de "estos grillos que tenemos en la raya de Castilla y Aragón que nos separan y desunen de los españoles, conceptuándose en la clase de país extranjero... de ahí que el comercio de Navarra no puede ser NACIONAL"... Todos los frutos navarros como vinos, aceites, granos, paños y hierro son extranjeros para los dominios de España...". Respecto a Francia denuncia que se den más facilidades a la importación que a la exportación. Las Tablas de Navarra en 1780 mientras gravaban en un 5 % los géneros de exportación, se limitaban a hacerlo en un 3,3 % con los de importación, sin hacer distinción entre productos manufacturados y materias primas (127). Por eso no le falta razón al afirmar: "Parece que las Tablas se han erigido con este fatalísimo arreglo para que no pudiéramos tener jamás fábricas, artes, ni comercio activo"... favoreciéndose más el

comercio e industria extranjeros que los propios... viniéndose a convertir los FUEROS en la utilidad y provecho de otros países antes que de España y de la misma Navarra... ¡La industria de los extranjeros es la que disfruta de los fueros de Navarra!". Obsérvese la identificación fueros-aduanas.

En las mismas Cortes de 1780 el Marqués de San Adrián presentó un impreso (128) con una propuesta que si bien equivalía al traslado de aduanas, formalmente intentaba salvaguardar el orden institucional navarro, al mismo tiempo que trataba de no perjudicar los intereses de los valles del norte que vivían de cara a Francia. El Marqués propone el traslado de las tablas navarras a la frontera con la imposición del 15 % por derechos tanto de importación como de exportación, quedando libre la salida y entrada de todo a los demás Reinos de España. Estarían exceptuadas de pagar derechos a la entrada por Francia a Navarra "los pescados frescos, los huevos, jamones y perniles, las aves, las cortezas que dicen de tocino, los bueyes, vacas y mulas... Y para los valles de Roncal, Salazar, Baztán y demás confinantes a Francia todo género de comestible para su uso, y a más sacarán libre de derechos reales su lana propia... Y también de todo el Reino se sacarán libres de derechos vino, aceite y jabón y los demás frutos como hasta aquí" (129).

En definitiva se intenta aunar las ventajas de la situación anterior con las que la integración en el mercado nacional proporcionasen. De esta manera además de "favorecer la industria prácticamente arruinada ahora en Navarra" se conseguiría "un cambio radical en su comercio pues de realizarse ahora fundamentalmente con Francia pasaría a integrarse en un COMERCIO NACIONAL".

Todos los argumentos empleados están en consonancia con las ideas económicas de la Ilustración, de la que el Marqués de San Adrián fue el representante más destacado en Navarra. Denuncia la extracción de lanas a Francia; que si la venta proporciona al reino 250.000 pesos, los franceses obtienen una ganancia de 1.100.000 al vender los paños fabricados con nuestra lana en Navarra. Denuncia también la salida de metales al país vecino: "¿qué son el día de hoy las tiendas abiertas de nuestros comerciantes, sino unas escalas para cargar nuestra moneda y conducirla a Francia?... Necesitamos de dos millones de pesos para nuestro alimento y vestuario, fuera del pan, vino, tocino, carnes y legumbres, etc. y de estos millones, lo que menos un millón y trescientos mil pesos, nos vienen por nuestros mercaderes de Francia, aunque la ganancia de este tráfico les deje a nuestros mercaderes una quinta parte, quedan para los franceses un millón y cuarenta mil pesos..."; aun descontando el importe de la lana y algún otro producto que nuestros comerciantes venden a los franceses "siempre

sería 700.000 pesos que da su comercio a los franceses y nos los sacan del Reino" (130).

¿De dónde salía el oro y plata para compensar este desequilibrio?. El marqués lo explica: "Ay Navarra porque un sólo cantón de Corella, Cascante, Cintruénigo, Ablitas, Monteagudo, Urzante, Varillas, Tulebras, Fitero, Fontellas, da a los arrieros castellanos, quinientos mil cántaros de vino, que lo vienen a comprar sin la menor permuta con su dinero... Ay Navarra porque este mismo cantón, Tudela, Valtierra, Arguedas, Ega y Arga con Viana y Los Arcos venden en aceite y vino a los franceses, guipuzcoanos, alaveses, vizcainos y castellanos sumas excesivas... que después del importe de las permutas dejan de más de 400.000 pesos. Ay Navarra porque todos los dichos nuestros países tienen por lo regular trigo sobrado y de tiempo en tiempo pasa lo que sacan a las Provincias (vascongadas), a Castilla y Aragón de cien mil pesos en este fruto. Ay Navarra porque los sueldos que mantienen al Rey nuestro señor y la Tropa deja cerca de doscientos mil pesos. Ay Navarra porque la compra de Valas y Bombas en las Ferrerías, y el transporte Real de estos géneros deja otra cantidad muy notable de dinero, de suerte, que todos estos ramos dan mucho más de los trescientos mil pesos, que todos los años nos hace contribuir nuestro comercio ruynoso a Francia, Inglaterra y Holanda... y por eso ay Navarra y siempre se ha lla algún dinero Español en Navarra" (131). La cita ha si-

do larga, pero expresiva de la situación comercial y de la balanza de pagos en Navarra, y ayuda a comprender la política del gobierno sobre esta cuestión.

Por otro lado, su autor intenta defenderse de las críticas de los que ven en ello un atentado a la foralidad y a la libertad de Navarra pues "haciéndolo por determinación pedida por los Tres Estados, ni es contra sus Fueros ni deja de tener repetidas y actuales prácticas en nuestras Leyes" (132).

En contra del traslado se presenta un memorial del Valle Roncal. Su única argumentación se basa en la ruina que sobrevendría al comercio de la lana con el recargo del 15 % de las aduanas. Ya en 1757 este mismo valle junto con los de Baztán, Salazar y Aezcoa se habían opuesto a su traslado. En el mismo sentido, en 1780 el valle de Baztán eleva otra representación a las Cortes: "Con las aduanas abriríanse las puertas de Castilla para el comercio y cerraríanse las de Francia"; para el valle sería ruinoso pues "nos une con la Francia la mutua dependencia de géneros, que es el quicio en que estriba y la base que sustenta toda la mole del comercio..."

En la medida que los argumentos en contra del traslado son más débiles, necesitan de un respaldo ideológico más fuerte. Un memorial anónimo apela al sentimiento de los navarros; según su autor, el primer perjuicio que

se derivaría del traslado sería la pérdida de la LIBERTAD NAVARRA, siendo también notables los daños materiales que ello acarrearía. Da su apoyo a los navarros de la Montaña y a su "heroica constancia propia de los verdaderos cántabros" (133).

El 15 de enero de 1781 el asunto de las aduanas fue sometido a votación. A pesar de ser secreta, sabemos el resultado de ella en esta ocasión a través de la representación que los partidarios de su traslado elevan al rey contrariados por el rechazo de la proposición. El resultado de la votación: tres discordias sucesivas "resultó más bien del método peculiar de hacerse en cada brazo la votación separada que del exceso de pluralidad que pudiese tener la negativa en el total de los votos del Congreso". Efectivamente, "sólo 3 de los cinco vocales del brazo eclesiástico se explicaron contrarios a la idea; de los 31 que se hallaron en el brazo militar, sólo 8 se declararon opuestos y aunque de los 34 de que se compuso el brazo de Universidades, los 21 explicaron igual oposición, es disputable el valor de algunos de estos sufragios y muy digno de notarse que a excepción de la ciudad de Pamplona, el total del vecindario de las repúblicas opuestas apenas equivale a una décima parte de la población del reino" (134).

Parece claro que el estamento noble y las grandes ciudades excepto Pamplona, que comercializaban los pro-

ductos agrarios, estaban a favor del traslado. Triunfaban sin embargo los intereses de los valles del norte y de la ciudad de Pamplona, que vivían en total dependencia del comercio con Francia. La Navarra agraria del sur, cuyos excedentes encontraban su mercado más fácil en Castilla, Aragón y América veían dificultada su extracción por las medidas proteccionistas en las aduanas castellanas y la prohibición de comerciar con América.

Ante esta situación, el problema de los excedentes preocupa en Tudela. En 1783 para la Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público "los auxilios más inmediatos para su prosperidad debían nacer del aprovechamiento de sus frutos sobrantes" y entre ellos "el vino es el más acreedor al fomento de su salida por experimentarse cada día más limitada, por ser el fruto más expuesto a corrupción y el recurso universal de sus vecinos" (135). Ante la imposibilidad de comerciar con Castilla proyectan una Compañía o sociedad de hacendados para enviar vino a las potencias del norte, particularmente a Rusia.

Por parte del poder central eran lógicas las anteriores medidas y en total consonancia con la política económica ilustrada. En primer lugar: el déficit comercial con Francia se estaban saldando con oro y plata procedente de Castilla, en un momento en que la política mercantilista luchaba contra la exportación de metales amonedados (136). En segundo lugar: la práctica generalizada del con-

trabando introducía en Castilla y Aragón a través de Navarra productos manufacturados que hacían la competencia a los productos nacionales cuya industria se intentaba fomentar y proteger. Y en tercer lugar, la unificación aduanera supondría para la administración central el aumento de ingresos por derechos de aduanas. De ahí que dentro de la reorganización de la hacienda, la reforma del sistema aduanero-arancelario aparezca como una de las piezas clave.

Pero si se ha hablado de intereses económicos contrapuestos entre Montaña y Ribera en la polémica sobre las aduanas, hay que puntualizar que este enfrentamiento no afectaba a la totalidad de sus poblaciones respectivas, sino exclusivamente a sus élites económicas. La mayoría de la población, los sectores populares: campesinos, artesanos y bajo clero de toda la geografía navarra, no podían menos de beneficiarse de una situación aduanera que hacía del país una zona de librecambio con Francia procurándoles alimento y vestido mucho más barato que en el resto de la Monarquía (137).

En las Cortes de 1817-1818, se vuelve a plantear el traslado con los mismos resultados negativos. Los argumentos a su favor siguen siendo los mismos: el perjuicio para el mercado del vino, el fracaso de las manufacturas, la imposibilidad de puerto franco con América... Además cuentan con la experiencia beneficiosa de la Guerra de la Independencia, durante la cual tanto la legislación france

sa como la gaditana coincidieron en mantener las aduanas en la frontera francesa y en la costa y reconocen "las ventajas que ha supuesto esta práctica". Además, de la posibilidad de negociar su traslado con el gobierno se podrían sacar ventajas en el arriendo del tabaco, cuyo producto es bajo, lo cual mejoraría la situación de la hacienda navarra tan perjudicada durante la guerra. Además si no se accede, el rey desairado podría cerrar las Cortes teniendo que pagar el donativo y luego tal vez se trasladarían las aduanas sin ninguna compensación (138).

No les faltaba razón a los que de forma realista contemplaban esta posibilidad y medían la relación de fuerzas y los poderes de hecho que el poder central podía ejercer sobre Navarra. Ante la negativa del Reino, el ministro de Hacienda pasa un oficio al virrey el 21 de febrero de 1818 para que lo transmita a las Cortes: "La conservación del Estado es la suprema ley y contra ésta no hay exenciones, privilegios, fueros ni juramentos...". Además, "la mayoría de Navarra así lo desea y se demostraría si la votación en el Congreso fuese nominal..." (139).

Pero todo fue inútil, el 18 de julio de 1818 las Cortes negaban el traslado. Ante las protestas de los partidarios, el síndico contesta que el traslado de Aduanas "indudablemente envuelve la renuncia positiva y presente de LIBERTADES, USOS, COSTUMBRES Y FUEROS LOS MAS APRECIABLES Y HASTA EL DIA DE HOY HAN CONTRIBUIDO A LA FELICIDAD

DEL REINO"

El asunto ADUANAS ocupó, sin lugar a dudas, un lugar importante en la polémica foral. En aquella ocasión, sin embargo, el Gobierno, a pesar de su declaración de intenciones no se atrevió por el momento a su traslado.

El triunfo liberal de 1820 supuso de nuevo la unificación aduanera. Los beneficios que reportó a los terratenientes del sur, los recuerda una instancia de la ciudad de Tudela en 1840: "En la invasión de los franceses y del año 1820 al 23 se destruyó toda barrera aduanera y se prosperó a causa de destruir esas trabas de comercio, útiles sólo para el atrevido contrabandista que en nada repara". Y si la pérdida de la autonomía aduanera es contraria a los Fueros como predicán los que pretenden conservarla, prefieren perderlos todos, pues: "el desaliento es tan cierto entre los hacendados que con el recuerdo del libre tráfico no se titubea un momento en abandonar toda ilusión lisonjera en el goce de fueros compatibles, a trueque de conseguir el beneficio de la salida de sus producciones; y no tiene nada de extraño semejante tendencia considerando que en esa medida les va la conservación de su propia existencia, que es el deber más esencial del hombre" (140).

Estaba claro que las aduanas en el Ebro era "LO FORAL", y así lo entenderán los que más adelante luchen por la defensa de los fueros. En cambio las aduanas en la

frontera con Francia era "LO LIBERAL" y "LO NACIONAL" en sentido español. Bien claro lo decía el diputado a Cortes por Navarra, Agustín Armendáriz en las de 1837: "Con esto (traslado de las aduanas) darían las Cortes una prueba del deseo que tienen de que aquellas provincias formen con el resto de la Nación un sólo cuerpo dejando aparte cualquier diferencia que haya podido haber hasta ahora por causa de sus FUEROS... Se habrá dado un paso muy conforme con los deseos de aquellas provincias que por su parte lo que anhelan es formar un cuerpo con el resto de la nación... Así la Monarquía formará un todo compacto y homogéneo" (141).

En resumen, como decía Illarregui: "la cuestión de la traslación de las aduanas a la frontera se consideraba por muchos pueblos de Navarra como cuestión de vida o muerte" (142). Para su clase dirigente, o al menos para el sector más progresivo, sólo la integración en el mercado nacional podía sacarles del estado de postración en que se encontraban.

No pensaban lo mismo aquellos que vivían de su comercio con Francia, pero sobre todo, la gran mayoría de la población fundamentalmente campesina que en un momento de crisis de subsistencias, junto al ascenso de los arrendamientos, la especulación y la usura y la privatización de comunales, veía con el traslado de las aduanas multiplicarse por cuatro el precio de los artículos de primera necesidad.

El asunto de las ADUANAS, junto con otros que veremos a continuación, va a ser un factor más a la hora de tener en cuenta las causas de la escisión de la sociedad navarra a final del Antiguo Régimen.

B.-OLIGARQUIA NAVARRA Y REVOLUCION LIBERAL

Ya hemos apuntado anteriormente la doble perspectiva a tener en cuenta para comprender el proceso de integración de las regiones forales en el Estado liberal español. Proceso que no se explica exclusivamente como una agresión del poder central, sino en el que hay que tener también en consideración la existencia de unas oligarquías locales interesadas en formar parte del mercado nacional y en las reformas que intentaban llevarse a cabo desde el Estado.

Si acabamos de ver el papel indiscutible que los intereses de la nobleza terrateniente y de los grandes comerciantes jugaron en la unificación aduanera, vamos a ver a continuación su postura ante las transformaciones socio-económicas e institucionales que la revolución liberal implicaba y en las que la oligarquía navarra estaba igualmente interesada. En definitiva su opción económica y política estaba en contra del Antiguo Régimen y pasaba por la realización de la revolución burguesa, cuyo marco incues-

tionable era para ellos el Estado español.

a.-TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA

a'.-LIBERTAD DE ARRENDAMIENTO

Desde el siglo XIII que comienza a perfilarse, es el ARRENDAMIENTO la forma más generalizada de explotación de la tierra. Es a través de las rentas arrendaticias como se realiza la distribución de la mayor parte de la renta que se obtiene de la agricultura.

El profesor Artola (143) ha puesto de relieve el enfrentamiento, que por la revalorización de la tierra se agudiza en el siglo XVIII, entre los propietarios de tierras que buscan revisar en alza los contratos y los labradores arrendatarios que tratan de congelarlos. Este conflicto, a juzgar por las huellas documentales que ha dejado, es según el mismo profesor el más importante motivo de tensión de la sociedad del siglo XVIII. Navarra no fue ajena a él y los propietarios navarros a través de su Diputación intentaron sin conseguirlo declarar contrafuero la Real Cédula 6-XII-1785 que ordenaba no se hiciese novedad ni en los arrendamientos ni en los precios. El documento, señala Artola "es una apología del capitalismo liberal que

nada tiene que envidiar a las tesis de los más radicales teóricos del momento" (144).

La solución del conflicto entre propietarios y arrendatarios quedaría aplazada hasta la reunión de las Cortes de Cádiz, llamadas a dirimirlo de forma definitiva en favor de los primeros (145).

La nueva definición burguesa del derecho de propiedad, individual y de libre disposición, considerado como "sagrado e inviolable" supondrá la total libertad del propietario para disponer de la tierra y por consiguiente la libertad de imponer las condiciones y plazos de su arrendamiento. Unido a la extinción de vínculos y mayorazgos convierte a la nobleza terrateniente en propietaria absoluta de unos bienes de los que hasta entonces no era más que "usufructuaria" (146).

Contrariamente a lo ocurrido en Francia, en que la reforma agraria y el reparto de tierras es parte de la obra revolucionaria, en España, la nobleza, debido a la debilidad de la burguesía, va a controlar el proceso de cambio y conseguir convertir sus señoríos en latifundios. Sólo un sector minoritario y la pequeña nobleza rural apoyará a D. Carlos en su intento de mantener el antiguo régimen.

b'.--PRIVATIZACION DE LA PROPIEDAD COMUNAL

Junto a la supresión de vínculos y mayorazgos y la libertad de arrendamiento, las DESAMORTIZACIONES van a completar la configuración de la nueva forma de propiedad territorial liquidando el sistema agrario tradicional. Las desamortizaciones juegan en el paso de la economía feudal a la economía capitalista un papel similar al de las nacionalizaciones o socializaciones en el paso de ésta última a la sociedad socialista. Se trata de la conversión del tipo de propiedad feudal, vinculada y limitada, en propiedad privada burguesa, haciéndola a la vez capaz de entrar en el círculo comercial.

El aumento demográfico y la consiguiente elevación de los precios agrícolas, el descrédito de la Mesta, el problema del aumento de la renta en los arrendamientos y subarriendos rústicos y la tendencia a incrementar la producción agrícola, reforzado por las nuevas teorías económicas de los fisiócratas, convirtieron la "cuestión agraria" en el principal problema del reformismo ilustrado (147). Uno de los puntos centrales que se combatía teóricamente era el de la amortización de la propiedad agraria. Se pensaba entonces que las tierras en poder de la Iglesia, los municipios o de otras "manos muertas" rendían poco, quedaban al margen del libre comercio y se sustraían por el carácter privilegiado de sus propietarios a todo tipo

de tributación en favor de la Hacienda real. La solución era convertirlos en bienes de propiedad privada para que pasasen a depender del "interés individual", motor para las teorías fisiócratas y liberales de todo progreso social.

Sin esperar teorías que lo justificasen, del intento "transformista" de la propiedad comunal en privada hay testimonios en Navarra a lo largo de la Edad Moderna (148). Por las causas señaladas anteriormente, la tendencia se intensifica en el siglo XVIII. El año 1800 la villa de Falces tuvo que llevar a cabo un amojonamiento reivindicatorio contra los vecinos que habían llevado a cabo usurpaciones durante la segunda mitad del siglo (149).

La Guerra de la Independencia, igual que más tarde las Guerras Realista y Carlista, dieron lugar a que la difícil situación económica creada por el aumento de las contribuciones de guerra, fuese aprovechada por aquellos que pretendían reforzar su propiedad privada a expensas de la comunal. Los Ayuntamientos de los pueblos, controlados por las oligarquías locales, en lugar de acudir al reparto vecinal para hacer frente a las nuevas cargas, solicitaron autorización del Consejo Real para proceder a la venta de los comunales.

Aunque está por hacer un estudio completo de esta etapa de privatización de la propiedad municipal, a tra

vés de la obra de Arín y Dorronsoro (150) sabemos que parte de los comunales de Olite, Caparroso, Valtierra, Lerín, Falces... corrieron esta suerte. En algunos casos como Olite, particulares que habían hecho préstamos al Ayuntamiento con garantía de pacto de retro-venta sobre las corralizas del municipio (151) acababan quedándose con ellas. En otros, como en Lerín, se enajena la total propiedad sin condiciones. En varios de ellos, como Falces, se venden las corralizas reservándose el pueblo los derechos de leñar, yesar, extraer piedra y esparto y en algunos otros, la venta se reduce exclusivamente al derecho a "yerbas y agua", con la total prohibición de roturar.

Estas ventas "condicionadas" o referidas exclusivamente a determinados derechos sobre el comunal iban a ser fuente de innumerables conflictos cuando los compradores con mil astucias legales, dignas de la mejor picaresca, y amparados por unos tribunales que fallaron a favor de la propiedad en sentido burgués, convirtan la propiedad de unos derechos sobre el terreno en propiedad absoluta. El movimiento comunero" que se inicia a finales del siglo XIX para la recuperación comunitaria de estas tierras va a hacer de las CORRALIZAS, al igual que en Galicia del "foro" o en Cataluña de la "rabassa", la reivindicación principal del campesinado navarro (152).

Sin embargo, es de sospechar que estas primeras enajenaciones realizadas con ocasión de la Guerra de la Independencia, a pesar de su "legalidad" no contasen con la conformidad de todo el vecindario, que pudieron considerar lo, aunque legal, injusto. Algo debió de haber cuando los compradores quisieron dar a estas compras un reconocimiento más solemne y suplicaron a las Cortes que confirmasen con su placet las mencionadas ventas.

Así lo hicieron en la Ley CXI, las Cortes de 1817-1818 (153). En ella, tras hacer historia de las causas que motivaron las ventas: imposibilidad del vecindario de hacer frente a las contribuciones de la última guerra, y de la forma de llevarla a cabo: con permiso del Real Consejo, piden su reconocimiento. En una primera respuesta el rey acepta, pero con la condición de que los pueblos puedan rescatar las fincas vendidas en el término de cuatro años. Los Tres Estados replican que a fin de evitar inconvenientes y pleitos, los pueblos no puedan rescatarlos. Y así lo decreta el virrey Conde de Ezpeleta.

De que la nueva concepción de propiedad burguesa, individual y absoluta se iba imponiendo entre los hacendados navarros es testimonio la Ley CX de las mismas Cortes (154). Las medidas que defendía iban destinadas al "fomento de la agricultura y conservación del DERECHO DE PROPIEDAD O DOMINIO PARTICULAR", identificando propiedad con pro

propiedad privada y excluyendo las formas tradicionales de propiedad colectiva. Para tratar de "remover los inconvenientes que experimentan los dueños en sus propiedades" se considera necesario "establecer o reformar las ORDENANZAS para el gobierno y custodia de los campos", en las que se recogerán las prohibiciones, penas y modo de formarse los juicios en relación con su seguridad. En esta misma ley se abole cualquier prohibición anterior de "cerrar heredades de propiedad particular", incluso si tuviesen servidumbres de camino, así como cualquier derecho de pasturar en las tierras de propiedad privada o en sus proximidades. Para la custodia de los campos, se crea un cuerpo de GUARDIAS ASALARIADOS, pagados por los propietarios, aunque la exacción y cobranza quedase a cargo de los Ayuntamientos (155).

Tanta precaución para garantizar la nueva forma de propiedad nos hace pensar que ésta no se consolidó sin resistencia y que la conflictividad social que pudo originar es más que probable. Y es que privatizar bienes del común equivalía a sustraerlos a ciertos usos comunales: corte de leña, abono, pasto... y todos aquellos vecinos que no pudieron comprar, y que eran la mayoría, no tuvieron ya derecho a lo que antes era legal y gratuito. Por otro lado, la venta de propios, de cuyo arrendamiento se obtenían fondos para el cupo correspondiente del Donativo, en un momento en que éste aumentaba considerablemente su montante, debería repercutir sin duda en la presión fiscal... A ello

hay que añadir las restricciones a usos comunitarios de la propiedad particular con el derecho al cierre de fincas.

Las Constituyentes de Cádiz se pronunciaron resueltamente contra la propiedad colectiva en la forma tradicional y a favor de la privatización de las tierras concejiles. Por el decreto 4-I-1813 se ordenaba reducir todos los terrenos baldíos o realengos y de propios y arbitrios a PROPIEDAD PARTICULAR PLENA. El decreto no se llevó a ejecución, y fue derogado en 1814 y renovado en forma distinta por las Cortes de 1820 y 1822 con el mismo negativo resultado (156).

La desamortización civil en España tuvo que esperar a la Ley Madoz de 1855. Sin embargo en el País Vasco, zona fronteriza y escenario de sucesivas guerras desde 1793, el endeudamiento producido por ellas, propició la venta de comunales que pasaron a propiedad privada. A título de hipótesis, es muy posible que el conflicto entre los nuevos propietarios y el resto de la población fuese una de las principales causas de enfrentamiento en la crisis que se avecinaba y explicaría en parte la mayor virulencia que la guerra carlista, expresión armada del enfrentamiento, tuvo en el País Vasco. No olvidemos que la contradicción fundamental entre la sociedad feudal y la liberal-capitalista es la que se dio entre sus distintas formas de propiedad y producción y la resistencia fundamental de los

que defendían el antiguo orden de cosas debió de darse en torno a esta realidad (157).

c'. - DESAMORTIZACIÓN ECLESIASTICA

Aunque de la desamortización eclesiástica no tenemos ningún precedente en Navarra durante la Edad Moderna y la lógica de las teorías ilustradas debía incluirla en sus planes al igual que la civil, el inmenso poder económico, social, político, e incluso jurisdiccional (Inquisición) que seguía manteniendo la Iglesia, hizo que los programas ilustrados se contentasen en esta materia en "poner límites a las adquisiciones de manos muertas" (158). Cuando, bajo el gobierno de Godoy la situación crítica de la hacienda hizo necesarias las ventas, éstas fueron objeto de negociación con la Santa Sede y fueron acompañadas de la consiguiente compensación. Es lo que Mutiloa llama "desamortización voluntaria" (159).

La invasión francesa facilitaría la tarea. El Rey José mandó suprimir todas las órdenes religiosas y ocupar sus bienes (160). Las Cortes de Cádiz, una vez expulsados los franceses no impulsaron el restablecimiento de las comunidades religiosas y el Estado conservó en su poder los bienes ocupados por el gobierno intruso (161).

El planteamiento de la desamortización eclesiástica bien pudo suscitar ambiciosas expectativas en Navarra entre aquellos que disponían de dinero, o estaban en posesión de títulos de Deuda Pública utilizables para el pago de la compra de "bienes nacionales" (162), pues en Navarra, a diferencia de Guipúzcoa y Vizcaya, y de manera muy superior a Alava, la Iglesia era riquísima propietaria (163). Por el escaso tiempo con que se contó, ni la desamortización napoleónica ni la de Cádiz tuvieron gran repercusión y la Restauración fernandina trajo consigo la devolución de los pocos bienes vendidos (164). Mayor alcance tuvo la llevada a cabo en el Trienio Liberal (1820-1823), aunque al finalizar el mismo, los bienes, salvo los pertenecientes a la Orden de San Juan de Jerusalén, fueron también devueltos a sus anteriores dueños.

Si el clero, sobre todo el regular iba a ser el gran perdedor de la desamortización y ya en la guerra Realista, los monasterios se convierten en centros de conspiración antiliberal, las consecuencias que para la mayoría del campesinado tuvo no son difíciles de imaginar. La Iglesia apenas explotaba directamente sus tierras, sino que utilizaba el sistema de arrendamiento y en menor medida el de aparcería, y aunque tampoco estuvo libre de conflictos con sus arrendamientos (165), es de suponer que sus condiciones no fuesen peores que las que imponía la nobleza terrateniente. Al no poder acceder los colonos a la propie-

dad, pasaron a depender de los nuevos propietarios, "ricos capitalistas que inmediatamente procederían a un nuevo arriendo, generalmente aumentando la renta al pobre labrador, amenazándole con el despojo en el caso de que no la pagase puntualmente" (166).

Pudo ser posible, lo que señala Mutiloa, para Navarra: "no hubo municipio donde el enfiteuta o arrendatario no presenciare con cierto pesar y estupor, cómo las tierras que por lustros, décadas y siglos habían usufructuado la familia, pasaban a manos de especuladores, medianos propietarios y gente adinerada" (167).

Libertad de arrendamiento, privatización de comunales, desamortización eclesiástica: he aquí cómo las nuevas formas de propiedad agraria, al igual que en el resto de la península, eran un motivo más de escisión de la sociedad navarra con anterioridad a la Guerra carlista.

La crítica a la obra desamortizadora va a ser una constante que el carlismo utilizaría con indudable oportunismo. Todavía en 1905, en un artículo titulado "Má-nos Vivas", se podía leer en "El Pensamiento Navarro" diario carlista lo siguiente: "Se puso la mano "viva" en la propiedad de los pobres: se arrebató a la Iglesia, a los Hospitales y Centros de enseñanza los bienes de que se sostenían; se vendieron los "propios" a cuya sombra y amparo tantos pobres subsistían y todo se lo comieron los "regene

radlores", los que subieron entonces de la golfería de la pluma y el garito a los títulos y marquesados...Nentira y sarcasmo que la Revolución se hiciese o aprovecharse al pueblo...;Cuántas diatribas contra la mano muerta escribieron en su tiempo los"vivos" liberales que sonaban lo bien que les vendrían para satisfacer su ambición las propiedades de la Iglesia de la que tantos pobres se sustentaban (168)!

b.-LEGISLACION LIBERAL EN LAS CORTES DE 1817-1818.

Que los principios económicos liberales y las reformas que estaban en el programa de la oligarquía navarra a final del antiguo régimen queda bien claro al analizar la legislación de las Cortes de 1817-1818.

Ya hemos visto cómo en las leyes CX y CXI se trató de reforzar la legalidad de las ventas hechas por los pueblos durante la Guerra de la Independencia y de buscar medidas que absolutizasen y garantizasen la libre propiedad de la tierra.

Para favorecer este nuevo tipo de propiedad individual, la ley LIII va destinada a "evitar la AMORTIZACION y precaver que no se extraiga de la libre circulación la numerosa porción de fincas productivas que por efecto de dichas fundaciones (mayorazgos) quedan en efecto amortiza-

das en perjuicio notorio de la agricultura y la población". Junto con la prohibición de nuevas fundaciones de mayorazgos se condiciona la subsistencia de los existentes a la percepción de una renta superior a los 1.000 ducados (169).

La preocupación por garantizar la propiedad capitalista se recoge en las leyes XXXVII y XXXIX, estableciendo un Oficio (registro) de Hipotecas en la primera y tratando de articular medidas para que los acreedores del Rei en los expedientes de Vinculo y Caminos tengan asegurado el cobro de sus créditos y el reintegro en su momento, en la segunda (170).

También se trata de remover las barreras que impiden la libre contratación y la libertad de industria y comercio. La ley XXX se pronuncia contra las costumbres que limitan la jornada laboral "de los que se alquilan para hacer labores" y defiende la jornada desde "por lo menos cuando saliere el sol...y no vuelvan a sus casas hasta que se ponga". En el mismo sentido la ley XXXI suprime todas aquellas leyes ordenanzas y estatutos que atribuyan a los regidores y alcaldes de fijación de jornales, pues "es absolutamente imposible graduar el verdadero justo valor de las cosas, que están sujetas a las vicisitudes de los tiempos, lugares y otras circunstancias"; y además: "el señalamiento de precio ataca el derecho de propiedad y enerva la industria que debe fomentarse por todos los medios

posibles (171)". En estas leyes se perfilan ya las nuevas relaciones laborales liberales basadas en la libertad de contratación.

Estas medidas se complementan con otras disposiciones destinadas a aumentar la disponibilidad de puestos de trabajo, que naturalmente tenderán a hacer bajar los salarios. La ley LXXIX trata de combatir la mendicidad y reducirla a aquellos imposibilitados para el trabajo y estén en posesión de una "cédula de pobreza" expedida por el párroco y con licencia del alcalde (172). Y la ley XLVIII no hace más que elevar a esta categoría las de la Novísima Recopilación de España que abolen cualquier ordenanza que se opusiere a la total libertad de trabajo de las mujeres y niñas (173).

La justificación "filantrópica" no falta para unas medidas que tenían una finalidad bastante más interesada. Así en la ley que pide la jornada laboral "de sol a sol" se dice que con ello se evitará la corrupción de los jornaleros que tantas horas libres pasan en la taberna; en esta ocasión, el trabajo de las mujeres además de la ganancía que supone para ellas y la oportunidad de que los hombres "se dediquen a operaciones más fatigosas que no alcanzan las fuerzas mujeriles", lo más importante que se consigue con ello es "libertarlas (a las mujeres y a las niñas) de los graves perjuicios que ocasiona la ociosidad".

Las leyes XLV, XLVI y XLVII incorporan igualmente la legislación castellana que sin abolir los gremios combate aquellas ordenanzas "perjudiciales al fomento de las propias manufacturas y al fomento de la Industria Nacional". De esta forma, conceden a todos los fabricantes de tejidos "absoluta libertad para tener los teladores que puedan y les convenga, sin limitación de número", y la libertad para "inventar, imitar y variar los tejidos según tengan por conveniente"; a las viudas que se casan con quienes no sean del oficio del anterior marido, se les facilita para conservar sus tiendas o talleres (174). La ley establece una serie de ventajas para animar a los fabricantes extranjeros, sobre todo de tejidos, a establecerse en el reino (175); y la libertad de residencia y ejercicio de la profesión en la ciudad de Pamplona de médicos, cirujanos y boticarios (176).

Respecto al comercio, se legisla sobre la libertad de tráfico y de precios (177), se derogan aquellas leyes de la Novissima Recopilación que se oponen al tráfico de marchantes y buhoneros (178), así como las que prohíben la compra de animales para la reventa, pues "son contrarias al interés individual que sólo se debilita por la concurrencia que nace de una justa libertad" (179)". Por la ley LVI cesan los derechos que alcaldes y regidores cobraban sobre las ventas de comestibles (180), y la ley LCVIII establece el libre comercio interior de granos, no consi-

guiendo en cambio su libre extracción (181).

Libertad de industria, libertad de comercio, libre concurrencia, libertad de contratación, derecho sagrado de propiedad privada, interés individual...La clase dominante navarra apostaba por el LIBERALISMO

c.-CADUCIDAD DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

El sistema institucional había dejado de ser funcional para las fuerzas sociales comprometidas con la transformación de la sociedad: por un lado, la burguesía comercial, reforzada con los grandes beneficios que las guerras les había procurado a los suministradores de los ejércitos; por otro, una nobleza terrateniente, que como demostró en la primera guerra carlista optó por el nuevo orden liberal, cediendo lo que le quedaba de sus privilegios feudales, para convertirse en burguesía agraria y liberalizar su propiedad. Solamente el estamento eclesiástico no estaba interesado en el nuevo orden de cosas, y si en el resto del estado va a ser el principal baluarte del antiguo régimen, en Navarra tenía todavía más motivos para serlo. Además de sus inmensas propiedades amenazadas por la desamortización, la abolición del diezmo, la pérdida del control sobre la enseñanza y la beneficiencia...perdía su preeminencia política. El obispo de Pamplona presidía

las Cortes y la Diputación del Reino y por el funcionamiento estamental de aquellas, el Clero ejercía un control absoluto sobre las decisiones (182).

No podemos saber por su carácter de secretas, y las tensiones entre estamentos que pudieran haberse dado en las deliberaciones de las Cortes, pero el distinto posicionamiento de Nobleza y el Clero tanto en la Guerra Realista (1822) como en la Carlista, nos hace pensar en que sus puntos de vista no eran coincidentes. En tal situación, unas Cortes estamentales, en las que el Clero tenía derecho a veto eran un obstáculo institucional para los sectores más interesados en las transformaciones que se estaban operando. ¿Cómo se hubiera podido llevar a cabo la desamortización eclesiástica con el beneplácito de los abades de los monasterios que eran mayoría en su estamento?

En la representación que en 1781 se manda al Rey tras el fracaso de la votación a favor del traslado de las aduanas (183), se deja entrever una crítica al sistema institucional, pues, según la misma, el fracaso "resultó más bien del método peculiar de hacerse en cada brazo la votación separada que del excelso de pluralidad que pudiese tener la negativa en el total del Congreso". Por estamentos sólo la nobleza votó masivamente a favor, pero de haber funcionado inorgánicamente el resultado hubiera sido el opuesto por 38 votos contra 32.

En la misma representación hay una crítica implícita a la desigual representatividad de las villas y ciudades con asiento en Cortes. Así, al intentar demostrar al rey el interés del traslado argumentan que "aunque de las 34 que se compuso el brazo de Universidades los 21 explicaron igual oposición, es disputable el valor de algunos de estos sufragios y muy digno de notarse que a excepción de la ciudad de Pamplona, el total de vecindario de las repúblicas opuestas apenas equivale a una décima parte de la población del reino" (184). La protesta no deja de tener fundamento: que el voto del representante de Zúñiga con 34 fuegos o el de Larrasoña con 43 tuviese el mismo peso que el del de Tudela que representaba 1.530 fuegos, no parecía justo en aquellos momentos que ya se iban imponiendo criterios individualistas. Es de sospechar, además, que la representación de las pequeñas villas recayese en la pequeña nobleza rural, sobre todo en la "Zona Media" (merindades de Aoiz y Estella, Cuenca de Pamplona) caracterizada por la división de la propiedad, zona de policultivo y de economía de subsistencia con escasa comercialización (185). Estos pequeños "jauntxos", que no tenían problemas de excedentes agrarios ni posibilidad de acumulación, que se beneficiaban como consumidores del libre comercio con Francia y que veían en peligro su estabilidad con la supresión de mayorazgos, iban a defender el orden de cosas tradicional y cuando en 1822 y 1833 se planteó de forma violenta el

conflicto entre el antiguo regimen y el estado liberal, pasarán a ser los cuadros militares del ejército realista primero y del carlista después. Es comprensible su enfrentamiento con los representantes de las más populosas villas del sur, centros de comercialización de productos agrarios dependientes del mercado peninsular, y que en los últimos tiempos pertenecían con frecuencia a la nueva clase de comerciantes que se iba formando (186).

Respecto a la organización municipal foral, se observa en los últimos años del siglo XVIII y primeros de XIX, el interés en hacerla más aristocrática. Ya en las Cortes de Sangüesa de 1642, y por haberse experimentado diferentes disturbios se concede que se traten en VEINTENA los asuntos que venían siéndolo por la Junta de Insaculados (187). A lo largo del siglo XVIII son muchos los pueblos que solicitan lo mismo, y por la ley XXVII de las Cortes de 1794 "todos los pueblos del Reino que compongan el número de 100 vecinos y resuelvan sus negocios en Consejo, los determinen por VEINTENA".

Esta tendencia a limitar la participación popular, la justifican en base a que "por los alborotos que regularmente ocurren, no se vota con libertad, se falta al respeto debido a los del Ayuntamiento y el número mayor que suele ser de la gente popular, vence y dexa sin efecto los dictámenes de los más instruidos...(188)" En el mismo

sentido por la ley LX de las Cortes de 1817-1818, se establecen QUINCENAS en pueblos compuestos de 80 vecinos y ONCENAS en los que lleguen a 50, en sustitución del Consejo; y en las Cortes de 1828-1829 se intenta elevar las condiciones para ser insaculado para los cargos de alcalde y regidor; y aunque no es aceptada la petición deja al descubierto la intención y confirma la tendencia de hacer más aristocráticos los órganos municipales.

Todo ello, refuerza la hipótesis anteriormente apuntada sobre la existencia de unas relaciones más bien conflictivas entre los distintos sectores sociales del municipio.

Si el control de la administración municipal siempre pudo interesar, en este momento, debido a las tendencias "transformistas" de la propiedad colectiva municipal, en propiedad privada, era decisivo, y muy bien pudo girar en torno a este asunto la base del conflicto.

En definitiva, la clase dominante navarra no sólo no estaba interesada en la defensa de unas instituciones que no controlaban del todo, sino que su interés pasaba por su desaparición; y la prueba es que cuando en 1841 el poder central estaba dispuesto a respetar el sistema municipal foral de las insaculaciones, prefirieron acogerse al liberal censitario, posiblemente más selectivo (189).

I.5.B.d.-LOS NAVARROS Y EL APARATO POLITICO DE LA MONARQUIA

A las razones que acabamos de enumerar y analizar, hemos de añadir una última, que va a contribuir a facilitar la tarea asimiladora e integradora de Navarra en el Estado central. Se trata de la presencia de navarros en todo el aparato político, militar y financiero del Estado, que sin desligarse de su tierra de origen, incluso manteniendo posiciones de poder en ella, hicieron su carrera en la "corte" y medraron a la sombra de la Monarquía.

Una vez realizada la unión a Castilla, la nobleza navarra, se va a integrar progresivamente en el aparato militar y burocrático de los Austrias "aportando Navarra todo el esfuerzo de su aristocracia a las magnas empresas de los monarcas austríacos, siendo Italia, Flandes y América los principales teatros en que se probó su pericia y su esfuerzo a la vez que la fidelidad a sus nuevos soberanos, acreditada en el desempeño de altos puestos de confianza como los de secretarios y Tesoreros de los Reyes en que tanto se distinguieron los Vallés, Ezquerras, Oscáriz y otros muchos" (190).

Con los monarcas de la casa de Borbón "sigue la nobleza navarra prestando toda su cooperación a las campañas y expediciones españolas, llegando muchos de sus individuos al Generalato de los Ejércitos, Gobiernos de las co-

lonias y Virreinos de las extensas posesiones americanas, en las que destacan las bizarras figuras de los Granadas, Sadas, Montesas, Ezpeletas, Guiriores y tantos otros como sostuvieron y aumentaron la gloria de su patria" (191).

J. Ibarra, en su obra "Ilustres navarros del siglo XVIII" recoge el nombre de muchos navarros que cuando consiguen un título o un alto cargo de la Corona, lo comunican a la Diputación del Reino demostrando su interés por la tierra natal. Su enumeración sería larga. Proceden de toda la geografía navarra y ocupan los más diversos puestos, desde Tenientes Generales de la Marina hasta cargos en la Inquisición, pasando por virreinos en Indias, secretarías de Estado y consejos de la Cámara de Castilla (192).

Pero son los estudios de J. Caro Baroja: "La hora navarra del XVIII y de Alfonso de Otazu: "Hacendistas navarros en Indias" Los que mejor han recogido esta realidad (197) A ellos seguiremos en las páginas que siguen.

La falta de recursos, el régimen hereditario, la limitación del derecho de vecindad en los valles del Norte de Navarra, sobre todo del Baztán, facilitado por la existencia de la "hidalguía universal" iban a ser las causas que explicasen el fenómeno "migratorio" de segundones de la nobleza o hidalgos en decadencia, que a través de la carrera de armas, administrativa o comercial consiguieron situarse en la élite financiera, burocrática y militar del

Estado.

La obra de Otazu, nos presenta la trayectoria ca si generalizable de los navarros que optaron por la "carrera de Indias". Casi todos la comenzaban en las Milicias. El segundo paso era un alto cargo administrativo, llegando hasta el virreinato. Una acreditada firma de negocios solía ser la salida para el funcionario "defenestrado" por su avidez pecuniaria. Una boda "importante", el retorno al lugar de nacimiento, donde adquiría tierras y censos y fundaba un mayorazgo, y el "marquesado" como culminación de su carrera (193).

Si Iglesia, Milicia y Casa Real eran las tres vías oficiales de "medrar" en el antiguo régimen, según Caro Baroja: "la Casa Real desempeña en nuestro mundo vasco-navarro un papel primordial porque los hombres más destacados del grupo que estudiaremos fueron secretarios, tesoreros, hombres de confianza de los reyes en proporciones insospechadas" (194).

"Mucho antes de que se combatieran los prejuicios nobiliarios contra el comercio y los oficios, que como señaló el Padre Larramendi, eran fortísimos en Castilla la gente del Norte actuaba libremente de ellos...comerciando y acumulando hábitos y títulos nobiliarios a la par" (195). "En esto, como en tantas otras cosas los vasco-navarros se separaban de los castellanos y no se ajustaban al

molde del hidalgo español tan traído y llevado por propios y extraños para simbolizar el orgullo unido a la abulia" (196).

"Así como en tiempos de Felipe IV los asientos y administraciones de rentas se reparten sobre todo entre los hombres de negocios genoveses de un lado y los de origen judeo-portugués de otro, en la época de Felipe V hay un curioso predominio de navarros y dentro de Navarra de los de determinada zona" (197). Llegan casi todos a Madrid sin grandes medios de fortuna y entre 1710 y 1740 se colocan a la cabeza del capitalismo peninsular" (198). Los Goyeneche, Iturralde, Muzquiz, Arizcun, Garro, etc... son nombres ligados a esta "hora navarra de XVIII". Todos ellos por lo general, no se desligan de su lugar de origen, donde levantan una casa suntuosa al estilo del país, adquieren tierras, fundan mayorazgos y algunos consiguen convertir su casa en "cabo de armería" con asiento y voz y voto en Cortes. Al igual de los que hicieron su fortuna en América, un título nobiliario es la culminación de su espectacular carrera (Condes de Goyeneche, Saceda, Marqueses de Iturbietta, Ugena, Gausa, Belzunce, Murillo, Ustáriz...).

Junto a América y la Corte, Cádiz, por su intensa vida comercial fué el tercer lugar elegido preferentemente para instalarse por este grupo de navarros emprendedores. José María Azcona escribió una nota respecto a la

importacia económica de los navarros en Cádiz durante los siglos XVIII y XIX: Mendiñetas y Núzquiz de Elizondo, Isturiz (padre del ministro) de Pamplona, Irazoqui de Vera, Aguado de Corella, Yoldi de Barasoain... Se dedican en su mayor parte a negocios bancarios y al comercio con América (199).

"El caso de la nobleza navarra, -comenta Utazu (200) -es el más claro ejemplo de un cuerpo social que dotado de un especial poder político (el llamamiento a Cortes) sirve al Estado en un doble sentido: 1º) para colmar las ansias de ascenso de los grupos preponderantes en lo económico no nobles y 2º) como vehículo especialmente dotado para recoger adhesiones a la Administración Central..."

Pero no sólo es de tener en cuenta aquellas personalidades que consiguieron destacar y cuyos nombres y apellidos han pasado a la historia. En otros escalones inferiores del funcionariado: recaudadores, contables, escribanos... lo mismo en Madrid que en Sevilla que en Cádiz o Indias se pueden encontrar a navarros en particular y a vascos en general en proporción superior a los procedentes de otros lugares de la Monarquía, lo que no dejará de levantar suspicacias en Castilla (201). En 1776, cuando la Diputación del Reino intenta eximir a los navarros de la quinta decretada por el gobierno, entre las razones que da, unas "forales", otras económicas, habla también de la "dificultad de encontrar individuos sobrantes", pues "todos

aquellos individuos con que pudiera dar muy vasto cumplimiento a las reales intenciones de V.M. desde que llegan a su edad correspondiente los remite y tiene ya empleados en el servicio y demás dominios de V.M. de que pueden dar bastante testimonio las Américas, el ejército, la armada y todos los ministros y provincias de V.M." (202).

Este fenómeno, que no es privativo de Navarra y que se extiende a las cuatro provincias vascas, esta "integración social real" de un sector de la oligarquía vasca en el aparato político y financiero del estado es un factor más a tener en cuenta a la hora de comprender las facilidades, que sobre todo en Navarra se dieron a la renuncia de su orden institucional foral.

A modo de conclusión de todo lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar que a pesar de que tras la incorporación de Castilla, Navarra permaneció "Reino de por sí", el acontecimiento trajo consigo transformaciones decisivas; la fundamental: la transferencia del centro de decisiones políticas fuera del Reino y por consiguiente, la ausencia de una política propia y la dependencia de la marcha general de la Monarquía. Si los reinos fueron las unidades políticas medievales, la Monarquía como unión de los diversos Reinos, Principados y Señoríos que obedecen al mismo rey, será la nueva forma política que surge y se perfec

cional en la Edad Moderna con carácter estatal (203); y aun que la referencia a una única Monarquía indica la unidad de imputación en la cumbre a favor del rey o monarca, no excluye la variedad en el ejercicio del poder a través de organismos más o menos autónomos en los distintos territorios que la componen (204). La existencia de los regímenes forales no cuestiona la soberanía del monarca; de la misma manera que no lo hacen los distintos fueros de la nobleza, del clero, de las órdenes militares o de las ciudades en una sociedad caracterizada por la desigualdad jurídica.

El rey era tan absoluto en Castilla como en Navarra, y si según la doctrina foral el poder legislativo residía en las Cortes con el rey, todo lo podía el rey sin las Cortes y nada las Cortes sin el rey. No obstante no ser un auténtico legislativo, las Cortes de Navarra como asambleas representativas eran un indudable instrumento de presión sobre el monarca, que limitaban de hecho su poder y hacían necesaria la negociación más por razón política que por exigencia legal. Este instrumento de presión era utilizado fundamentalmente a la hora de otorgar el "donativo" consiguiendo mantener en el Reino una presión fiscal excepcionalmente baja (205).

Cuando en el siglo XVIII la oligarquía navarra planteó la necesidad de reformas en sentido liberal, el marco de referencia será para ella el de la Monarquía y

no el de el viejo Reino; y es que el marco foral no era un marco económico ni político autónomo; por encima de las peculiaridades político-administrativas, existía una unidad económica y política diferenciada estatalmente. El ilustrado navarro Marqués de San Adrián al hablar de NACIÓN como nuevo sujeto político, no se refiere a Navarra, sino a todo el ámbito de la Monarquía: a la NACIÓN ESPAÑOLA (206).

Por otra parte, el finalizar el Antiguo Régimen, la sociedad navarra aparece escindida ante el proyecto liberal. Mientras la oligarquía, fundamentalmente la nobleza terrateniente apoya las nuevas formas de propiedad y producción agrarias y la integración en un mercado nacional; campesinado, pequeños comerciantes de la capital, pequeña nobleza rural y clero, se resisten a unas transformaciones que deterioraban sus condiciones de vida o atentaban contra sus privilegios.

La Guerra de la Independencia que acelera la crisis del Antiguo Régimen y precipita las reformas será el campo de pruebas donde Navarra dejará constancia una vez más, de su falta de independencia política y de su pertenencia a la Nación Española.

NOTAS

- (1) J. YAGUAS Y MIRANDA: Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1964, tomo I, pág. 417.
MARICHALAR, Amalio, y MANRIQUE, Cayetano: Historia de la legislación de España, reeditado por Aunamendi el tomo VIII como Historia de los Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, San Sebastián, 1971, pág. 119.
ILLARREGUI, Pablo: Memoria sobre la ley de la modificación de los fueros de Navarra, Pamplona, 1871. Reeditada por la Diputación Foral de Navarra en Temas forales, Pamplona, 1966, pág. 39.
- (2) Empleo aquí la palabra Estado en el sentido que le da Mitteis: "Ordenación de un pueblo para la consecución de sus fines políticos. En este sentido cabe considerar como Estados a las comunidades políticas feudalizadas de la Edad Media". Luis GARCIA DE VALDEAVELLANO: Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Revista de Occidente, 2ª edición, pág. 419.
Sobre la distinción entre el empleo genérico de la palabra Estado como forma de dominación política o su utilización para designar a la estructura jurídico-política que surge en la sociedad europea renacentista, véase LUCAS VERDU: Curso de Derecho Político, II, Tecnos, Madrid, 1972, pág. 64.
- (3) M. GARCIA PELAYO: La idea medieval del derecho, pág. cit. por J. J. SOLOZABAL: El primer nacionalismo vasco, Tucur, Madrid, 1975, pág. 221.
- (4) L. GARCIA VALDEAVELLANO: op. cit. pág. 424 y ss.
- (5) L. GARCIA VALDEAVELLANO: op. cit, pág. 466.
- (6) Ibid., pág. 469.

- (7) LUCAS VERDU: "El poder estatal se alimenta de "carne política" (HAURIOU), op. cit. pág. 73.
- (8) LUCAS VERDU: op. cit. pág. 115. Por otra parte, el distinto proceso de construcción del Estado moderno que tiene lugar en Inglaterra y Francia, iba a condicionar la forma de realizarse posteriormente la revolución burguesa. Mientras en Inglaterra, el parlamento medieval no había desaparecido y pudo darse una evolución y transformarse en parlamento moderno, en Francia, donde se habían barrido las instituciones medievales, fue necesario hacer tabla rasa para construir el nuevo orden político liberal.
- (9) J. H. ELLIOT: La España Imperial 1469-1716. Ed. Vicens Vives, 1965, 3ª ed., 1970, pág. 83.
- (10) ELLIOT: op. cit. pág. 20.
- (11) J. A. MARAVALL: Las comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna, Revista de Occidente, Madrid, 1963.
- (12) YANGUAS Y MIRANDA: La contragerigonza. 1833. Reeditada por la Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1966, pág. 122.
- (13) Fuero General de Navarra. Edición realizada conforme a la obra de D. Pablo ILARREGUI y D. Segundo LAPUERTA. Año 1869. Reeditado por la Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1964.
- (14) YANGUAS Y MIRANDA: Diccionario...I, pág. 429.
- (15) ELLIOT: op. cit. pág. 215: "La Corona de Aragón pagaba al final del reinado de Carlos V poco más que en los primeros años del mismo, aunque durante este tiempo los precios hubiesen aumentado más del doble".
- (16) ELLIOT: op. cit. pág. 215.

- (17) N. RAMIRO RICO: Breves apuntes críticos para un futuro programa moderadamente heterodoxo del Derecho Político y de su muy azorante enseñanza, R. O. P., Madrid, 1974, pág. 182. Cit. por SOLOZABAL: op. cit. pág. 222.
- (18) L. SANCHEZ AGESTA: Historia del constitucionalismo español, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, 2ª edición, pág. 61: "Con un extraño espejismo, según la fina calificación de Menéndez Pelayo, Mz. Marina quería descubrir el antecedente de esta Constitución en las instituciones de la Baja Edad Media castellana ... Para Mz. Marina hay una coincidencia entre la tradición política española y los nuevos principios revolucionarios".
- (19) J. CORCUERA: Orígenes del nacionalismo vasco: supuestos ideológicos y socioeconómicos (1876-1903). Tesis doctoral. Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, junio, 1978, pág. 104.
- CARO BAROJA: Los vascos y la Historia a través de Garibay, pág. 325: "El pueblo vasco ha sufrido acaso más que ninguno de la península interpretaciones violentadas de su historia hechas por tirios y troyanos..." Y en el mismo sentido MARICHALAR y NANRIQUE o.p. cit. pág. 208: "De aquí la terminante necesidad de prescindir casi por completo de la mayor parte de las obras que con miras esencialmente políticas se han escrito en estos últimos tiempos, cuando tanto ha dominado a los escritores la pasión y las opiniones de los bandos en que desgraciadamente nos hemos visto divididos. De aquí la necesidad de acudir a las fuentes...
- (20) M. P. HUICI: Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. Príncipe de Viana. Ed. Rialp, Madrid, 1963, pág. 137.
- (21) AGN. Actas de Cortes, T. II folios 913-14. Cit. por C. RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones de Navarra con la Administración Central (1778-1808), Príncipe de Viana, Pamplona, 1974, pág. 44.
- (22) CUADERNOS DE LAS CORTES DEL REINO DE NAVARRA, 2 vols. Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1964, II, pág. 536.
- (23) P. LUCAS VERDU: op. cit. pág. 116.

- (24) MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit. pág. 228
- (25) Obras que corroboran esta afirmación:
J. ARGANASILLA DE LA CERDA: Nobiliario y Armería General de Navarra, Madrid, 1899.
J. CARO BAROJA: La hora navarra del XVIII, Príncipe de Viana, Pamplona, 1969.
A. DE OTAZU Y LLANA: Hacendistas navarros en Indias, Bilbao, 1970.
J. IBARRA: Biografías de Ilustres Navarros del siglo XVIII, Pamplona, 1952.
- (26) MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit. pág. 233: "... el gobierno de Castilla influía poderosamente en los dos brazos, noble y eclesiástico..."
- (27) L. GARCIA DE VALDEAVELLANO: op. cit. pág. 449.
- (28) ELLIOT: op. cit. pág. 84.
- (29) YANUAS Y MIRANDA: Diccionario... III, pág. 178
- (30) J. ALONSO: Recopilación y comentarios de los fueros y leyes del Antiguo Reino de Navarra, Madrid, 1848. Reeditada por Instituto Príncipe de Viana, Pamplona, 1964, 2 vols. I, pág. 40.
- (31) GARCIA DE VALDEAVELLANO: op. cit. pág. 458.
- (32) J. J. SALCEDO IZU: El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, Príncipe de Viana, Pamplona, 1964, pág. 362.
- (33) Ibid. pág. 264.
- (34) ILARREGUI: op. cit. pág. 33.
- (35) J. M. LACARRA: Estructura político-administrativa de Navarra antes de la Ley Paccionada. Revista Príncipe de Viana nº 92-93, Pamplona, 1963, pág. 240.

- (36) PASCUAL MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico histórico de España. 16 vols. Madrid 1845-1850, T. XII, págs. 114-115.
- (37) NOVISIMA RECOPILACION DE LAS LEYES DEL REINO DE NAVARRA (1512-1716). 3 vols. Editada por la Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1964, I, pág. 232, libro I, título IV, ley VII.
- (38) YANGUAS Y MIRANDA: Análisis histórico crítico de los Fueros de Navarra, Pamplona, 1838, pág. 19.
- (39) MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit. pág. 231.
- (40) SALCEDO IZU: op. cit. pág. 263.
- (41) YANGUAS Y MIRANDA: Análisis... pág. 19.
- (42) LACARRA: op. cit. pág. 241.
- (43) ILARREGUI: op. cit. pág. 32.
- (44) ibid. pág. 33.
- (45) Exposición de la Diputación a las Cortes. En J. R. CASTRO: YANGUAS Y MIRANDA, Pamplona, 1963. Apéndice nº III, pág. 193 y ss.
- (46) GARCIA DE VALDEAVELLANO; op. cit. pág. 484.
- (47) ibid. pág. 472.
- (48) ibid. pág. 484.
- (49) MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit. pág. 209.
- (50) Tomás MORAL O.S.B.: El monasterio de Leyre en el último período de vida cisterciense (1800-1836), Revis-

ta Príncipe de Viana nº 118-119, 1970. La fórmula empleada el 12-X-1800 era la siguiente: "D. Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, Navarra... por cuanto yo soy patrono de los cinco conventos de Fitero, La Oliva, San Salvador de Leyre, Iranzu y Marcilla de la orden de San Bernardo en mi reino de Navarra... nombro el abad..." (pág. 80).

- (51) J. GOÑI GAZTAMBIDE: La Diócesis de Pamplona en 1814 vista por su obispo. Revista Príncipe de Viana nº 128-129, año 1972, pág. 347.
- (52) S. OLAVE DIEZ: El pacto político como fundamento histórico general de la nacionalidad española y especialmente como manifestación legal de la soberanía independiente de Navarra en unas épocas y en otras de su autonomía sin perjuicio de la unidad nacional, Madrid, 1878. Reeditada por la Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1966, pág. 219. Sobre este particular ver también MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit. pág. 189 y ss.
- No se puede estar de acuerdo con el calificativo de NECIO que da Olave a los que "compraban nobleza". Si en 1878 cuando escribe Olave, la nobleza se reducía a ser un símbolo de prestigio social, en el Antiguo Régimen suponía un fuero especial que incluía entre otras cosas exenciones fiscales y una justicia más benévola.
- (53) HUICI: op. cit. pág. 391. Yanguas y Miranda en su Diccionario de Antigüedades, op. cit. I, pág. 246, da una lista de 55 títulos y 80 casas con asiento en Cortes por orden alfabético.
- (54) En las Cortes de 1817-18, los asistentes fueron 42 y sólo se citan a 5 como ausentes. En: Cuadernos de las Cortes del Reino de Navarra: op. cit. vol 2º, pág. 189. El cuaderno de las últimas Cortes de 1828-29, no incluye la lista de asistentes.
- (55) HUICI: op. cit. pág. 86 y ss.
- (56) MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit. pág. 189.

- (57) F. IDOATE: La Comunidad del Valle de Roncal, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1977, pág. 55 y ss. El Valle de Roncal venía solicitando asiento en Cortes desde 1607. En 1785 le vuelve a ser denegada su solicitud. Aparte de las razones particulares que se le dan: no haber personas de distinción, ir vestidos de "roncal" sin capa y con abarca, el uso del vascuence... las razones de más peso parecen ser las de "no abrir brecha y sentar precedentes que pudieran animar a otros valles a hacer lo mismo, comenzando con los fronterizos, ya que nadie se cree con menos méritos y derechos que el vecino... Y por otra parte: había demasiadas personas con este derecho dentro del Reino, en perjuicio de las Cortes, ya que se alargaba la solución de los asuntos y se complicaban más las cosas.
- (58) MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit. pág. 190.
- (59) HUICI: op. cit. pág. 392.
- (60) Tal es el caso de los Guirior y Ayanz que en las Cortes de 1817-18 representaron a Aoiz y Sangüesa respectivamente. Cuadernos de Cortes... op. cit., pág. 189.
- (61) HUICI: op. cit. pág. 98 y ss. El método consistía en introducir en distintas bolsas para los distintos cargos municipales los nombres de las personas que reuniesen las condiciones exigidas para los mismos, distintas según se tratase de alcaldes, regidores o jurados. En el momento de la renovación o cuando hiciese falta cubrir alguna vacante, se sacaba de las bolsas correspondientes los turnos necesarios. Sobre las condiciones exigidas, se hablará más adelante. Este llegó a ser sistema generalizado para todos los municipios de Navarra, a excepción de algunos de escasa población que se regía por concejo abierto o asamblea de todos los vecinos, y el ayuntamiento de Pamplona, que debido al Privilegio de la Unión con que terminó la Guerra de los Burgos se renovaba por cooptación: los concejales salientes nombraban a los entrantes (MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, Madrid, 1845-1850, t. 12, pág. 115).
- (62) L. OROZ: Legislación Administrativa de Navarra, Pamplona, 1917, tomo I, pág. 42.
Sobre las condiciones exigidas con anterioridad a 1828 ver: R. RODRIGUEZ GARRAZA: Navarra de Reino a

Provincia (1828-1841). Príncipe de Viana, Pamplona, 1868, pág. 82. Para ser insaculado era necesario tener 25 años y una renta (no patrimonio) de 150 duros para ser alcalde, y de 60 para ser regidor en los pueblos de más de 600 habitantes. Como se ve, las Cortes de 1828-29 pretenden hacer más aristocrática la elección.

- (63) YAGUAS Y MIRANDA: Diccionario... I, pág. 251. Estas ciudades por merindades eran las siguientes: AOIZ: Aoiz, Sangüesa, Lumbier, Monreal, Larrasoña, Urroz, Aibar y Cáseda. ESTELLA: Estella, Viana, Aguilar, Zúñiga, Los Arcos, Torralba y Espronceda. PAMPLONA: Pamplona, Puente, Huarte-Araquil, Echarri-Aranaz, Lacunza, Lesaca, Santesteban, Villava, Echalar y Goizueta. TAFALLA: Tafalla, Olite, Mendigorriá, Miranda y Artajona. TUDELA: Tudela, Villafranca, Corella, Valtierra, Cascante, Cintruénigo, Arguedas y Cortes. Cada una de estas ciudades tenía un sólo voto en Cortes, aunque Aoiz, Estella, Tafalla y Tudela tuviesen derecho a mandar dos representantes y Pamplona tres.
- (64) YAGUAS Y MIRANDA: Diccionario... I, pág. 431 y ss. Recoge el apeo general de la población de Navarra por ruegos o vecinos hecho en las Cortes de los años 1817-18 con vista de las matrículas parroquiales que se presentaron y sirvió para el repartimiento del donativo otorgado en las mismas cortes.
- (65) HUICI: op. cit., pág. 114.
- (66) Ibid. pág. 117.
- (67) Ibid. pág. 134.
- (68) El encabezamiento de las leyes era el siguiente: "Los tres Estados de este Reyno de Navarra que estamos juntos y congregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad decimos..."
- (69) Los tres estamentos no reconocieron como Cortes las reunidas en Olite en 1801. HUICI, op. cit. pág. 179.
- (70) HUICI: op. cit. pág. 173.

(71) Ibid. pág. 179.

(72) Ibid. pág. 230. También el tema del traslado de las Aduanas a la frontera con Francia va a ser propuesto para su estudio por el gobierno a partir de las Cortes de 1757 (Véase sobre esto: R. RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones de Navarra con la Administración Central (1778-1808). Príncipe de Viana, Pamplona, 1974, pág. 99 y ss.

(73) IANGUAS Y MIRANDA: Diccionario..., I, pág. 253

(74) La fórmula empleada en el reconocimiento del agravio era lo suficientemente hábil para no comprometer ni sentar precedente: "Que se guarden las Leyes del Reino", y en lo que fuera contraria a ellas la provisión de que se hace mención en este pedimento le revocamos ...".

(75) HUICI: op. cit. pág. 217: "En los pedimentos de reparo de agravio negados, así como en otras leyes solicitadas y no obtenidas, se hacían las réplicas conducentes, y si aun agotadas éstas, el resultado seguía siendo negativo, se hacía al final de las Cortes el insistimiento general acerca de todos los decretos no favorables y a veces se acordaba como en 1561, no cerrar las Cortes hasta que se reparasen (Archivo General de Navarra, Cortes, lib. 3 de actas, folio 180 v.). Poco a poco el auto de insistimiento se va convirtiendo en un detalle del formulario, pero quizá por no dilatar las reuniones, no se insiste inmediatamente. Se deja el encargo a la Diputación o se repite el pedimento, que no se abandona fácilmente en la convocatoria siguiente.

(76) Cuadernos de las Cortes del Reino de Navarra: op. cit. En algunas legislaturas la legislación negativa supera a la positiva. Así, por ejemplo, en las Cortes de 1743, de 72 leyes, 44 eran destinadas a reparar agravios. Del resto, gran parte estaban dedicadas a nombramientos. Sería interesante un análisis del contenido de toda esta legislación.

(77) IANGUAS Y MIRANDA: Diccionario de Antigüedades... op. cit. pág. 180.

- (78) Novissima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra hechas en sus Cortes Generales desde el año de 1512 hasta el de 1716 inclusive. Edición realizada conforme a la obra de D. Joaquín de Elizondo. Año 1735. Príncipe de Viana, Pamplona, 1964.
- (79) MARICHALAR y MANRIQUE: op. cit, pág. 231.
- (80) Ibid., pág. 226: "Los reyes de Castilla expedían por propia autoridad provisiones y Reales cédulas que debían obedecerse, siempre que no fueran opuestas a las leyes y fueros del reino. Esta facultad legislativa, ajena a las Cortes, se puso ya en práctica desde los primeros momentos de la anexión".
- (81) YANGUAS Y MIRANDA: Análisis histórico crítico de los fueros de Navarra, Pamplona, 1838, pág. 18.
- (82) ILARREGUI: op. cit., pág. 32.
- (83) RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones... pág. 300.
- (84) F. BAZTAN GONÍ: Policía. Breves apuntes de cómo y cuándo se introdujo en Navarra. Imprenta Nacional, Pamplona, 1873, pág. 19.
- (85) YANGUAS Y MIRANDA: Análisis..., pág. 22 y 27.
- (86) GARCIA DE VALDEAVELLANO: op. cit. pág. 401.
- (87) YANGUAS Y MIRANDA: Diccionario... I, pág. 268.
- (88) MARICHALAR Y MANRIQUE: op. cit., pág. 222.
- (89) OROZ Y ZABALETA: op. cit. pág. 59 y ss.
- (90) HUICI: op. cit., pág. 387 y 397.
- (91) RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones..., pág. 256.

- (92) Ibid. pág. 310. En este mismo sentido: J. N. LACARRA: op. cit. pág. 245: "Una de las cargas que la Diputación echó sobre sí con el aplauso de Carlos III y de su ministro Floridablanca fue la construcción de caminos".
- (93) RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones..., pág. 310
- (94) El sistema de votación debió de plantear problemas, pues en una exposición de la Diputación a las Cortes de 1828 pide se señale la conveniencia de "que los tres Estados, teniendo presente que los votos en Diputación son cinco, fije el modo de dirimirse los empates o discordias; pues por más que se ha procurado investigar no se ha hallado razón sobre ello" (HUICI: op. cit. pág. 383). Siendo cinco los votos no aparece claro cuál era el problema. De todas formas lo que sí se deduce de tal exposición es que no debía haber acuerdo sobre el tema y al parecer las situaciones de discordia fueron frecuentes.
- (95) Todo ello está recogido con muy completa documentación en la obra de RODRIGUEZ GARRAZA ya citada: Tensiones de Navarra con la Administración central (1778-1808) que seguiré en lo fundamental a lo largo de este epígrafe.
- (96) J. FONTANA: La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820, Ed. Ariel, Barcelona, 1971, y Hacienda y Estado en la crisis del Antiguo Régimen español 1823-1833, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1973.
- (97) RZ. GARRAZA: Tensiones... 227-228
- (98) Aunque "forales" no dejaban de originar una situación de injusticia fiscal y de "privilegio o ventaja respecto los territorios no forales.
- (99) YANUAS Y MIRANDA: Diccionario... I, pág. 184.
OLAVE: op. cit. pág. 233.
RZ. GARRAZA: Tensiones..., pág. 230.
- (100) RZ. GARRAZA: Tensiones..., pág. 256.

- (101) Ibid... 295.
- (102) Ibid... 284.
- (103) Ibid... 296.
- (104) Ibid... 283.
- (105) Ibid... 283.
- (106) Ibid... 279.
- (107) Ibid... 281.
- (108) FUERO GENERAL DE NAVARRA..., op. cit. Lib. I, tit. I, cap. III, pág. 8.
- (109) IBID: Lib. I, tit. I, cap. V, pág. 10: "Si el rey de Navarra fuere en huest, o le cercaren villa ó castiey llo puede mandar a los villanos que vayan con pan de VII días, ó de XV ó de I mes, o para mas, o para menos: segunt que lis fuere mandado deven yr los villanos..."
- (110) IBID: Lib. I, tit. I, cap. IV, pág. 9.
- (111) NOVISSIMA RECOPIACION... I, pág. 295 y ss.
- (112) S. G. PAYNE: Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1935). Akal Editor, Madrid, 1976, pág. 16.
- (113) ibid. pág. 17.
- (114) ILARREGUI: op. cit, pág. 43.
- (115) Ibid. pág. 38.
- (116) Ibid. pág. 41.

- (117) Ibid., pág. 43.
- (118) RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones..., pág. 79. Esta realidad es también respaldada por los documentos citados por MARIA PUY HUICI: op. cit, pág. 273 y ss.
- (119) Ibid., pág. 301.
- (120) RODRIGUEZ GARRAZA: Navarra, de Reino a Provincia (1828-1841). Eunsa, Pamplona, 1968, pág. 52.
- (121) Ibid., pág. 95.
- (122) ILARREGUI: op. cit., pág. 44.
- (123) J. VICENS VIVES: Historia económica de España, 1ª ed. 1959. Ed. Vicens Vives; 4ª ed., Barcelona, 1977, pág. 503.
- (124) RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones...., pág. 99.
- (125) A.M.P., Actas Ayuntamiento: 1812-1813, folio 5.
- (126) YANQUAS Y MIRANDA: Diccionario...., I, pág. 179 y ss.
- (127) RZ. GARRAZA: Tensiones...., pág. 105 y ss.
- (128) MARQUES DE SAN ADRIAN: Forma y disposición de Tablas en el Reyno de Navarra; con la que se dejen cumplidas las intenciones de el Rey Nuestro Señor, explicadas en su Real Cédula, sin recurrir al nuevo establecimiento de Aduanas (1781). 32 páginas.
- (129) Ibid., pág. 3.
- (130) Ibid., pág. 25 y ss.
- (131) Ibid., pág. 27.

- (132) Ibid., pág. 11.
- (133) RODRIGUEZ GARRAZA: Tensiones..., pág. 116.
- (134) Ibid., pág. 116.
- (135) EXTRACTO DEL DISCURSO SOBRE LAS VENTAJAS QUE PUEDE PRODUCIR LA EXPORTACION DE NUESTROS VINOS A LAS POTENCIAS DEL NORTE, PRESENTADO POR LA REAL SOCIEDAD TUDELANA DE LOS DESEOS DEL BIEN PUBLICO EN LAS FUNCIONES PUBLICAS QUE CELEBRO EN LOS DIAS 30, 31 DE MAYO y 1 DE JUNIO DE EL AÑO 1783. Imp. Joseph Longás, Pamplona, 1783.
- (136) J. VICENS VIVES: op. cit., pág. 529.
- (137) En vísperas de la Guerra Carlista mientras los derechos de aduanas a los productos importados del extranjero eran en Navarra tan sólo del 7 %, en Castilla ascendían al 33 % (ILARREGUI: op. cit., pág. 45)
- (138) RODRIGUEZ GARRAZA: Navarra..., pág. 46 y ss.
- (139) Ibid., pág. 48.
- (140) ILARREGUI: op. cit., pág. 25 y ss.
- (141) DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Nº 34, pág. 595; sesión 4-X-1839.
- (142) ILARREGUI: op. cit., pág. 45.
- (143) M. ARTOLA: Antiguo Régimen y revolución liberal. Ed. Ariel, Madrid, 1978, pág. 115 y ss.
- (144) Ibid., pág. 134; citando documento: A.H.N. Consejos, leg. 1140, exp. 1.
- (145) Ibid., pág. 191 y 223. El decreto de las Cortes de



8-VI-1813 ajusta las relaciones de arrendamiento a la pauta liberal. El derecho definió las reglas a que en lo sucesivo había de ajustarse la utilización de la tierra: libertad de cerramiento, explotación, arrendamiento, así como la de comercialización de sus productos.

- (146) La propiedad territorial en la Edad Media se había caracterizado por la división entre dominio directo y dominio útil, y no había variado a lo largo de la Edad Moderna.
- (147) F. TOMAS Y VALIENTE: El marco político de la desamortización en España, Ed. Ariel, 1ª edición, 1971; edición consultada: 3ª, 1977, pág. 12.
- (148) J. J. MONTORO SAGASTI: La Propiedad Comunal y la Privada en la Villa de Palcos (Navarra). La Acción Social, Pamplona, 1929, pág. 7 y ss.
- (149) Ibid., pág. 33.
- (150) F. DE ARIN Y DORRONSORO: Problemas agrarios. Estudio jurídico-social de las corralizas, servidumbres, montes y comunidades de Navarra, Segovia, 1930.
- (151) En el sur de Navarra, la palabra CORRALIZA es sinónimo de comunal. El nombre tiene su origen en los lotes que arrendaban los municipios para pastos en los montes del común. Cada uno de estos lotes o totos tenían un CORRAL ganadero. De ahí el nombre. (A. FLORISTAN: La Ribera Tudelana de Navarra, Instituto Príncipe de Viana, C.S.I.C., Zaragoza, 1951, pág. 88 y ss.
- (152) M. DE IRUJO: Instituciones jurídicas vascas, Ed. Ekin, Buenos Aires, 1945: "A la misma incongruencia legal a que el país vive sometido, se deben las violentas colisiones, que han ensangrentado con frecuencia los pueblos agrícolas, divididos en irreconciliables bandos de "propietarios" enriquecidos con la desamortización en sus diversas formas y "comuneros" partidarios de una explotación social de la tierra, mediante su réintegro al común de vecinos". (pág. 125).

- (153) CUADERNOS DE LAS CORTES DEL REINO DE NAVARRA (op. cit.), II, pág. 379.
- (154) Ibid. pág. 378
- (155) Por estas fechas (1796) también en Guipúzcoa se habían organizado unas PARTIDAS DE MIQUELETES con fines similares. P. FERNANDEZ ALBALADEJO: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio económico e historia. Akal editor, Madrid, 1975.
- (156) J. COSTA: Oligarquía y Caciquismo, Colectivismo agrario y otros escritos, Alianza Editorial, Madrid, 1969, 2ª ed., pág. 123 y 124.
- (157) En este mismo sentido: BELTZA: Del Carlismo al Nacionalismo Vasco, Ed. Txertoa, San Sebastián, 1978, pág. 50: "Dada la estructura social y productiva de la época, la principal contradicción que atraviesa la sociedad vasca del s. XIX es la que hace referencia a las posiciones de los diversos grupos cara a esta redistribución y reconcepción de la productividad y la propiedad agrarias".
- (158) F. TOMAS Y VALIENTE: op. cit., pág. 23 y ss.
- (159) J. M. MUTILOA POZA: La Desamortización eclesiástica en Navarra, Edic. Universidad de Navarra, Pamplona, 1972, pág. 45.
- (160) En Navarra la medida afectó a 49 conventos; la lista de los mismos en: H. DE OLORIZ: Navarra en la Guerra de la Independencia, Pamplona, 1910, pág. 353.
- (161) MUTILOA POZA: op. cit. pág. 46.
- (162) Así comenzaron a llamarse copiando el léxico francés los bienes de conventos y monasterios que una vez suprimidos éstos pasaron a manos de la Administración para ser vendidos en pública subasta con el fin de sanear el Crédito Público. Espoz y Mina el 25-I-1811 exige a la ciudad de Tudela una relación de "cuantos bienes llamados NACIONALES, como son noveno, escusa-

- do, cuarto de Obispo, abadías, bienes pertenecientes a Monasterios, etc..." (J. R. CASTRO: Yanguas y Miranda, Ed. Gómez, Pamplona, 1963, pág. 25)
- (163) Se decía que el abad de Leyre podía recorrer Navarra de una parte a otra sin salir de sus dominios. Sobre la formación y estado del patrimonio de la Iglesia en Navarra, ver: MUTILOA POZA: op. cit., pág. 103 y ss.
- (164) Sobre lo vendido ver: MUTILOA POZA: op. cit., pág. 292 y ss.
- (165) MUTILOA POZA: El Priorato de YARTE (IART), origen, configuración y desamortización, Revista Príncipe de Viana nº 118-119, 1970, pág. 145: "...Uncida Navarra a Castilla, bien pronto se hizo sentir la presencia de los reyes de la casa de Austria solicitando subsidios a los monasterios navarros, que pródigos con el poder constituido recabarán nuevos ingresos revisando sus haciendas, levantando apeos y renovando contratos, lo que suscitará abundantes pleitos con particulares y municipios".
- (166) Palabras de un diputado en las Cortes de 1823. Cit. por TOMAS Y VALIENTE: op. cit., pág. 69.
- (167) MUTILOA POZA: La Desamortización eclesiástica en Navarra..., pág. 474.
- (168) EL PENSAMIENTO NAVARRO, 26-IX-1905.
- (169) CUADERNOS DE LAS CORTES... II, pág. 274.
- (170) Ibid., pág. 252 y ss. y 257 y ss.
- (171) Ibid., pág. 243.
- (172) Ibid., pág. 320.
- (173) Ibid., pág. 270.

- (174) Ibid., pág. 267 a 270.
- (175) Ibid., pág. 249.
- (176) Ibid., pág. 273.
- (177) Ibid., ley XXVIII, pág. 240.
- (178) Ibid., ley XLIX, pág. 271.
- (179) Ibid. ley LII, pág. 273.
- (180) Ibid., pág. 277.
- (181) Ibid., pág. 342.
- (182) MARICHALAR Y MANRIQUE: op. cit., pág. 212: "Este sistema daba gran ventaja al estado eclesiástico, que como menos numeroso y más compacto y con intereses especiales, opuestos muchas veces a los de las otras dos clases, dominaba las votaciones de los tres brazos, porque casi nunca se presentaba en disidencia, como solía suceder a los demás..."
- (183) Vid infra., pág. 63
- (184) RZ. GARRAZA: Tensiones..., pág. 126.
- (185) Sobre la producción agraria y la distribución de la propiedad en la Zona Media de Navarra, ver S. MENSUA: La Navarra media oriental. Institución Príncipe de Viana, Departamento de Geografía aplicada del Instituto Juan Sebastián Elcano, Zaragoza, 1960, pág. 98 y ss.
V. BIELZA DE ORY: Tierra Estella, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1972, pág. 221 y ss. y 253 y ss.
- (186) HUICI: Op. cit. 392.

- (187) Ibid. 126, nota 162.
- (188) CUADERNOS DE LAS CORTES... II, pág. 90-91.
- (189) Vid. supra pág.
- (190) J. ARGANASILLA DE LA CERDA Y BAYONA: op. cit. pág. 7.
- (191) Ibid., pág. 8.
- (192) J. IBARRA: op. cit.
- (193) OTAZU Y LLANA; op. cit., pág. 361 y ss.
- (194) CARO BAROJA: La hora navarra..., pág. 30.
- (195) Ibid., pág. 33.
- (196) Ibid., pág. 345.
- (197) Se refiere Caro Baroja a los valles de Baztán y Bertizarana.
- (198) CARO BAROJA: La hora navarra..., pág. 286.
- (199) J. M. DE AZCONA: Clara Roja, masón y vizcaino, Espasa Calpe, Madrid, 1935, pág. 20 y ss.
- (200) A. de OTAZU: El Igualitarismo vasco: mito y realidad, Ed. Txertoa, San Sebastián, 1973, pág. 137-138.
- (201) CARO BAROJA: La hora..., pág. 60.
- (202) OLAVE: op. cit., pág. 228.
- (203) A. GARCIA GALLO: Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 1971, I, pág. 675: La Monarquía uni-

versal española es el conjunto de todos los Reinos y Señoríos que obedecen a un mismo rey, y los Reinos y Señoríos son las partes de este conjunto. MONARQUIA Y REINO en este tiempo no son, pues, sinónimos como en la Baja Edad Media o como modernamente ocurre.

- (204) J. LALINDE ABADIA: Iniciación histórica al Derecho Español, Ed. Ariel, Barcelona, 1978 (2ª ed.), pág. 482 "LA MONARQUIA UNIVERSAL ESPAÑOLA es un conjunto de reinos, condados, territorios, virreinos, etc. ... el primer término indica la unidad de imputación de poder en la cumbre a favor del rey o monarca".

- (205) G. MARTINEZ DIEZ: Fueros Sí, pero para todos, Ed. Alce-Silos, Valladolid, 1976, pág. 17 y ss. (sobre las desigualdades fiscales entre los distintos Reinos de la Monarquía).

- (206) En la defensa que el Marqués de San Adrián hiciera en las Cortes Navarras de 1781 del traslado de las Aduanas al Pirineo (Vid supra. nota 128) queda muy claramente expresada la relación entre REYNO, la MONARQUIA y la NACION: "Por lo que respecta al REYNO (se refiere a Navarra) en orden a contribuir a tan alto fin comprensivo de sus particulares intereses, y de los de todo el basto cuerpo de esta grande y gloriosa MONARQUIA, se reduce a establecer en sus Puertos fronterizos a la Francia sus Tablas, retirán dolas de las demás fronteras... y pedir y contratar, quede libre la salida y entrada de todo a los demás REYNOS DE ESPAÑA... Así volteará nuestro dinero entre nuestros ESPAÑOLES y no lo entregaremos para nuestro daño a los Franceses: en una palabra, estará menos familiar nuestro comercio con los extraños y más hermanado con los de NUESTRA PROPIA NACION..." (pág. 2).

CAPITULO II

DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA A LA PRIMERA GUERRA CARLISTA

II.-DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA A LA PRIMERA GUERRA CARLISTA.

No se pretende hacer aquí un compendio de la historia navarra en esta etapa tan decisiva. La finalidad del presente capítulo es destacar aquellos hechos que demuestran cómo en los años críticos que precedieron a la Guerra Carlista, Navarra estuvo inmersa en la dinámica interna de la Monarquía, sin intentar una alternativa política propia: ni sus intereses ni sus instituciones se lo permitían. A la hora de rechazar al invasor, a la hora de llenar el vacío institucional que la ausencia del rey provocaba y a la hora de articular las reformas que la revolución liberal comporta, Navarra, actuará al unísono de l resto de la Monarquía. La reacción antiliberal que provoquen las reformas, tampoco será excepcional; y en estos años de tensión entre el Antiguo Régimen y el Estado Liberal Navarra no defenderá ningún tipo de particularismo local; el único patriotismo por el que se vibrará será español. La lucha se centrará entre dos proyectos concretos de patria a realizar.

1.-INVASION FRANCESA Y REVOLUCION DE CADIZ

El 9 de febrero de 1808, 2.500 franceses de la

división del General Armagnac entraban en Pamplona en son de aliados por convenio ajustado entre el emperador Napoleón y el rey de España, Carlos IV. Pamplona, que ya en la Guerra contra la Convención se había resistido a pelear contra ellos acoge sin hostilidad a los soldados franceses (1). La Diputación del Reino, siguiendo recomendaciones de Carlos IV, colabora con el francés, tranquiliza a la población y sirve de conexión entre las autoridades francesas y el pueblo navarro (2).

El 2 de mayo de 1808 se inicia en Madrid el levantamiento popular contra los invasores de forma más o menos espontánea (3). A primeros de junio en Navarra, estimulados por noticias y proclamas que llegan de Aragón y Castilla y comenzando por Estella, en algunas localidades se registran levantamientos, a pesar de que las autoridades locales y del Reino, luchan a toda costa por el mantenimiento del orden. Como justificación de estos movimientos populares: "el deseo de defender la Patria y los derechos del Soberano" y "la defensa de la Santa Religión". Y como distintivo de los rebeldes, "la misma señal Nacional" que venía usándose en las demás provincias: la escarapela encarnada en el sombrero (4). Sin minusvalorar el carácter patriótico de estos levantamientos, algo debieron de tener de revuelta social. En Puente la Reina, los sublevados piden armas y amenazan con saquear las casas de los ricos; y en Cáseda sacan a los presos de la cárcel (5).

A excepción de Tudela, único lugar donde el vecindario , en manifiesta oposición al Ayuntamiento llega a elegir democráticamente una Junta de Gobierno (6), el levantamiento popular fracasa en Navarra, que como veremos iba a ser una de las últimas provincias en incorporarse al movimiento guerrillero.

A.-CONSTITUCION DE BAYONA.

Para legitimar la nueva dinastía y ganarse la voluntad de los reformistas, Napoleón convoca en Bayona una Asamblea de diputados para elaborar un programa capaz de regenerar España.

La elección de los diputados se haría por provincias y con carácter estamental: nobleza, clero, representantes de ciudades, de corporaciones económicas etc... De los miembros convocados, muchos se excusan, teniendo que recurrir al nombramiento directo. "En lugar de una Asamblea de representantes, se celebró en Bayona una simple reunión de españoles congregados casi al azar por los más extraños títulos, algunos sin poder suficiente que les acreditase (7).

De los 150 miembros que se pretendió asistiesen, se iniciaron las sesiones con 65, llegando a 91 en la sesión final del 7 de julio de 1808. No se pudo quejar Napo-

león de la presencia vasca en Bayona. La Asamblea estuvo presidida por un navarro: Miguel José de Azanza; actuando de secretario otro vasco el vizcaíno Mariano Luis de Urquijo. De entre los que tomaron asiento por diversos títulos nos encontramos con más personajes ligados a Navarra: Marqués de Núzquiz, Juan de Nata Garro, Marqués de las Hormazas, Conde de Torre Núzquiz... Respecto al estamento eclesiástico, de los 8 arzobispos y obispos convocados, sólo dos anunciaron su participación: el de Burgos y el de Pamplona. Este último excusó al final su asistencia personal por motivos de salud, mandando como representante a Joaquín Xabier de Uriz, prior de la Real Colegiata de Roncesvalles (8).

La Diputación del Reino de Navarra estuvo también representada en las personas de Miguel Escudero (9) y Luis Antonio Gaizka (10); y a ellos acudió la corporación para comunicarles las quejas de los pueblos ante las excesivas exigencias de los ejércitos franceses (11).

El estatuto de Bayona, aprobado el 7-VII- 1808, es el primer intento de asentar la convivencia política sobre una carta constitucional. Configuraba una Monarquía limitada y contenía los elementos de una reforma política y social en sentido burgués. Desde el punto de vista foral vasco, la exigencia de unas mismas Cortes para toda la nación, el establecimiento de un sólo código civil y crimi-

nal, y la supresión de tribunales y jurisdicciones especiales, suponía implícitamente la supresión de las instituciones forales, a pesar de que la mención expresa a su abolición, que constaba en el proyecto fue suprimida (12). No obstante, el artículo 144, aceptado por los delegados de las 4 regiones vascas hacía referencia a que "los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa y Alava se examinarán en las primeras Cortes para determinar lo que se juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación" (13). Comenzaba así un contencioso todavía no solucionado respecto a la compatibilidad entre la unidad constitucional y la foralidad vasca.

De cualquier forma, el Estatuto de Bayona apenas fué aplicado por las condiciones creadas por la guerra que concedían mayor autoridad a los generales de Napoleón que al rey.

B.-CORTES DE CADIZ.

Las exigencias de abastecimientos del Ejército francés estaban arruinando a los pueblos; las quejas llegaban de forma angustiosa a la Diputación y estas presiones populares por un lado, y la proximidad del ejército regular español a la línea derecha del Ebro, por otro, hicie-

rón cambiar la actitud colaboracionista de la corporación, que a finales de agosto abandonó Pamplona estableciéndose sus miembros en Agreda.

El 22-IX-1808, la Diputación del Reino, nombra a dos de sus miembros: Miguel de Balanza y Castejón, diputado por la ciudad de Pamplona y Carlos Amatria y Santa María, de Villafranca, para que asistan con plenos poderes a la Junta Suprema Central que va a celebrarse en Madrid (14)

El 18-IX-1809, estos dos diputados, miembros ya de la Junta Central, transmiten desde Sevilla un oficio de la Comisión de Cortes a la Diputación en el que se pide, ante la imposibilidad de "usar los pueblos del voto libre de elección" por estar Navarra totalmente ocupada por el ejército francés, "remiten V.E. a la mayor brevedad posible nota de las personas naturales del Reyno de Navarra que se hallen fuera del poder de los enemigos... que sean acreedoras a la estimación y confianza pública" para que asistan a las Cortes Generales de la Nación.

La Diputación contesta que "en la deplorable situación de este Reyno sojuzgado por el enemigo, todos sus moradores yacen bajo su poder, defraudado de la gloria de aspirar a concurrir a las próximas Cortes. Los demás navarros ausentes de su Patria y merecedores de tan singular dicha, sirven a S. M. en las carreras militar o política, y aunque no se hallen en esa Corte son más conocidos por

V.E. que han intervenido en el gobierno de los intereses generales de la Nación sobre los cuales habrán desplegado sus luces y patriotismo; por lo que nos abstenemos de proponer alguno, íntimamente persuadidos de que la elección de V.E. será la de nuestro deseo" (15).

Ningún dato sobre la forma en que dicho nombramiento se llevó a efecto. Sólo sabemos que Francisco de Paula Escudero (16) y Alejandro Dolarea (17) representaron a Navarra en Cádiz (18).

La Constitución de 1812, en palabras de Campi3n: "al tiempo que encarecía y ponderaba los Fueros en el preámbulo, los abolía y extirpaba de cuajo en el texto, fabricando con los sillares derruidos, nuevos templos al ídolo horrendo de la llamada UNIDAD CONSTITUCIONAL (19).

Efectivamente, los fueros vascos, sin ser objeto de ninguna disposición específica, quedaron derogados de resultas de la promulgación de la Constitución; no obstante, como recuerda Campi3n, el régimen foral navarro mereció una muy especial mención en el discurso preliminar.

Los legisladores de Cádiz, que rechazaban la acusación de "extraña" con que se intentaba denigrar su obra, trataron de justificar el nuevo orden liberal como un reencuentro con las tradicionales instituciones medievales, que el "despotismo ministerial" de Austrias y Borbones había desterrado: "Nada ofrece la Comisión en su proyecto

que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española (20)...nuestros códigos demuestran haberse conocido y usado en España cuanto comprende el presente proyecto" (21). Incluso, el Fuero Juzgo ya había reconocido la SOBERANÍA NACIONAL...(22)!

En todo este montaje, el orden institucional navarro, resistiendo a lo largo de la historia victoriosamente al despotismo, no podía menos de ser objeto de un canto solemne; idealizándolo, por supuesto, para que sirviese al modelo. "La Constitución de Navarra" se presenta como "un testimonio irrefragable contra los que se obstinan en creer extraño lo que se observa en una de las más felices y envidiables provincias del reino". Sus instituciones fueron "un antemural inexpugnable en que iban a estrellarse las órdenes y providencias siempre que eran contra la ley o pro comunal del Reino"...Las Cortes tienen gran autoridad. Ninguna ley puede establecerse sin que ellas la consientan libremente...Las cédulas, pragmáticas etc. no pueden ponerse en ejecución hasta haber obtenido de las Cortes o de la diputación el permiso o sobrecarta...La diputación ejerce también una autoridad muy extensa. Su principal objeto es velar que se guarde la constitución y se observen las leyes: oponerse al cumplimiento de todas las cédulas reales que ofendan a aquellas: pedir contrafuero en todas las providencias del Gobierno que sean contrarias a

los derechos y libertades de Navarra y entender en todo lo perteneciente a lo económico y político de lo interior del reino. La autoridad judicial es también en Navarra muy independiente del poder del Gobierno..."(23).

Lo expuesto en la primera parte de este trabajo hace innecesario todo comentario sobre el grado de veracidad de la descripción precedente. Y es que Argüelles, "representante genuino de la línea de pensamiento que se expresa en el "Discurso preliminar de la Constitución de Cádiz"- en palabras del profesor Naravall- "Argüelles, que no es historiador, interpreta las referencias que tiene del pasado en el sentido de las modernas ideas alterando aquellas radicalmente"(24).

La mitificación de las instituciones navarras, que durará hasta nuestros días y que será un arma política frecuentemente utilizada y con éxito (25), recibió en Cádiz, y no precisamente por parte de navarros, un refuerzo inapreciable.

Estella, capital interina de Navarra, por haber sido su territorio uno de los primeros liberados, fué la primera ciudad que cumpliendo las órdenes de la Regencia proclamó la Constitución de Cádiz el 31 de julio de 1812, festividad de la Virgen del Puy, su patrona. En una misa solemne, leyó el celebrante la Constitución, hizo un discurso de circunstancias y pidió su juramento sobre los San

tos Evangelios; finalizando con un Te-Deum. La ceremonia fue seguida de fiesta popular (26).

Siguiendo a Estella, fueron proclamando la Constitución los distintos pueblos y valles de Navarra según se iban liberando; la Ribera antes que la Montaña, Roncesvalles fue de los primeros de entre ésta última, que sin llegar al cabildo orden superior alguna, propuso el prior, con el fin de servir de ejemplo, el juramento de la Constitución "que debe excitar la ternura y reconocimiento que debe todo buen español a los representantes de la Nación por el celo con que se asegura y fija por base perpetua de la misma observancia pura de nuestra Santa Religión única verdadera (27) y por la solidez con que se ha servido acordar y decretar las más acertadas y firmes reglas para el decoro, mejor gobierno y felicidad de la Monarquía y de todos los españoles...(28)".

Pamplona, liberada el 17 de octubre de 1813, la proclamó un mes más tarde (13-X-1813). En solemne procesión, los miembros del Ayuntamiento, del cabildo catedralicio, de la Diputación provincial y el jefe político (el antiguo diputado del Reino, Miguel Escudero) acompañados del vecindario se dirigieron de la Casa Consistorial a la plaza del Castillo. "En el centro iba un niño vestido de ángel llevando una bandeja de plata en la cual estaba colocada la Constitución forrada de terciopelo carmesí". Al llegar a la plaza, sobre un tablado preparado para ello, se

leyó el texto constitucional vitoreando los concurrentes a la Nación y al Monarca. Para celebrar tan fausto acontecimiento hubo iluminaciones, baile, música y novillos con soga. Al día siguiente, domingo, se leyó en todas las parroquias la Constitución y se entonó un Te-Deum (29). Una vez proclamada, se procedió a la formación, de los nuevos ayun-
tamientos constitucionales.

C.-ELECCIONES GENERALES DE 1813.

Aprobada la Constitución, las Cortes se disolvieron para dar paso a la formación de Cortes legislativas ordinarias. Según la normativa electoral, se elegiría un diputado por cada 70.000 habitantes o fracción. Navarra con un censo de 221.728 le correspondía nombrar 3 diputados y un suplente.

Las elecciones tuvieron lugar en septiembre de 1813 y excepto en la merindad de Pamplona, todavía en parte ocupada por los franceses, se realizaron sin incidentes. El sistema electoral era directo en cuatro grados: vecinos, electores de parroquia, electores de partido y diputados.

Entre el 20 y 22 de septiembre se reunieron en las cabezas de merindad: Sangüesa, Estella, Olite, Tudela y Puente la Reina (cabeza interina de la merindad de

Pamplona), los electores parroquiales para nombrar los electores de partido correspondientes. Al acercarnos a la identidad de estos electores parroquiales, nos encontramos por un lado con nombres que más tarde iban a figurar en primera fila de la política navarra y de los negocios desamortizadores; algunos de ellos procedentes de la élite del Antiguo Régimen: Diez de Ulzurrun (Corella), Jimenez (Cascante) Arévalo y Antillón (Villafranca), Gomeza (Arguedas), Aisa y Navascués (Cintruénigo) Ederri (Tudela), Cruzat (Tafalla), Octavio de Toledo (Sangüesa) Galdiano (Dicastillo), Baraybar y Vicuna (Estella), De Miguel (Lodosa y Arróniz). Por otro lado, llama la atención la presencia de un porcentaje elevado de clérigos entre ellos, sobresaliendo la merindad de Estella con 15 presbíteros de 37 electores. Esto último puede explicarse por la universalidad del sufragio en la base y la enorme influencia del clero, que ya en la organización de la guerrilla había colaborado con los sectores populares (30).

Nada sabemos del grado de competitividad que pudo darse en estas elecciones y de la existencia o no de grupos de intereses e ideológicos encontrados. La existencia de los dos grupos señalados: clero y notables locales, nada dice de su identidad o posible enfrentamiento. Hay, sin embargo, un dato que pudiera avalar esta última posibilidad: En las elecciones de Tudela, únicas en cuyas actas se recogen los pormenores de las votaciones, la lucha por el

primer puesto se da entre Hilario Clemot, provisor y vicario general del obispado de Tudela y José María Navascúes, terrateniente de Cintruénigo; ganando el primero por 18 votos contra 10.

Por otra parte, ésto no haría más que corroborar la dinámica que se había dado en toda España y de la que Navarra no sería una excepción. La obra de Cádiz no fué aceptada por los partidarios del Antiguo Régimen, fundamentalmente por el clero. Siguiendo al profesor Artola: "La campaña electoral para las Cortes ordinarias que se reunieron el 1 de octubre de 1813, revela una activa intervención de los elementos eclesiásticos hasta el punto de hacer temer a los liberales por la continuidad de su control del poder. En la fase final de la guerra, el enfrentamiento con los defensores del Antiguo Régimen se hizo más violento. La conciencia que los privilegiados han adquirido acerca de los resultados últimos de la obra de las Cortes les lleva a movilizar la opinión, y en esta tarea la influencia eclesiástica, el sector más directamente atacado por la revolución, no podía dejar de ser decisiva en contra de la burguesía liberal (31)".

El 26 de septiembre, en Estella, capital interior de Navarra, tiene lugar la última fase del proceso electoral. Presididos por el jefe político, se reúnen los 9 electores de Partido:

Por Sangüesa: Francisco Moriones, presbítero, de Leache; José Luis Landá, presbítero, de Ochagavía.

Por Estella : Pablo López, presbítero, beneficiado de Alfo. M. J. Lombardero, presbítero, beneficiado de Los Arcos.

Por Tudela : Hilario Clemot, provisor y vicario general del obispado de Tudela. Licenciado Vicente Carasusán, vecino de Cascante.

Por Pamplona: Juan Fermín Beloqui, presbítero, arcipreste de Echarri. José Joaquín de Aguirre, vecino de Donamaría.

Por Olite : Pablo Uxue, presbítero, prior de la parroquia de Larraga.

No es casual, que los dos únicos electores de los nueve que no pertenecen al clero procedan de las dos zonas donde la oligarquía navarra tiene más influencia: la Ribera, feudo de la nobleza terrateniente, y el Baztán, zona de influencia de esa nueva oligarquía que en torno a actividades burocráticas y financieras hemos visto surgir a

lo largo del siglo XVIII.

Las votaciones se suceden de la siguiente manera:

Para el nombramiento del primer diputado y en primera votación:

<u>Veremundo Arias Texeiro</u> , obispo de Pamplona:	7 votos
<u>Obispo de Tudela</u>	2 votos

Para el nombramiento del segundo diputado y después de tres votaciones:

<u>General Juan Carlos Areizaga</u>	5 votos
<u>Alejandro Dolarea</u>	4 votos

Para el nombramiento del tercer diputado, en primera votación:

<u>Alejandro Dolarea</u>	7 votos
<u>Sebastián de Torres</u>	2 votos

Y para el nombramiento del suplente, en primera votación:

<u>J. V. Lombardo</u>	6 votos
<u>H. Clemot</u>	1 voto
<u>P. Uriz</u>	1 voto
<u>Garvisu</u>	1 voto

Por las candidaturas propuestas para cada uno de los puestos, parece como si hubiese habido acuerdo en "re-

producir" el antiguo orden estamental, respetando el primer puesto para un miembro del brazo eclesiástico. Por otro lado, el resultado 7/2 que se produce en dos ocasiones y que coincide con la relación de fuerzas de los electores: 7 presbíteros, 2 nobles, podría corroborar el hipotético enfrentamiento anteriormente apuntado.

En el caso de la elección del primer diputado, esta afirmación estaría reforzada por haber sido el obispo de Tudela denunciado por liberal (32). Sobre la caracterización ideológica del obispo de Pamplona: Arias Tejeiro no hay duda alguna. El fue uno de los ocho obispos que desde Palma de Mallorca había protestado por ^{la} supresión de la Inquisición, a la que consideraba en aquellos momentos más necesaria que nunca; y a él también se le atribuye la redacción de una Instrucción Pastoral que el 12-XII-1812, seis obispos firmaron también en Mallorca, secuestrada por la Regencia y que ha sido considerada como "el documento más grave de condenación de la obra irreligiosa de las Cortes" (33).

Sin embargo, también hay argumentos que osucrescen y complican esta interpretación. En la votación para el tercer puesto, según la hipótesis anterior Alejandro Dólarrea habría sido apoyado por los 7 presbíteros. Desconocemos su postura política en 1813, pero en 1822 militaría en las filas liberales y sería uno de los Diputados que apoyaría la supresión de monacales y la desamortiza-

ción de sus bienes (34). Es verdad que en momentos de cam
bio político y de la complejidad y confusión de la situa-
ción histórica, pudo ser frecuente la indefinición de pos
turas a nivel personal. Por otro lado, desconocemos la
identidad de Sebastián de Torres, que bien pudo ser más
radical que Dolarea y en tal caso justificaría su elec-
ción como "mal menor".

Los resultados de la elección de suplente tam-
bién parecen complicar la hipótesis anterior. Hilario Cle-
mot, provisor de Tudela, que en las elecciones de Partido
había sido el contrincante de Navascués, hipotéticamente
el candidato "liberal", obtendría en esta ocasión sólo 1
voto, en contra de los 6 de Lombardo, beneficiado de Los
Arcos, del que sin embargo hay sospechas para incluirlo
entre el clero "liberal" (35).

Por consiguiente, resultaron elegidos: Veremun-
do Arias Texeiro, obispo de Pamplona, el general Juan Car-
los Arefzaga (36) y Alejandro Dolarea, y como suplente Ma-
nuel José Lombardo, a los cuales se "les otorgan poderes
amplios...para que con los demás diputados de Cortes como
representantes de la Nación española, puedan acordar y re-
solver quanto entiendan conducente al bien general de
ella en uso de las facultades que la Constitución determi-
na y dentro de los límites que la misma prescribe" (37).

De todas formas, aunque la obra de Cádiz no fue

se aceptada por todos los diputados navarros, y en caso del obispo de Pamplona estaba claro que la rechazaba por "irreligiosa", no parece que las "reglas del juego político" fuesen puestas en entredicho, y una vez más se aceptaba participar en el órgano legislativo "Nacional" sin ningún "reparo foral".

Si en 1809 a consecuencia de la ocupación no se pudieron celebrar las elecciones democráticamente, con arreglo a la normativa general, no sucedió lo mismo en esta ocasión, que salvo en una parte de la merindad de Pamplona todavía ocupada por los franceses, se celebraron con toda normalidad. Por eso los historiadores fueristas posteriores, a la vez que niegan legitimidad a los representantes en Cádiz, no obstante contar con el beneplácito de la Diputación del Reino, silenciarán estas elecciones de 1813.

Sin embargo, el hecho de aceptar la participación en las Cortes de la Nación y no regatear medios al servicio de la Patria: España, naturalmente, no suponía la renuncia total al orden institucional propio, y tras la caótica situación que vive Navarra después de la guerra (38) se añora el poder local, aunque se carezca de decisión (¿o de poder?, ¿o de interés?) para reclamarlo.

A la vez que las elecciones a Diputados a Cortes se celebraron las de Diputados provinciales. El 1-X-

1813, la primera Diputación provincial juró en Estella la Constitución. El 7-II-1814 se dirigía así a sus Diputados navarros en Cortes:

"Ni viven los pueblos ni vivimos. El desorden no puede crecer. Esto es lo que enteramente nos ocupa con dolor y nada podemos remediar... Claro es que una de nuestras primeras y más graves atenciones inseparables de lo que debemos a la PATRIA, fué desde el principio y será constantemente siempre la de examinar si hay medio eficaz con que se les reintegre en su antigua nobilísima constitución de que llora verse despojada sin ser oída y sin los precisos conocimientos. Pero creemos que no es materia en que conviene mover hasta el momento oportuno, esperando que el tiempo y la variación de las cosas nos lo ofrezcan...(39)".

En la sesión secreta de las Cortes del 20- VIII- 1813 se había presentado un memorial de cuatro antiguos diputados del reino, Miguel Escudero entre ellos (40), en el que pedían licencia para congregar las Cortes de Navarra "con objeto de publicar la Constitución" al igual que las provincias Vascongadas habían celebrado sus Juntas con el mismo fin. La propuesta fué rechazada por juzgarse incompatibles "dos cuerpos legislativos en un mismo Estado" (41). ¿Se trataba de sancionar "foralmente" la nueva legalidad para evitar reclamaciones futuras?, ¿o se trata

ba de hacer compatibles "ambas constituciones" manteniendo alguna forma de poder local con que frenar las medidas excesivamente democráticas de los legisladores gaditanos?

D.-NOBLEZA, CIERRO Y PUEBLO ANTE LA GUERRILLA.

Cuando la Diputación del Reino abandonó su actitud colaboracionista con el francés y en agosto de 1808 se instaló en Agreda, su primera preocupación fué la de organizar un ejército regular. Sin embargo, por falta de medios económicos, por la resistencia de la Junta Central a prestárselos, por la falta de apoyo popular, fracasó en el intento.

En la correspondencia que la Diputación y la Junta Central mantienen acerca del proyecto (42), la primera se queja de la falta de caudales y de la ruinosa situación por la que atraviesa el Reino, reclamando el refuerzo del Ejército regular en socorro de Navarra. La Junta Central trata de hacerle ver que en iguales condiciones otras provincias han respondido "con generoso esfuerzo por su libertad y el honor de la Nación". Así: "La Galicia se ha armado en masa cuando no tenía en su territorio ni Ejército ni tropas en que poder apoyar sus movimientos y veía a los franceses apoderados de todas sus plazas, saqueando y asolando hasta los Pueblos del inte-

rior de la Provincia"... Castilla "expuesta a sufrir el peso de la venganza del enemigo ha levantado varias compañías de voluntarios"... Tampoco Aragón ha regateado esfuerzo para sostener su independencia y contribuir a la gloriosa defensa de la Patria. Y Cataluña, "funesto teatro de la crueldad y perfidia del enemigo ha preferido hacer el sacrificio generoso de sus vidas y haciendas a sufrir el vergonzoso yugo del usurpador". La Junta, "a la vista de los heroicos modelos que ofrecen nuestras Provincias en tan gloriosas revoluciones" hace una llamada a la fidelidad de Navarra para que se disponga a hacer toda clase de sacrificios, y "si es menester a abandonar la vida por salvar la libertad y conservar su patriotismo, organizando y armando al país".

Que Navarra fue una de las últimas Provincias en levantarse lo prueba también la siguiente circular:

"Pueblos guerreros y generosos, imitad a vuestros mayores y correr precipitados a empuñar la cortadora espada, y a aliaros con vuestros hermanos los Aragoneses para partir con ellos la gloria inmortal de que están gozando y vosotros careceis bien a pesar vuestro. Mirad que en vosotros tienen puestos sus ojos los Andaluces, los Valencianos, los asturianos, los extremeños, los aragoneses y todas las Provincias que han tomado las armas en defensa de la Patria, del Rey y de la Religión, y aún nos

consta que han principiado a desconfiar de vuestra recta conducta y a haceros sospechosos a la Nación entera" (43)

Y es que en todo el País Vasco, donde había fracasado el levantamiento de 1808 (44) habría que esperar las medidas anticlericales e impopulares anunciadas por el gobierno francés en Diciembre y puestas en práctica a lo largo de los años siguientes: Supresión de la Inquisición, reducción del número de conventos y confiscación de bienes, y sobre todo la supresión de las Aduanas interiores (45), para conseguir la respuesta popular y del clero contra el invasor. Con lo que se podría pensar, que en estas provincias por lo menos, el levantamiento fue motivado más por la legislación liberal que los franceses intentaron implantar que por su condición de gobierno extranjero (46).

Si ya en los primeros meses de 1809 surgen los primeros grupos de voluntarios armados, el primer intento serio de organizar la resistencia fue el de Martín Javier Mina, más conocido por "Mina el Mozo" o "El Estudiante", que había participado en el levantamiento de Zaragoza y animado y autorizado por el General Aréizaga fundó en el mes de julio el Corso de Navarra, al que más tarde se uniría su tío Francisco Espoz y Mina, uno de los más famosos guerrilleros de la Independencia.

Entre el verano de 1809 y marzo de 1810 surgie-

ron otras partidas junto a la de Mina. Sus dirigentes eran todos de extracción popular, rural o urbana (47).

Junto al pueblo, el clero colaboró activamente en la guerrilla. Un clérigo, el prior de Ujué fué el encargado por la Junta Central el 21-I-1809 para dirigir el alzamiento en Navarra, organizando para ello una Junta formada por el prior de Larraga, el párroco de Arraiz y Manuel Brice, vecino de Beriain. Algunos curas se pusieron al frente de partidas como el párroco de Valcarlos y el presbítero Hermenegildo Garcés de los Fayos. "Generalmente la casa del sacerdote era hospital y refugio de rezagados, así como depósito de armas y cuartel general de voluntarios" (48). En ocasiones, el párroco actuaba como correo y emisario de los jefes de guerrilla, y la plata de muchas iglesias contribuyó a la financiación de las partidas (49).

Si pueblo y clero lucharon juntos contra el invasor, no se puede decir lo mismo de la nobleza. Espoz y Mina se quejaría en sus Memorias de que "No apareció en Navarra un hombre que, perteneciendo a las clases de títulos de mayorazgos o de riqueza, tuviese alguna nombradía y prestigio para levantar la bandera de reunión (y ¡cosa rara y notable en todo el tiempo que duró la guerra! no se presentó en aquellos campos ningún individuo que perteneciese a estas altas y privilegiadas familias") (50).

Una parte nada despreciable de la nobleza colaboró con el francés y participó en sus instituciones de gobierno (51). En 1810, T. Antillón aceptó ser nombrado Superintendente de Policía y tanto en la Diputación que el General Reille nombró en 1810, como en el Consejo de Intendencia que en 1812 le sustituyó nos encontramos que todos sus miembros pertenecieron a las antiguas Cortes del Reino: Bigüezal, Montesa, Narichalar, Vidarte, Arteta y Navarro.

Los marqueses de Bessolla, Fontellas, Góngora, fueron nombrados regidores del Ayuntamiento de Pamplona, así como los capitalistas Ribed y García Herreros y Vidarte, Iñarra, Barberia, Azcona, etc. (52). Julián Oscáriz fue alcalde de la ciudad en 1807 y el Conde de Guendulain lo era en 1813, abandonando la ciudad al aproximarse el ejército español (53).

Todos ellos veían en la guerrilla un peligro social. En 1811 la Diputación nombrada por Reille aconsejaba al pueblo navarro "negar a Mina y a los suyos todo socorro, dar aviso de sus movimientos y guaridas a los jefes franceses, impedirles el paso por los pueblos y procurar su total exterminio... Os parecerá duro este consejo pero él es el único para acabar de extinguir esas bandas origen de nuestras desdichas". Reille mismo no hubiera hablado más duramente, comenta Iribarren (54).

Tampoco entre los notables locales y burguesía urbana, debió encontrar apoyo el movimiento guerrillero, y Espoz y Mina no contó en Tudela con la colaboración de Yanguas y Miranda, secretario del Ayuntamiento, uno de los más destacados liberales de Navarra, y al que al final hizo prisionero (55).

Otro dato que corrobora la falta de "cuadros" en las filas de la guerrilla es el hecho de que cuando Espoz y Mina organiza el servicio de aduanas, lo confía a Félix Sarasa, alias "Cholín" "labrador de Artica analfabeta pero listísimo y que apenas sabía el castellano" y para depositario y repartidor eligió a otro labrador de Subiza: José Górriz "que tampoco sabía leer sino el catecismo de Ripalda que nos enseñaban en la escuela; nada de papel manuscrito" (56).

Es verdad que sobre todo en un principio, las partidas tuvieron mucho de grupos incontrolados y que el saqueo y el pillaje estuvieron a la orden del día. Pero esto mismo nos da pie para pensar en la posible carga de descontento social que el movimiento abrigaba (57) y que el clero reforzaba y justificaba con argumentaciones "cruzadistas" y patrióticas.

Sin forzar esquematismos, podríamos apuntar que durante la Guerra de la Independencia, se perfilan ya en Navarra las tres opciones políticas que iban a estar pre-

sentes en la lucha de los años venideros.

Los protagonistas de la guerrilla: clero y campesinado, volverán a serlo en las partidas realistas de 1822 y en las filas carlistas de 1833. Son los grandes perdedores de la nueva situación que se vislumbra y sus intereses pasan por la conservación del Antiguo Régimen, del que el sistema foral es parte. El caso de Espoz y Miño no invalida el planteamiento. En 1809 Espoz es un labriego navarro, en 1814, un militar postergado.

La nobleza navarra es quizá una de las más afrancesadas de la península, colabora con el invasor y no toma parte directa en la obra de Cádiz, que más tarde rechazará. En un futuro próximo serán "Jovellanistas" y "Moderados". Al igual que el resto de la nobleza peninsular controlarán el proceso de cambio desde posiciones de poder, del que saldrán beneficiados y a la postre, conseguirán adaptar "El Fuero" a sus nuevas necesidades e intereses.

El Liberalismo radical en Navarra tendrá escasa presencia y se apoyará en la milicia y en ciertos sectores de la burguesía urbana.

A modo de CONCLUSIONES de lo hasta aquí expuesto sobre la Guerra de la Independencia podemos afirmar:

En primer lugar, que la Guerra de la Independen-

cia fue una GUERRA NACIONAL, que colaboró en el despertar de la conciencia nacional española.

La NACIONALIDAD aparece como el nuevo vínculo individuo/sociedad que busca una nueva cohesión entre la población del Estado que sustituya la cohesión de la vinculación a la persona del Rey. El surgimiento de la NACIÓN como sujeto político aparece unido al ascenso de las burguesías y justifica la pretensión unificadora del ambiente político en que se lleva a efecto la actividad económica. LIBERALISMO y NACIONALISMO son las dos caras de la revolución burguesa e históricamente juegan un papel revolucionario y progresista frente al Antiguo Régimen.

La Francia revolucionaria se encuentra doblemente en el origen del movimiento de las nacionalidades: si las guerras de la Convención y del Imperio llevaron por un lado los principios revolucionarios y nacionalistas al resto de los países de Europa, suscitaron por otro la oposición de las nacionalidades contra el invasor francés. Tal es el caso de la Guerra de la Independencia en España, guerra de afirmación nacional, sin lugar a dudas, pero que a la vez crearía las condiciones y precipitaría la revolución burguesa. Las Cortes de Cádiz recogerían esta realidad, y la Constitución de 1812 en su artículo 3 afirmaría que "la SOBERANÍA reside esencialmente en la NACIÓN".

Navarra en estos momentos, se indentifica con el resto de la Nación española y el patriotismo por el que vibra es un patriotismo español. Recogiendo ésta realidad Arturo Campion, escritor fuerista y una de las figuras más relevantes del nacionalismo vasco en Navarra es cribiría en distintas ocasiones:

"La guerra de la Independencia fué gigantesca hoguera en cuyas llamas se fundieron y evaporaron muchos de los sentimientos y de las ideas particularistas. Ella convirtió en españoles "militantes" a los baskos y nabarros lanzándoles a la corriente de la vida política española" (58). "Aquella gran conflagración, con la comunidad de intereses, riesgos y aspiraciones, provocó el predominio de la tendencia "nacional" (española) sobre la tendencia "local", orientando hacia organismos centrales el espíritu público persuadiéndole de que existían negocios de mayor momento que los negocios nabarros y aún éstos no era ya posible plantearlos y resolverlos separadamente de los generales" (59). "Arruinose de hecho el edificio foral, puesto que imperaban las autoridades centrales y otras regionales aunque de formación revolucionaria o espontánea. Nadie se preguntaba si una medida o disposición era contrafuero, sino si parecía o era patriótica" (60), "A Napoleón son deudores de una estatua los partidarios de la UNIDAD NACIONAL a la moderna; nadie ha trabajado con más éxito que el Emperador por ella" (61).

Las citas anteriores son suficientemente expresivas para ahorrarse cualquier comentario. Su traducción política fué la participación de los navarros, como anteriormente hemos visto sin ninguna resistencia y con carácter voluntario en todas las instituciones que se articulaban a nivel central: La Junta Suprema, Las Cortes de Cádiz y el poder militar, tanto para rechazar al invasor como para articular las reformas que la revolución liberal implicaba.

En segundo lugar, hemos de rechazar el carácter exclusivamente patriótico que el levantamiento tuvo en Navarra y que como hemos visto, para que se produjese hubo de esperar a las reformas liberales anunciadas por el gobierno francés. Ello no quita que al ser extranjero el que las imponía tuviese este movimiento popular una justificación patriótica; de la misma forma que las medidas anticlericales añadieron la justificación religiosa. Todo ello unido al prestigio de la institución Real en el Antiguo Régimen y de la situación de Fernando VII, prisionero del invasor van a hacer del lema "DIOS, PATRIA, REY" la justificación ideológica del movimiento.

2.-RESTAURACION DE FERNANDO VII Y RESTAURACION FORAL.

La salida de los franceses de España coincide

con el hundimiento del poderío de Napoleón, obligando a liberar a Fernando VII y a firmar la Paz de Valencay. Fernando VII regresa por la frontera catalana el 22 de marzo de 1814. Un plan de acción urdido por el Duque de San Carlos y el general navarro Francisco Javier Elío, capitán general de Valencia, consigue que los absolutistas firmen un escrito dirigido al Rey reconociendo la soberanía absoluta y el derecho divino del monarca.

Mientras el vizcaíno General Eguía, cerraba las Cortes y detenía en Madrid a los dos regentes y a los más significados diputados liberales, el 4 de mayo Fernando VII firmó un decreto en Valencia en el que declaraba que no juraría la Constitución y desaprobaba los actos de las Cortes.

Se anuló la obra revolucionaria de Cádiz y se volvió a la situación anterior a 1808. En Navarra, cesó la Diputación provincial y se constituyó de nuevo la antigua Diputación del Reino; el ex jefe político Miguel Escudero pasó a ser diputado del Reino y la corporación aceptando las reglas de juego del Antiguo Régimen, comisionó a los hermanos Francisco Javier y Joaquín Elío para que presentasen una exposición al rey solicitando la confirmación formal del régimen foral. El escrito, de claro sabor integrista (62) condena todas las reformas introducidas por la Constitución de Cádiz, de las que sólo cita la abolición de la Inquisición, y rechaza el Código gaditano pues

"no llegó a implantarse por sus legítimos representantes, esto es, por los Tres Estados congregados", apareciendo por primera vez un argumento que los foralistas de todos los tiempos emplearán hasta nuestros días, no sólo para invalidar la Constitución de 1812, sino también más tarde la ley de 1841.

Fernando VII por Real Decreto 14-VII-1814 ratificó "los fueros, leyes, usos, costumbres, exenciones y privilegios del Reino" (63). Sin embargo, ello no dejaba de ser una mera declaración formal. Las exigencias de la política concreta empujaría al Gobierno a continuar la tendencia abolicionista iniciada por Godoy. Los puntos de fricción seguirán siendo los mismos: contribuciones, aduanas y quintas.

En 1817 se reúnen Cortes. Ya hemos visto las reformas socioeconómicas que se intentan en ellas (64), así como el fracaso del proyecto de trasladar las Aduanas al Pirineo. Respecto a la concesión del DONATIVO, objetivo fundamental para el que se reúnen, queda en esta ocasión en evidencia, como las mismas Cortes reconocen que "se destruye la naturaleza que de voluntarios y graciosos tiene nuestros servicios" (65) y a la hora de negociar, el más fuerte impone sus condiciones.

Los primeros brotes de rebeldía contra el régimen absoluto fueron protagonizados por aquellos que ha-

bían sido jefes populares de la resistencia armada contra Napoleón. Las relaciones de los oficiales españoles con militares ingleses y las influencias ideológicas recibidas por aquellos otros que estuvieron varios años prisioneros en Francia contribuyeron a acrecentar los prosélitos del liberalismo en las filas del ejército (66).

Los militares liberales creían que con un golpe de audacia podía ser vencido el absolutismo, y éstos son los orígenes del Pronunciamiento. El primero de ellos tuvo lugar precisamente en Navarra, en septiembre de 1814, protagonizado por Espoz y Mina y su sobrino "Mina el mozo" que acababa de regresar de su cautiverio en Francia.

Olóriz, Campión y la historiografía posterior, han simplificado en exceso la explicación del golpe como una reacción orgullosa del guerrillero de la Independencia al no haber sido nombrado virrey de Navarra. Es verdad que hay que tener en cuenta este hecho, pero no se puede reducir a una cuestión personal, sino tratar de comprenderlo como una manifestación de una causa más profunda: el enfrentamiento de dos concepciones del ejército y las consiguientes tensiones que de ello se derivan. Si la guerra de la Independencia significó una oportunidad para que los hombres ascendieran de acuerdo con sus méritos, y llegaran a coroneles y generales campesinos que se habían rebelado como hombres de genio al frente de las guerrillas, la paz les trajo una injusta postergación y les impulsó a sumarse a

la causa de los descontentos (67).

Por otra parte, de 1811 a 1814, las reformas también habían alcanzado al Ejército: se había abolido el castigo corporal, las distinciones de nacimiento, los privilegios de algunos cuerpos etc (68), en una palabra, se había dado un gran paso en su democratización. En 1814, el general Eguía desde el Ministerio de la Guerra anulaba todo lo que fuera extraño al sistema de 1808, discriminando a los héroes de guerra y jefes guerrilleros en favor de los mandos del antiguo ejército. Este sector descontento comenzó a alinearse en las filas liberales y fué la situación que produjo los primeros pronunciamientos militares. Sus dirigentes: Mina, Porlier, Lacy, tras un ascenso espectacular habían sido postergados.

Ezpoz y Mina, después de haber sido el alma en Navarra de la resistencia contra el francés no consiguió el reconocimiento de sus tropas, ni se atendió la solicitud del grado de coronel para su sobrino. Se vió atacado y calumniado por los periódicos afectos al General Francisco Javier Elío y se le privó del mando militar de Navarra en favor del Conde de Ezpeleta, militar del antiguo ejército que durante aquellos cuatro años había vivido en Francia al margen de la contienda (69).

Si como parece hasta entonces Ezpoz y Mina no dió muestras de liberalismo y según el escrito de un sol-

dado de Borja en 1814 mandó fusilar la Constitución (70), bien pudo haber cambiado de opinión en contacto con su sobrino Martín Javier Mina, que regresaba de su cautiverio en Francia impregnado de ideas liberales y afiliado a la Masonería (71).

El levantamiento fracasa, la causa que defendían no era popular, y Espoz y Mina se refugia en Francia. Pero a partir de entonces, serán los cuadros militares no procedentes de la nobleza, defensores de una nueva concepción del Ejército (72) la columna vertebral del liberalismo radical en Navarra.

3.-TRIENIO LIBERAL Y GUERRA REALISTA.-CONFIGURACION DE LAS FUERZAS POLITICAS NAVARRAS.

El 1 de enero de 1820 el Teniente Coronel Rafael de Riego proclamó la Constitución de 1812 en Cabezas de San Juan. Seguido de una serie de pronunciamientos liberales, el movimiento, militar en un principio, se transforma en civil por la cooperación prestada por la población de las ciudades de Cataluña, Aragón y Galicia (73). La revolución no fue un simple golpe militar con suerte que expresaba el descontento del Ejército, sino que tuvo el apoyo de la gran burguesía mercantil gaditana y de los fabricantes de Barcelona entre otros sectores sociales; y el mis-

mo Consejo de Estado, ante la grave crisis hacendística y el fracaso de las reformas fiscales, no veía otra solución para acallar el descontento popular que la convocatoria de Cortes. Más que una revolución triunfante hubo la quiebra de un Estado que se desmoronó incapaz de resolver sus graves problemas (74).

Fernando VII tras el famoso "Manifiesto del Rey a la Nación española" en el que se leía la también famosa frase de "Marchemos francamente y yo primero por la senda constitucional" juró la Constitución de 1812 y convocó Cortes, que abrieron sus sesiones el 9 de junio con mayoría liberal. Se reanudó la obra revolucionaria de Cádiz y se puso en marcha toda su legislación liberal y desamortizadora. La unidad constitucional volvía a reducir a letra muerta el orden foral y la aduanas se trasladan de nuevo a la frontera con Francia (75).

A.-LA DIPUTACION DEL REINO Y LA CONSTITUCION DE 1812.

La historiografía fuerista ha tratado de silenciar o justificar la conducta de la Diputación del Reino en los momentos en que las instituciones liberales trataban de abrirse paso (1809, 1820, 1833) y el órgano depositario de la legitimidad foral aceptaba sin mayor resistencia sus transformaciones y asistía impasible y aun condes

cendiente a su propia desaparición. Para nosotros es lógico este comportamiento del órgano representativo de la oligarquía navarra, que como se ha visto estaba comprometida con el nuevo orden de cosas; sin embargo para las interpretaciones fueristas, nacionalistas y carlistas es duro admitir esta realidad que echa por tierra sus tesis de "incorporación forzada", "fueros arrebatados", incluso de "conquista extranjera", que según ellos marcaron el proceso de la revolución liberal y centralista.

La representación navarra en Cádiz se desautoriza por no haber sido nombrada por los navarros, olvidando el beneplácito que otorgó la Diputación del Reino "defraudada de la gloria de aspirar a concurrir a las próximas Cortes" e "intimamente persuadida de que la elección de V.E. será la de nuestro deseo" (76). En 1833 serán las circunstancias creadas por la guerra las que "coaccionarán" a la Diputación a obrar "antiforulmente" y a aceptar contra su voluntad el régimen liberal español (77). Pero, ¿y en 1820? El silencio más absoluto en torno a esta fecha; y es que en este momento ni hay una guerra de la Independencia, ni una guerra carlista para justificar actuaciones coaccionadas y sin embargo, la Diputación del Reino no puso la mínima resistencia a la desaparición del régimen foral y a su propia disolución en pro de la Unidad constitucional de la monarquía española.

En 1820, la Diputación actúa en perfecta armo-

nía y dependencia del Virrey; en un primer momento, ambos están a la expectativa de los acontecimientos y de la política de la Corte, pero ante la iniciativa de la Guarnición militar de jurar la Constitución, se unen al acto y la juran antes incluso de tener conocimiento de que el rey se hubiese decidido a hacerlo.

La Diputación es consciente de "que no puede tomar por sí resolución alguna en este asunto y aún quando estuviese autorizada faltaría a sus más sagrados deberes si se adelantase a manifestar su opinión sin saber "qual es la del Pueblo Navarro a quien tiene el honor de representar", y al no estar en sus atribuciones reunir Cortes, decide convocar a dos representantes de cada merindad para que determinen si la Diputación "jurará y publicará la otra Constitución o qué es lo que deberá ejecutar" como "órgano fiel a la voluntad de los pueblos" (78).

Observe el "carácter revolucionario" de la convocatoria. La Diputación, elegida por unas Cortes estamentales y delegada de las mismas, se dice representar al pueblo navarro, al que convoca inorgánicamente y a cuya voluntad mayoritaria se doblga por encima de cualquier autorización que procediese de las Cortes. De esta forma se esquivaba el veto del clero que de haberse reunido Cortes podía darse por seguro.

De todas formas, el anterior proyecto de circu-

lar sometido a la consideración del virrey no llega a enviarse, pues aunque la Guarnición anuncia que va a jurar la Constitución "para sí sólo sin mezclarse en usos, costumbres y leyes del país", y a pesar de que la Diputación es consciente de que "sus poderes no le permitían tomar parte activa en el asunto"... considerando que su obligación más sagrada como fin primario de toda sociedad civil era trabajar para mantener la tranquilidad pública y que su no concurrencia podía ser ocasión de turbarse el orden público y su asistencia contribuiría sin duda ninguna a mantenerlo... por la salud de la Patria y por plena conformidad determinó su concurrencia a la publicación y juramento de la Constitución Política de la Monarquía Española" (79).

El acta del juramento, firmada por los jefes de la Guarnición, los miembros del Ayuntamiento de Pamplona y toda la Diputación del Reino (80) recoge así los hechos:

"El día 11 del corriente marzo será glorioso en los fastos de la historia de Navarra (¡quién les iba a decir que los historiadores tratarían de silenciarlo!) pues que su memoria recordará a la posteridad que quando se trata del bien general de la Nación Española, nada omiten para lograrlo los que han tenido el honor de haber nacido españoles; Convencidos los habitantes de esta ciudad de Pamplona y la tropa que guarnece su Plaza y ciudadela

de que el objeto de toda España era fixar su propia felicidad cimentándola en la Constitución establecida en Cádiz el año de 1812, ansiosos por cooperar en la dicha universal, trataron de bulberla a establecer con toda solemnidad y a ese fin uniformaron los ánimos de la tropa y sus gefes con los de todo el vecindario y los de la Diputación del Reino y Ayuntamiento de su capital en concurso del cuerpo de consultores que se reunieron en la casa consistorial de la ciudad, salieron a las 10 de la mañana en toda pompa a la gran plaza denominada del Castillo; en la que ya preparada la tropa fueron recibidos con una música marcial y con los más vivos aplausos. Inmediatamente se publicó la Constitución y prestaron el juramento para observarla la tropa y sus gefes, La Diputación de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona con el cuerpo de sus consultores".

Concluido el acto pasó una Comisión representativa de la Guarnición, Ayuntamiento y Diputación (81) a invitar al Virrey a "Unirse a sus ideas" y jurar la Constitución, lo que efectivamente hizo; y "en seguida todos estos cuerpos a rendir las debidas gracias al todopoderoso cantándose al efecto un solemne Te-Deum en la Santa Iglesia Catedral con asistencia del Imo. Sr. Obispo y del respetable cabildo de la misma.

De tal forma que todas las fuerzas vivas de Navarra juraban la Constitución de 1812 y respaldaban el le-

vantamiento revolucionario antes de saber que el Rey lo hubiera hecho, pues como en la misma acta se recoge, aquella misma noche del 11 de marzo, durante la "general iluminación" que había dispuesto el Ayuntamiento para celebrar el acontecimiento se tuvo la satisfacción de anunciar al público en un solemne bando el decreto de S.M. del 7 del corriente en el que ofrecía jurar la Constitución, que había llegado por correo extraordinario a las 7 de la tarde.

Con la proclamación de la Constitución se torra ba de un plumazo todo el régimen foral y así lo entiende la Diputación que en un oficio al virrey considera que cesan sus funciones (82). El Virrey, sin embargo contesta que como "la planificación del nuevo sistema no puede ser obra de un instante" conviene que mientras llega el nuevo arreglo, el cual "para ser uniforme y ordenado debe empezar desde el centro y vaya descendiendo a las ramificaciones inferiores" "no se haga novedad en el sistema actual; y que "decidido ya el punto principal como es la admisión de la Constitución en toda la Monarquía, podemos tener de que inmediatamente se verificará otro arreglo; y en este concepto conviene que hasta entonces siga V.S. Iejer ciendo sus funciones por ser en beneficio del buen orden y de la pública utilidad (83).

Sin embargo el 16 del mismo de marzo, el Ayun-

tamiento de Pamplona "convencido de que la sola publicación de la Constitución Política de la Monarquía Española no puede producir los felices resultados que nos asegura, si no se pone en práctica lo mandado por la misma, y que su pronta realización exige la más perfecta armonía entre todas las Provincias de España, determinó en el día 16 elegir a imitación de otras provincias y eligió una Junta interina titulada del Gobierno de Navarra" (84), compuesta por representantes del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Guarnición y cuyo fin era "remover todo obstáculo y activar con el posible impulso la marcha del sistema constitucional". Al día siguiente nombró a Manuel José Quintana, jefe político interino de la Provincia y a Angel Sagaseta de Ilurdoz, secretario interino con voto.

La Diputación oficia a la Junta que "se comunica que la orden de cesar en mis funciones o las que estime más convenientes" y el mismo día la Junta manifiesta que "la Constitución Política de la Monarquía Española cuya plantificación me ocupa ahora no consiente que se prolongue por más tiempo el ejercicio de V. S. I. en las funciones que tan dignamente y con tan justa aceptación pública ha desempeñado hasta el presente...y deje a mi gobierno y dirección todo quanto hasta ahora esta al suyo (85).

La renuncia foral es total; ni siquiera se contempla la posibilidad de hacer valer el particularismo

histórico y salvar del fuero aquello que pueda ser compatible con la unidad constitucional. Y es todo un símbolo de la continuidad que se da en la clase política, que sea precisamente un antiguo diputado del Reino: Pedro Clemente Ligués y Navascués uno de los primeros jefes políticos constitucionales de Navarra (86). En su toma de posesión se dirige a sus paisanos, sentado un principio que será recogido por los liberales progresistas vascos: la renuncia a los fueros se justifica porque los derechos que otorgaban y los principios de libertad que suponían se recogen y perfeccionan en la Constitución política de la Monarquía: "Los nuevos derechos y libertades que habeis entrado en posesión después del juramento que habeis prestado a la Constitución Política de la Monarquía no están como vuestros antiguos privilegios dependientes del capricho de un Ministro que los atropellaba cuando le placía. ¿Sentíais vosotros menos que los Castellanos, Andaluces o Gallegos el peso del despotismo y arbitrariedad? ¿Bajo un gobierno semejante de qué servían vuestros fueros? Vuestros fueros que en gran parte ya no existían sino en el nombre hubieran al fin perecido y desaparecido enteramente. La Constitución ofrece una verdadera garantía de vuestros derechos políticos y civiles... Unidos pues hoy como verdaderos hermanos marchemos todos los españoles por la nueva senda de honor y gloria" (87).

Hubo sin embargo una voz que aunque coincidía con la

necesidad de la unidad constitucional para Navarra, "bien tan deseado", era partidario de hacerlo "guardando las formas" y que la decisión recayese sobre las Cortes de Navarra, convocadas exclusivamente para ese fin. Se trataba de la de Florencio García Goyena (88), comisionado de la Diputación en Madrid que en los días que precedieron al juramento de la Constitución por la Diputación escribía:

"soy de opinión que por el ministro de Gracia y Justicia se mande al Virrey de Navarra enviando los poderes de esto lo que convoque a Cortes para dentro de 12 ó 15 días y a efecto sólo de tratar de su incorporación lisa y llana con ABSOLUTA IGUALDAD Y UNIDAD bajo el nuevo Régimen constitucional al resto de la Monarquía... Las ventajas son conocidas; se respeta la Justicia y la adhesión como voluntaria será sincera y durable. ¿Qué se dirá si el nuevo orden de cosas, si el Reynado de Astrea principia por el despojo violento a todo un Reyno de sus derechos constitucionales, derechos que ha respetado o no ha podido arrancar el despojo de tres siglos? ¿Qué ventajas no sacarán ahora o en lo sucesivo de tal proceder los enemigos del sosiego y felicidad pública?". Está convencido de que "sus paisanos se unirán gustosos a la gran familia española y renunciarán a unos fueros que han amado con razón pues los hacían felices", pero que estarán "orgullosos de que la Nación toda se haya apropiado lo fundamental de ellos"; de tal manera que "al generalizarse nuestros derechos salen del estado precario y envates a que de continuo los esponía la rivali

dad y nuestra pequeñez".

Tenía razón García Goyena en pensar en las ventajas que podían sacar los enemigos de la Constitución; el no haberlo hecho según el comisionado preconizaba será uno de los argumentos centrales de fueristas, carlistas y nacionalistas, que no aceptarán las Constituciones españolas ni la ley de 1841 por no haber sido aprobadas: "por los Tres Estados del Reino reunidos en Cortes" según preveía la fórmula foral (89).

La cuestión radica en saber si históricamente es to hubiese sido posible y si el estamento eclesiástico, sin cuyo consentimiento no podía tomarse ninguna decisión, hubiera dado su aprobación a una medida que amenazaba su situación privilegiada. En definitiva, la misma situación se produjo en Castilla y como diría gráficamente Yanguas y Miranda en 1838 "no hubo otro remedio que cortar un nudo que no podía soltarse" (90). Y es que de lo que se trataba no era solamente de transformar una legalidad, sino de res paldarlo con una nueva legitimidad. Detrás del cambio de ley estaba toda una nueva valoración del poder y motivación a su obediencia. Utilizando la terminología empleado por Max Weber, se trataba del paso de una legitimidad tradicional, basada en la sacralización del pasado a una legiti midad de tipo racional, propia del régimen liberal en la que la ley se obedece por ser expresión de la voluntad ge-

neral (91).

A pesar de todo, una institución de la legitimidad precedente: la Diputación del Reino, dio su consentimiento al nuevo régimen jurando la Constitución. Ello se explica en primer lugar, porque como hemos intentado analizar en la primera parte de este trabajo, la clase dominante navarra, la nobleza terrateniente, estaba interesada en las transformaciones que el liberalismo implicaba. Esta realidad, no era exclusiva de Navarra, sino característica de la revolución liberal española, que se acercó más al modelo prusiano que al francés y una de las clases privilegiadas del Antiguo Régimen, la Nobleza, ante la debilidad de la burguesía controló el proceso desde posiciones de poder y transformó las relaciones de producción agraria en su provecho. En segundo lugar, ello fue posible gracias a la distinta relación de fuerzas, cuyo origen desconocemos que se daba entre las Cortes de Navarra, en las que el clero tenía un veto absoluto sobre las decisiones, y la Diputación del Reino en la que a pesar de que era presidida por un miembro del estamento eclesiástico, era el único clérigo de un número de 7 y sólo tenía voto en caso de empate (92). De los diputados salidos de las Cortes de 1817-1818, que lo eran en 1820, por lo menos cuatro: Guendulain, Vidarte, Galdiano y Ligués jugaron un papel activo en el nuevo régimen liberal (93); se daba una continuidad sociológica en la clase política navarra; cambiaba la forma de

dominación, pero no el sujeto de la misma.

B.-EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y LOS FUEROS

A lo largo del Trienio, Navarra envió de nuevo sus representantes al Congreso nacional y amoldó sus instituciones a lo prescrito en el código constitucional eligiendo sus diputados provinciales con arreglo a la normativa vigente. Unos y otros dieron prueba de un "constitucionalismo" y "patriotismo" intachable, y si la participación de los representantes navarros en Bayona y Cádiz había ido acompañada de declaraciones más o menos firmes de "particularismo foral", de nada parecido hay testimonio en este período, y la total homologación política y administrativa de Navarra con el resto del Estado se realizó sin resistencia alguna.

a.-ELECCIONES GENERALES Y PROVINCIALES

a'.-LEGISLATURA 1820-1821

Por el decreto del 22-III-1820 se convocaron Cortes según la normativa de la Constitución de 1812. El 20

de mayo comenzó en Pamplona el último acto del proceso electoral (94). Presidido por el jefe político interino: Pedro Clemente Ligués y Navascués (95), se reunió la Junta electoral de provincia compuesta por los nueve electores que habían resultado elegidos por sus respectivos partidos o merindades (96):

Por Pamplona: José Domingo Pérez Tafalla, alcalde constitucional de Pamplona.

Juan Crisóstomo de Vidaondo y Mendinueta

Por Estella : Martín Angel Santamaría, abad de la parroquia del lugar de Azcona.

Juan Miguel Modet, vecino de Estella.

Por Tudela : José Alonso, magistrado de la Audiencia de Valencia, residente en Corella.

José Yanguas y Miranda, vecino de Tudela y secretario del Ayuntamiento constitucional.

Por Sangüesa: Pedro Uriz, abad de la parroquia de Santiago de Sangüesa.

Manuel de Uriz, vecino de Sada.

Por Olite : Ramón de Azedo, vecino de Falces.

Una primera reflexión sobre la personalidad de los elegidos nos lleva a contrastar la elección de Tudela con las de Estella y Sangüesa, expresiva de las fuerzas sociales dominantes en cada zona. Mientras en la capital de la Ribera, feudo de la aristocracia terrateniente, se eli-

ge a dos de las personalidades más destacadas del liberalismo no sólo provincial, sino en el caso de José Alonso, peninsular (97), que entonces posiblemente comenzaban su carrera política; las merindades de Estella y Sangüesa, junto a dos clérigos eligen dos notables rurales; uno de ellos: Manuel Uriz de Sada, formará parte de la Junta de Gobierno Realista en 1822; y el otro, de los Nodet de Estella, destacados carlistas en 1833, constatando la influencia de estos dos sectores sociales en esta Zona Media de Navarra. La merindad de Pamplona por el contrario, que también abarca parte de esta Zona Media, ve compensada la influencia del clero y pequeña nobleza, por la de la aristocracia liberal baztanesa y la de la alta nobleza residente en Pamplona.

El día 22 resultaron elegidos diputados a Cortes:

1º.-El mariscal de campo José María de Ezpeleta, Marqués de Montehermoso (98).

2º.-Alejandro Dolarea (99)

3º.-José Francisco Lecumberri, vicario de la parroquia de San Nicolás de Pamplona.

4º.-Como suplente: José Luis Munárriz.

No recogen las actas el desarrollo de la votación, y por lo tanto, no se puede saber cómo se repartieron los votos. Ezpeleta y Dolarea eran constitucionalistas

y ministeriales. Y de Munárriz, director de la Cía de Filipinas, puede pensarse lo mismo. Respecto a Lecumberri, por el sistema de elección que no daba posibilidad a "la oposición" por efectuarse el nombramiento de uno en uno, es de esperar que también lo fuese a pesar de ser clérigo. Por otro lado, el hecho de ejercer su ministerio en la parroquia del "barrio elegante" de Pamplona, puede explicar su afinidad ideológica con la aristocracia (100).

Al día siguiente, el 23 de mayo, tal y como estaba prescrito en el art. 328 de la Constitución, los mismos electores de partido procedieron al nombramiento de la Diputación provincial, resultando elegidos por pluralidad absoluta de votos:

- 1º.-Juan Crisóstomo de Vidaondo y Mendinueta, vecino de Pamplona (101).
- 2º.-Cristóbal María de Ripa, Marqués de Jaureguizar, vecino de Pamplona.
- 3º.-José Manuel Lombardo de Tejada, abad de Dicastillo.
- 4º.-Matías Octavio de Toledo, vecino de Sangüesa.
- 5º.-Joaquín Morales y Galdiano, vecino de Corella.
- 6º.-José María Ezquerro, presidente de la Sociedad patriótica del Vencerol de Tudela.

7º.-Benito Ochagabía, vecino de Falces.

Y como Suplentes:

1º.-Juan Agustín de Ezcarti, del comercio de Estella.

2º.-Benito Díaz del Río, vecino de Puente la Reina.

3º.-Gabriel Antonio Mancho, vecino de Ochagabía

El 29 de mayo se instaló la nueva Diputación provincial (la Diputación del Reino había sido obligada a cesar el 17 de marzo) "jurando en manos del jefe político, guardar la Constitución, observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir las obligaciones del cargo, con arreglo al art. 337 de la Constitución, sin recordar juramente de fueros" (102).

b'.-LEGISLATURA 1822-1823

Acercándose la época de celebración de nuevas elecciones de Diputados a Cortes para la legislatura 1822-1823 (103), el Gobierno moderado trata de influir en los resultados a través de una circular que con carácter de "reservado" llegó al jefe político procedente del Ministerio de la Gobernación (104), para que con la "debida anti-

cipación adopten cuantas medidas crea oportunas para conseguir el objeto esencial de que las personas en quienes puede recaer la elección para encargo tan delicado reúnan las circunstancias siguientes:

1º.-Adhesión a la Constitución y al Rey constitucional.

2º.-Que hayan dado pruebas de su amor a la independencia de la patria, y que en la última invasión de los franceses no hayan obtenido destino del Gobierno intruso, ni mantenido relaciones que hagan dudoso su patriotismo.

3º.-Que no pertenezcan a los que la opinión pública designe fundadamente como promovedores de principios y opiniones exageradas.

4º.-Que los elegidos sean tan amantes de las nuevas instituciones como interesados en la tranquilidad de su patria; y que para esto, siguiendo el espíritu del artículo 92 de la Constitución (105), se procure que en lo posible sean de la clase de propietarios, o de aquellos que por su posición y por sus relaciones en la sociedad deban resistir innovaciones peligrosas y contrarias a la misma Constitución.

5º.-Que como los Eclesiásticos, que puedan merecer la confianza pública para ser nombrados Diputados en Cortes serán más útiles empleándose en ilustrar al pueblo en sus respectivas Diócesis, convendrá que los que vengan

al Congreso sean en muy corto número".

En resumen: ni absolutistas, ni afrancesados, ni curas, pero tampoco liberales "exagerados". Los quieren moderados y propietarios para proseguir las reformas necesarias "pero dentro de un orden".

Siguiendo las anteriores instrucciones, el jefe político, Luis Veyán, envía el 29-VIII-1821 a cada uno de los Ayuntamientos constitucionales de la provincia una circular que a la vez que ordena la celebración de las Juntas parroquiales, recomienda se nombren a "personas conocidamente afectas al Gobierno constitucional" no dejándose fascinar "por el falso patriotismo de quienes posponiendo el bien general al suyo privativo particular... Han quedado resentidos por las reformas decretadas, sin las cuales no podían remediarse los males que padece la patria, y quisieran hacernos retrogradar a un sistema de gobierno de cuyos abusos sacaban ellos tanto lucro a costa de las clases más industriosas de la sociedad" (106).

El 1-XII-1821, se reunieron en Pamplona los nueve electores de partido (107).

Por Pamplona: Cristóbal María de Ripa, Marqués de Jaureguizar, vecino de Pamplona.

Benito Díaz del Río, vecino de Puente la Reina.

Por Estella: Felipe Martínez de Morentín.

José Arina, beneficiado de la villa
de Los Arcos.

Por Tudela: Marqués de Montesa, vecino de Tudela.

Mariano Aisa, vecino de Cintruénigo.

Por Sangüesa: Joaquín Javier Bayona, vecino de Aoiz.

Gabriel Antonio Mancho, vecino de Ochagavía.

Por Olite: Sebastián Ramírez, beneficiado de Tafalla.

La circular del jefe político había surtido efecto y esta vez Estella y Sangüesa contaron "con personas conocidamente afectas al gobierno constitucional" como era lo recomendado. Es posible que José Arina, beneficiado de Los Arcos no lo fuera, pero Felipe Martínez de Morentín sería una de las víctimas de los realistas en Estella (108). Respecto a Sangüesa, Joaquín Javier Bayona y Ezpeleta, militar, diputado del Reino procedente de las Cortes de 1801 por el brazo noble, luchó al mando de tropas liberales contra realistas y carlistas y en 1839 la reina le nombró se-

nador por Navarra. El elector de Olite, Sebastián Ramírez, beneficiado de Tafalla bien pudiera ser el mismo al que ha de referencia Mutiloa al hablar del clero liberal en el Trienio (109).

El día 3 se procedió a la elección de Diputados, resultando elegidos:

1º.-José Luis Munárriz, individuo de la Dirección General de Estudios.

2º.-Fermín Álvarez de Eulate, penitenciario de la catedral de Santiago de Galicia.

3º.-Miguel Escudero, vecino de Corella (110).

Suplente: Angel Sagaseta de Ylurdoz, alcalde constitucional de Pamplona.

Al día siguiente se eligieron los cuatro diputados provinciales que debían renovarse según el art. 328 de la Constitución (111), que resultaron ser:

1º.-Manuel Jiménez Diaro, vecino de Castante por Tudela.

2º.-Juan Agustín de Ezcarti, vecino y del comercio de Estella por la merindade de Estella.

3º.-Juan Francisco Irigoyen, vecino de Aoiz por la merindad de Sangüesa.

4º.-Francisco de Villanueva, vecino de Tafalla por la merindad de Olite.

Y como suplentes:

1º.-Joaquín Aperregui, coronel retirado, vecino de Tudela.

2º.-Domingo de Jáuregui, vecino de Marcilla.

En el epígrafe siguiente al analizar la política seguida por la Diputación provincial, veremos cómo la adhesión a los principios constitucionales, tanto de los Diputados a Cortes como de los provinciales fue incuestionable y a la hora de las actuaciones concretas hubo total penetración entre unos y otros.

b.-POLITICA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

No se puede dudar de la profesión de fe constitucional de la primera Diputación provincial del Trienio. El 17-VII-1820 envía una felicitación a las Cortes con motivo de su constitución. El escrito, ejemplo del mayor rebuscamiento estilístico, me resisto a no transcribirlo íntegro.

Dice así:

"La Diputación Provincial de Navarra que ansiosa suspiraba por la instalación del Augusto Congreso Nacional, ve ya con toda la efusión de su gozo verificado este feliz acontecimiento, memorable en nuestra historia, indeleblemente grabado en los pechos Navarros, y por el que felicita a los representantes todos de ambos mundos la más completa enhorabuena. ¡Qué tiernos sentimientos! ¡Qué júbilo tan puro! ¡Qué inocente alegría la que manifestó el Pueblo Navarro luego que se le anunció el primer acto del Congreso Nacional y el primer paso para su prosperidad!. humildes preces al todopoderoso, músicas marciales, repetidas vivas a la Religión, a la Nación, y al Rey, iluminación general, fueron las señales con que los patentizó. Sí, Padres de la Patria, vosotros sois los que como sabios Pilotos habéis de conducir el zozobran te bagel del Estado al grandioso puerto de la pública felicidad. Navarra tiene puesta en vosotros sus ojos, y la Nación entera se promete los más hermosos resultados de vuestras sabias Leyes y benéficos Decretos. La Provincia de Navarra, siempre adicta a un gobierno constitucional y enemiga de la arbitrariedad, será la observadora más exacta, y su defensora más acérrima y jamás desmentirá con sus obras este lenguaje que dirige a los representantes de la Nación por el órgano de su Diputación Provincial" (112).

La renuncia al particularismo foral por parte de los representantes navarros es total. La sumisión al poder central llega a tal extremo que aceptan sin protestas la nueva división administrativa de la provincia que segrega de Navarra los municipios de Fitero, Cintruénigo y Viana, que pasan a Logroño (113).

El funcionamiento de la Diputación navarra se asimila a las del resto de la península y se sujeta a lo prescrito en la Constitución: "Repugnó la continuación de síndicos y consultores pues suponía que por el sistema constitucional habían caducado las atribuciones de la Diputación para resistir a nombre de Reino el cumplimiento de toda R.O." (114). Pierde la autonomía financiera y el Presupuesto provincial se sujeta a los trámites prescritos y al tiempo que lo envía al Gobierno para su aprobación, solicita la facultad para exigir a los municipios el repartimiento "porque sin esta habilitación nada puedo repartir a los Pueblos para salir de mis justas obligaciones" (115). Por eso al cerrarse las Cortes el 29-VI-1822 sin haber aprobado el proyecto de reglamento presentado por la Comisión de Diputaciones Provinciales para el gobierno económico-político de las provincias, se autoriza en un artículo supletorio "el uso de los arbitrios que juzguen convenientes para cubrir sus presupuestos dando cuenta a las Cortes en la próxima legislatura para que recaiga la aprobación conveniente" lo que se comunica a la Diputación de Navarra

(116).

Era el fin de la autonomía administrativa, y en muchos casos se tendría que sufrir la falta de agilidad que todo centralismo implica, como en el caso de la venta de corralizas, que ahora tiene que someterse a los lentos trámites del poder central. Por eso, la Diputación, interesada en el proceso de privatización de la propiedad, eleva una representación al Congreso Nacional en 1820 "para que se adopte por las Cortes una medida general sobre el modo de instruir por las Diputaciones provinciales esta clase de expedientes, simplificando en lo posible esta operación" (117). No se reivindican fórmulas pasadas ni un trato especial, pero la experiencia "centralista" se tendrá en cuenta y la autonomía administrativa, y no sólo por razones de eficiencia será valorada por los liberales navarros cuando se les brinde la oportunidad del arreglo foral de 1841.

Tres son las preocupaciones centrales de la Diputación, que aparte del levantamiento realista, se reflejan en la ininterrumpida correspondencia que mantiene con los Diputados a Cortes por la provincia: Contribuciones, quintas y fundamentalmente la garantía de la Deuda Pública navarra.

a'. -CONTRIBUCIONES

En una exposición a las Cortes en el mes de julio de 1820 la misma Diputación reconoce que "Navarra al dejar su constitución antigua y privativa se somete de hecho a mayores gravámenes en favor de toda la Nación Española: el sistema de contribuciones, sea este cual fuera, va a serle más gravoso que el antiguo de los donativos..."

(118). Sin embargo, dentro del marco constitucional, trata de procurar reducir la contribución que le corresponde tratando de valorar "por lo bajo" la riqueza imponible de la provincia. En la misma exposición anterior, adelantándose al plan fiscal del nuevo gobierno, rechaza por excesiva la valoración realizada por las Cortes generales de 1813, que eleva a 155.147.875 reales vellón la riqueza territorial, industrial y comercial de la provincia; y aun reconociendo la inexistencia de estadísticas provinciales, da como más fiable el estadillo realizado por las mismas fechas (1813) por el gobierno francés con finalidades fiscales y "que tan sólo atribuye a Navarra en los mencionados artículos 89.797.577 r.v.; advirtiendo además, que sobre esta valoración habría que considerar respecto a la riqueza comercial, la disminución considerable que experimentará el comercio en lo sucesivo con el traslado de las Aduanas a la frontera (119).

El 27-VI-1822, los diputados a Cortes por Nava-

rra envían a la Diputación los cupos de las contribuciones asignadas a la provincia para el próximo año económico:

"En la contribución directa de 150 millones sobre la riqueza territorial y pecuaria le corresponden 3.593.971 r.v.

En la de 100 millones de consumos 1.668.594 r.v.

Y en la de 20 millones sobre edificios urbanos: 249.868 r.v.

TOTAL: 5.512.433.

El 28-VI-1822 fueron aprobados los repartimientos de las contribuciones entre las provincias (120). Nada sabemos del modo en que se recaudó la cantidad asignada, ni si la Diputación habría aceptado la sugerencia que los Diputados a Cortes le hiciera. Estos últimos proponían la fórmula presentada por la Diputación de San Sebastián que en una Exposición a la Comisión de Hacienda de las Cortes se comprometían a "entregar en Tesorería la monta de las contribuciones asignadas a la provincia en el tiempo determinado bajo una pequeña remuneración (no la designan) por el trabajo de administrar por medio de sus Ayuntamientos según su antiguo sistema, con tal que no intervengan los Agentes del Gobierno en esas diligencias" (121).

Navarra ya estaba homologada fiscalmente con el resto de las provincias. Ya había una experiencia fiscal

"estatal" (122) y un término de comparación con la fiscalidad "foral". Las ventajas de ésta última iban a dar que pensar a los liberales navarros que en la próxima etapa liberal que comienza en 1834, aun los más radicales partidarios de la abolición foral iban a considerar la fiscalidad autónoma como "lo bueno del fuero" que había que salvar.

b'. - QUINTAS

"El reemplazo del Ejército va a serle indispensable (a Navarra), cuando bajo su antiguo gobierno ha sabido frecuentemente eludirlo..." reconocía la Diputación en la Exposición anteriormente citada (123).

En 1818 Fernando VII había conseguido que Navarra y Vascongadas aceptasen contribuir regularmente al servicio militar comprometiéndose a una compensación pecuniaria en lugar del servicio (124). Los pueblos casi no lo advirtieron. Al no acudir los mozos personalmente, el dinero que los sustituyó se confundía con el Donativo. Pero en esta segunda etapa constitucional, se establece el reclutamiento obligatorio (125). Navarra y Vascongadas ya habían entregado en 1818 la cantidad correspondiente al reemplazo de 1818, 1819, 1820 y 1821 (Navarra 4 millones de r.v.). En 1820, obligatorio el servicio, se pretende con indudable lógica y justicia se descuenta de la contribución pro-

vincial lo ya pagado por los dos últimos años (126). Ello es una prueba de la admisión sin restricciones del servicio militar. No vamos a insistir en la impopularidad de la medida; baste apuntar que a ella atribuye un contemporáneo liberal: José Alonso, el que por entonces "engrosasen las facciones" (127). Por eso en plena escalada realista la Diputación pretende la suspensión temporal de decreto de reemplazo, que en las circunstancias por las que atraviesa la provincia considera "impolítico" y "alarmante" (128). Los Diputados a Cortes por Navarra, y es una de las pocas veces que no están de acuerdo con la Diputación, no consideran oportuna semejante solicitud, sino por el contrario, dada la proliferación de facciosos en la provincia "es de urgencia su ejecución para impedir que llegue a verse esa provincia en la situación de la de Cataluña..." (129).

c'. -DEUDA PUBLICA

Es el asunto de la Deuda Publica el que más preocupó a nuestra Diputación, hasta el punto de poder asegurar que el afán de garantizar los intereses de los "capitalistas" navarros iba a ser uno de los factores que más iba a condicionar la actuación política hasta su favorable resolución en el arreglo foral de 1841.

"Una de las cargas que la Diputación del Reino

echó sobre sí con el aplauso de Carlos III y su ministro Floridablanca, fue la construcción de Caminos. La Diputación se hizo cargo de ellos con carácter exclusivo en 1783 a fin de trazar una red completa tomando capitales para este fin (130). El sistema de portazgos y cadenas que se estableció para arbitrar recursos, apenas cubría los gastos de mantenimiento y en 1820, el ramo de expedientes de Caminos tenía contra sí el capital de 16.439.799 r.v. y 508.448 r. de rédito anual. Todo ello unido a los capitales que tenía contra sí el expediente del Vínculo (131) y otros préstamos, hacían ascender el total de la Deuda Pública navarra a 23.952.830 r.v.

Las Cortes de 1817-1818 preocupadas por este asunto habían creado nuevos arbitrios y elevado los portazgos para la solución de la Deuda (132), pero sobre todo "para justa satisfacción y plena seguridad de los capitalistas" establecieron "la obligación subsidiaria de los pueblos" (133).

El endeudamiento público no era problema exclusivo de Navarra y la situación crítica de la Hacienda de la Monarquía había conducido a una inflación galopante de títulos contra la Corona. Los liberales de Cádiz dispuestos a asegurar los intereses de los capitalistas reconocieron como Deuda Pública todo tipo de títulos y vieron en la desamortización el medio para solventarla y afianzar el cré-

dito público (134). Las Cortes del Trienio afrontaron el problema de la Deuda pública con la seriedad de un Estado moderno (135); el Ministro de Hacienda Canga Argüelles presentó una memoria sobre ello y el decreto 9-VIII-1820 disponía la inmediata venta en pública subasta de todos los bienes nacionales afectos a la extinción de la Deuda pública..." (136).

La suerte de los tenedores de Deuda pública parecía ir ligada al triunfo del liberalismo y la buena disposición del Gobierno intenta ser aprovechada por los diputados navarros. En la Exposición, que ya hemos hecho referencia con anterioridad, que la Diputación dirige al Congreso Nacional en julio de 1820 apunta que "cualquiera que sea la obligación en que a virtud del nuevo sistema general de gobierno se constituya Navarra con relación a la Nación y al Estado, no puede ni debe en reglas de justicia perder aquellas físicas y reales que constituyan su Hacienda pública". Y como si los títulos de los acreedores navarros fuesen más cualificados que los del resto de acreedores de la Monarquía: "... si tales créditos se confundiesen con los demás de la Nación formando una masa general con éstos, se irrogaría a Navarra y a sus acreedores el mayor perjuicio; se faltaría a la exencia legal de un contrato solemne celebrado entre partes y en tiempos legítimos..." (137).

Los Diputados navarros, en acción coordinada con los de las Provincias Vascongadas, que por el mismo motivo

de construcción de caminos, estaban en situación parecida, van a dar la batalla en las Cortes para solucionar "el negocio quizá el más interesante que hoy tiene la provincia" (138). La iniciativa va a correr a cargo de los guipuzcoanos, que como en el asunto de presupuestos demuestran en este momento histórico una mayor sagacidad política.

El 8-XI-1820 las Cortes decretaban "que no se grave con nuevas contribuciones a las provincias Vascongadas y Navarra hasta que estén relevadas de su Deuda pública"; y por otro decreto del 25-VII-1821 se establecieron una serie de arbitrios como medios para el pago de esa deuda. La Diputación de Guipúzcoa considera las medidas insuficientes y el 14-III-1822 envía una Exposición a las Cortes proponiendo la solución a tan importante negocio pues "jamás puede presentarse asunto que por su origen reclame en tal alto grado los desvelos de esta Diputación como la suerte de la Deuda pública de la provincia". La solución se reduce a ceder su Camino Real con todas sus cargas a la Nación y "no halla otro medio más justo, más equitativo ni más razonable, sino el de que de la contribución territorial y de consumos que se señalen anualmente a esta provincia se apliquen 680.384 reales al año para que en cumplimiento de las condiciones pactadas con estos acreedores se les paguen los 340.192 reales de intereses anuales y el resto se destine exclusivamente a la luición progresiva de capitales.

Los argumentos "iusnaturalistas" con que defienden el sagrado derecho de los capitalistas y la santidad de los contratos son fiel reflejo de la nueva ideología triunfante: "¿Puede haber reclamación más justa y más legítima... (que) cumplir religiosamente las condiciones pactadas con las personas que entregaron sus fortunas...? Las leyes fundamentales jamás permiten alterar los actos intrínsecos de la justicia conmutativa, pues que teniendo ésta por escudo el derecho de gentes, prescribe la inviolabilidad de los contratos y su religiosa observancia... Son estos principios de eterna verdad..." (139).

El 29-IV-1822 las Cortes resuelven en sentido favorable la anterior propuesta (140); el 6-V-1822 los seis diputados de Alava, Navarra y Vizcaya proponen a las Cortes "se sirvan declarar que la resolución dada en sesión 29 de abril último acerca de la deuda pública de Guipúzcoa sea extensiva con la debida proporción a la de las provincias de Alava, Navarra y Vizcaya", y el decreto 29-VI-1822 articula la forma de realizarlo (141). El 1-VII-1822 la Diputación de Navarra queda enterada del modo con que se ha terminado el importante negocio de la deuda pública de esta provincia" (142).

En 1824, la vuelta al antiguo Régimen traerá la desesperanza para estos acreedores y en 1833 el Liberalismo encontrará en ellos un firme apoyo (143). De nuevo la

Deuda pública condicionará el acontecer político hasta su solución definitiva en la Ley de Modificación de Fueros de 1841.

Si por todo lo expuesto anteriormente hay un claro conformismo de la Navarra oficial respecto a la plena integración de Navarra en el estado liberal español y por consiguiente una renuncia implícita a su particularismo foral, sí conviene decir algo sobre el sentido de esta renuncia.

En la Exposición varias veces aludida que en julio de 1820 dirige al Congreso la Diputación provincial aparecen unas ideas clave que mantendrán como constante los liberales navarros y que más adelante utilizarán con fines políticos. La existencia de Navarra hasta entonces como "Reino de por sí" independiente de Castilla, el carácter "constitucional" y moderado de su Monarquía, las ventajas de todo tipo que tal situación confería a sus vecinos, la "generosidad" de los navarros en ceder sus ventajas en favor de toda la Nación Española; y por último la justificación de la renuncia a su régimen privativo por encontrarse los principios de justicia y libertad de que hasta entonces gozaban en la Constitución de 1812.

La visión que de la Historia de Navarra se da en el escrito no difiere de la que hoy todavía se mantiene y en la que haciendo abstracción de realidades históricas se

interpreta el pasado utilizando categorías de nuestro tiempo. Comienza la exposición afirmando la tenacidad de los navarros en mantener a toda costa su independencia y libertad contra romanos, godos y mahometanos (144). La Monarquía navarra tuvo un origen "pactista" y el poder del rey fue siempre limitado pues los navarros "tuvieron por consejo sano y necesario cenir y estrechar algún tanto el poder y autoridad que le conferían, y tal fue la conducta de los Navarros, antes de elegir por su Rey a Don García Jiménez señor de Abarzuza y de Amezcoa" (145). Navarra "se unió a la Corona de Castilla con unión igualmente principal, a condición de conservar sus fueros, su territorio y formando por sí sólo una Monarquía moderada de modo que Castilla y Navarra tenían un mismo Rey físico pero distintos reyes legales" (146). "Gozaba (Navarra) de tales ventajas que le ponían fuera del nivel de las demás Provincias de España, si de estas no quieren exceptuarse las bascongadas".

¿Por qué, pues, no mantener situación tan ventajosa?. Porque "Empero la pequeñez de Navarra, la constante tendencia de los Ministros a allanar, la emulación continua de las Provincias y un sin número de circunstancias, cuyo detalle no es del propósito actual, han sido causa de que este Reino no reportase, a la verdad, las utilidades que podía y debía prometerse de su sistema de gobierno".

Por eso los navarros han admitido y jurado la Constitución de 1812 que si por un lado "hermanando y

uniendo a todos los Reinos y Provincias debe señalar la época de la felicidad nacional", por otro "ha desenvuelto y reducido a método y claridad, los luminosos principios de gobierno que confusa e imperfectamente sancionaron los Navarros en 716, como puede verse en su fuero general".

(147).

De esta justificación de la renuncia al régimen foral privativo por ser asumidos los principios que albergaba en el Código constitucional y que veremos repetida en todos los liberales navarros, desde Yanguas hasta Olave, se desprende la idea de que valoraban los fueros, no como expresión política particularista de un pueblo, sino por los principios benéficos que reportaban sobre el régimen del resto del Estado.

Por último y cayendo en una relativa contradicción pretenden presentar la integración como un acto de "generosidad". Y digo contradicción porque si consideraban progresiva y necesaria la integración, no hay sitio para la "generosidad". Aunque toda opción ventajosa pueda tener su contrapartida, como no cabe duda que sucedía en aquella situación, la decisión, en definitiva no está movida por la generosidad, sino por una valoración de lo que se pierde y se gana. Sin embargo, será ésta también una constante en las declaraciones políticas de los liberales navarros, que si hacia dentro destacarán las ventajas de la abolición foral, hacia fuera (Madrid) no cesarán de recordar la

"abnegación, la generosidad de los navarros al renunciar a su independencia en aras de la unidad de la Patria, tratando de rentabilizar política y sobre todo económicamente tan patriota conducta, pues todo ello se hizo "con aquella generosidad propia de este pequeño Reino, que ha sido, es y será constitucional por temperamento, por costumbre y por principios". Porque generosidad es la renuncia a "la exención de mil impuestos y gabelas" y "someterse de hecho a mayores gravámenes en favor de toda la Nación Española", así como al "reemplazo del ejército que va a serle indispensable".

Después de tanta generosidad, ¿qué menos podía pedir la Diputación que un tratamiento de favor para sus tenedores de Deuda Pública?. A ella va dedicada la mayor parte de la exposición citada.

c.-CONFIGURACION DE LAS FUERZAS POLITICAS NAVARRAS

Con las reformas liberales, los elementos de tradición existentes en la sociedad navarra vuelven a ponerse de manifiesto, y sin un enemigo exterior que combatir, las posiciones se clarifican. Si durante la guerra de la Independencia se vislumbran ya las tres opciones que van a dominar la dinámica política navarra durante el siglo XIX, en este momento quedan perfectamente definidas.

La primera guerra carlista no será más que el segundo acto del conflicto.

a'. -REALISTAS

Los partidarios del Antiguo Régimen van a recurrir a la fuerza para derribar el nuevo orden liberal. Desde el primer momento no dejan de conspirar. En Bayona se establece una Junta Absolutista presidida por el general Egüa, y desde el verano de 1822 funciona una Regencia en Seo de Urgel cuya autoridad reconocen todos los realistas españoles. La tradición guerrillera de la guerra de la Independencia es recogida por los realistas con una nueva bandera y levantan partidas sobre todo en el País Vasco y Cataluña.

La jerarquía eclesiástica que en un principio había recomendado que se aceptara la Constitución, pasó a la oposición activa con los ataques a sus propiedades y jurisdicciones. Para las Ordenes religiosas la caída del liberalismo era condición misma de su supervivencia; por lo tanto se convirtieron en sus enemigos más violentos y declarados (148).

Que los intereses del clero y de un sector de la nobleza fueron los móviles del levantamiento lo prueba el manifiesto del Marqués de Mataflorida, miembro de la Regencia

cia de Urgel, contra la obra de las Cortes: "... sus Cortes han extinguido los MAYORAZGOS, sin los que no hay dignidad hereditaria ni pueden conservarse la nobleza y jerarquías que forman el apoyo y esplendor del trono... Se ha ridiculizado al CLERO y despojado de sus inmunidades y privilegios observados desde los siglos más remotos, se les ha privado de sus diezmos... También se ha extinguido el Tribunal de la Fe confiscándole sus bienes... (149).

Los mismos móviles encontramos en una Exposición que realistas aragoneses dirigen a Fernando VII al finalizar la guerra para pedir el ascenso a Mariscal de campo de Santos Ladrón: "Los españoles bien hallados y gobernados por sus antiguas leyes fundamentales jamás podrán desear ni reconocer otro sistema gubernativo que el MONARQUICO ABSOLUTO... V.A.S. ha conocido sin duda el carácter, la índole y los deseos de esta nación magnánima y en su consecuencia reponiendo las cosas al estado que tenían a principios del año 1820, ha organizado de nuevo los tribunales; ha arreglado el sistema de contribuciones; ha reintegrado al clero secular y regular en todos los derechos de que la irreligión y la impiedad le habían despojado; ha restablecido la extinguida compañía de Jesús; y sólo resta que restablezca también el santo tribunal de la Inquisición y se vuelvan a la nobleza sus privilegios y prerrogativas..." (150).

La extinción de mayorazgos no afectaba por igual a toda la nobleza. Mientras que la alta nobleza, dueña de grandes fincas veía compensada esta pérdida por la liberalización de su propiedad, la pequeña nobleza veía con ello amenazada su estabilidad ("dignidad hereditaria"). Por eso no es casual que sea la Zona Media de Navarra, caracterizada por la división de la propiedad y donde este tipo de nobleza está más generalizada el foco principal del levantamiento, y concretamente su corazón: la Valdorba (151).

Esto no quiere decir que el levantamiento no fuera popular en el resto de Navarra como veremos que lo fue, sino que precisamente aquí mejor que en otras partes, el descontento popular encontró la dirección necesaria. El campesinado vio en los curas y nobles locales a sus mediadores "naturales" (152) y de entre ellos salieron los jefes que les iban a conducir en la guerrilla: Uriz de Sada, Sarasa de Ollo, Iturralde de Arróniz, Zaratiegui de Olite, Ladrón de Cegama de Lumbier, Guergué de Legaria, Eraso de Garinoain, Zubiri de Viscarret... Todos ellos, junto con una nueva generación de la misma procedencia sociológica y geográfica volverán a ser los cuadros de la primera guerra carlista.

J. L. Comellas en su libro "Los Realistas en el Trienio Constitucional" (153) minusvalora la participación del clero en las guerras realistas, según él exagerado por la historiografía liberal. En contra de su tesis, al menos

para el País Vasco, el estudio de Pío de Montoya: "La intervención del clero vasco en las contiendas civiles (1820-1823)" prueba documentalmente que el clero fue el centro de todas las conspiraciones: "Topamos con el clero en cada paso de nuestra andada histórica. Ellos son los planificadores de la primera hora, los continuadores, y los sostenedores de la lucha fratricida" (154). El clero actuó en la leva de guerrillas y en sus reemplazos, en la dirección guerrera de varias de ellas, en el mantenimiento del espíritu bélico, en la recaudación de fondos para armamento y en el servicio de información y comunicaciones.

En la Junta Interina Gubernativa de Navarra, junto a dos notables rurales: Francisco Benito Eraso, alcalde de la Valdorba y Manuel de Uriz, de Sada, figuran dos sacerdotes: José Joaquín Mélida, abad de Barasoain y Joaquín Lacarra, canónigo de la catedral de Pamplona, que al decir de Andrés Martín cura párroco de Ustárriz contemporáneo realista e historiador de la contienda: "fueron los primeros que idearon y conformaron este plan" (155).

Si en el resto de España el programa liberal carecía de atractivo popular, en Navarra y resto del País Vasco la situación creada por los Fueros lo convertía en francamente antipopular: libertad de arrendamiento, desamortización, uniformidad fiscal, servicio militar obligatorio, supresión de aduanas... eran transformaciones que incidían de forma muy negativa en las condiciones de vida

del campesinado.

Que la guerra Realista tuvo carácter popular en Navarra está fuera de toda duda. Desde el primer momento hubo manifestaciones contra los liberales. La reacción se materializó en agresiones contra las lápidas de la Constitución que tras su proclamación se habían colocado en las plazas de los pueblos, acompañadas de motines y algaradas. En los distintos lugares, la placa de la Constitución corrió las más diversas suertes; la roban (Erro), la rompen (Burgui), la encalan (Fustiñana), le disparan dos balazos (Corella), la embadurnan con "puede imaginarse qué" (Murchante) o la arrastran y la tiran al río (Sangüesa)... Todo ello acompañado de los gritos de "¡Muera la Constitución y Viva la Religión!" o "¡Vivan los Rusos, Viva el Rey, Viva Dios!" (156).

El pueblo llano estaba con los realistas. Lo sucedido en Estella contado por un liberal (157) pudo ocurrir en cualquier otra ciudad navarra: "semejante canalla (facciosos, realistas) contaba para nuestra desgracia con la criminal protección de los naturales de la provincia". Los liberales de Estella debieron de contar con muy escaso número de voluntarios y en su ayuda tuvieron que acudir milicianos de Logroño y Pamplona. Como comandante de La Milicia Voluntaria de Estella figura Ambrosio Larraínzar, que inicia toda una dinastía de personalidades liberales de este apellido, y entre los prisioneros hechos por la Junta

de Navarra por ser afectos al sistema constitucional, dos notables locales, representantes por Estella en las Cortes de 1817 y electores parroquiales en las elecciones de 1813: Felipe Martínez de Morentín y Juan Bautista Vicuna.

b'. - LIBERALES

Al triunfo de la revolución en Navarra colaboró de forma decisiva el ejército. A él se unieron determinados sectores de "la magistratura, la industria y el comercio" (158).

Enseguida se creó en Pamplona una Sociedad Patriótica para aglutinar a la opinión liberal. Ella es testimonio del protagonismo de la guarnición entre sus partidarios. En la lista de socios, se aprecia una mayor parte de apellidos foráneos y ninguno de personajes ligados hasta entonces a la vida política local. Sin embargo sí aparecen entre los navarros algunos nombres de futuros dirigentes del liberalismo local: Manuel Aldaz, Agustín Armendáriz, José Alonso, Esteban García Herreros, Lorenzo Mutiloa, Cosme Sagasti, ligados al mundo de la magistratura, del periodismo o los negocios... y la sorpresa inexplicable de figurar también como socio la Comunidad de San Francisco (159).

Son los estatutos de la sociedad un exponente precioso del liberalismo romántico del momento. Sus páginas son un canto a la libertad: "el mayor de todos los bienes", al gobierno constitucional: "cuando los Estados carecen de leyes sancionadas por cuerpos representativos, dejan de merecer toda consideración y valimiento", a los derechos individuales: "derechos sagrados que el mismo Ser Supremo mandó y estableció entre los hombres", al patriotismo y al progreso: "no puede ser otro nuestro deber que el bien de la Patria, removiendo todos los obstáculos que entorpezcan el progreso...", al humanismo, a la igualdad y a la fraternidad: "respetemos a todos los hombres por su sólo carácter, teniendo presente que no podemos desear para otro lo que no queremos para nosotros mismos... cada uno de nosotros encontrará en sí mismo aquella sin par satisfacción que resulta al hombre de bien procurar contribuir al de sus semejantes..." (160).

Es de destacar sin embargo, el gran respeto al Rey y a la Religión que "respira". En el discurso fundacional tratan de cargarse los males del despotismo, no sobre los Reyes, "que las más de las veces desconocían los males de sus súbditos", sino sobre "los perversos privados que cercaban el Trono y alejaban de él los justos y frecuentes clamores de los ciudadanos". "La Persona del Rey es inviolable y este principio es suficiente a hacernos conocer cual debe ser el respeto que se le tribute en todas las

ocasiones". Y según el art. 24 de los estatutos: "En las sesiones no se discutirá ni permitirá proposición alguna contraria a la Constitución y siendo por ella nuestra Religión la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera, tampoco se tolerará expresión alguna opuesta a sus sagrados dogmas".

Respecto a su postura ante los Fueros, no puede ser más radical: y la forma de aludir a ellos prueba la condición de foráneo del autor del discurso preliminar en el que dice: "Y a vosotros, fieles navarros, que hasta aquí vivíais divididos de la Nación por vuestros fueros, recibid el parabien que os tributan todos los Españoles por veros unidos a sus Leyes y porque generosamente supisteis demostrar que en vuestros pechos sólo ardía el deseo de corresponder a una grande y feliz familia que formará ya para siempre el suelo Español".

La Sociedad llegó a tener su órgano de prensa: El Patriota del Pirineo" (161).

También en Tudela, como resultado del fervor constitucional nace la llamada "Sociedad Patriótica de los Amantes de la Constitución del Vencerol de Tudela" (162). Su objetivo: "defender nuestra Santa Constitución política promulgada en Cádiz en 1812". Sus miembros ya no eran los aristócratas que pertenecieron a la Sociedad ilustrada de los Deseosos del Bien Público. Ningún noble se encontraba

entre ellos, aunque tampoco era "gente desarrapada, sino culta y acomodada". A ella pertenecieron, como en Pamplona, los miembros de la Milicia local. Su presidente, el escritor Manuel Martínez de Morentín era el comandante de ésta y su grito de guerra: "Libertad o Muerte".

c'.--MODERADOS

Si en un primer momento el frente liberal pudo formar un bloque frente a los partidarios del antiguo régimen en Navarra, pronto siguió la misma suerte que en el resto de España, y la escisión que se iba produciendo entre los llamados "exaltados" y los que se apellidaban "moderados" prefijaban ya la división entre Progresistas y Moderados de doce años más tarde. "Esta división entre hombres de fortuna y posición social por un lado y radicales urbanos por otro, era común al liberalismo europeo del que ambas escuelas derivaron sus programas" (163). Todo el problema del Liberalismo Moderado de 1820 y posterior consistía en conseguir una Constitución "equilibrada" y manejable que pudiera lograr tanto la libertad como el orden, revisando la Constitución de 1812 templándola con la introducción de una segunda Cámara, el censo electoral y el respeto a las prerrogativas regias con el esfuerzo del ejecutivo (164). Los exaltados, por el contrario pretendían el mantenimiento íntegro de la Constitución gaditana.

La clase dominante navarra, como toda la nobleza terrateniente se mostró partidaria de esa vía intermedia moderada, que uno de sus miembros más representativos: el Barón de Bigüezal, calificó de "justo medio". De sus "Memorias", recogemos a continuación unos párrafos suficientemente demostrativos de esta afirmación:

"Pudiera muy bien creerse que yo, joven con influencias de poeta, discípulo de Lista y de Quintana, nutrido en la lectura de Condillac y otros autores de aquella escuela, y condiscípulo de varios oficiales que tomaron parte activa en la sublevación, simpatizaría con aquel movimiento y celebraría el triunfo de aquellos principios (se refiere a la Revolución de 1820); pues no fue así; ví con inquietud y sobresalto aquel alzamiento, desaprobé aquellos medios, y preví que triunfando una Constitución tan democrática como era la de 1812 fácilmente se precipitarían los acontecimientos, sin parar en los justos y provechosos. En cuanto a Gobierno representativo, mal podía desaprobarlo quien se había criado en Navarra y concurrido por derecho propio a unas Cortes a los 17 años de edad. Es decir, que adopté una doctrina que después ha sido la del partido moderado, legítimo y castizo, fundado en la sólida base de la Monarquía y demás instituciones venerandas, que dan estabilidad y vida a los Estados, en medio del movimiento compasado de sus elementos populares" (165).

El mismo Bigüezal nos habla de la creación por aquellos días de una Milicia Voluntaria, de la que él mismo formó parte como cabo de caballería y cuyo primer objetivo fue "combatir la revolución capitaneada por Mina" y "los excesos de la guarnición que impulsaba la revolución" (166).

Sin embargo el "constitucionalismo moderado" de este cuerpo de voluntarios quedaría probado en abril de 1821 al combatir igualmente en Salvatierra a los enemigos de la Constitución, haciendo prisionero al después General carlista Urbistondo (167). La postura de este voluntariado se irá radicalizando en su oposición a los liberales exaltados y acabará nutriendo las filas realistas (168).

Los partidarios de ese "constitucionalismo moderado", que "preveían los excesos de la revolución y las exageraciones del partido opuesto" y hubiesen querido "mantener la balanza de un justo medio entre aquellas dos fuerzas poderosas" se habían quedado sin espacio político en aquel momento. Era el caso de los Guendulain, la familia del Barón, que "preveyendo que los sucesos iban a comprometer a los prudentes y hacerlos víctimas de los excesos de los partidos extremos" decidieron trasladarse a Madrid. Así el primogénito y futuro marqués podía "continuar sus estudios con el maestro don Alberto Lista, que desde el año anterior estaba en la Corte y profesaba y escribía principios políticos prudentes y moderados" (169).

La nobleza terrateniente navarra, partidaria de las reformas liberales pero "dentro de un orden", no disimulaba su miedo a la radicalización a la que el cambio pudiera conducir. Esta misma postura era la mantenida por la Diputación provincial. En una manifestación enviada al Rey el 30 de noviembre de 1821, a la vez que hace profesión de fe constitucional, muestra su preocupación por "los excesos de la libertad", que amenazan el orden:

"Esta corporación, Señor (lo dice con lágrimas en los ojos), ve a su afligida madre España amenazada por una fracción de hombres, que si bien quieren la Constitución, la prosperidad nacional y el orden público inherentes a la más estrecha observancia del Código precioso de nuestras libertades, al menos el camino que han emprendido, y los medios que han adoptado, se apartan mucho de aquel noble y grandioso objeto... esa libertad tan proclamada por ciertos espíritus, que la estienden mucho más allá, que hasta donde llegan sus límites sociales"... Por eso ante esos "síntomas indicantes de una fermentación política que pueden ser de funestos resultados" se pide "la mano diestra de un Gobierno enérgico y activo" "para que corte de raíz tamaños males" (170).

Los constitucionalistas moderados mantendrán una postura ambigua en el conflicto o se inhibirán, como el caso apuntado de los Guenduláin: si rechazaban el antiguo régimen y condenaban la guerra que había provocado su defen-

sa y perturbaba el orden, de igual manera tenían el desorden y los excesos de la revolución.

Ante este dilema, bien pudieron aceptar como "mal menor" el "absolutismo ilustrado" que el Duque de Angulema y los "Cien mil hijos de San Luis" propiciaban (171). La llegada a Navarra de las tropas francesas, que rebaja la xenofobia y el carácter patriótico que se atribuye a la guerra de la Independencia, desde el momento que se acoge con entusiasmo, cuando son portadores de otra bandera a aquellos que nueve años antes se presentaba como enemigos, iba a clarificar en Navarra la división entre estos Moderados y los Realistas. Mientras la Diputación del Reino, restaurada en Puente la Reina (172) apoya al Conde de España y al Duque de Angulema, la Junta Realista no confía en ella, la denuncia de adicta al sistema constitucional, levanta contra ella a 3 de sus batallones y está dispuesta a formar otra Diputación provisional del Reino que sustituya a la legítima por tacharla de liberal (173).

d.-SIGNIFICADO DE LA GUERRA REALISTA

Dentro de la misma historiografía carlista, mientras Echave Sustaeta ve en la guerra Realista un antecedente de la carlista, en la que la triple motivación: Dios, Fueros, Rey está ya presente (174) Evaristo Olcina, niega

cualquier relación de continuidad entre ambas, siendo para él la primera de carácter meramente integrista, y esencialmente foralista-autonomista la segunda (175).

Los historiadores de tendencia integrista de todos los tiempos: Comellas, Gamba, etc..., por el contrario hacen hincapié en el contenido religioso de ambas contiendas: Según R. Gamba "Si el Altar y el trono era el lema de estas banderas realistas, Dios y el Rey fue el grito de los héroes de la Independencia, como antes lo había sido de los voluntarios de 1793 contra la revolución francesa... Dios, Patria y Rey es el lema de las posteriores guerras carlistas como Dios y Patria es el ideal común y básico de nuestra última Cruzada de Liberación... El elemento religioso-político es sustrato común de todas ellas y hace que pertenezcan a un mismo ciclo histórico con fines y alientos comunes" (176).

José María Pemán, prologuista de la obra de Gamba ve igualmente que "esta guerra civil anticipaba las venideras guerras carlistas y en cierto sentido nuestra guerra civil de 1936, así como continuaba la enjundia más honda de la guerra de la Independencia y de las guerras religiosas del siglo XVI y XVII... Los españoles pelean entre sí su secular pleito religioso" (177). Para Florencio Idola el pleito comienza más tarde pues según él la guerra realista "fue la primera guerra de tipo puramente ideológico de nuestra historia... Esta resistencia encuentra en Na

varra un fuerte bastión, por una gran religiosidad y adhesión a la monarquía tradicional" (178).

Nos es difícil admitir la posibilidad de guerras puramente ideológicas, aunque no se puede negar el protagonismo del factor religioso en esta contienda; pero detrás de toda estructura mental existe una formación social determinada que la mantiene.

Está fuera de toda duda que en 1820, la oposición al constitucionalismo la protagonizó el clero, consciente de la incompatibilidad entre el nuevo régimen y el estatuto privilegiado de que había gozado hasta entonces; pero no es menos evidente que el realismo popular, respondía con todas las interferencias que se quiera a una reflexión colectiva sobre la experiencia de las transformaciones económicas y sociales de los decenios precedentes.

La conexión entre pueblo y clero no era difícil. La misma política anticlerical, era sentida como un ataque a la religión que informaba la concepción del mundo popular y que se vivía como un factor de identificación colectiva: El catolicismo era no sólo una fe individual, sino un signo formal, el más significativo de integración social. Confluían así peligrosamente, el descontento popular con el infortunio de la Iglesia, que si por sí mismo podía ser un motivo de descontento campesino (179), sobre todo, significaba que la ideología y las instituciones que nor-

malmente habían servido para mitigarlo empezaban entonces a actuar en sentido inverso (180).

La intervención del clero fue determinante para precipitar una rudimentaria politización del descontento, pero éste no se produjo exclusivamente por motivos religiosos, ni por los "resortes del fanatismo" puestos en marcha por el clero para seducir al ignorante campesinado, como ha pretendido explicar la historiografía liberal.

Si el liberalismo nada tenía de positivo que ofrecer al campesinado, que veía sustituir una forma de dominación por otra, la situación creada por los fueros en el País Vasco y las consecuencias que el régimen liberal tenía sobre ellos lo presentaban como una alternativa francamente antipopular. Las clases populares no podían comprender lo que de progresivo tenía la revolución liberal-burguesa frente al Antiguo Régimen y en qué medida sentaba las bases para que a su vez pudieran ellas protagonizar el futuro en forma de proletariado. Ante el deterioro que en sus condiciones de vida produce la introducción de las nuevas relaciones liberales en el campo, se defienden con el afianzamiento del modo de vida tradicional y optan por la única ideología de repuesto: la defensa del A.R., fomentada, eso sí por sus "mediadores naturales": pequeña nobleza rural y sobre todo el clero, que no desaprovechó ninguna ocasión para encarecer la necesidad de abatir al

"régimen impío" entre un pueblo analfabeto y en un momento en que el púlpito era la única tribuna pública.

Que Navarra fuese escenario en diciembre de 1821 del primer alzamiento realista de envergadura, no sólo lo explica su condición de región foral, sino la influencia de un clero que en 1797, para una población de 221.728 habitantes, contaba con 2.778 eclesiásticos; es decir, un clérigo por cada 79 habitantes, a los que había que añadir un núcleo de personas "dependientes de la Iglesia", hasta llegar a 4.739 miembros (181). Espoz y Mina reconocía en sus Memorias que un canónigo de Pamplona gozaba entre el pueblo de mayor ascendiente que la Diputación Provincial de Navarra (182).

Por lo que hasta aquí hemos visto en este trabajo: la guerra de la Independencia y la guerra realista, como posteriormente la guerra carlista, tienen un común denominador: el rechazo del liberalismo y sus implicaciones socioeconómicas, aunque la primera se encubra con una causa patriótica, la segunda con la bandera religiosa y la tercera se enrede con un pleito dinástico.

La guerra Realista fue una guerra de alcance nacional. De carácter ESPAÑOLISTA definió Campión el alzamiento (183). La Junta Gubernativa de Navarra, reconoció formalmente y estuvo supeditada a la Regencia de Urgel, y por orden de ésta fue a Cataluña una División Navarra de

4.000 hombres a combatir bajo las órdenes del Barón de Eroles (184). El objetivo era nacional: restaurar España reedificando el Trono y el Altar (185).

e.-LA GUERRA Y LOS FUEROS

Ha sido Echave Sustaeta en su libro "El Partido Carlista y los Fueros" el que más ha contribuido a difundir la idea de que tanto esta guerra como la carlista tuvieron un carácter claramente "foral": "El grito del alzamiento era "Religión, Rey y Fueros" y con esa bandera santa realizaron los realistas navarros proezas mil hasta ver la triunfante" (186).

Hay que valorar la obra de Echave en la época en que fue escrita y la intencionalidad política que la motivó. La obra es fruto de la polémica que surgió en 1897 con la publicación del opúsculo de Sabino de Arana y Goiri: "El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarro" (187). Ante la acusación nacionalista de falso fuerismo, el partido carlista encargó su defensa al periodista Eustaquio Sustaeta que trató de demostrar la consubstancialidad de carlismo y foralismo.

Si es muy apreciable el valor documental de la obra, también es cierto que el objetivo del encargo se deja sentir en ella a la hora de seleccionar y valorar los

documentos. La única fuente utilizada para demostrar el fuerismo de los realistas navarros es la obra ya citada del párroco de Ustárriz, Andrés Martín: Historia de la Guerra de la División Real de Navarra contra el intruso sistema llamado constitucional y su Gobierno Revolucionario" (188). Por eso la vamos a seguir para llegar a conclusiones no coincidentes con Echave y precisar el lugar marginal y el sentido que los fueros tuvieron en el levantamiento.

Si el mismo título ya da a entender el carácter antirrevolucionario y anticonstitucional de la contienda, la dedicatoria de su autor, protagonista excepcional de los hechos es todavía más expresiva de los móviles que la justificaron. La obra está consagrada y dedicada a "la suprema magestad ultrajada de nuestro divino Jesús y a la persona del Rey nuestro Señor ofendida por los mismos" (189) y comienza así: "Los nombres augustos de Dios y el Rey han sido el lema escrito en las banderas realistas tremoladas desde el año 1821 en los Pirineos de la fiel Navarra para defender a todo trance el Sacerdocio y el Imperio, únicos baluartes contra la impiedad y la anarquía: estos dos obgetos los más sagrados del mundo, formando una misma causa de justicia y de interés común de la sociedad humana, han sido como dos altares en cuyas aras ofrecieron sacrificar las vidas todos los leales que con la más heroica y constante decisión combatieron y triunfaron al fin contra

el monstruo llamado "Gaditano";... Esta historia trata del triunfo de la lealtad y del éxito feliz de una guerra que decidió para siempre la estabilidad de la Religión y del Trono y de la consiguiente paz y felicidad general de la España..." (190).

Defensa del Altar y el Trono para la felicidad de España: he aquí para Andrés Martín la bandera de esta guerra y de lo cual ofrece testimonios repetidos con mucha insistencia a lo largo de las 268 páginas de la obra.

Según el párroco de Ustárriz "El plan fue nada menos que restaurar la España, reedificando el Trono y el Altar, desquiciados por los impíos para arrojarlos a tierra, y verificar si fuese posible, su última ruina y explosión" (191). Para ello fue creada la División Real de Navarra "a impulsos de la más acrisolada lealtad en favor de los legítimos derechos de la Soberanía y en defensa de la Religión y del Estado". Y los miembros de la Junta Realista de Navarra se preciaron de "haber sido los primeros que formaron un cuerpo provisional de Gobierno con el heroico objeto de reparar los derechos del altar y el trono ultrajados y heridos mortalmente por el sistema de la impiedad y de la anarquía" (192), jurando "seguir la causa hasta triunfar o morir en obsequio de la religión y del Rey nuestro Señor" (193)... porque se trata de la guerra entre "la religión la verdad y la justicia contra la impiedad el error, la traición y la perfidia... la lucha más sangrien-

ta y desigual (entre) el hombre religioso moral y amante de su Rey y el liberal impío sobervio y orgulloso que sacudiendo a pretestos de sistema y de reformas el suave yugo de la religión y del soberano pretende al fin vivir independiente de toda potestad, sin Dios, sin ley, sin Rey y sin conciencia" (194); pues dos son las máximas fundamentales de estos "corifeos de la rebelión": "destruir la fe del evangelio y declarar guerra de muerte a los monarcas" (195).

Ante tal empresa "los tambores realistas llaman a los jóvenes reales de este reyno a un alarma general en favor de la Religión, del Rey y de la patria" (196) animándoles a que abandonen "el dulce seno de vuestros padres por defender una patria que a nombre de Dios y del Rey con ayes lastimeros reclama vuestros esfuerzos (197). Y los jóvenes respondieron con "su acendrado celo por la causa de la Religión y el soberano" (198).

También "los dignos párrocos cumplieron la misión de inflamar los ánimos en favor de la empresa santa de Dios y del Rey nuestro Señor" (199) porque se sabe que la guerra "ha de influir eficazmente en la suerte feliz de la religión, del Rey y de la España" (200).

Ante tan alta causa no es difícil entusiasmar a las tropas y antes de la batalla se les arenga "a triunfar o morir en defensa de los derechos sagrados e inviolables

del altar y trono absoluto del Rey nuestro Señor" (201) para "ver pronto coronada vuestra ardua y magnífica empresa de salvar la religión, el Rey y la patria de una revolución horrenda en que iban a sepultarse sin remedio" (202). El cansancio, sufrimiento y penurias de la guerra sólo pueden ser compensadas "por la fuerza que produce el religioso entusiasmo de la lealtad en los que se deciden a triunfar ó morir en obsequio de la Religión y del Rey" (203) y las afortunadas batallas deben contarse como "triunfos del Altar y el trono de las Españas" (204). Si se sale ileso de un peligro inminente se atribuye a que "los ángeles custodios salvaron en su propio día a estos inocentes, reservados por el cielo para llevar hasta el fin la causa santa que defendían por Dios y por el Rey" (205). Pero si mueren, como Salaberri, Garcés y otros muchos, lo hacen "llenos de una fortaleza propia de los mártires sagrados... que pierden su vida... por Dios y por el Rey" (206). Y así junto a la partida de defunción de Juan Baquedano se halla una nota que dice: "Murió gloriosa y notablemente en defensa de su religión y de su Rey" (207).

La sucesión de citas dirigidas en el mismo sentido ha podido pecar de reiterativa, pero ha sido precisa para mejor valorar con este trasfondo las escasas alusiones forales que en la obra aparecen.

"El día 11 de diciembre de 1821 -anota Andrés Martín en el Prólogo de su obra- formará época memorable

en los anales de Navarra. Entonces fue cuando los católicos realistas de este Reyno salieron al campo diciendo con los Macabeos: "Más vale que moramos en la guerra que ver tantos males como padece nuestra gente. Entonces juraron defender hasta morir, los intereses de Dios, los derechos del Rey, y las leyes patrias del suelo natal" (208). Esta cita, con cierta picardía que delata sus intenciones, la recoge Echave Sustaeta sustituyendo "suelo" por "pueblo" y añadiendo al final de su cosecha, pero dentro del entrecomillado: "O SEAN LOS FUEROS DE NAVARRA" (209), lo que le sirve para afirmar el carácter FORAL del levantamiento.

El 28-III-1823, ya al final de la guerra, la Junta Gubernativa de Navarra dirige una proclama a los Navarros en la que se lee: "...¿Qué sacrificios de todas clases no hicieron nuestros mayores por conservar sin detrimento su religión, su monarquía, sus leyes y sus costumbres contra los Abderramanes y toda la secta Agarena?... ¿Qué hubiera sido de la España toda en la invasión del tirano usurpador de la Europa, si nuestra constancia no hubiera sido una roca indestructible en que se estrellase todo el poder colosal del más ambicioso de los mortales?. Pero con la firmeza de nuestro propósito, con el NO IMPORTA, y con la confianza en Dios y en la justicia de nuestra causa, opusimos constantes nuestra debilidad a la fuerza, peleamos con valor, vencimos y logramos restablecer nuestra religión y monarquía, con todos los fueros y costumbres

legítimamente heredados de nuestros padres"... Pero de nuevo "una secta infernal, dirigida por el genio diabólico, sobreponiéndose a todas las potestades del cielo y de la tierra alza la voz como Lucifer el sobervio contra el soberano general, de quien reciben su poder los gobernadores del mundo... el plan general es derrocar si fuera posible el sacerdocio de Dios y el imperio de los Césares cristianos... Si alguno se complace en oír el mortífero canto de las sirenas ¡qué de males y de llantos no le esperan en la vida presente y venidera!. La religión infalible de nuestros padres, sus máximas santas, sus nobles fueros y costumbres todo cae abajo si triunfa por desgracia el sobervio sistema de la impiedad" (210).

Hasta aquí, recogiendo las citas que hacen alusión a los fueros en un contexto más amplio de lo que lo hace Echave Sustaeta, sin caer en la trampa de escribir fueros con mayúscula como lo hace él (211) y recordando el carácter genérico y sinónimo de leyes que la palabra tenía en la época, sólo podemos deducir que su alusión en las citas anteriores hace referencia a la defensa del orden legislativo del Antiguo Régimen y no se le puede dar más valor que cuando los realistas aragoneses recuerdan que "nunca fue España tan feliz como cuando se observaron sus antiguas leyes y costumbres" (212).

Es quizás en "El manifiesto que dio al público la Junta Gubernativa realista de Navarra contra las máxi-

mas y designios de una proclama verdaderamente constitucional, circulada por el mes de julio de 1822 a nombre de la llamada diputación provincial, residente en Pamplona" (213) donde se puede apreciar una preocupación foral:

"Navarros: Sabed que unos pocos individuos de la llamada diputación de esta provincia que jamás fueron el eco verdadero de vuestra voz, fingiendo vuestro nombre contra vuestra legítima voluntad, quieren negociar su fortuna a expensas de vuestros últimos sacrificios (214)... Religión, vida, honra, hacienda y todo cuanto heredasteis de vuestros padres, son otras tantas víctimas que anhelan ofrecer a su ambición sobre las sacrílegas aras de un sistema impío instalado con el crimen de la traición para derrocar el imperio y el sacerdocio y levantar sobre sus ruinas el estandarte de la revolución más horrenda y sanguinaria... Inconsolables llorabais tamaños males cuando ois por vuestra boca el santo grito de la religión y del Rey... Habeis manifestado a la faz de la nación que los navarros jamás consintieron libremente el fatal trastorno de gobierno contrario a la sabiduría de sus fueros, leyes y costumbres... Estos hombres despreciables (se refiere a los diputados) empapados en los mágicos principios del más impío y antisocial sistema sólo aspiran a haceros partidarios contra el trono y el altar, a privaros aun del nombre de navarros, cambiando el antiguo reyno de Navarra por una mera provincia de Pamplona (215)... ¡Ah! ¡dónde está aque-

lla sabia legislación de vuestros padres! ¡dónde aquellos supremos tribunales de justicia, aquellas regalías y fueros, aquellas exenciones de toda especie de tributos y gabelas que gozabais en premio de vuestras virtudes! Un peso enorme y exorbitante de exacciones y de pechas reales y personales que en poco tiempo destruiría vuestros bienes y personas se ha substituído a vuestros legítimos privilegios. Todo lo habeis perdido y esto no obstante se empeñan en persuadiros que habeis ganado en la mudanza de gobierno ... Continúad constantes en vuestra empresa bajo la dirección de los que quieren restituiros vuestro antiguo esplendor con todos los derechos y regalías que perdisteis por un momento".

No queremos a nuestra vez caer en el mismo pecado que denunciarnos y forzar interpretaciones al tachar de oportunismo a este único testimonio de foralismo que se recoge a lo largo del libro, pero sí convienen unas reflexiones sobre ello. En primer lugar, se trataba de explotar el evidente antiforalismo del enemigo, que como hemos visto había asistido impasible al desmantelamiento foral, pero sobre todo, es de destacar, aparte de la consideración tan contraria a la doctrina foral de considerar los fueros como "premio", que se los identifique más con "privilegios, regalías, exenciones de toda especie de tributos y gabelas", con cuya desaparición amenazan, que con el orden institucional privativo, si exceptuamos la imprecisa alusión a

"aquellos supremos tribunales" (216). Ni una palabra de las Cortes, por ejemplo.

Y es que bien poco podían añorar instituciones moderadoras del poder real quienes defendían la Monarquía Absoluta y consiguieron según ellos probar "lo falso, anárquico y monstruoso de la supuesta soberanía popular" (217): "¿A quien pertenece establecer las leyes, al pueblo súbdito y vasallo o al Rey que es cabeza superior del pueblo?... Corre por cuenta de la Divina Providencia inspirar la legislación a los Soberanos..." La anterior afirmación es parte de un artículo sobre el origen de la Soberanía en el periódico realista "Gaceta Real de Navarra", escrito por un fraile de Puente la Reina (218). Dependía por entonces la publicación de la Diputación del Reino, restaurada en Puente la Reina con la llegada de las tropas del Duque de Angulema (219). El síndico consultor de la Diputación: Angel Sagaseta de Ilurdoz vió que el artículo cerraba "conceptos contrarios a la doctrina foral" y "sus proposiciones barrenan nuestra Constitución foral según la cual ni corresponde al Rey dar leyes, ni el pueblo es tan súbdito y vasallo que no tenga parte en ellas, ni correr por cuenta de la Divina Providencia inspirar la legislación a solo el Rey, sino al Rey y Reino junto en Cortes". A lo cual, los redactores del periódico contestaron que "nada habían querido decir contra los Fueros privilegios del Reino".

¿Entendían por FUEROS todos lo mismo? ¿O es que nada decían los aspectos institucionales a quienes no participaban en ellos y para los que sólo eran fueros las exenciones y regalías a las que antes hacían referencia?.

Respecto al celo en conservar la autonomía política y administrativa, la práctica de los realistas y de su Junta Gubernativa no fue más ortodoxa que la de los liberales y la Diputación provincial. Si desde el primer momento se pusieron bajo las órdenes de la Junta Absolutista de Bayona presidida por el general Egüía, celebraron con tanto júbilo como la Diputación provincial el establecimiento del Congreso Nacional, la aparición de la Regencia de Urgel ya que "nada deseaban con más ansia que ver instalado un gobierno general que fuese el centro común de todos los realistas" y "apenas ésta apareció felizmente en el Seu de Urgel por el mes de Septiembre de este año, bajo el título de Regencia suprema de gobierno durante la cautividad de nuestro legítimo y amado Soberano Fernando 7º en poder de las cortes democráticas de Madrid, fue loado y reconocido solemnemente por la Junta Realista de Navarra". "Como todo fue ordenado a reparar las ruinas del trono y del altar por medio de una victoria final contra sus enemigos"...era necesario "la más estrecha e íntima unión de todos los realistas, y no podría ser esto sin una simultánea obediencia general al gobierno supremo que defendía esta causa. La justicia, la política, el interés

común y personal, todo les convencía de la necesidad de una ciega subordinación y obediencia a la regencia suprema del Seu de Urgel durante la cautividad de su Rey y Señor, cuya religión y soberanía les obligaron a dar el grito santo de esta guerra"(220).

En representación de la Junta, Joaquín de Méli-da y Benito Eraso, vocales de la misma, marcharon a Urgel para felicitar a la regencia y "presentar religiosamente juramento público y solemne de fidelidad y obediencia" (221). La Regencia por su parte, satisfecha de los "heroicos sentimientos de honor y fidelidad que animaban al ejército de Navarra y a su benemérita junta gubernativa, confirmó del modo más amplio las facultades de ésta para mandar y gobernar a nombre del Rey nuestro señor."

Tampoco en el asunto de QUINTAS los realistas fueron fieles a la "doctrina foral al uso" y las tropas navarras tuvieron que seguir a Santos Ladrón y a Guergué en sus expediciones a Aragón y Cataluña (222).

Tratando de sintetizar las conclusiones que se deducen de lo expuesto hasta aquí, se ha visto muy claro que la batalla se libraba "contra el revolucionario, impío y anárquico sistema constitucional en defensa del Antiguo Régimen simbolizado en la bandera del Altar y el Trono. Se ventila una causa fundamentalmente "española": "restaurar la España reedificando el altar y el trono",

sin ningún síntoma de particularismo local, ni mucho menos de enfrentamiento con el poder central; si bien hay que advertir por lo que de precedente de la guerra carlista tiene, el reconocimiento ya del hecho sociológico vasco: "Se había comunicado este plan a algunos sujetos de in flojo y opinión de las provincias de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, cuyas leyes, usos y costumbres y genio de lealtad han seguido a la par de los Navarros" (223).

Pero la defensa de antiguas leyes, fueros, usos y costumbres se hace no tanto como defensa de algo propio diferencial, expresión de particularismo, como en cuanto se oponen a otras leyes, precisamente las "revolucionarias a través de las cuales se trataba de destruir el orden socioeconómico existente. De ahí la aversión a las innovaciones y la necesidad de "reponer las cosas al estado que tenían a principios del año 1820...para los españoles recobren el esplendor, la gloria y la felicidad de que las no vedades siempre perjudiciales le habían privado" pues "la experiencia les ha demostrado los males incalculables que han causado los novadores a todos estados en que han podido conseguir triunfos efímeros sus doctrinas perhiciosos" (224). Y es que "nunca fué la España tan feliz como cuando se conservaron sus antiguas leyes y costumbres". Por eso contra las reformas o innovaciones que vienen a través de "leyes impías" se defienden con "las leyes sabias y justas" de los antepasados o del suelo natal.

Por todo ello, para considerar la guerra realista como guerra "foral" hay que forzar mucho las interpretaciones. Solo en un manifiesto de la Junta contra la Diputación provincial se denuncia la transformación del antiguo reino en provincia, pero más por atribuir un nuevo cargo al enemigo que por su celo en defensa de un régimen foral que su propia práctica antiforal desmentía. Y es también sintomático que cuando se hable de fueros, o se hace en un sentido genérico e impreciso, sinónimo de leyes o privilegios, como cuando se habla de fueros de la Iglesia o de la Monarquía; o al hacerlo en sentido más local, se relaciona más con las "exenciones de gabelas y otros privilegios" que con el orden institucional; lo que da que pensar sobre cuáles eran los fueros que podían mover a las masas populares.

Sin gran variación, el cuadro descrito permanecerá a comienzos de la guerra carlista. Por ello estoy totalmente de acuerdo en aceptar con Echave Sustaeta y Gamba la continuidad de ambas contiendas y más de acuerdo con el segundo a la hora de precisar la justificación ideológica de la lucha, mucho más religiosa que foral. El desacuerdo con éste último comienza a la hora de determinar las causas que la originaron. Y es que como hemos dicho antes nos es difícil admitir la posibilidad de guerras puramente ideológicas. Es cierto, que todo conflicto trata de justificarse con alusiones a causas elevadas, en esta

ocasión la defensa del altar y el trono; y que la ideología llega a adquirir un grado considerable de autonomía, pero no es menos cierto que en el oscuro mundo de las motivaciones, los intereses están en el trasfondo de todo comportamiento humano colectivo y detrás de las estructuras mentales existen unas formaciones sociales que las mantienen. Ello no quita la carga de idealismo que pudo darse y que indudablemente se dió; pero que no puede servir para explicar ningún proceso histórico (225). Hay que buscar en los motivos económicos y sociales que crearon el malestar suficiente, la explicación última del respaldo popular con que contó el conflicto. Y es que los FUEROS, si no estuvieron entre las motivaciones de la guerra, sí creaban unas condiciones socioeconómicas que hacían que el antiguo régimen gozase en el País Vasco de un masivo respaldo popular.

El estudio de esta etapa histórica del Trienio, frecuentemente ignorada por los historiadores navarros nos ofrece una doble conclusión, decisiva para comprender el planteamiento, desenlace y consecuencias de la guerra carlista: Por un lado, la total homologación de Navarra con el resto del estado liberal español se realizó entre 1820 y 1823 sin resistencia alguna por parte de la clase política navarra; por otro, la oposición que se origina contra el nuevo orden de cosas es también totalmente homologable con la que se produce en Aragón, Cataluña y otras provincias. Aunque por la situación creada por los fueros

los navarros y demás vascos tuviesen más motivos para defender el Antiguo Régimen, no podemos hablar de defensa de ningún tipo de particularismo a la hora de interpretar la contienda. La aceptación del marco político unitario, la identificación de intereses con el resto de la nación fue total por ambos bandos, era en su contenido absolutista o liberal en lo que se discrepaba.

4.-DECADA OMINOSA Y CRISIS FORAL

A.-RESTAURACION FORAL Y CONTRAFUEROS

La represión desencadenada por Fernando VII tras el trienio liberal fue tan feroz que la literatura liberal calificó esta época como ominosa. Al igual que en 1814, Fernando VII volvió a restablecer las condiciones jurídico-políticas anteriores a la Guerra de la Independencia, lo que para el País Vasco supuso de nuevo la restauración foral. Sin embargo la tendencia del gobierno va a seguir siendo "abolicionista", y sólo los amagos del liberalismo le harían contemporizar con los regímenes forales. Cuestión de táctica política, más que de respeto a una legalidad, serán las dificultades internas del poder central las que favorezcan una política transigente o viceversa. De ahí los vaivenes y contradicciones a los que se ven sometidas las instituciones forales.

Durante esta época, se introduce el reglamento de POLICIA en Navarra, con sus autoridades, contribuciones y jurisdicción propia. Se intenta inútilmente que la medida sea declarada contrafuero, en primer lugar "porque sólo las Cortes de Navarra podían hacer leyes de carácter general", en segundo lugar porque "sus naturales no podían ser arrestados ni presos sino por sus propios Jueces", en tercer lugar porque "no era posible legalmente imponérseles contribución directa ni indirecta sino a pedimento y con voluntad consentimiento y otorgamiento de las Cortes propias, y por último porque en Navarra había su policía y no podía regir la que se imponía" (226).

Tras cuatro años de reclamaciones, "el virrey cerró la puerta a toda esperanza dictando un decreto en 11-II-1829 que decía: "A esto os decimos que sobre esto tenemos decretado lo más conveniente" (227). Lo más conveniente era lo que desde un principio se defendía; que "el interés general de la Nación y la situación política de Europa no permiten la suspensión de aquellas Soberanas resoluciones" (228). La Policía se afianza en Navarra y fue una realidad con la que tuvo que contarse en las últimas Cortes de 1828-1829.

También sufrió Navarra la implantación de las tristemente célebres COMISIONES MILITARES EJECUTIVAS Y PERMANENTES que a modo de tribunales de excepción se crearon

en enero de 1824 "contra los liberales que desde el 1º de octubre del año 1822 hubiesen conspirado, hablado o escrito a favor de la Constitución (229). Nuevo contrafuero que vulneraba su autonomía judicial. En Navarra no sólo entendieron de delitos políticos, sino también de comunes, siendo juzgados en menos de dos años (13-I-1824 a 4-VIII-1825) un total de 129 individuos (230).

La autonomía judicial se ve también comprometida por "la" plantificación de un sólo Tribunal en esta Capital (Pamplona) compuesto del Subdelegado general, Asesor, Fiscal y Escribano" que sustituye a los suprimidos juzgados de la renta de Tablas, de contrabando y de la conservaduría del tabaco. En las Cortes de 1828-1829, la Ley XVI solicita sea declarado "nulo cuanto se haya obrado por el citado único Tribunal" por considerarse una "notoria violación de sus Fueros" (231). Tampoco este pedimento es atendido, aunque se concede que en adelante el Asesor sea natural del Reino y que de las apelaciones que se interpongan de sus sentencias haya de conocer el Consejo de Navarra (232).

En defensa del régimen absoluto se organizaron en toda España cuerpos de VOLUNTARIOS REALISTAS. Su reglamento, que se extendía también a Navarra, a pesar de la oposición de la Diputación fue sobrecartado por el Consejo el 16-V-1825. Las Cortes de 1828-1829 tratan de conciliar "los beneficios que son consiguientes al estableci-

miento de los cuerpos Realistas... con sus Fueros y Leyes" y proponen para ello una serie de modificaciones en el pedimento de Ley XXVIII, pero excepto las relativas al presupuesto no son aceptadas (233). Esta organización armada va a ser refugio de todos los oficiales realistas que contarán con esta plataforma para preparar en 1833 el nuevo levantamiento.

Respecto a QUINTAS, la política que el gobierno absolutista practicó con Navarra fue basculante y en función de la situación política. Si en 1824 se pedía un reemplazo de 773 hombres y la Diputación, tras recurrir ante el Consejo de Navarra alegando toda la doctrina foral hubo de aceptar la transacción acostumbrada de dar dinero en lugar de hombres; en el reemplazo de 1827 el Gobierno desiste de imponerlo en Navarra y se respeta la "supuesta foralidad". Su explicación: la insurrección realista de Cataluña y el miedo de que dicho movimiento prosperase en el País Vasco. En compensación, la Diputación, en proclama al pueblo navarro pide "fidelidad a Fernando III de Navarra y se ofrece incondicional a cooperar con el Virrey para mantener a toda costa la tranquilidad pública que tratan de perturbar los realistas puros" (234). Sin embargo, cuando en 1830 la revolución de julio en Francia permita a los exilados liberales coordinar sus planes de invasión, Gobierno y Diputación van a actuar al unísono ante semejante amenaza. El gobierno acepta el compromiso de colocar una

fuerza de 1.000 voluntarios realistas en la frontera durante un año, a cuenta del donativo y quintas. El modo de reclutamiento es "antiforal", pero el informe de los síndicos sobre las facultades de la Diputación para realizar la operación es favorable pues "los fueros tienen excepción en los casos extraordinarios" (235).

En materia de CONTRIBUCIONES la Diputación reconoce la necesidad de contribuir a las necesidades del Estado, pero trata de salvar la "forma foral" de hacerlo, que siempre le permite realizar el reparto de la manera más favorable a los intereses de la clase dominante. Para ello solicita convocatoria de Cortes, que se concede en 1826, aunque por las circunstancias que se atravesaban (levantamiento de Cataluña y amenaza del mismo en Navarra) se retrasó hasta 1828.

B.-LAS CORTES DE 1828-1829

Las Cortes de 1828-1829, son las últimas que se celebran en el Reino. Frente a los 113 pedimentos de leyes de las de 1817-1818, éstas sólo elaboran 65. Las 16 primeras, como es costumbre, son peticiones de reparación de contrafueros, algunas en relación con la actuación de las ya citadas Comisiones Militares. Unas se conceden y otras no. De todas formas poco cuesta el reconocimiento de agra-

vio de hechos consumados que a nada comprometen (236). Del resto de los pedimentos de leyes, 15 se relacionan con nombramientos, empleos y retribuciones (237), cuatro solicitan mercados o ferias a Ochagavía, Peralta, Burunda y Aoiz, que se conceden. Otras versan sobre diversas materias: seguridad en los caminos (Ley XXXIX); uso de armas (XVIII), cementerios (LX), Enseñanza (XXII y LII), moneda (XXXV), ganado (LVII), montes (XXVI), libertad de hospedaje (XLII), captura de lobos (XXXIV), la ya vista sobre transformación del reglamento de Voluntarios Realistas (XXVIII)... Pero por su alcance y significado, las más dignas de tener en consideración son las 8 relativas a la administración municipal (238). Tres son los objetivos que se pretende con ellas: la libre disposición de los propios y rentas de los pueblos y su posible utilización para el pago de la cuota del Donativo (XXV), la limitación del control del Real Consejo en su administración, para lo cual consiguen la suspensión de residencias hasta las próximas Cortes (XLVI) y la restricción de la participación en los órganos municipales, no consiguiendo, sin embargo, que prosperase el pedimento de Ley XXVII que pretendía hacerlos más aristocráticos, aunque sí se reconoció como impedimento para servir oficios de república el no saber leer y escribir (XXXVI). Estas medidas, tienen todas ellas un sentido muy claro: el control municipal por la minoría de notables de la localidad para conseguir una fiscalidad favorable, por un lado y facilitar la transformación de la propiedad colectiva en

privada, por otro.

La ley XLIII establece la inviolabilidad de la Diputación, y la XLIV concede el uso de una medalla a los individuos de las Cortes, Diputación, Síndicos y Secretarios. Será éste uno de los convencionalismos que mantendrá en 1841 la nueva Diputación constitucional y que hoy todavía se conserva.

Las dos últimas leyes: LXIV y LXV se refieren a la concesión del DONATIVO. La primera de ellas, sobre el modo de hacer el repartimiento entre los pueblos y la posibilidad que éstos impongan nuevos arbitrios y dispongan de las rentas de los propios para ello, evitando así la imposición directa. Y la segunda, el DONATIVO en sí. También en esta ocasión queda en entredicho el carácter de "gracioso y voluntario" del Servicio, que así se sigue llamando (239). No se acepta la primera oferta de 350.000 pesos de quince reales vellón cada uno; ni la segunda de 450.000, acordado por fin en 500.000 a la tercera, recordando las Cortes sin embargo el carácter "contractual" del mismo (240).

El traslado de las ADUANAS vuelve a ser objeto de debate. Así lo exige el Gobierno. Por primera vez se vota favorablemente su traslado condicionado, con la protesta de la ciudad de Pamplona que perdería así el privilegio de feria franca y que lo rechaza por "la notabilísima sustancial alteración" que supondría de los primitivos Fueros"

(241). Las condiciones para su traslado, por la misma razón que las hace aceptables para los intereses encontrados en las Cortes, pretendiendo la doble ventaja de ambas situaciones, las hace inaceptables para el Gobierno, y el asunto ADUANAS queda pendiente de solución en vísperas de la Guerra Carlista.

C.-ALCANCE DE LA REAL ORDEN 14-V-1829

Si como hemos visto hasta aquí, la tendencia abolicionista era un hecho, y el respeto a la foralidad dependía de las veleidades de la política, con la R.O. 14-V-1829 las instituciones forales reciben un golpe mortal.

Esta R.O. no es más que la reiteración de la del 1-IX-1796, inspirada por Godoy y que no pudo ejecutarse debido a las guerras con Francia (242). En ella se anuncia la necesidad de crear una Junta de Ministros para el examen del origen, causa y objeto de los Fueros, y entre tanto esto no se realice, manda se tengan por válidos en Navarra todas las Reales Cédulas y demás disposiciones que se promulguen en Castilla.

La Junta se creó en 1801, aunque no consta su actuación hasta 1826. Por la R.O. 14-V-1829, en tanto que esta Junta no realice su trabajo, se manda de nuevo que ten-

gan efecto en Navarra cuantas disposiciones se expidan para el resto de la Monarquía: "cúmplase esto por encima de cualquier fuero y leyes, capitular de Cortes, ordenanzas, estilo, usos y costumbres" (243).

La Diputación del Reino vio en esta disposición que abolía el derecho de sobrecarta "la violación más clara y positiva de los fueros y leyes del Reino" (244). Todo el edificio foral quedaba con ello en suspenso.

Los supuestos contrafueros se suceden sin posibilidad de réplica: se imponen nuevas contribuciones, se suprime de hecho el Tribunal de la Cámara de Comptos al suspender la provisión de plazas, los jueces destituidos por la Diputación son de nuevo trasladados a Navarra por R.O... (245). La misma Diputación reconoce en 1830 que "los fueros del Reino de Navarra no se observan y casi están reducidos a la nada" (246).

Antes de la guerra carlista, la oposición del régimen foral discurría por un plano inclinado. Los particularismos forales no sólo eran atacados por la política liberal, sino también por la absolutista. Si en 1808 la guerra de la Independencia interrumpió un proceso irreversible de asimilación, la guerra carlista, ajena en principio al conflicto foral, favorecerá la transformación del Fuero antiguo en la "NUEVA FORALIDAD" implícita en la ley de 1841. No es aventurado pensar que sin esta forma armada

que revistió la salida de la crisis del Antiguo Régimen en España, la homologación de Navarra con el resto de la Monarquía, según el camino iniciado; hubiera sido total.

N O T A S

- (1) J. I. MENCOS: Memorias de D. Joaquín Ignacio Mencos, Conde de Guendulain 1799-1882, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1952, págs. 30 y 31.
- (2) F. MIRANDA RUBIO: La Guerra de la Independencia en Navarra. La acción del Estado, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1977, pág. 53.
- (3) Ibid., pág. 54: "...la tan cacareada subversión popular no fue tan espontánea como a primera vista pudiera apreciarse. Por el contrario parece que existen razones de cierto fundamento para estimar que esta insurrección fuera preparada por el bando fernandino"...
- (4) Ibid. pág. 321 y ss. APENDICES A-4, A-5, A-6, A-7 y A-8, en los que se recogen los comunicados que los ayuntamientos mandan a la Diputación informando de los distintos levantamientos.
- (5) IRIBARREN, J.M.: Espoz y Mina el guerrillero, Ed. Aguilar, Madrid, 1965, pág. 49.
- (6) MIRANDA, op. cit., pág. 324: Informe enviado por el Ayuntamiento de Tudela a la Diputación del Reino el 3 de junio de 1808 sobre la "Consulta Extraordinaria" celebrada el día 2".
- (7) C. SANZ CID: La Constitución de Bayona, Ed. Reus, Madrid, 1922, pág. 94.
- (8) Ibid., pág. 97.
- (9) MIGUEL ESCUDERO Y RAMIREZ DE ARELLANO: De los Escudero de Corella, casa con asiento en Cortes. Asistió por el

brazo militar a las de 1801 y en las mismas fue elegido miembro de la Diputación del Reino. Representante de ésta en Bayona sustituyó a Espoz y Mina como jefe político de Navarra por orden de la Regencia después de la ocupación francesa en 1813. Presidente de la primera Diputación provincial constitucional. Vuelve a ser diputado del Reino tras la restauración de Fernando VII. Diputado a Cortes por Navarra de nuevo en 1822.

- (10) RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 28.
MIRANDA: op. cit., pág. 58, nota 28.
- (11) MIRANDA: op. cit., pág. 58.
- (12) A. DE ZABALA: La Constitución de Bayona. Jakintza nº 4 y 5, San Sebastián, 1933, pág. 290: "El propio emperador, que acaso en agradecimiento a la buena acogida que sus tropas habían tenido de aquéllos (se refiere a los vascos) no obstante la insurrección encendida en España... había contemporizado a que de la constitución se tachase el párrafo en que terminantemente se suprimían los fueros..."
- (13) RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 28, nota 26.
- (14) AHN. Estado, leg. 83-B. Vid. APENDICE nº 1, pag. 545
- (15) AGN. Cortes, leg. 11 carp. 20. Vid. APENDICE nº 2, pag. 546
- (16) FRANCISCO DE PAULA ESCUDERO: nació en Corella en 1764. En 1778 sentó plaza de guardia marina en Cartagena, Capitán de fragata en 1806, era en 1810 oficial mayor de la secretaría de Estado y Despacho de Marina. Diputado en Cádiz por Navarra. Secretario de Marina en el Trienio Liberal, fue desterrado de la Corte en 1823, permitiéndosele volver en 1831. No sabemos el parentesco con MIGUEL ESCUDERO Y RAMIREZ DE ARELLANO, pero al ser los dos de Corella es presumible que lo hubiese.
- (17) ALEJANDRO DOLAREA: De familia baztanesa, nació en Pamplona en 1745, siendo su padre abogado del Real Consejo de Navarra. Graduado en Leyes, fue Alcalde de Corte y Oidor de la Cancillería de Sevilla. Síndico de la Di

putación en 1804. Diputado por Navarra en Cádiz, fue nombrado durante la Regencia Ministro en el Tribunal de Ordenes. Nuevamente diputado por Navarra en 1813, en 1814 fue Alcalde de Casa y Corte de Madrid y en 1819 miembro del Consejo de Castilla. Diputado a Cortes por Navarra en las primeras del Trienio liberal en 1820, milita entre los liberales y defiende la supresión de monacales y su desamortización.

- (18) Según GARCIA VENERO (Historia del Parlamentarismo Español (1810-1833), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1946, pág. 92) Navarra en demanda aceptada de su particular legislación foral tuvo cuatro diputados: uno por la ciudad de Pamplona, otro por la Diputación y dos por el pueblo.
- (19) A. CAMPION: Discursos políticos y literarios, Pamplona, 1907. Reeditado por La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1976, pág. 57.
- (20) D. SEVILLA ANDRES: Constituciones y otras leyes y otras leyes y proyectos políticos de España. 2 vols., Editora Nacional, Madrid, 1969, I, pág. 115.
- (21) Ibid., pág. 116.
- (22) Ibid., pág. 117: "La soberanía de la Nación está reconocida y proclamada del modo más auténtico y solemne en las leyes fundamentales de este código (se refiere al Fuero Juzgo).
- (23) Ibid., pág. 120 y ss.
- (24) J. A. MARAVALL: El pensamiento político en España a comienzos del s. XIX: Martínez Marina. Revista de Estudios Políticos nº 79, 1955, pág. 82.
- (25) El que en 1979 el proceso autonómico en Navarra se proyecte al margen de lo previsto en la normativa constitucional como ANEJAMIENTO DEL FUERO es una prueba más de la utilización política de una Historia mitificada.

- (26) M. C. LABORIE ERROZ: Navarra ante el constitucionalismo gaditano, Revista Príncipe de Viana nº 112-113, 1968, pág. 307 y ss.
- (27) El art. 12 de la Constitución decía: "La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra" (E. TIERNO GALVAN: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936), Ed. Tecnos, Madrid, 1972, pág. 24.
- (28) LABORIE: op. cit. pág. 308. Sobre la tendencia liberal de los canónigos de Roncesvalles por lo menos en la primera mitad del siglo hay otros datos además del señalado. En 1837 ayudan económicamente al ejército liberal. En recompensa, cuando el diputado Dolarea apoya la desamortización, pide se excluyan de ella las propiedades de los canónigos de Pamplona y de Roncesvalles, y en el Concordato de 1851, es una de las tres colegiadas, junto con Covadonga y Sacromonte exceptuadas de la supresión.
- (29) LABORIE: op. cit., pág. 310.
- (30) Todo lo relativo a esta elección: AGN. Sección Cortes, leg. 11, cap. 22.
- (31) M. ARTOLA: La burguesía revolucionaria, op. cit., pag. 41.
- (32) F. IDOATE: La guerra realista en la Merindad de Tudela, op. cit.
- (33) J. GORI GAZTAMBIDE: La Diócesis..., pág. 321.
- (34) MUTILOA: La desamortización..., pág. 54.
- (35) Después de la disolución de las Cortes tras la Restauración de Fernando VII, M. J. Lombardo de Tejada envió un memorial a la Diputación del Reino solicitando el pago de sus dietas como Diputado a Cortes. Entonces figuraba como abad de la Iglesia parroquial de la

villa de Dicastillo (AGN. Cortes, leg. 11, carp. 41). En 1820 forma parte de la primera Diputación provincial constitucional del Trienio.

- (36) El Acta del General Areízaga no es aceptada por estar incurso en expediente como responsable del desastre de Ocaña, al ser en aquella ocasión General en jefe de los Ejércitos (AGN. Cortes, leg. 11, carp. 24). El 10 de marzo de 1814, el diputado suplente: M. J. Lombardo anuncia a la Diputación su toma de posesión "en el agosto Congreso" (AGN. Cortes, leg. 11, carp. 24).

- (37) AGN. Cortes, leg. 11, carp. 22.

- (38) Navarra fue quizás una de las provincias que más sufrió los efectos de la guerra. De las primeras en ocuparse y últimas en liberarse tuvo que atender no sólo al abastecimiento del Ejército francés, sino más tarde también al del ejército español y al mantenimiento de la guerrilla. Y si el comercio vio compensada la disminución natural de su actividad con los suministros al Ejército y hospitales, la producción agrícola se resintió no sólo de las graves exacciones y requisas, sino de la disminución progresiva del número de brazos dedicados al campo a medidas que aumentaban las partidas de voluntarios, y de la dedicación de gran parte de las caballerías y animales de labor al traslado de material de guerra.

Una aproximación al coste económico de la guerra en Navarra: MIRANDA: op. cit., toda la tercera parte: La financiación de la guerra.

- (39) AGN. Sección Guerra. Guerra Independencia-7/II/1814. Cit.: LABORIE: op. cit., pág. 315.

- (40) Vid, supra, pág. 230 nota 9.

- (41) JOAQUIN LORENZO DE VILLANUEVA: Mi viaje a las Cortes, Madrid, 1860, pág. 520.

- (42) Toda ella en: AHN. Estado, leg. 83-B.

- (43) AGN. Guerra, leg. 15, carp. 19, cit. por MIRANDA: op. cit. Apéndice A-9, pág. 328.

- (44) ZABALA: op. cit., pág. 358.
- (45) Ibid., pág. 359.
- (46) En el mismo sentido E. FERNANDEZ DE PINEDO: Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco. 1100-1850, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1974, págs. 455-456: "Las tropas napoleónicas no sólo invadieron la península ibérica, sino que, cosa que se olvida con cierta frecuencia, implantaron la legislación liberal a su paso... Los pescadores y por supuesto los campesinos se opusieron a los franceses en cuanto invasores o también en cuanto liberales?... Son dos aspectos que no creo que se puedan desligar fácilmente."
- (47) IRIBARREN: op. cit., pág. 68, nota (1): "Las principales partidas de guerrilla que por aquel entonces había en Navarra eran la ya citada del párroco de Valcarlos, don Andrés Galdúroz, la de Francisco Antonio Zabaleta (a) "Belza" o "el Negro", natural del Goizuega, que actuaba por el valle de Baztán o confines de Guipúzcoa, la de Marcaláin, la de Andrés Ochotorena (a) "Buruchuri", la de Manuel Gurrea de Olite, la de Félix Sarasa (a) "Cholín", natural de Artica, la de Fidalgo, la del pamplonés Juan de Villanueva (a) "Juanito el de la Rochapea", la de Lizarraga (a) "Tachuela", la del carretero de Leyre, la de Vicente Carrasco, que se decía comisionado por la junta de Molina de Aragón, la de Pascual Echeverría, el carnicero de Corella, y la del cura don Hermenegildo Garcés de los Fayos, que mandaba una partida llamada "de la Cruzada".
- El mismo Espoz y Mina nunca se avergonzó de confesar su humilde origen y se autocalificará más tarde como "agricultor iliterato". Los franceses le llamaban "el layador de Idocín". En sus MEMORIAS (I, pág. 37) al referirse a su partida habla de "unos hombres que la mayor parte no conocíamos más manejos que el de la laya, el azadón y la podadera", Cit.: IRIBARREN: op. cit., pág. 37.
- (48) MIRANDA: op. cit., pág. 112
- IRIBARREN: op. cit., pág. 68 y ss.
- (49) No todo el clero de forma monolítica se pronunció contra el francés. Más adelante veremos las divisiones y tensiones que dentro de él existían. En esta ocasión,

el alto clero secular: cabildo catedralicio de Pamplona y canónigos de Roncesvalles, colaborarían con el invasor.

- (50) F. ESPOZ Y MINA: Memorias del General D. Francisco Espoz y Mina, Biblioteca Autores Espanoles, 2 vols., Madrid, 1962, I, pág. 9.
- (51) Ya en la Guerra contra la Convención, en la que Pamplona se resistía a luchar contra los franceses, comunicaba el Comisario Regio Zamora a Godoy, que gran parte de la nobleza se inclinaba por los franceses (J. M. JIMENO JURIO: Historia de Pamplona, Ediciones y Libros, S.A., 2ª ed., Pamplona, 1975, pág. 259.
- (52) A.N.P. Actas Ayuntamiento 1812-1813.
- (53) J. I. MENCOS: op. cit. pág. 36.
- (54) IRIBARREN: op. cit., pág. 330.
- (55) J. R. CASTRO: op. cit., pág. 23 y ss.
- (56) IRIBARREN: Op. cit. 224-225. A su vez cita las "Memorias" de Espoz y Mina.
- (57) Ibid., pág. 35, nota (2): La madre de Espoz y Mina, labriega de Idocin se quejaba por aquellas fechas del "escaso producto de las cosechas, de sus dificultades para pagar el diezmo a la Iglesia y los impuestos al recaudador".
- (58) A. CAMPION. op. cit., pág. 265.
- (59) Ibid., pág. 27.
- (60) Ibid., pág. 27.
- (61) Ibid., pág. 265.

- (62) AGN. Leg. 22 carp. 33. Tras unas manifestaciones de amor y de fidelidad al Rey "a quien la divina providencia destinó el trono de las Españas para hacer su fidelidad y ser el protector de la Santa Religión de nuestros Padres", añade: "Es sólo la imperiosa voz de la Religión emanada del Cielo y pronunciada desde el trono del mismo Dios, la exclusivamente decisiva de todo asunto, sin consideración a reflexiones humanas"
- (63) OLORIZ: Navarra en la Guerra de la Independencia, Pamplona, 1910, pág. 298.
- (64) Vid - supra, pág. 81 y ss.
- (65) CUADERNOS DE LAS CORTES... II, pág. 398. Las Cortes del Reino ofrecen 3.000.000 de reales, que no es aceptado por el gobierno. Tampoco acepta la segunda oferta de 12 millones en 8 años, descontando cuatro por contribuciones ya pagadas, y casi la duplica al exigir que se pague en 4 años. Las Cortes en una tercera réplica proponen su pago en seis años, que tampoco es aceptado y por fin en una cuarta, se acuerda hacerlo en 5 años y 8 meses.
- (66) M. TUNON DE LARA: La España del siglo XIX, Librería Espanola, París, 1971, pág. 39.
- (67) J. FONTANA: La quiebra..., pág. 332.
- (68) E. CHRISTIANSEN: Los orígenes del poder militar en España 1800-1854, Aguilar, 1874, pág. 20.
- (69) M. L. GUZMAN: Mina el Nozo, héroe de Navarra, Espasa Calpe, Madrid, 1932, pág. 222 y ss.
- (70) IRIBARREN: Espoz y Mina, el liberal, Aguilar, Madrid, 1967, pág. 195: "...en aquellos días de la segunda mitad de mayo (1814) el mariscal Espoz MANDO FUSILAR LA CONSTITUCION DE CADIZ, como prueba de su adhesión al rey y de su odio contra el engendro del año 12, del que luego se constituiría en acérrimo defensor". El haber esperado la vuelta de Fernando VII para hacerlo, cuando llevaba dos años publicadas más parece oportunismo que posicionamiento político.

- (71) Durante su presidio en Francia Mina el Mozo compartió primero en Vincennes su celda con el general francés liberal La Horie. Trasladado el último año a Saumur, coincidió con el General Concha. Su biógrafo M. L. GUZMAN: op. cit., pág. 216, nos dice: "Salió del cautiverio como se sale otro de la escuela y como si a través de las rejas de la prisión un mundo nuevo se le hubiese revelado. Ya no era el guerrillero ingenuo que había estimado principal deber de los hombres y los pueblos la defensa de la religión y sus reyes. Al lado de eso y aun antes que eso, estaba ahora la devoción por la JUSTICIA y la LIBERTAD".
- (72) CHRISTIANSEN: op. cit, pág. 19: "Una nueva concepción del Ejército empieza a aflorar entre los elementos liberales... En vísperas de la Restauración un folleto radical insistía en si el Rey actuaba contra la Constitución el deber del soldado estaba con el pueblo, no con la Corona: "No tenemos dueño ni señor", el soldado ha de afirmar "somos soldados nacionales". Citan do a: GOMEZ DE ARTECHE Y MORO: Guerra de la Independencia, vol. XI (1899), pág. 33.
- (73) M. TUÑON DE LARA: op. cit., pág. 42.
- (74) J. FONTANA: La quiebra..., pág. 337 y ss.
- (75) TUÑON DE LARA: op. cit, pág. 42 y ss. En ellas una síntesis de todas las reformas decretadas por las Cortes en el Trienio.
- (76) Vid, supra, pág. 86, por poner dos ejemplos, BERNARDINO DE ESTELLA: Historia Vasca (1ª ed. 1931), Izaro, Bilbao, 1977, pág. 270) escribe: "Acudieron diputados de Nabarra y de Bizkaya contra toda justicia, por ser Estados completamente independientes. Los de Nabarra carecían de representación por otro motivo, pues fueron nombrados por autoridades españolas... la Constitución de Cádiz fue un acto de fuerza sin valor alguno". Y ARTURO CAMPION (Discursos... op. cit., pág. 27): "Nabarra estuvo representada en las Cortes de Cádiz por diputados en cuyo nombramiento no intervino el país, por virtud de las escandalosas prerrogativas que acerca de esta materia se atribuyera la Regencia".
- (77) ECHAVE SUSTAETA: El Partido carlista y los Fueros, Pamplona, 1914, pág. 62: "Mientras se atentaba desde

Madrid contra los Fueros de Navarra, aquí se conducía el Virrey violentamente con la Diputación y los Fueros... El Virrey en aquella temporada estuvo coaccionando constantemente a la Diputación y la impuso la publicación de una alocución al pueblo navarro disuadiéndole de su inclinación carlista".

(78) AGN. Sección Diputación, leg. 3, carp. 34, año 1820.

(79) Ibid.

(80) Por parte de la Diputación firmaron los diputados Tiburcio Ordóñez, abad de Marcilla, el Conde de Guendulain, Blas de Echarri, José María Vidarte, Fausto Galdiano y Pedro Clemente Ligués; y por el Ayuntamiento entre otros su alcalde Cristóbal María de Ripa, Marqués de Jaureguizar, y los regidores Julián María Ozcariz, Benito Antillón, Victoriano Esain y Francisco Javier de Ollo, futuro suegro de Zumalacárregui. Vid. APENDICE Nº 3, pag. 549

(81) Los comisionados de la Diputación eran el Conde de Guendulain, José María Vidarte y Fausto Galdiano.

(82) AGN. Sección Diputación, leg. 3, carp. 35.

(83) AGN. Sección Diputación, leg. 3, carp. 36.

(84) AGN. Sección Diputación, leg. 4, carp. 2.

(85) AGN. Sección Diputación, leg. 3, carp. 35.

(86) PEDRO CLEMENTE LIGUES Y NAVASCUES: Vid. infra. nota 95, pág. 241. También en 1813, un miembro de la Diputación del Reino: Niguel Escudero pasó a ser jefe político de la Provincia.

(87) AGN. Sección Diputación, leg. 4, carp. 8. Vid. APENDICE nº4 pag. 551

(88) FLORENCIO GARCIA GOYENA: nació en Tafalla en 1783; hizo sus primeros estudios en los Escolapios de Zaragoza y los mayores en las Universidades de Madrid y Sa-

lamanca, donde desempeñó la cátedra de Digesto. En 1816 fue nombrado síndico consultor del Reino de Navarra, destino que las Cortes declararon vitalicio. En 1820 es enviado a Madrid como comisionado de la Diputación. Durante el Trienio fue jefe político de Granada y Zaragoza. Perseguido por liberal en 1824, fue expulsado por el Conde de España, sin querer "purificarse" sólo regresó al fallecer Fernando VII. En 1834 es nombrado fiscal de lo criminal en la Audiencia de Burgos y en diciembre del mismo año es enviado como Comisario Regio a Navarra. Diputado a Cortes por su provincia natal en 1839 y 1840, militó en las filas del moderantismo. Presidente del Tribunal Supremo en 1843, en 1847 es nombrado ministro de Gracia y Justicia y presidente del Consejo de Ministros. Como jurista relevante formó parte de la Comisión de Códigos desde su creación y escribió varias obras jurídicas. Falleció en 1855.

(89) Había ya un precedente en la Exposición que los generales Elío enviaran al rey en 1814 pidiendo la restauración foral. Vid supra, pag.

(90) YANGUAS Y MIRANDA: Análisis; op. cit., pág. 48.

(91) Sobre los tipos de legitimidad según Max Weber véase: LUCAS VERDU: Curso de Derecho Político II, pág. 106.

(92) Vid. - supra, pág. 147

(93) Guendulain y Vidarte eran diputados en representación de la nobleza, con un voto cada uno. Galdiano lo era por la ciudad de Pamplona Ligués por Cintruénigo. Ambos compartían su voto con el segundo representante de Pamplona y el segundo de Universidades. Desconocemos lo que sucedería en caso de no coincidir a la hora de emitir el voto.

(94) El sistema electoral, recogido en los artículos 34 a 103 de la Constitución de 1812 era de sufragio indirecto a cuatro grados: vecinos residentes, compromisarios de parroquia, electores de parroquia, electores de partido, diputados a Cortes. En TIERNO GALVAN: Leyes políticas españolas fundamentales... op. cit., pág. 27 a 36.

(95) PEDRO CLEMENTE LIGUES Y NAVASCUES: Síndico procurador en las Cortes de Navarra de 1801 y 1817 por la ciudad de Cintruénigo. Miembro de la Diputación del Reino en 1818. Formó parte de la Junta Gubernativa interina de signada por el Ayuntamiento de Pamplona el 16-III-1820, pasando a ser en el mes de abril jefe político interino de Navarra durante 11 meses. Diputado provincial en 1822 es reemplazado al ser nombrado jefe político de Valladolid el 28-IV-1823 y ser cargos incompatibles. El 3-X-1836 es elegido Diputado suplente a Cortes por Navarra y el 24-XII-1836 la Diputación le encomendó, ya que residía en Madrid la suscripción para erigir un monumento a Espoz y Mina recientemente fallecido. Entre los compradores de tierras desamortizadas a la Iglesia en 1837 que incluye Donézar (La desamortización... op. cit., pág. 297 y ss.) figura Pedro Clemente de Cintruénigo. Bien podría ser el mismo; es fácil confundir el segundo nombre con el apellido; así Tomás Morál (op. cit., pág. 86) habla del "jefe político de Navarra: Pedro Clemente, secretario de Sigües".

(96) Todo lo relativo a esta elección en: AGN. Sección Cortes, leg. 12, carp. 3 a 7.

(97) JOSE YANQUAS Y MIRANDA: nació en Tudela en 1782; su padre era escribano. Estudió en Zaragoza y en 1806 era escribano del Ayuntamiento de Tudela. Exaltado constitucionalista celebra la promulgación de la Constitución de 1812. En 1813 pasa a ser secretario del Ayuntamiento. En 1817 asiste a las Cortes de Navarra como síndico de Tudela. En 1822 es nombrado vocal secretario de la Junta de armamentos y defensa contra los facciosos realistas. Preso en Puente la Reina en 1823; se acogió al decreto de Amnistía de 1824 y se exiló a Francia donde trabajó de relojero hasta que la Diputación del Reino le comisionó para estudiar el Archivo de Pau. En 1830 es nombrado Archivero del Reino y el 6-IV-1834 ocupó el cargo de secretario interino de la Diputación, que en 1837 pasó a ocupar en propiedad hasta 1863. Zuaznabar le acusó de masón. "Fue un liberal con el penacho anticlerical propio del progresismo" dice de él su biógrafo José Ramón Castro e inspiró en gran medida la política de la Diputación. Autor de numerosas obras sobre historia, legislación e instituciones navarras, destaca por su envergadura el "Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra" (1840).

JOSE ALONSO: natural de Corella, magistrado y regente de varias Audiencias, militó en las filas del progresismo. Fiscal y magistrado del Tribunal Supremo de

Justicia. Diputado a Cortes por Navarra en febrero de 1836, siendo regente de la Audiencia de Madrid. En 1839 no consigue salir por Navarra, pero sí por Madrid. Diputado suplente a Cortes por Navarra en 1841, ese mismo año es nombrado ministro de Gracia y Justicia en el Gabinete Antonio González. En 1848 publicó su obra: "Recopilación y Comentarios de los Fueros y Leyes del Antiguo Reino de Navarra". En 1854 sale elegido Diputado a Cortes por Navarra pero opta por Burgos. Su hijo Eduardo Alonso Colmenares siguió los pasos del padre en la judicatura y en la política llegando a ser dos veces ministro de Justicia y Fomento entre 1871 y 1873; también representó a Navarra en el Congreso en 1871 (1º) y en 1872 (2º) aunque salió elegido por Tudela, optó por Arnedo.

- (98) JOSE MARIA DE EZPELETA Y ENRILE: de la más rancia nobleza navarra de origen labortano, hijo del que fue virrey de Navarra en 1814: José de Ezpeleta y Galdeano. Nació en La Habana en 1737. Reunió en su persona los títulos de Conde de Ezpeleta de Beire, Duque de Castroterreño, Marqués de Montehermoso, Conde de Triviana, del Vado y de Echauz, Grande de España de primera clase. Siguió la carrera militar y fue teniente general del ejército. Adhirióse al partido constitucional, pero cuando fue declarada la incapacidad de Fernando VII en Sevilla, en 1823 se separó, presentándose a las autoridades militares. Fue purificado en 1827. En 1833 se adhirió a Isabel II. Comprador de tierras desamortizadas en 1837.

- (99) Vid. supra. pág. 231 nota. 17

- (100) El autor anónimo de CONDICIONES Y SEMBLANZAS DE LOS DIPUTADOS A CORTES. LEGISLATURA 1820-1821 (Madrid, 1821), mientras dedica palabras elogiosas a los "constitucionalistas" Dolarea y Ezpeleta de Lecumberri dice: "Navarrito alegre y hombre pensativo, Diputado juicioso y clérigo cavilosillo. Lo mismo es oír hablar del papa, de diezmos, dispensas o bulas o de no enviar patacones a Roma, se le cae el solideo y no sabe lo que pasa... A vosotros os debemos los conflictos... junto de malos estudios y malos libros, señores Lecumberris; no perdamos de vista nunca la naturaleza".

- (101) JUAN CRISOSTONO DE VIDAONDO Y MENDINUETA: nacido en Caracas de familia baztanesa (su madre: María de Mendinueta y Muzquiz), recibió su primera tonsura en

1805. Abandonó la carrera eclesiástica y en 1820 ocupó el cargo de oidor de la Cámara de Comptos. Diputado provincial en el mismo año, pronunció en nombre de la Diputación dos discursos de felicitación en la toma de posesión de los jefes políticos. Impurificado en segunda instancia en 1824, en 1833 se incorporó tardíamente a la Junta Gubernativa carlista corriendo a su cargo los asuntos económicos. Terminada la guerra, en 1842 apareció en la Comisión de la Sociedad por acciones para la carretera de Baztán como vocal. En 1844 se presentó a las elecciones a Cortes en la candidatura moderada: saliendo elegido diputado. Escribió "Establecimiento de Educación en Elizondo, valle de Baztán bajo la dirección de D. Juan Crisóstomo de Vidaondo y Mendinueta". La instrucción se reducía a gramática, lógica y retórica.

(102) F. BAZTAN GONÍ: Diputaciones provinciales..., pág. 4

(103) Los diputados se renovaban cada dos años (art. 108) de la Constitución; y el proceso electoral, que duraba tres meses, comenzaba el primer domingo de octubre (art. 35). En TIERNO GALVAN: Leyes políticas..., op. cit., pág. 27 y 31.

(104) AGN. Cortes, leg. 12, carp. 36.

(105) Art. 92: Se requiere además para ser elegido Diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada procedente de bienes propios. Sin embargo esta exigencia nunca se concretó manteniéndose la suspensión del artículo hasta que las Cortes señalasen la cuota, según preveía el art. 93. TIERNO GALVAN: op. cit. pág. 35.

(106) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 2. Firmado por Luis Ve-
yán como jefe político y AGUSTIN ARMENDARIZ como secretario; primeros pasos políticos del que llegaría a ser en 1840 ministro de la Gobernación.

(107) Todo lo referente a esta elección en: AGN. Cortes, leg. 13, cap. 2.

(108) Vid. - supra, pág. 193

- (109) MUTILOA POZA: La desamortización... op. cit., pág. 336: "Conocemos la parte importante que le cupo al clero en esta lucha. No faltaron quienes militaron a favor de los constitucionalistas, como el párroco y vicario de Santa María de Tafalla..."
- (110) MIGUEL ESCUDERO Y RAMIREZ DE ARELLANO: Vid-supra, pág. 230 nota. 9
- (111) Art. 327: La Diputación provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el mayor número y la segunda el menor, y así sucesivamente. TIERNO GALVAN: op. cit, pág. 66.
- (112) AGN. Cortes, leg. 12, carp. 10.
- (113) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 7. En el oficio de la Diputación a los diputados a Cortes 3-VI-1822 ignoran "si el cupo asignado a Navarra, descuenta los productos de los predios rústicos y urbanos de los pueblos segregados de nuestra provincia". En 1836 "la Diputación se preocupará de que no se segreguen los pueblos de Fitero, Cintruénigo y Viana y que no pasen a Logroño como sucedió en 1812" (RZ. GARRAZA: Navarra ..., pág. 250). De ello deduzco que en 1820 se dio la misma situación que en 1812 y los pueblos a los que hace referencia el oficio son los señalados.
- (114) BAZTAN GOÑI: op. cit., pág. 5.
- (115) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 7, oficio Diputación a Diputados a Cortes 24-VI-1822.
- (116) Ibid. oficio Diputados a Cortes a Diputación 1-VII-1822.
- (117) Ibid. oficio Diputación a diputados a Cortes 4-III-1822. Se refiere a la venta de tres corralizas de la villa de Arguedas.
- (118) EXPOSICION QUE AL CONGRESO NACIONAL DIRIGE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE NAVARRA, SOBRE LA SITUACION POLITICA: ESTADO DE HACIENDA PUBLICA DEL ANTIGUO REINO:

Y OBSERVACIONES ACERCA DE SU RIQUEZA. Pamplona: Im-
prenta de José Domingo, 1820, pág. 8.

- (119) Ibid., pág. 17.
- (120) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 7; oficios Diputados a Cortes a Diputación 27-VI-1822 y 1-VIII-1822.
- (121) Ibid.; oficio Diputados a Cortes a Diputación 16-V-1822.
- (122) En 1813 por la situación de guerra no llegaron a recaudarse los cupos provinciales (G. MARTINEZ DIAZ, op. cit., pág. 35).
- (123) EXPOSICION QUE AL CONGRESO..., pág. 9.
- (124) RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 52.
- (125) TUÑON DE LARA: La España del siglo XIX..., pág. 45.
- (126) En la legislatura 1820-21 los diputados de las cuatro provincias: Ezpeleta, Lecumberri, Zubia, Romero, Loizaga, Yandiola y Dolarea defendieron conjuntamente ante las Comisiones de Guerra y Hacienda la indemnización que debe hacerse a las provincias Vascongadas y Navarra por cantidades que se adelantaron en conmutación del reemplazo del Ejército los años 1818, 19, 20, 21. AGN. Cortes, leg. 13, carp. 4; oficio Diputación a Diputados en Cortes 4-III-1822. La solicitud es informada favorablemente en las Cortes: Ibid. oficio Escudero a Diputación 25-IV-1822.
- (127) J. ALONSO: op. cit. I, pág. 45: "En la época segunda constitucional se realizaron las quintas; y tal vez esto fue causa de que engrosasen entonces las facciones".
- (128) AGN. Cortes leg. 13, carp. 7; oficio Diputación a Diputados a Cortes 22-VII-1822.
- (129) Ibid. oficio Diputados a Cortes a Diputación 25-VII-

1822.

- (130) LACARRA: op. cit., pág. 245.
- (131) EXPOSICION... pág. 11.
- (132) CUADERNOS DE LAS CORTES... II, pág. 257, Ley XXXIX, pág. 257.
- (133) Ibid. Ley XL, pág. 262.
- (134) M. ARTOLA: Antiguo Régimen... op. cit., pág. 183 y ss. Decretos 3-IX-1811 y 13-IX-1813 sobre reconocimiento y forma de pago de los distintos títulos.
- (135) TUÑÓN DE LARA: La España..., pág. 45.
- (136) TOMAS Y VALIENTE: El marco..., op. cit., pág. 67.
- (137) EXPOSICION..., pág. 13 a 15.
- (138) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 7 oficio Diputación a diputados a Cortes 23-II-1823.
- (139) Ibid. oficio 14-III-1822. El Manifiesto de la Diputación provincial de Guipúzcoa a las Cortes está fechado en Tolosa el 14-III-1822 y lo firman: El Conde de Villafuertes, José María Ezeiza, José Joaquín Garmentia, José Javier de Ayerre, José María de Oyarzabal, Juan Cipriano de Andonaegui y el Conde de Monterrón.
- (140) Ibid. Oficio Diputados a Cortes a Diputación 16-V-1822: "Las Cortes en consideración a lo expuesto por la Diputación provincial de Guipúzcoa... han resuelto... se apliquen del producto de las contribuciones territoriales y de consumos que anualmente se señalan a la espresada provincia de Guipuzcoa 680.384 reales al año para el pago de intereses, y el resto para luición de los capitales, lo cual comunican al Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación de la Península para que se sirva disponer de su cumplimiento".

- (141) AGN. Ibid. oficio 6-V-1822, 13-V-1822, 16-V-1822, 22-VII-1822 y 23-II-1823.
- (142) Ibid. oficio 1-VII-1822.
- (143) M. ARTOLA: "La burguesía revolucionaria", Alianza Universidad, pág. 298: "El restablecimiento del liberalismo determinó el renacimiento de las esperanzas de los acreedores tanto nacionales como extranjeros que presionaron para lograr el reconocimiento de sus créditos".
- (144) Se olvidan de Carlomagno. Todavía no había aparecido el mito de Roncesvalles: "la gran batalla del pueblo vasco por su independencia".
- (145) EXPOSICION..., pág. 3.
- (146) EXPOSICION..., pág. 6. No creemos necesario precisar el alcance real de la "independencia" de Navarra por haber quedado expuesto en la primera parte del presente trabajo dedicada al análisis de las instituciones forales.
- (147) EXPOSICION..., pág. 8.
- (148) R. CARB: España 1808-1839, Ed. Ariel, Barcelona, 1969, pág. 148.
- (149) M. ARTOLA: Partidos y Programas políticos 1808-1936, Ed. Aguilar, Madrid, 1974, vol. I, pág. 213 y 214.
- (150) A. MARTIN: Historia de la guerra de la División Real de Navarra contra el intruso sistema llamado constitucional y su gobierno revolucionario. Imprenta Javier Gadea, Pamplona, 1825, pág.
- (151) Ibid., pág. 24.
- (152) BELTZA: op. cit., pág. 13. Recoge una cita de E. Le Roy Ladurie (artículo en "Civilisation rurales", En-

cyclopaedia Universalis, vol. 14, pág. 511, París, 1968): "Los rústicos, cuando se encuentran confrontados con el mundo exterior, tienden a sacar sus líderes de entre esos mediadores naturales que, con respecto a las fuerzas extrañas de la sociedad englobante, son los pequeños notables, los curas y además, cuando no están en conflicto directo con los campesinos, los señores locales".

- (153) J. L. CONELLAS: Los realistas en el trienio constitucional, Pamplona, 1958.
- (154) PIO DE MONTROYA: La intervención del clero vasco en las contiendas civiles (1820-1823), San Sebastián, 1971. Todo lo referente a Navarra, pág. 165 y ss.
- (155) A. MARTIN, op. cit., pág. 25.
- (156) AGN. Guerra, leg. 23, carp. 19, 20. Cit. por LABORIE: op. cit., pág. 79. Más datos en: IDOATE: La merindad de Tudela durante la guerra realista. Revista Príncipe de Viana, nº 104 y 105, 1966. La alusión a los rusos se debe a ser el zar encarnación del absolutismo.
- (157) ANONIMO: "Relación sencilla de lo ocurrido en la defensa del fuerte de la Ciudad de Estella por su Guarnición. Milicianos Nacionales y Patriotas de la misma cuya fuerza consistía en los provinciales de Logroño, veinte soldados de los Regimientos de Toledo y Ordenes Militares y ochenta y cuatro voluntarios y Patriotas contra las columnas de las facciones mandadas por los Cabecillas Guergué, Zabala, Cuebillas, Ilzarbe y otros varios cuyo total de fuerzas según noticias era de 2.000 hombres". Imprenta de José Domingo, Pamplona, 1823.
- (158) AGN. Sección Diputación, leg. 3, carp. 34, año 1820.
- (159) REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD PATRIOTICA DE PAMPLONA, Imprenta Xavier Gadea, Pamplona, 1820.
- (160) Los estatutos también garantizan la igualdad en las formas. En el art. 16: "ningún socio podrá entrar con capa, ridículo, bastón, espada u otra arma. En el art. 17: "los socios ocuparán sus asientos sin

preferencia ni distinción de clase y se mantendrán descubiertos. Y en el Art. 18: "no habrá otro tratamiento que el de usted y no se usará otra voz que la de ciudadanos o ciudadano tal...".

- (161) LABORIE: op. cit., pág. 76.
- (162) Se llamaba así porque se reunían en casa de Pedro Ibarra, emplazada junto al arroyo Vencerol (IDOATE: La merindad...)
- (163) R. CARR: op. cit., pág. 137.
- (164) Ibid., pág. 138.
- (165) MENCOS: op. cit., pág. 44.
- (166) Ibid., pág. 44.
- (167) Ibid., pág. 45: "En abril de 1821 se levantó la primera bandera contra la Constitución en Salvatierra de Alava; la Autoridad de Navarra aprovechó aquella oportunidad para poner en conflicto nuestro Constitucionalismo moderado y nos invitó a combatir a los enemigos de la Constitución. La política y el honor nos aconsejaban recoger el guante. Salimos contra los sublevados; entramos en Salvatierra en donde cayó prisionero el después general Urbistondo; recorrimos en dieciseis días las provincias de Guipúzcoa, Alava y Navarra y volvimos con un escudo de distinción que nos concedió el Gobierno; pero ni aquellos hechos ni aquel escudo nos santificaron para con los patriotas ni las Autoridades".
- (168) Ibid., pág. 45: "la pugna crecía, el espíritu de opinión moderada de la Milicia, y los choques diarios iban creando un partido que al cabo vendría a levantar una bandera que no cabría en la legalidad existente".
- (169) Ibid., pág. 45.

- (170) El MANIFIESTO impreso en la Imprenta de Paulino Longás, Pamplona, 1821, va firmado en ausencia del Gefe superior político por: Higinio García Burunda, intendente. Juan Crisóstomo de Vidaondo y Mendinueta, Cristóbal María de Ripa y Jaureguizar, Manuel José Lombardo de Tejada, Matías Octavio de Toledo, José María Ezquerro y Bayo y Benito de Ochagavía y Cortés, diputados. Con acuerdo de S.E.: Fermín García de Galdeano, secretario interino, el 30-XI-1821. (APENDICE nº6, pag. 554
- (171) El miedo a que la revolución se les escapase de las manos hizo que muchos liberales moderados se acercasen a posturas próximas al Despotismo Ilustrado. Ver nota (287) el caso de José María Ezpeleta.
- (172) BAZTAN GONI: Diputaciones Provinciales..., op. cit., pág. 6: "La Junta provisional de Gobierno de España dictó en 11-VIII-1823 desde Tolosa una orden que en 16-IV-1823 comunicó el Conde de España para que en Navarra y las Provincias Vascongadas se restableciesen sus Diputaciones forales como lo estaban en 1-III-1820.
- (173) AGN. Actas Diputación. T. 32; cit. por RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 58.
- (174) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 15.
- (175) EVARIST OLCINA: El Carlismo y las autonomías regionales, Ed. Seminarios y Ediciones, Madrid, 1974, pág. 16: "Es risible el esfuerzo que esos tradicionalistas realizan para demostrar sus tesis. Echave Sustaeta, por ejemplo llega incluso a amañar en su obra "El partido carlista y los Fueros", algunos textos de la época (como el del Barón de Eroles) echando mano, a lo sumo, como argumentación "definitiva", a pequeñas alusiones esporádicas y de compromiso encontradas en proclamas del alzamiento "realista" navarro de 1821. ¿Por qué razón esta insistencia de los tratadistas en la motivación foral como forzado elemento de enlace entre el carlismo y los movimientos anticonstitucionalistas anteriores? Como veremos más adelante Echave Sustaeta también "amahó" los documentos navarros (Infra, pág. 210).
- (176) R. GAMBRA: La primera guerra civil de España (1821-1823), Ed. Escelicer, Madrid, 1950, pág. 28 y 29.

- (177) Ibid., págs. 13 y 15.
- (178) F. IDOATE: La merindad de Tudela..., op.cit.
- (179) Y no sólo por motivos ideológicos. La desamortización eclesiástica suponía una real amenaza de elevación de renta o de deshaucio por parte de los nuevos propietarios. Tampoco hay que olvidar la función hospitalaria y de beneficencia que cumplía la Iglesia.
- (180) J. TORREAS: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, Ed. Ariel, Barcelona, 1976, pág. 52 y ss.
- (181) AGN. Sección Estadística, año 1797.
- (182) R. CARR: op. cit., pág. 57.
- (183) CAMPION: op. cit., pág. 267.
- (184) A. MARTIN: op. cit., pág. 106 y ss. y 144 y ss.
- (185) Ibid., pág. IX.
- (186) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 15. La obra que apareció en 1914 fue el resultado de la recopilación, ampliación y comentario de una larga serie de artículos periodísticos anteriores que aparecieron en "El Basco", "Txapel Zuri" y "El Pensamiento Navarro".
- (187) OBRAS COMPLETAS DE ARANA-GÓIRI'TAR SABIN, Ed. "Sabin diar-Batza", Buenos Aires, s. a., pág. 1067 a 1104. La polémica que se originó con el Partido Carlista, particularmente con Echave Sustaeta, en la misma pág. 1105 a 1252.
- (188) Vid supra, pág. 247 nota 150
- (189) A. MARTIN: op. cit., pág. IX: "En todo pues resplandecerá el espíritu de caridad, de moderación y marse dumbre y lenidad que nos manda el evangelio de nuestro divino Jesús, a cuya suprema magestad ultrajada

y a la persona del Rey nuestro Señor ofendida por los mismos, consagro gustoso y dedico mi trabajo".

(190) Ibid, pág. III.

(191) Ibid., pág. X

(192) Ibid., pág. 144.

(193) Ibid., pág. 25.

(194) Ibid., pág. VIII.

(195) Ibid., pág. 239.

(196) Ibid., pág. 55.

(197) Ibid., pág. 224.

(198) Ibid., pág. 45.

(199) Ibid., pág. 59.

(200) Ibid., pág. 55.

(201) Ibid., pág. 172.

(202) Ibid., pág. 220.

(203) Ibid., pág. 102.

(204) Ibid., pág. 153.

(205) Ibid., pág. 207.

(206) Ibid., pág. 164.

- (207) Ibid., pág. 266.
- (208) Ibid., pág. IX.
- (209) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 16.
- (210) A. MARTIN: op. cit., pág. 221 y ss.
- (211) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 18.
- (212) A. MARTIN: op. cit., pág. 235.
- (213) Ibid., pág. 245 y ss. El manifiesto está firmado por Lacarra, Nélida, Uriz y Eraso.
- (214) ¿Se referirá al asunto de la Deuda Pública?
- (215) Hasta 1834 la división administrativa adjudicaba el nombre de la capital a la provincia. Por el decreto se exceptúan de la regla general las cuatro provincias vascas que en lugar de tomar el nombre de la capital siguen llamándose: Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
- (216) Los tribunales de justicia son también reivindicados por los realistas aragoneses. Ver pág. 189 de este trabajo.
- (217) A. MARTIN: op. cit., pág. 242.
- (218) J. N. AZCONA: Zumalacárregui. Fuentes Históricas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1946, pág. 320 a 324.
- (219) A. MARTIN: op. cit., pág. 145.
- (220) Ibid., pág. 146.
- (221) Ibid., pág. 197 y ss. y 228 y ss.

- (222) Ibid., pág. 17, nota (1)
- (223) Ibid., pág. 234.
- (224) El recelo a las NOVEDADES se plasmó en el lenguaje popular y hasta los viajeros extranjeros de la época lo recogían como curiosidad pintoresca. Richard Ford advierte que para desear bien a un amigo los españoles se dicen entre sí: "Que no haya novedad" o se preguntan inquietos: "¿Hubo novedad?". No. Vaya, me alegro". Con irónica malicia dice que el mayor odio del español, después de su vecino son las innovaciones". R. FORD: Handbook for travellers, London, 1855, I, pág. 33. Cit. SANCHEZ AGESTA: op. cit., pág. 35.
- (225) Sobre el lugar que el "Idealismo" puede ocupar en la Historia: J. R. BARREIRO: El Carlismo Gallego, Ed. Pico Sacro, Santiago de Compostela, 1976, pág. 259: "En la historia cuantificada queda siempre un margen respetuoso y de reconocida eficacia histórica al heroísmo individual, a los que por su peso humano específico, razonable o irracionalmente rebasan las motivaciones comunes y se hacen protagonistas del puro ideal". Y ante la necesidad de encontrar motivaciones socioeconómicas para la explicación del carlismo gallego: "esto no niega la posibilidad de opciones místicas e idealistas, pero su singularidad no puede servir para explicar ningún proceso histórico", pág. 41.
- (226) F. BAZTAN GOÑI: Policía..., pág. 6 y ss.
- (227) Ibid., pág. 19.
- (228) Ibid., pág. 7.
- (229) DANIEL LOPEZ: Los procedimientos y el arte de gobernar durante el reinado de Fernando VII; en La España del siglo XIX, tomo I, pág. 18. Cit. por TUÑON DE LA RA: op. cit., pág. 60.
- (230) P. PEGENAUTE: Planteamiento de la represión política en Navarra durante el reinado de Fernando VII. Revista Príncipe de Viana, nº 134-135, Pamplona, 1974, págs. 317 a 339.

- (231) CUADERNO DE CORTES... II, Ley XVI, pág. 447.
- (232) Ibid., pág. 448. El Decreto dice así: "Pamplona y su Real Palacio 27 de Marzo de 1829.- El sistema de economía que las necesidades del Estado nos han obligado adoptar uniformemente para los empleos en todos los juzgados de nuestra Real Hacienda, no nos permite acceder a lo que solicitais por este pedimento; pero queriendo daros una prueba de que procuraremos por el verdadero interés de vuestros Naturales, declaramos que el Asesor del juzgado de la subdelegación de rentas de este Reino haya de ser natural de él, y que de las apelaciones que se interpongan de las sentencias de dicho juzgado haya de conocer el Consejo de Navarra, dando a aquellas la misma fuerza y valor que el que se daba a las de los antiguos Tribunales de Tablas y contrabando, para que de esta suerte no salgan los procesos fuera de este Reino.- El Duque de Castro Terreño".
- (233) Ibid., pág. 476 y ss.
- (234) RZ GARZA: Navarra..., pág. 63 y 112.
- (235) AGN. Actas Diputación, t. 36 (13-X-1830). Cit. por RZ GARZA: Navarra..., pág. 113.
- (236) Por ejemplo el decreto de confirmación de contrafuero de la ley I dice así: Pamplona 4 de septiembre de 1828.- Sin embargo de que hubo justos motivos para la prisión de Miguel de Goñi, la declaramos nula y de ningún valor en cuanto haya sido opuesta a vuestros Fueros y Leyes, los cuales mandamos que se observen inviolablemente según su ser y tenor.- M. El Duque de Castro-Terreño (CUADERNO DE CORTES... II, pág. 414.
- (237) CUADERNO DE CORTES... Leyes, XVII, XIX, XXXIII, XXXVI, XXXVIII, XLI, XLV, LIII a LVI, LVIII, LIX, LXI y LXII
- (238) Ibid. Leyes: XX, XXI, XXV, XXVII, XXXVI, XXXVII, XL, XLVI.
- (239) CUADERNOS DE LAS CORTES... II, pág. 536. LEY LXV.

Servicio Gracioso y voluntario hecho a S. Magestad por el Reino en estas Cortes, bajo las condiciones que contiene.

- (240) Ibid., pág. 540. "...que cada una de las condiciones espuestas con que hacemos este servicio voluntario tengan fuerza de Ley Contractual entre V. Magestad y este Reino..."

Ello no quita para que Navarra siga gozando de una presión fiscal muy inferior al resto del Estado y pueda hablarse de "privilegios" al comparar fiscalidades. Así pudo decir el Ministro de Hacienda al diputado Vidarte que el último ofrecimiento del donativo "más bien que servicio ha sido un insulto hecho al Soberano" (RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 130)

- (241) AGN. Traslación de Aduanas. leg. 2, carp. 14. Cit. por RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 90.

- (242) OLAVE: op. cit., pág. 233. Ver también en el presente trabajo, pág. 39.

- (243) RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 99.

- (244) Ibid., pág. 99.

- (245) Ibid., pág. 100, 138 y 142.

- (246) Ibid., pág. 103. También en CAMPION: Discursos..., pág. 30: "...sus contrafueros eran tantos, tan importantes y repetidos, que la Diputación del Reino, en 1831, hubo de decirle en respetuosa, pero austera y firme representación, que "sus fidelísimos nabarros se miraban, prácticamente, despojados de las libertades que el Rey les había jurado".

CAPITULO III: LA PRIMERA GUERRA CARLISTA

III.-LA GUERRA CARLISTA Y LOS FUEROS

1.-SIGNIFICADO Y CAUSAS DE LA GUERRA

El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII confiando la regencia a su esposa hasta la mayoría de edad de Isabel II. Londres y París se apresuraron a reconocer este estado de cosas. Por el contrario los voluntarios realistas de Bilbao, dirigidos por el marqués de Valdespina se pronunciaron a favor de D. Carlos el día 3 de octubre. El Carlismo acababa de nacer. A partir de entonces la defensa del Antiguo Régimen queda ligada a la defensa de la legitimidad dinástica de D. Carlos. La cuestión sucesoria, facilitó el advenimiento del régimen liberal. El desarrollo de los acontecimientos había hecho que el trono de la hija de Fernando VII sólo pudiera salvarse si lo defendían los constitucionalistas, los liberales perseguidos por su padre (1).

En Bilbao la Diputación se adhirió mayoritariamente al levantamiento carlista que se extendió pronto por toda la provincia. Ni el Ayuntamiento de Pamplona ni la Diputación del Reino se sumaron al llamamiento que la Junta

carlista de Bilbao había hecho en nombre del rey Carlos V; La Navarra "oficial" opta por la hija de Fernando VII, la disociación con la Navarra "popular" que opta por el pretendiente y todo lo que representa es total. Santos Ladrón, general navarro procedente de las filas realistas levanta la bandera de D. Carlos en Logroño. Una columna formada en Pamplona al mando del General Lorenzo marchó contra los sublevados, consiguió dispersarlos y hacer prisionero a Ladrón que a los pocos días era fusilado en la ciudadela de Pamplona. La causa tenía su primer mártir. Era el principio de la guerra civil que durante siete años iba a dividir a la sociedad española en general, pero de forma mucho más especial a la sociedad vasca. Se libraba la batalla decisiva entre el Antiguo Régimen y el Estado Liberal. Y esta y no otra es la cuestión central que se ventila en la Primera Guerra Carlista; ello tanto en el País Vasco como en el resto de España.

El carlismo es sobre todo la nueva forma que toma la reacción ante las transformaciones liberales de todos aquellos sectores sociales que de una u otra forma ven en peligro sus posiciones más o menos privilegiadas y ventajas ante el nuevo modelo de Estado y sociedad que trata de imponerse.

El enfrentamiento no era nuevo; en la guerrilla de la Independencia, aunque encubierta con una causa patrió-

tica hay mucho de lucha antiliberal, y antiliberal es también la motivación de la guerra realista. La continuidad con ésta última es indiscutible: continuidad en los jefes: son los antiguos oficiales realistas: Guergué, Eraso, Iturralde, Ladrón...los que prepararán y capitanearán el nuevo levantamiento; continuidad en las proclamas: la defensa del Trono y el Altar seguirá siendo la justificación de la lucha; continuidad en las organizaciones: La Junta Gubernativa de Navarra se crea para que "proceda en la forma que lo hizo la que existió hasta el fin de octubre del año 1823" continuidad en el nombre: REALISTAS se seguirá llamando a los partidarios de D. Carlos y Ejército Realista será su ejército (2); continuidad incluso en su prensa: el periódico realista "La Verdad contra el Error y desengaño de incautos" desaparecido en 1823 reaparece en 1833 (3); continuidad en el protagonismo del clero y en la popularidad de la causa porque el enemigo sigue siendo el mismo: la impía revolución que trata de acabar con el trono y el altar.

El levantamiento no fué espontáneo. La política de contemporización con los liberales y de apertura moderada de los últimos ministerios de Fernando VII inquieta a los defensores del Antiguo Régimen que tenían puestas todas sus esperanzas en D. Carlos. Éste se negó a jurar como heredera del trono a Isabel II y protestó oficialmente contra tal acto el 29-IV-1833.. "Desde aquella fecha quedaron rotas las hostilidades y frente a frente los dos parti

dos: el liberal y el realista" (4).

Los agentes de D. Carlos "por medio de pasquines y proclamas inflamaban el fanatismo del pueblo. No es de extrañar que fuese el País Vasco que en 1822 había demostrado ser firme bastión del realismo, especialmente cultivado por ellos. Entre las proclamas que circularon, la que más alarmó al gobierno fué una que apareció en Guipúzcoa (5):

"Españoles: mientras toda Europa se halla armada para la defensa de la legitimidad de Enrique V, una facción demagógica venida desde las clases inmundas de París para sumergirnos en el abismo del ateísmo y de la herejía trata de usurpar el trono a Carlos V... ¡Mueran para siempre los ateos y los herejes enemigos de nuestro Dios!".

Se conspiraba, se almacenaban armas, se hacían cartuchos en muchos conventos "que de asilos de paz se trocaron en talleres de guerra" (6). La agitación crecía. La guerra no fué un acontecimiento inesperado y en ella la cuestión dinástica, aparente motivo de la contienda fue accidental.

No vamos a pararnos en el alcance jurídico de la discusión ni en los argumentos legales que uno y otro bando esgrimían en pro de los derechos de Carlos V o de Isabel II. En definitiva, la interpretación triunfante de la ley está del lado del que tiene suficiente respaldo para im-

nerla. Pocas veces en la historia con argumentos legales se han derribado poderes de hecho. Y a pesar de que ríos de tinta se emplearon en la polémica, otro era el fondo de la cuestión. Los mismos carlistas reconocían:

"Esta guerra no es simplemente de sucesión, pues tiene el carácter de una guerra de principios, y que no sólo combatimos el trono de Isabel, sino también a la revolución con la cual jamás ha hecho las paces el acreditado realismo de Navarra y las Provincias" (7).

"Bien persuadidos estaban todos de que si triunfaba Doña Isabel mandarían los constitucionales y se implantaría la Constitución de 1812 y en cambio si triunfaba D. Carlos continuarían las cosas como estaban" (8).

Tal vez no se ha insistido bastante en el papel que jugaron los antiguos militares realistas en la preparación del levantamiento. En una magna Junta de legitimistas franceses y españoles que se celebró en Castilla la Vieja, se pensó que un Ejército formado por VOLUNTARIOS REALISTAS debía de ser el núcleo de la sublevación (9).

A partir de 1831, para asegurar la sucesión de Isabel II mientras se promocionaba para altos mandos del Ejército a oficiales liberales moderados, se llevaba a cabo una purga entre los oficiales derechistas de la Guardia Real y otros mandos ultraconservadores de quienes se temía que apoyasen la sucesión de D. Carlos (10). Uno de estos

últimos era Zumalacárregui: denunciado en 1820 por sus ideas absolutistas (11), sirvió a las órdenes del coronel Ladrón de Cegama en la guerra realista, miembro de las anti-forales Comisiones Militares de Navarra, especie de Tribunal de Orden Público para purgar Liberales en 1824, reprimió también a los liberales durante su mandato como gobernador político militar de El Ferrol; purgando en 1831, obtuvo permiso para retirarse a Pamplona donde se encontraba cuando el levantamiento carlista (12). Ladrón de Cegama, que había visto premiada su labor en pro del absolutismo con la capitanía general de Cartagena también fue purgado, y la misma suerte corrieron los realistas Elío, Guergué y Eraso; todos ellos se habían significado por sus convicciones absolutistas.

Un número muy considerable de oficiales realistas procedían de la pequeña nobleza o de las llamadas "casas fuertes" de la Zona Media de Navarra; con indudable ascendiente social, servirían de plantel y armazón para el Ejército carlista. Ello se confirma en la memoria que el general Quesada envía al gobierno sobre la situación de los carlistas en Navarra al comienzo de la guerra: "Con respecto a los jefes y oficiales, los hay de todas clases, teniendo bastantes de los que se hallaban ilimitados en este reino y de los que han sido separados de los cuerpos del Ejército. De éstos, la mayor parte han hecho aquí la guerra en épocas anteriores; son prácticos en el país; tienen muchas relacio

nes de amistad y parentesco y conocen la profesión en lo que basta para mantener organizada la facción y hacer sorpresas y marchas forzadas y otras maniobras de orden inferior. Cuentan con el patrocinio de los pueblos y tienen avisos muy exactos y frecuentes de todos nuestros movimientos" (13).

Es quizá la existencia de este sector social de pequeña nobleza rural incorporada al mundo de las armas y cuya procedencia social favorecía opciones inmovilistas otro de los factores diferenciales que pueden explicar el éxito del levantamiento en Navarra y más concretamente en la Zona Media de donde procedían la mayor parte de ellos. En Cataluña faltaron estos "cuadros": "La mayoría de los jefes eran realmente cabecillas más o menos afortunados y fueron incapaces durante años de organizar un ejército... Esta fué la gran desventaja del movimiento carlista catalán" (14). Y si en el resto de España el liberalismo no consiguió atraerse al campesinado, la falta de estos "jefes naturales" que canalizasen el descontento podría explicar en parte el fracaso, del levantamiento en otros lugares.

A.-BASE SOCIAL

Aunque no existe que sepamos un estudio sociológico del carlismo, sí contamos con suficientes datos y tes

timonios de la época que confirman la hipótesis anteriormente apuntada de la composición social de los dos sectores en que estaba escindada la sociedad navarra y que militarán en bandos distintos en la contienda. En este sentido el Conde de Guenduláin, testigo de la época escribía respecto a Navarra:

"...Puede asegurarse que la opinión popular, la de la clase media en general y la de aquella nobleza que podemos llamar más domiciliada en el país (15) pertenecían al partido del Pretendiente. Una parte del alto comercio y las casas (salvo raras excepciones) más relacionadas con la Corte y que contaban sus hijos en el Ejército no habíamos declarado en favor de los derechos de las hijas del difunto Monarca" (16). En una carta que el Barón de Bigüezal escribe a Fernandez de Cordova nombrado general en jefe del ejército del Norte le advertía: "La fuerza de riqueza de este suelo está por nosotros, la numérica y moral por los enemigos" (17). Y cuando la Diputación del Reino en marzo de 1834 envía a dos de sus diputados a Madrid: Mz. de Arizala y Guenduláin para informar al Gobierno de la situación en Navarra, en la instrucción que les da insiste en "presentar la sublevación como cosa independiente de la propiedad y riqueza. Más bien fomentada por hombres en su mayoría sin recursos" (18).

Esta relación de fuerzas era extensible al resto del País Vasco. En una carta que Máximo Aguirre escribe a

Francisco Bacon el 27-IX-1837 le decía: "Difícil es poder demarcar a punto fijo el número de los principales propietarios que en las cuatro Provincias se adhieren a Carlos, pero puede usted asegurar con toda confianza y como un hecho que no admite duda, que la inmensa mayoría de los hacendados territoriales en número, riquezas o instrucción, están a favor de la Reina" (19).

Sin caer en demagogia histórica y teniendo en consideración todos los comentarios anteriormente señalados, bien podríamos decir que en el País Vasco la guerra carlista fué una guerra de pobres contra ricos. Fz. de Pinedo, sin llegar a una conclusión definitiva, ha recogido algunas manifestaciones del pensamiento "antirrico" que se dió en el carlismo vizcaíno (20). En este mismo sentido, referente a Navarra Angel Morrás en sus "Memorias Tafallesas: 1821-1898" recoge una canción que se cantaba en Tafalla en aquella época y que dice así:

"Cuando querrá Dios del cielo
que la tortilla se vuelva
que los pobres sean ricos
y los ricos coman mierda" (21).

Sin embargo hay que matizar por lo menos por lo que respecta a Navarra, que no es precisamente allí donde hay más riqueza donde los pobres se levantan contra ellos; (Baztán y Ribera) sino que la zona carlista por excelencia

va a ser aquella donde más igualitarismo económico y donde pobres y ricos relativos cierran filas en el mismo bando, incluso los primeros ven en los segundos sus jefes naturales. Aunque es cierto que la situación decadente en que se encontraba la pequeña nobleza rural los acercaba más a los sectores populares que a la alta nobleza y grandes comerciantes.

Al pasar revista a las personalidades que tuvieron un papel destacado en el campo carlista, tanto entre los militares como entre los civiles, lo primero que llama la atención es el no encontrar entre ellos ninguno ligado a la alta nobleza o grandes familias; todas habían apostado por Isabel II.

El caso del general Elío puede inducir a confusión, al ser ésta una de las más linajudas familias navarras; pero tanto el general Francisco Javier Elío, que tomó parte activa en la Restauración de Fernando VII como su sobrino el general carlista Joaquín Elío, pertenecían a una "rama segundona" de la familia y no formaban parte de la nobleza terrateniente (22). Por el contrario el Marqués de Vesolla, (título del mayorazgo de los Elío) militó en las filas de la Reina y fue nombrado por la Regente María Cristina junto con el Conde de Guendulain, prócer del Reino en las Cortes del Estatuto. El caso de Juan Crisóstomo de Vidaondo y Mendinueta, constitucionalista convencido en 1822 y miembro de la Junta Gubernativa carlista en 1833, moderado en

1844, quizás se explica por los vaivenes políticos del noble baztanés (23).

La adhesión del campesinado a la causa de D. Carlos la resume el comentario de Valera: "Zumalacárregui se movía con desembarazo por todo el país Vascongado y por Navarra, de cuyos habitantes y recursos disponía tan plenamente como en la Edad Media pudiera hacerlo un señor feudal con sólo la notable diferencia de que aquellos dominaban con el terror y la fuerza y el caudillo carlista reinaba en el corazón de sus paisanos" (24).

El liberalismo nada positivo ofrecía de momento al campesinado; antes bien la libertad de arrendamiento, la monetización del pago de la renta, el cierre de campos, la privatización de los comunales...incidían de forma negativa en sus condiciones de vida. La revolución liberal no era su revolución. En el País Vasco a ello se añadía el encarecimiento de productos de primera necesidad con el traslado de las Aduanas, así como de la sal y del tabaco, la introducción del papel sellado, el aumento de la presión fiscal y el servicio militar obligatorio. Todo ello en un momento de crisis económica generalizada que potenciaba el descontento. Vicens Vives apuntaba que debido a la contracción producida en la economía española "la guerra civil fué sus primeros chispazos en 1821 una guerra de hambre y miseria, no una guerra de ricos y potentados" (25).

Los dirigentes carlistas supieron aprovechar tal situación. Arias Tejeiro, cuando en 1830 se preparaba una intentona insurreccional realista seguía con interés los signos de malestar campesino y en el mes de febrero apunta en su diario: "N. cree que habrá insurrección en pasando los fríos, atendida la miseria que el año ofrece, pues las semillas se han perdido, los ganados muerto etc... y el aumento de contribuciones cuando ya las existentes no podían pagarse..." (26).

El sólo descontento campesino, aunque imprescindible para que el levantamiento tuviese un respaldo popular, no lo explica por sí sólo. Fue necesario que encontrase la dirección necesaria, que no la obtuvo en todas partes y la justificación ideológica que cobrió a cargo fundamentalmente del Clero.

El CLERO era el gran perdedor en las transformaciones que el liberalismo implicaba. La Iglesia en el Antiguo Régimen no sólo era aliada del poder como se resignaría a serlo a partir de entonces, sino que era "parte del poder" tanto político como económico, gozando de unas atribuciones jurisdiccionales (la Inquisición) y fiscales (Diezmos) incompatibles con la nueva concepción de Estado (27).

El nuevo régimen iba a encontrar en este estamento su mayor enemigo y no tanto por la indudable contestación ideológica que suponían las nuevas ideas, como por la

pérdida de sus riquezas, privilegios y control social.

La Constitución de 1812 configuraba un estado confesional. Los constituyentes de Cádiz pusieron su obra bajo el nombre de "Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la sociedad"(28) y al iniciar sus sesiones ordenaron "rogativas públicas a Dios como Padre de toda las luces para que se las diera al Congreso" (29). El artículo 12 declaraba dogmáticamente: "La Religión de la nación española es y será perpetuamente la Católica Apostólica, Romana, única verdadera" imponiéndola así no sólo a los contemporáneos, sino también a las generaciones venideras.. La única libertad que prohibía era la religiosa, constitucionalizando el delito de herejía. En la formula de juramento que las Cortes debían recoger del Rey éste se comprometía a "defender y conservar la religión Católica, Apostólica, Romana sin permitir otra alguna en el reino" (art. 173). La Misa del Espíritu Santo era preceptiva al comenzar las elecciones (art. 71). Y por el artículo 366 en las escuelas se enseñaría a los niños "a leer, escribir, contar y el catecismo de la Religión Católica".

Esta Constitución, que Marx llegó a calificar como compromiso entre principios liberales y teocráticos (30) no daba pie para pensar que era una "revolución impía y atea" lo que trataba de realizar; y el testimonio de un clero liberal aunque minoritario así lo prueba. Otros debían ser los motivos que tuviere el clero para oponerse a

la obra de Cádiz: La desamortización eclesiástica, precipitada por necesidades hacendísticas era una pieza clave para la transformación del modo de propiedad en sentido burgués; la unidad jurisdiccional incompatible con la Inquisición y la soberanía fiscal con la percepción de Diezmos. De desamortización, Inquisición y Diezmos van a centrar con desigual intensidad las reivindicaciones fundamentales de los clérigos. Ellos traducirán en ataques a la Religión lo que sólo era un ataque a su situación privilegiada. Y es que la defensa de la Religión ha servido y sigue sirviendo las mas de las veces para encubrir la defensa de los más diversos intereses materiales.

Si la enemiga antiliberal del clero se dejó sentir en toda la península, en Navarra tenía porqué adquirir mayores proporciones. No cabe duda que el protagonismo que este sector social ha tenido desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días en la vida política navarra es algo más que un tópico (31). Quizá la explicación haya que remontarse a buscarla en el papel que jugaron los Monasterios en la consolidación de la Monarquía navarra y que se tradujo económicamente en inmensas propiedades (32) y políticamente en la preeminencia conseguida en el orden institucional (33).

El número de clérigos en relación con la población era mucho mayor en Navarra, también en Álava que en Vizcaya y Guipuzcoa, sobre todo del clero regular (34); y

esta realidad se dejará sentir en el mayor peso que el elemento clerical tendrá en el carlismo alavés y navarro hasta el punto de llevarles a no aceptar el Convenio de Vergara.

Sin embargo no se puede hacer del Clero un grupo monolítico. De todos es sabido las diferencias y antagonismos que se dieron entre el clero regular y secular. Ya en 1772 el clero secular de Navarra eleva un Memorial a la Diputación del Reino solicitando en el pleito que litigaba contra el clero regular para que no gozasen de la esención de diezmos los bienes que adquirían (35).

Dentro del clero secular, la riqueza y las rentas de la Iglesia tampoco estaban bien repartidas en el Antiguo Régimen (36). Navarra no estaba libre de esta desigualdad en el reparto. En 1786 se denunciaba en una representación al Rey la "preponderancia de los preceptores de diezmos y la grande miseria en que se veían infinitos párrocos y más de doscientos vicarios sin dotación, con vilipendio de su ministerio y dejación de la disciplina eclesiástica" (37).

Mientras el clero secular rural vivía en la penuria, en 1790 los canónigos de la catedral de Pamplona reclamaban con éxito el aumento de su dotación, que a partir de entonces ascendería a 1.000 ducados de vellón (38).

Un estudio de la Iglesia navarra en el Antiguo Régimen nos descubriría el alcance de las contradicciones ante

teriormente apuntadas entre el clero regular y secular por un lado y alto y bajo clero por otro y la incidencia que pudieron tener (39). El hecho es que con las excepciones inevitables los regulares y bajo clero fueron los animadores y no sólo ideológicos del levantamiento carlista, mientras que el alto clero mantuvo una postura vacilante (40) y acabaría apoyando el orden establecido. En el mismo sentido Mutiloa escribe para 1833: "El alto clero navarro, falto de virtudes castrenses y atado a sus prebendas, vive en las ciudades y se atiene con adhesión o sin ella a la situación dominante, esto es al régimen liberal" (41).

No creemos que fuese la falta de virtudes castrenses que por otra parte no juzgamos propio de la clerecía, la que alejase a este sector social de la causa carlista. De todas formas, el posicionamiento del alto clero en el conflicto merece una reflexión. Parecería lógico pensar que al ser los más privilegiados y beneficiados del Antiguo Régimen fueran los más perjudicados en su transformación y los que mayor resistencia debían emplear contra el nuevo orden de cosas. Por los datos existentes, no parece que fuera así. "El Alto Clero en ningún momento estuvo a favor decidido de D. Carlos, aunque en el fondo tal vez pudo haber deseado su triunfo". Este es el acertado comentario de Fernández de Pinedo que bien pudiera reflejar el estado de este sector del clero (42). Su extracción social, las más de las veces ligada a la nobleza, su mayor ilustración, y so-

bre todo su política de "estar a bien con el poder" para buscarse una posición, la más ventajosa posible del nuevo orden liberal, les impidió colaborar abiertamente con el carlismo.

Por otro lado, el blanco de la reforma era el clero regular, el más amenazado por la supresión de conventos y la desamortización. Mientras los monasterios situados en zona liberal eran suprimidos, exclaustrados sus miembros y desamortizadas sus propiedades, los situados en zona carlista no sólo serían respetados, sino que se convertirían en refugio de monjes procedentes del resto de España (43). El Monasterio de Irache fué uno de los principales focos de la rebelión, el convento de los capuchinos de Vera y el de las monjas de Lesaca sirvieron de depósito de municiones y en el Monasterio de Urdax se fabricaban uniformes para las tropas de D. Carlos (44).

Pero es a los párrocos de los pueblos, por su mayor contacto con el campesinado, a quienes hay que atribuirles el mayor "mérito" en el levantamiento. Era reconocido el ascendiente sobre sus feligreses "porque es cierto ciertísimo según la autoridad y la experiencia que SICUT SACERDOS SIC POPULUS; quiere decir que el pueblo está identificado con la doctrina y ejemplo del sacerdote", aseguraba un contemporáneo (45).

Y eso mismo se confirma en la Memoria que el Ge-

neral Quesada envía al Gobierno el 22-II-1834 atribuyendo el éxito de la facción al "atraso de ideas que hay en las aldeas" y que "cuentan con el auxilio de la mayor parte de los jesuitas y del clero secular y regular que desgraciadamente están decididos por la revelión en su mayoría". Por eso, "si fuera posible separar de este país todos los malos curas y frailes sería un medio seguro que mejoraría el espíritu público y por consiguiente se disminuiría la facción..." (46) pues "No hay clase de patronas que los corifeos de la rebelión no inventen para sostener las ilusiones de unos aldeanos imbéciles que por falta de instrucción los unos y de ideas los otros todo lo creen... a tal extremo llega el espíritu de idiotismo reunido al de partido y sostenido por las supersticiones del clero regular y secular" (47). Si en algunos pueblos los vecinos no se han incorporado a los batallones "es porque felizmente han tenido algún cura bueno que los ha contenido o algún propietario" (48).

El 8-VIII-1834 informaba a Madrid el General Rodil que "los rebeldes más obstinados se encuentran en el clero, especialmente los curas, vicarios, abades o rectores de las pequeñas poblaciones, en donde no permanece uno siquiera al aproximarse las tropas de S.M. y no se encuentra ningún medio para atraerlos, aunque se le trate con el mayor respeto (49).

La actividad guerrera no era nueva para el clero

navarro. Ya en la guerra contra la Convención el obispo Aguado "movido del santo celo que le inspiraba el amor a su Iglesia y al estado exortó a todos los eclesiásticos de su diócesis a que tomando las armas saliesen sin temor de irregularidad a pelear contra los enemigos de la Religión y de la Patria" (50). Durante la invasión napoleónica tomaron parte muy activa en la guerrilla y en 1822 fueron los principales activadores del movimiento realista. Y las mismas facilidades que encuentra el cura para hacerse guerrillero, encuentra éste último para hacerse cura. En el momento del levantamiento de 1833 "el numeroso de Navarra contaba al principio de la insurrección con muchos individuos que no tuvieron otro mérito para ordenarse que el haber empuñado las armas para matar a los liberales" (51).

Pero la aportación de este clero, no va a ser únicamente militar y organizativa, sino fundamentalmente ideológica. "Desprovisto de una coherente ideología de clase, el campesinado vasco que toma las armas por D. Carlos encontrará la justificación de su lucha en la defensa de los valores religiosos, formulados por el sector más reaccionario y antiliberal de la Iglesia española" (52).

Desde la Guerra de la Convención se estaba justificando la guerra por motivos religiosos. Se peleaba contra el francés, pero más por republicano e impío que por extraño, y se ve en Napoleón al "enemigo de los altares". La defensa del Trono y el Altar será una constante en las procla

mas realistas, y si la motivación foral apenas aparece en las primeras proclamas de esta primera guerra carlista, la defensa de la Religión, que está presente desde el primer momento, será hasta el final el principal respaldo ideológico de la contienda.

No es casual que fuesen los elementos más clericales los que se opusiesen a los proyectos de PAZ Y FUEROS como medio de concluir la guerra. Si en las transacciones previstas se hablaba de respetar los fueros y los empleos y honores de los militares, nada se decía de mantener la situación del clero en el Antiguo Régimen, que era el móvil principal de la lucha para este estamento. Si en el Convenio de Vergara se ofrece una salida digna a los militares carlistas y puede haber una esperanza para los fueros, al clero nada se le garantiza; será el gran perdedor. Y tampoco es casual que precisamente Alava y Navarra dominadas por el elemento clerical no acepten el Convenio.

El presidente de la Junta Gubernativa de Navarra el clérigo Juan Echeverría sería uno de los miembros más destacados del partido "clerical", el general Guergué "la espada del mando inexorablemente retirado (53), y navarros serán también los "apostólicos" que se opusieron al plan transaccionista de Maroto mandados fusilar por éste en Estella (54).

Si la idea de "guerra santa" ya es en sí una "con-

tradictio in terminis" desde un punto de vista cristiano, del grado de inconsecuencias con su doctrina propia, de las contradicciones y tropelías que en nombre de la Religión cometían los carlistas se hizo eco el cancionero popular. El citado Morrás, en sus "memorias Tafallesas" recoge la siguiente letrilla:

"Un carlista en un camino
a un arriero le robó
le quitó dinero y vida
y ¡viva la religión! (55).

Y cuando Maroto, al final de la guerra, tiene que defenderse de las acusaciones que le hace Juan Echeverría, presidente de la Junta carlista navarra, de ser traidor a la Religión, se defiende devolviendo la acusación a ese "mal sacerdote" pues "en cuanto a religión un cura constantemente amancebado hasta con dos hermanas, un cura que después de haber tenido hijos de una mujer la hace casar con su hermano, un cura jugador, bebedor y mal hablado, y que se presta al santo sacrificio de la misa, no entiendo puede tener más que la que conocerá mi perro" (56). Tal era el paladín del Altar de Navarra!.

El clero, derrotado en la guerra no se dará por vencido y seguirá siendo elemento de subversión y preocupación constante de las autoridades políticas. El 14-III-1841, el jefe político de Navarra denunciaba en una

circular el hecho de sacerdotes que se han negado a la celebración y a la absolución en el tribunal de la penitencia si no se pagaba el DIEZMO por entero (57) y el 18 del mismo mes en sendas circulares a los alcaldes y curas párrocos, ordena a los primeros "tributar toda la consideración imaginable a los Curas Párrocos denunciando no obstante aquellos hechos que se dirigieran a alterar el orden y las conciencias como lo han verificado algunos alcaldes, para que los Tribunales obren con arreglo a derecho..."; y a los segundos, después de denunciar la pasada experiencia en la que "se han empleado motivos celestiales para armar españoles contra españoles", recuerda que la Religión fundada por Jesucristo es puramente espiritual y celeste y sus leyes sabias dirigidas todas a la santificación de las almas: que su Autor divino declaró que su reino no era de este mundo... que mandó a sus discípulos se sometiesen a los príncipes y por defenderle sufrieron con paciencia el martirio ...que el Evangelio sólo declaró la guerra a las pasiones y sólo exige que los hombres se vengán a sí mismos... que el nombre estrepitoso de Dios de los ejércitos desapareció en el Nuevo Testamento y que el Apóstol la ha sustituido con el Dios de la paz". Por lo tanto "sagrada es la obligación que VV. tienen de predicar la paz, la tolerancia, la caridad, la sumisión a las Autoridades constituidas..." Y éste "no porque lo manda el Gefe político de la provincia, como lo ha dicho al pie del altar algún genio discolo o sagaz, sino porque lo manda la Religión, porque lo exige así

Jesucristo, y porque tienen VV. en ello una obligación religiosa y otra civil..." De tal forma que "en tanto no lo hagan, no inculquem esta Santa doctrina...el Gobierno y su delegado...cual madre que no puede castigar sin lágrimas al hijo extraviado, hará conocer toda la firmeza de su carácter no al sacerdocio, sino al sacerdote díscolo que no se somete a las Autoridades constituidas, a quienes deben VV. una obediencia que al mismo tiempo deben infundir en el corazón de todos los feligreses" (58). Mas que de una orden gubernamental diríase se trata de un "contra sermón".

En torno a la precaria situación económica en que se encuentra se centran las reivindicaciones del clero después de la guerra. Suprimidos definitivamente los diezmos su suerte pasa a depender de "esa monstruosa contribución titulada de CULTO Y CLERO" consentida en la Ley de Modificación de Fueros de 1841, que por lo mismo será bautizada por algunos de ellos con el nombre de "despacha curas". Si al párroco rural no le falta el "panem quotidianum" se debe únicamente a la religiosidad de los pueblos (59) Culto

La dotación del clero seguirá siendo el caballo de batalla hasta la segunda guerra carlista, y su insatisfactoria resolución, debido a la desorganización en la administración de la contribución de Culto y Clero, será un factor a tener en cuenta a la hora de explicar la contienda (60)". Entre tanto intentarán utilizar la vía parlamentaria para conseguir mejorar su suerte, dando un susto a los Mode

rados en las elecciones de 1844 (61) y consiguiendo en 1867 colocar en el Congreso como diputados por Navarra a la flor y nata del Neocatolicismo español (62). En 1872 repetirán la hazaña de llevar a matar y a morir al campesinado navarro por una causa que no era la suya.

B.-"GEOGRAFIA" DEL CARLISMO NAVARRO

Respecto a la "geografía del Carlismo" hay que matizar la simplificación de que el carlismo afincó con más facilidad en la Montaña, entendiéndolo por tal toda la zona norte, pues es aquí precisamente donde va a encontrar focos de mayor resistencia: los valles de Roncal, Salazar, Aezcoa y Baztán fueron los más firmes reductos del liberalismo exaltado.

En una exposición del 5-III-1838 la Diputación de Navarra se queja a las Cortes de que "Había sin embargo otros elementos contrarios capaces de haber neutralizado en un principio y aún de haber sofocado la insurrección, si se hubiera echado mano oportunamente de los medios correspondientes. La parte ilustrada de los navarros estaba en el buen sentido; los valles del Roncal, Salazar, Aezcoa y Baztán lo estaban igualmente, y todos los aezcoanos tomaron las armas en defensa de la causa de la Reina; pero este espíritu era contrariado por el Ministerio que temía más al

partido liberal por el mal que podía hacer que al carlista por el que estaba haciendo" (63).

Siguiendo nuestra hipótesis de que el principal motivo de enfrentamiento fué causado por las transformaciones en la forma de producción y propiedad agraria, la ausencia de resistencia a las reformas liberales en estos valles se explicaría en primer lugar por ser su actividad casi exclusivamente ganadera y forestal y mínimamente agrícola.; pero además en esta zona, la Iglesia carecía de propiedades, siendo incluso los valles, propietarios de las casas de los párrocos. En ellos, comenta Donézar "la Iglesia no propietaria fué o pudo ser ejemplo de lo que pretendía la doctrina liberal: el pueblo la había dado participación en sus bienes por ejercer un servicio. En el caso de Roncal era el mismo valle el que pagaba los diezmos (64).

No obstante si hemos señalado la cuestión de las ADUANAS como una de las más conflictivas y que pudo tener gran incidencia en el descontento popular, parece un contrasentido que precisamente las zonas que más se beneficiaban del libre comercio con Francia estuviesen del lado de quienes proyectaban trasladarlas a la frontera con ese país. Recordemos que fueron dos Memoriales de Baztán y Roncal los que más se opusieron a su traslado en las Cortes de 1780-1781 (65). Aunque también es verdad que en todos los proyectos de Aduanas en la frontera se preveía exenta de aranceles los productos de consumo de las zonas fronterizas y la colo-

cación de los contrarregistros a 5 leguas de ella. En este asunto no tenemos otra explicación y el hecho está ahí para encontrar otras más satisfactorias.

Sobre otra posible explicación de la "filiación liberal" del valle Baztán, ya hemos hablado de la existencia de una nobleza que enriquecida en Indias ó en la Corte no se desarraiga de su pueblo, sino que por el contrario compra tierras, levanta caseríos y funda mayorazgos en él. Sus descendientes, con intereses a caballo entre su tierra y Madrid siguen haciendo carrera en la burocracia del estado: Goyeneches, Fagoagas, Muguiros, Gastón... militarán en las filas liberales y Navarra estará representada repetidas veces en el Congreso por estos baztaneses. Su ascendiente sobre la población fue denunciado ya en 1822: "cuando los realistas entran en el valle de Baztán, de exaltados constitucionalistas... multaron a algunos pocos, los cuales siendo hombres de fortuna y de poder en sus pueblos respectivos, influían imperiosamente en el sensible extravío de los sencillos habitantes de este valle" (66).

Respecto a Roncal, Salazar y Aezcoa, si bien la exportación de lana a Francia fue durante siglos su principal fuente de riqueza, iba siendo desplazada por el corte de madera que transportadas por los "almadieros" bajaban el Ebro hasta Tortosa y encontraban su mejor mercado en la construcción civil y naval catalana. Ante los numerosos "derechos de paso" que tenían que soportar se comprende

que se inclinasen por aquellos que favoreciesen el libre tráfico.

Otro de los factores que debió influir fue no sólo la inexistencia de propiedades de la Iglesia en la zona y el escaso impacto de la desamortización, sino la menor "presión clerical" (cura por habitante) posiblemente una de las más bajas de Navarra (67). Como cualquier liberal, el propio valle de Roncal como tal llegó a comprar para sus pastos de invierno tierras desamortizadas al Monasterio de la Oliva.

Tampoco en la defensa del orden institucional pudo haber ningún interés por parte de unos valles que no tenían representación en Cortes y que como Roncal había visto rechazada reiteradamente su petición de asiento (68).

De todas formas sería interesante analizar con más profundidad el "liberalismo aislado" de estos valles que se mantendrá como constante a lo largo del siglo XIX y XX y que hasta las elecciones de 1933 no abandonarán su "izquierdismo" (69).

Reflexión aparte merece el caso de la capital: Pamplona. Se ha mantenido durante mucho tiempo la idea de que las guerras carlistas fueron unas guerras del campo contra la ciudad: del campo carlista contra las ciudades liberales. En el caso de Pamplona es sólo una verdad a medias. Es cierto que al ser la capital, en ella vivían gran

des propietarios nobles (Vessolla, Guendulain, Biguezal, Ezpeleta...) banqueros (Ribed), asentistas (Carriquiri, J. P. Aguirre, Mutiloa), grandes comerciantes (Vidarte, Urra), Magistrados (Elordi, Barrera), Comisarios de la Desamortización (Elorz, Jarauta, Veraiz) etc... que al igual que las clases adineradas del resto de la península eran partidarios de las reformas y cuya influencia se haría notar. Por otro lado, como plaza fuerte, la existencia de una guarnición numerosa hacía imposible cualquier intento de pronunciamiento en contra del Gobierno. Pamplona era liberal "a la fuerza" porque la mayor parte de su población estaba lejos de serlo por voluntad propia.

En primer lugar porque a principios del siglo XIX era todavía Pamplona una ciudad eminentemente agrícola (70) y por lo tanto con un porcentaje de población labradora, cuya situación en nada difería de la del resto de la Zona Media a la que pertenecía y que al igual que ésta apoyará al carlismo. Pero también los pequeños comerciantes, clientela natural del liberalismo en otros lugares, incluso dentro del País Vasco, de sus capitales Bilbao y San Sebastián, van a ser partidarios del antiguo orden de cosas, ya que el nuevo amenaza con trasladar las Aduanas y suprimir la feria franca de Pamplona que es su principal oportunidad de ganancias (71).

A reforzar el carácter reaccionario de Pamplona contribuía el gran número de conventos e iglesias con su

respectivo clero que existía en una ciudad que ha merecido en más de una ocasión el calificativo de "levítica" (72). Es verdad que entre todos había algunos conventos de tendencia liberal como los Dominicos y Recoletas, más o menos ligados a las "familias más linajudas de la ciudad" y que quizás por ello en 1837 quedaron excluidos de la orden de cierre (73).

Pamplona ya había demostrado su antiliberalismo en el Trienio durante el cual por su comportamiento en favor del absolutismo conquistó el título de "Muy Heroica" (74). En esta ocasión vuelve a tener oportunidad de demostrarlo. El 14-X-1833 el virrey justificaba la declaración del estado de guerra por "la insurrección que se manifiesta en muchos puntos y aun dentro de la capital" (75). Y el 22-II-1834 advierte el general Quesada: "En esta capital no puede formarse milicia urbana, pues es la población que está en peor sentido, y por lo tanto debe estar siempre desarmado este pueblo" (76). Trescientos voluntarios salieron sólo en una semana de Pamplona en junio de 1834 (77) y cuando en 1839 Maroto ordena poner cerco a la ciudad se levantan protestas por los perjuicios que pudiera ocasionar a los carlistas de la zona.

La Ribera fue la zona más hostil a los carlistas; eso que estos siempre consideraron su conquista como un objetivo prioritario dada su riqueza agraria y capacidad de abastecimiento. Los "urbanos" (así les llamaban a los miem-

bros de las milicias urbanas) de Peralta, Villafranca, San Adrián, Lodosa, Azagra... escribieron heroicas páginas en la historia del liberalismo en su resistencia a los facciosos (78). Ello no quiere decir que no hubiera allí carlistas, incluso que la mayoría de la población lo fuera, pero por la mayor dependencia de la nobleza terrateniente, su capacidad de maniobra era menor y estaba contrarrestada por la influencia de ésta última, de los grandes propietarios y comerciantes, y de los que podríamos llamar "notables urbanos" muchos de ellos beneficiarios de la desamortización y que nutrirían las filas de la milicia.

El antiliberalismo popular se había manifestado sin reservas en el Trienio y no fueron pocos los voluntarios riberos con que contó el ejército de D. Carlos. Por otro lado, en toda guerra civil, razones de supervivencia hacen contemporizar con la fuerza dominante y desde el primer momento el Ejército liberal se hizo fuerte en la línea del Ebro, que no consiguieron traspasar los carlistas.

Geográficamente, la zona carlista por excelencia, al igual que en 1822 lo fue realista será la Zona Media aunque desplazado el escenario de la guerra esta vez de la zona oriental a la occidental o "Tierra Estella". Aquí va a encontrar la resistencia al nuevo régimen sus condiciones óptimas.

Económicamente, zona más pobre que la Ribera, ca

racterizada por el policultivo, de relativa autosuficiencia, con escasos excedentes y escasa comercialización (79) es donde el mito del "propietarismo" navarro más se acerca a ser realidad. Exceptuando la existencia de algunos señores de rentabilidad escasa pertenecientes a la nobleza, la cúspide de la jerarquía social la constituyen las llamadas "casas fuertes" y la pequeña nobleza rural, en decir del Barón de Bigüezal "la nobleza más domiciliada en el país" (80) que al igual que la hidalguía castellana o gallega era una clase en decadencia que veía amenazada su estabilidad por la supresión de mayorazgos. Muchos de sus miembros se habían incorporado a la carrera de las armas y fueron los cuadros con que conté el Ejército realista. El resto de la población la componían los pequeños y medianos propietarios, que aunque sus condiciones de vida fueran iguales o inferiores que las del campesinado del sur, eran mucho más independientes que éste.

También es esta zona posiblemente la de mayor "presión clerical" de Navarra (81) y donde tanto el clero regular como secular contaban con mayor número de propiedades (82), factores de indudable importancia.

Este será el lugar elegido por los militares realistas para organizarse: en Aguilar de Codés, en casa del coronel Iturralde. De aquí procederán la mayor parte de los mandos carlistas (83). Aquí establecerá Zumalacárregui su cuartel general (en Piedramillera) y será el lugar ele-

gido para situar los batallones carlistas (84). Este será en definitiva el escenario principal de la guerra (85) y donde las tropas carlistas encontrarán mejor acogida. Esta será la única zona que secundará el levantamiento carlista de los Matiners en 1848 (86), y en las elecciones de 1865 los pequeños propietarios de la zona que votan por primera vez gracias a la ampliación del censo contribuirán de forma decisiva al triunfo de los neocatólicos (87). Volverá a ser el principal escenario de la segunda guerra carlista y aquí será donde el carlismo como ideología se perpetúe por encima de las transformaciones socioeconómicas llegando incluso a nuestros días (88).

2.-LOS CARLISTAS Y LOS FUEROS

Si como hemos visto la guerra carlista es la expresión armada del enfrentamiento entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal y no una guerra "foral" y mucho menos una guerra de conquista ¿cuál fue el protagonismo que tuvieron los fueros en la contienda?

Ya hemos insistido en el hecho de que si bien no podemos admitir la motivación foral como desencadenante del conflicto, sí fueron las condiciones socioeconómicas creadas por los fueros las que contribuyeron a proporcionar el respaldo popular y la dirección necesaria para el

éxito del levantamiento en el País Vasco, cosa que no consiguió en otros sitios. Sin embargo, no hay datos para poder afirmar que existía, a menos a nivel popular una conciencia del hecho particular foral a cuya desaparición podrían atribuir todas sus desgracias; entre otras cosas porque tampoco lo era así y no todas las transformaciones que el liberalismo implicaba tenían carácter "antiforal", sino que incluso, como las reformas aprobadas por las Cortes de 1817, estaban siendo "foralmente" respaldadas. Por eso, lo que defienden es el antiguo orden de cosas en su totalidad, con sus "usos, costumbres, fueros, leyes y privilegios".

De todas formas, aunque la guerra no fuese foral, algún protagonismo debieron de tener los fueros en la contienda desde el momento que la promesa de su conservación fue uno de los medios para concluirla. Si en el inicio del levantamiento la bandera foral no aparece por ninguna parte: ¿cuándo surgió?, ¿a quién se debe su lanzamiento?, ¿a qué interés respondía?. Para intentar buscar una explicación trataremos en primer lugar de precisar el lugar que ocuparon los fueros en cada uno de los campos en los que se hallaba escindida la sociedad navarra.

2.-LOS CARLISTAS Y LOS FUEROS

A.-PRIMERAS PROCLAMAS

Las primeras proclamas que movilizaron al pueblo vasco en favor de D. Carlos, en nada se diferencian de las realistas de diez años antes. La defensa del trono y el altar sigue siendo la santa causa por la que se llama a matar y morir. Los fueros, o no aparecen o lo hacen de forma marginal y subordinada.

Saliéndonos del marco navarro, recogeremos las primeras proclamas lanzadas en las cuatro provincias vascas para ver sus coincidencias y deducir de ellas el carácter del levantamiento.

En Navarra, la primera proclama corrió a cargo del antiguo general realista Santos Ladrón de Cegama, que ya tres días antes había lanzado en el pueblo riojano de Tricio el grito de ¡Viva Carlos VI!. El 8-X-1833, desde su cuartel general de Viana, en un escrito con membrete del Ejército Realista hace una llamada de claro sabor integrista a los antiguos oficiales realistas. En ella no menciona para nada los fueros:

"...di el sagrado grito en defensa de la Religión de Jesucristo proclamado al Sr. D. Carlos V Rey de las Españas, que el cielo nos tenía destinado para enjugar nuestras lágrimas y acabar nuestras desgracias y calamidades y para que triunfe la Religión de todo el Infierno; siendo como siempre los navarros uno de los más

firmes baluartes de aquella..." (89).

Al igual que en 1822, ante el vacío de autoridad que se produce al pronunciarse tanto la Diputación del Rei no como el Virrey y el Consejo por la causa de Isabel II, el 15-X-1833 en la villa de Aguilar, en casa del coronel Francisco Iturralde, se reúnen 32 antiguos jefes y oficiales realistas para constituir la JUNTA GUBERNATIVA DE NAVARRA (90). Se nombra como presidente a Juan Echevarría provisor y vicario que fue de Mañeru y justifican su creación "por la decisión y levantamiento general del Reino de Navarra en favor de los legítimos derechos del Rey nuestro Señor D. Carlos VIII de Navarra y V de Castilla (91). En la primera alocución que la Junta dirige a los navarros, el 2-XII-1833 no sólo no defiende los fueros, sino que se manifiesta claramente ANTIFORAL, subordinando el Fuero General de Navarra a la Novissima Recopilación de Castilla:

"Navarros; tan respetable, tan claro, tan útil es el derecho que sostenéis (92). Si habéis oído que la sucesión femenina es la más arreglada a vuestros fueros (93) responded que dada la unión de este reino con el de Castilla en materia de sucesión a la Corona, ni reconocéis, ni podéis reconocer otra ley fundamental que la de la Monarquía so pena de formar un cuerpo monstruoso. Sí, haceis causa común con todos los españoles, sostenéis un mismo derecho, defendeis un mismo Rey..." (94).

Y es que desde el punto de vista dinástico, la postura carlista era insostenible en Navarra, ya que según el Fuero General las hembras se hallaban en igual derecho a heredar que los varones (95). El levantamiento carlista empezaba así en Navarra con un flagrante CONTRAFUERO, pues no era la ortodoxia foral lo que se trataba de defender:

"El amor que le profesáis os ha hecho correr a las filas de la legitimidad... A tanto llega vuestra adhesión al Trono y a la Religión augusta de vuestros padres. En efecto, los mismos enemigos de vuestro idolatrado Carlos... son los partidarios de la libertad y de una imaginaria igualdad que ha transformado los imperios, minado los tronos, abolido el culto, destruido los altares, perseguido sus ministros y desvastado toda la sociedad" (96).

La primera proclama en Vizcaya fue la de su Diputación, fechada en Bilbao el 5-X-1833 y firmada entre otros por el Marqués de Valdespina. Tampoco en ella se mencionan los fueros:

"Vizcaínos: Una facción anti-religiosa y anti-monárquica se ha apoderado del mando durante la larga enfermedad de nuestro difunto Rey y trata de ir adquiriendo ascendiente para exponeros sin defensa a los ataques de la Revolución y de la anarquía que combatimos en 1823. Sus partidarios aparentan que consideran las leyes antiguas y fundamentales del reino abolidas por otras nuevas, y después de haber alterado el or-

den de sucesión al trono quieren hacer a España cómplice de sus abominables maquinaciones que la propaganda revolucionaria inventa para destruir el orden social en Europa.

.....

"Vizcaínos, preservad como todos los buenos españoles en vuestra valerosa resolución. La Diputación que se halla a vuestro frente dará la señal a vuestro celo y entusiasmo y cuando vuestros esfuerzos unidos a los del resto de España hayan conseguido colocar en el trono de San Fernando a nuestro amado Monarca D. Carlos V
¡qué felicidad será la vuestra, pues habreis demostrado al mundo entero que no habeis degenerado y que sois dignos sucesores de vuestros ilustres e intrépidos ascendientes!" (97)

En las historias del carlismo consultadas (98) no hemos encontrado completa ninguna de las primeras proclamas de Guipúzcoa. Pirala, recoge unas palabras del pronunciamiento de Alzaá en Oñate el 8-X-1833 (99): "¡A las armas, viva el rey Carlos V!" fue su grito; y justificaba el levantamiento porque:

"El turbulento liberalismo ha sentado ya su trono sobre la cima de nuestro oprobio. Pérfidas maquinaciones atentan contra el solio que se finge defender: el patriotismo es ya un disfraz, la virtud una mentira".

"Y con aquella energía que le caracterizaba -comenta Pirala- estimula a sus paisanos a que le sigan "porque los vencidos de 1823 anhelaban vengar su derrota".

Por el contrario, Echave Sustaeta al referirse a la misma proclama de Alzáa en Onate le atribuye las siguientes palabras:

"Guipuzcoanos: Despertad; vuestra inacción será criminal. Dios, Nuestros Fueros, La Patria y el Rey nos llaman: sigamos, viértase nuestra sangre por objetos tan laudables" (100).

No pretendo calificar de inexacta o "amañada" la cita anterior sin haber podido comprobarlo; simplemente apunto la posibilidad de que pudiera haberlo sido dada la intencionalidad política de la obra de Echave Sustaeta y el precedente de que así lo hizo en otras ocasiones (101). De todas formas, cuando la Diputación a guerra de Guipúzcoa nombra en Echarri Aranaz el 7-XII-1833 a Zumalacárregui jefe del Ejército Carlista de la provincia lo hace:

"Convencida de lo útil que es al Altar y al Trono el que hagamos su defensa bajo el mando militar único de V.S. en virtud del acuerdo que he firmado en unión de este reino (se refiere a Navarra), el señorío de Vizcaya y la provincia de Alava (102).

La proclama que desde Vitoria lanza el 7-X-1833 el coronel Verástegui a los alaveses es la más extensa y la única, si descartamos por sospechosa la que Echave Sustaeta atribuye a Alzáa, que hace alusión a los "fueros y libertades patrias". Sin embargo para ver su alcance hay que valorarlo dentro del contexto en que se da y no como

hace Olcina y sobre todo Echave (103) sacándolo de él y destacando las frases en que aparecen para presentarlas como prueba decisiva de la motivación foral de la guerra. Por ello, aun a costa de resultar pesada la cita y con la pretensión de no caer también en una selección parcial recogeremos los párrafos más significativos (104):

"Alaveses: ha llegado por fin aquel día tan deseado por los buenos como terrible para los malos: aquel día, que con tan justos motivos presagiaron vuestros corazones al ver que el impío sistema abolido por vuestras armas comenzaba a renacer de entre sus mismas cenizas; pero día en que la perfidia liberal ha de ser exterminada para siempre del suelo español...

.....

"...no ha terminado aun en nuestra patria la tiranía de los pérfidos españoles, indignos a la verdad de este nombre... aquellos segundos vándalos que por más de tres años han holgado sacrílegamente nuestra santa Religión, han tenido cautivo a nuestro monarca y han abolido nuestros fueros y libertades patrias, nuevamente maquina para perderos".

"Sí, verdad es que no os engañasteis cuando en aquella época aunque victoriosos sobre las ruinas de este sistema destructor, que corriendo las naciones como una nube desoladora, las infesta de una fiebre maligna que consume el cuerpo de la sociedad europea; no considerando seguros y libres de sus pérfidas maquinaciones os ofrecisteis con heroismo para ser los primeros elementos de una nueva milicia, que siendo

la protectora del Altar, a la vez que defensora de los Tronos, tiene por divisa la fidelidad, el contrapeso de la rebelión que caracteriza a vuestros enemigos".

"...a favor de una artera pero refinada intriga, que son sus armas favoritas, se han ingerido hasta en el mismo trono del monarca, y violando su poder legislativo, aquella ley fundamental y primordial de sucesión que siendo la más conforme al orden que el autor de la naturaleza instituyó en sus criaturas (105) ha dado tantos grados de gloria y esplendor a esta heroica nación, ha excluido de la inmediata sucesión a la corona al legítimo heredero y digno sucesor por sus virtudes del trono de San Fernando... para que la facción impía solidase la base de su revolución... privando a los buenos españoles de las lisonjeras esperanzas que habían concebido del feliz reinado de un Príncipe excelso".

.....

"... la malignidad de sus agentes, su execración contra el Dios Santo; la proscripción del Sacerdocio divino; la abolición de las ceremonias santas; la libertad de pensar; la inmoralidad; el desenfreno de todas las pasiones; la venganza; los robos; los asesinatos; la impunidad de los delitos, que de algún modo pueden servir para dislocar el orden social; la abolición de nuestros fueros y privilegios y la cautividad de nuestras libertades patrias; en una palabra, la destrucción de los altares y la ruina de los tronos que el Sumo Hacedor tiene establecidos para bien de la humanidad; tales son sin disputa los verdaderos designios de la facción revolucionaria, y tal es el estado fatal y el abismo de

males en que esta vil canalla pretende precipitar a nuestra amada patria".

.....

"Compañeros de armas, alaveses todos: vuestro legítimo soberano es quien en este día os habla y llama para defender la Religión y salvar la patria... corred prontamente y con demanda a nuestras filas todos los que aun no tenían el honor de pertenecer a ella; y vosotros a quien la Providencia destinó para ser las primicias tutelares del altar y el trono, uniéndose a sus respectivos jefes no olvideis el precioso nombre que os distingue. Lealtad, realismo y fidelidad deberán ser nombres sinónimos entre vosotros; pero el amor al orden y a la justicia debe ser vuestro carácter. Teneis un rey que os manda, aquel que justamente habeis deseado. Este monarca benéfico ha comunicado ya sus órdenes, ha establecido en sus respectivas provincias sus legítimos representantes y éstos, autorizados en debida forma para conservar ilesos todos vuestros fueros y privilegios os transmitirán las emanaciones de la voluntad de vuestro augusto soberano el Señor D. Carlos V de Borbón de cuya piedad y justicia os podeis prometer días de gloria y de esplendor para vuestra iglesia, de paz y sosiego para vosotros y de abundancia y prosperidad para toda España.

Elegid, alaveses, españoles elegid. De vuestra decisión depende la existencia del trono español... Católicos sois, la causa de Dios os llama protectores del altar; sois leales y fieles vasallos y el mejor y más deseado de los reyes espera vuestro auxilio para exterminar la canalla liberal y consolidar su trono. ¡Viva Car-

los V, viva nuestro augusto soberano!. Vitoria
7-X-1833. Valentín Verástegui".

Sólo una interpretación forzada puede sacar conclusiones "foralistas" de semejante documento. Por el contrario, encontramos en él principios totalmente contrarios a la doctrina foral "pactista" al atribuir al Rey en exclusiva el poder legislativo ("... se han ingerido hasta en el mismo trono del monarca, y violando su poder legislativo...") y el consecuente procedimiento de formular la voluntad política, sin mencionar para nada a los órganos representativos.

Por otra parte, la imprecisa y genérica mención de "fueros y libertades patrias" o "fueros y privilegio;" no parece hacerse como expresión particularista de un pueblo, y de su organización peculiar, sino como parte del ordenamiento legal del Antiguo Régimen, jurídicamente desigual, que lo mismo puede hacer referencia a los fueros provinciales o ciudadanos como a los fueros y privilegios de la nobleza y el clero (106). El alcance puede ser el mismo que cuando la Diputación de Vizcaya denuncia en su proclama que "sus partidarios (de la revolución y de la anarquía) consideran las leyes antiguas y fundamentales del reino abolidas por otras nuevas..."; o cuando Cabrera arenga a los aragoneses a vengar "el ultraje hecho a nuestra santa religión y venerandas leyes" (107) y el cura Merino desprecia a "aquellos sectarios viles que pretenden arrancar de

nuestro suelo patrio la adorable religión de nuestros padres y nuestras justísimas y santísimas leyes" (108).

La palabra "fueros" no tiene todavía el sentido particularista que adquirirá más tarde. En la Exposición del General Llauder a la reina gobernadora en la que se pi de convocatoria de Cortes, y que junto con la del general Quesada dio origen a la promulgación del Estatuto Real, se lamenta de la política impopular del Ministerio Zea Bermúdez que "no parece sino que conspira a hacer desaparecer de este país la tranquilidad que disfruta en medio de tantas convulsiones, y vigente esta lucha (109) se prepara ya a V.M. para empeñarla en otra contra la nación, quitando a los españoles toda esperanza de mejoras y asegurar una suerte más justa de la que ha tantos años experimentan en medio de tan heroicos sacrificios como hizo esta leal nación, digna de mejor suerte, por su rey cautivo y abdicado de la corona, así como para asegurar su independencia, su religión, sus leyes, fueros, libertades y privilegios y cuyos esfuerzos están reproduciendo con igual heroísmo y generosidad, confiada en la honra que los primeros actos del mando de V.M. le ofrecieran" (110).

Es sabido que la pretensión de Llauder se reducía a pedir una convocatoria de Cortes invocando "las antiguas leyes de la Monarquía" y no desde postulados liberales. Pero también desde éstos últimos se habla de "fueros" y "libertades patrias" y no precisamente para hacer refe-

rencia a leyes ligadas al Antiguo Régimen.

Un liberal exaltado: Mina, cuando se hace cargo del mando del ejército del Norte en noviembre de 1834 arenga así a sus paisanos:

"Soldados: vuelvo a colocarme entre vosotros para combatir en nombre de la patria con iguales elementos a los que desde el año 1820 al 23, se opusieron en el mismo centro de ella a la marcha del gobierno representativo, reconocido, después de dolorosas experiencias, como indispensablemente necesario para asegurar la independencia de la nación, sus fueros y libertades y la estabilidad y esplendor del trono" (111).

Y cuando en Lequeitio a un ingenioso liberal se le ocurre formar una compañía de milicias urbanas femeninas dice hacerlo porque:

"Deseoso de dar impulso "de acción y vida" en favor de la hermosa causa que defendemos a esta población alucinada en su mayor parte por los enemigos "de las libertades patrias" he creído que haría un servicio a S.M. la reina nuestra señora si conseguía interesar en el triunfo de la segunda Isabel al bello sexo que tanta influencia tiene sobre el nuestro. Con este objeto he invitado a las mujeres "notables" de este pueblo a inscribirse en una compañía que se denominará de "antiguas cántabras" (112).

"Fueros" y "libertades patrias" son conceptos genéricos utilizables desde diversos postulados y con distin

tos contenidos. Todo dependerá del proyecto de patria y del sentido de libertad que concrete cada uno de ellos.

Y es que contra la revolución liberal que preten de implantarse por medio de "leyes impías", se defiende con las "venerandas y santas leyes" existentes, se sacraliza la legalidad, y más todavía cuando es precisamente una de esas leyes: la de Sucesión, la que legitima la causa.

No creemos pues que la motivación foral explique el levantamiento carlista y mucho menos sea una respuesta particularista de las provincias forales contra el poder central. Muy otras parecen ser las justificaciones y el carácter del alzamiento que se deducen de los documentos anteriores:

En primer lugar: continuidad con la Guerra Rea-
lista:

- El llamamiento de Santos Ladrón se hace a los antiguos oficiales y voluntarios realistas (Navarra)

- "La revolución y la anarquía que combatimos en 1823" (Vizcaya)

- "... porque los vencidos de 1823 anhelaban vengar su derrota" (Guipúzcoa)

- "el impío sistema abolido por vues-
tras armas comenzaba a renacer..." (Alava)

En segundo lugar: El carácter ANTILIBERAL Y REAC-
CIONARIO del levantamiento:

- "Los mismos enemigos de nuestro idolatrado Carlos... son los partidarios de la libertad" (Navarra)

- "los ataques de la Revolución y de la anarquía..." (Vizcaya)

- "El turbulento liberalismo ha sentado su trono sobre la cima de nuestro oprobio" (Guipúzcoa)

- "El impío sistema... la perfidia liberal ha de ser exterminada (Alava)

En tercer lugar: su carácter "ESPAÑOLISTA":

- "Sí, haceis causa común con todos los españoles". (Navarra).

- "Vizcaínos, preservad como todos los buenos españoles en vuestra valerosa resolución" ... hasta que "vuestros esfuerzos unidos a los del resto de España hayan conseguido colocar en el trono de San Fernando..." (Vizcaya)

- "... D. Carlos V de Borbón, de cuya piedad y justicia podeis prometer días de gloria y esplendor para vuestra iglesia, de paz y sosiego para vosotros y de abundancia y prosperidad para toda España" (Alava)

Y en cuarto lugar: la defensa del Trono y el Altar como justificación única de la guerra:

- "Di el sagrado grito en defensa de la Religión de Jesucristo proclamando al Sr. Carlos V Rey de las Españas" (Navarra)

- "A tanto llega nuestra adhesión al Trono y a la Religión augusta de nuestros padres..." (Vizcaya)

- "convencida de lo útil que es al Altar y al Trono el que hagamos su defensa..." (Guipúzcoa)

- "vosotros, a quien la divina providencia destinó para ser las primicias tutelares del altar y el trono..." (Alava)

Por último, y aunque sea un detalle de escasa relevancia pero que se repetirá constantemente en manifestos y proclamas a lo largo de la guerra, aparece la idea de que la batalla que se libra no es exclusivamente española, sino que tiene alcance europeo; el peligro revolucionario amenaza a Europa entera:

- "Sus partidarios (los de la revolución) quieren hacer a España cómplice de sus abominables maquinaciones que la propaganda revolucionaria inventa para destruir el orden social en Europa" (Vizcaya)

- "... este sistema destructor que corriendo las naciones como una nube desoladora, las infesta de una fiebre maligna que consume el cuerpo de la sociedad europea..." (Alava).

La causa por la que se lucha, no sólo no es vasca, sino que desborda el ámbito español, aunque éste sea el marco en el que a ellos incumbe dar la batalla, porque es "la CAUSA DEL ORDEN EUROPEO" contra la anarquía que amenaza la disolución de las sociedades sea cual sea la forma de sus Gobiernos" (113). De ahí la importancia del levantamiento de vascongadas y navarros: "un puñado de valientes ... protegido del modo más visible por el Señor... (que) ha sabido vencer la REVOLUCION EUROPEA" (114). Por eso Europa es un testigo de excepción: "obsérvese imparcialmente y juzgue la Europa..." (115); "Vuestro heroísmo es hoy la admiración de Europa" (116); "Acabais de dar a la Europa una nueva prueba de vuestro valor" (117); "La Europa os contempla atónita..." (118); "la Europa entera admira vuestras virtudes" (119)... no en balde ellos se creen la "nueva garantía del reposo de todo Europa" (120). España empezaba a ser ya la reserva espiritual de Occidente...

B.-ZUMALACARREGUI Y LOS PUEROS

La figura del general carlista ha llegado hasta nosotros a través de la historiografía nacionalista como la de un "héroe nacional vasco". Para Jesús Galíndez, Zumalacárregui "no fue un caudillo absolutista; fue un héroe de la independencia vasca. Le faltó un ideal claro, pero en el fondo de su mente y de su corazón ardía la llama del

patriotismo: luchó por sus fueros, por sus libertades, por su raza... bajo su mando supremo se volvieron a unir todos los vascos, como en los buenos días de Sancho III" (121).

En 1979, para Telesforo Monzón, Zumalacárregui, Sabino Arana y José Antonio Aguirre, son los tres patriotas más grandes que ha tenido Euzkadi (122). Y en junio de ese mismo año se podía leer en el semanario local "Punto y Hora de Euzkalerria": "El fenómeno ETA es quiérase o no reconocer la reencarnación de Zumalacárregui en lucha, el hombre que ya entonces lo que buscaba era algo que secularmente se nos ha negado y ocultado con ceguera, no queriendo ver la realidad, como el avestruz: la libertad, la Independencia y la defensa de la gente humilde de entonces, el proletariado actual. La ecuación partidas carlistas igual a comandos ETA es algo real y actual" (123).

Estos dos ejemplos, que como más recientes he recogido, son expresivos de la representación popular que se tiene de Zumalacárregui, que se deduce de una interpretación de la guerra carlista como guerra foral, como guerra contra España, incluso como guerra por la independencia vasca (124).

Sin embargo, creo que no hace falta insistir en el carácter de la guerra y en la ausencia de la bandera foral como motivación de la misma. Aunque los fueros jugarían un papel indudable en su conclusión, su aparición en el campo carlista es posterior a la muerte del general. Zumalaca-

rregui podrá pasar a la historia como genio militar excepcional, como ejemplo de fidelidad a una causa en la que creía, como caudillo popular indiscutible, pero no como "héroe nacional vasco". En primer lugar porque no era una causa nacional ni particular vasca la que se ventilaba en aquel momento, pero sobre todo porque Zumalacárregui fué antes que nada un MILITAR REALISTA ESPAÑOL.

Hijo de un escribano y propietario de Ormaiztegui (Guipúzcoa) nació el 29-XII-1788; quedó huérfano a los 4 años y siguiendo la profesión de su padre fué a los 18 a Pamplona a trabajar en el despacho del procurador Francisco Javier Ollo, con cuya hija Pancracia casaría más tarde. Cuando la invasión francesa, dejó la pluma por el fusil, se fué a Zaragoza, se alistó como voluntario en el batallón Portillo el 8-VII-1808 y tomó parte en la defensa de la ciudad. Prisionero de los franceses logró escaparse y se presentó al guerrillero Gaspar Jaúregui, "El Pastor" quien le confió la plaza de secretario de campaña. En 1812 pasó a Cádiz y apoyado por su hermano Miguel Antonio, diputado a Cortes por Guipúzcoa, obtuvo de la Regencia la confirmación de los despachos de los oficiales de su regimiento. Terminada la guerra quedó en el Ejército.

En 1821 fue víctima por sus convicciones realistas de la persecución constitucionalista y separado del regimiento en que prestaba sus servicios. Se incorporó entonces a la división de Navarra que mandaba el general Quesa-

da y luchó en las filas realistas a las órdenes de Santos Ladrón, terminando la campaña con el grado de teniente coronel. En 1824 con restos de la antigua División Real de Navarra puso en pie el batallón que por decreto 25-IV-1824 se tituló Regimiento de Infantería Voluntario de Aragón. El 9-III-1825 se le confería el cargo de vocal de la antiformal Comisión Militar de Navarra, especie de tribunal político-militar para purgar a liberales, hasta que se puso al frente del I Regimiento de Infantería de cazadores del Rey en Huesca. En 1829 ascendió a coronel y recibió el mando del regimiento de Infantería de Voluntarios de Gerona. Nombrado gobernador político-militar de El Ferrol, al iniciarse la "apertura liberal" del gobierno fernandino se hizo sospechoso por sus ideas absolutistas y fué destituido y exonerado del grado de coronel. Retirado a vivir a Pamplona, ya antes de morir Fernando VII, el virrey de Navarra comunicaba al gobierno que "era peligroso por sus ideas jexageradas! y haber sido separado recientemente"; ante tales sospechas, se solicita que se le señalara otro sitio de residencia que no fuera Navarra ni Guipúzcoa (125). En 1833 aunque tardó un mes en unirse al levantamiento, fué reconocido como jefe indiscutible del Ejército de D. Carlos.

No es este el lugar de elogiar sus dotes militares y su atractivo popular, baste decir que la época "gloriosa" del carlismo va unida a su nombre. El vacío que dejó su muerte en Junio de 1835 nunca se pudo llenar. Falto de un

estratega, pero sobre todo de un caudillo que mantuviese el entusiasmo de las tropas, D. Carlos tuvo que recurrir a nombrar por R.O. a la Virgen de los Dolores generalísimo del Ejército Realista (126).

De FUERISTA ENTUSIASTA califica Echave Sustaeta a Zumalacárregui. El único argumento que da para probar su afirmación es el hecho de ser el general pariente y contertulio de Angel Sagaseta de Ilurdoz, "síndico del Reino y hombre competentísimo en materias forales" (127), ¡pobre argumento para toda una definición política!. Y es que difícilmente se puede encontrar otro. A lo largo de proclamas comunicados, correspondencia del general no aparece la preocupación foral por ninguna parte. Es más, en la medida de que su realismo se identificaba con el absolutismo, no es difícil ateniéndonos a la doctrina foral al uso, denunciarlo por "antiforal".

En 1825 no tuvo escrúpulos en participar en las Comisiones Militares contrarias a las instituciones navarras y cuya actuación fué denunciada por la Diputación del Reino como "contrafuero". Y es que para Zumalacárregui no había otra fuente de autoridad que la voluntad del Rey (128) y en su nombre el 11-I-1834 juzga y condena a la Diputación por reconocer a Isabel II, declara a sus miembros traidores y reos de lesa patria condenándolos a muerte y confiscación de sus bienes (129). Un autor tan poco sospechoso de "antivasquismo" como Bernardino de Estella califi-

ca de Contrafuero la actuación del general:

"El partido carlista, que pretendía ser defensor de la tradición vasca, quebrantó continuamente las Constituciones de los Estados vascos durante la guerra de los seis años. D...El mismo Zumalacárregui, a principio de la guerra, 11 de febrero de 1834, cometió un gravísimo atentado a la Constitución de Navarra, declarando traidores y condenando a muerte a los miembros de la Diputación, por haber aconsejado a los nabarros que defendieran el derecho de Isabel. Con su decreto conculcaba Zumalacárregui varios proyectos de la Constitución Nabarra" (130).

Nada hemos encontrado en los documentos procedentes del general que difiera en su contenido de las primeras proclamas carlistas. Su primera alocución de las tropas, tiene lugar en Nazar el 29-XII-1833:

"Navarros: ved ahí la horda revolucionaria que recorre los pueblos de Navarra...Sea el sepulcro de los impíos este suelo regado ya con sangre de ellos otras veces..." (131).

Y en el oficio que desde Echarri dirige a la Junta de Navarra el 13-I-1834:

"Si el honor en la milicia es una de las virtudes que los hombres aprecian en tal grado que prefieren la muerte antes que mancillarlo, todavía hay otra más esencial y más sagrada y por la cual espondría y perderían mil vidas que tuviese: este es, en el mejor servicio de ambas Mage-

tades Divina y Humana, la conservación de las vidas de tantos héroes que sólo por su decisión y sin otra ambición que el logro de sostener los legítimos derechos del Altar y el Trono arrostran toda clase de peligros y hasta la muerte misma" (132).

En una circular del mes de febrero:

"Decidido con todos los valientes navarros que están a mi cargo a sostener a todo trance y defender los tan conocidos derechos a la corona de las Españas del señor rey don Carlos V de Castilla y VIII de Navarra, es llegado el caso en la activa y sangrienta lucha comenzada contra los revolucionarios que se oponen a que brille el sol de justicia en el trono que ocupó el piadoso Recaredo y el santo Fernando..." (133).

En el mes de marzo desde Lumbier:

"Nosotros todos sabremos morir antes que sucumbir a un gobierno cuyos principios elementales son la impiedad y la tiranía; las armas nos darán lo que las humanas teorías quieren usurparnos; y finalmente Carlos V, destinado por el cielo a ocupar el trono español, no dirá que ha puesto en vano su principal confianza en los navarros"...Repetid el juramento conmigo; Carlos o la muerte! ;vencer o morir! esta es la divisa de vuestro comandante general. Tomas Zumalacarregui, (134).

Desde el cuartel general de Elizondo, el 20-IV-1834 anima a los soldados liberales a dejar las armas o a

unirse a las filas de la lealtad para luchar "contra el aciago sistema constitucional que quiere imponer el yugo de la servidumbre a la heroica España" (135).

Antiliberalismo, anticonstitucionalismo, contrarrevolución, defensa del Trono y el Altar, derecho de D. Carlos a ocupar el trono de Recaredo y San Fernando... Nada de fueros, ni una alusión al particularismo vasco, no sólo a las instituciones, sino tan siquiera a los "privilegios fueros y exenciones" que ya se habían visto utilizar en la guerra realista.

Sin embargo, el rescate para el santoral nacionalista de Zumalacárregui no es un puro invento, sino que también ha tenido testimonios históricos, en nuestra opinión de dudosa procedencia e internacionalidad, en que apoyarse.

Un autor anónimo que se firma "un español guipuzcoano" escribía en 1836: "recordamos haber oído fuera de España que en vida de Zumalacárregui se intentó que este caudillo, digno de mejor causa, prohijase la idea de formar un Estado independiente con la de Navarra y las Provincias Vascongadas. Esto oímos decir y nos pareció entonces, y aún nos parece todavía, tal vez equivocadamente, que no carece absolutamente de fundamento" (136).

Un "rumor" parecido recoge también Pirala a través de una carta fechada en Bayona en julio de 1835 "digna de publicidad aunque no de entero crédito en todas sus par-

tes", según el mismo autor hablando de Zumalacarregui dice: "...Parece cierto que en una conferencia que tuvo aquel jefe con Don Carlos el 2 de junio último le dijo: V.M. nos está engañando con sus pretendidas relaciones y su gran partido en las demás provincias; pero le declaro que si en todo julio no se pronuncian éstas, le daré a V.M. el pasaporte para que se retire al extranjero, pues mis intenciones no son las de pasar el Ebro para colocar a V.M. en el trono. Así es, que asegura que Zumalacárregui tomado que hubiese a Bilbao y con los recursos que esa villa le hubiese proporcionado, pensaba sublevar las provincias limítrofes y hacer las marchar en masa sobre Madrid con Carlos a la cabeza, quedando él con sus fuerzas sobre el Ebro. No se sabe cuáles fueran las miras secretas de Zumalacárregui, aunque hay barruntos para creer trataba de declarar la independencia de las Provincias..." (137).

El escritor liberal inglés Somerville, refiriéndose al general carlista escribe: "...casi se determinó a aceptar la corona que los naturales del país estaban inclinados a ofrecerle para reinar con el nombre de Tomás I, rey de Navarra y señor de Vizcaya..." Sin embargo, añade: "fué un infortunio para el país que los principios "equivocados" de lealtad y de devoción a la legitimidad, excusables en un español, indujeran a Zumalacárregui a rechazar aquellas ofertas y a traer a don Carlos" (138).

Otro viajero francés, el suletino, Agustín Chaho,

republicano y anticlerical, ve el levantamiento carlista como una guerra por la independencia vasca; Zumalacárregui sería el gran caudillo de la nacionalidad. Su "Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos", se parece más a una novela que a l relato de un cronista.. Al final de la obra imagina un diálogo entre un "Independiente" y "el hombre de la Gran Espada": Zumalacárregui, que puede hacer posible la independencia (139).

En una obra pintoresca: "Spain Revisited", del norteamericano Alexander MACKENZIE se recoge un curioso diálogo entre el autor y un vizcaíno con muy pocos visos de autenticidad, pero que es un testimonio más de la interpretación interesada o ideológica que del levantamiento hacen los extranjeros: "Tanto nos importa Carlos como Cristina y nos da lo mismo el rey que la reina -me dijo un vizcaíno-. No echamos de menos ni un Dios que nos juzgue ni un rey que nos mande. Si no podemos ser españoles a nuestro albedrío, nos arreglaremos a nuestro modo y cada año elegiremos un rey que sea nuestro..." "Parece ser que la idea de República se había infiltrado en ellos y que su realización sólo dependía de que Zumalacárregui se pusiera al frente de un movimiento popular que declarase independientes y soberanas a las provincias aforadas y Navarra" (140).

Como denominador común de estos testimonios: su procedencia extranjera y su filiación liberal. Y es que como veremos más tarde al explicar el origen de la bandera

PAZ Y FUEROS lanzada desde el campo liberal, tanto Inglaterra como Francia que colaboraron en la empresa, estaban interesadas por sus actividades mercantiles en el País Vasco en que en éste se mantuviese el particularismo foral. Incluso no sería la primera vez que la idea de un País Vasco independiente hubiera pasado por la imaginación de la diplomacia europea. Si ya en la Guerra de la Convención y en tiempos de Napoleón se barajaron proyectos independentistas (141), en el debate sobre la ley de fueros de 1839 se denunciaban las posibles maniobras diplomáticas que tratasen de hacer del País Vasco "una pequeña Bélgica o Suiza" (142).

No creemos por lo que a lo largo de este trabajo venimos exponiendo que tal proyecto contase con el apoyo de ningún sector significativo de ninguna de las cuatro provincias. El marco político español era incuestionable para cualquiera de los dos bandos en que se hallaba escindida la sociedad vasca. Para unos y otros, en aquel momento no había otro patriotismo que el español y el conflicto se planteaba sobre el proyecto de patria a realizar.

Es posible que la utilización parcial de una carta de Zumalacárregui a D. Carlos pudo servir de base para argumentar en pro del independentismo del general. El hacerlo, nos parece forzar y generalizar un tipo de manifestación que no se repetirá e ignorar por el contrario las continuas manifestaciones de españolismo, que incluso en la misma carta aparecen. Además, hay que tener en cuenta la

finalidad que se pretende con ella.

Don Carlos se encuentra en Portugal, con una España que se ha pronunciado a favor de Isabel y dónde solo el País Vasco se ha manifestado masivamente a favor del pretendiente. Zumalacárregui, que advierte el ánimo que podría infundir a las tropas la presencia del Rey, pues no en vano se ha levantado en su defensa, trata de atraerlo con toda clase de seguridades y honores. Por eso le dice:

"Creedme Señor: Aún cuando V.M. no pudiese contar más que con los esfuerzos de Navarra y de las Provincias Vascongadas no serían éstos inútiles aunque limitados. Venid señor, nada temáis. Aquí en medio de nosotros se adornará Vuestra frente con la corona del Reino de Navarra, que si su territorio es poco extensivo, sus habitantes son leales y heroicos. Todas las naciones os respetarán, sereis reconocido como rey y un pueblo de valientes perecerá hasta el último individuo antes de permitir que os suceda ningún mal. En fin Señor, V.M. sostendrá su dignidad, será proclamado rey por todos sus vasallos y recobrá de este modo el trono de San Fernando.

Nuestras conciencias y nuestro honor nos obligan, Señor a rogar a V.M. que venga entre nosotros. Vuestra presencia sola bastará, pues si V.M. llega a poner el pie en suelo navarro o en las costas de Guipuzcoa estará ya en seguridad y todos iremos a recibirle. Al llegar V.M. al territorio español tendrá a su lado diez mil bayonetas..." (143).

Zumalacárregui intenta en esta carta atraerse al Rey, asegurándole un trono: el de Navarra, en el que sí parece que por el contexto incluye también a las Provincias Vascongadas, pero no para proclamar un reino independiente, sino como primer paso para recuperar el trono de San Fernando, es decir, el de Castilla; y no duda que tanto el suelo navarro como las costas guipuzcoanas son territorio español.

Por su trayectoria anterior a la guerra carlista, así como por su actuación en ésta y a través de todos los documentos que nos han llegado firmados con su nombre (144) Zumalacárregui fué un gran patriota, pero patriota español, cuyo modelo de patria era la gobernada por una monarquía absoluta. Así se lo reconoció el Rey, quien a su muerte le concedió "La Grandeza de España de primera clase con el título de Duque de la Victoria y Conde de Zumalacárregui para sí, sus hijos y descendientes, al mismo tiempo que a la Duquesa viuda le concedía la Banda de la Orden de Damas Nobles de Maria Luisa (145).

C.-DECLARACIONES Y PRACTICA FORAL CARLISTA

Si ni en las primeras proclamas que se dieron en el Pais Vasco, ni en los testimonios que dejó Zumalacárregui encontramos ninguna declaración en defensa de los fueros, menos podíamos esperar encontrarlas en las primeras de

claraciones de D. Carlos. Efectivamente, ni el Manifiesto de Abrantes (1-X-1833) ni en los decretos de Santarem (4-X-1833) aparece nada en este sentido (146).

Sin embargo, con fecha 18-III-1834 dirigió D. Carlos una alocución a Zumalacárregui para que se imprimiese y circulara. El texto, según la publicó en hoja volante el general dice así:

"Mi real ánimo y corazón se hallan dulcemente afectados ha ya muchos días al contemplar los heroicos esfuerzos que hacen en favor de la religión y de mi legitima causa las provincias de Alava y Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya (147) a quienes nombro sin preferencia siguiendo solo el orden alfabético...Digno jefe Zumalacárregui, os en cargo que hagais presente mi Real gratitud a todos los que mandan las divisiones y también a la Junta de esas cuatro provincias...Trabajad con unión y alejad de vosotros todo espíritu de discordia: fijad sólo los ojos y el corazón en Dios, en mí, en la nación española. Vosotros sabeis lo que conviene a esas provincias en el orden civil y administrativo. Sentado sobre mi solio he de conservar sus fueros. Para todo os revisto de la facultad necesaria y oportuna; os dirijo también el decreto de ley penal que he mandado publicar con objeto de prevenir las violencias del gobierno usurpador..."

Al final de la circular disponía Zumalacárregui "se impriman en grande número de ejemplares para proveer a las tres provincias y Navarra, como también al reino de Ara

gón" (148).

D. Carlos entró en España por la frontera de Navarra el 9-VII-1834 y a instancias de la Diputación de Vizcaya mandó leer en Guernica el siguiente Real Decreto:

"Queriendo perpetuar en este M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya la manifestación del placer que experimento al verme entre sus leales y siempre fieles naturales, especialmente en este memorable sitio, donde mi augusto predecesor el Señor D. Fernando V, de feliz memoria, confirmó a los vizcaínos sus antiguos fueros y privilegios, y no pudiendo hacerlo de un modo más expresivo ni más conforme a los justos deseos del país que imitando a mi augusto predecesor, he venido en confirmar y confirmo los fueros y privilegios de Vizcaya, por este mi real decreto, que servirá de recuerdo perpetuo al día plausible de su fecha, en el que, al frente de las autoridades del Señorío y de sus hijos armados en defensa de mis soberanos derechos, les doy esta espresa y terminante prueba de mi agradecimiento a sus servicios, que la repetiré cuando las circunstancias permitan prestar el juramento recíproco entre mí y el Señorío, con las formalidades señaladas en los mismos fueros".

La Diputación de Vizcaya dirigió a todas las autoridades del Señorío una circular, dando cuenta de tan fausto suceso y de la que se deduce la participación que la misma tuvo en él:

"Constaba a la Diputación general la distinguida predilección que el Rey N.S. Don Carlos V de Borbón (D.L.G.) se complace en dispensar a Vizcaya, la primera que decidida proclamó sus indisputables derechos al Trono Español; y fundada en el más íntimo convencimiento de esta verdad, concibió la idea de suplicar reverentemente a S.M. se dignase arraigar en el pecho de sus leales habitantes, con un testimonio público e indeleble del alto precio que han merecido en su real ánimo los extraordinarios sacrificios del Señorío en defensa de la justa causa del Altar y el Trono, simbolizada en su Augusta Persona... S.M. accediendo benigno a instancias de la Diputación... ha tenido a bien espedir solemnemente el Real Decreto que sigue..."

Tras la inclusión del Real Decreto, la circular concluye así:

"Lo anuncia a V.S. la Diputación general para su más completa satisfacción y a fin de que dando a este importante documento la mayor publicidad, sirva de nuevo y poderoso estímulo a la lealtad Vizcayna" (149).

No era ninguna inconsecuencia ni oportunismo que D. Carlos prometiese jurar los fueros del Señorío; era un formalismo con el que hasta entonces todos los soberanos habían cumplido, aunque el hacerlo como "prueba de agradecimiento a sus servicios" no parezca muy acorde con la doctrina foral.

Pero es a partir de 1836, tercer año de guerra cuando los fueros aparecen más frecuentemente mencionados en manifiestos y proclamas, y se promete más insistentemente su conservación, aunque sin presuponerlos causa ni justificación del levantamiento. Varias son las posibles explicaciones, no excluyentes, que se nos ocurren sobre este hecho. En primer lugar, los carlistas no tenían por qué no respetar unos particularismo que formaban parte del orden de cosas por ellos defendido. Si admitían las desigualdades jurídicas que los fueros de la nobleza y del clero implicaban no tenían por qué no hacerlo con los regímenes forales; todo formaba parte de "las venerandas leyes, fueros, privilegios, usos y costumbres" de la Monarquía por la que luchaban. Si los predecesores de Carlos V, sobre todo Fernando VII, por necesidades políticas concretas los había puesto en entredicho, éste, sin compromiso de gobierno inmediato no tenía por qué hacerlo y si su objetivo principal era la conquista del trono de San Fernando, no podía permitirse el lujo de restar voluntades a la empresa y menos las de unas provincias que de tal forma le habían respondido.

En segundo lugar, como preveía la Diputación vizcaína, la defensa explícita de los fueros podría "añadir un NUEVO Y PODEROSO ESTIMULO a la causa". Si así lo anunciaba en julio de 1834, es prueba evidente de que hasta en tonces no lo había sido. Y si la defensa del Altar y el

Trono era la única justificación con que se había envuelto una contienda provocada en último término por una situación general de descontento y de resistencia a toda innovación cuánto más fácil podía ser hacerlo por la defensa de unos "fueros" cuya desaparición incidía de forma negativa en las condiciones de vida de la población vasca y conectaba más directamente con su descontento. Este refuerzo "ideológico" podría llenar en parte el vacío que con su desaparición dejara el carisma de un jefe indiscutido que supo despertar el entusiasmo popular: Zumalacárregui.

En tercer lugar, el hecho de que entre 1834 y 1836 el Gobierno liberal procediese sistemáticamente al desmantelamiento foral y la unidad constitucional se impusiese amenazadora sobre todo particularismo, ofrecía un cargo más que atribuir al enemigo revolucionario:

"El triunfo de los fueros está identificado con el de la legitimidad española. La revolución en todas las épocas se ha declarado contra los fueros de Navarra y las Provincias y ha propendido siempre a su abolición. Tres veces o en tres épocas diferentes se ha decretado por el partido revolucionario la supresión de nuestros fueros y tres veces los ha restablecido el triunfo de los realistas" (150).

En cuarto lugar, y en nuestra opinión como causa fundamental que provocó el "foralismo" carlista, estaba la necesidad de asumir la causa de los fueros para defenderse

de las promesas que desde 1835 venían ofreciéndose desde el campo liberal de conservarlos bajo la Monarquía de Isabel II. La bandera Paz y Fueros ideada por un liberal moderado, Muñagorri, a comienzos de 1835 no sólo trataba de dividir al carlismo, fomentando el foralismo y separando la causa de D. Carlos de la de los fueros para así facilitar el fin de la guerra, sino lo que era más provechoso todavía, y esta era la gran maniobra liberal, de separar la causa de los fueros de la del orden institucional del Antiguo Régimen. (No insistimos en el alcance de esta empresa, que será tratada ampliamente más adelante).

Por último, otra razón de organización interna carlista explica el reconocimiento del orden institucional foral por parte de D. Carlos. La progresiva radicalización de la revolución liberal en los dos primeros años de la contienda empezó a inquietar a los sectores más moderados con la llegada al ministerio en septiembre de 1835 de Juan Alvarez Mendizabal. El miedo a que la revolución se les escapase de las manos llevó a muchos moderados a alejarse del liberalismo y a aproximarse a las filas carlistas. Con el fin de atraerlos a su causa, los sectores más ilustrados del carlismo intentaron moderar el absolutismo imperante en su organización. El 20 de abril de 1836, para la mayor rapidez y coordinación de los diferentes ramos del Estado, D. Carlos nombró a Juan Bautista Erro ministro universal. A modo de programa presentó a la firma de D. Car-

los un manifiesto en el que "ofrecía inaugurar una nueva época para la causa carlista y renunciar al sistema de despótico ministerio seguido hasta entonces" (151). No era otro que el famoso Manifiesto de Elorrio, tan divulgado por la historiografía carlista, firmado por D. Carlos el 25 de abril de 1836. Dirigido "al Reino de Navarra y a las Provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya", en él, después de reconocer la adhesión de sus pueblos a su real persona anunciaba que:

"... para hacer vuestra felicidad, asegurar vuestro bienestar, abrir nuevos caminos a vuestra aplicación y nuevas ocupaciones y recursos a la exuberancia de vuestra población, así que las circunstancias permitan reuniros en Cortes y Juntas Generales será muy grato a mi Real ánimo que os ocupeis en meditar y proponerme todos aquellos medios de fomentar vuestra industria y fabricación singularmente la del hierro, que dando ocupación a los brazos que no la tienen en la estrechez del terreno, os traiga las grandes utilidades de que es susceptible, apoyada en los alivios que estoy dispuesto a dispensaros... Nada os pido que no hayáis hecho ya muchas veces; y así como será para mi corazón un deber tan grato como sagrado el proteger y promover la Religión Santa de nuestros padres, que tanta paz y dulzura ha derramado siempre sobre estos piadosos pueblos; así como seré el apoyo y fiel conservador de vuestros fueros y exenciones y el protector de un país tan grato a mi memoria, así también debo yo esperar que unidos todos co-

mo hasta aquí en un sólo interés y redoblando si es posible todavía la energía de vuestros corazones, continuareis vuestros heroicos sacrificios ..." (152).

Era la primera vez que se anunciaban medidas "ilustradas" y el propósito de reunir Cortes y Juntas. Como contrapartida se pedían heroicos sacrificios... Y es que los sacrificios "con arreglo a fuero" igual podían parecerlo menos... Así lo entendió el capitán carlista Manuel Lassala, que en sus Memorias comenta: "Erro, lisonjeando al país con la concesión y aumento de sus fueros, dobló las exigencias e impuso al clero subsidios cuantiosos y forzados..." (153) y antes de un mes, por R.D. 18-V-1836: "penetrado de la conveniencia de adoptar medidas enérgicas... para acelerar el término de la presente lucha, que liberte a estas heroicas provincias de la destrucción con que los enemigos de nuestra Santa Religión y de mis legítimos derechos quisieran hacerlos desaparecer... vengo en mandar un armamento general con arreglo a los Fueros y costumbres del Reino de Navarra y Provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya..." (154). Y para dar cumplimiento al anterior decreto, la Junta Gubernativa de Navarra ordenaba que "Todo Navarro o habitante en este Reino desde la edad de 17 años a los 50 inclusive tomará las armas en defensa de su Dios, de su Rey y de sus Fueros" (155).

En un intento de ganarse al Moderantismo peninsular, las medidas ilustradas y las asambleas representati-

vas moderadoras del poder real, no sólo se prometen en el País Vasco. A raíz de la expedición real a Madrid, en septiembre de 1837, con el fin de facilitar una transacción con los moderados, en cuya empresa no estuvo ausente la misma reina gobernadora, en total desacuerdo con el gobierno liberal de Calatrava, la Junta Superior de Castilla la Nueva anunciaba que "El Rey convocará las antiguas Cortes de España y las necesidades políticas de la época serán satisfechas con el tino y circunspección que requieren las reformas sociales. Los tiempos de la Inquisición y del despotismo pasaron ya..." (156). En el País Vasco no era necesario resucitar antiguas instituciones representativas pues las Cortes y Juntas generales mantenían su vigencia.

De todas formas, si a partir de entonces, se tienen en cuenta los fueros y se promete el respeto de sus instituciones, repetidamente se recuerda que se sigue luchando "por el pronto triunfo de la sagrada causa de la Religión y de la Monarquía" (157), y se arenga a los soldados para que "sea vuestra conducta cual defensores del Altar y el Trono" (158). Y si Maroto en julio de 1838 dice: "El Rey y la Santa Religión que profesamos sea el norte para vuestros sacrificios" (159), el 21 de febrero de 1839, tras los fusilamientos de Estella, Carlos V condena a Maroto porque "acaba de convertir las armas que le había encargado para batir a los enemigos del Trono y el Altar contra nosotros mismos" (160) y tras su rehabilitación en julio

de 1839 Maroto vuelve a decir: "Sea nuestra constante divisa el Rey y la Religión; es necesario triunfar o morir" (161).

Sin embargo es necesario también defenderse de las promesas forales que ofrece el enemigo:

"La conservación de fueros y la paz que dicen ofreceros es un médio de que quieren valerse para adormeceros y engañaros..." (162).

"¿No están bien recientes los ofrecimientos de Espartero al mismo tiempo en que se decretaba la abolición de nuestros fueros?" (163)

"Navarra y las Provincias en vez de conservar sus fueros triunfando la usurpación serían tratadas con todo el rigor de la conquista o que a buen librar tendrían que renunciar a sus leyes forales y quedarían niveladas con el resto de la península" (164).

La defensa de los fueros, no se plantea de forma aislada, sino como la de una pieza más del orden institucional del antiguo Régimen; y un valladar frente a las innovaciones liberales:

"Sobre la Religión y la Monarquía, conservando la pureza de aquella y las leyes y fueros de ésta pueden únicamente asentarse las bases de una paz duradera" (165).

"Triunfando Carlos V triunfan los Fueros; pero triunfando la revolución... se hundirían los Fueros en esa espantosa sima donde se han hundido tantas y tan saludables institucio-

nes como nos fueron transmitidas por la larga serie de siglos" (166)

"La pureza de la Santa y adorable Religión de nuestros padres que ha sido es y será siempre la gloria de los españoles, la seguridad individual de todos mis amados vasallos, la protección de sus propiedades, el menor recargo que las urgentes necesidades del día permitan sobre ellas y el trabajo, la recta administración de justicia y todo cuanto sea provechoso a los pueblos dirigidos conforme a las leyes de la monarquía y a los fueros que he jurado mantener en estas heroicas Provincias, sin permitir que se introduzcan jamás novedades peligrosas..." (167).

Y no deja de haber declaraciones contradictorias:

"Los fueros eran en su boca (se refiere a Muñagorri) un trampantojo, una decepción: en la nuestra son una realidad muy estimable. La existencia de los fueros depende del triunfo del Rey y por ello saben Navarra y las provincias sacrificarlo todo, sus fortunas, sus Fueros y su propia sangre" (168).

¿Dispuestos a sacrificar los Fueros por el Rey?.

Pero al tratar de justificar la legitimidad del levantamiento se olvidan de los fueros:

"¿No hubo derecho y obligación de defender la ley, la inocencia y la justicia bárbaramente atropellada en la persona del Monarca? ¿No la hubo también para resistir a la proscripción de los buenos, a la ruina de la Religión, al aniquilamiento del orden, al vilipendio de ...

las virtudes y al triunfo del libertinaje, de la inmoralidad y del ateismo?. Sí que la hubo y la hay y ello es indudable. De consiguiente el glorioso pronunciamiento de Navarra y Provincias Vascongadas y su heroica insistencia para obtener el triunfo de la santa causa fue un acto legal, laudable y eminentemente obligatorio" (169).

Incluso a la hora de jerarquizar los principios quieren dejar claro que:

"... los sentimientos del pueblo vasconavarro están reducidas a estas dos bases: Religión y Rey. La paz y los fueros son su inmediata consecuencia" (170).

Y más categóricamente todavía:

"... los nombres sacrosantos de Religión y Rey son los que muy principalmente pusieron las armas en manos de los leales y esforzados hijos de Navarra y las Provincias. Lo demás es para ellos, apreciable sí, pero de un orden subalterno. Muy poco han analizado el temple de nuestro espíritu y el principio que presidió a nuestro pronunciamiento los que quisieron poner en juego el resorte de los fueros. Nuestra decisión es Religiosa y Realista. El triunfo de Dios y de la legitimidad en la persona de Carlos V son el primer objeto de nuestras ansias" (171).

Las declaraciones anteriores proceden de reales decretos de D. Carlos, manifestaciones de sus generales y comentarios del "Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas" órgano oficial de la prensa carlista.

Por lo que a la Junta Gubernativa de Navarra se refiere, advertimos la misma trayectoria anterior en sus declaraciones respecto a la cuestión "fueros". Ya vimos el carácter "antiforal" que tuvieron sus primeras manifestaciones y el carácter integrista y absolutista del levantamiento en Navarra que se deduce de ellas (172). Durante los dos primeros años de guerra, para la Junta, el objetivo que se persigue sigue siendo:

"... nada menos que conservar en nuestra España pura e ilesa la sacrosanta Religión de nuestros padres, de refrenar vicios que deshonrarán la naturaleza y la razón, de sostener las venerandas leyes de la monarquía, de destruir la impiedad, de restablecer las antiguas y severas costumbres de nuestra España, de sentar a V.M. en el trono de los Recaredos y Fernandos, y de hacer la dicha de 15 millones de españoles" (173).

Y el 23-XII-1835, en una carta a su presidente recuerda que fue: "el amor al Rey, la causa de Dios N.S. (la) que nos sacaron de casa..." (174).

Sin embargo, en 1836, y con anterioridad al Manifiesto de Elorrio, en una circular de la Junta fechada el 1 de enero se lee ya:

"Pronto seremos todos protegidos por el Dios de los ejércitos, cuya es la causa, desaparecer nuestros enemigos, y sentado en el augusto Trono de San Fernando a su virtuoso vástago

el Señor Don Carlos 5º garantiza la más segura de nuestros venerandos fueros, de nuestros inapreciables usos y de nuestras antiguas costumbres que tan bien se hermanan con la Sacro Santa Religión que tenemos la dicha de profesar" (175).

El citado Manifiesto es recibido con gran alborozo por la Junta, que el 1-V-1836 envía una Exposición al Ministro Universal de D. Carlos, Juan Bautista Erro. Este escrito, a pesar del entusiasmo que muestra por la promesa del "amejoramiento de los fueros y exenciones", la filosofía que lo preside sigue estando lejos de la doctrina foral pactista y se identifica más con el servilismo y paternalismo propio del absolutismo. Por otro lado es un testimonio de la toma de conciencia por parte de la Junta de dos realidades sociológicas que no se plantean de forma excluyente: su pertenencia a la comunidad natural vasca y su patriotismo español. He aquí el documento en sus partes fundamentales:

"El 1 de mayo de 1836 quedará consigno-
do con caracteres imborrables en los fastos de
nuestra historia y la alocución que acaba de
leerse ocupará una de sus páginas más preciosas.

Un Rey que habla y habla como Padre;
un Rey que promete y promete para cumplir como
Rey; un Pueblo que le oye como un hijo, el más
afectuoso, el más reconocido a su paternal len-
guaje, a sus singulares hechos y a sus reales
promesas; un Pueblo, en fin, que dice: ¡bien ha-
ya la sangre que mis hijos han vertido! ¡bien em

pleados padecimientos! porque no pueden garantizarse mejor ni la conservación de la Religión Santa que tenemos la dicha de profesar, que tanta paz y dulzura ha derramado sobre estos piadosos Pueblos, ni afianzarse mejor la custodia y mejoramiento de nuestros fueros y exenciones.

.....
Bien puede, pues, V.E. (sin que jamás sea desmentido prometer a S.M. a nombre de este fidelísimo Reino, que si Navarra desde principio de Octubre de 1833, hermanada en ideas, idioma y sentimientos con las otras tres provincias Vascongadas, ha sido el primer apoyo a la justicia de sus indisputables derechos, sabrá cumplir a costa del último sacrificio lo que entonces proclamó: Amor, Fidelidad, Constancia por el Rey, guerra eterna al filosofismo, conservación de sus fueros y unión con todos los Españoles, que a porfía sostienen con ella una lucha que tiene sobre sí fija la expectación y la admiración de toda Europa" (176)

Sin embargo en diciembre de 1837, el brigadier García concluía así su alocución en Piedramillera:

"Y en prueba de que todos deseamos llenar el hueco de nuestras respectivas obligaciones, que nos hallamos poseídos de un mismo espíritu, pronto a despreciar nuestra existencia por la Sacrosanta Religión que profesamos, y por los sagrados derechos que asisten al virtuoso monarca que defendemos, digamos todos, voluntarios, ¡Viva la Religión! ¡Viva Carlos V! (177).

Y el que fuera secretario de Zumalacárregui, general Zaratiegui, en una proclama a los baztaneses desde el cuartel general de Etulain el 9 de agosto de 1839, en plena crisis del carlismo denuncia a "algunos miserables voluntarios, que seducidos por un cobarde, han desertado de las filas de la lealtad" y acaba su arenga diciendo:

"Dios y el Rey fue siempre nuestra divisa; por Dios y por el Rey sabremos triunfar o morir".(178).

Cuando en 1839 la amenaza de finalizar la guerra bajo la bandera liberal de Paz y Fueros se hace cada vez más posible, se intensifican las declaraciones forales, aunque como ésta que a continuación se cita, no exentas de contradicciones en las que se promete la "monarquía pura" a la vez que la conservación de los fueros. Juan Echeverría, miembro destacado del partido clerical, presidente de la Junta de Navarra convertida desde 1838 en Diputación interina, desterrado a Francia por los marotistas que controlan el poder, recuerda el 9-VIII-1839 a los "Navarros y habitantes de las provincias Vascongadas":

"Seis años de desolación y de muerte que pesan sobre vuestro desdichado país, han debido probar al mundo entero que vuestra gloriosa insurrección, vuestra constancia y sacrificios, tenían por objeto el triunfo de la religión, de la monarquía pura de nuestro legítimo soberano D. Carlos Vyde vuestros fueros; mas la revolución

que hace tiempo ya conoce la importancia de sus armas, ha visto la necesidad que tenía de introducir sus agentes y sicarios en las filas de la lealtad y en los puestos más eminentes del Estado" (179).

.....

Y ocho días más tarde:

"Voluntarios y pueblos vascongados-navarros, habeis visto todo eso, pero ignorais todavía que esos hombres, indignos, sin escuchar a más que a su interés, acaban de contratar la venta de vuestro Rey, la vuestra, la abolición de vuestros fueros, el incendio de vuestros hogares y de vuestros campos, la eterna esclavitud de vuestros descendientes, la ruina de la Patria y la desolación del santuario" (180).

Vistas las declaraciones que sobre fueros se regularon en el campo carlista, pasamos a ver cuál fué su "práctica foral" en Navarra. Desde el momento que al comenzar el levantamiento las instituciones navarras, tanto la Diputación del Reino como el virrey y el Real Consejo se pronunciaron por Isabel II, se produjo en el campo carlista un vacío de poder total. Al igual que en 1822, el primer núcleo organizativo se formó en torno a una alianza del clero y militares realistas; un testigo de la época, el que fuera secretario de Zumalacárregui, nos lo cuenta así: "...el presbítero beneficiado de Los Arcos don Juan Echevarría, habiéndose unido al principio con el general

don Santos Ladrón, se asoció después de la prisión de éste con Iturralde, y desde entonces formaron entre ambos una especie de alianza con el mezquino fin de sostenerse mutuamente y conservar los empleos o cargos que se apropiaron. Las funciones del de Iturralde eran justas y necesarias, mas no nos es fácil dar exacta razón de las verdaderas atribuciones de Echevarria, a menos que no vayamos a buscarlas en el empleo de Qüestor de la república romana" (181).

Sin embargo, ante el reconocimiento de la superior capacidad militar de Zumalacárregui por parte de los jefes y oficiales realistas, el comandante Iturralde no sin resistencia por su parte y la de Echevarria, tuvo que ceder el mando supremo del ejército a aquél, que fué nombrado comandante general interino de Navarra; en cambio Echevarria, permaneció al frente del poder "civil" como presidente de la Junta Gubernativa que se constituyó en Estella el 15-XI-1833. Según el mismo Zaratiegui: "Arreglado definitivamente lo relativo al mando, se pensó en la parte administrativa y civil. La guerra de España contra Napoleón había dado origen a unas corporaciones que bajo el nombre de "Juntas" se formaron entonces en cada provincia ...Por este estilo, cuando empezó la lucha contra el sistema constitucional, Navarra formó una... La falta de comunicación con el Soberano aconsejaba la institución de una autoridad auxiliadora cuyas funciones sin atar demasiado

las manos a la militar contribuyesen a aligerarla de una parte de la responsabilidad..." (182).

La Junta, aunque se dice "sustituye de la Ilustrísima Diputación de este Reino", pretende ser sucesora de la realista pues se crea para que "proceda en la forma que lo hizo la que existió hasta el fin de octubre del año 1823... reasumiendo además las atribuciones vice-regias, porque la comandancia militar queda puramente con los militares" (183).

Los principios organizativos en el campo carlista no variaron de los empleados en 1822. Si en aquel momento "cautivo el rey de la perfidia liberal" fué necesaria una Regencia que asumiera los poderes soberanos; en esta ocasión contando con un Rey no habrá más ley que la que es expresión de su real voluntad y soberanía. Tanto el mando militar como la Junta actuarán en todo momento como simples delegados del poder del rey y totalmente sumisos a él.

Para legitimar el levantamiento en el País Vasco D. Carlos en una R.O. dirigida a Zumalacárregui confirmaba "cuantos grados militares hayais dispensado a los que vos hayais concedido y le autorizo para esto y cuanto sea necesario y oportuno al grande fin que os habeis propuesto, para lo que deposito esta parte de mi autoridad soberana"(184) Y la Junta hace en todo momento profesión de "fidelidad, constancia y delicadeza de los individuos que con autoriza

ción del Soberano componen esta Real Junta" (185).

Los decretos y reales órdenes son emanaciones exclusivas de la "soberana voluntad"; y las resoluciones y órdenes de la Junta siempre se dictan "en uso de las facultades que el rey nuestro señor se ha dignado darla" (186).

La dualidad Rey-Reino, como encarnación del poder legislativo que la doctrina foral trataba de recordar, ni siquiera se menciona. Son los principios que inspiran la "Monarquía Pura" los que presiden la organización política carlista.

A partir de 1836, con la llegada del Ministerio Erro, se ofrece "inaugurar una nueva época y renunciar al sistema de despótico ministerio seguido hasta entonces" (187), pero las declaraciones de recuperar la organización política foral se queda en promesas y en los últimos años de la guerra, la omnipotencia del ministerio Arias Tejeiro limita al máximo las atribuciones de los órganos provinciales, (188).

Sin embargo, la ausencia de tribunales y las reclamaciones que sobre todo en Navarra llegaron al Rey por la imposibilidad de recurrir sus naturales en apelación a ellos, llevaron a D. Carlos, no sin resistencia por parte de la Junta, a la creación por R.D. 15-III-1836 de un Tribunal Superior compuesto de un Decano, cuatro ministros y un fiscal nombrados por el Rey para la administración de

justicia en lo civil y criminal en segunda y tercera instancia, y en primera en los pueblos en que por fuero o costumbre lo hacía la Real Corte "guardando en todo con la mayor escrupulosidad los fueros y leyes del Reino" (189).

Para que no pudiera pensarse que se trataba de la resurrección del Consejo Real, precisaba bien que sus atribuciones quedarían "limitadas a lo puramente judicial y contencioso"; para que de esa forma "la Real Junta Gubernativa continúe dirigiendo durante la actual guerra, como hasta aquí, la parte administrativa, económica y de hacienda con todas las facultades que le están confiadas..." (190). El esquema organizativo carlista se acercaba paradójicamente más al modelo liberal de separación de funciones, aunque no de poderes, que a la organización polisinodial propia del Antiguo Régimen caracterizada por su confusión y concentración.

La Junta Gubernativa de Navarra, que ni por su origen, ni por su composición, ni por sus atribuciones podía identificarse con ninguna institución foral, se va a convertir, sin embargo, en árbitro de la foralidad con gran oportunismo y particular criterio. Si por un lado, ante las acusaciones de antiforalismo se defiende apelando a argumentos tales como que en situación de guerra "la imperiosa ley de la necesidad es el primer fuero de toda sociedad", sabrá utilizar la declaración de "contrafuero" como arma política para defenderse de toda amenaza que pusiera en peligro

sus atribuciones.

Ante las denuncias que en nombre del fuero un memorial anónimo realiza sobre las arbitrariedades de la Junta, solicitando para evitarlas la instalación de Tribunales, ésta se defiende:

"¿Puede ignorar el anónimo, ni navarro alguno que haya saludado sus fueros que desde el principio de esta gloriosa lucha estamos envueltos en un mar de contrafueros? Si el fuero hubiera sido estrictamente observado, ¿se hubieran obrado tantos prodigios? ¿Y un fatal entorpecimiento no nos hubiera quitado tantos laureles como han recogido en el campo del honor y de la victoria? La salud pública, la salvación de esos mismos fueros es la suprema ley, y gustosa la Junta, Exmo. Señor los ha visto en parte y los ve suspendidos porque está íntimamente penetrada que Navarra y Carlos están identificados y que colocar a nuestro Soberano en el trono de sus mayores es asegurar nuestros fueros con la más segura y sagrada garantía (191).

La Junta no se opone al establecimiento de un Tribunal de justicia aunque "ve el grave inconveniente de tener que recurrir al Real Erario a los sueldos de sus individuos, en tiempo en que no hay para sostener a los dignos defensores del Altar y el Trono"; y advierte "No obstante, si S.M. atendida a esta causa, cre necesario el establecimiento de ese Tribunal, la Junta opina, que será suficiente por ahora el número de tres Jueces y un Fiscal, confe-

sando desde luego que será un contrafuero".

Si en esta ocasión la Junta transige con el contrafuero, en otras ocasiones más comprometidas, su celo formal se agudizará. Tal sucede cuando el 27-VII-1836, para calmar las críticas que el pueblo dirigía contra las Diputaciones y la Junta, a las que acusaban de no rendir cuentas de su administración, el ministro universal Erro nombró por R.O. en cada una de las cuatro provincias un Comisario Regio para que fiscalizase la actuación de las mismas (192). La indignación de la Junta se expresó en una exposición al rey; en la que, después de recordar "las muchas e incontestables pruebas que está dando, ha dado y dará de su adhesión a la Justa Causa y de sumisión y amor a la Augusta y Real persona de V.M." decía estar persuadida de que "esa soberana resolución era contraria a todos nuestros fueros, usos y costumbres y hería en lo más vivo la opinión, honor y sentimientos de esta Corporación..." Semejante institución, extraña a Navarra y raras veces establecida en el resto de las provincias" no es la que se merece "un país que puede llamarse con toda propiedad uno de los apoyos más firmes del Trono, un país que ha sido en momentos la única columna que ha sostenido el desmoronado edificio de la Monarquía Española..." Porque: "Esta Corporación más natural a Navarra que un Comisario Regio... Una corporación y unos individuos que supieron sacrificarlo todo para salvar la naufragante nave del Estado... se

desentenderá en adelante del cumplimiento de sus sagrados deberes, y de mirar esa lozana producción de la Restauración Española con descuido y sin echar el resto hasta que V.M. recoja los óptimos frutos que promete? De ninguna manera"...Por todo ello, "confiada en la bondad con que V.M. oye siempre la voz de esta corporación y en justicia que cree le asiste en esta reverente exposición, A V.M. sumisa mente suplica, se digne revocar su Real Orden del 27 de julio último, restituyendo a la Junta exponente al goce de sus atribuciones, todas ellas dirigidas al mejor servicio de V.M. y bien procomunal de los fieles Navarros" (193).

La misma situación se repite al año siguiente, cuando D. Carlos, durante la expedición real a Madrid, nombra capitán general de Navarra y Provincias Vascongadas al General Uranga. La Junta, reclama como contrafuero los abusos de autoridad del general que "excediéndose de sus atribuciones, contrariando las declaradas por la Junta por diferentes Reales órdenes, hollando los fueros y las leyes de Navarra, dispone a su arbitrio en materias de administración y de gobierno,... se mezcla en negocios de vigilancia pública, cometidos también de la Junta; autoriza a los emigrados en el extranjero para volver a sus casas, alza los embargos de sus bienes y trata a esta corporación con poco decoro haciéndole depredaciones cual si le estuviera subordinada..." (194).

El rey, en ambos casos atiende las súplicas de la Junta. y por la R.O. 3-VII-1837 suprime el cargo de comisario regio y por la del 17-VIII-1837 "Para evitar en lo sucesivo la repetición de estos males, Su Majestad se ha servido declarar que según tiene mandado, la autoridad, así de la Junta de ese Reino como de las Diputaciones de Guerra de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, ES LA UNICA SUPERIOR, sometida a Su Majestad exclusivamente, para sus respectivos distritos en todos los asuntos políticos, gubernativos, administrativos y económicos, conforme a las reglas establecidas y salvas las limitaciones que han sido o fuesen del Soberano agrado", (195).

Pero había sido en 1835 cuando las contradicciones "forales" de la Junta habían llegado al máximo. Don Carlos había intentado restituir una institución tan foral como el virreinato y nombró al Conde de Casa Egúía virrey de Navarra. Los argumentos que en la exposición al Rey del 12 IV-1835 utiliza la Junta para revocar el nombramiento por considerarlo contrafuero no pueden ser más peregrinos y contradictorios: En primer lugar, "no estando el rey en Navarra, tiene (el virrey) todas las atribuciones del Soberano; más estándolo, ninguna, ni aún los honores, pues queda reducido a Capitan general como en cualquier otra provincia..."; en segundo lugar, porque "para ser reconocido por tal virrey necesita título expedido por la Cámara de Castilla" y como subdelegado general de Rentas, necesita se le

despache el nombramiento por el Ministerio de Hacienda, pero aunque a falta de estos requisitos pudiera servir el cargo con carácter interino, necesitaría según la Novísima Recopilación, al día siguiente de su toma de posesión jurar la observancia de los fueros y leyes del Reino ante la Diputación, cosa imposible por no estar constituida esta. La misma Junta se adelanta a posibles objeciones que pudieran hacerse a su discurso, y aquí viene la contradicción fundamental que recogemos literalmente:

"Tal vez pudiera alegarse, como remedio de estos inconvenientes, el nombramiento de una Diputación tal cual la exigen nuestros fueros; mas su aplicación ocasionaría otro de no pequeña consideración, efecto todo de las circunstancias; que hacen tan antiformal la existencia del Virrey como la de la Diputación. Aquel y ésta, para serlo, tienen que jurar la observancia de los fueros y leyes, juramento hoy imposible porque tienen que faltar inmediatamente a lo jurado, porque la naturaleza de esta guerra y sus operaciones no permiten su cumplimiento sin envolvernos en mil entorpecimientos y continuas reclamaciones de contrafueros que perjudicarían notablemente el triunfo de nuestra santa causa".

De tal forma que, recogiendo el resumen con que concluye el escrito la Junta:

"Así que queda ya indicado a V.E. que no puede haber Virrey en estas circunstancias, primero, porque está el Rey en Navarra; segundo

porque no hay Cámara que le extienda el título, tercero, porque no hay Diputación que le reciba el juramento del Fuero, y cuarto y principalmente, porque tenía que ser un virrey perjuro.

No puede haber Diputación, primero porque no hay Cortes que la nombren; segundo, porque no hay Cortes que le reciban el juramento, y tercero porque aún cuando se pudiese formar con los Diputados y suplentes que existen no pueden fácilmente cumplir sus cargos sin faltar al juramento, siendo infieles a Dios, al Rey y al Reino, si habían de observar nuestros fueros, leyes, usos y costumbres".

Hay todavía otros inconvenientes que la Junta calla de momento pero que tiene intención de presentar para probar "ser inhermanables la existencia simultánea de Virrey y Diputación o de Virrey y Junta". La contradicción no puede ser mayor: ¡En nombre del fuero se niega la existencia a instituciones forales para no caer en contrafuero! Detrás de todo ello, tal vez y como se deduce de la misma exposición, está la explicación:

"Atendidas, señor Excmo. las circunstancias del día, el Virrey y la Junta que expone, parece ser dos autoridades incompatibles, encontrándose además con que no se puede legalmente nombrarse Diputación del Reino...La experiencia Excmo. Sr., de las épocas anteriores, ha demostrado, que el único medio conciliatorio es el adoptado en estas dos últimas campañas: la autoridad del Capitán o Comandante General de Navarra y la

de una Junta Gubernativa; ni aquél ni ésta se li-
gan en sus funciones a la observancia de los fue-
ros, y de este modo, aquel Capitán General entien
de en todo lo puramente militar, y la Junta en
todo lo gubernativo y económico del Reino" (196).

El escrito se comenta por sí solo, y las contra-
dicciones, numerosas, saltan a la vista; no es la menor,
que la Junta a la vez que se considera desligada de la ob-
servancia de los fueros, la reclame para defender sus atri-
buciones. Los fueros importan poco, el poder más; el fue-
ro se convierte en un arma política imprecisa que se maneja
según conviene. La Junta más celosa de sus atribuciones
que de los fueros del Reino, no quiere intermediarios entre
ella y el Rey, sobre el que su presidente Juan Echevarria
ejerce un ascendiente indudable (197).

En esta ocasión, también el Rey "persuadido del
gran fundamento de aquella exposición", por R.O. 14-X-1835
deja sin efecto el nombramiento, "pues la conciliación de
las operaciones y exigencias de la guerra con las leyes y
fueros del país no permiten otra cosa" (198).

El contrafuero se desvirtúa y ya no es contrafue-
ro aquello que se opone a las leyes del Reino, sino todo lo
que se opone al poder de la Junta. El Rey atiende las re-
clamaciones y "repara los agravios", aunque como en los me-
jores tiempos del Antiguo Régimen su soberana voluntad es-
té por encima de todo.

La Junta, celosa como siempre de sus atribuciones, teme que el Tribunal Supremo de Justicia pretenda asumir las funciones del antiguo Consejo incluso "intervenir en la renovación de autoridades municipales como lo hacía el Consejo Real de Navarra", por ello, no se le escapa asunto que pueda sentar precedente y reclama contra la incompetencia del Tribunal por admitir a examen de primeras letras a Manuel Larumbe, natural de Muez y eximirlo del servicio del reemplazo del Ejército. A Pesar que desde 1831 era el Real Consejo encargado de expedir títulos de maestros, el asunto entra dentro del campo gubernativo, y por consiguiente debe ser atribución de la Junta, lo que considera "más conveniente y más arreglado a nuestros fueros". El Rey da la razón a la Junta previniendo al Tribunal "se abstenga en lo sucesivo de intervenir en esa materia". No obstante Manuel Larumbe es nombrado maestro de primera clase por Real Orden en virtud de la "Soberana Munificencia" (199).

Hasta aquí nos hemos referido sólo a aspectos institucionales del fuero, y por lo menos en lo que a Navarra se refiere, el respeto a la organización foral se quedó en vaga promesa y las constantes denuncias de contrafuero, más que por celo por la ortodoxia foral fueron un arma política de eficaz utilización. La observancia del otro aspecto del fuero: "exenciones y privilegios", tampoco corrió mejor suerte. Por supuesto que las causas de una y

otra hay que atribuir las más a la situación creada por la guerra y a las necesidades que esta imponía que a una intención deliberada de acabar con ellos; pero lo cierto es que las exacciones y suministros obligados fueron constantes, se impusieron derechos de Aduanas para paliar la precariedad de la hacienda (200) y las tropas navarras, también las vascongadas, al igual que en 1822 tuvieron que seguir a sus generales en las expediciones que éstos emprendieron a Cataluña, Aragón y Castilla (201). Ello no quita para que aún impuestas por los carlistas las medidas resultasen impopulares y Maroto, tras los recelos que hacía él se levantan por los fusilamientos de Estella trate de atraerse a las poblaciones suprimiendo los derechos de aduana (202) y a la tropa evitando las expediciones.

Concluiremos, con Pirala, que en aquel entonces "los vascongados no pelearon solo por los fueros, ni se acordaron de ellos ni los observaron durante la guerra" (203). En el mismo sentido Bernardino de Estella reconoce que el Partido carlista quebrantó continuamente las constituciones de los estados vascos durante la guerra de los seis años (204); y un viajero inglés de la época, Francis Bacon denunciaba que "el partido carlista que intenta persuadir al mundo recurrió a las armas en amparo de sus fueros, es el mismo que descaradamente los ha violado" (205).

No, los carlistas navarros, ni se levantaron por defender los fueros ni mostraron excesivo celo en su obse

vancia a lo largo de la contienda.

3.-LOS LIBERALES Y LOS FUEROS

A.-EL GOBIERNO Y LA POLITICA TRANSACCIONISTA DE LA DIPUTACION

a.-LA DIPUTACION DEL REINO ANTE EL REGIMEN LIBERAL

Cuando en 1833, en torno al pleito dinástico se plantea la lucha entre el régimen absoluto y el liberal, la Diputación de Navarra, desde el mes de febrero, antes de morir Fernando VII venía pronunciándose en favor de los derechos de Isabel, pues según esta Corporación "a las cualidades de legalidad, tradición y tranquilidad de los pueblos reúne también la muy importante, y es, que lo establecido es enteramente conforme con los fueros y leyes fundamentales del reino" (206). Iniciado el levantamiento, el 22-X-1833 la Diputación publica su primer manifiesto a los Navarros firmado por los siete diputados:

"... Redoblando mis esfuerzos por vuestro bien y por el reconocimiento sincero de los extraviados, que aunque en corto número turban la tranquilidad pública, creo de mi obligación exponeros, que los fueros de este antiquísimo reino llaman espresa y terminantemente a la corona de

Navarra a nuestra augusta reina doña Isabel II de Castilla... Navarra ha sido siempre el más acrisolado ejemplo de lealtad, y el más firme apoyo de la legitimidad... Apresúrense los estraviados a reconocerse y entrar sinceramente en la senda de sus deberes y paternal gobierno de la reina nuestra señora doña Isabel II y apresuremos todos a tributarla los testimonios de nuestro amor, firme adhesión e inalterable fidelidad" (207).

Efectivamente, recogiendo los argumentos de un contemporáneo, el Barón de Bigüezal: "En Navarra está aceptada la herencia en línea femenina a falta de masculina, y así heredaron doña Juana y doña Blanca, doña Leonor y doña Catalina... Cuando Felipe V de Castilla alteró la Ley de sucesión, no la presentó a las Cortes de Navarra, y por consiguiente este pequeño Reino, independiente sin embargo en su cuerpo legislativo, conservó la antigua Ley de sucesión. Véase, pues, cómo en Navarra, menos que en otra parte de la Monarquía Española, podía ponerse en duda el derecho de la hija de Fernando VII a la Corona que dejaba su padre" (208).

Sin embargo, el posicionamiento de la Diputación no obedecía a una mera cuestión de ortodoxia foral en materia dinástica; como el mismo Barón de Bigüezal reconocía, la elección iba más allá de la persona que iba a ocupar el trono: "Todos sabíamos los partidos existentes en el Real Palacio y en la Nación. Nadie ignoraba que con la tumba de

Fernando VII se abría también una era azarosa y tremenda en la que iban a medir sus fuerzas dos grandes partidos y todos conocíamos de antemano las tendencias y opiniones de cada uno" (209). No era pues "celo foral" lo que explica la adhesión de la Diputación del Reino a Isabel II; la clase política navarra venía apostando hace tiempo por las reformas liberales. No obstante, ante la experiencia del Trienio y siguiendo una política iniciada en Bayona y Cádiz, van a tratar de hacer valer su particularismo y conservar todos los "fueros, exenciones y privilegios" compatibles con el nuevo orden liberal y su participación en la formación de la voluntad nacional.

En su intento, iban a chocar con un gobierno que no sólo no iba a enmendar la tendencia abolicionista de los últimos ministros de Fernando VII, sino que por las circunstancias creadas por la guerra por un lado y por la propia lógica de las reformas liberales por otro, forzaría la marginación, ya que no la abolición formal de las instituciones forales. Sin una ley expresa que los derogase, los fueros iban a ser sistemáticamente conculcados e ignorados. En 1837 Navarra, de hecho y de derecho era ya una provincia más del estado envuelta en la unidad constitucional. Seguiremos cronológicamente los hitos más significativos del proceso.

b.-PRIMEROS CONTRAFUEROS

Nada más iniciado el levantamiento, el 14-X-1833, el virrey Antonio de Sola declaraba el estado de guerra en Navarra. Mandaba cesar todos los Tribunales en el conocimiento de las causas de infidencia y ordenaba que de ellas se encargase la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente (210). Al mismo tiempo creaba una Junta de Guerra presidida por el mismo virrey "con el fin de atender a las operaciones y medidas necesarias para la total pacificación de este Reino" (211). Estos contrafueros los justificaría unos días más tarde el mismo virrey diciendo que "En el estado de guerra en que se halla Navarra no hay Fueros" (212), poniendo una vez más de manifiesto quién era el soberano; según las tesis schmittianas: "aquel que decide sobre el estado de excepción" (213).

Por R.D. 23-X-1833 se crean los SUBDELEGADOS DE FOMENTO o jefes de Administración provincial (214) y el R.D. 30-XI-1833 divide el territorio español en 49 provincias; 4 de ellas eran las vascas, advirtiendo en el art. 4º que "esta división de provincias no se entenderá limitada al orden administrativo sino que se arreglarán a ella las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda". La única concesión que se hacía era la de que si "todas las

provincias tomarían el nombre de sus capitales respectivas, las de Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya conservarían su nombre; "Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián serían sus capitales" (215).

Estos dos Reales Decretos del Ministerio Zea Bermúdez estaban inspiradas por el "afrancesado" Javier de Burgos que intentaba aplicar los mismos principios uniformizadores y centralistas de la experiencia francesa a la reconstrucción administrativa de España. Legalmente Navarra, ya había dejado de ser Reino para convertirse en Provincia.

El 27-I-1834, el virrey Valdés destituye a dos diputados del Reino: Lecea, representante de la ciudad de Pamplona y Olloqui, de la de Lumbier, por tener familiares en la facción; "no tenía atribuciones para hacerlo y sin embargo la corporación no protestó el contrafuero" (216).

Los contrafueros siguen, y el 3-V-1834 se nombra con carácter temporal un COMISARIO REGIO en cada una de las cuatro provincias vascas como agente del gobierno con gran autoridad para obrar conforme a sus designios. El de Navarra anunciaba a su llegada: "...irremisiblemente experimentais todo el peso de mi autoridad con la imposición de las penas designadas a los delincuentes por infidelidad y traición..." (217).

En el plan de reforma de la administración territorial, la figura del GOBERNADOR CIVIL como delegado del Gobierno al frente de cada provincia era pieza clave en la nueva organización centralizada del Estado. Sus atribuciones eran las mismas que las del Jefe político de la Constitución de Cádiz; cambiaba sólo el nombre. Navarra también entraba dentro del plan, y aunque se respetasen formalismos y antiguas denominaciones, por R.O. 18-VI-1834 se dispuso que el Virrey ejerciera también las atribuciones de los gobernadores civiles. En la sesión del 26-VI-1836 la Diputación ofició al Virrey manifestando conformarse con la R.O. citada (218).

c.-NAVARRA Y EL ESTATUTO REAL

El 10-IV1834 en un intento de apertura moderada se promulga el Estatuto Real. Inspirado en la Carta francesa de 1814 era expresión de "la conjugación de las fuerzas sociales que dominaban o aspiraban a reconvertir en provecho propio la situación económico-social" (219). La Diputación, se planteó la cuestión de "si Navarra que por su Constitución vigente tenía sus Cortes propias, debía ser convocada a las generales de España, cuando nunca lo había sido ni concurrido a ellas". Se protestó la convocatoria como "incompatible con la existencia de nuestras leyes fundamentales" pero se accedió a mandar los tres procuradores

que le correspondían (220).

La R.O. 20-V-1834, regulaba el procedimiento electoral a emplear; indirecto y censitario. "En atención al estado en que se encuentran las Provincias Vascongadas y la Navarra" el artículo 47 disponía un procedimiento especial para ellas. En Navarra los electores serían los miembros de la Diputación del Reino, dos vocales del Ayuntamiento de Pamplona y su síndico procurador y un número igual de "las personas más pudientes de la provincia" (221). El 30-VI-1834 resultaron elegidos procuradores el Marqués de Montesa, Joaquín de Ezpeleta y José Francisco Muguiro e Iribarren (222). Tras la renuncia de éste último se eligió a Román Marichalar. Para el estamento de próceres la Reina nombró a los Condes de Guendulain y Ezpeleta y al Marqués de Vessolla entre otros navarros (223).

Se participaba por cuarta vez en un órgano legislativo "extraño", lo que equivalía a extender el acta de defunción del propio, y por consiguiente del órgano central foral. La Diputación que debía su existencia legal a las Cortes del Reino consideró terminada su misión y no sin antes dejar constancia de su lealtad a la Reina pensó en solicitar su dimisión; pero al fin no lo hizo siguiendo la recomendación de los procuradores en Cortes por Navarra que entendían que si bien es cierto que con la asistencia de procuradores de Navarra a las Cortes de Castilla "se ha barrenado el fuero", no "solamente no se ha dicho por S.M.

que quedan abolidos los fueros de Navarra, cosa indispensable para que se tuviesen por acabados, sino que al contrario, S.M. no ha hecho en el Estatuto Real otra cosa más que renovar nuestras antiguas leyes, según las cuales los navarros deben conservar sus Cortes y sus fueros" (224).

Los procuradores justificaban la conducta del Gobierno por la urgente necesidad de reunir Cortes generales por lo apurado de las circunstancias, "mas de aquí no se puede inferir otra cosa sino que por una vez y por circunstancia extraordinaria ha barrenado los fueros, y opinamos que para lo sucesivo podrán tomarse otras medidas que sean más conformes con los mismos fueros" (225).

No vamos a pensar que se trata de una ingenuidad de los procuradores navarros que ignorasen el alcance que pretendía darse al Estatuto; pensamos que se trataba más bien de un intento de conservar "entrambas constituciones" como apuntaba el Barón de Bigüezal (226), o como comentaría Fermín Caballero "comer a dos carrillos y jugar con dos barajas" (227). Después de todo, conseguida la integración en el Estado Liberal español, garantizada la participación en el órgano de representación nacional, mantener de alguna forma una asamblea representativa de alcance y para control provincial podía tener su interés político.

d.-LA DIPUTACION Y LA DEUDA PUBLICA

A partir de entonces la Diputación del Reino al igual que en 1820 lo hiciera la provincial, vacía de atribuciones, va a centrar su afán y dedicación en salvar los intereses de los tenedores de deuda pública navarra; y de nuevo se nos ocurre pensar en qué manera este asunto sería un factor de gran peso a tener en cuenta a la hora de explicar la política contemporizadora de la corporación navarra.

Previendo "el término de su existencia política" y "como último tributo a los pueblos que ha tenido bajo sus maternales auspicios", el 21-VII-1834 ya había dirigido una carta a cada uno de los próceres del reino en la que a la vez que les felicita por su nombramiento, les recomienda velen por "los derechos e intereses principalmente en la parte económica y de hacienda, que serán de la mayor trascendencia si Navarra, de Reino distinto y separado del de Castilla, que lo ha sido hasta aquí, pasa a ser provincia dependiente de la Corona de ese Reino, porque entonces deberán las Cortes adoptar los medios necesarios para satisfacer religiosa y cumplidamente la deuda de Navarra que cual sea su origen y circunstancias resultarán de una memoria que estoy formando al efecto (228).

La Memoria anunciada: "Memoria que la Diputación del Reino de Navarra ha formado para instrucción de los se

ñores procuradores en las Cortes Generales por dicho Reino sobre el estado de su hacienda pública y el modo de asegurar el pago de su deuda", se aprobó y mandó imprimir el 6-IX-1834 (229). En ella se acepta sin resistencia la transformación legal de Navarra, aunque como en otras ocasiones se trata de pasar factura de la "generosidad" navarra que ha sabido renunciar a tanto como tenía. Ante semejante renuncia ¡qué menos que un trato de favor para los capitalistas navarros!.

El escrito está totalmente inspirado en el que en 1820 enviara al Congreso provincial (230). Al igual que aquel, comienza con un canto a la independencia y excelencias que hasta entonces caracterizaban al Reino: "reino distinto y separado aun después de su incorporación a Castilla con un mismo rey físico pero distintos reyes legales...formaba por sí una Monarquía moderada... en la que unas Cortes investidas y apreciables valores...formaban con los reyes un CUERPO MISTICO..."No obstante reconocen que "El Estatuto Real va a regenerar la Monarquía restableciendo en su fuerza y vigor las leyes fundamentales de la misma, con mejoras acomodadas al espíritu del siglo, adelantamiento de las luces y al desarrollo de los principios políticos". Ante tanta bondad, es difícil negarle la adhesión; sin embargo hay que prever sus consecuencias pues "ha ocasionado de hecho en la constitución y leyes fundamentales del reino de Navarra una alteración destructora de su existencia políti-

ca legal" y "la alteración hace temer su tránsito a provincia de la corona de Castilla en todas sus relaciones legales y políticas, dejando de ser un reino distinto y separado"...Es por todo ello por lo que "La Diputación debe prevenir, para el caso de que ese cambio en lo legal sea anuncio de un cambio en la parte política, el remedio que por necesidad y justicia debiera aplicarse a sus acreedores naturales de este reino, y varios otros de fuera de él, para que no queden sin las correspondientes garantías". Recuerda la buena disposición que las Cortes de 1822 mostraron sobre el asunto y como entonces pretende un trato de favor para su deuda y "que no se pretenda confundir esos créditos con los demás de la Nación, formando una masa general con estos; porque se irrogarían a Navarra y sus acreedores perjuicios a mucho bulto y se atacaría la esencia legal de un contrato solemne, celebrado en tiempo legítimo y con las seguridades que presta un gobierno legalmente constituido". Para la Diputación la solución consiste en "qué se consigne a Navarra en el fondo de contribuciones o en el de aduanas aquel mismo haber que forma en el día sus fondos y rentas para el pago de réditos y la progresiva amortización de los capitales".

El problema de la deuda pública navarra se arrastrará hasta el final de la guerra y será una de las bazas que los liberales navarros negociarán en el arreglo foral de 1841; la solución que en esta Memoria adelanta la Diputa

ción será recogida en el artículo 16 de la Ley de Modificación de Fueros.

Conviene insistir y recordar que es precisamente el órgano titular de la legitimidad foral: la Diputación del Reino, delegada de las Cortes de Navarra la que no sólo no asiste impasible al desmantelamiento institucional, sino que considera que "en buena hora que el bien procomunal de la España haya hecho conveniente y necesario dar a su gobierno la reforma sancionada en el Estatuto Real" (231). Lo único que pide es garantías para los acreedores del Reino.

Si hasta 1835 los contrafueros y reformas institucionales habían tenido implicaciones exclusivamente políticas, a partir de ese momento iban a poner en peligro exenciones fiscales que podían tener repercusiones mucho más antipopulares. En el mes de febrero, se constituyó en el Estamento de Procuradores una Comisión encargada del estudio de un proyecto de ley para extender a Navarra el ESTANCO DE LA SAL, TABACO y PAPEL SELLADO, hasta entonces libres en el reino (232). El proyecto actúa de revulsivo en la Diputación que el 20-II-1835 comunica a los procuradores navarros la "grave pensación" que semejante proposición le ha causado, rogandoles intenten paralizar cualquier acción en este sentido pues de prosperar el proyecto "los rebeldes sabrán aprovecharse de ella para hacer mayor su partido, presentando a los pueblos la imagen ominosa de la destrucción de sus fueros" (233).

Es la primera vez que la conservación de los fue-
ros se pretende vincular con el peligro carlista; y no es
casual que la amenaza afecte a lo que hemos dado en llamar
"fueros, exenciones y privilegios" y no al orden institu-
cional foral, maltrecho ya para entonces. El hecho merece
un comentario. Estamos en 1835 y ha transcurrido más de un
año de guerra; del escrito de la Diputación parece deducir-
se una vez más que la causa de la guerra no fuesen los fue-
ros, pero que su desaparición pudiera aumentar las filas
facciosas; en segundo lugar, que los fueros por lo que pu-
dieran vibrar los carlistas no tienen nada que ver con el
orden institucional, sino con las exenciones, en este caso
fiscales y por último, desde el momento que estas exencio-
nes interesan a todos, los liberales navarros van a utili-
zar la amenaza carlista para conservar del fuero^b que les in-
terese. Si ahora solo alertan de que la medida puede favo-
recer la facción, más tarde insistirán en la motivación
foral de la guerra, de forma que puedan plantear la necesi-
dad de conservar parte de los fueros como medio de concluir
la.

Por R.O. 28-I-1836, el Ministerio Mendizábal con-
voca nuevas elecciones para el estamento de procuradores;
se celebran el 26 de febrero al igual que en 1834 según la
normativa especial destinada a las provincias Vascongadas y
Navarra por seguir en estado de guerra. De nuevo sin protes-
tar se accedía a participar en la formación de la voluntad

nacional, y además, se optaba por los candidatos más radicales y centralistas; salieron elegidos tres liberales exaltados: el general Espoz y Mina, su adláter, el también general navarro Victoriano Esain y el magistrado corellano regente de la Audiencia de Madrid, José Alonso (234).

Los contrafueron continuan, y el R.D. 18-III-1836 suprimió definitivamente la Cámara de Comptos Reales, el tribunal más antiguo de Navarra, aunque en realidad durante el reinado de Fernando VII la R.O. 3-III-1833 había dispuesto a su progresiva supresión y al ordenar que no se proveyesen las vacantes que se fuesen ocasionando "hasta que se extinguiese por sí mismo" (235).

e.-FIN DE LA AUTONOMIA JUDICIAL

Si las atribuciones legislativas ya se daban por perdidas y la autonomía judicial había recibido un duro golpe con la reinstalación de las Comisiones Militares y el Comisario Regio, la R.O. 22-IV-1836 iba a suponer la uniformidad judicial de Navarra con el resto del Estado al ordenar se hiciese extensivo a esta provincia el "Reglamento provisional para la administración de Justicia" de 1835. Con él "Desaparecieron los Consejos Real y de Corte y la jurisdicción ordinaria de los alcaldes de los pueblos. Sustituyó a los primeros una Audiencia territorial igual a las otras,

desapareció el orden de los juicios establecido por los fueros, se trasladaron a diferentes autoridades las facultades gubernativas que ejercía el expresado Consejo Real y se dividió el territorio en cinco juzgados de primera instancia, atendiendo a las cinco merindades en que se hallaba dividida la provincia" (236).

La justicia liberal se imponía sobre la del Antiguo Régimen y el último Regente del Consejo Real de Navarra Modesto de Cortázar ya lo había anunciado el 2-I-1836. Fué su discurso de apertura del Consejo una dura crítica a la arbitrariedad, abusos, oscuridad, diversidad de leyes, muchas veces contradictorias, que caracterizaba la administración de justicia por los tribunales del antiguo régimen; y un canto, por el contrario a la imparcialidad de los jurados, la seguridad de los códigos, la publicidad de los procedimientos, y la celeridad en la sustanciación de los pleitos y la inamovilidad de los jueces, que el nuevo Reglamento de Justicia ofrecía. Ante tanta excelencia preguntaba: ¿Seremos nosotros los que a pretesto de conservar ileso un depósito cuya legalidad no le exime de los defectos propios de las épocas a que debió su origen, resistiremos las innovaciones saludables que a propuesta o por condescendencia de los representantes de la Nación se digne S.M. o se haya dignado ya declarar como útiles, sino indispensables para la mejor y más pronta administración de justicia?. No, en manera alguna" (237).

Se diría que el propio Regente proponía la autodisolución del Tribunal que presidía; de hecho así fué y la nueva Justicia debió de encontrar en los ministros del Consejo sus más decididos defensores (238), y que prefirieron convertirse en magistrados de la Audiencia. Junto a los militares, el liberalismo exaltado en Navarra iba a contar con un no escaso número de magistrados (239).

Pero si el Consejo Real estaba por el autasuicidio, la Diputación del Reino no lo veía con buenos ojos y consideró la medida como "un golpe mortal contra nuestras leyes y constitución de Navarra, siendo un anuncio demasiado claro de que el Reino ha de perder radicalmente su existencia legal y política nivelándolo en todo con Castilla". El conformismo que manifestara en su Memoria de ocho meses antes ha desaparecido. No duda la necesidad de reformas y en particular en el órgano legislativo nacional y sin embargo aunque no es partidaria de mantener intacto el régimen foral, le preocupa el procedimiento "gubernamental" empleado, "que abre un camino para sucesivas reformas". Considera que "en un asunto como es la supresión de los fueros y leyes de nuestro Reino" requiere "el concurso, discusión y acuerdo de las Cortes generales" porque "las consecuencias de esta medida debe preverse que han de ser progresivamente las de un total extinción de las exenciones en los diversos ramos que constituyen a un país aforado hasta el día y deliberándose la suerte futura en las Cortes podrá y debía

esperarse que se salvaran algunas o muchas de las apreciables exenciones consignadas en nuestra constitución y leyes..." (240).

La Diputación, persuadida de que el final del régimen es inminente, trata de salvar lo que se pueda y pretende se aplaze la cuestión hasta que finalice la guerra y entonces estudiar la modificación de los fueros de forma conjunta, en vez de ordenar reformas parciales que progresivamente acaban sin pena ni gloria con el régimen foral. En definitiva, pretende negociar el sistema foral en su conjunto, donde hay muchas cosas para ceder "generosamente" y conservar, por el contrario todo aquello que conviene a sus intereses.

La implantación del Reglamento de Justicia dió lugar a una serie de altercados entre el Consejo y el Virrey que no consideraba político en esta ocasión oponerse a la Diputación (241). El asunto se zanjó el 28-V-1836 con una R.O. en la que quedaba bien claro el principio de que "es un deber del Gobierno sostener su incontestable derecho y la legalidad estricta de lo mandado" y "la legislación existente da un derecho incontestable a la Corona para hacer cumplir en aquella Provincia las disposiciones adoptadas en beneficio común de toda la Nación no obstante los fueros" (242). Ya no había dudas: el bien de la Nación podía justificar cualquier contrafuero.

f.-ELECCIONES GENERALES 1836.

Ante esta perspectiva tan poco halagüeña, cuando el 22-V-1836 se convocan nuevas elecciones para revisar el Estatuto Real (243), la Diputación, cambia su opinión de esperar al final de la guerra para la modificación del régimen foral y solicita a la Reina que las nuevas Cortes, al mismo tiempo que revisan el Estatuto lo hagan también con "los códigos y la constitución de este Reino" de esa forma "los principios de libertad sancionados en ellos y sostenidos con tesón contra los esfuerzos del absolutismo serán prohiados por V.M. y los Estamentos revisores, y harán parte del Código político de la Monarquía", pues Navarra "sin dejar por eso de ser miembro de la familia española a la que ha dado días de honor y gloria...nunca podrá persuadirse que se presupongan derogados y sin vida sus fueros y sus dogmas políticos de libertad y justa independencia sin ADOPCION DE LO BUENO QUE CONTIENEN CONCILIABLE CON LA REGENERACION Y LAS REFORMAS DE LA MONARQUIA (244).

Lo bueno del fuero conciliable con la Monarquía constitucional: este era el objetivo que la oligarquía navarra a través de su Diputación se marcaba. Singular tarea la de hacer conciliable la unidad jurídica y la igualdad ante la ley que define al estado liberal de derecho con las desigualdades jurídicas que el mantenimiento "de lo bueno de los fueros" implicaba. y expresivo de este doble juego

que se intentaba, aunque fuese contradictorio y antiforal era confiar el arreglo de los fueros a las Cortes españolas.

En buena lógica jurídica, la cosa no parecía fácil. El desarrollo de la guerra, los intereses económicos de Inglaterra y Francia y la agudización del enfrentamiento entre moderados y liberales facilitarían sin embargo la tarea y la clase dominante navarra conseguiría lo que en un principio a ella misma pareciera imposible.

Las Cortes salidas de las elecciones de julio de 1836 no llegaron a reunirse debido a la revolución de La Granja que obligó a la Regente a proclamar el 13 de agosto la Constitución de 1812, (245).

Para ir poniendo en ejecución el código gaditano, el 6-IX-1836, el nuevo Virrey-jefe político, Conde de Sarsfield ordenaba que al ser él la única autoridad constitucional existente en la provincia, la Diputación del Reino y el Ayuntamiento de Pamplona cesasen en sus funciones y hasta que se celebrasen elecciones con arreglo a la Constitución nombró sendas COMISIONES SUSTITUYENTES (246).

El mismo día 6 celebró su última sesión la Diputación del Reino de Navarra sin consignar en acta ninguna protesta (247). Desaparecía la última institución foral que aunque con una vida lánguida y sin atribuciones había resistido dos años de régimen constitucional. Ni Cortes, Ni Tribunales, ni Diputación; sin una derogación expresa de los

fueros, no quedaba en Navarra ni rastro de su organización particular. La vigencia de la Constitución de 1812 implicaba de nuevo la extensión a esta provincia de la homologación jurídica, fiscal y militar.

B.-MODERADOS Y EXALTADOS.

Al historiar la etapa de la primera guerra carlista se ha caído generalmente en la simplificación de no ver en la contienda política del momento más que carlistas y liberales. De acuerdo que la lucha fundamental se da entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal, representado por las dos fuerzas políticas anteriores, pero la realidad fué mucho más compleja y lo que desde hoy vemos con perspectiva histórica como dos opciones claramente delimitadas, debió de ser más matizado para los contemporáneos, y en más de una ocasión el ala moderada del liberalismo estuvo más cerca del carlismo que de los liberales exaltados. Si el objetivo de los carlistas no era otro que mantener intacto el orden y oponerse a toda clase de innovaciones, en lo único que estaban de acuerdo los liberales era en la necesidad de reformas. A partir de ahí comenzaban las discrepancias; sobre qué reformas y cómo realizarlas.

Es verdad que a la muerte de Fernando VII y ante la amenaza carlista todos los liberales cierran filas en

torno a Isabel II "la guerra civil era el imperativo máximo del momento; ella aglutinó junto al trono al liberalismo, tímido al principio, más neto a partir de Mendizábal no solo a la base popular de las ciudades y a las clases medias "ilustradas", sino también a aristócratas, latifundistas y naciente burguesía" (248).

Sin embargo la apertura que el Estatuto Real orquestaba no satisfizo las aspiraciones de los liberales exaltados, que pronto pasaron a la oposición, éstos cifraban en el restablecimiento de la Constitución de 1812 su aspiración política. En el verano de 1835, el gobierno Toreno al no acceder a la concesión de la libertad de prensa se enemistó con la Milicia Urbana y con las Juntas provinciales, elementos ambos de influencia decisiva en el campo liberal. A partir del 6 de julio, muchas ciudades se amotinaron siguiendo el ejemplo de Zaragoza. Las Juntas provinciales enviaron diputados a Andújar donde se constituyó una especie de Junta Central. En Madrid la Milicia Urbana se amotinó el 16 de agosto, ocupa los principales puntos de la villa y envía una petición a la Regente que coincide con las demandas de las Juntas: reunión de Cortes, libertad de prensa, nueva ley electoral, extinción del clero regular, reorganización de la Milicia Nacional, leva de 200.000 hombres para la guerra y formación de un ministerio cuya orientación fuese una garantía para la puesta en práctica de estas medidas" (249). "Una verdadera revolución democrática estaba en

marcha", comenta Tuñón de Lara.

Los liberales moderados y el propio gobierno empiezan a temer que la revolución se les escape de las manos y esta preocupación es compartida por el gobierno francés, que interesado en la consolidación del régimen liberal en Europa, pretende que las instituciones españolas no vayan más allá de las que Luis Felipe ha sabido dar a Francia y de ninguna manera las que recoge la impracticable Constitución de 1812. En una carta particular que transcribe Piralla, fechada en Bayona en julio de 1835, se explica porque el gobierno francés no es partidario de la intervención directa en la guerra del País Vasco, incluso desistió del proyecto pensado de embarcar para España en buques franceses a 3.000 polacos de infantería y 500 de caballería pues como dice el francés de la carta: "aquí sucede lo que en España, que se teme a los defensores de la libertad mucho más que al mismo carlismo, y como a los polacos, sobre todo al soldado, era preciso decirles que iban a defender en España a la Constitución del año 12, pues de otro modo no se les mueve, se temía no fuesen a complicar más la cuestión (250).

De este miedo a los liberales exaltados por parte del Gobierno da también testimonio el Memorandum 8-IX-1835 que el embajador de España en París envió al gobierno francés tratando de forzar la intervención de las tropas francesas en las Provincias Vascongadas y ello "no porque juzgase

que sus reales armas fuesen insuficientes para vencer a los carlistas, sino porque previó que lo desguarnizadas que quedaban las provincias fieles a su soberanía pudiera facilitar a los revolucionarios demócratas el poner en agitación el reino:S.M. sabía también que hermanados estos y afiliados en sociedades secretas con los que existen en otros países de Europa, podrían prometer no sólo la dignidad de su trono, sino también la de los soberanos sus aliados y aún la de los monarcas que eran signatarios del tratado de la Cuádruple Alianza...La cuestión española no es ya cuestión de sucesión, sino cuestión monárquica que tiene el apoyo de la fuerza numérica de una nación tan fiel a sus reyes como la española, y el voto de los hombres de bien que tienen que perder, y que por lo tanto, se hallan fraternizados en sentimientos con todos los que se hallan en igual situación en los demás países de Europa... La vecindad de Francia, hace que los intereses bien entendidos de ambos pueblos y la conservación de los dos tronos actuales se hallen muy comprometidos, siempre que las teas de la discordia o la cuchilla de la anarquía se alzase en cualquiera de los dos países...Tan poderosas razones deben convencer al gobierno de S.M. el Rey de los franceses de la conveniencia de que una fuerza militar francesa ocupase las provincias Vascongadas, a fin de que ahuyentada por este medio la facción carlista llegase a desaparecer y por lo tanto el ejército español se hallase en estado de combatir la anarquía en las demás provincias de España" (251).

La causa liberal era también una causa europea, pero circunscrita a ese "SALUDABLE JUSTO MEDIO" que en Francia había dejado de ser "un ente quimérico y teórico" para convertirse en algo real gracias a "la justicia y previsión de su Rey, a los intereses públicos, a la industria, a la agricultura, a la administración departamental, a la opulencia de su hacienda, a la disciplina de su ejército y a la perfecta organización de su guardia nacional". Por eso, la nación francesa, en la que "los que tienen algo que perder" habían conseguido su régimen de gobierno adecuado debían "fraternizar en sentimientos" con aquellos que en España también tienen "algo que perder" y "tender un brazo de salvación al trono de S.M.C. y al poder de su augusta madre; y salvando el trono español será la Francia la que preservará a todas las demás de Europa de los embates de la democracia anárquica" (252).

El miedo a los liberales exaltados repercutió también en la marcha de la guerra en Navarra y facilitó la consolidación del ejército carlista; ello sería recordado como acusación en una exposición de la Diputación liberal de 1838: "...había, sin embargo otros elementos contrarios capaces de haber neutralizado en un principio, y aun de haber sofocado la insurrección, si se hubiera echado mano oportunamente de los medios correspondientes. La parte ilustrada de los navarros estaba en el buen sentido; los valles del Roncal, Salazar, Aezcoa y Baztán lo estaban igualmente, y

todos los aezcoños tomaron las armas en defensa de la causa de la Reina; pero este espíritu era contrariado por el Ministerio, que temía más al partido liberal por el mal que podía hacer, que al carlista por el que estaba haciendo... Se obró lenta y mezquinamente en el armamento de los naturales del país se prescindió del todo de los antiguos jefes y oficiales de la guerra de la Independencia porque estaban tachados de liberales..." (253).

La Diputación del Reino, por el contrario, representativa en aquel momento de los "que tenían que perder" también venía solicitando desde enero de 1835 la intervención francesa como medio de acabar con los carlistas y evitar mayores males aún con los que amenaza toda dilación";. Ello interesa no sólo a Navarra, sino al "bien general de las provincias todas de la Monarquía de la que Navarra es uno de sus miembros", y de esa forma los pueblos españoles "podrán disfrutar de lleno las benéficas reformas y las leyes sabias que con mano protectora les dispensa el Gobierno de S.M. y las Cortes de la Nación" a la vez que se conseguiría "la consolidación del Gobierno de la Reina N^a S^a y la felicidad nacional" (254).

Precisamente porque no quieren la consolidación de ese gobierno es por lo que los liberales exaltados se oponen a la intervención extranjera. Ros de Olano, entonces ultraliberal a las órdenes de Espoz y Mina lo justificaba porque dé haberse terminado la guerra rápidamente "nos verí

amos atados de pies y manos en poder del gobierno de la Reina, quees como decir en el del JUSTO MEDIO francés. Por el contrario la prolongación de la guerra ha desacreditado a todos los militares y políticos que no eran afectos a nuestro partido. Hoy está Mina a la cabeza de las tropas; Valdés es ministro de la Guerra; Martinez de la Rosa caerá y será reemplazado por un verdadero patriota. Entonces en nuestras manos medios abundantes para dominar la rebelión. No queremos una intervención francesa que no hará más que cambiar el yugo que nos sujeta. Una vez pacificado el norte de España, todas las fuerzas del reino se hallarán en buenas manos, hasta los urbanos, cuyo espíritu es excelente y que se movilizarán si es preciso. Y entonces, ¿quién mandará en España? ¿Cree usted que seguirá mandando la Reina Isabel? Nada nos impedirá ir a Madrid y establecer el gobierno que nos convenga" (255).

Ese era precisamente el miedo de los moderados: que la guerra radicalizase las posturas; por eso el Barón de Bigüezal escribe el 6-XI-1835 al General Luis Fernández de Córdova: que acaba de ser nombrado virrey de Navarra: creo que acabar la guerra es el primer paso, el más fuerte, el más importante" y confía que "algunas personas, la tendencia de la nación, La Europa, serán a mi ver los calmantes de la irritación que pudiera existir al triunfar, como resultado del esfuerzo, de las transacciones que han sido adoptadas para desvanecer la disolución que nos amenazaba" (256).

Impotente para dominar la situación producida por los levantamientos populares del verano de 1835, el 14 de septiembre Toreno cedió el poder a Mendizábal. Mientras la guerra amenazaba en el norte, la Corona, no tenía más remedio que ceder, por lo menos aparentemente por lo menos aparentemente ante aquellas fuerzas que eran la garantía de su subsistencia (257).

Las medidas democratizadoras y desamortizadoras de Mendizábal la oposición de todos aquellos sectores atemorizados al ver el giro radical que tomaban la evolución española, entre los que se encontraban antiguos exaltados, compañeros suyos como Alcalá Galiano e Istúriz, estimulados sin duda por la Corona (258). La reina Regente se negó a firmar una combinación de mandos propuesta por el presidente del Gobierno; Este hecho y la persistencia de una fuerte oposición en las Cortes, le decidieron a presentar la dimisión. Istúriz formó nuevo Gobierno el 15-V-1836 y como respuesta a un voto de censura aprobado por el Estamento de Procuradores disolvió las Cortes convocando elecciones generales para el mes de julio.

Pero las fuerzas políticas y sociales que habían llevado al poder a Mendizabal estaban alertas; las juntas provinciales empezaron a surgir por doquier y el movimiento popular contra el gobierno y a favor de la Constitución de 1812 hizo caótica la situación. En estas condiciones el 12 de agosto, sin poderse celebrar la segunda vuelta de las

elecciones, se produjo la llamada "sublevación de sargentos de La Granja" que obligó a la Reina a firmar la restauración de la Constitución de 1812.

El acontecimiento de La Granja no era un hecho aislado, "un pronunciamiento de la clase de tropa" como algunos historiadores lo han presentado, sino que respondía perfectamente a un movimiento popular que había ganado la mayoría de las capitales. Una vez más, la Corona y los moderados tenían que recurrir a los progresistas si querían salvar la situación militar. La Constitución de 1812 fué proclamada el 13 y Calatrava formó el 15 gobierno con Mendizábal como ministro de Hacienda y Joaquín María López en Gobernación (259). La revolución liberal seguía su curso.

Los sucesos de La Granja alarmaron más todavía el elemento conservador compuesto de la aristocracia y de las clases acomodadas que repugnaban el radicalismo que prevalecía en las esferas de gobierno (260). A su vez el ala moderada del Partido Carlista vió en ello un momento propicio para atraerse a estos liberales moderados por medio de una transacción; era la gran oportunidad de D. Carlos y "todas las personas de razón de ambos cuarteles creyeron que D. Carlos y su ministerio se apresurarían a recoger las ventajas de semejante situación: altas personas le ofrecieron su adhesión; influencias extranjeras desearon conocer sus ideas de gobierno, presentadas en Europa de diversos y estremados modos, prudentes consejeros le insinuaron la favorable oca-

sión que se presentaba de dirigirse con dignidad a los españoles a fin de manifestarles los trastornos que deberían seguirse del nuevo orden de cosas y los intereses que iban a ser amenazados...mostrarles su clemencia, su bondad y sus ideas templadas hallándose dispuesto a abrazar a todos, a olvidarlo todo y a regirlos a todos dulcemente y con las mejoras posibles" (261). Amnistía amplia y sin restricciones y convocatoria de Cortes era en definitiva lo que los moderados esperaban para echarse en brazos de D. Carlos. Pero, comenta Pirala, "en su ignorancia, en su obstinación y en medio de las sugerencias del partido estremado nada se pudo conseguir;...En el real de Don Carlos se habló de los sucesos de Madrid presentándolos como la obra de un ángel bajado del cielo para cortar cabezas masónicas. Dios y solo Dios, la generalísima y sólo la generalísima eran los que mandaban en el asunto. Tal era el vértigo que de aquellos hombres se apoderaba, que con necio e impotente despego dieron a entender a quien mucho convenía satisfacer que Don Carlos, rey por derecho divino, no debía explicaciones de su conducta y gobierno ni a propios ni a extraños, al mismo tiempo que por medio de un decreto pésimamente redactado se mandaba hacer rogativas públicas para desagravio del Santísimo Sacramento y exterminio de infieles, con funciones de gracias a la generalísima la Virgen de los Dolores. Este fué el gran acto político que D. Carlos creyó digno de las circunstancias en que se hallaba la nación en 1836" (262).

Esta misma opinión sobre los acontecimientos mantenía un moderado navarro, el Barón de Bigüezal: "El triunfo de la revolución produjo un verdadero cataclismo. A tal punto estaban los ánimos irritados, que si don Carlos en esos momentos hubiese tenido el talento, estoy casi por decir, el sentido común de presentarse clemente y generoso y hubiese propuesto a la España sensata el enlace de su hijo primogénito con la Reina doña Isabel II como medio de transacción, la España entera se hubiese agrupado alrededor de esta bandera pacificadora. Los revolucionarios se hubiesen sentido solos y perdidos. Este paso hubiese exigido ciertas garantías en la forma de gobierno...Pero don Carlos carecía de talento para semejante empresa y predominaron las pasiones y la exageración" (263).

En aquel momento en que los moderados estaban mucho más próximos al carlismo que al radicalismo revolucionario, perdió Don Carlos una oportunidad que no se repetiría. Al año siguiente, cuando a raíz de la expedición carlista a Madrid, los elementos más ilustrados intenten de nuevo una transacción, ya era tarde: promulgada la Constitución de 1837 que templaba los principios doceañistas, desgastado el gobierno progresista de Calatrava, y reorganizado el partido moderado, la situación había cambiado y los moderados tenían todas las posibilidades de hacerse de nuevo con el poder (264). No obstante, la idea de transacción con los carlistas como medio de "templar" el régimen liberal, por un

lado, y de reforzar sociológicamente su propio partido, por otro, reaparecerá entre los moderados que verán en ella la fórmula ideal para concluir la guerra. El régimen del Estatuto Real sería el punto de confluencia, que contaría además con el apoyo de Francia. El desarrollo de los acontecimientos haría imposible esta transacción política y la conservación de los fueros vascos será la última baza que jugarán los moderados españoles para atemperar el régimen liberal y sumar adhesiones a su programa.

Navarra no fue excepción en la alarma producida por los sucesos de agosto: "Todos los generales que había en el ejército se espantaron de la revolución de 1836 y algunos de ellos emigraron. La Navarra quedó sin más jefes de categoría que el brigadier Orus, de gobernador de Pamplona y el general Iribarren jefe de la columna de la Ribera (265). El mismo capitán general Pz. de Córdova dejó el mando y marchó a Francia (266); y hubo que recurrir al General Sarsfield, a pesar de su mal estado de salud para que se hiciese cargo del mando militar de Navarra" (267).

El miedo a la represión revolucionaria hizo que antes o después gran parte de la aristocracia navarra, también la vascongada emprendiera el camino del exilio: los Vessolla, Bigüezal, Gaztelu, Arizala, Vidarte se instalaron en Francia (268) produciéndose una "casi disolución del partido de la Reina", es decir del Moderado (269). A partir de entonces, los destinos de Navarra van a estar en manos de los

liberales progresistas (270) que desde la Diputación provincial y representación en Cortes harán peligrar la política transaccionista que intentara, aunque sin éxito, la oligarquía navarra a través de la Diputación del Reino. A pesar de todo, la idea de transacción foral no se abandonará y más en un momento en el que la conservación de instituciones propias se revalorizaba como valladar contra los "excesos revolucionarios"; Bigüezal, ya había sido en 1835 el enlace entre Muñagorri y el entonces secretario de estado, Conde de Toreno (271) y Vidarte formará parte en 1838 de la Junta Vascongada que presidida por González Arnao colaborará desde Bayona en la empresa PAZ Y FUEROS (272).

C.-LA DIPUTACION PROVINCIAL Y LOS FUEROS.

Por R.D. 20-VIII-1836, el Ministerio Calatrava convocaba elecciones generales según la normativa de la Constitución de 1812 para que "la nación reunida en Cortes manifieste expresamente su voluntad acerca de la Constitución que ha de regirla" (273). Las nuevas Cortes tendrían carácter de constituyentes. Debido al retraimiento de los moderados triunfaron sin oposición los Progresistas saliendo elegidos como diputados a Cortes por Navarra:

General Francisco Espoz y Mina

José Francisco Goyeneche, Conde de Saceda

Agustín Armendáriz

Juan Muguiro Iribarren

Pedro Clemente Ligués y Navascúes (suplente)

General Miguel Iribarren (Suplente)

En suma: dos militares procedentes de la guerrilla de la Independencia: Espoz e Iribarren, dos nobles baztanenses de familias de hacendistas y banqueros. Goyeneche y Muguiro, un aristócrata ribero antiguo Diputado del Reino que hizo carrera política en las filas del progresismo: Ligués (274) y un letrado: Agustín Amendáriz (275). Para la Diputación provincial fueron elegidos:

Fidel Ozcariz

Juan Ramón Bornás

Manuel Jimenez Diago

Manuel Palacio

Gaspar Elordi

José María Repáraz

Pedro Azcárate

Vicente Lapoya (Suplente)

Nazario Carriquiri (Suplente)

José Ilincheta (Suplente) (276).

Esta nueva Diputación provincial, totalmente adicta al Gobierno, renuncia a su pasado foral y "no quiere más privilegio que cobrar la contribución de la provincia"; salvo esto, exige por el contrario "la aplicación íntegra de la Constitución". Para ello en una carta que dirige al dipu

tado en Cortes Agustín Armendáriz le solicita que se cumpla la exigencia de fijar las ADUANAS en la frontera con Francia (277).

Armendáriz, siguiendo las recomendaciones de la Diputación solicita en el Congreso que la supresión de Aduanas que se proyecta para las provincias Vascongadas, se extienda también a Navarra; de esa forma "darían las Cortes una prueba del deseo que tienen de que aquellas provincias formen con el resto de la Navarra un sólo cuerpo, dejando aparte cualquier diferencia que haya podido haber por causa de sus fueros" (278).

A lo largo de la misma intervención, Armendáriz preocupado por la suerte de la Deuda pública provincial pretende se restablezcan los decretos del 16 de marzo y 22 de abril de 1822 que garantizaban el cobro de réditos y su amortización, aunque para ello reconozca la necesidad de "que aquellas provincias contribuyan al Estado con proporción a su riqueza".

Esta última observación se hacía precisa porque como apuntara el Ministro de la Gobernación en las mismas Cortes el 10-VIII-1837, mientras que "Navarra, a pesar de que tenía su Constitución peculiar y según ella sólo regían las leyes que se hacían en sus Cortes, ha abrazado con franqueza la Constitución de la Monarquía y está en toda su observancia, habiendo Diputación provincial y jefe político

nombrado por S.M. que la preside..."las Diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa se resisten a jurar la Constitución y a la homologación con el resto de la Monarquía (279)

Por eso el Gobierno, que también está interesado en el establecimiento de las Aduanas en la frontera para no privar a las Provincias y Navarra "de la COMUNION COMERCIAL con el resto de España", condiciona el establecimiento de decretos sobre la Deuda para cuando "terminada la guerra civil que nos devora, contribuyan las provincias a los gastos comunes con arreglo a las leyes", pues "sería una inconsecuencia decir que continúa el sistema administrativo interior de aquellas provincias (que la comisión respeta, porque en él tenemos mucho que aprender y espera que se podrá generalizar gran parte de él a las demás provincias) y al mismo tiempo reconocer la Nación su deuda particular (280).

Todo no podía ser: garantía de la Deuda o autonomía fiscal; había que elegir, y para los acreedores no había duda... Sin embargo, este sería otro "milagro" que el particular desenlace de la guerra iba a realizar, y el "arreglo foral" de 1841 haría posible lo que en 1837 no lo parecía: garantía de la Deuda y autonomía fiscal.

Por lo demás, la legislación del Gobierno central tiene plena vigencia en Navarra, y cuando la desamortización eclesiástica se ponga en marcha una "perfecta dependencia y armonía" presidirá las relaciones entre los organismos desamortizadores y la Diputación (281). La nueva clase política Na

varra ligada al mundo del comercio, la banca o la contrata será la principal beneficiaria de esta desamortización (Aguirre, Bezunartea, Carriquiri, Elorz, Pagoaga, García Herreros Iñarra, Jaen, Mutiloa, Ribed...); de la que también se aprovechará la antigua nobleza terrateniente (Ligués, Escudero Ezpeleta, Marqués de Fontellas, Conde de Gonzalez de Castejón, Jimenez de Cascante, Martinez de Arizala, Magallón...) (282). Y es todo un símbolo que el nuevo edificio de la Diputación provincial, antiguo convento de Carmelitas Descalzas también proceda de la desamortización eclesiástica.

Sin embargo, a pesar de la "franqueza" con que Navarra "abrazó" la Constitución no renuncia a utilizar como arma política su hecho histórico diferencial. En 1836 es un año difícil para el ejército liberal; la operación financiera de Mendizábal no dió los frutos esperados y exhaustó el erario público, el costo de la guerra en Navarra recae fundamentalmente sobre sus habitantes, quienes además tienen que soportar el estado de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales. La Diputación, con todo el respaldo moral que le da su adhesión al nuevo régimen protesta ante las Cortes porque "la constitución no se respeta para nada y sólo impera el despotismo militar", a la vez de que se queja de las exacciones exorbitantes a las que se ve sometida la población y sólo pide "una contribución semejante a la de otras provincias", porque -y ahora viene la amenaza- "Navarra acostumbrada desde que no alcanza la memoria de

los tiempos a vivir libre y bajo una monarquía representativa, anhela y anhelará siempre por la libertad legal y constitucional; y si la parte rica e ilustrada se somete con placer a seguir la suerte de la monarquía española es bajo esas bases indispensables y no sin ellas: los navarros conocen el derecho que en otro caso les asistía para constituirse: los lazos con que supo atraerlos bajo su cetro la perspicacia política de Fernando el Católico con el PACTO de conservarles sus antiguos libertades y su independencia, se rompería de lo contrario, y Navarra podría ejercer un derecho funesto a su existencia política, pero preferible al férreo cetro de la tiranía..." (283) En resumen: unidad constitucional sí, pero pactada; ¿se trataba de un pacto implícito?. La idea es buena y no se abandonará: derecho histórico a constituirse, unión pactada y por consiguiente, posibilidad de separarse podían dar mucho juego político...

Evidentemente en aquella ocasión no se trataba más que de una amenaza sin ningún propósito de convertirla en realidad, pues cuando al año siguiente el Gobierno Bardají comprometido en la empresa de de Muñagorri "amenaza" a su vez en conservar los fueros en su integridad como medio para concluir la guerra, la indignación de la Diputación que califica la medida de "negro proyecto", no tiene límites. La exposición que el 5-III-1838 escribe a las Cortes, merece un análisis detenido (284).

El comienzo es patético: "La Diputación provincial de Navarra, constreñida por las repetidas indicaciones de los papeles públicos, nacionales y extranjeros, relativos a una transacción para el restablecimiento de la paz, bajo la base, entre otras, de la conservación de los fueros y privilegios de dicha provincia y de las demás exentas, no puede prescindir de elevar a la consideración del congreso nacional lo que le ocurre acerca de un proyecto de tanta magnitud y que debe producir las más graves consecuencias..." por ello quiere exponer "las razones que le asisten para evitarlo..." porque "la parte más sana e ilustrada de la Provincia, y que presenta el mayor cúmulo de intereses, está igualmente comprometida, observando con inquietud el giro que toma la transacción indicada, sin acertar a conocer los motivos de un proyecto tan ajeno de sus esperanzas y sólo preferible al sistema de despotismo... Solamente: "El Clero es el único que podía tener miras opuestas a estos innegables principios..."

Por eso al analizar las causas de la guerra, carga las tintas en el "espíritu supersticiosamente religioso" que en un pueblo "ciegamente crédulo" han esparcido unos sacerdotes "casi tan ignorantes como el mismo pueblo para mantener en aquél su ceguera y conservar ellos su preponderancia".

Pero sobre todo interesa dejar bien claro que la guerra no es exclusivamente navarra, ni se ventila ninguna

causa particular: "no son los navarros y las provincias como se supone con error vulgar el verdadero origen de la guerra: sus elementos son europeos, y estos elementos no han hecho más que elegir el teatro conveniente de sus operaciones: no es navarro el príncipe que está a la cabeza de la rebelión, ni tampoco la corte que le rodea: Castilla los ha vomitado de sus entrañas y ha engrosado sus filas con soldados castellanos..."

En consecuencia la solución debe consistir en "dar pruebas materiales del bien que los navarros atrevidos pueden esperar de un Gobierno justo moderado cotejado con lo que pueden esperar del despotismo y la tiranía"; y no, como al parecer se trata, "separándose de estos medios honrosos a la nación, transigir negociando la paz en cambio de la existencia de los fueros y privilegios de esta provincia y Vascongadas".

No puede pensarse que los navarros hayan tomado las armas en defensa del régimen foral: "una verdadera teocracia" en la que "cinco o seis monjes son suficientes para impedir que se lleve a cabo la resolución más útil y mejor meditada"; "y en el que un despótico Tribunal llamado Consejo, más omnipotente que el de Castilla, controla arbitrariamente el gobierno municipal y económico de los pueblos".

Sin embargo, a pesar de que "ningun navarro puede desear de buena fe el restablecimiento de sus fueros" renunciar a ellos no quiere decir renunciar a los derechos

"historicos": No se entiende por eso que la Diputación repudia los VENERADOS DERECHOS que los navarros han sabido conservar gloriosamente en sus fueros: ellos son el recuerdo más precioso de sus antiguas libertades" y "la Diputación no renuncia a sus DERECHOS, ni se cree autorizada para renunciarlos". Y esta vez su evocación iba a pretender tener mayor utilidad que la simple amenaza de constituirse independientemente para que sirvieron en la exposición anterior. Y es que la integración de Navarra en la Monarquía constitucional española no ha sido más que una "PERMUTA DE INTERESES" entre la nación y los navarros: "Si la Nación española presta sus INSTITUCIONES ACOMODADAS A LA CIVILIZACION DEL TIEMPO, con todas las garantías de estabilidad, los navarros se desprenden del apreciable prestigio de su INDEPENDENCIA FORAL, y entran a contribuir en la masa general de las necesidades del Estado con un aumento considerable hasta hoy desconocido". Como en todo PACTO: "no puede negarseles a los navarros el DERECHO que les asiste para examinar y calcular por sí mismos la conveniencia de su TRANSITO POLITICO".

Con "franqueza y sinceridad" confiesa la Diputación esa conveniencia, pues aunque Navarra "podría poner en armonía con las necesidades del siglo su instituto desnudando la forma de representación nacional de los privilegios de clases y personas" reconoce que "esta revolución es de todo imposible si se consideran los lazos que ligan a es

ta pequeña monarquía con la España y la contienen dentro de una esfera común". Además ya no es necesario. Estando el problema resuelto por la Constitución de 1837...en la que los fueros de Navarra están "casi escritos literalmente y garantizados sin las deformidades y vicios que los hacían depender en el hecho de la voluntad de cualquier mandatario del Gobierno".

Sin embargo, como compensación, y como medidas de política y justicia", la Diputación propone a las Cortes y al Gobierno la solución particular de tres problemas que podrían dificultar el "tránsito": "1º el de la manera de contribuir a las necesidades del Estado, 2º el de las quintas, 3º el de asegurar la suerte de los muchos acreedores que tiene la Provincia de capitales tomados para la construcción de sus caminos y otros objetos de interés público. La manera de contribuir pudiera dejarse a la discreción de la Diputación provincial, precedida si se quiere la aprobación del Gobierno: ella buscaría los medios más análogos a las costumbres del país para hacerle menos sensible cualquier novedad. Las quintas se han hecho de ordinario, dejando también a la Provincia el arbitrio de los enganches, y no parece que debe haber inconveniente en este sistema: y finalmente los acreedores pueden ser satisfechos en la manera que ya acordaron las Cortes en 29 de abril y 16 de mayo de 1822 y que por una repugnancia inexplicable quedó sin resolverse en las últimas constituyentes. De esta forma se conciliarían

del mejor modo posible los intereses de los navarros, enlazándolos al mismo tiempo con los de la nación en general, sin contrariar ni los goces anteriores a la rebelión, ni las mejoras a que aspiran los amigos de las reformas que exige la conveniencia pública".

Abundando en los mismos argumentos, Yanguas y Miranda, secretario de la Diputación y probable inspirador del anterior escrito publicó por las mismas fechas su opúsculo: "Análisis histórico-crítico de los fueros de Navarra" (285). Para movilizar a la opinión pública en contra del proyecto PAZ y FUEROS. En él vuelve a insistir en "los defectos de la Constitución navarra, tanto esenciales como políticos y abusivos que la hacen ilusoria y aun perjudicial e inaplicable a las circunstancias del día" (286) defectos que "sólo pueden desaparecer acogiéndose los navarros bajo la constitución española" (287). Efectivamente, las instituciones forales navarras eran más formales que reales pues "la Monarquía no conocía límites en el ejercicio de la soberanía" y "si alguna vez conseguían los navarros contener o neutralizar los efectos de un ataque ministerial contra sus fueros, consistía en los vicios del mismo gobierno" (288). Deshaciendo el mito de Reino independiente unido a Castilla exclusivamente por la figura del rey, recalca que "la suerte de Navarra dependía de la de la península... Las cadenas de su escudo, recuerdo de sus pasadas glorias, aunque símbolo ominoso, estaban fuertemente eslabonadas al cetro español: ya fuese libre o esclava la península. Nava-

rra debía participar indispensablemente de su libertad o de su yugo" (289).

No se le oculta a Yanguas, una objeción que podrían hacerle los "jurisperitos" y que será un argumento que ya empleara Elfo en 1814 para rechazar la Constitución de Cádiz y que temía García Goyena en 1820; argumento que seguirán empleando todos los fueristas contrarios al arreglo foral de 1841: "La Constitución de Navarra, dirán, no puede alterarse sino en sus Cortes generales: esto es una verdad: pero también bosque no podía esperarse este bien del voto de los antiguos Estamentos. El gobierno español previó lo mismo con respecto a los de Castilla: las razones eran semejantes y con fundamentos de mucho más peso hizo lo que debía, y no podía menos de hacer; cortó el nudo gordiano, porque se trataba nada menos que de salvar la patria: esta ley imperiosa será siempre la guía de la sociedad en las grandes crisis políticas: ella marchará por los caminos desusados, y abandonará las sendas trilladas cuando su salud lo exija" (290)

Al finalizarse el escrito Yanguas se cree en la obligación de justificarse: "He amado los fueros de mi país y nunca los he considerado como privilegios, sino como instituciones que se dió a sí mismo un pueblo libre en su origen y que mereció serlo; pero he querido probar también que estas instituciones no son convenientes ni pueden sostenerse en este siglo: yo busco la conveniencia pública en donde creo que la puedo encontrar y me parece haberla hallado

en el gobierno representativo de la nación española" (291).

Cada momento histórico es una encrucijada entre fuerzas contrapuestas que empujan en distinto sentido; el saber identificarse con las que empujan el mundo hacia adelante da un sentido constructivo a la lucha política, y no cabe duda que en 1838 la de Yanguas y Miranda la tuvo. En la encrucijada entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal "la conveniencia pública navarra" pasaba por engancharse al carro de la revolución burguesa española; la alternativa, que incluso desde perspectivas de izquierda se ha creído posible: la de emprender las reformas modernizadoras en el marco del viejo Reino no creemos que lo fuera.

Refiriéndose a Guipúzcoa, J.A. Ayestarán escribe (292): "No es nuestra intención achacar al liberalismo la pérdida foral ni mucho menos descargar sobre la burguesía donostiarra toda la responsabilidad de la desastrosa aventura de 1833. Pero sí hay que recalcar que esta capa social actuó precipitada y ciegamente en defensa de una protección arancelaria, y ello a cualquier precio, sin elaborar un plan político general que, inspirado en la ideología liberal abarcase el conjunto de problemas que se debían dentro del marco histórico que le era propio: el de sus instituciones forales". Pero es que, en nuestra opinión el marco foral no era un marco económico y político autónomo; por encima de las peculiaridades forales político-administrativas existía una unidad económica y política real diferenciada

estatalmente. Es sobre ella sobre la que las distintas burguesías plantean la necesidad de reformas en sentido liberal por ser precisamente el ámbito donde se lleva a efecto su actividad económica. Y para los navarros de lo que se trataba era precisamente de participar plenamente de esa "COMUNION COMERCIAL" de la que se hablara en el Congreso.

Como balance "foral del anterior recorrido por los campos liberales y carlistas no nos parece forzado concluir que la inquietud por los fueros está mucho más presente entre los liberales que entre los carlistas. Dentro de los liberales, son los moderados, representantes de las clases dominantes los que desde un principio intentan salvar del fuero aquello que conviene a sus intereses. No obstante, los progresistas navarros, más doctrinarios y centralistas, que renuncian en un primer momento a cualquier reivindicación salvo la de cobrar la contribución de la provincia, evolucionarán "foralmente" ampliando exigencias aunque en ningún momento cuestionen la unidad constitucional y reaccionen enérgicamente ante cualquier negro proyecto de "reintegración foral plena".

NOTAS

- (1) TUÑON DE LARA: La España del siglo XIX..., pág. 69.
- (2) "¡No olvidéis que fuisteis REALISTAS! arenga Ibarrola en la proclama 5-X-1833 en Orduña (FERRER: Historia del Tradicionalismo español, 29 vols., Editorial Católica Española, Sevilla, 1941-1960, III, pág. 300). Y en 1833 el BOLETIN DE NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS del 6 de junio seguirá recordando: "no es fácil que en el corazón de un REALISTA se introduzca una pasión..." (FERRER: op. cit. XIV, pág. 196. En la carta de Juan Echeverría a Maroto a raíz de la sublevación de Vera le dice que el ejemplo será seguido por todos los verdaderos REALISTAS (A. PIRALA: Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, Madrid 1889-1891, tomo V, pág. 404, nota (1)); y concluida la guerra el Boletín Oficial de Pamplona del 5-IX-1839 publica el Convenio de Vergara y da cuenta de que "se están recogiendo las armas de los REALISTAS o paisanos armados que gustosísimos se apresuran a entregarlas.
- La primera proclama de Santos Ladrón es enviada con membrete del EJERCITO REALISTA y Zumalacárregui será nombrado capitán general del EJERCITO REALISTA (J.A. ZARATIEGUI: Vida y hechos de Don Tomás de Zumalacárregui, nombrado por el señor D. Carlos María Isidro de Borbón capitán general del EJERCITO REALISTA, duque de la Victoria y conde de Zumalacárregui, Impr. Rebolledo y Cía., Madrid, 1845.
- (3) AZCONA: op. cit.
- (4) ECHAVE SUSTAETA: op. cit. pág. 37.
- (5) PIRALA: op. cit. I, pág. 133. Texto completo de la proclama: Apéndices, pág. 599-600.
- (6) PIRALA: op. cit. I, pág. 156.

- (7) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 179, citando el BOLETIN DE NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS, nº 79; correspondiente al 6-VII-1838.
- (8) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 37.
- (9) PIRALA: op. cit. I, pág. 158.
- (10) PAYNE: op. cit., pág. 33 y 34.
- (11) OYARZUN: Historia del Carlismo, Alianza Editorial, Madrid, 1969, pág. 71.
- (12) La medida fue criticada y la lección no sería aprendida. En circunstancias parecidas O'Donnell tuvo oportunidad de preparar en Pamplona el levantamiento de octubre de 1841; y en 1936 el general Mola "castigado" en Pamplona organizó el levantamiento del 18 de julio en Navarra.
- (13) PIRALA: op. cit. I, pág. 257.
- (14) OYARZUN: op. cit., pág. 212.
- (15) Se refiere a la pequeña nobleza rural.
- (16) MENCOS: op. cit., pág. 83.
- (17) Ibid., pág. 108.
- (18) AGN. Actas Diputación. Tomo 39; sesiones 6 y 11-III-1834.
- (19) F. BACON: Historia de la revolución de las provincias Vascongadas y Navarra 1833-1837, Txertoa, San Sebastián, 1973, pág. 111, nota (5).
- (20) FERNANDEZ DE PINEDO: op. cit., pág. 476 y ss.

- (21) A. MORRAS: Memorias Tafallesas 1821-1898, Ediciones y Libros, Pamplona, 1974, pág. 14.

- (22) ARGAMASILLA DE LA CERDA: op. cit. A partir de la pág. 83: genealogía de la familia Elio.

En el testamento del General Elio, fusilado por los liberales en Valencia en 1822 se lee: "Sobre intereses nada te digo; los pocos que mis largos trabajos y servicios han producido son tuyos, y tú madre de tus hijos. Aunque la suerte te llame a la pobreza no te aflijas..." (OLORIZ: op. cit., pág. 295).

Cuando el Barón de Bigüezal anuncia a sus padres su intención de contraer matrimonio con Concepción Elfo y Leyzaur, hija del general reconoce que "no satisfacía mi elección todas las aspiraciones de mis padres; recibieron mi declaración con tibieza, y aun me propusieron ir a París una temporada" (MENCOS: op. cit., pág. 65).

- (23) Vid supra, pág. 248 nota 157

- (24) M. LAFUENTE: Historia general de España, Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1882, vol. VI, pág. 51.

- (25) J. VICENS VIVES: op. cit., pág. 555.

- (26) ARIAS TEJEIRO: Diarios II, pág. 67, 269 y 275. Cit. por FONTANA: Hacienda y Estado: op. cit., pág. 333, 334.

- (27) TUÑÓN DE LARA: El hecho religioso en España, París, 1968, pág. 8: "La institución eclesiástica al poseer durante siglos riquezas y medios de producción, la tierra, al ocupar una situación dominante en las relaciones de producción medievales, al asumir funciones de potestad jurídico-política, no ha sido sólo aliada sino que se integró en el estrato dominante".

- (28) TIERNO GALVAN: Leves políticas..., pág. 22.

- (29) SANCHEZ AGESTA: op. cit., pág. 105.

- (30) KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS: Revolución en España,

Ariel, Barcelona, 1970 (3ª ed.), pág. 113: "...pueden señalarse en la Constitución de 1812 inconfundibles síntomas de un compromiso concluido entre las ideas liberales del siglo XVIII y las oscuras tradiciones teocráticas".

- (31) El hecho de que en 1979 dos de los representantes en el Senado y en el Congreso por Navarra sean clérigos: Víctor Manuel Arbeloa y Gabriel Urralburu, y el primero de ellos presida a la vez el Parlamento Foral es todo un símbolo.

- (32) Ver: nota (167). Entre las causas que produjeron la disminución del patrimonio real MARICHALAR Y MANRIQUE op. cit., pág. 206, citan "la dilapidación por parte de algunos monarcas con las inmensas donaciones hechas a monasterios, iglesias, favoritos, etc..."

También Yanguas y Miranda (Diccionario de Antigüedades..., I, pág. 436) señala: "Enriquecido el clero por la religiosa liberalidad de los mismos Reyes...".

A título de hipótesis es posible que la Monarquía navarra, cercada en seguida por las de Aragón y Castilla y anuladas sus posibilidades de expansión a costa de los árabes no tuviese compensaciones que ofrecer y con qué contentar a su nobleza y para defenderse de sus agresiones buscarse su apoyo en las ciudades y sobre todo en los monasterios.

- (33) La única singularidad de las Cortes de Navarra consistía en ser el eclesiástico el primero de los estamentos y al que correspondía presidir las Cortes y la Diputación del Reino. Ver en el presente trabajo, pág. 26 y ss.

- (34) BACON: op. cit., pág. 99.

	<u>Población</u>	<u>Cl.sec.</u>	<u>Cl.reg.</u>	<u>Total</u>	<u>Hab.por clérigo</u>
Alava	69.158	1.160	475	1.635	42
Guipúzcoa	105.962	764	707	1.471	72
Vizcaya	113.196	1.085	675	1.760	64
Navarra	229.400	2.778	1.887	4.672	49

- (35) AGN. Negocios Eclesiásticos, Leg. 4, carp. 4 y 5. La

Diputación mandó una representación a la Sagrada Congregación de Cardenales apoyando la pretensión del clero contra la de los regulares.

- (36) DOMINGUEZ ORTIZ: Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Ed. Istmo, Madrid, 1973, pág. 337: "Al tratar de la riqueza de la Iglesia española, dos puntos interesa destacar ante todo: su considerable volumen y la extrema desigualdad en su repartición".
- (37) FERNANDEZ PEREZ: Historia de la Iglesia y obispado de Pamplona, Madrid, 1820, vol. III, pág. 331 y 332. La Real Cámara estimó sin embargo que "en atención al celo y exactitud con que el obispo (de Pamplona) había remitido y continuaba dirigiendo a ella los planes benéficiales de su diócesis no merecían la menor atención las quejas infundadas del clero del reino de Navarra".
- (38) Ibid. pág. 336 y 337: "por cuanto habiendo cesado ya la clausura y vida en común que antiguamente hacían dentro de los claustros, y viviendo ahora todos en sus casas particulares con su propia familia y sirvientes necesitaban mayor renta para poder subsistir con la decencia correspondiente".
- (39) Desgraciadamente la historiografía sobre el tema es muy escasa. El profesor DOMINGUEZ ORTIZ (op. cit., pág. 201) dice al respecto: "nos enfrentamos con el hecho increíble de que una nación cuya historia está íntimamente ligada a la Iglesia católica no tiene una historia eclesiástica que pueda calificarse de mediana".
- (40) Ya en el Trienio Liberal "el Obispo de Pamplona quiso navegar a dos aguas pero se perdió en una actitud transaccionista "que no contentó a nadie" MUTILOA POZA: La Desamortización eclesiástica en Navarra..., pág. 332. En sus primeras pastorales se mostró ferviente constitucional y decretó la "suspensión a divinis" contra sacerdotes realistas. Su actitud fue cambiando hasta el punto de mandar rogativas y letanías por el feliz éxito de los ejércitos del Duque de Angulema (Ibid., pág. 333). En definitiva su postura coincide con la que mantuvieron los moderados.

- (41) MUTILOA POZA: La Desamortización..., pág. 346.
- (42) FZ. DE PINEDO: op. cit., pág. 474. Entre los canónigos de Roncesvalles se repiten los nombres de nobles baztaneses emparentados con Garros, Mendinueta, Goyeneches, etc... El mismo afrancesado Marqués de las Hormazas: Ambrosio Agustín de Garro fue gran bienhechor de Roncesvalles y fundó tres aniversarios en 1804. (J. IBARRA: Historia de Roncesvalles, Ed. La Acción Social, Pamplona, 1935, págs. 847 y ss. y 861. Sobre el comportamiento liberal de los canónigos de Roncesvalles véase nota (28), pág. 233
- (43) J. IBARRA: Historia del Monasterio de Irache, Revista Príncipe de Viana nº , pág. 576: "En 1835 se decretó la expulsión de las Ordenes Religiosas: más los monjes de Irache por estar dominada Navarra por las fuerzas carlistas permanecieron en su convento con otros benedictinos de las regiones castellanas y andaluzas aquí refugiados hasta el año 1839".
- (44) AHN. Consejos, leg. 49605, nº 49: Informe del Regente del Consejo de Navarra al Gobierno del 27-V-1834. Cit. por RZ. Garraza: Navarra..., pág. 164 y 214.
- (45) A. MARTIN: op. cit., pág. 52.
- (46) PIRALA: op. cit. I, pág. 258.
- (47) Ibid. I, pág. 260.
- (48) Ibid. I, pág. 258.
- (49) AHN. Consejos, leg. 49595, nº 78. Cit. RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 215.
- (50) FERNANDEZ PEREZ: op. cit., pág. 339.
- (51) EXPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE NAVARRA A LAS CORTES DE LA NACIÓN 5-III-1838 en AGN. Actas Diputación, T. 42.

- (52) J. CORCUERA: op. cit., pág. 154.
- (53) LAFUENTE: op. cit. VI, pág. 269.
- (54) Los generales Guergué, Sanz, García, el intendente Uriz y el brigadier Carmona. PIRALA, op. cit, VI, pág. 344 y ss.
- (55) MORRAS: op. cit., pág. 14.
- (56) Carta del general Maroto a Juan Echeverría fechada en Azpeitia el 27 de agosto de 1839 a las doce y media de la noche. PIRALA: op. cit. V, pág. 404 y 405. "Tomaré la pluma por última vez de mi vida para contestar a las infames calumnias de un mal sacerdote. No soy de los hombres que responden a injurias con injurias y descanso en el testimonio de mi conciencia que en nada me remuerde". Así comienza Maroto su carta.
- (57) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA, 18-III-1841.
La forma de coacción con ese fin no era nueva: "Sobre el pago de diezmo se hacía cargo estrecho de conciencia a los feligreses y se amenazaba con sanciones que podían llegar a la excomunión y privación de sepultura eclesiástica" (DOMINGUEZ ORTIZ; op. cit., pág. 345).
- (58) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA: nº 22, del 18-III-1841.
- (59) EL CATOLICO: 2-VII-1844: Crónica del corresponsal de Pamplona: "...Digo pues a V. que aunque por ahora no nos falta el "panem quotidianum", esto se debe únicamente a la religiosidad de los pueblos, mas no a la monstruosa contribución titulada de culto y clero, que solamente se lleva a efecto en las ciudades y parte de las villas que entre todas no llegarán a ciento. En lo restante de la provincia puede decirse que sólo existe en el nombre, pues todos o casi todos los pueblos pequeños que pasan de seiscientos y ochenta están compuestos con sus curas dando a unos el 4, a otros el 5, a otros el 10 por 100 en frutos, y a otros asignando en dinero aquello que creen suficiente para su decente sustentación, y así es que solamente el pueblo que no está contento con su cura, y quiere despacharlo políticamente le dice, no se le da a V. más que lo que manda la Diputación. A tal grado de

ridiculez ha llegado la tan decantada ley del año 1841, que en muchos pueblos la bautizan con el nombre de despacha-curas, como yo mismo lo he oído".

- (60) CARTAS DE UN LABRIEGO NAVARRO. Imprenta de La Epoca, Madrid, 1872. Se trata de una serie de cartas entrecruzadas a través del periódico madrileño conservador La Epoca entre el General moderado Fructuoso de Miguel bajo el seudónimo de "Un labriego navarro" y un cura de Falces: Eustaquio Arrasate. El primero acusa al clero de ser el causante de la insurrección; el segundo denuncia la situación de miseria en que se encuentra el clero navarro y las irregularidades de la Diputación en su dotación.
- (61) En las elecciones de 1844 en las que se amplía el censo en Navarra a 19.000 votantes, los carlistas se presentan por primera vez ganando a los moderados. Estos consiguen la anulación de las actas de Pamplona y Estella con las que dan la vuelta los resultados (EL ECO DEL COMERCIO, 18-IX-1844). En el mismo periódico se comenta: "nos aseguran que los curas han sido los que más han trabajado en Navarra las elecciones" (EL ECO DEL COMERCIO, 16-IX-1844).
- (62) Los diputados elegidos por Navarra fueron: Cándido No cedal, Francisco Navarro Villoslada, José María Clarós, Gabino Tejado, Antonio Aparisi y Guijarro (optó por Valencia), Francisco Sánchez Asso (padre del futuro diputado integrista José Sánchez Marco) y el Conde de Heredia Spínola. (BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NAVARRA: días 4, 6 y 8 de diciembre de 1865). El mapa de los resultados electorales con las zonas de influencia de liberales y neocatólicos en pág. 560 (Apéndice nº 10)
- (63) J. R. CASTRO: op. cit., pág. 186.
- (64) DONEZAR: op.cit., pág. 76 y ss.
- (65) Vid. supra. pág. 62
- (66) A. MARTIN: op. cit., pág. 103 y 104.
DONEZAR: op. cit.
- (67) Vid. infra. pág. 401, nota (81)

- (68) IDOATE: La Comunidad del Valle Roncal: op. cit., pág. 27 - 59.
- (69) En 1848 mientras la Zona Media era la única que respondía al levantamiento carlista de los Matiners, en enero de 1849 tenía lugar en Roncal y Salazar un pronunciamiento republicano. Sofocados los dos, republicanos y carlistas fueron deportados juntos a Ultramar (LARRAYOZ: La segunda guerra carlista en Navarra (1848-1849). Revista Príncipe de Viana nº 63, 1956, pág. 185).
- (70) L. URABAYEN: Biografía de Pamplona, Pamplona, 1952, pág. 130: "hasta finales del s. XIX las tres formas de vida: agrícola, oficial y militar imprimen un sello al ambiente de Pamplona".
- (71) Vid. supra, pág. 57
- (72) En 1840 describía el viajero Dembowski a Pamplona como "una linda villa de antiguo género español. Bellas y numerosas iglesias brillantes de oro, conventos magníficos..." (URABAYEN: op. cit., pág. 190).
- (73) MUTILOA: La Desamortización... op. cit., pág. 383: "Ignoramos cual pudo ser la causa de esta prórroga. Puestos a hacer conjeturas, se nos antoja que los Dominicos mantenían el culto de una iglesia de abolengo y eran filoliberales y las Agustinas de San Pedro al igual que las Recoletas estaban muy ligadas a las familias más linajudas de la ciudad, muchas de las cuales militaban sin duda en el partido liberal".
- (74) J. M. JIMENO JURIO: Historia de Pamplona, Ediciones y Libros, S.A., Pamplona, 1975 (2ª edición), pág. 276.
- (75) J. I. DEL BURGO: Origen y fundamento del régimen foral en Navarra. Tesis doctoral leída en la Universidad de Deusto en 1966, pág. LXXIII, nota 267. No cita procedencia.
- (76) PIRALA: op. cit. I, pág. 258.
- (77) F. BACON: op. cit., pág. 102.

(78) Ibid. I, pág. 394 y IV, pág. 254.

(79) Los trabajos de Salvador MENSUA (op. cit.) y BIELZA DE ORY (op. cit.) el del primero sobre la Navarra media oriental, el del segundo sobre la occidental o Tierra Estella, recogen las características de la producción agraria de la zona, su evolución histórica, así como una aproximación a la estructura de la propiedad agraria.

(80) MENCOS: op. cit., pág. 83. Uno de los criterios que podemos emplear para distinguirla de la alta nobleza, es aparte de su riqueza, el hecho de que no tenían asiento en Cortes.

(81) Aunque los datos son referentes a 30 años más tarde, del censo electoral de 1865 se desprende la siguiente proporción:

Roncal: 872 vecinos, 7 clérigos, 0,8 %
Cascante (Ribera): 921 vecinos, 5 clérigos, 0,5%
Corella (Ribera): 1183 vecinos, 3 clérigos, 0,2%
Valle Esteribar (zona media oriental): 376 vecinos, 13 clérigos, 3,4 %.

Valle Valdorba (zona media central): 854 vecinos, 20 clérigos, 2,3 %.

Valle Larraun (zona media occidental): 697 vecinos, 15 clérigos, 2,1 %.

(82) Vid. Apéndice nº 7, pag. 557

(83) Vid. Apéndice nº 8, pag. 558

(84) ZARATIEGUI: op. cit., pág. 230: "Las operaciones de Zumalacárregui generalmente se limitaban al país comprendido entre la derecha del río Aragón y del Oría, y la izquierda del Ebro hasta la frontera francesa; pero su permanencia habitual era en la merindad de Estella."

(85) Vid. Apéndice nº 9, pag. 559

(86) J. LARRAYOZ: op. cit.

- (87) Vid. Apéndice nº 10, pag. 560
- (88) En las elecciones del 1 de marzo de 1979 dentro de la marginalidad de su presencia el Partido Carlista de Hugo Carlos de Borbón consiguió sus mejores resultados en la Zona media oriental navarra o "Tierra Estrella".
- (89) M. FERRER: op. cit. III, pág. 301.
- (90) Ibid. III, pág. 294. Se dan los nombres de los 32 reunidos.
- (91) En esta doble "numeración" dinástica de D. Carlos, ve ECHAVE SUSTAETA una prueba inconfundible de "foralismo" (op. cit., pág. 43). Sin embargo, por los mismos días la antiforal y liberal Diputación del Reino proclamaba como reina a Isabel II de Castilla y I de Navarra...
- (92) Se refiere a "la LEY FUNDAMENTAL que llama al Trono de las Españas a un príncipe español sólidamente religioso..."
- (93) La Diputación del Reino había declarado "que los fueros de este antiquísimo reino llaman espresa y terminantemente a la corona de Navarra a nuestra augusta reina dona Isabel II de Castilla (PIRALA: op. cit. I, pág. 609).
- (94) I. ESTORNES ZUBIZARRETA: Carlismo y abolición foral, Ed. Auñamendi, San Sebastián, 1976. En el apéndice nº 5, pág. 206, recoge íntegra la alocución.
- (95) MENCOS: op. cit., pág. 86. "Las provincias sublevadas son las únicas en España que a pretexto de sus fueros protestaron en 1713 contra la exclusión de las hembras para reinar en España..." (Memorandum del Embajador de España en París, del 8-IX-1835. Cit. por PIRALA: op. cit. II, pág. 584).
- (96) ESTORNES ZUBIZARRETA: op. cit., pág. 206.

- (97) M. FERRER: op. cit. III, pág. 291, 292.
- (98) M. FERRER (op. cit.), A. Pirala (op. cit.), Lafuente (op. cit.), R. Oyarzun (op. cit.), Echave Sustaeta (op. cit.)...
- (99) PIRALA: op. cit. I, pág. 182, 183.
- (100) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 38.
- (101) EVARIST OLCINA (op. cit., pág. 16) llega a afirmar "Es risible el esfuerzo que esos "tradicionalistas" o integristas, a que antes aludíamos, realizan para demostrar su tesis. (Se refiere al intento de demostrar el foralismo de la guerra realista y su continuidad con la carlista). Echave Sustaeta, por ejemplo, llega incluso a amañar en su obra "El partido carlista y los Fueros" (Pamplona, 1915) algunos textos de la época (como el del barón de Eroles), echando mano, a lo sumo con argumentación "definitiva" a pequeñas alusiones esporádicas y de compromiso encontradas en proclamas del alzamiento "realista" navarro de 1821". Por nuestra parte, también hemos dejado en evidencia el "amañamiento" que Echave realizó con los documentos navarros. (Ver el presente trabajo, pág. 151 en especial, y en general a partir de la pág. 147).
- (102) FERRER: op. cit., III, pág. 296. Firmado por: Ignacio Lardizábal, José Joaquín Hermoso de Mendoza, José Ramón de Berrueta, Manuel Muñoz Ostolaza. Por la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa: Manuel de Gastañaga.
- (103) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 38-39.
E. OLCINA: op. cit., pág. 20.
- (104) FERRER: op. cit. III, pág. 292.
- (105) Se refiere a la exclusión de las mujeres al trono. Dejo el comentario para los/las feministas...
- (106) Véase lo comentado con ocasión de la Guerra Realista, pág. 211 y ss.

- (107) LAFUENTE: op. cit. VI, pág. 117.
- (108) J. LLUIS Y NAVAS: Las divisiones internas del carlismo a través de la Historia. Ensayo sobre su razón de ser (1814-1936). En: Homenaje a Vicens Vives; Universidad de Barcelona, Barcelona, 1967, pág. 324.
- (109) Se refiere a la guerra carlista iniciada en el norte.
- (110) PIRALA: op. cit., I, pág. 33.
- (111) Ibid. I, pág. 393.
- (112) Ibid., I, pág. 461. Fechada en Lequeitio el 10-I-1835, firmado por Hipólito Múgica y dirigido al Sr. gobernador de la villa de Bilbao. Las palabras entrecomilladas están destacadas en el original.
- (113) FERRER: op. cit., XII, pág. 265. Manifiesto de Carlos V a los españoles (2-IX-1836).
- (114) Ibid., XII, pág. 306.
- (115) Ibid., XII, pág. 265.
- (116) Ibid., XII, pág. 265.
- (117) Ibid., XIII, pág. 304.
- (118) Ibid., XIII, pág. 305.
- (119) Ibid., IV, pág. 251.
- (120) Ibid., XII, pág. 265.
- (121) J. GALINDEZ: La Aportación Vasca al Derecho Internacional, Ekin, Buenos Aires, pág. 138, 1942, cit. por LARRONDE: El nacionalismo vasco, pág. 45.

- (122) Intervención televisada del 26-II-1979, 4,30 h. durante la campaña electoral para las elecciones generales del 1 de marzo y en el espacio correspondiente a Herri Batasuna.
- (123) PUNTO Y HORA DE EUSKALHERRIA, nº 129; 15 a 22-VI-1976. Artículo: "El fuero y el pueblo", firmado por XABIER ANTOÑANA.
- (124) BERNARDINO DE ESTELLA: op. cit., pág. 278: "Al lado de este partido (se refiere al liberal) favorecedor de los extranjeros, se formó otro partido defensor de la independencia vasca. Sus antecesores deben buscarse en los vascos que rechazaron la Constitución de Cádiz..."
- BARON DE ARTAGAN: Carlistas de antaño. La Bandera Regional, Barcelona, 1912, pág. 32 y ss.
- OYARZUN: op. cit., pág. 71 y ss.
- ZARATIEGUI: op. cit., pág. 24 y ss.
- (125) FERRER: op. cit. III, pág. 240 y ss.
- (126) PIRALA: op. cit., II, pág. 384: "Según un amigo nuestro, cuya opinión merece crédito, no hallando D. Carlos en la tierra después de la muerte de Zumalacárregui un general que le sustituyese, hubo de buscarle en el cielo y en 1º de agosto declaró generalísima del ejército a María Santísima, bajo la advocación de los Dolores".
- El Real Decreto lo recoge FERRER: op. cit., VIII, pág. 244: Son dos Reales Decretos; en el primero del 1 de agosto declara a la Virgen de los Dolores generalísima de los ejércitos; en el segundo a su estandarte: "Declarada por mí Generalísima de mis tropas la Santísima Virgen de los Dolores, no he podido menos, movido de mi veneración y religiosa piedad, de distinguir con el título de generalísimo al Real Estandarte que lleva por lema aquella divina imagen y, por lo tanto, he venido en resolver, como resuelvo y mando, que esta augusta y real insignia no se rinda a persona alguna, ni aun a la mía, ni haga más honores ni saludo que al Santísimo Sacramento. Tendreislo entendido y dispondreis lo conveniente a su cumplimiento. Real de Estella, 2 de agosto de 1835. Yo, el Rey".

- (127) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 46: "Zumalacárregui era un fuerista entusiasta. ¡Tal maestro había tenido en la materia! Sabido es que el Síndico del Reino de Navarra entonces, era el ilustre abogado don Angel Sagaseta de Ilurdoz, hombre competentísimo en materias forales, fuerista hasta la médula de sus huesos. Pues bien; Zumalacárregui era pariente de Sagaseta y asistía diariamente a su tertulia".
- (128) Zumalacárregui en marzo de 1834 se cree en la obligación de justificar la consulta "democrática" que hizo a la Junta de oficiales sobre las proposiciones de paz del general Quesada. Si así lo hizo fue porque todavía no había recibido confirmación de sus poderes por parte del rey "que si este mando que desempeño emanase de la soberana voluntad de la augusta real persona cuyos derechos defendemos, jamás pusiera a la decisión de otros el presente negocio, porque en ese caso me hubieran sido bastante conocidos mis deberes" (PIRALA: op. cit., I, pág. 263).
- (129) D. Carlos VIII de Navarra y V de Castilla, por la gracia de Dios, rey de las Españas, y en su real nombre D. Tomás Zumalacárregui, Comandante general del Ejército de S.M. en este reino y en jefe de las Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Por lo contenido en la alocución del cinco del actual inserta en el Boletín revolucionario de Navarra se declaran traidores como incurridores en el delito de lesa Majestad al Padre Maestro D. Fr. Bartolomé Oteiza, Abad de Fitero, a D. José María Martínez de Arizala, a D. Benito Antillón, a D. José María Vidarte, al Barón de Bigüel, a D. Fulgencio Barrera y a D. José Basset Secretario: En su consecuencia quedan condenados a la pena de muerte y confiscación de todos sus bienes. El presente decreto se imprimirá y circulará en todo el reino, del que se dará cuenta al Rey N. S. por la vía extraordinaria. Cuartel general de Navascués, 11 de febrero de 1834. Tomás Zumalacárregui (AGN. Actas de la Diputación del Reino, sesión 13 de febrero de 1834).
- (130) BERNARDINO DE ESTELLA: op. cit., pág. 282. Los proyectos a los que hace referencia eran: a) que los navarros no fueran juzgados por virreyes; b) que los jueces fuesen navarros; c) que los navarros no estuviesen sometidos jamás a la jurisdicción militar; d) que los navarros sólo podían ser apresados por oficial autorizado por la corte o el Supremo Consejo. (Ibid. nota 9).

- (131) PIRALA: op. cit. I, pág. 610.
- (132) AZCONA: op. cit., pág. 498.
- (133) PIRALA: op. cit. I, pág. 135.
- (134) Ibid. I, pág. 619-620.
- (135) Ibid. I, pág. 269-270.
- (136). I. ESTORNES ZUBIZARRETA: op. cit., pág. 99.
- (137) PIRALA: op. cit. II, pág. 39.
- (138) A. SOMERVILLE: History of the British Legion, and War in Spain, London, 1839. Cit. por AZCONA en Zumacárregui: op. cit., pág. 414.
- (139) A. XAHO: Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos, París, 1836. Reed. por Txertoa, San Sebastián, 1976.
- (140) A. S. MACKENZIE: Spain Revisited. By the autor of "A year in Spain, London, 1836. Cit. por AZCONA: op. cit., pág. 255.
- De "sinistras y fabulosas" califica el General Urbistondo estas "narraciones de extranjeros mal ins- truidos, preocupados o parciales" (A. DE URBISTONDO: Apuntes sobre la Guerra de Navarra en su última época, y especialmente sobre el Convenio de Vergara. Imp. D. R. de La Sota, Madrid, 1841, pág. 4).
- (141) M. GARCIA VENERO: Historia del Nacionalismo Vasco; Editora Nacional, Madrid, 1969, pág. 103: En 1973 "declararon Echave y Barroeta que Guipúzcoa no quería intervenir en la guerra y aspiraba a convertirse en república independiente..."
- ORTZI: Historia de Euzkadi: el nacionalismo vasco y ETA, Ed. Ruedo Ibérico, 1975, pág. 71: "El diputado vascocontinental Garat había aconsejado a Napoleón conceder la independencia a Euzkadi, denominándola

Nueva Fenicia, lo que facilitaría su anexión; la Euzkadi peninsular se llamaría Nueva Sión y la continental Nueva Tiro".

- (142) DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES. SENADO. Sesión 18-X-1839. Intervención del senador Joaquín María Ferrer: "... Esas provincias han estado en una situación equívoca; están situadas en una frontera extranjera; no ha sido la primera vez que han sido objeto de alguna operación diplomática en que se ha tratado de formar de ellas una pequeña Bélgica o Suiza; eso data de muchos años; el interés de quienes deseen esto puede existir aún..."

GARCIA VENERO: op. cit., pág. 178. "También se afirma que en los tratos con ingleses y franceses fue examinada la expulsión del infante y su familia y la proclamación de una República vasco-fuerista-clerical. ¿Pretendería Maroto, de origen murciano, ser presidente de la sugerida república?. Esa maniobra le pareció gravísima a Eugenio de Avizaneta...". En ese designio parece que se inspiró don Benito Pérez Galdós al escribir ciertas páginas, muy divertidas que figuran en su episodio nacional "Amadeo I", añade García Venero en la nota 12 de la misma página.

- (143) FERRER: op. cit. IV, pág. 265. Carta de Zumalacárregui a D. Carlos, fechada en Huarte Araquil el 18-V-1834.
- (144) Han sido consultados todos los documentos que se recogen en las obras ya citadas de Pírala, Lafuente, Ferrer, Javier de Burgos, Azcona, Echave Sustaeta y Zaratiegui.
- (145) AZCONA: op. cit., pág. 482.
- (146) Los documentos en: PIRALA: op. cit., I, pág. 195 y ss.
- (147) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 51 y ss.
- (148) J. A. ZARATIEGUI: op. cit., pág. 159.
- (149) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 53 y ss.

- (150) BOLETIN DE NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS, nº 79; 6-VII-1838. Cit. por ECHAVE: op. cit., pág. 178.
- (151) PIRALA: op. cit. III, pág. 444.
- (152) FERRER: op. cit., X, pág. 292.
- (153) PIRALA: op. cit., III, pág. 465.
- (154) FERRER: op. cit., X, pág. 295.
- (155) Ibid., X, pág. 296.
- (156) Ibid. XIII, pág. 315.
- (157) Ibid., XIII, pág. 313.
- (158) Ibid. XII, pág. 306. Manifiesto de Cáseda, 20-V-1837.
- (159) Ibid., XIV, pág. 196.
- (160) Ibid., XVI, pág. 187.
- (161) Ibid. XVI, pág. 269.
- (162) Ibid. XIV, pág. 196. Maroto en Estella el 6-VII-1838
- (163) BOLETIN DE NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS, nº 68, 29-V-1838, cit. por ECHAVE: op. cit., pág. 174.
- (164) Ibid., nº 79, 6-VII-1838. Cit.: ECHAVE: op. cit., pág. 178.
- (165) Ibid., nº 178; 8-VI-1839. Cit. RZ. GARRAZA: Navarra ..., op. cit., pág. 318.

- (166) Ibid. nº 62; 8-V-1838. Cit. por ECHAVE: op. cit.,
pág. 171.
- (167) Ibid. nº 160, 16-IV-1839; Fragmento de una Real Or-
den. Cit. RZ. GARRAZA; op. cit., pág. 317.
- (168) Ibid. nº 62; 8-V-1838. Cit. por ECHAVE: op. cit.,
pág. 171.
- (169) Ibid., pág. 175.
- (170) Ibid. nº 69, 1-IV-1838. Cit. por ECHAVE: op. cit.,
pág. 176.
- (171) Ibid. nº 134, 15-I-1839. Cit. por RZ GARRAZA: op.
cit., pág. 317.
- (172) Vid. supra, pág. 291
- (173) Representación de la Junta Gubernativa de Navarra al
Rey del 12-III-1835. En: AGN. Actas de la Junta Gu-
bernativa de Navarra, libro 2º. Cit. por AZCONA: op.
cit.,
- (174) AZCONA: op. cit., pág. 485.
- (175) AGN. Actas de la Junta Gubernativa, libro 2º, 1-I-
1836. Cit. por ECHAVE: op. cit., pág. 142.
- (176) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 75.
- (177) FERRER: op. cit. XIV, pág. 204.
- (178) Ibid: XVI, pág. 238.
- (179) FERRER: op. cit., XVI, pág. 238.
- (180) Ibid. XVI, pág. 239. Los hombres indignos a los que
hace referencia son los marotistas.

- (181) ZARATIEGUI: op. cit., pág. 48.
- (182) ZARATIEGUI: op. cit., pág. 60-61.
- (183) AZCONA: op. cit., pág. 474.
- (184) ECHAVE: op. cit., pág. 51.
- (185) FERRER: op. cit. VIII, pág. 251.
- (186) PIRALA: op. cit., I, pág. 622.
- (187) Vid. supra. pag. 322-323
- (188) AZCONA: op. cit., pág. 490.
- (189) ECHAVE: op. cit., pág. 86-87.
- (190) Ibid., pág. 87.
- (191) FERRER: op. cit. VIII, pág. 251.
- (192) ECHAVE: op. cit., pág. 103.
- (193) Ibid., pág. 103 y ss.
- (194) FERRER: op. cit., XII, pág. 312.
- (195) Ibid., XII, pág. 312-313.
- (196) Ibid. VIII, pág. 252-253.
- (197) PIRALA: op. cit.
- (198) FERRER: op. cit., VIII, pág. 254.

- (199) FERRER: op. cit., XII, pág. 272, 273.
- (200) BACON: op. cit., pág. 109, 110.
- (201) PIRALA: op. cit. II, pág. 250; III, pág. 464, IV, pág. 57.
- (202) EL CORREO NACIONAL (18-VIII-1839) explica la falta de respuesta popular a los fusilamientos de Estella porque Maroto supo "agarrarse al pueblo, al verdadero pueblo permitiéndole comprar, vender y circular libremente sus producciones, lo que no sucedía cuando mandaba García y demás compañeros fusilados.
- (203) PIRALA: op. cit., V, pág. 185.
- (204) BERNARDINO DE ESTELLA: op. cit., pág. 282.
- (205) BACON: op. cit., pág. 110.
- (206) AGN. Actas Diputación, T. 38; sesión 9-II-1833. Sólo disintieron dos diputados: Lecea y Olloqui; los dos del brazo de Universidades; representante de la ciudad de Pamplona el primero y de la de Lumbier el segundo. En 1833, los dos serían separados de sus cargos por el virrey por ser sospechosos de adictos a D. Carlos.
- (207) PIRALA: op. cit. 1, pág. 609-610. En esta ocasión sin embargo afirman los siete diputados, incluidos Lecea y Olloqui.
- (208) MENCOS: op. cit., pág. 86.
- (209) Ibid., pág. 79.
- (210) Se trataba en realidad de la reinstalación de las Comisiones Militares creadas en 1824 y desaparecidas en 1826. Vid. supra. pág. 221
- (211) J. I. DEL BURGO: op. cit., pág. LXXIII, nota 267.

- (212) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 62.)
- (213) LUCAS VERDU: op. cit. I, pág. 87, citando a Carl Schmitt.
- (214) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 60. El artículo primero del R.D. decía: "En cada una de las capitales de provincia que hoy existen y de las que se formen con arreglo a la nueva división territorial que os he encargado plantear, se establecerá una autoridad superior administrativa con el título de Subdelegado principal de Fomento".
- (215) Ibid., pág. 61.
- (216) AGN. Actas Diputación; sesión 27-I-1834.
MENCOS: op. cit., pág. 85. Los diputados son los mismos que en 1833 se negaron a reconocer los derechos de Isabel II al trono, lo que prueba el partidismo ya entonces existente, a la vez que se deduce que los otros no eran partidarios de D. Carlos. No es casual que los dos miembros del estamento noble: Antillón y Arizala se pronunciaran por Isabel II, mientras que de los cuatro miembros de Universidades lo hiciesen Vidarte, representante de Pamplona ligado al gran comercio y Barrera, representante de Tudela y Olloqui, representante de Lumbier (Zona Media) y Lecea, de Pamplona lo hicieron en contra. Hay que recordar que el presidente, en este caso, el Abad de Fitero, sólo tenía voto en caso de empate.
- (217) AGN. Sección Guerra; leg. 34, carp. 16, 33, 36, 39 y 57. Actas Diputación, T. 39, sesión 14-VII-1834. Cit. por RZ. GARRAZA: op. cit., pág. 199.
- (218) AGN. Actas Diputación, sesión 26-VI-1836.
- (219) MARTINEZ CUADRADO: Elecciones y Partidos políticos en España 1868-1871. Ed. Taurus, Madrid, 1969, pág. 43.
- (220) MENCOS: op. cit., pág. 95.
- (221) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA, 3-VI-1834.

- (222) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 47 a 56. El hacendista baztanés, José Francisco MUGUIRO renunció al cargo. Para sustituirle fue elegido José María MONREAL, navarro, domiciliado en Madrid, abogado de la Real casa; pero aunque acepta, no es admitido en el Estamento por carecer de la renta propia que exige el Estatuto; el también baztanés y residente en Madrid, José Francisco de GOYENECHÉ, Conde de Saceda es el nuevo elegido, que tampoco acepta por motivos de salud; y por fin la elección recae de forma definitiva en Román MARICHALAR Y SAN CLEMENTE, sobrino del Marqués de Montesa y heredero del título. Tanto Montesa como Ezpeleta y Marichalar apoyaron al Gobierno (F. CABA-LLERO: Fisonomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836; Madrid, 1836, pág. 30 y ss.).
- (223) MENCOS: op. cit., pág. 100.
- (224) Esta forzada conclusión deducían los procuradores navarros de la exposición del Consejo de Ministros que precedió al Estatuto y en la que se leía: "A V.M. es reservada la gloria de restaurar nuestras antiguas leyes fundamentales, cuyo desuso ha causado tantos males por el espacio de tres siglos..." (D. SEVILLA ANDRES: op. cit. I, pág. 257).
- (225) J. R. CASTRO: op. cit., pág. 93 y 94.
- (226) MENCOS: op. cit. pág. 95: "...dimos todos los pasos conducentes para que Navarra no fuese convocada como las demás provincias, y para que en tiempo oportuno, convocadas sus propias Cortes, determinasen éstas la forma y modo de continuar en adelante ora estableciendo medios de conservar entrambas Constituciones, ora dictando reglas y concertando arreglos para una incorporación legislativa por los únicos medios legales posibles".
- (227) F. CABA-LLERO: Fisonomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836, Madrid, 1836, pág. 30. Refiriéndose a Román Marichalar: "Siendo procurador por Pamplona en las Cortes generales quiso sostener la independencia del reino de Navarra: esto se llama comer a dos carrillos y jugar con dos barajas..."

(228) AGN., Cortes, leg. 13, carp. 49. Entre los próceres que consta se les mandó la carta porque contestaron a ella: El Conde de González, (José Uriz, Duque de Castroterreño, Conde de Ezpeleta, Pedro, obispo de Barcelona.

(229) Pamplona, Imprenta Francisco Erasun, 1834.

(230) Vid. supra, pág. 176 y 181 y ss.

(231) MEMORIA..., pág. 13.

(232) Navarra era rica en salinas y el comercio de la sal era libre, mientras en el resto de la Monarquía exceptuando las otras provincias vascas estaba estancada; de tal forma que "había pueblo en que la fanega de sal no costaba más que cuatro o seis reales vellón, cuando en Castilla y Aragón la hacienda pública la expendía a 48" (J. ALONSO: op. cit., pág. 42).

De la importancia que este producto tenía en aquella época para la conservación de alimentos, son prueba, sin salir del País Vasco, las dos famosas "matxinadas" (rebeliones) la una en Vizcaya en 1631; la otra en la Baja Navarra en 1685, cuando los respectivos gobiernos: español y francés intentaron estancarla con fines fiscales. (Sobre la primera: FERNANDEZ DE PINEDO: op. cit., pág. 61; sobre la segunda: I. ESTORNES ZUBIZARRETA: op. cit., pág. 46).

Cuando en 1840 se negoció el arreglo foral, el comisionado de la Diputación insistió en que si se establece el impuesto de la sal "prevé gravísimos inconvenientes en la opinión de los navarros, quienes acaso no hay contribución alguna que miren con más horror" (AGN. Actas Diputación - T. 45.-Sesión 24-XI-1840).

(233) AGN. Actas Diputación, sesión 20-24-II-1835.

(234) Archivo Cortes Españolas, leg. 12, carp. 32, cit. por J. A. CASES; "Elecciones y Partidos en España: 1834-1867"; tesis doctoral; Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Madrid, 1978. Espoz y Mina salió elegido por unanimidad (14 votos), los otros dos tuvieron 8 cada uno y en cuarto lugar quedó el Barón de Bigüezal con 6. El cambio en la ten-

dencia política de los representantes de Navarra no obedece a una transformación en la opinión de la clase dominante; la explicación habría que buscarla en "el influjo oficial", tan difícil de contrarrestar operando sobre un cuerpo electoral cuya mitad la componían individuos dependientes de las autoridades de provincias y cuando en todas ellas la presión moral ejercida por los hombres del movimiento supeditaba la libertad del sufragio" (LAFUENTE: op. cit., VI, pág. 140, 141). El nuevo Estamento de procuradores estaba compuesto de lo más avanzado del partido progresista (Ibid.).

- (235) Vid. supra, pág. 228.
- (236) MADRIZ: op. cit., pág. 68.
- (237) "Discurso que el día dos de enero de 1836 pronunció el Señor Don Modesto de Cortázar, Regente del Consejo Real de Navarra en la apertura solemne del mismo", Pamplona, 1836; Imprenta de Javier Goyeneche.
- (238) Ibid., pág. 13: "Tengo la satisfacción de poder esperar que no existe entre todos los individuos que ejercen algún cargo más o menos distinguido en el Consejo Real de Navarra uno sólo que no participe de estas ideas fundadas en la razón y la justicia".
- (239) Mientras la Magistratura se inclinaba por el Liberalismo, los escribanos parece que lo hacían por el Antiguo Régimen (BACON: op. cit., pág. 87, nota 17).
- (240) AGN. Actas Diputación, sesión 6-IV-1836.
- (241) LAFUENTE: op. cit., VI, 143 y ss.
- (242) AGN. Actas Diputación, sesión 11-IV-1836.
- (243) MARTINEZ CUADRADO: op. cit. I, pág. 44: "El Ministerio Istúriz sucesor de Mendizábal convoca elecciones por sufragio censitario directo, las primeras realizadas por este sistema en España, en los Decretos de 22 y 28 de mayo de 1836, de acuerdo con el proyecto

de Ley Electoral aprobado por el Estamento de procuradores".

(244) AGN. Actas Diputación, sesión 9-VI-1836.

(245) MARTINEZ CUADRADO: op. cit. I, pág. 44 "Las elecciones de Istúriz sólo pueden celebrarse en primera vuelta de las dos previstas". El censo electoral en Navarra lo constituían 806 mayores contribuyentes y 94 capacidades (18 abogados, 32 médicos, 12 boticarios, 7 militares, 22 nacionales y 3 doctores); en total 900 electores, de los cuales sólo 145 correspondían a Pamplona. De ellos votaron 633, el 70 % (P. CABALLERO: El Gobierno y las Cortes del Estatuto. Materiales para su historia, Madrid, 1836, pág. 149.

En la primera vuelta salió elegido el Barón de Bigüezal, que iba a la cámara "con el ánimo de combatir los principios avanzados y revolucionarios que habían tomado cuerpo en el año anterior y se presentaban en todas partes con amenazador aspecto" (MENCOS: op. cit., pág. 112)

(246) Para la Diputación Substituyente fueron nombrados: Fidel Ozcáriz y Tomás Egurvide por Pamplona, José María Ezcarti por Estella, Manuel Palacios por Tudela, Agustín Salaverri por Olite, Domingo Bornás por Sangüesa y José María Reparaz por Baztán y resto de la Montaña; todos ellos liberales exaltados. (PIRALA: op. cit. IV, pág. 50).

(247) AGN. Actas Diputación, 4-IX-1836.

(248) TUÑON DE LARA: La España del siglo XIX..., pág. 78.

(249) Ibid., pág. 81-82.

(250) PIRALA: op. cit. II, pág. 37.

(251) LAFUENTE: op. cit. VI, pág. 72.

(252) Ibid., pág. 73-74.

(253) AGN. Actas Diputación. T. 42; sesión 5-III-1838.

- (254) Ibid. T. 40; sesión 17-I-1835.
- (255) AZCONA: op. cit., pág. 362-363.
- (256) MENCOS: op. cit., pág. 109.
- (257) TUÑON DE LARA: op. cit. 81-82.
- (258) Ibid., pág. 89.
- (259) Ibid., pág. 90.
- (260) LAFUENTE: op. cit., VI, pág. 244.
- (261) PIRALA: op. cit., III, pág. 468.
- (262) Ibid., pág. 469.
- (263) MENCOS: op. cit., pág. 125.
- (264) Los sucesos en: PIRALA: op. cit., IV, pág. 76 y ss.
LAFUENTE: op. cit. VI, pág. 246 "La transacción bajo la base de un matrimonio entre la Reina y el hijo mayor de don Carlos, garantizado el cumplimiento de lo que se pactare entre los gabinetes pudo ser hacedero en agosto de 1836. Desde entonces acá, a la par que la impopularidad y la insuficiencia del partido del movimiento se habían hecho palpables, habríase rehabilitado y se encontraba lleno de vida el partido conservador y promulgaba una Constitución conciliadora que presentaba garantías de duración. La Reina tenía un partido que se mostraba dispuesto a sacarle de la dura tutela en que lo tenían Calatrava y sus progresistas.
- (265) Ibid., IV, pág. 48.
- (266) MENCOS: op. cit., pág. 125.
- (267) PIRALA: op. cit., IV, pág. 48-49.

- (268) MENCOS: op. cit., pág. 125.
- (270) R. CARR: op. cit., pág. 163, nota 6: "Debe señalarse que las denominaciones de moderados y progresistas no fueron de uso común con anterioridad a 1840. Las agrupaciones sociales y las doctrinas políticas de ambos partidos están bastante claras ya en 1836 y finalmente, con la Revolución de 1836 empezaron a tomar cuerpo ambos partidos.
- (271) MENCOS: op. cit., pág. 136-137.
- (272) J. MUGICA: Carlistas Moderados y Progresistas. Biblioteca Vascongada de Amigos del País, San Sebastián, 1950, pág. 158.
- (273) J. A. CASES: op. cit., pág. 118.
- (274) Vid. supra, pág. 241 nota 95
- (275) AGUSTIN ARMENDARIZ: liberal exaltado, formó parte de la Junta de Gobierno de Navarra que se formó a raíz de la revolución de 1820; miembro fundador de la Sociedad Patriótica, el 26 de junio de ese mismo año es nombrado secretario interino del gobierno de Navarra. Elegido diputado a Cortes en las constituyentes de 1836, ocupó la cartera de Gobernación durante el Ministerio Calatrava. Diputado progresista por Navarra en 1837, en las elecciones de julio de 1839 se presenta ya con los moderados, pero no es elegido. El 29-XI-1839 firma el Manifiesto Monárquico-constitucional junto con Istúriz, Martínez de la Rosa, Pedro Egaña y Andrés Borrego entre otros. En el mismo año vuelve a ocupar la cartera de gobernación en el Ministerio moderado de Pérez de Castro, y siendo ministro vuelve a ser elegido diputado por Navarra en 1840. Desde el ministerio, facilitará la tarea del arreglo foral de 1841.
- (276) BAZTAN GOÑI: op. cit., pág. 7. Desconocemos la personalidad de Ozcariz, Bornás, Palacio, Azcárate y Lapoya.
- De M. JIMENEZ sólo sabemos que figura como comprador de tierras desamortizadas a la Orden de San Juan de Jerusalén en 1822 y que volvió a ser candidato

to progresista en 1840 y 1858 aunque no resultó elegido.

G. ELORDI, de Estella; liberal progresista; fue presidente de la Audiencia de Manila; diputado provincial en 1836, fue diputado suplente a Cortes en 1837 y diputado a Cortes en 1839. Bisabuelo del nacionalista vasco, ministro de Justicia en 1936: Manuel Irujo.

NAZARIO CARRIOQUIRI es una de las personalidades navarras más destacadas y representativas del siglo XIX que todavía espera una biografía merecida. De origen vasco-francés, su padre puso una tienda de calderería en Pamplona. Concejal del Ayuntamiento en 1834, en 1835 manda la milicia urbana de la capital que acude en ayuda del general Espoz y Mina. Se casa con una Moso de Tafalla y asociado con su cuñada Car men comienza sus negocios como suministrador del ejército. Principal beneficiario de la desamortización de Mendizábal en Navarra, remata fincas rústicas por valor de 3.311.000 reales vellón. Diputado provincial suplente en 1836, al igual que otros progresistas navarros, al final de la guerra, con la fortuna ya consolidada se pasa al moderantismo. De amigo de Espoz se convierte en amigo de O'Donnell y en 1841 colaborará con él en el levantamiento contra Espartero del mes de octubre. Fracasado el golpe, sigue colaborando por la "restauración del orden" en conexión con la sociedad secreta "La Orden Militar española" que se constituye en París con el fin de acabar con Espartero y en cuyo consejo supremo estaban los generales Narváez, O'Donnell y Fernández de Córdoba; y financiará con el mismo fin el periódico de Madrid "El Herald". La empresa merecía la pena y la recompensa a tanto esfuerzo no se haría esperar a la caída de Espartero. Comienza entonces la etapa cumbre de la carrera política y "económica" de Carriquiri: dentro del partido Moderado, sobre el que tenía gran influencia, representa a Navarra en el Congreso ininterrumpidamente desde 1843 a 1863, salvo el bienio liberal 1854-1856. Fue amigo del Marqués de Salamanca y del Duque de Rianzares, con quienes hizo negocios fabulosos; entre sus polifacéticos negocios se encuentran las contratas de obras, como la del muelle del Grao de Valencia, a donde llevó trabajadores de Tafalla; ferrerías en el norte de Navarra (Articuza y Goizarin en sociedad con Fagoaga) ganaderías de toros bravos en Tudela, los famosos "carriquiris"; recaudador de contribuciones de Madrid, fundador de la Sociedad del timbre junto con Salamanca y Girona entre otros, y de una casa de Banca en Madrid, llegando a ser banquero de la Reina María Cristina "quien depositó en él toda su confianza".

Un autor anónimo (SEMBLANZAS DE LOS 340 DIPUTADOS A CORTES QUE HAN FIGURADO EN LA LEGISLATURA 1849 a 1850. Madrid, 1850, pág. 44) nos dice de su actividad política: "moderado de los más tolerante fuera del Congreso, pero dentro es de los más fervidos e insufribles ministeriales. Navarro a toda prueba que siempre está de centinela avanzada para que nadie se oponga a los fueros que en su provincia se conservan. Ya que su señoría es de los más mimados por el gobierno y de los más condecorados por gracia de la Corte, bien podía abandonar odiosas escepciones y aconsejar a los navarros que paguen en la misma proporción que los castellanos".

El 14-III-1864 cesó como diputado a Cortes por Tafalla al ser nombrado por la Reina senador vitalicio; condecorado con la gran cruz de Isabel la Católica, no quiso aceptar en cambio ningún título nobiliario.

Amigo íntimo del general Prim, la revolución del 68 no acaba con su carrera política y es elegido senador por Navarra en 1871 y 1872. Conspira durante la guerra y se dirige al general carlista Pérula para renovar las ofertas (dinero, etc.) de Heredia Spínola con el fin de que reconozca a Alfonso XII. En la Restauración vuelve a representar a Tafalla en las Cortes de 1876 y 1879, y milita en el Partido Conservador.

- (277) AGN. Actas Diputación, T. 41, sesión 19 y 31-XII-1836.
- (278) DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES. CONGRESO; sesión 4-X-1839 en la que Mendizábal a un Armendáriz recién converso al foralismo, le recuerda su antiforalismo de dos años antes, en la sesión del 10-VIII-1837.
- (279) Ibid. Documento del Ministerio de la Gobernación leído en el Congreso el 10-VIII-1837 y que Mendizábal pide vuelva a leerse en la sesión del 4-X-1839 en la que se discutía la Ley de fueros de las provincias Vascongadas y Navarra.
- (280) Ibid. Intervención de Salustiano Olózaga en la misma sesión 10-VIII-1837 en la que se discutía el proyecto de ley sobre traslación de Aduanas y formación de Diputaciones provinciales en las Vascongadas y de cuya comisión era miembro. A petición del mismo fue

leída en la sesión del Congreso de 4-X-1839.

- (281) MUTILOA: op. cit., pág. 367.
- (282) DONEZAR: op. cit. pag. 289 y ss.
- (283) AGN. Actas Diputación, T. 42, sesión 12-I-1837.
- (284) AGN. Actas Diputación, T. 42, sesión 5-III-1838. La Exposición la recoge íntegra J. R. CASTRO: op. cit., pág. 181 y ss.; así como RZ. GARRAZA: Navarra... op. cit., pág. 458 y ss. También la publicó EL ECO DEL COMERCIO el 4-X-1839.
- (285) YAGUAS Y MIRANDA: Análisis histórico crítico de los Fueros de Navarra, Imp. Francisco Erasun, Pamplona, 1838.
- (286) Ibid., pág. 12.
- (287) Ibid., pág. 48.
- (288) Ibid., pág. 27.
- (289) Ibid., pág. 28.
- (290) Ibid., pág. 49.
- (291) Ibid., pág. 49.
- (292) J. A. AYESTARAN LECUONA en el Prólogo a la obra de I. ESTORNES ZUBIZARRETA; op. cit., pág. 29.

CAPITULO IV

LOS FUEOS COMO INSTRUMENTO DE PACIFICACION: EL CONVENIO DE VERGARA

IV.-LOS FUEROS COMO INSTRUMENTO DE PACIFICACION: EL CONVENIO DE VERGARA

La primera Guerra Carlista no fué una guerra foral. Ni los contemporáneos más interesados en que así fuese, los fueristas de entonces, se atrevieron a mantenerlo: "En su origen no hubo para la guerra civil motivo que tuviese relación con el amor que los naturales profesan a sus Fueros" reconocía Julián Egáña (1). De lo contrario, si los carlistas hubiesen salido al campo en su defensa, los liberales vascos hubieran luchado por su abolición. Ni los carlistas lucharon por los fueros, ni los liberales en contra.

En nuestra opinión, los carlistas luchaban contra todas las "innovaciones" o transformaciones que el nuevo orden liberal trataba de imponer y fundamentalmente contra las nuevas formas de producción y de propiedad agraria que se estaban abriendo paso: libertad de arrendamiento, cierre de campos, monetización de la renta, libertad de préstamo, privatización de comunales, etc... que nada tenían de antiforales y que incluso estaban siendo "foralmente" respaldadas (2). Como se ha apuntado anteriormente (3) es posible que una de las causas que expliquen la virulencia que la contienda adquirió en las cuatro provincias vascas

fuera la extensión que el proceso de privatización de comu
nales había alcanzado, muy superior al parecer al de otros
lugares. Ello no quita, para que como venimos repitiendo,
por la situación creada por el régimen foral: la forma es-
pecífica de compensar el servicio militar por dinero, el
libre comercio de la sal, la ausencia de derechos de adua-
nas, etc., los vascos de las cuatro provincias tuvieran
más motivos para aferrarse al Antiguo Régimen que los del
resto de la península. Pero es muy posible que entre todas
las innovaciones que se estaban operando y que incidían ne
gativamente en sus condiciones de vida, no distinguiesen
lo que era privativo, ni lo identificasen con los fueros,
que como señala Henningsen "ni uno entre veinte de los que
luchaban conocía su significado" (4).

Por ello no estamos tampoco de acuerdo con los
que negando el carácter foral de la guerra afirman que "el
Carlismo utilizó en provecho propio las aspiraciones regio-
nalistas vascas subordinándolas a sus propios fines" (5).
Como se ha visto, los fueros apenas aparecen mencionados
en el campo carlista hasta el tercer año de guerra y su
aparición más bien fue provocada por la necesidad de defen-
derse de las promesas liberales de conservarlos bajo el
trono de Isabel II. Pero sobre todo, hablar de "aspiración
regional" en 1833 es aplicar una realidad que surge con el
movimiento romántico de mediados de siglo y exclusivamente
a nivel de "intelligenzias" a primeros del siglo XIX cuan-

do no existía un sentimiento de colectividad y el único pa-
triotismo por el que se vibraba en ambos campos era espa-
ñol. Los fueros se defenderán con criterios pragmáticos e
individualistas: por las ventajas personales que proporci-
onan; de ahí que los fueros que pudieran defender el campe-
sinado vasco nada tenían que ver con el orden institucio-
nal foral como expresión de autogobierno, en^{el} que ellosⁿⁱ a
nivel municipal ni provincial participaban, y sí con las
ventajas fiscales y militares que comportaban.

Si los campesinos carlistas no separan lo "foral"
de lo "liberal", sólo saben de transformaciones que deterio-
ran sus condiciones de vida y todas son por un igual fruto
de la "revolución", también los liberales vascos entendie-
ron que los fueros eran parte inseparable del Antiguo Régi-
men, y las ventajas que comportaban era el precio que de-
bían pagar por engancharse al carro de la revolución libe-
ral española. La alternativa no era entre centralismo y ré-
gimen foral, sino entre liberalismo y Antiguo Régimen del
que los fueros eran parte. En consecuencia, entre 1820 y
1823 no sólo Navarra, sino también las Vascongadas renun-
ciaron a ellos sin resistencia (6).

Fué posiblemente la experiencia del Trienio la
que les hizo ver el lado negativo de la uniformidad y cuan-
do en 1833 se reinició el proceso liberal, la Diputación
del Reino de Navarra, que no dudó en adherirse a él, mantu-

vo desde el principio una actitud transaccionista. Aunque lo que "cedían generosamente" en aras de la unidad constitucional no les interesaba conservar, sabían que era imprescindible para configurar la nueva concepción de Estado y trataron de negociar el régimen foral en su totalidad para salvar "lo bueno del fuero" (7). La misma postura sería la seguida por las diputaciones de Vizcaya y Guipuzcoa, aunque más combativa, pues parece ser que había "más bueno por salvar" en Vizcaya que en Navarra.

De ahí que conviene apuntar aunque sea someramente y sin poder contar para ello con estudios suficientes, sobre las ventajas reales que el orden foral proporcionaba, el distinto interés por los distintos aspectos del fuero en las distintas provincias y dentro de ellas entre los distintos sectores sociales.

Parece evidente que en Navarra el orden institucional, concretamente las Cortes estamentales, no interesaban a nadie; al campesinado y pequeña nobleza carlista porque no participaban en ellas y su órgano representativo: la Diputación, les había traicionado; y a la alta nobleza terrateniente que tenía asiento en Cortes porque quería librarse de un clero que obstaculizaba las reformas y sobre todo porque lo que pretendía era participar en el legislativo español, en la formación de la voluntad general nacional. Tampoco hubo interés en conservar la organización fo-

ral municipal; cuando en 1839 el Gobierno ofrece respetarla, los navarros prefirieron optar por la nueva administración municipal liberal (8).

La situación era distinta en Guipuzcoa y sobre todo en Vizcaya (9). Las Juntas Generales y la organización municipal ponían el poder en manos de la oligarquía local y provincial y la amplitud de la participación alcanzaba desde los grandes jauntxos liberales hasta los pequeños jauntxos que formaban la "elite" carlista; por ello será Vizcaya la que mayor resistencia ofrezca a la desaparición de la organización foral y ello tanto por parte de los carlistas como de los liberales. Mientras los carlistas vizcaínos invitaron a Carlos V a jurar los fueros del Señorío, de nada parecido hay noticia se le ocurriese a la Junta Gubernativa de Navarra; y en 1837, mientras la Diputación navarra juraba la nueva Constitución sin condiciones, las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya se resistían a ello porque suponía la pérdida de su autonomía administrativa (10).

El traslado de las Aduanas también tenía desigual respaldo en las distintas provincias; en Navarra era defendido por todos los liberales, tanto moderados como progresistas; en Guipúzcoa, en cambio, la opinión liberal estaba dividida y eran los comerciantes progresistas donostiarras los únicos que abogaban por su traslado; al parecer fué en Vizcaya donde el proyecto gozaba de menor respaldo (11). El hecho de que fueran las reconstruídas Juntas Generales

de Guipuzcoa y Vizcaya, dominadas por los moderados, las que eligiesen los comisionados para tratar con el gobierno la modificación de fueros que siguió al Convenio de Vergara y a la Ley 25-X-1839, explica la resistencia en transigir en este asunto, que fue el principal motivo por el que Navarra se separó de la Comisión negociadora conjunta (12).

Por último, las ventajas militares y fiscales interresaban a todos. Aunque hay que tener en cuenta que si bien la redención del servicio militar a cargo de la hacienda local pudiera parecer una medida popular, también tenía una ventaja indudable para la clase terrateniente al no privar a la agricultura de lo mejor de la mano de obra de la provincia (13) y es más que probable que la autonomía fiscal beneficiase fundamentalmente a aquellos que la administraban: las oligarquías locales, que intentarían siempre hacer un reparto favorable a sus intereses.

El interés por los fueros debió pesar más entre los carlistas vascongados que entre los navarros y ello más a nivel de dirigentes que de la tropa y pueblo (14), por ello el programa "Paz y Fueros" tuvo mayor incidencia en Guipúzcoa y Vizcaya que en Navarra que al final no aceptó acogerse al Convenio de Vergara.

En cambio, en relación inversa al interés foral, fué en Navarra donde el clero debió de tener mayor protagonismo y la motivación religiosa, incluso con relativa auto-

nomía, debió de pesar más. Se ha visto cómo la "presión clerical" era mayor en Navarra, también en Alava, sobre todo lo del clero más directamente amenazado por la desamortización: el regular (15). El partido clerical encontrará allí su principal apoyo y si finalizada la guerra la mayoría de los jefes realistas navarros no se acogen al Convenio y optaron por el exilio, no es porque fuesen más foralistas como se ha llegado a decir, sino porque eran más absolutistas (16). Raymond Carr ha apreciado esta realidad al escribir: "los navarros como núcleo del carlismo, nunca parecen haber sentido gran interés por los fueros: su credo era el trono y el altar" (17).

Al clero, poco o nada importaban los fueros compatibles con el régimen liberal; ellos defendían el Antiguo Régimen en su totalidad y poco atractivo podía tener para ellos el programa "Paz y Fueros" con que se intentaba acabar la contienda. El tratar de dárselo para atraerse a este sector social tan decisivo fue motivo de preocupación por parte de Muñagorri que proyectó formar una comisión con los "eclesiásticos más aptos de entre los que viven bajo el dominio de D. Carlos" para discutir "un arreglo económico del clero sobre la base de la permanencia del DIEZMO"; "Se trataría de que la dotación del clero estuviera equitativamente distribuida" pues reconocía que fuera del alto clero de Pamplona, el clero vasco estaba mal dotado (18). El arreglo no llegó y los fueristas tendrían que luchar contra la

enemiga de este sector social para crear las condiciones de la Paz. En un oficio del cónsul de Bayona a Espartero se dice que el proyecto de Naroto de negociar la paz tiene detrás a las tropas y poblaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya y "sólo se teme una asonada contra él en Azpeitia, Azcoitia y Oñate, etc... tierra de JESUITAS Y CAPUCHINOS" (19).

Y es que en las negociaciones para la paz, si se miraba por los intereses de los militares realistas a los que se conservaban grados y sueldos y se mantenía la esperanza de salvar el régimen foral, nada se garantizaba al clero. Por eso no es de extrañar que después del Convenio sigan en la lucha: "los curas y frailes y los de cualquier otra categoría que están mal hallados con que los vizcaínos y guipuzcoanos hayan desistido de sostener a D. Carlos no dejan de trabajar. Usted sabe qué gente es y que no se dan jamás por vencidos", escribía el General Nazarredo al donostiarra Luzuriaga el 15-IX-1839 (20).

En Navarra será también el clero el que mantendrá la contestación al régimen a partir de 1841, el que no aceptará la ley de modificación de fueros de 1841, que alguno de ellos bautizará como ley "despacha-curas" y el que a la postre movilizará de nuevo al campesinado navarro para la nueva cruzada de 1872 (21).

Los fueros, pues, poco o nada contaron entre los

carlistas navarros y en esta provincia de forma más manifiesta que en las Vascongadas el arreglo foral fué iniciativa de los liberales que supieron aprovechar el Convenio a pesar de que los navarros no se habían acogido a él y que siendo a su vez los menos forales de las cuatro provincias supieron sacar el mejor partido, por lo menos a largo plazo, de la situación.

Pero ¿cómo y cuándo surgió la idea de acabar la guerra por medio de la conservación de los fueros?. No vamos a hacer aquí un relato cronológico de los hechos que precedieron al Convenio de Vergara, pero sí conviene dejar constancia de que la abundante literatura que existe sobre él es contradictoria; no hay dos relatos iguales. Es uno de los momentos que más puede despistar al estudioso de la Historia por la profusión de testimonios "escritos en caliente" y con intencionalidad política. Por ello en todo momento hay que tener en cuenta no sólo lo que se dice, sino la personalidad del que lo dice y la parcialidad desde la que escribe. Los carlistas de todos los tiempos que rechazan el Convenio: Ferrer, Oyarzun, Echave Sustaeta...verán en él la traición de un general; Maroto a su rey. Para los carlistas que lo aceptaron: Arizaga, Maroto, Urbiztondo...fué una salida política, la más ventajosa que permitió "sacar todo el partido posible a la paz" en una situación irreversible de divisiones irreconciliables en el seno del carlismo, con un ejército insubordinado, una hacienda exhausta y

un pueblo esquilado por los impuestos y cansado de guerra. Los liberales moderados, tanto del País Vasco como de Madrid (Egaña, Satrústegui, Aviraneta, Valera, Burgos) insistirán en la motivación foral de la guerra, la consiguiente importancia de los fueros como medio de pacificación y la dificultad de acabarla exclusivamente con las armas... Tratarán de infravalorar la actuación de Espartero, realzando en cambio la del Gobierno y presentarán el Convenio como una transacción, incluso un pacto que obliga religiosamente, por el cual los carlistas bajaron las armas a condición de que se les conservasen los fueros. Coincidirán con esta interpretación los relatos e informes extranjeros, tanto particulares como oficiales. Por el contrario, los liberales progresistas insistirán en la motivación religiosa y reaccionaria de la guerra, en la escasa importancia de los fueros, en la superioridad militar del ejército liberal y en el mérito incuestionable de Espartero; las cláusulas del Convenio serán para ellos más las condiciones de una capitulación que un pacto entre iguales.

Ante versiones tan contradictorias, en esta ocasión más que nunca, las distintas interpretaciones, son datos preciosos que descubren las distintas intencionalidades políticas, que ayudan a rehacer el rompecabezas histórico y a acercarnos a la comprensión del momento.

En nuestra opinión, los carlistas defendían el

Antiguo Régimen de forma "global"; Antiguo Régimen del que formaban parte los fueros y que por lo mismo respetarán, pero cuya defensa no aparece en ningún momento como móvil de la contienda. Los liberales vascos, que en 1820 habían admitido el nuevo régimen y la consiguiente homologación con el resto del Estado sin resistencia alguna, contaban ya con la experiencia centralista y sus desventajas. Van a ser precisamente los liberales moderados vascos, representantes de las clases dominantes, los que sin cuestionar la "unidad constitucional", o lo que es lo mismo, el mercado nacional y la participación en la formación de la voluntad general, tratarán de aprovechar las circunstancias creadas por la guerra para tratar de compatibilizar esa "unidad constitucional" con "lo bueno del fuero". En Navarra, desde un principio mantendrán una política transaccionista y de negociación global del régimen foral, ofreciendo apenas resistencia a las transformaciones institucionales que no le interesan, pero amenazando con el "peligro carlista" cuando de lo que ellos llamarán "fueros económicos" se trata. A ellos interesará presentar la guerra como "foral"; ellos lanzarán, junto con el resto de moderados vascos la bandera PAZ y FUEROS, que con la colaboración de Inglaterra y Francia, interesadas en contar con unas provincias autónomas para conservar su actividad mercantil, y del Gobierno moderado de Madrid, que utilizará los fueros como arma política contra los progresistas, acabará siendo la fórmula, que plasmada,

con más o menos precisión en Vergara acabe con la guerra.

En gran medida, la causa de los fueros fué inducida interesadamente desde el campo liberal al carlista y fomentado el "particularismo vasco" con ese fin entre una población que se había lanzado al campo de batalla en defensa de una causa, la más española: "restaurar en la España el trono y el altar".

La guerra carlista, sería pues, la gran oportunidad con que contó la oligarquía navarra, en nuestro caso, para mantener en un estado liberal moderno, jurídicamente igual por definición unas desigualdades jurídicas, que presentará como resto de sus antiguos fueros y libertades.

Esta hipótesis, explica, por otro lado, comportamientos difíciles de comprender de otro modo, como la mayor intransigencia del murciano Maroto que del vizcaíno Latorre en ceder en Vergara sobre el asunto de los fueros, el desmolido foralismo de los moderados de Madrid, el altruismo de Inglaterra y Francia al defender las "seculares tradiciones y libertades vascongadas"... pero sobre todo, la aparente contradicción de los liberales moderados vascos en defender los fueros, insistiendo en el carácter foral de una causa contra la que ellos se habían pronunciado.

No obstante haber renunciado a hacer un relato pormenorizado de los hechos, conviene decir algo de las circunstancias

cunstancias que rodearon el acto de Vergara. Las proclamas que los dos generales en jefe: Espartero y Maroto dirigieron a sus respectivos ejércitos a raíz del Convenio son el mejor testimonio de la relación de fuerza que se daba entre ellos; la moral del vencedor y el vencido queda reflejada en ellas y prueba que el Convenio Vergara no fué un pacto entre iguales, sino que estuvo próximo a una capitulación por parte carlista.

El 30-VIII-1839, el general Maroto se dirigía así desde el cuartel general de Villareal de Zumárraga "A los voluntarios y pueblos vascongados":

"Nadie más entusiasta que yo para sostener los derechos a el Trono de las Españas en favor del Sr. D. Carlos María Isidro de Borbón cuando me pronuncié; pero ninguno más convencido por la experiencia de multitud de acontecimientos de que jamás podría permitir la felicidad de mi patria, único estímulo para mi corazón; y por lo tanto, unido al sentimiento de los gefes militares de Vizcaya, Guipúzcoa, Castellanos y de algunos otros, he convenido para conciliar los extremos de una guerra desoladora, y procurado la Paz la Paz tan deseada por todos según publica y reservadamente se me ha hecho conocer. La falta de recursos para sostener la guerra después de tantos años, y la demostración pública de odiosidad a la marcha de los ministerios me han comprometido al último paso... He convenido con el General Espartero, autorizado en debida forma por todos

los generales referidos que en estas provincias se concluya la guerra para siempre; y que todos nos consideremos recíprocamente como hermanos y españoles, cuyas vases se publicarán...

La miseria toca su extremo en todo el ejercito, después de tantos meses sin socorro; los gefes y oficiales tratados como de peor condición que el soldado, pues a este se le da su vestuario; mas a aquel una corta ración, mirándolos de consiguiente marchar descalzos, sin camisa y en todos conceptos sufriendo las privaciones y fatigas de una guerra tan penosa...

Si algunos fondos han entrado del extranjero los habeis visto disipar entre los que los recibían o manejaban. El país abrumado en fuerza de los excesivos gravámenes, ya nadie tiene con que atender sus necesidades, y el militar que antes contaba con el auxilio de su casa, en el día siente las angustias de sus padres, que lloran la generosidad de un pronunciamiento que solo la muerte y la desolación les promete. Provincianos: sea eterna en nuestros corazones la sensación de Paz y unión entre españoles, y desterramos para siempre los enconos o resentimientos personales: esto os aconseja vuestro compañero y general.- Rafael Maroto" (22).

Maroto no exageraba; esa era la situación real del campo carlista vísperas del Convenio, reconocida incluso por sus propios historiadores (23). Por el contrario, desde que Espartero había cogido las riendas del ejército del Norte y había conseguido regularidad en las pagas y disciplina en las filas, los éxitos militares se sucedían y en

aquel momento, la casi totalidad de Alava y Vizcaya estaban en sus manos (24). La proclama que el 1-IX-1839 dirige "a los pueblos vascongados y navarros" respira triunfalismo:

"Seis años de una guerra que jamás debió encenderse en estas hermosas y florécientes provinciaslas han reducido al lamentable estado que hoy se miran... Todo en fin, ha experimentado el desconcierto y la amargura, haciendo cruel y precaria la existencia...

¿Y contra quién y por quién se ha hecho la guerra?. Contra españoles por españoles; contra hermanos por hermanos.

Vosotros fuisteis sorprendidos. Se os hizo creer en un principio, que los defensores de Isabel 2ª atentaban contra la religión de vuestros padres, y los ministros del Altísimo que deberían haber cumplido la ley del Evangelio, y su misión de proclamar la paz, cuidando de curar las conciencias, fueron los primeros que trabajaron para encender esa guerra intestina, que ha desmoralizado los pueblos donde las virtudes tenían asiento.

Vosotros luego, fuisteis engañados por un príncipe ambicioso, que pretende usurpar la corona de España...

Persuadíos navarros y vascongados del error de la injusticia de la causa que se os ha hecho defender y de que jamás hubierais alcanzado otro galardón que consumir vuestra ruina.

Yo sé que los pueblos están desengañados: que en su corazón sienten estas verdades; y que aman y desean la PAZ a todo trance. La PAZ ha

sido proclamada por mi en Alava, Vizcaya y Guipuzcoa... El general Maroto y las divisiones Vizcainas, Guipuzcoanas y Castellanas, que sólo han recibido desaires y tristes desengaños del pretendido rey, han escuchado ya la voz de PAZ y se han unido al ejercito de mi mando para terminar la guerra. Los campos de Vergara acaban de ser el teatro de la fraternal unión. Aquí se han reconciliado los españoles y mutuamente han cedido de sus diferencias, sacrificándolas por el bien general de nuestra desventurada Patria. Aquí el oscuro de PAZ y la incorporación de las contrarias fuerzas, formando una sola masa y un solo sentimiento, ha sido el principio que ha de asegurar para siempre la unión de todos los españoles bajo la bandera de Isabel 2ª, de la Constitución de la monarquía y de la Regencia de la madre del pueblo, la inmortal Cristina...

Y si las fuerzas alavesas y navarras, que tal vez por no tener noticia no se han apresurado a disfrutar de sus beneficios, quisiesen obtenerlos, dispuesto estoy a admitirlas...

Vascongados y navarros: que no me vea en el duro y sensible caso de mover hostilmente el numeroso , aguerrido y disciplinado ejército que habeis visto. Que los cánticos de PAZ resuenen donde quiera que me dirija. Que se consolide para siempre la unión; objeto de mis cordiales y sinceros votos, y todos encontrareis un padre y protector en EL DUQUE DE LA VICTORIA" (25).

En Vergara quedó muy claro quien era el vencedor.

No se trataba de reconocer la parte de razón que pudo haber en ambos bandos y de llegar a una transacción. El error y

la culpa de la guerra estaban exclusivamente del lado carlista. Lo más que se les concede es que fueran "sorprendidos por los ministros del Altísimo" y "engañados por un príncipe ambicioso", pero "la causa que defendían era injusta", la justicia y la razón estaban por entero en "la bandera de Isabel 2ª, la constitución de la monarquía y la Regencia de la madre del pueblo, la inmortal Cristina"; de ellos era el triunfo. La "fraternal unión", "la reconciliación", se daba entre el hermano "bueno" y el "malo" que reconoce sus culpas y se arrepiente e incluso se incorpora a las filas hasta entonces enemigas para seguir luchando contra la causa que anteriormente defendían. Vergara fué ante todo el triunfo del Liberalismo sobre el Antiguo Régimen.

Algo que llama la atención de las dos proclamas, es que en ninguna de ellas se mencionen los fueros. En aquellos momentos tan decisivos en que se pretendía ganar adhesiones a la causa de la paz, ¿por qué no se recuerda la promesa foral?, ¿no era asunto que pudiera hacer vibrar a la tropa ni a las poblaciones? o por el contrario ¿la imprecisión de la promesa no la hacía popular?; ¿era quizá todavía sólo asunto de "jefes" y "élites"?. Porque si nada se dice de los fueros en esta ocasión, lo que sí es cierto es que fueron el tema central y más conflictivo de las negociaciones que precedieron al Convenio.

Maroto, al comienzo de las mismas había pretendido una auténtica transacción entre los principios liberales

y carlistas y exigía como contrapartida al reconocimiento de la soberanía de Isabel II, el exilio tanto de D. Carlos como de Maria Cristina, el Gobierno de España por un Consejo de Regencia, el matrimonio de la reina con un hijo del pretendiente, una Constitución moderada sobre las bases del Estatuto Real, la conservación de los fueros vascongados, una amnistía general y el reconocimiento de grados para jefes y oficiales (26).

La superioridad militar y la intransigencia de Espartero habían hecho descender las exigencias: sólo el reconocimiento de grados era aceptado por el general liberal, que había hecho de la defensa de la Monarquía de Isabel II, la Constitución de 1837 y la Regencia de Maria Cristina, una divisa que venía repitiendo con machacona insistencia, (27). Cuando Muñagorri levantó su bandera PAZ y FUEROS, Espartero le negó su colaboración a pesar del padrinazgo gubernamental, "por tratarse de una fuerza armada que proclama principios que no están conformes con los que han jurado los españoles que defienden el trono de Isabel II y la Constitución" (28). Y por lo mismo, desde el comienzo de las negociaciones con los carlistas se negaba a prometer la conservación de los fueros vascongados pues "respecto a fueros ni yo ni el gobierno podemos otorgar y si sólo proponer a las Cortes" (29).

Ante la intransigencia de Espartero, Maroto, que después de sucesivas claudicaciones había hecho de la garantía

de fueros la última condición para "una paz honrosa", rompió las conversaciones, dispuesto a reconciliarse con D. Carlos y a seguir la guerra (30). Fué el vizcaíno general Latorre el que reanudando por su cuenta la negociación, en último término forzó su final venciendo la resistencia de algunos jefes, entre ellos los de la división castellana que se oponían "a toda composición que no asegure al país vascongado sus fueros" (31).

No hemos encontrado ninguna explicación al desinteresado celo foral del murciano Maroto y a "la noble determinación de los castellanos que estraños de todo punto a las provincias parece que las franquicias de éstas debía serles indiferentes" (32). Pudo haber presiones de los representantes extranjeros que participaron en las negociaciones o lo más probable de los fueristas liberales vascos que hacía tiempo que estaban en contacto con ellos. Ideológicamente ¿podía justificarse como intento de salvar lo salvable del ideal tradicionalista? (33).

Lo cierto es que en Vergara nada se concluyó sobre fueros; todo quedaba por hacer. El primer artículo del Convenio rezaba sí: "El Capitán General D. Baldomero Espartero RECOMENDARA con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a PROPONER A LAS CORTES LA CONCESION O MODIFICACION DE FUEROS" (34). El compromiso con los carlistas en este asunto se reducía a una mera recomendación por parte de Espartero y a una propuesta por

parte del Gobierno; la voluntad nacional, representada en Cortes tenían la última palabra. Los carlistas, ausentes de ellas habían concluido su tarea; la defensa foral pasaba a otras manos más combativas. En última instancia, la conservación de los fueros no iba a ser el resultado de un pacto entre carlistas y liberales, sino entre liberales moderados vascos y españoles; o lo que es lo mismo entre la oligarquía vasca y la central.

Por eso no importaba que los carlistas navarros no se hubiesen acogido al Convenio, la política "foral" tenía otras finalidades que conseguir la paz.

Algo que en 1820 se hubiera creído imposible: la conservación de fueros dentro del Estado liberal, las circunstancias creadas por la guerra lo hicieron realidad.

Cuatro son los pilares fundamentales sobre los que se asienta el éxito de la empresa: La iniciativa de los moderados vascos, la colaboración interesada de Francia e Inglaterra, las divisiones y extenuación del bando carlista, y sobre todo el apoyo de un gobierno moderado que utilizará los fueros como arma política contra los progresistas.

1. -INICIATIVA DE LOS MODERADOS VASCOS: EL FUERISMO COMO OPCION POLITICA LIBERAL.

La iniciativa de utilizar los fueros como instrumento de pacificación, partió de los liberales moderados vascos y aunque parece que el padre de la idea fué "una persona de mucha consideración de Bilbao" (35), la empresa va unida al nombre de José Antonio de Muñagorri, escribano del guipuzcoano pueblo de Verástegui, rico propietario, industrial y contratista de obras (36), que el 18 de febrero de 1835 y por mediación del navarro Barón de Bigüezal (37) se presentó a los ministros de Estado y Guerra a explicarles el plan que había concebido para terminar la guerra civil (38). De cualquier forma la empresa no era producto de la imaginación de un hombre genial, sino la expresión política de un grupo social, la oligarquía vasca que la apadrinó y respaldó: "vascongados influyentes" (39), distinguidos y ricos propietarios de las Provincias" (40), "familias acomodadas de Guipuzcoa y "avarra" (41), "personas de ilustres apellidos vascos, verdaderos directores de los organismos forales, los cuales podían actuar abiertamente por su filiación liberal" (42); estos serían los primeros FUERISTAS.

Pero la idea de mantener los fueros o parte de ellos dentro del régimen constitucional liberal, no era un invento nuevo sino la práctica política que desde 1833 venían intentado la Diputación del Reino de Navarra y las diputaciones liberales vascongadas.

Si desde el comienzo de la implantación liberal la oligarquía navarra, a través de la Diputación mantiene

una política transaccionista con el régimen foral tratando de ceder "generosamente" aquello que no interesa para conservar "lo bueno del fuero" y que se traduce fundamentalmente en ventajas fiscales, es muy posible que a partir de la revolución de La Granja el miedo a la radicalización revolucionaria le haga valorar más las ventajas de mantener alguna forma de control provincial y vea en los fueros un valladar contra los excesos revolucionarios. Por ello, sin renunciar a formar parte de la Monarquía constitucional española intentará, en palabras de Fermín Caballero "jugar a dos barajas y comer a dos carrillos" (43). Tratan en definitiva de hacer compatible su participación en el Estado liberal con lo que ellos consideran "fueros racionales y útiles", que si en el Antiguo Régimen, debido al absolutismo monárquico eran muchas veces letra muerta, dentro del nuevo orden liberal podían tener un alcance mucho más efectivo. Esta es la esencia del FUERISMO como opción política que aparece a lo largo de la guerra en el campo liberal, y que como ISMO político contemporáneo, no tiene, que sepamos, parangón.

El fuerismo, pues, no es carlista; los partidarios de D. Carlos no separaban los fueros de las demás instituciones del Antiguo Régimen; EL FUERISMO NO ES LIBERAL, y no aparece como respuesta particula-

rista en defensa de la expresión política de un pueblo diferenciado, sino como defensa de unas particularidades jurídicas y organizativas inherentes al Antiguo Régimen y que se trata de "trasplantar" al nuevo estado liberal. Por eso la habilidad de los FUERISTAS, ya así se les llamaba entonces (44), no fue tanto la de separar la causa de los fueros de la de D. Carlos; sino muy principalmente, la de separar la causa de los fueros de la del Antiguo Régimen para hacerlos en la medida de lo posible compatibles con el estado constitucional moderno. A partir de ese momento la defensa de los FUEROS cobra sustantividad propia y la falta de concreción de los mismos por la misma dificultad que supone la acomodación de unas instituciones correspondientes a formaciones sociales del pasado a una sociedad moderna será a su vez garantía de su propia supervivencia política.

Habría que esperar al Romanticismo para que los fueros pasen a ser encarnación del "espíritu vasco", pero no podemos argumentar como hoy se está haciendo que se trataba de salvar el principio de autogobierno por encima de las transformaciones institucionales que los tiempos imponían, porque en aquel momento no existía conciencia no sólo de nacionalidad, sino tan siquiera de colectividad diferencial, aunque objetivamente lo fuera, con voluntad política. Los fueros exenciones y privilegios se defienden con criterios pragmáticos e individualistas, y por lo mismo se renun

cia con facilidad a "aquellos fueros y libertades que han encontrado acogida en la Constitución de la Monarquía Española" (45). No podía esperarse otra cosa de un momento histórico en el que la filosofía dominante lo imponía; en el que el INDIVIDUALISMO era el ingrediente constitutivo del primer liberalismo y en el que no había sitio para protagonistas colectivos.

La empresa PAZ Y FUEROS fué en gran medida inducida y trabajada por los moderados en el campo carlista durante los últimos años de guerra. En 1837 Muñagorri reconocía que "convenía ante todas las cosas preparar más de lo que estaba la OPINION DE LAS MASAS (46) y hasta 1838 se empleó en "disponer el ESPIRITU PÚBLICO de las provincias en favor de la empresa Paz y Fueros por medio de sus diarias comunicaciones con los jefes militares, los sargentos y la tropa diseminada por el país"(47).

Aunque la empresa fracasó en su intento de crear una tercera fuerza militar bajo la bandera Paz y Fueros "contribuyó a preparar las cosas", según el ministro Arrázola que con frase poco afortunada afirmaba en el Senado en octubre de 1839: "yo siempre he visto que en fuerza de hablar de un asunto llega a ser algo para bien o para mal y por eso se dice "calumnia que algo queda" (48); y el mismo ministro reconocía que gracias a ella "despertaron" los carlistas a la causa de los fueros (49).

El éxito de Vergara fué posible, pues, según el fuerista Egaña por "el cambio operado en el ESPIRITU PUBLICO de las provincias por el INFLUJO MAGICO del amor a la PAZ y a los FUEROS, que una vez EXCITADO en los pechos vascongados, absorbió todas las demás cuestiones enlazadas con la dinástica" (50).

Y si "la verdadera MAGIA del emblema que adoptó Muñagorri para su empresa consistía en la unión de los Fueros con la Paz" (51), hay indicios para pensar que la Paz pudo ser un resorte más decisivo que los FUEROS. Los comisionados de Hernani, agentes del conspirador Aviraneta dan testimonio de que en conversaciones con notabilidades carlistas "se desentendieron de los fueros, como cuestión que no les llamaba la atención, ni les interesaba, y únicamente pretendían que la paz fuese general (52). En la accidentada revista de D. Carlos a las tropas de Elgueta, éstas se niegan a vitorear "¡Viva el Rey! ¡Viva la Religión! y no para gritar ¡Vivan los fueros!, grito que por otra parte parece que nunca salió de las tropas carlistas, sino ¡Viva Maroto! ¡Viva la Paz! (53). Y cuando la PAZ se hizo posible y Euzkadi se negaba a incluir entre las cláusulas del Convenio una confirmación definitiva de los fueros, se trasladaron a Elorrio los Auxiliares liberales de Bilbao "para estimular a las tropas carlistas que no soltasen las armas de la mano" sin aquella concesión (54), ¡Tal era la confianza que tenían en el foralismo carlista!.

El plan fuerista tuvo una doble proyección: "hacia dentro" entre la población y tropas carlistas en la medida que estos defendían el antiguo orden de cosas, se trataría de identificar FUEROS con situación anterior a la guerra y hacer depender de ellos la felicidad y prosperidad del pueblo vascongado; a la vez que se fomentaría el particularismo y el odio al castellano y sobre todo la desafección al Rey. "Hacia fuera", entre los medios políticos y gubernamentales, se insistiría en la imposibilidad de acabar la guerra por las armas y propondrían la conservación de los fueros como medio de pacificación.

El éxito del plan, sin embargo, se debió más a causas ajenas que a su propia bondad; por un lado, al agotamiento y división de las fuerzas carlistas; por otro a la colaboración interesada de los moderados y el gobierno de Madrid.

Testimonio de los principios que presidieron la maniobra fuerista hacia el interior es el panfleto titulado "Carta de un casero a los hojalateros de Castilla". que traducido al vascuence se repartió en todos los pueblos y entre los batallones "de manera que no había voluntario que no tuviese un impreso" (55), y que "lo leyeron con avidez como cosa no vista hasta entonces en suelo vascongado" (56). De ella entresacamos los siguientes párrafos:

"En tiempos del rey Fernando 7º vivíamos los vas-

congados en alagüena paz, éramos felices y nuestra prosperidad se aumentaba de día en día bajo la observancia de las antiguas leyes o fueros que heredamos de nuestros mayores...

Apenas el rey cerró los ojos vinieron inmediatamente unos cuantos castellanos holgazanes a engañar los honrados y nobles vascongados, sublevándolos contra la hija querida de aquél bajo el pretexto de defender la religión y los fueros, cuando nadie pensaba en atacarlos en lo más mínimo. ¿Y qué sucedió? Dando crédito a estos embusteros, empuñamos las armas...

Al principio de la guerra, vascongados eran los jefes de nuestra juventud, vascongado era el famoso Zumalacárregui, que esos araganes e incapaces castellanos hicieron matar...

Después vino una cáfila de flojos castellanos, que necesitan macho o burro para trasladar se de un punto a otro. Ellos trageron un hombre que llaman Rey... con ánimo de quitar, a costa de nuestra sangre, la corona a su sobrina, no de conservar nuestros fueros... Comenyebeben a nuestra costa, viven en la depravación...

Si don Carlos es el rey de Castilla, ¿por qué no va a sus estados?... Los Castellanos llenos de rencor con la ira del tigre, son los dueños de nuestra juventud, de nuestros pueblos y de nuestras haciendas, dominando a todos los vascongados. Tengamos paz y si esas gentes son tan valientes y fuertes, que se vayan a los anchos campos de Castilla.

Oid también vosotros, hojalateros asquerosos, holgazanes, malvados, marchaos con vuestro

rey imbecil...

Sí, una voz resonara más fuerte, clamando que los vascongados quieren paz, que quieren abrazarse para que no se vierta más sangre por ese hombre nulo que se titula Rey (57).

De la segunda parte del proyecto, de la presión sobre el gobierno de Madrid nos dice algo la Representación que los fueristas vascos enviaron a la Reina Regente en diciembre de 1838, y que tiene mucho de chantaje y amenaza:

"La paz es el principal deseo de los vascongados... La paz es el grito universal en todas las ciudades del reino... Y ¿Puede obtenerse esta paz por los medios empleados hasta ahora?...

La importante cuestión que yo someteré al juicio de V.M. es si no sería posible obtener la paz sin sacrificar más sangre ni más tesoros. De cada cien hombres instruidos o que poseen propiedades en estas provincias los noventa y ocho favorecen la causa de V.M. y naturalmente desean la paz. Se me preguntará ¿porqué esos hombres no emplean sus talentos y recursos para poner término a la guerra? A esto responderé que es porque consideran sus fueros como la causa principal de su antigua prosperidad y temen que si la causa de V.M. triunfa, queden suprimidos. Esta es la razón que tienen para no hacer uso del influjo que puede ejercer sobre los soldados carlistas que antes eran sus colonos. Temen también que aunque D. Carlos fuese hecho prisionero o arrojado de España,

continuaría aún la lucha, porque levantándose entonces el estandarte de los fueros, todos los vascongados volarían a su defensa; una fuerza más compacta y poderosa que el actual ejército carlista pelearía en defensa de las libertades vascongadas, y en tal caso ó la nación española y el tro no tendría que humillarse ante los vascongados victoriosos, concediéndoles de muy distinto modo los fueros que ahora reclaman, o habrían de conquistar este país, reduciéndole a un montón de ruinas, pues no de otro modo podría conseguirse la paz...

Ni sería extraño tampoco ver a los gobiernos liberales que en el día sostienen la causa de V.M. amparar la de las provincias, porque entonces el ejército de V.M. pelearía para esclavizar a un pueblo libre... porque Inglaterra consideraría a los vascongados como un pueblo que defendía sus libertades...

Los carlistas, paisanos o soldados desean la paz, pero una paz que les asegure su antigua seguridad y prosperidad...

Repito que los más ricos propietarios que han emigrado de las Provincias y son los únicos que pueden ejercer influjo entre los vascongados que antes eran sus colonos o dependientes, no harán esfuerzo alguno para conseguir la paz, mientras no estén seguros de que se les conservarán sus fueros, que tan gran valor tienen a sus ojos.

Señora: los hombres de más influjo de estas provincias piden humildemente a V.M. y a la nación española:

1º. Que se garanticen las libertades de los vascongados por medio de una ley sujeta a las

reformas que en adelante se consideren necesarias

2º. Que se autorice a la Diputación provincial para tomar a su cargo el manejo y dirección del estandarte PAZ Y FUEROS.

Los vascongados se proponen sostener dicho estandarte a costa de sacrificios que harán ellos mismos y se obligan a proporcionar la paz a la nación, con tal de que la nación les conceda sus fueros (58).

2. INTERES DE FRANCIA E INGLATERRA POR LA CONSERVACION DE LOS FUEROS.

No exageraban los carlistas al suponer que su lucha despertaba el interés de toda Europa; también los liberales tenían conciencia de ello (59). Como escribe Raymond Carr "se tenía la sensación de que se ventilaban en sus campos de batalla grandes problemas de la civilización europea" (60). Se trataba en definitiva de una batalla más entre la Monarquía Absoluta y el Estado Liberal que luchaba por consolidarse en el continente; y al igual que hoy los avances del socialismo en cualquier país son mirados con recelo por cualquier otro país aferrado al orden socioeconómico capitalista y la diplomacia occidental ha formado sendos bloques defensivos para salvaguardar sus respectivos sistemas, también entonces las cancillerías de Europa tomaron partido ante la contienda. Los gobiernos autocrá-

ticos de Rusia, Prusia, Austria, Nápoles y el Estado Vaticano apoyaron económicamente o por lo menos moralmente a D. Carlos; en cambio los países en los que los principios liberales se empezaban a abrir paso: Inglaterra, Francia y Portugal se pronunciaron a favor de Isabel II y firmaron en 1834 el pacto de la Cuadruple Alianza.

Sin embargo, una cosa era el ver consolidado el nuevo orden europeo apoyado en el régimen constitucional y en las nuevas formas de producción capitalista y otra el riesgo de radicalización revolucionaria que desde 1836 amenazaba a España y que la situación de guerra favorecía. Por otro lado, la nueva concepción de Estado barría los particularismos forales y el régimen aduanero que hacía del País Vasco una zona de libre comercio en la que tanto Francia como Inglaterra tenían un mercado asegurado, y una plataforma de introducción de sus productos en Castilla por medio del contrabando. De aquí que la diplomacia de uno y otro gobierno favoreciese cualquier proyecto de transacción que por un lado templase el régimen liberal y sobre todo mantuviese los fueros en el País Vasco.

En 1837 el cónsul de España en Bayona comunicaba a Madrid que la actitud del gobierno francés a favor de los liberales no resultaba nada clara y se quejaba de la parcialidad a favor de los carlistas del periódico local "El Faro de Bayona" (61).; por las mismas fechas también

se recibían quejas del embajador español en París que no conseguía que las autoridades francesas internasen a los carlistas situados en la frontera (62).

Valera señala la "prevención y antipatía de Luis Felipe contra el espíritu revolucionario inaugurado por los sucesos de la Granja" y "la secreta pero constante tendencia por parte del Gabinete francés a que nuestra guerra civil terminase por medio de una transacción, que indudablemente moderaría el régimen" (63). Por otro lado, como también señala el mismo Valera "a los gobernantes del país vecino, en todo tiempo agradó que las Provincias Vascongadas siguiesen disfrutando un régimen excepcional y en cierto modo autonómico, conveniente a los intereses permanentes de la Francia" (64) y desde el comienzo de la guerra venían condicionando su intervención a la conservación de Fueros de las cuatro provincias, "incluso la exención de Aduanas" (65).

La empresa de Muñagorri gozó de la protección y del dinero del gobierno francés (66) y el subprefecto de Bayona fué miembro de la Junta Fuerista (67). El 28-VI-1839, entre las proposiciones que Duffau-Pauillac representando al Gobierno francés ofrecía para colaborar en las negociaciones previas al Convenio de Vergara destacaba "que las provincias Vascongadas y Navarra conservarían sus fueros, que debe ser su mayor deseo y el mayor deseo de su general" (68).

Similar es la posición del Gobierno Inglés. Cuando el 12-VII-1835 se trata en la Cámara de los Comunes sobre la posible intervención en España, creen interesadamente que la solución del conflicto pasa por "restaurar los privilegios quitados a los vizcaínos y a los navarros por las Cortes" (69). La diplomacia inglesa colaboró activamente para que la guerra finalizase con una transacción a base de conservar los fueros; la historia de esta colaboración se publicó en 1840 en un folleto titulado "Documentos relativos al Convenio de Vergara presentados oficialmente al Parlamento Inglés por mandado de S.M. B. en 1840" (70). Lord John Hay y el coronel Wylde fueron los enlaces que mediaron entre Espartero y Maroto (71) y el 10-VIII-1839, el Foreign-Office adelantaba las "condiciones que el Gobierno de S.M. considera razonables y que se está dispuesto a CONCEDER el Gobierno español a los jefes carlistas": cese de hostilidades, salida de D. Carlos del territorio español, reconocimiento de empleos y sueldos a los generales y oficiales carlistas, reconocimiento de Isabel II, la Regencia de la Reina Madre y la Constitución de 1837 y "conservación de los fueros e instituciones locales de las Provincias Vascongadas, en cuanto dichos fueros e instituciones sean compatibles con el sistema de gobierno representativo adoptado en toda España y con la unidad de la monarquía española" (72). Como se ve coinciden totalmente con las cláusulas que veinte días des

pués se incluirían en el Convenio de Vergara.

Los intereses concretos que respaldaban la política francesa e inglesa no pasaron desapercibidos para los contemporáneos. En el Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas del 13-VII-1838 se denunciaba que lo que pretendían los ingleses y franceses con el "negocio Muñagorri" era "hacer libremente el comercio en toda la extensión de las Provincias y aún del Reino, por las costas de Cantabria y para llenar este objeto puramente mercantil, le adelantaron algunas cantidades que ha expendido con bien poco fruto..." (73); y cuando la Diputación de Navarra Protesta del proyecto de finalizar la guerra conservando los regímenes forales en su integridad carga el "negro proyecto" sobre "alguna nación extraña que con miras interesadas pretende conservar su preponderancia mercantil en daño del comercio e industria de la Provincia" (74).

En La "Memoria" de Aviraneta además de reconocer la pretensión de "tener a toda costa allí un gran mercado libre para servir de escala y depósito a la introducción de contrabando en Castilla", añade el temor de los extranjeros a ver suprimidas las aduanas del Ebro pues "saben cuanto valen los provincianos para el ramo de ferretería y otros artefactos, y no ignoran que teniendo en las entrañas de sus montes los mejores veneros ferruginosos del mundo, sin las aduanas del Ebro, la industria adquiriría tal fomento, que dentro de pocos años no se consumiría en

Castilla más quincallería que la fabricada por los naturales y extranjeros en las provincias exentas" (75).

He aquí la explicación del "celo foral" extranjero, y aunque no creemos que la iniciativa partiese de ellos, al menos intentaron apuntarse el tanto: "De todos modos, nosotros hemos puesto a los fueristas en movimiento- escribía el comodoro Lord John Hay- y ahora le corresponde el Gobierno español la sinceridad de todas sus declaraciones" (76).

El hecho es que la intervención extranjera aunque interesada, no consiguió los objetivos que perseguía y en 1841 las Aduanas se trasladaron de forma definitiva a la frontera de Francia, pero en aquel momento sirvió a la política concreta de los fueristas y del Gobierno de Madrid. En el discurso de la Corona en la apertura de las Cortes el 1-IX-1839 la Reina Gobernadora se complacía en anunciar que "nuestras relaciones con las Potencias amigas, signatarias del tratado de la Cuadruple Alianza se encuentran en el estado más satisfactorio;.... nuestras poderosas y fieles Aliadas, la Francia y la Gran Bretaña, adquieren nuevos y merecidos títulos a la gratitud nacional" (77)

Y el Coronel Wylde podía escribir a Lord Palmerston el 5-IX-1839 "Estoy convencido de que en ningún período de la historia ha sido Inglaterra tan popular ni tan cordialmente estimada por una nación extranjera como lo es

en este momento por los españoles de todas las clases" (78) Mientras tanto el marqués de Falces reconocía ingenuamente que en la transacción de Vergara "acaso no han sido extraños algunos Gabinetes extranjeros interesados en la fe licidad de esta Nación" (79).

3 .DIVISIONES CARLISTAS.

El carlismo fué ante todo una bandera en torno a la cual se aliaron todos cuantos se oponían a la revolución liberal. El repudio en bloque del sistema constitucional implicaba admitir en bloque el orden institucional del Antiguo Régimen y los diversos elementos de la ideología tradicionalista; sin embargo, la distinta intensidad con que se defiendan será germen de las disensiones y tendencias que se van a manifestar en el seno del carlismo. "De acuerdo en la oposición, los puntos de contacto desaparecían en cuanto trataba de desarrollarse un programa positivo de gobierno. También en el carlismo hubo partidos..." afirma el profesor Seco Serrano. (80).

Si no podemos hablar con propiedad de partidos, sí podemos hablar de tendencias o fracciones, aunque no estuviesen claramente delimitadas, careciesen de organización y tengamos que recurrir a la convención a la hora de aplicarles un nombre que nunca se dieron ellos mismos a no

ser a la hora de calificarse despectivamente de "transaccionista" u "ojalatero".

La antigua rivalidad entre Apostólicos y Realistas legitimistas tuvo su continuidad en el seno del carlismo (81). La corte carlista próxima a los primeros venía a representar la fracción extremista y "clerical"; lo que se ha llamado también tendencia teocrática y más tarde por sus rivales "ojalateros" (82). Alejados del campo de batalla, menospreciaban la actividad militar pues todo lo confiaban a la divina Providencia, convencidos que su causa era "la de Dios" (83). En el terreno de los intereses respaldaban por encima de todo las prerrogativas del clero.

Al grupo o tendencia opuesta, más próxima a los realistas legitimistas, la podemos llamar "militarista" o "Anticlerical" en la medida que es posible aplicar este término a un carlista, pues la defensa del trono y el altar era para todos la bandera por la que luchaban; sin embargo "no estaban dispuestos a someter la autoridad temporal a los elementos religiosos en la esfera que no es de la competencia de éstos y que sus intereses no pueden ser calificados de realmente espirituales" (84). Menos providencialistas que los primeros y más cerca del campo de batalla estaban también más preocupados por los medios materiales para mantener el ejército y ganar posiciones.

No obstante, la división no era tajante entre corttesanos y clérigos por un lado y militares por otros; había generales como Uranga, Guergué, Iturralde, que pertenecían a la tendencia clerical y por el contrario clérigos, como el arzobispo de Cuba y el Padre Gil que se les oponían.

Este enfrentamiento que con más o menos intensidad se mantuvo a lo largo de toda la guerra, se dió desde el primer momento. Ya Zumalacárregui "se encontró con enemigos en la corte de D. Carlos que tuvieron éxito en contrarrestar y contrariar sus planes, "Sus victorias le dieron gran poder sobre el ejército y los campesinos, lo que despertó la envidia y sospechas de los curas, los cortesanos y las mujeres a quienes D. Carlos prestaba oídos. Recibían fríamente sus victorias, atribuyéndolas a la santidad de la causa y a la protección celestial" (85). Y es que Zumalacárregui, tal y como lo describe su biógrafo y secretario Zaratiegui, "celoso por la religión de sus abuelos, estaba lejos del fanatismo y de la hipocresía. Trataba a todos según la moral de su conducta, y ni aún los eclesiásticos, si estaban faltos de virtudes, hallaban en él consideraciones particulares..." (86).

Este divorcio entre corte y ejército se refleja en una representación que en favor del Marqués de Valdespina y del general Zabala, caídos en desgracia en la Cor-

te dirige Zumalacárregui al infante D. Sebastian; en ella denunciaba cómo la vil adulación y la intriga de la Corte pronto se apoderó de la confianza del soberano y las primeras personas que promovieron aquella guerra por restituir al augusto hermano de V.M. al pleno goce de sus soberanos derechos, al momento fueron separadas, perseguidas y mal remuneradas por otros, que ni desenvainaron la espada ni espusieron los pechos al frente del enemigo"(87).

También contó Zumalacárregui con la enemiga de la Junta Gubernativa de Navarra, presidida por Juan Echeverría, una de los "clericales" más furibundos. Florencio Sanz en sus Memorias se lamenta que no se haya publicado "la amarga correspondencia cruzada entre la Junta de Navarra y Zumalacárregui" (88). Como anécdota expresiva de ello, cuando Echeverría, vicario general castrense organizó el cuerpo de capellanes del ejército, el general devuelve unos cuantos pues como dice con cierta redundancia en la carta que los acompaña "los cuerpos están sobrecargados con un sobrenúmero de capellanes" (89).

Comparando las proclamas de Zumalacárregui con las de la Junta, y a pesar de la pobreza doctrinal de unas y otras, también se aprecia una menor carga integrista en las del primero, que hace por el contrario mayor hincapié en la "causa real":

"Nosotros todos sabremos morir antes

que sucumbir a un gobierno cuyos principios elementales son la impiedad y la tiranía; las armas nos darán lo que las humanas teorías quieren usurparnos; y finalmente Carlos V destinado por el cielo a ocupar el trono español, no dirá que ha puesto en vano su principal confianza en los navarros... Repetid el juramento conmigo ¡Carlos o la muerte! ¡vencer o morir! esta es la divisa de vuestro comandante general Tomás de Zumalacárrregui"(90).

Los sucesos de La Granja y la proclamación de la Constitución de 1812 propiciaron el acercamiento entre los moderados y el sector más "ilustrado" del carlismo; la "sociedad Jovellanista" sirvió de enlace y el matrimonio de Isabel II con el hijo del pretendiente, una amnistía general y la convocatoria de Cortes estamentales fueron las bases de un posible acuerdo (91). La empresa fracasó, pero "la palabra TRANSACCION desconocida hasta entonces fue arrojada por Corpas a la ventura y atrayendo después persecuciones a los unos, venganzas a los otros, su maléfica semilla se desarrolló por en medio de las vicisitudes de los tiempos y dio por fin su fruto en el Convenio de Vergara" (92).

Don Carlos, "hombre de talento y educación deficientes, sin conocimientos políticos ni tacto en gobernar, débil e irresoluto, fácil al halago de los que le rodeaban ... como era también un fanático religioso, se dejaba influir mucho por los curas de la corte..." (93). Después

del fracaso de la expedición a Madrid en el otoño de 1837, se entregó pública y completamente al partido estremado y en la alocución al ejército en Arceniega atribuyó a la traición en sus filas el haber impedido el triunfo (94).

"Numerosos agentes se estendieron por todas partes, repitiendo de mil modos que era origen de las últimas desgracias la traición de personas, que don Carlos había ya cono cido con el auxilio del cielo, y que iba a separar del ejército; no cesaron de propalar que la guerra se hubiera concluído, y que todo serían días de dicha, a no haber existido semejantes hombres, vendidos a los masones, a los que habían querido entregar a don Carlos; que los tales traidores se sabía aspiraban a una TRANSACCION para hacer triunfar las ideas irreligiosas, de que secretamente se hallaban poseídos..." (95).

Los generales Elío, Zaratiegui y Gómez fueron condenados por "transaccionistas" y tanto el ministerio universal como el mando del ejército pasaron a manos "clericales". Don Carlos -comentó un oficial carlista- descendió de la alta dignidad de rey para constituirse bajamente en jefe del partido estremado" (96) y con ello quedó lastimado el principio de unidad sin el cual toda autocracia es esencialmente débil.

Después del fracaso de Peñacerrada, el rey tiene que sustituir a Guergué por Naroto como general en jefe; éste no sólo fracasa en su intento de reconciliar las dos

fracciones en que se hallaba dividido el carlismo sino que se convierte en víctima de la camarilla clerical y de los generales retrógrados que le acusan de comunero, republicano, masón y ¡cómo no!, le atribuyen proyectos de transacción. La enemiga acaba con los fusilamientos de Estella y la escisión ya irreconciliable de los partidarios de D. Carlos que precipitaría el final de la guerra.

Desde el comienzo de la contienda, la idea de dividir al carlismo formó parte de las maniobras conspiratorias liberales. El general Quesada intentó atraer a Zumalacárregui a las filas liberales por mediación del hermano de éste, Juan Antonio (97) y en 1836, el gobierno Istúriz encomendó al conspirador Olavarria conseguir la corrupción y traición de algunos jefes rebeldes importantes (98). La misión encargada a Aviraneta por el gobierno Pérez de Castro tenía como finalidad principal dividir las tropas carlistas. En la Memoria en que relata su actuación el conspirador, trata de apuntarse el tanto de ser él el causante de la escisión, incluso el autor casi único del Convenio. Esta versión, favorecida por los moderados con la finalidad de oscurecer los méritos de Espartero no respondía a la realidad, ya que la división en el campo carlista era profunda e irremediable desde mucho antes de haber comenzado Aviraneta a elaborar sus fórmulas de discordia; él pudo contribuir a ahondar las diferencias, pero de ningún modo a crearlas (99).

No hay duda que la desunión carlista facilitó el fin de la guerra, sin embargo, se sabe muy poco del papel que jugaron los fueros como elemento de discordia. Las primeras divisiones en el seno del carlismo habían sido totalmente ajenas a la causa foral; para nada tampoco intervinieron los fueros en los distintos proyectos de transacción, hasta las conversaciones que precedieron al Convenio de Vergara. Y porque este Convenio no fue la esperada transacción entre principios liberales y carlistas, el proyecto de pactar con los moderados en base a reconocer los derechos de D. Carlos y la convocatoria de Cortes estamentales dará origen a una tercera fracción enfrentada tanto con los apostólicos como con los marotistas (100).

A pesar del fracaso de Muñagorri en crear una tercera fuerza militar que consiguiese atraer a sus filas a los voluntarios carlistas bajo la bandera Paz y Fueros, el hecho "produjo una honda impresión en el ánimo de los carlistas, cuyo periódico oficial apeló a la discusión para desvirtuar los efectos que podían ocasionar los principios proclamados por Muñagorri... desde entonces se introdujo el principio de la discusión para combatir, no las doctrinas de los enemigos, sino las que empezaban a aparecer entre los amigos y de una manera seductora" (101). Los carlistas intensificaron las alusiones forales en sus manifestos y proclamas (102) aunque insistiendo siempre que la conservación de los fueros dependía del triunfo de la

causa del Trono y el Altar (103).

No sabemos el alcance que la propaganda de Muñagorri y Aviraneta pudo tener entre los carlistas vascos, pero es más que probable que a la hora de fijar las condiciones del Convenio, fuesen decisivas las presiones de los fueristas sobre unos oficiales carlistas mucho más interesados en conservar sus grados y sueldos. Respecto a la tropa, ya hemos apuntado la probabilidad de que el deseo de paz pesara entre ellos más que el interés por los fueros. Los relatos sobre el protagonismo que tuvieron en las negociaciones son contradictorias; mientras Naroto, quizá con la finalidad de presionar sobre Espartero "manifestó al Duque que los batallones se habían negado a cumplir lo pactado mientras no se les asegurase la aprobación que las Cortes diesen a los fueros"; Urbistondo afirma que "se guardó con ellos la mayor reserva, haciéndoles ignorar a todos el contenido del pacto..." (104).

En relación con los carlistas navarros, no se puede pensar que la causa de no aceptar el Convenio tuviese relación con la insuficiente garantía que el mismo ofrecía sobre la conservación de los fueros; la escisión de los batallones navarros era anterior al inicio de las negociaciones, y con más probabilidad podría afirmarse, que al estar menos interesados en la promesa foral que recogía el mismo no tuvieron la "tentación" de acogerse a él. Pero, de cualquier forma, no fueron los fueros el motivo del des

acuerdo.

4. -POLITICA "FORAL" DEL GOBIERNO

La pieza clave para comprender el éxito de la empresa PAZ y FUEROS fue el apoyo indiscutible que le prestó el Gobierno, los prohombres del partido moderado y la propia reina gobernadora (105). Los fueros iban a utilizarse como arma política y no exclusivamente como medio de pacificación; pues aparte de que los espectaculares triunfos de Espartero hacían presentir una victoria final no muy lejana, es más que probable que entre el ejército carlista, los deseos de paz y la conservación de grados y sueldos pasase más a la hora de dejar las armas que la confirmación de los fueros. Por ello, al interés del gobierno en conseguirlos hay que buscarle otras explicaciones.

La idea de pactar con los carlistas había sido siempre grata a los moderados, que veían en ella una forma de atemperar el régimen liberal que la guerra a su vez había radicalizado. Por el contrario, desde que en enero de 1838, defendiera Toreno en el Congreso la idea de acabar la guerra por medio de una transacción, los exaltados venían combatiéndola violentamente (106). En la respuesta a discurso de la Corona, el 23-XI-1838, Seoane y Olózaga continuaron añadiendo a la expresión 'deseo de concluir la gue-

rra' la frase: "en la que no cabe transacción ni acomodamiento con el rebelde D. Carlos ni con su familia" (107).

Desde diciembre de 1838, Evaristo Pérez de Castro presidía un gobierno formado por individualidades poco homogéneas, pero que mantenían una política próxima a los jovellanistas, ala derecha del moderantismo (108) aunque la necesidad de atraerse a Espartero, en un momento en que la guerra era la principal preocupación del gobierno explicaba la presencia del general Alaix en la cartera de Guerra. Ante la falta de apoyo del partido monárquico-constitucional, ala izquierda del moderantismo, el gabinete Pérez de Castro había disuelto las Cortes, y el retraimiento de éstos últimos en las elecciones siguientes, llevó al Congreso, en julio de 1839 a una mayoría progresista. Esta situación, nada singular por otra parte en nuestra historia parlamentaria, iba a condicionar en gran parte el desarrollo del Convenio de Vergara y todo el debate sobre el proyecto de ley de fueros.

La Constitución de 1837 y su posterior desarrollo legislativo, hacía temer a las clases dominantes por su hegemonía y el posible ascenso de la pequeña burguesía, a través sobre todo de las corporaciones locales y de la Milicia Nacional. Por eso la reforma de ayuntamientos y de la Milicia, la limitación de la libertad de imprenta y la restricción del censo electoral, junto con el mantenimiento parcial del diezmo para atraerse al clero, formaba par-

te del programa legislativo del gobierno aunque vulnerase los principios de la Constitución, en cuya reforma ya se pensaba.

Era impensable que estos proyectos prosperasen en un Congreso de mayoría progresista; antes bien, la dimisión del gobierno parecería la consecuencia lógica del resultado de la consulta electoral. El gobierno, sin embargo que se resistía a dimitir y a renunciar a su programa, va a encontrar en la causa de la Paz, y más tarde en la de los Fueros, las armas políticas necesarias para mantenerse en el poder, enfrentarse con los progresistas y tratar de disolver las Cortes.

"El Piloto", órgano de prensa gubernamental, venía preparando el terreno:

"No hace dos años, que un orador ilustre se atrevió a pronunciar en el seno de la representación nacional la palabra TRANSACCION... En aquel solemne día la palabra TRANSACCION fue un motivo de escándalo para esos hombres que se han arrogado a sí mismos el título de "patriotas"; pocos meses han bastado para hacer que la palabra que un día fue para muchos una palabra de escándalo, sea hoy para la inmensa generalidad una palabra de esperanza y de consuelo" (109)

.....

"Por fortuna, las negociaciones entabadas, acortarán el plazo que retardan nuestros deseos (de paz) y someterán al gobierno unas provincias sumisas y obedientes" (110).

Por eso, aunque el gobierno no haya obtenido el respaldo popular en las elecciones, no debe dimitir:

"Estorbaría a la empresa de la pacificación la caída de quienes en ella están trabajando;

nos declaramos parciales de los ministros... su caída ahora nos parecería un mal de marca mayor" (111).

Por eso mismo, sería contraproducente un gobierno de acuerdo con la mayoría parlamentaria porque:

"sería un obstáculo grandísimo, que aquí triunfasen máximas revolucionarias que asustan" (112)

Y como saben la oposición que el proyecto puede encontrar en la mayoría progresista del Congreso hacen de la "gran causa de la paz" no sólo una justificación para la permanencia de un gobierno que ha sido desautorizado electoralmente, sino incluso un motivo para la disolución de unas Cortes recién elegidas:

"Sin duda es cosa importante la reunión de las Cortes...pero casi todo en el mundo tiene una importancia relativa: la de los trabajos en que se van a ocupar los cuerpos colegisladores es mucha, pero tal como es, se olvida atendiendo a la gran cuestión de la paz" (113).

.....

"Y si el Gobierno se halla en la venturosa situación de poder ajustar un acomodamiento honroso, debe contar con los obstáculos que aquellos hombres han de oponer a que se realice y debe procurar o evitarlos o vencerlos... Si el Gobierno somete a la aprobación de las futuras Cortes cualquier proyecto de acomodamiento, no es difícil prever que se hará oposición a él... Sabiendo que la mayoría del futuro Congreso de diputados se ha de componer de los hombres que se denominan progresistas... el Gobierno debe abstenerse de someter esta cuestión a las próximas Cortes y buscar la autorización que necesita del poder legislativo únicamente en lo que sea de todo punto necesaria de otras Cortes que representen en este asunto la opinión de la nación" (114).

Respecto a los términos de la negociación, el gobierno hubiera preferido una transacción entre los principios liberales y carlistas, entre:

"los dos principios que pugnan entre sí por la posesión exclusiva de la sociedad española: el principio en virtud del cual los pueblos buscan el reposo en la religiosa observancia de las tradiciones antiguas y el principio en virtud del cual los pueblos se afanan por alcanzar más alta perfección por medio de las reformas políticas y sociales... De estos principios, representados por los dos bandos en lucha... ninguno es absolutamente verdadero ni absolutamente falso: uno y otro son la expresión de dos verdades incompletas. El origen del error ha consistido en no haber considerado al partido liberal y al carlista bajo el aspecto de sus semejanzas en lugar de haberlo hecho exclusivamente bajo el aspecto de sus diferencias" (115).

La solución para "El Piloto" estaría en el "Gobierno fuerte" de un partido a un mismo tiempo, conservador y progresista; de un partido que sea al mismo tiempo amigo de la tradición y amigo de las reformas" (116).

El Estatuto Real sería el texto constitucional aceptado por ambos bandos, base de la transacción; no obstante, el conseguirlo era impensable, no sólo por la presencia de una mayoría liberal en el Congreso, sino por la enemiga que encontraría en el general Espartero, que se había convertido en paladín de la Constitución de 1837.

La conservación de los fueros vascos iban a suplir a esa transacción ideal irrealizable. Era una concesión a la "tradición"; y sobre todo, suponía "abrir brecha" en la Constitución.

Interesaba para ello presentar la guerra como formal:

"El temor de perder los fueros ha sostenido allí vivas las simpatías por don Carlos.." (117).

Y hacer de la conservación de fueros una condición indispensable para la paz:

"Si nos hemos declarado por la confirmación de los fueros, ha sido, no como provincianos, sino como españoles... Sin la confirmación de fueros en su integridad... no vemos la paz asegura el orden que de ella es forzada consecuencia" (118).

No importa que los fueros sean incompatibles con la Constitución pues:

"La bondad de una constitución consiste en ser elástica... y llegado creemos el caso de ejecutarla a un suceso imprevisto..." (119).

Además:

"Para nosotros no puede haber quebrantamiento de la constitución por las Cortes y el Trono unido" (120).

Y de cualquier forma:

"Una constitución no puede ser un obstáculo a lo que el bien público requiere. Y que ¿no pide ahora el bien público la concesión de los fueros? ¿Infundiría en los pueblos amor a la ley fundamental del Estado que ahora se les dijera: la pacificación anhelada se ha conseguido, y para afirmarla se ha menester continuar a los vascos y navarros en el uso de su legislación que tanto aman, pero no obstante esta necesidad evidente, ahí está la Constitución que prohíbe hacer lo que es tan deseado, tan conveniente, tan necesario a la pública felicidad?... ¿Podría el peor enemigo de la Constitución ponerla en tan mal predicamento como este en que estaría si se le declarase contraria a la concesión que recomendamos?. Y una Constitución, no nos cansamos de repetirlo, es un medio y no un fin... (121).

"El Correo Nacional", órgano de expresión de los monárquico-constitucionales, respaldaba muy de cerca la política gubernamental, anunciando el fin de la escisión moderada:

"La pacificación de las provincias del Norte depende del otorgamiento de los fueros y de la generosidad con que sepamos tratar a los que por defenderlos han combatido" (122).

.....

"La voz de las Cortes va a oírse. De su fallo penderá tal vez la PAZ o la GUERRA de los trabajados pueblos de España" (123).

Y tratando de confundir a los liberales comenta la aparente contradicción de que:

"hombres que hacen justo alarde de profesar principios de LIBERTAD, quieran ahora combatir la que existe más sólida más amplia, más antigua y más bien cimentada sobre la tierra; la que más felicidad y ventura ha derramado sobre los pueblos a quienes ha alcanzado su benéfica influencia; la que más valor, honradez, aplicación, costumbres y virtudes ha producido en el suelo fértil que ha fecundado con su generoso jugo; en fin la que en esta como en otras ocasiones ha desarrollado una vitalidad que parecerá fabulosa a las generaciones futuras... Esta libertad viene desde los primeros hombres que poblaron las ásperas e inaccesibles montañas vascongadas... monumento precioso, este gran modelo de libertad social..." (124).

¿Podría algún vasco añadir algo, o hacer una más brillante defensa de sus fueros?. Si guiendo el ejemplo de Cadiz(125), la mitificación de las instituciones tradicionales vascas recibía un buen refuerzo desde fuera del país.

Estas maniobras, gubernamentales en particular, y moderadas, en general, eran claramente apercibidas por los

progresistas y denunciadas en "El Eco del Comercio":

"Bajo pretexto de acelerar la paz, se han desenmascarado los partidarios del absolutismo pidiendo TRANSACCION a voz en grito (126).

"Lo hemos dicho y repetimos: nunca nos parece peor ocasión de tratar de arreglos y negociaciones que cuando nuestras tropas empiezan a llevárselo todo de calle y cuando las contrarias están divididas, desconfiadas, casi inútiles para resistir, cuando estaba vacilante del éxito de la causa constitucional parecería menos chocante que se tratase de acomodamiento con un enemigo a quien no era fácil vencer. ¿Pero ahora que la suerte nos sonríe tan ostensiblemente? Esperemos el éxito de las tropas... en el caso de dar la ley al vencido... podremos ser generosos con él. Pero otra clase de terminación parece hoy más inoportuna cuanto más se considera nuestro buen estado y abatido el enemigo" (127).

.....

"El principal objeto en estas negociaciones es hacer que no venza el partido liberal, porque después daría la ley y completando las reformas justas acabaría con los privilegios de que viven" (128).

.....

"acabar la guerra a manos de la diplomacia para que parezca que a ellos debemos la libertad que tengamos y para que esta sea la menos que pueda ser..." (129).

.....

"El Piloto habla como cosa segura y averiguada de transacción, y aunque no se dice en qué términos se la elogia indefinidamente... Cuando nos sonríe la suerte de las armas, lo que importa es pararlas y conceder a la facción con la pluma lo que no ha podido adquirir combatiendo... Nuestra situación ofrece hoy un porvenir más risueño que nunca, y no tanto por esas misteriosas negociaciones de que todos hablan y nadie puede definir con seguridad, sino porque nuestras tropas avanzan y vencen y las enemigas huyen en derrota" (130).

.....

"No triunfando don Carlos no puede triunfar ese bárbaro Despotismo de que ha hecho España una prueba tan larga y funesta... pero pudiera ser que tomando pretexto de la necesidad de obtener lapaz porque todos suspiramos, se pudiera volver a entronizar ese otro DESPOTISMO que llaman ILUSTRADO, del que ya se hizo decir a la madre de Isabel II que nunca se apartaría (131). que si no fuera posible absolutismo bajo la sinastía actual, fuese al menos ESTATUTO o cosa semejante. ¿Por qué no se dice claro?" (132).

Pero los liberales del "Eco" saben que:

"Unas Cortes de individuos del progreso, que no es de esperar aportasen de sus principios ni faltan a sus juramentos, deben de ser muy molestas para los que tienen planes de GOBIERNO FUERTE en lugar de GOBIERNO CONSTITUCIONAL" (133).

Y no en balde confían en que:

"El caudillo que está encargado de poner término a esta lucha, no contribuirá a ningún género de acomodamientos que inutilice los sacrificios del país y que manche los laureles que ha ganado con sus valientes tropas" (134).

Este enfrentamiento entre la prensa moderada y progresista reflejaba el que existía entre el gobierno y la mayoría parlamentaria y que se iba a reproducir en las Cortes a lo largo del debate sobre el proyecto de ley de fueros. Pretendía el gobierno confirmarlos sin limitaciones, relegando para el momento que el propio gobierno estimase oportuno su posible modificación (135). Los progresistas veían en ello un atentado a la constitución y exigían que "cualesquiera que sean los términos en que se exprese, debe ser simultánea con la explícita declaración de que queda existente en aquellas provincias el régimen constitucional" (136). No se

oponían a la concesión de fueros, pero desde el momento que veían que: "hay en los fueros cosas que son contrarias a la Constitución" (137), se conformaban con que se incluyera en el proyecto del gobierno la cláusula "salva la unidad constitucional": "que se den los fueros, todos los fueros posibles, pero respetando la Constitución" (138).

Las argumentaciones que empleara la prensa de partido volvían a oírse en el Congreso. Respecto al papel que la promesa foral desempeñó en la conclusión de la guerra Mendizábal afirmaba que:

"jamás fué la cuestión de paz dependiente de la cuestión de fueros" (139).

Y Olózaga ponía en evidencia la contradicción de los fueristas liberales vascos:

"¿No reparan, señores, los que dicen que vamos a decretar la paz o la guerra, que si se supone que la guerra se ha hecho por los fueros en estas provincias, tienen que confesar que han combatido contra los fueros los hombres más ilustrados de ellas, las familias más influyentes los que en todas épocas han prestado mayores servicios a la Nación española?" (140).

Por el contrario, los moderados, si bien reconocían que los fueros nada tuvieron que ver con la causa de la guerra, sí les atribuían un papel fundamental en su conclusión; así afirmaba Modesto de Cortázar:

"En aquella época, señores, no era efectivamente la cuestión de fueros la que se ventilaba... ese grito vino mucho después... y esa palabra que tan buenos resultados ha traído, pues to que ella ha sido el medio de la reconciliación

comenzó a producir por fortuna prósperos efectos ..." (141).

Y el ministro de Gobernación, Carramolino:

"Yo no diré que sea la causa principal de la guerra civil la conservación de los fueros, pero sí recordaré que algunos sucesos para hacer ver la importancia y la influencia que la cuestión de los fueros puede haber tenido en la conclusión de la guerra...(142).

Y de forma más contundente Egaña afirmaba:

"La cuestión de fueros lleva en su seno la paz o la guerra de la Nación" (143).

Tampoco coincidían unos y otros a la hora de precisar a quién correspondía el protagonismo, y por consiguiente el mérito en la construcción de la paz. Los moderados consideraban decisivas las negociaciones del gobierno y relegaban a una función meramente instrumental la actuación de Espartero:

"Se prepararon los acontecimientos de Estella. Espartero recibió las facultades más amplias que pueda dar un gobierno para que él fuera el que utilizara las ventajas de un resultado tan poco común... (144).

En cambio para el progresista Olózaga:

"Quiero decirlo francamente: no corresponde al Ministerio actual la grande obra de la pacificación de España, pero debase no obstante al ilustre general que ha dirigido nuestras armas" (145).

Para los liberales, ningún compromiso en materia de fueros se desprendía del Convenio de Vergara, que como señalaba el dictamen de la mayoría de la comisión "dejaba a

la libre decisión de las Cortes la alternativa de conceder, o modificar los fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra" (146), y recordaban la actitud intransigente de Espartero a lo largo de las negociaciones con Maroto en ceder en esta materia, según declaraciones del mismo general carlista:

"En las primeras conferencias, o unos días antes del Convenio, no pudieron avenirse el general Espartero y él sobre el asunto de los fueros, sobre la firmeza o seguridad de los fueros. ¿Qué hizo el general Espartero?. Decir que absolutamente no podía convenir con las exigencias sobre fueros que le pedían los enemigos... Maroto dice que fué a prepararse a combatir; y añade que esto no lo pudo conseguir, porque no halló elementos para ello, pues generales y oficiales le dejaron. Dice que generales y oficiales se abandonaron a las condiciones que quiso proponer el general Espartero (147).

Los moderados como Cortázar, por el contrario, forzando interpretaciones veían en el Convenio:

"Un contrato innominado: DO UT FACIAS, FACIO UT DES. Yo te doy fueros porque tu cedas las armas; yo te doy libertad porque tu no me seas hostil" (148).

Por ello insistía Arrázola, ministro de Gracia y Justicia, autor del proyecto que "el Gobierno cree que conviene más la confirmación que la modificación de fueros"; pues: "los fueros entraban como condición indispensable por parte de los que se han sometido por el bien de la patria" (149).

La resistencia del Ministro a introducir la cláusula "salva la unidad constitucional" era interpretada por

los liberales como un ataque a la Constitución de 1837:

"¿Se creen que sea una necesidad que se tenga que abrir una brecha a las instituciones que nos rigen para obtener la pacificación del Reino...? (Mendizabal) (150).

"No queremos que se abra una brecha a la Constitución para que luego quede despedazada, (Madoz) (151).

"Digo, señores, que los enemigos de la Constitución o los amigos pérfidos, que son muchos, esos son los que nos aconsejan que nos pongamos encima de la Constitución" (Sancho) (152).

"Se ve con claridad, lo digo con la inviolabilidad de diputado y lo diría también sin ella, a pesar del riesgo que pudiera correr; se ve claro: no se quiere la Constitución de la Monarquía española..." (Olózaga) (153).

Efectivamente, la conservación íntegra de los regímenes forales era una forma de "abrir brecha" en la Constitución, que además de sentar precedente y facilitar el camino a otros proyectos de ley que ya se estaban calificando de anticonstitucionales, convertía al País Vasco en "una zona franca propicia a la infiltración de un contrabando político, como lo era ya bajo el régimen foral de un contrabando económico" (154).

La cláusula "salva la unidad constitucional" tras reñidos debates pasó por fin a formar parte de la ley gracias a la intransigencia de la mayoría liberal del Congreso, a la colaboración del ministro de la Guerra, general Alaix y a la hábil intervención de Olózaga, que en palabras de un escritor de la época "contuvo el propósito de explotar el término de la guerra contra la libertad, abriendo el primer boquete a la Constitución por medio de la conserva-

ción de los fueros" (155).

Pero la firmeza del Gobierno en la defensa de la "reintegración foral plena", tenía además esa otra finalidad parlamentaria más concreta, como era la de provocar la disolución del Congreso recién elegido, de mayoría progresista, que difícilmente iba a dejar pasar unas reformas, que ya las Cortes anteriores, más moderadas habían rechazado. Aprovechando la popularidad que le proporcionó la conclusión de la guerra en el norte, presentó el Convenio de Vergara como un "pacto" con los carlistas e hizo de la conservación de fueros una cuestión de Gabinete, de tal forma que su rechazo por el Congreso significase un voto de censura y la posibilidad de que la Corona optase por la disolución de la Cámara.

Ya en la exposición de motivos, se presentaba el proyecto como "un medio de gobierno para conseguir los grandiosos resultados que tanto han hecho influir en la pacificación general" (156). Y el ministro Arrázola se defenderá del proyecto que como alternativa presenta la mayoría progresista insistiendo en que:

"El proyecto de ley que se discute de ninguna manera se acerca al que el Gobierno ha presentado. De ninguna manera satisface al Gobierno para lo que ha pedido como medio de gobierno, de política, de pacificación. En consecuencia, si se llegase a votar que se pase a la discusión por artículos, el gobierno creará que se le ha negado el medio que ha pedido" (157).

Olózaga denunció esta segunda intención de un Gobierno, que no contando con el respaldo parlamentario para

realizar su programa disolvió unas Cortes, y al no conseguir en las nuevas la mayoría deseada está dispuesto a una nueva disolución:

"Se cree que se puede decir... nosotros no somos hombre para sostener una discusión con tales y tales Diputados, no somos hombres que podemos gobernar con Cortes, a nosotros nos incomoda eso, nos es una traba; pues vamos a cortarla, a romperla?. Eso, señores se puede hacer una vez ¿pero se cree que se puede repetir impunemente?

.....

"Señores, se ha hecho una ofensa a la sana razón y a los buenos principios con presentar a este Congreso... proyectos de ley que ni aun los pudo pasar en las Cortes anteriores..."

.....

"Pues bien, señores, o el Gobierno había de pasar por la mengua de tener que retirar esos proyectos que ha presentado, o sabe de la manera que puede saberse que habían de ser deshechados..."

.....

El Ministerio, señores... no quiere la batalla parlamentaria en esas leyes en que es impopular, y por lo mismo levanta la bandera de paz y contando con el exceso de agradecimiento y con el entusiasmo, con la algazara que no deja reflexionar a los pueblos, ha pensado obligarnos a una discusión que no tuviera de su parte la impopularidad

.....

Se resiste primero a reconocer el respeto que se debe a la Constitución... y se quiere manifestar una disidencia, porque se cuenta con la generosidad de la Nación y con el deseo de paz... y de esa manera se niegan a reconocer la Constitución y procuran por medios bien poco parlamentarios deshacerse de la Representación Nacional que el país ha enviado aquí para que defienda sus intereses (158).

.....

Arrázola, devolvió la pelota a los progresistas denunciando a su vez, la pretensión de forzar la dimisión del gobierno, por medio de un voto de censura, que había detrás de todo el debate parlamentario:

"El Señor Olózaga dijo que era conocida una segunda intención: sin duda era la disolución de las Cortes, porque se temían por los Ministros los cargos que pudieran hacerles las presentes. Pues otra segunda intención se ha descubierto aquí sin quererlo; a lo menos en los términos está. El Señor Olózaga ha dicho que para conceder una ley es menester examinar si el Ministerio merece la confianza del Congreso, y S.S. ha dicho que el presente no la merece. Luego, por eso eran las dilaciones en conceder el proyecto de ley..." (159).

La prensa se hacía eco de la crisis que se intentaba provocar y respaldaba a sus respectivos partidos. En los editoriales de "El Piloto" se leía aquellos días:

"Va a decidirse, no como pueden creer observadores superficiales, si han de confirmarse o no los fueros de las provincias exentas, sino ha de dejarse la paz bien o mal segura, y si ha de ponerse punto a la revolución o seguirla... No son meramente los vascongados y navarros los interesados en la mejor o peor salida de la crisis en la que estamos: lo son todos los españoles. Si importan poco los fueros, la paz y la seguridad importan mucho"(160).

.....

"La Constitución que es la ley suprema de todos los españoles no es la ley suprema del parlamento que puede modificarla. Si los fueros no se oponen a la Constitución deben concederse; si se oponen la Constitución debe modificarse..." (161).

.....

"Jamás se deshecha un proyecto de ley presentado por los ministros sobre el asunto de grande transcendencia... La mayoría de la comisión

¿piensa que es decoroso, interponerse entre el proyecto de gobierno y la impaciencia pública?... Nosotros declaramos alta y esplicitamente que la cuestión de los fueros considerada bajo el aspecto constitucional no tiene solución ninguna posible; conciliar los fueros y la Constitución es destruir la Constitución o aniquilar los fueros... La cuestión de fueros no debe ser considerada bajo el aspecto constitucional, sino bajo el aspecto de la conveniencia pública..."(162).

.....

"La incompatibilidad del actual ministerio y de las presentes Cortes nadie puede desconocerla... Y perjudicial parece a toda persona de razón que el ministerio se disuelva en el momento presente y más aún que pacificador y victorioso se deje arrebatarse el poder por quienes sólo guerra quieren..." (163).

.....

"En nuestra opinión, ha llegado el caso de apelar a la nación para que de su fallo entre los diputados y los consejeros del trono",(164).

Por su parte el "Eco del Comercio" acusaba:

"El Ministerio a conservar las sillas... ha querido mezclar su insignificante existencia con la gran cuestión de los fueros, detrás de la cual se ha guarecido... La cuestión de fueros ha sido primero una tabla en que ha querido salvarse el ministerio del naufragio que le amenaza y después se la ha querido hacer servir de pretexto para disolver unas Cortes veintitantos días después de abiertas" (165).

Como hemos visto, en esta ocasión la maniobra falló y los fueros se confirmaron "sin perjuicio de la unidad constitucional" (166). Habría que esperar al mes siguiente para que un proyecto de ley fiscal provocase un voto de censura al Gobierno, al que siguió la suspensión primero, y la disolución después del Congreso (167). Las elecciones de enero de 1840, primeras celebradas después del Convenio, da-

rían el triunfo a los moderados, que gracias a la defensa foral en las Cortes y en la prensa, contaría con el apoyo de los fueristas vascos, así como con el de los carlistas "reconciliados" consolidando "una mayoría capaz de balancear y superar el influjo de los que del sistema constitucional pretendan hacer una rémora para el poder de la Corona", para así poder "asentar sobre sólidas bases la obra de la restauración monárquica" (168).

Si las medidas impopulares del Gobierno, sobre todo la Ley de Ayuntamientos, y la fuerza de los progresistas que habían encontrado en Espartero su líder nacional indiscutible, hicieron posible el trienio 1840-1843, a partir de entonces, y salvo la breve etapa de 1854-56, el MODERANTISMO, al que se incorporarían los antiguos carlistas, mantendría durante veinte años en su "justo medio" las conquistas liberales.

5.-LA DIPUTACION DE NAVARRA Y EL CONVENIO DE VERGARA: LEY DE MODIFICACION DE FUEROS DE 1841

Los carlistas navarros no se habían acogido al Convenio; no obstante el artículo 7º del mismo preveía que: "Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen en la misma forma que las divisiones castellana, vizcaína y guipuzcoana, disfrutarán de las CONCESIONES que se expresan en los artículos precedentes" (169). El 10-IX-1839

la Diputación provincial dirigía una alocución a los navarros:

"Después de seis años de guerra, la paz se ha hecho ya necesaria... El convenio que ha precedido entre los generales de ambos ejércitos para restablecer la paz, combina sabiamente los intereses de todos cuantos sinceramente quieren adherirse a ella... el invicto general Duque de la Victoria se ha hecho un mediador entre el gobierno y las provincias para la concesión o modificación de sus antiguos fueros y libertades. Esta misma suerte es la que se os prepara si dócil a la voz de nuestra Diputación seguís el sabio y benéfico ejemplo de los provincianos..." (170)

Nada se consiguió; y en Navarra la guerra que continuó de forma lánguida durante 22 días, acabó por la defección de los voluntarios carlistas y el triunfo de las armas liberales. Ninguna obligación en materia de fueros ataba a la nación con esta provincia; el que a la postre se contara con ella, es una prueba más que el asunto fueros no era un compromiso derivado del Convenio, sino que otros compromisos e intereses lo alentaban.

En el art. 1º del proyecto de ley que el Gobierno presentó a las Cortes el 11-IX-1839: "Se confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y de NAVARRA". La preocupación de ser excluidos de los beneficios del Convenio se disipaba, pero se mantenía la preocupación opuesta: la de que los fueros se concediesen sin modificación. Había razones para temerlo. A lo largo del debate sobre el proyecto de ley, el Gobierno, respaldado por los moderados se mostraba inflexible en su deseo de confirmarlos sin restric-

ciones. Por ello la Diputación tratando de influir en el mismo dirige el 24-X-1839 una "Esposición a S. N. para que NO SE HAGA NOVEDAD EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS FUEROS":

"... La Navarra quiere la Constitución del Estado del año 1837 esto es lo que ante todas cosas quiere. Todo lo que tienda a tergiversar este hecho es falso y además perjudicado (sic) a Navarra. Miles de Navarros han derramado su sangre en los campos de Batalla por ese ídolo y miles de Navarros están dispuestos a derramarla de nuevo antes que se les arrebate esa prenda de seguridad esa garantía firme de las libertades públicas y del Trono de Isabel 2ª. También quieren los Navarros sus fueros pero no los quieren en su totalidad: no estamos en el siglo de los privilegios ni en el tiempo de que la sociedad se rija por leyes del feudalismo. Cuando se han proclamado los principios de una ilustrada y civilizadora Legislación, la Navarra no puede rehusarlos... Plantifíquense los fueros desde luego en Navarra, pero sea siempre salva la constitución; sea esta siempre su primera Ley fundamental... Pueden existir y observarse con la constitución los fueros racionales y útiles que conciliando el interés de Navarra con el general de la Nación llenen las esperanzas y la ansiedad pública, las promesas solemnes y los votos de la Patria por el acierto, la unión, la paz y la prosperidad sucesiva de España de quien es una parte integrante la Navarra" (171).

Las líneas anteriores son un exponente perfecto de lo que será la política foral oficial hasta nuestros días si por un lado la unidad constitucional es un "ídolo" para los navarros, tratande disipar cualquier duda que pudiese haber sobre la compatibilidad de los fueros "racionales y útiles" con la Constitución; no se trata más que de "conciliar el interés de Navarra con el general de la Nación".

La Diputación de Navarra, la menos foralista de las Diputaciones vascas, que en 1836 sólo pedía cobrar la contribución de la provincia y en 1838 habla ya de "contribuciones, quintas y garantía de deuda pública", en este momento se prepara para ampliar sus pretensiones forales a la esfera de la administración provincial y municipal.

No vamos a hacer aquí una exposición pormenorizada del desarrollo de las negociaciones que precedieron a la mal llamada Ley Paccionada de 1841 en la que se concretaron las modificaciones forales navarras. El tema ha merecido numerosos estudios, desde la Memoria de Pablo Ilarregui (172) testigo excepcional de la negociación como comisionado que fue de la Diputación, hasta las tesis doctorales recientes de Rodríguez Garraza, Jaime Ignacio del Burgo y Martínez Tomás (173). Por otra parte no hay obra sobre la historia reciente de Navarra o su organización jurídico-administrativa que no dedique una atención preferente a la citada ley (174). Sin embargo, para la finalidad del presente trabajo, dos aspectos nos interesa destacar: aquí: por un lado, su supuesto carácter de PACTADA y la posible razón o sin razón de los que ^ola califican, y por otro, el alcance de la NUEVA FORALIDAD implícita en la ley de 1841 y las posibles ventajas o desventajas que la misma supuso para la clase dominante navarra.

A.- LEY 16-VIII-1841: ¿LEY PACCIONADA, PACTO-LEY o LEY ORDINARIA?

Uno de los mitos históricos que en la España democrática de 1979 sigue funcionando y condicionando el acontecer político es el del carácter PACTADO de la ley de modificación de fueros de Navarra: para unos Ley Paccionada, para otros Pacto-Ley. Jaime Ignacio Del Burgo, actual definidor del "navarrismo" y presidente de la Diputación desde abril de 1979 ve en ella "una renovación del primitivo PACTO de incorporación de Navarra a la Corona de Castilla" (175) y por lo tanto prefiere el término de PACTO-LEY al de Ley Paccionada "pues de este modo resaltamos la auténtica naturaleza de la modificación foral que se hizo no en una ley pactada entre el Parlamento y Navarra, sino en virtud de un PACTO ratificado por las Cortes y convertido en Ley. Primero fue el PACTO, luego vino la Ley" (176).

La originalidad de Del Burgo estriba en la nueva denominación dada a la ley de modificación de fueros, que por otra parte no ha prosperado; porque la tesis del Pacto como instrumento regulador de las relaciones entre Navarra y el resto de la Monarquía, hemos visto que era un arma ideológica utilizada con anterioridad a 1841, e incluso en los momentos en que se canta la unidad y se olvida toda reivindicación foral se recuerda el "derecho histórico a constituirse" y el carácter pactado de la "unidad constitu

cional" (177).

La tesis del PACTO será defendida en Navarra por las más diversas parcialidades políticas, desde el liberal progresista Alonso (178), y el liberal-conservador Los Arcos (179), hasta el federalista Olave (180), los nacionalistas Campión (181) y Bernardino de Estella (182), y el tradicionalista Rodezno (183). En 1978, Víctor Manuel Arbe los, parlamentario socialista navarro mantendrá también que "La Ley de agosto de 1841, que castigó a Navarra recor tándole seriamente los derechos forales convirtió a nues tro viejo Reino en una provincia foral POR VIA DE PACTO; pacto que la Navarra oficial de entonces aceptó por salvar lo salvable"(184).

Las teorías pactistas medievales explican las re laciones políticas de una formación social en que los ins trumentos de poder están divididos y el rey, que necesita el apoyo de la nobleza tiene que doblegarse a las condicio nes que le imponen para lograrlo. En la Edad Moderna, aun que la situación política no lo hiciese realmente necesari o y la concentración de los instrumentos de poder hicie sen del rey el único soporte real de la soberanía, se gene ralizan las teorías del PACTO como legitimación del poder real frente a las que tratan de fundamentarlo en un origen divino. En uno y otro caso, se trata de concepciones ideo lógicas sin ningún alcance jurídico; de la misma forma que la figura del Contrato social servirá de soporte legitima-

dor del poder de la nueva sociedad democrática y de la soberanía nacional.

La historiografía navarra no se contentará con aplicar la teoría del pacto a las relaciones internas Rey-Reino, sino que la extenderá a la anexión de Navarra a la Corona de Castilla y aunque a lo largo de la Edad Moderna los efectos de la soberanía real no excluyen al viejo Reino, que tiene que doblegarse a su voluntad, se recuerda constantemente el carácter "contractual" de las relaciones con la Monarquía, sobre todo a la hora de conceder el donativo. Las viejas tesis pactistas, apoyadas en el particularismo navarro, seguirán siendo un arma ideológica empleada con distinto éxito y cuya posible aceptación por parte "de quien la padece" (el poder central) dependerá más de razones políticas que de razones jurídicas.

La primera crítica, que desde un punto de vista jurídico, sin tener en cuenta el proceso histórico que la originó, se ha hecho de la "Ley Paccionada" es la del carácter contradictorio del propio término (185). Para el profesor García Enterría, "serían Leyes paccionadas las que por expresar un verdadero pacto entre el Estado y una instancia extraña al mismo, requirieran para su modificación o derogación una actuación conjunta entre las dos partes que los configuraron" (186). Sin embargo, este tipo de leyes atentarían contra el principio fundamental de todo Estado de Derecho, el de la supremacía de la ley como

expresión de la voluntad general: "la Soberanía o supremacía de la Ley, implica la libertad de determinación del legislador y la inmunidad de sus productos por cualquier Tribunal. El poder legislativo es la expresión de la comunidad, del pueblo, y la libertad del pueblo para ir conformando abierta y originariamente su futuro no puede ser jurídicamente alienada, ni por tanto, pactada con nadie... Las cautelas antiderogatorias no son hoy de recibo, porque atentan contra la supremacía y libertad del legislador y porque no es admisible que el legislador de hoy, se imponga al de mañana, cuando se encuentre ante circunstancias enteramente nuevas; es esa libertad creadora la esencia misma de la ley (187). Según el mismo profesor, ni tan siquiera un tratado internacional, ratificado por la ley, puede limitar la soberanía del poder legislativo y "la ley que lo infrinja podrá dar lugar a una responsabilidad de Derecho internacional, pero desde la perspectiva del Derecho interno, será perfectamente válida y aplicable". Por lo tanto: "No existe, en resolución, la pretendida categoría de las LEYES PACCIONADAS" (188)

El mismo J.I. Del Burgo reconoce "la dificultad de comprender en categorías jurídicas propias de la dogmática continental instituciones tradicionales, como en el caso de las forales de Navarra: A pesar de todo, utilizando una categoría jurídica schmittiana califica la ley de 1841 como

"PACTO CONSTITUCIONAL y por tanto de "status" no auténtico, dentro de una unidad política o Estado y que sólo se explica por RAZONES HISTORICAS (189).

Para del Burgo, "lo importante es que HISTORICAMENTE SE DIO EL PACTO": Su naturaleza jurídica "no tiene demasiada relevancia práctica. Es una cuestión puramente académica que no afecta al carácter inmodificable del régimen formal sin el consentimiento de las partes que concurrieron a su modificación en 1841". Sin embargo, de forma un tanto contradictoria concluye: "Esto es claro: cualquiera que sea la naturaleza del PACTO-LEY ningún Estado de Derecho puede desconocer su existencia en el mundo jurídico español. Una alteración unilateral sería un acto ANTIJURIDICO, un hecho de fuerza" (190).

A pesar de que Del Burgo ve en la Ley una "renovación de primitivo pacto de incorporación de Navarra a la Corona de Castilla", no cae en la tergiversación histórica de otros autores que sostienen que el mismo se dió entre el Reino Independiente de Navarra y la Monarquía española(191), elevándolo a la categoría de pacto internacional, sino que reconoce que se dió entre "el Gobierno y la Navarra representada en su Diputación"; sin embargo, pasa por alto todo el problema de rango jerárquico que este asunto plantea. La Diputación de Navarra recibe su legitimidad de la Constitución de 1837. Según la Constitución, la Diputación, presidida por el jefe político, es un órgano secundario, depen-

diente del Poder Ejecutivo y no tiene personalidad para pactar de igual a igual con el Gobierno, y muchos menos, para condicionar al Legislativo, en el que también participa Navarra; y al que constitucionalmente están sujetos tanto el Gobierno como la Diputación. En suma ni por su propia naturaleza, ni por el R.D. 16-XI-39, la Diputación provincial de Navarra adquiere consideración de parte igual en rango para pactar con el Estado. Como afirmará Cánovas del Castillo en la discusión de la ley de presupuestos de 1876-1877: "Entre el Rey y las Cortes por un lado y cualquiera de sus provincias por otro no hay pacto posible" (192). Del Burgo trata de salvar esta posible objeción diciendo que "Bajo la apariencia externa y formal de una provincia, se concentraba en realidad toda la fabulosa personalidad histórica del viejo Reino pirenaico", de forma que, La unión real a la Corona castellana se iba a sustituir por una integración más profunda y vital en el seno de la comunidad española". Insistiendo de nuevo en que "el hecho histórico fué así, aunque resulte difícil encajarlo en los habituales moldes jurídicos" (193).

Podría pensarse que a pesar de que suponía invadir la soberana potestad del legislativo, el gobierno hubiera intentado presentar a las Cortes un pacto ya formalizado para su ratificación, e incluso que las Cortes lo hubieran consentido. Tampoco "historicamente" se dieron ninguno de estos dos supuestos.

El compromiso que adquirió Espartero en el Convenio de Vergara, se reducía a RECOMENDAR con interés al Gobierno proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros", sin comprometerse ni a que el gobierno realizara la propuesta, ni mucho menos a que las Cortes se pronunciasen en un sentido favorable. Nada definitivo se garantizaba en materia de fueros. Amen, de que en el mejor de los casos para nada afectaba el Convenio a Navarra.

La ley 25-X-1839, en la que en su artículo 1º "se confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía", fué un acto discrecional de las Cortes, cuya significación política hemos tratado ya de explicar. Por el artículo 2º de la misma ley: "El Gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita y OYENDO ANTES a las Provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclama el interés de las mismas, conciliando con el general de la Nación y de la Constitución de la Monarquía, resolviendo entre tanto provisionalmente, y en la forma y sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ello cuenta a las Cortes" (194). En el debate de la ley, el diputado navarro Madoz había aplaudido los dictámenes de la comisión porque preveían que "las modificaciones se hicieran OYENDO A LAS PROVINCIAS"; lo cual la había hecho concebir esperanzas de que se tuvieran en cuenta: "las REFLEXIONES QUE PUEDAN HACER LOS HABITANTES DE AQUEL PAIS A FIN DE MA-

NIFESTAR QUE CONVIENEN CIERTOS FUEROS..." (195).

Nada se decía en la ley de PACTAR o CONVENIR, sino simplemente de OIR; en el sentido de una audiencia o informe previo que diese a conocer los intereses de las provincias para que conciliados con el general de la Nación, garantizase el éxito de la modificación.

Siguiendo lo preceptuado en el art. 2º de la ley el R.D. 16-XI-1839, resolvía provisionalmente la institucionalización política de las provincias y disponía la forma en que las mismas deberían "hacerse oír" para la posterior formalización de la modificación foral. Mientras que a Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se les respetaba su organización tradicional de Juntas y Diputaciones, en Navarra se amplían provisionalmente las competencias de la ya existente Diputación provincial constitucional con las "que por fuero competían a la Diputación del Reino" y "las de Administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra"; todo ello "sin perjuicio de la unidad constitucional" (196).

En los art. 3º y 5º, se concretaba la forma en que debería realizarse la consulta en el asunto foral: "Las provincias Vascongadas en sus Juntas Generales y Navarra por ^{la} nueva Diputación, nombrarán dos o más individuos, que unos a otros se sustituyan y con los cuales PUEBA CONFERENCIAR EL GOBIERNO PARA LA MEJOR EJECUCION DE LOS DISPUESTO EN EL ART. 2º DE LA LEY DE 25 DE OCTUBRE" (197). Quedaba claro que la finalidad de la consulta era una simple medida

de prudencia política para la MEJOR EJECUCION de la modificación foral.

En enero de 1840 se celebraron las elecciones generales y provinciales. El apoyo carlista y del clero, resignados ya a utilizar los medios políticos, dio el triunfo a los moderados. El Barón de Bigüezal, Agustín Armendáriz, Florencio García Goyena y Juan Pablo Ribed representaron a Navarra en Cortes (36) y los generales Orzá y Jáuregui y José María Galdiano constituyeron la terna elegida para el Senado, siendo en el último en quien recayó la designación real (198).

En las elecciones provinciales, sólo Tomás Arta y Lorenzo Mutiloa por Estella consiguieron mayoría en la primera vuelta. En la segunda: Juan Pedro Aguirre por Sangüesa, Bonifacio Garcés de los Fayos por Olite, José María Pérez del Notario por Estella y Fermín Gamio y Justo Galarza por Pamplona completaron la corporación (199).

La nueva Diputación provincial, que tomó posesión el 3 de marzo, dirigió una proclama el 29 del mismo mes en la que ratificaba el programa "foral" que desde el Convenio de Vergara y antes, incluso, venía manteniendo:

"La Diputación ha comenzado prestando el sagrado juramento de observar la Constitución del año 1837, su fidelidad a nuestra legítima Reina Doña Isabel 2ª y los fueros de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional; y se complace en anunciaros que observando exactamente estas tres bases, en la reorganización del

sistema político-administrativo y gubernamental de Navarra, nada os quedará que desear de los gobiernos anteriores, que nos proporcionaba nuestra Constitución particular, ni de los que las luces del siglo y las nuevas necesidades, creadas por el tiempo, han hecho ya indispensables a todas las Naciones.

La Constitución del año 1837 es, en la esencia, lo mismo que los fueros primitivos de Navarra... Nuestras primitivas instituciones, en lugar de padecer el menor quebranto, se mejoraban al influjo de la sabiduría de la representación Nacional.

.....

Existen, sin embargo, intereses materiales, inherentes a nuestro sistema particular, hábitos y costumbres, que es necesario combinar con el nuevo orden de cosas; la conservación de todo cuanto en nuestro antiguo fuero puede contribuir al bien del país, y de lo que puede mejorarse, haciéndolo conciliable con la fraternidad a que nuestra localidad, y nuestras simpatías nos ligan con el resto de la España, es lo que ocupa hoy a la Diputación. El comercio, la industria, la instrucción pública, nuestro sistema municipal y provincial y la seguridad de su bien fundado crédito, así como la manera de contribuir con gente y con dinero a las necesidades del Estado, son los puntos que debe meditar para la misión de los comisionados que han de pasar a MANIFESTAR AL GOBIERNO LOS DESEOS, LA OPINION PUBLICA de los Navarros y sus necesidades" (200).

Si el Gobierno, nada decía de PACTAR, sino simplemente de CONFERENCIAR con las provincias, para "mejor ejecutar" la modificación definitiva de los fueros, la Diputación de Navarra entiende lo mismo cuando piensa que la misión de los comisionados es "manifestar al gobierno, la opinión pública, los deseos y las necesidades de los navarros".

En la sesión del 1-IV-1840, aprobaba la corporación las bases de la modificación foral, descubriendo en

qué consistían "los fueros racionales y útiles" y que en lo fundamental se reducían a una total autonomía administrativa y fiscal, garantía de la Deuda Pública y exención del servicio militar. Ninguna pretensión legislativa, ni tan siquiera la conservación de la legislación civil privada, para la que sólo solicitaban su mantenimiento hasta la publicación de los Códigos generales (201).

En la misma sesión en que se aprobaron las bases anteriores, se nombraron los comisionados previstos en el R.D. 16-XI-1839, resultando elegidos: Fausto Galdeano, Pablo Ilarregui, Fulgencio Barrera y Tomás Arteta (202).

Para "hacerse oír" por el Gobierno los comisionados de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya intentaron formar un frente único de negociación, pero, como era de esperar, las distintas pretensiones de unos y otros, mucho más interesados los vascongados en conservar el orden institucional y las Aduanas en el Ebro, hicieron imposible la conversación conjunta. El 28-V-1840, los comisionados navarros escribían a la Diputación: "...echamos de ver que las intenciones de los vascongados son conservar en toda su integridad el sistema foral, aun a costa de hacer para ello algunos sacrificios pecuniarios, lo cual nos pone a una distancia enorme de ellas, como no podrá V.E. dejar de conocer..." (203); y el 4 de junio anunciaban su separación pues "En la última conferencia tenida con los comisionados de las provincias Vascongadas nos acabamos de convencer de

que era imposible el acuerdo común en el punto de traslación de las aduanas a las fronteras..." (204).

El 23 de junio los navarros iniciaban de forma separada las conversaciones con una comisión nombrada por el Gobierno; conversaciones que fueron interrumpidas por los sucesos de la revolución de septiembre que llevaron al poder a los liberales.

Será durante la Regencia de Espartero, cuando se formalice el arreglo definitivo de los fueros de Navarra. El Gobierno liberal se encuentra ya con la materia discutida y muestra interés por solucionar de forma rápida el asunto de fueros. A la comisión nombrada por el anterior gobierno no se le renueva el mandato y antes de disolverse presenta al ministro de Hacienda el resultado de las conversaciones celebradas antes de la revolución.

El comisionado Galdeano comunica a la Diputación: "Considerando la buena disposición en que parece hallarse el Ministerio para nuestro asunto de fueros, creo sería una ocasión muy oportuna para que V.E. tratase de SACAR ALGUNAS MAS VENTAJAS en dicho asunto...". Y la Diputación en escrito aprobado el 24-XII-1840, aumenta sus peticiones, especialmente en materia impositiva, intentando "cerrar la puerta a toda otra contribución directa ni indirecta de ninguna clase que sea" (205). El Gobierno, sin embargo, RE SUELVE SIN TENER EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES DE LA DIPUTA-

CIÓN. "Como vemos -comenta Martínez Tomás- no hay ya aquí discusión con los comisionados, ni los comisionados navarros vuelven a pedir instrucciones a la Diputación, sino que el Gobierno con los elementos de juicio que le proporciona lo actuado por los comisionados y teniendo también a la vista las últimas instrucciones de la Diputación va a resolver sobre los puntos convenidos y sobre los que hubie se alguna discrepancia, o aspectos que concretar, como eran por ejemplo los del estanco de la sal, la intervención del Gobierno en asuntos de los propios de los pueblos, contribuciones extraordinarias, etc..." (206).

El gobierno de la Regencia aprueba las bases definitivas, las reseña en un pliego, que firma el ministro de la Gobernación, Cortina y no llama a los comisionados de la Diputación para firmarlas, ni las firma la Regencia. Una vez aprobadas, el ministro las remite con un oficio a los comisionados navarros:

"Remito a V.SS. de orden de la Regencia provisional del Reino, el concierto definitivamente acordado para modificar los fueros de la provincia de Navarra, a fin de que remitiéndolo a aquella Diputación PUEDA APROBARLO O PROCEDER-SE EN SU CONSECUENCIA A FORMALIZARLO COMO CO-RESPONDA..." (207)

En la transcripción de este texto que ha sido uno de los testimonios documentales en que se han apoyado los autores navarros pactistas para sostener el procedimiento empleado, ha descubierto Mz. Tomás un importante

error consistente en cambiar la conjunción "O" disyuntiva, de alternativa, tal y como figura en el acta de la sesión de la Diputación, por la "Y" copulativa, de unión, en el párrafo final del oficio de Cortina de tal manera que desde la Memoria de Ilarregui hasta la tesis de Del Burgo se lee:

"... a fin de que remitiéndolo a aquella Diputación, PUEDA APROBARLO "Y" PROCEDERSE EN SU CONSECUENCIA A FORMALIZAR COMO CORRESPONDE" (208).

Evidentemente, el resultado es opuesto. En éste último caso, la APROBACION era un paso previo y necesario para su posterior formalización, lo que reforzaría el papel activo y preceptivo de la Diputación en el proceso y facilitaría la tesis del pacto. En cambio, tal y como figura en el texto original, el hecho de que las bases fuesen aprobadas o no por la Diputación era indiferente para la formalización del proyecto de ley. Por supuesto, que políticamente era deseable su aprobación, pero, de ninguna manera necesaria desde un punto de vista jurídico-formal. La Diputación contestó aprobando las bases; pero si la respuesta hubiera sido negativa, el Gobierno hubiera "procedido en consecuencia a formalizar como corresponde".

El Gobierno no tenía por qué obligarse ni obligar al Estado a un pacto que no pudiera modificarse sin conformidad de la Diputación, sino que ofrece a las Cortes un proyecto de ley, que discutido con los comisionados de

aquella corporación, inferior en rango al gobierno, tuviese en lo posible la conformidad de ella porque eran mayores las posibilidades de acierto y aceptación por el legislativo, pero sin comprometer a éste, ni intentar siquiera impedirle, que modificara el proyecto como entendiese conveniente ejercitando su propia y exclusiva competencia.

Entre tanto ante la reclamación del jefe político sobre sueldos del personal, la Diputación le sale al paso considerando que debe aguardarse a "LAS MODIFICACIONES QUE SE ACUERDEN POR LAS CORTES DESPUES DE OIR A LAS PROVINCIAS" (209). La corporación una vez más reconoció a quien correspondía la modificación foral.

El 31-II-1841, presentó el Gobierno a las Cortes el proyecto de ley. La comisión encargada de dictaminarlo introdujo en el texto modificaciones de diversa valoración en cuanto a su contenido, pero que eran expresión de la soberanía del legislativo, pues igual modificaban el proyecto del Gobierno, que el supuesto pacto bilateral (210). Si se tratase de un PACTO, el Congreso podía o no ratificarlo, pero de ningún modo variarlo por su cuenta sin remitirlo previamente a la aprobación de la otra parte interesada: la Diputación provincial de Navarra.

La misma Diputación, pide a los diputados a Cortes por Navarra que "procuren por todos los medios que no se haga la menor alteración en el proyecto presentado por la Comisión del Congreso, pues cualquier mudanza en lo ac-

tualmente establecido podría producir funestas consecuencias en el espíritu público" (211). La Diputación, pues, reconoce la posibilidad de que las Cortes varíen el proyecto y para evitarlo, no invoca la fuerza de obligar de un pacto inmodificable sin su consentimiento, sino que recurre como arma política a la amenaza de la alteración del "espíritu público".

Para salvar el escollo que para las tesis pactistas supone este hecho de las modificaciones introducidas por la Comisión, J. I. Del Burgo afirma que "respondían a instrucciones de la Diputación"; afirmación gratuita, que no prueba documentalmente y dudosa en la medida de que alguna de ellas, como el rechazo de la exigencia para jueces y magistrados del conocimiento de la legislación privativa, no favorecía a los navarros. Además, como señala Martínez Tomás: "formalmente desde la tesis pactista no era suficiente que la Corporación estuviera o no conforme, sino que era imprescindible que el nuevo convenio con las observaciones de las Cortes hubiese sido remitido otra vez a la aprobación de la Diputación; y que si lograba de nuevo el consentimiento de ambas partes, formalizarlo en nueva ley" (212).

La Comisión hizo modificaciones al proyecto del Gobierno con la convicción de que la Diputación no tenía por qué aprobarlas ni intervenir en el proceso legislativo. No se trataba de la ratificación de un pacto, sino de la

elaboración de una ley en Cortes.

El 15-VII-1841 "leyóse el dictamen de la comisión sobre modificación de los fueros de Navarra y como no pudiese ningún Señor Diputado la palabra sobre la totalidad se pasó a la discusión por artículos...". He aquí un argumento más en contra de las teorías pactistas. Si de ratificar un pacto se hubiera tratado, las Cortes se hubiesen limitado a pronunciarse sobre la totalidad sin dar la posibilidad de enmendarlo ni de discutirlo por artículos (213).

Aprobada la ley en el Congreso y en el Senado, fue sancionada por el Regente del Reino, General Espartero y promulgada el 16 de agosto en "La Gaceta de Madrid".

B.-ALCANCE DE LA NUEVA FORALIDAD

La ley, se alejaba de las bases iniciales propuestas por la Diputación Provincial; no se había conseguido "cerrar la puerta a toda contribución indirecta", ni reducir el servicio militar a los casos de guerra defensiva, ni evitar la presencia del jefe político en la Diputación, ni el EXCLUSIVO control de ésta sobre los ayuntamientos (214). No obstante, la ley de modificación de fueros de 1841 fue un gran triunfo de la clase política navarra. Y no, como se ha sostenido, porque tuvo sentido político y se resignó

a perder lo imprescindible para "salvar lo salvable"; sino porque consiguió con la NUEVA FORALIDAD implícita en la ley, un aparato de dominación sobre la provincia muy superior al que tuviera en el Antiguo Régimen.

Sin cuestionar la unidad constitucional, o lo que es lo mismo, la integración en el mercado nacional, la participación en la formación de la voluntad general y la confirmación de toda la legislación liberal y desamortizadora, la ley del 41, además de garantizar la deuda pública navarra y el mantenimiento de la autonomía fiscal, proporcionaba a la oligarquía navarra un aparato de control sobre la provincia que no había tenido hasta entonces: la fiscalización de la administración municipal, que en el Antiguo Régimen estaba en manos del Rey a través del Consejo Real, pasaba a la Diputación provincial, que por medio del sufragio censitario primero, y del caciquismo y la corrupción electoral después, iba a ser controlada por esa oligarquía provincial. Contaba además con las ventajas "forales" de mantener reducido a un número de siete los miembros de la corporación, lo que unido a la elección por merindades le permitiría convertir en mayoritario cualquier sistema electoral proporcional impidiendo el acceso de las minorías a la misma, y de calificar de secretas sus deliberaciones, preservándolas de la contestación popular (215).

Ese control municipal, cobra especial relevancia en aquel momento, pues pone en manos de la Diputación el

instrumento clave de la revolución burguesa al convertirla en árbitro de la desamortización y hacer depender de ella las autorizaciones para la enajenación de bienes propios y comunes de los pueblos; con lo cual la privatización de la propiedad comunal en Navarra no tuvo que esperar a la ley desamortizadora de Madoz de 1855, y el proceso iniciado con anterioridad a la guerra carlista se aceleró a partir de 1841 (216).

En resumen: "pagar menos y controlar más", tal era la esencia de la NUEVA FORALIDAD. La Guerra carlista fué, pues, la gran oportunidad con que contó la oligarquía navarra para mantener en un Estado de Derecho, jurídicamente igual por definición, unas desigualdades jurídicas propias del Antiguo Régimen.

Pero, si la Ley de modificación de fueros de 1841 fue una ley ordinaria y ni jurídicamente era posible el pacto, ni históricamente se dió, nadie pretendió pactar ni tampoco se llamó PACCIONADA la ley, ¿de cuándo data esta denominación?.

Si bien es cierto, que ya José Alonso en su obra "Recopilación y comentarios de los fueros y leyes de Navarra" le atribuye carácter PACTADO, probablemente como arma defensiva contra la reforma tributaria de Non-Santillán, el término sólo se generaliza a raíz de la "ola revolucionaria" que se inicia en 1866 y en las cuatro provincias vascas se

empieza a ver en el Euzko un valladar contra la "marea democrática". En aquel momento, será la propia Diputación provincial de Navarra la que busque un "frente foral" y vea en el particularismo vasco un instrumento defensivo contra el "espíritu revolucionario que azota al mundo, propiciando el primer proyecto de UNION VASCO-NAVARRA:

"La historia y la tradición de las provincias Vascongadas y Navarra, su carácter y su fisonomía, sus costumbres y sus creencias, sus sentimientos y sus intereses son idénticos. Unos mismos son los rasgos de su territorio, y uno mismo el aspecto que presenta. El idioma vascongado, que es su lenguaje primitivo y general, se conserva y se conservará perpetuamente en este país y servirá de glorioso escudo al pueblo euzkaro para preservarse de las venenosas doctrinas que esparce con inquieta mano por todos los ambientes del mundo el espíritu revolucionario. Y en los días presentes, cuando las instituciones más altas se conmueven, cuando la sociedad se agita, cuando el sagrado de la familia se profana y el principio de la autoridad se menosprecia, es cuando los pueblos que tienen conciencia de su dignidad y fe en sus destinos providenciales, deben asociarse y unirse por los vínculos más íntimos a fin de que, sin perder su respectiva autonomía, realicen la unidad en sus más importantes manifestaciones" (217).

La revolución llegó y llegó la República. Y mientras en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, debido por una parte a que no habían transigido en la modificación de fueros y conservaban sus instituciones tradicionales; y por otra, a la inestabilidad de la situación y al deseo por parte del poder central de no crear un nuevo foco de resistencia a la República, se les permitían sus Juntas generales y unas Diputaciones forales controladas por los antiguos "jauntxos",

Navarra tenía que "soportar" una Diputación elegida por sufragio universal compuesta de destacados republicanos radicales (218). Es entonces cuando se empieza a valorar la intransigencia de los vascos y por lo mismo a ahogar las instituciones perdidas cuestionando la ley de 1841. Un folleto que circula en 1873 firmado por "El aldeano navarro" es fiel reflejo de esta opinión:

"...Con la ley de 16 de Agosto de 1841, que es por así decirlo nuestra constitución administrativa, ¿ganamos o perdimos?. Indudablemente salimos perdiendo, aunque sin desconocer que obteníamos grandísimas ventajas materiales, mas que fueran pasajeras, si comparáramos nuestra situación con las demás Provincias; y salimos perdiendo porque perdimos la libertad..."

"...esa ley, que no tiene más respeto que otra cualquiera ley, sólo por las circunstancias inseguras que ha pasado Madrid, ha podido existir treinta y dos años..."

"Algunos buenos navarros, y yo con ellos, al ocuparse de la Ley del 41 y al considerarle de un organismo tan defectuoso y tan linfático PARA DARLE ALGUNA CONSISTENCIA A FIN DE QUE SU DESCOMPOSICION SE APLAZARA TODO LO POSIBLE LE PROPONEMOS Y PROPONEMOS UNA DEFINICION DE LEY PACTADA. Hoy, que el peligro es irremediable y que lo prudente es decir toda la verdad, no se puede sostener tan solemne absurdo..." (219).

Lo cierto es, que a partir de entonces, la teoría del PACTO fué un arma política utilizada con desigual éxito y cuya posible aceptación por parte del poder central ha dependido más de razones políticas que de razones jurídicas. No existe una trayectoria inequívoca de respeto al "PACTO"; y son numerosos los precedentes de "alteración uni

lateral" del mismo por parte del Gobierno, sea en materia fiscal (Ley de Presupuestos de 1876-1877) (220), sea a la hora de derogar principios de la propia ley (1910 y 1912, suprimiendo el derecho de sustitución de quintas) (221). Por poner dos ejemplos recientes y contrarios, mientras en la Segunda República no funcionó la teoría del pacto al intentar negociar la reforma agraria y la reforma fiscal sobre contribuciones directas, en 1971, el general Franco "pactaba" la Compilación del Derecho Civil Navarro con la Diputación, ahora ya, Foral (222) elevando a ésta última a la categoría de órgano co-legislador (223).

Indudablemente la teoría del PACTO ha obtenido su máxima rentabilidad en el terreno fiscal, dado que toda renovación del cupo contributivo debía "pactarse" entre la Diputación y el Gobierno. Los largos períodos transcurridos entre "pacto" y "pacto" (224) y la invariabilidad del cupo entre ellos es sin más una prueba de la injusticia fiscal que supone la desproporcionada contribución de Navarra a las cargas generales del Estado ante unos Presupuestos que se elevan año tras año (225).

Los navarros, también el resto de los vascos, se niegan a hablar de PRIVILEGIOS y prefieren hablar de DERECHOS HISTÓRICOS o de DERECHOS FORMALES. Pero en un Estado de Derecho, jurídicamente igual, aun ue los FUEROS pudieran justificarse en base a derechos históricos más o menos mitificados, la situación resultante no deja de ser excep-

cional y privilegiada respecto al resto de los ciudadanos "no forales", y sobre todo cuando de excepciones fiscales se trata.

Esta contradicción de los FUERISTAS, que levantan voces indignadas cuando se trata de equiparar fueros con privilegios, la denunció con lógica aplastante desde posturas nacionalistas radicales Bernardino de Estella. Comentando el discurso del diputado guipuzcoano Valentín de Olano en Marzo de 1840, decía: "Fué el discurso de un FUE-
LISTA, que gloriándose de ser español, quiere vivir lleno
de privilegios, de los que ninguno otro español goza"; y más adelante aclara el capuchino estellés: "Esta es la men-
talidad de los que se glorían de ser vasco-españoles. Con-
sideran a Euzkadi como parte integrante de España; no obs-
tante, defienden para los vascos una situación privilegia-
da, que lógicamente ha de resultar insoportable para los
españoles. El VASCO-ESPAÑOL es una contradicción viviente
..." (226). Y si sociológica e históricamente puede no ser lo, jurídicamente, es evidente que lo es.

Como señala el profesor Elorza, "el fuerismo desempeña un papel central en la medida que representa la justificación de la personalidad política propia del País Vasco" (227). La conciencia de colectividad diferenciada que se deriva de la vigencia de las instituciones forales, posibilita la consolidación de una personalidad política propia; personalidad que históricamente puede manifestarse, y se ha manifestado, tanto a nivel general vasco (Naciona-

lismo de Arana-Goiri), como particular de alguno de los te
rritorios del País (Navarrismo).

Este aspecto descentralizador, que exige un desa
rrollo particular de pueblos diferenciados histórica y cul
turalmente, irá acompañado de otras consecuencias no menos
importantes: el FORALISMO ha lastrado de tradicionalismo
toda la política vasca en general y navarra en particular.

Supuesta la general aceptación del FUERISMO como
arma ideológica de toda política con pretensiones de hege-
monía en el país y supuesta la progresiva marginación y
consecuente radicalismo tradicionalista-antiliberal de los
sectores definidores de dicho Fuerismo, la defensa del fue-
ro, a medida que nos adentramos en la 2ª mitad del S. XIX,
introducirá elementos de contradicción en los planteamien-
tos liberales.

El mantenimiento de los esquemas fueristas, y en
concreto de la vieja teoría del PACTO FORAL, obstaculizará
de alguna manera la adopción de modelos de organización
del Estado basados en planteamientos más modernos, tanto
federales como autonómicos: si el respeto a los Fueros in-
trodujo un factor de debilitamiento en el movimiento libe-
ral (228) y el federalismo del pimargalliano Olave estará
imbuído de elementos forales tradicionales, en 1978 el so-
cialista Arbeloa seguirá manteniendo que: "nuestros dere-
chos forales no pueden estar SOMETIDOS a la Constitución,
a sus varias interpretaciones, a la ley de las mayorías, a
la voluble voluntad de los diputados..." porque "nuestros

fueros no son fueros medievales... son en lo fundamental al renos, derechos vivos, libertades vigentes, que no pueden cambiarse sino por vía de PACTO" (229).

En 1979, la teoría del PACTO y LOS DERECHOS FORALES mantienen su virtualidad política y en Navarra, de nuevo, se intenta iniciar un proceso autonómico propio, al margen de la Constitución vía REINTEGRACION FORAL PLENA, ANEJAMIENTO DEL FUERO o RENOVACION DEL PACTO-LEY de 1841, en base a una negociación directa entre la Diputación y el Gobierno, que las Cortes, esta vez sí, se limitarían a ratificar. El 5-XI-1979 se pudo oír en el Parlamento foral navarro:

"Navarra está antes que la Constitución porque nuestros derechos son pre-constitucionales y el amparo y respeto que dice la Constitución no nos es necesario" (230).

Si las anteriores palabras fueron pronunciadas por el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, el representante de Unión de Centro Democrático completaba:

"El PACTO que ahora queremos conseguir puede llegar a ser el más importante de nuestra historia" (231)

Se trata pues, de buscar la legitimidad a la autonomía navarra, no en la Constitución, utilizando las vías en ella previstas, sino en el supuesto carácter pactado de la mal llamada Ley Paccionada de 1841, renovando el PACTO por consentimiento de las partes contratantes para actualizarlo según las necesidades del momento.

El mito FORAL y el mito PACTISTA siguen funcionando y condicionando el acontecer político, pues aunque el mito sea falso, desde el momento que se cree en él se convierte en realidad, y la política al tener que funcionar con realidades está siendo condicionada por los mitos.

NOTAS

- (1) J. DE EGAÑA: Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias Vascongadas, Madrid, 1850, pág. 88.
- (2) Vid. supra, pág. 87
- (3) Vid. supra, pág. 77
- (4) HENNINGSEN C. F.: Campaña de doce meses en Navarra y las Provincias Vascongadas con el General Zumalacárregui, traducido de la obra inglesa publicada en 1836, Madrid, 1935, pág. 57. Cit. por Fz. de Pinedo: op. cit. pág. 465.

En el mismo sentido el testimonio de Iparraguirre, el autor del Gernikako Arbola, que voluntario carlista en 1833 reconocía más tarde que "en aquella época, yo no sabía lo que eran Fueros..." (J. CORCUERA: op. cit., pág. 148).
- (5) LARRONDE: op. cit., pág. 37.
- (6) MUGICA: op. cit., pág. 38. Vid. supra, pág. 152 y ss
- (7) Vid. supra, pág. 362, 363
- (8) AGN. Actas Diputación. T. 44, 5-XI-1840
- (9) Desconocemos la realidad foral alavesa y las vicisitudes de la institucionalización liberal.
- (10) DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES: CONGRESO, sesión 4-X-1839, pág. 592 a 596.

- (11) NUGICA: op. cit., pág. 172.
- (12) AGN. Actas Diputación. T. 44, sesión 11-VI-1840. En una carta de los Comisionados a la Diputación se decía: "En la última conferencia tenida con los comisionados de las provincias Vascongadas, nos acabamos de convencer de que era imposible el acuerdo común en el punto de traslación de las aduanas a las fronteras según lo hemos insinuado a V.E. en nuestras anteriores comunicaciones. Vista pues esta discrepancia, y queriendo nosotros cumplir con las instrucciones de V.E. hemos tratado de entendernos con el Gobierno de S.M."
- (13) "Los mozos eran redimidos sin que les costase un maravedí; ¿y por quién?; por los propietarios: siendo éste un beneficio que refluía en favor de la misma sociedad". (DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES. SENADO - Sesión 22-X-1839). Intervención del Conde de Ezpeleta.
- (14) La Diputación de Vizcaya reconoce en 1839 que "Si su deseo (el de los Fueros) tuvo alguna influencia en el levantamiento de estas provincias en octubre de 1833 en favor de D. Carlos, existió solamente en algunos jefes..." (EZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 158).
- (15) Vid. supra, pág. 180.
- (16) EL ECO DEL COMERCIO del 21-IX-1844 escribía: "Sabemos que Navarra es el país más realista..."
- (17) R. CARR: op. cit., pág. 189.
- (18) FEDERICO ZABALA: Munagorri y la bandera "Paz y Fueros", artículo en revista NUGA Bilbao, 1-VI-1979, pág. 56.
- (19) E. AVIRANETA: Memoria dirigida al Gobierno español sobre los planes y operaciones, puestos en ejecución para aniquilar la rebelión en las provincias del Norte de España, Madrid, 1844, 2ª edición (1ª ed. 1839), pág. 151.
- (20) NUGICA: op. cit., pág. 175.
- (21) Vid. supra, pág. 186 y ss.: Base social del carlismo.

- (22) BOP. nº 70, 15-IX-1839. Vid. APENDICE nº 12
PIRALA: op. cit., V, pág. 480.
- (23) FERRER: op. cit., XVI, pág. 75 y ss.
OYARZUN: op. cit., pág. 155 y ss.
- (24) PIRALA: op. cit., V, pág. 415.
- (25) BOP. nº 70, 15-IX-1839.
PIRALA: op. cit. V, pág. 480 y ss.
- (26) DOCUMENTOS...., pág.
- (27) LAFUENTE: op. cit., VI, pág. 245. "Entre nosotros no hay más que una divisa: Isabel II: Reina gobernadora como Regente: Constitución del año 1837. Unidos bajo esta bandera que hemos jurado defender seremos invencibles" (Madrid - agosto 1837).
PIRALA: op. cit. V - 505: "Motivos sin duda tenía la reina gobernadora para estar disgustada si no de los partidos políticos, al menos de sus principales personajes... así que sólo hallaba apoyo en medio de tantas intrigas y ambiciones en el que permanecía fiel al juramento que prestare de defender la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre; y era esa leal el duque de la Victoria, que ningún partido había conseguido atraer a sus cábalas..."
- (28) DOCUMENTOS..., pág. 105.
- (29) FERRER: op. cit. XVI, pág. 277. (Carta de Espartero a Maroto 29-VIII-1839).
- (30) PIRALA: op. cit. V, pág. 452 y ss.
- (31) URBISTONDO: op. cit., pág. 17 y ss.
- (32) Ibid: pág. 17.
- (33) LLUIS: op. cit., pág. 323.

- (34) BOP nº 67, 5-IX-1839.
- (35) DOCUMENTOS RELATIVOS AL CONVENIO DE VERGARA PRESENTADOS OFICIALMENTE AL PARLAMENTO INGLES POR MANDADO DE S.M.B. EN 1840, pág. 59: "Esta contrarrevolución había sido imaginada ya desde 1834 por una persona de mucha consideración, de Bilbao". Al parecer la tal persona fue Lezama Leguizamón, según se deduce de la correspondencia del Marqués de Villafuertes.
- (36) PIRALA: op. cit. V, pág. 176.
- (37) MENCOS: op. cit., pág. 136. El autor debe confundir la fecha de su primer encuentro con Muñagorri, pues lo sitúa a primeros del año 1837, aunque dice que la pretensión de Muñagorri fue el que le proporcionase una entrevista con Toreno, "persona del gobierno que él creía con más talento para poner en acción este plan". En 1837 en el Ministerio presidido por Calatrava no figuraba el moderado Toreno; sí en cambio en 1835.
- (38) PIRALA: op. cit., V, pág. 176.
- (39) DOCUMENTOS..., op. cit., pág. 59.
- (40) Ibid., pág. 59.
- (41) EGAÑA: op. cit., pág. 107.
- (42) MUGICA: op. cit., pág. 180.
- (43) Vid. supra, pág. 257.
- (44) AVIRANETA: op. cit., pág. 95: "La incursión de los FUERISTAS sobre Azpeitia y Oñate obligaría a los CARLISTAS a retirar sus batallones".
- Y en DOCUMENTOS... OP. cit., pág. 64 al hablar de los soldados de Muñagorri instalados en Lastaola dicen: "me hablaban en los mejores términos del buen comportamiento de las fuerzas FUERISTAS..."

- (45) Vid. supra, pág. 159, 160, 186, 364, 387
- (46) EGAÑA: op. cit., pág. 88.
- (47) Ibid., pág. 89.
- (48) DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES; SENADO, sesión 19-X-1839.
- (49) Ibid.
- (50) EGAÑA: op. cit., pág. 122.
- (51) Ibid., pág. 123.
- (52) AVIRANETA: op. cit., pág. 102.
- (53) NIDO Y SEGALERVA: Historia política y parlamentaria de S.A.C. Baldomero Fernández Espartero, Madrid, 1916, pág. 276.
- (54) A. ZABALA OZAMIZ, "KONDAÑO": Contestación a Mella, Bilbao, 1907, pág. 17. Cit. por J. CORCUERA: op. cit. pág. 163 nota (17).
- (55) AVIRANETA: op. cit., pág. 24.
- (56) Ibid., pág. 99.
- (57) Ibid., pág. 111 y ss.
- (58) DOCUMENTOS... op. cit., pág. 107 y ss.
- (59) Vid. supra, pág. 172.
- (60) R. CARR: op. cit., pág. 160.

- (61) RZ. GARRAZA: Navarra..., op. cit., pág. 243.
- (62) Ibid., pág. 244.
- (63) LAFUENTE: op. cit. VI, pág. 227.
- (64) Ibid., pág. 292.
- (65) RZ. GARRAZA: Navarra..., op. cit., pág. 239.
- (66) EGAÑA: op. cit., pág. 96.
- (67) Ibid. 95.
- (68) LAFUENTE: op. cit. VI, pág. 317.
- (69) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA nº 154, 26-VII-1835. Cit.
por RZ. GARRAZA: Navarra..., op. cit., pág. 239.
- (70) Vid. supra, pág. 508 nota 35
- (71) DOCUMENTOS... op. cit., pág. 7 y 8.
- (72) Ibid., pág. 14 y 15.
- (73) BOLETIN DE NAVARRA Y PROVINCIAS VASCONGADAS, 13-VII-
1838. Cit. ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pág. 169
- (74) AGN. Actas Diputación. T 42 sesión 5-III-1838.
- (75) AVIRANETA: op. cit., pág. 25 y 26.
- (76) AHN. Estado, leg. 8152, 7-XII-1838. Del informe que
Lord John Hay envía al embajador inglés en Madrid.
- (77) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA nº 70, 15-IX-1839.

- (78) DOCUMENTOS... op. cit., pág. 50.
- (79) DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES. SENADO, sesión 20-X-1839.
- (80) C. SECO SERRANO: Tríptico Carlista, Ed. Ariel, Barcelona, 1973, pág. 52.
- (81) LLUIS: op. cit., pág. 321.
- (82) PIRALA: op. cit., II, pág. 244. "Una palabra tiene a veces una grande significación en los partidos y cosa importancia como lo comprueba este apodo... El oficial de caballería carlista volvía en una ocasión de un hecho de armas y algunos de sus amigos que no las manejaba
- "esta expresión corrió de boca en boca, y desde entonces era OJALATERO todo el que no militaba, y como esta ocupación era la principal y más necesaria, ese nombre parecía imprimir un baldón a todos los que pudiendo, no tomaron las armas".
- La palabra tiene su origen en las exclamaciones de los que lejos del campo de batalla juzgaban las acciones militares: "¡Ojalá hubiesen vds. atacado por tal o cual parte... OJALA hubiesen vds. hecho tal o cual movimiento; a lo que un oficial les respondió en una ocasión: "Siempre están vds. con ojalás, ¿son vis. OJALATEROS?".
- PIRALA: op. cit., II, pág. 534.
- (83) "Españoles: el cielo que en su piedad jamás olvida a esta nación singular, que tan visiblemente protege UNA CAUSA QUE ES LA SUYA" (D. Carlos en Azpeitia, 2-IX-1836).
- (84) LLUIS: op. cit., pág. 320.
- (85) OYARZUN: op. cit., pág. 71.
PIRALA: op. cit., I, pág. 566.
- (86) ZARATIEGUI: op. cit., pág. 25.
- (87) PIRALA: op. cit. I. pág. 657.

- (88) AZCONA: op. cit., pág. 383.
- (89) Ibid., pág. 514.
- (90) PIRALA: op. cit. I, pág. 619-620. Manifiesto de Zumalacárregui en Lumbier, 8-III-1834.
- (91) Vid. supra, pág. 322
- (92) PIRALA: op. cit., IV, pág. 55. El testimonio es de un oficial carlista que no se acogió al Convenio de Vergara.
- (93) OYARZUN: op. cit., pág. 73.
- (94) PIRALA: op. cit. IV, pág. 268.
- (95) Ibid., IV, pág. 269. El testimonio es de Manuel Lasala, oficial carlista.
- (96) Ibid., IV, pág. 549.
- (97) Toda la correspondencia que se cruzó entre estos tres personajes en: PIRALA: op. cit. I, pág. 611 a 620.
- (98) RZ. GARRAZA: Navarra..., pág. 245.
- (99) J.L. CASTILLO PUCHE: "Memorias íntimas de Aviraneta o manual del conspirador", trata de desmontar el mito de este personaje, reforzado por Baroja. Biblioteca Nueva. Madrid, 1952.
- (100) PIRALA: op. cit., V, pág. 406: "Se empezó a trabajar para formar un tercer partido con Marcó del Pont a la cabeza y con generales acreditados llamándose este partido ilustrado o de transacción. Trabajaban para atraerse a Cabrera, servíales Mataflorida en París, donde estaba relacionado con los jovellanistas liberales y se exigía que D. Carlos firmara los decretos de Amnistía, convocación de las Antiguas Cortes y reconocimiento de deudas".

- (101) PIRALA: Op. cit., V, pág. 177.
- (102) Vid. supra. pág. 326 y ss.
- (103) Vid. supra, pág. 328
- (104) URBISTONDO: op. cit., pág. 25.
- (105) MUGICA: op. cit., pág. 180.
- (106) J. DE BURGOS: Anales del reinado de Isabel II, Madrid, 1850, V, pág. 203.
- (107) Ibid, VI, pág. 87-88.
- (108) Sobre la escisión del moderantismo: ARTOLA: La burguesía revolucionaria..., pág. 197.
- (109) EL PILOTO, 25-VIII-1839.
- (110) Ibid., 28-VIII-1839.
- (111) Ibid. 25-VIII-1839.
- (112) Ibid. 25-VIII-1839.
- (113) Ibid. 25-VIII-1839.
- (114) Ibid. 27-VIII-1839.
- (115) Ibid. 21-IX-1839.
- (116) Ibid. 21-IX-1839.
- (117) Ibid. 28-VIII-1839.

- (118) Ibid. 5-X-1839.
- (119) Ibid. 7-IX-1839.
- (120) Ibid. 7-IX-1839.
- (121) Ibid. 7-IX-1839.
- (122) EL CORREO NACIONAL, 27-VIII-1839.
- (123) Ibid. 4-X-1839.
- (124) Ibid. 4-X-1839.
- (125) Vid. *supra* pág. 125-126.
- (126) ECO DEL COMERCIO, 28-VIII-1839.
- (127) Ibid. 25-VIII-1839.
- (128) Ibid. 27-VIII-1839.
- (129) Ibid. 27-VIII-1839.
- (130) Ibid. 27-VIII-1839.
- (131) Ibid. 29-VIII-1839.
- (132) Ibid. 27-VIII-1839.
- (133) Ibid. 26-VIII-1839.
- (134) Ibid. 28-VIII-1839.
- (135) El proyecto de ley presentado por el gobierno decía

así: "Art. 1º. Se confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra. Art. 2º. El Gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita, presentará a las Cortes, oyendo antes a las provincias, aquella modificación de los fueros que crea indispensable y en la que quede conciliado el interés de las mismas con el general de la Nación y con la Constitución política de la Monarquía. Palacio 11 de septiembre de 1839. Lorenzo Arrázola (DIARIO DE SESIONES. CONGRESO. Apéndice 2º, nº 11).

- (136) DIARIO DE SESIONES. CONGRESO, 25-IX-1839.
- (137) Ibid., 7-X-1839; Intervención del diputado Sr. Sancho.
- (138) Ibid. 4-X-1839. Intervención del diputado Sr. Sancho.
- (139) Ibid. 4-X-1839.
- (140) Ibid. 6-X-1839.
- (141) Ibid. 7-X-1839.
- (142) DIARIO DE SESIONES. SENADO, 20-X-1839.
- (143) DIARIO DE SESIONES. CONGRESO, 5-X-1839.
- (144) Ibid. 6-X-1839. Intervención del ministro Arrázola.
- (145) Ibid. 7-X-1839.
- (146) Ibid. 25-X-1839. Apéndice al nº 25.
- (147) Ibid. 4-X-1839. Intervención del diputado Sr. Sancho
- (148) Ibid. 7-X-1839.
- (149) Ibid. 6-X-1839.

- (150) Ibid. 4-X-1839.
- (151) Ibid. 5-X-1839.
- (152) Ibid. 7-X-1839.
- (153) Ibid. 7-X-1839.
- (154) MUGICA: op. cit., pág. 182.
- (155) J. DEL NIDO Y SEGALERVA: Historia política y parlamentaria de S.A.D. Baldomero Fernández Espartero, Madrid, 1916, pág. 315.
- (156) DIARIO DE SESIONES. CONGRESO, 11-IX-1839. Apéndice 2º al nº 11.
- (157) Ibid. 6-X-1839.
- (158) Ibid. 7-X-1839.
- (159) Ibid. 7-X-1839.
- (160) EL PILOTO, 28-IX-1839.
- (161) Ibid. 5-X-1839.
- (162) Ibid. 1-X-1839.
- (163) Ibid. 1-X-1839.
- (164) Ibid. 7-X-1839.
- (165) ECO DEL COMERCIO, 4-X-1839.
- (166) El art. 1º de la ley de fueros decía así: "Se confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y de Na

varra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía (DIARIO DE SESIONES. CONGRESO, 7-X-1839)

- (167) ARTOLA: Partidos y Programas... I, pág. 230-231.

- (168) A. BORREGO: Organización de los partidos; cit. por LAFUENTE; op. cit. VI, pág. 319: "La Gobernadora alarmada por estos indicios y ansiosa de sacar partido del convenio de Vergara, se hacía a sí misma este razonamiento que repetían sus más allegados: 'Terminada la guerra civil y reconocida la Reina por los corifeos carlistas, todos los partidarios de esta opinión vendrán naturalmente a serlo de la prerrogativa de Isabel, y entre los sostenedores habituales del gobierno, los amigos personales de la dinastía y los carlistas reconciliados, reuniremos los elementos de una mayoría capaz de balancear y superar el influjo de los que del sistema constitucional pretenden hacer una rémora para el poder de la Corona'".

- (169) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA?, 5-IX-1839. Convenio de Vergara.

- (170) AGN. Actas Diputación, sesión 10-IX-1839. Cit. CASTRO: op. cit., pág. 200 y ss.

- (171) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA nº 82, 27-X-1839.

- (172) P. ILARREGUI: Memoria sobre la ley de la modificación de los fueros de Navarra: op. cit.

- (173) J. I. DEL BURGO: Origen y fundamento del régimen foral en Navarra: op. cit.
 A. MARTINEZ TOMAS: La naturaleza jurídica del régimen foral de Navarra. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1972. Sin editar.

- (174) La más conocidas: OLAVE: El pacto... op. cit., pág. 245 y ss. OLORIZ: Fundamento y defensa de los fueros. Pamplona, 1890, cap. III: la ley paccionada de 1841. OROZ Y ZABALETA: Legislación administrativa de Navarra, 2 vols. Pamplona, 1923. CAMPION: Discursos políticos y literarios: op. cit., J. GARRAN Y MOSO: El sistema foral de Navarra y Provincias Vascongadas,

Pamplona, 1935. R. AIZPUN: Naturealeza jurídica de las leyes forales. En: Temas Forales, Biblioteca de Derecho Foral, Pamplona, 1966.

- (175) DEL BURGO: op. cit., pág. 285.
- (176) Ibid., pág. 334.
- (177) Vid., supra, pág. 383.
- (178) ALONSO: Recopilación y comentarios... op. cit., pág. 32: "Es un contrato, en que cediendo Navarra muchas y muy preciosas libertades y exenciones, le prometen el gobierno y las Cortes la conservación de otras que no son sin embargo tan importantes como las cedidas y renunciadas".
- (179) J. LOS ARCOS: Intervención del Exmo. Señor D. Javier Los Arcos en la discusión del proyecto de ley de presupuestos para el año económico de 1893 a 1894 en los puntos referentes a la provincia de Navarra. En: Temas forales, Biblioteca de derecho foral, Pamplona, 1966, pág. 353: "A consecuencia de esa ley, el Gobierno llamó a los comisionados de Navarra, con ellos discutió y pactó, se tuvieron en cuenta estas tres condiciones, y a consecuencia de este pacto vino la ley de 1841, a la cual se ha llamado cien veces, en documentos oficiales, ley pactada.
- (180) OLAVE: El pacto político... op. cit., pág. 245, cap. VII: La ley PACCIONADA de 16 de Agosto de 1841.
- (181) CAMPION: Discursos políticos... op. cit., pág. 101: Discurso en el Congreso de los Diputados, 22-VII-1893: "Hoy Nabarra, sintiendo rehosar en su magnánimo pecho la amargura por tanta y tanta injusticia su frida, viene a reclamar por nuestra boca el respeto absoluto a su LEY PACTADA..."
- (182) B. DE ESTEILLA: op. cit., pág. 294: "La ley de 16 de agosto de 1841 fue un PACTO al que se obligó España.
- (183) CONDE DE RODEZNO: Conmemoración de la Ley Paccionada

de 1841. Revista Príncipe de Viana, nº 4, 1941, pág. 57: "Fue un CONTRATO mediante el cual Navarra cedía muchas y muy preciosas libertades a cambio de conservación de otras... quedó bien fijado que ley de tal coturno no podía ser alterada sino a la manera de los contratos bilaterales. Navarra ha logrado siempre conservar el procedimiento de PACTO.

- (184) TRIUNFO, nº 820, octubre, 1978.
- (185) J. A. GARCIA TREVIJANO: Tratado de Derecho Administrativo, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1967, II, pág. 1080: "El régimen navarro arranca de la Ley (paccionada: términos contradictorios) de 1841.
- (186) E. GARCIA DE ENTERRIA y T. R. FERNANDEZ: Curso de Derecho Administrativo, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1977, I, pág. 94.
- (187) Ibid., pág. 95.
- (188) Ibid., pág. 97.
- (189) DEL BURGO: op. cit., pág. 457.
- (190) Ibid., pág. 417.
- (191) OROZ: op. cit., I, pág. 131: "Existe en efecto, la personalidad clara y definitiva de las partes contratas, puesto que Navarra en aquella fecha gozaba, como sabemos, en virtud de los pactos de unión a Castilla, todavía subsistentes, de igual independencia política y de la misma personalidad que pudiera ostentar el Estado..."
- (192) MARTINEZ TOMAS: op. cit., pág. 241.
- (193) DEL BURGO; op. cit., pág. 285.
- (194) J. M. DE ESTECHA: Régimen político y administrativo de las Provincias Vasco Navarras, Bilbao, 1918, pág. 16.

(195) DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES. CONGRESO - 5-X-1839

(196) ESTECHA: op. cit., pág. 16-17: "Art. 4º. La provincia de Navarra nombrará desde luego y por el método establecido para las Diputaciones provinciales, una Diputación compuesta de siete individuos como antes constaba la Diputación del Reino, nombrando un Diputado cada merindad y los dos restantes las de mayor población. Las atribuciones de esta Diputación serán las que por Fuero competían a la Diputación del Reino: las que siendo compatibles con ellas señala la Ley general a las Diputaciones provinciales; y las de Administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra, todo sin perjuicio de la unidad constitucional, según se previene en la Ley citada de 25 de Octubre".

(197) Ibid., pág. 17.

(198) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA, 6-II-1840.

(199) BAZTAN GOÑI: op. cit., pág. 17.

(200) BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA nº 26, 29-III-1840.

(201) Ver APENDICE nº 18 pág. 585

(202) AGN. Actas Diputación, 1-IV-1840.

(203) AGN. Actas Diputación, 4-VI-1840. Cit. DEL BURGO: op. cit., pág. CLXXVII, nota 760.

(204) AGN. Actas Diputación, 11-VI-1840. Cit. DEL BURGO: op. cit., pág., CLXXVII, nota 761.

(205) AGN. Actas Diputación, 24-XI-1840. Cit. MARTINEZ TOMAS: op. cit. pág. 242.

(206) MARTINEZ TOMAS: op. cit., pág. 243.

(207) AGN. Actas Diputación, 5-XII-1840. Cit. MARTINEZ TOMAS, nota (347 b).

- (208) El error figura en la Memoria de ILARREGUI: op. cit. pág. 53); AIZPUN SANTAPE: op. cit., pág. 499; OLAVE: El pacto..., op. cit., pág. 248; LOS ARCOS: op. cit. pág. 289 y DEL BURGO: op. cit., pág. 319.
- (209) AGN. Actas Diputación, 27-XI-1840. Cit. MARTINEZ TOMAS: op. cit., pág. 257.
- (210) DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES. CONGRESO, 3-VII-1841. Apéndice 6º al nº 85: "salvas algunas ligeras modificaciones, en que está de acuerdo el Gobierno de S.M. y se dirigen a robustecer y hacer más compacta la unidad constitucional". Nada se dice del acuerdo de la Diputación.
- (211) AGN. Actas Diputación, 12-VII-1841. Cit. MARTINEZ TOMAS: op. cit., pág. 267.
- (212) MARTINEZ TOMAS: op. cit., pág. 270.
- (213) E. FUENTES QUINTANA, C. ALBIÑANA: Sistema fiscal español y comparado, IV, Madrid, 1961, pág. 738. Cit. MARTINEZ TOMAS: op. cit., pág. 272.
- (214) En los APENDICES nº 18 y 19 se recogen los textos de las bases de la ley.
- (215) Ambas instituciones siguen viciando en 1979 la democracia provincial.
- (216) A. FLORISTAN: La desamortización de bienes perteneciente a corporaciones civiles y al Estado en Navarra: "probablemente fueron más importantes los bienes vendidos con anterioridad a la ley 1-V-1855..."
- (217) J. NOMBELA: Crónica de la provincia de Navarra, Madrid, 1868, pág. 83 y ss. Incluye íntegro el texto de la Diputación, firmado en Pamplona el 18 de agosto de 1866 por los diputados: Nicasio Zabalza, Fortunato Frotón, Alberto Calatayud, Juan Cancio Mena, secretario; y está dirigido a la Exma. Diputación provincial de Vizcaya.-Idem de Guipúzcoa.-Idem de Alava.

- (218) Desde noviembre de 1872 componían la Diputación: Miguel Aldaz, Esteban Camón, Esteban Moreno, Bernardo Iñarra, Baltasar Morrás, Gumersindo Ochoa y Modesto Unidano; según Leandro NAGORE (Apuntes para la Historia: 1872-1886, Ed. Gómez, Pamplona, 1964) todos ellos radicales de Ruiz Zorrilla.
- (219) ¡VIVA NAVARRA!: folleto firmado por "El aldeano navarro", fechado en Pamplona el 10-VI-1873, pág. V, VIII y IX.
- (220) A. MARTINEZ TOMAS: El régimen financiero y tributario de Navarra. Ponencia presentada en el Seminario organizado por el Centro de Estudios Constitucionales: Aspectos económicos y financieros de las Autonomías Regionales, Madrid 8-XI-1878: "Al dictaminar la Comisión de Cortés la Ley de Presupuestos de 1876-77 introdujo el artículo 24 de la misma, que no había sido propuesto por el Gobierno, ni tampoco objeto de conversaciones con la Diputación navarra... El artículo fué aprobado, y es uno de los varios ejemplos de modificación de la Ley de 1841 hecho no con el acuerdo de la Diputación, sino sin conversaciones previas y contra ella... Otras dos leyes de 10-I-1877 y 12-VII-1877 vuelven a legislar en relación al régimen financiero de Navarra sin acuerdo ni conformidad de la Diputación".
- (221) OROZ Y ZABALETA: op. cit., I, pág. 96-97.
- (222) El calificativo oficial de FORAL es reciente. El R.D. 15-VIII-1927 y la Ley 8-XI-1941 mantienen la denominación de DIPUTACION PROVINCIAL. El Decreto-Ley de 24-VII-1969 la llama FORAL (MARTINEZ TOMAS: El régimen financiero... op. cit.).
- (223) GARCIA DE ENTERRIA-T. R. FERNANDEZ: op. cit., pág. 96: "... últimamente ha habido una extensión completamente nueva de la doctrina de la Ley-pacto fuera del ámbito fiscal y administrativo de los Fueros navarros, al plano del Derecho Civil Foral. La Ley de Jefatura del Estado de 1 de marzo de 1973, que ha aprobado la Compilación de Derecho Civil Navarro, establece en su disposición final primera que 'para cualquier modificación o alteración de la vigencia total o parcial de esta Compilación, será necesario nuevo convenio previo con la Diputación Foral al efecto de su ulterior formalización'.

(224) A partir de 1841, los cupos fueron revisados en 1877, 1924, 1941, 1969

(225) MARTINEZ TOMAS: La naturaleza jurídica... op. cit., pág. 521.

<u>Año</u>	<u>Cupo Navarra</u>	<u>Gasto Estado</u>	<u>%</u>
1842	800.000	242.000.000	0,37
1849	1.275.000	309.000.000	0,41
1855	"	374.500.000	0,34
1860	"	472.000.000	0,27
1877-8	1.900.000	734.000.000	0,26
1900	"	905.500.000	0,20
1915	"	1.465.000.000	0,13
1924-5	"	2.941.700.000	0,064
1927	5.750.000	3.139.400.000	0,18
1935	"	4.841.000.000	0,12
1940	"	6.160.000.000	0,09
1942	20.250.000	7.880.000.000	0,25
1965	"	149.000.000.000	0,014

(226) BERNARDINO DE ESTELLA: op. cit., pág. 292.

(227) A. ELORZA: Ideologías del Nacionalismo Vasco. Haranburu Editor. San Sebastián, 1978, pág. 164.

(228) J. EXTREMIANA: De la Paz a la Guerra: aspectos de la ideología dominante en el País Vasco de 1866 a 1873. VII Coloquio de Pau. Edicusa, Madrid, 1977, pág. 77.

(229) TRIUNFO nº 820, 14-X-1878. Vid. APENDICE nº 20, pág. 173

(230) EL PAIS, 6-XI-1979. Intervención del portavoz del grupo parlamentario de UPN, Albito Viguria.

(231) Ibid. Intervención del portavoz del grupo parlamentario de UCD, Joaquín Sagredo.

CONCLUSIONES

V.-CONCLUSIONES

1.-El régimen foral navarro no tuvo otras características ni orígenes que los que habían sido propios de los distintos reinos y pueblos que por los diferentes procedimientos se habían incorporado a la Corona de Castilla. Su organización correspondía a la de una formación social medieval en la que las limitaciones institucionales al poder del rey se explicaban por la división del poder político que hacía del rey un "primus inter pares". Es en este contexto como hay que interpretar las teorías pactistas y no haciendo abstracción histórica ver en ellas el origen del sistema constitucional moderno, aplicando a formaciones sociales feudales conceptos surgidos tras la revolución liberal burguesa.

2.-La creación del Estado moderno realizada por los Reyes Católicos se redujo a ser una unión meramente dinástica y no fué acompañada de una centralización administrativa. Los distintos reinos conservaron sus instituciones, leyes, usos y fueros; aunque la superioridad demográfica y económica permitió a Castilla tomar la iniciativa en la tarea de edificar la Monarquía española.

A lo largo de la Edad Moderna, el Estado como unidad política se consolida en torno a la figura del Rey, abarcando el ámbito sobre el que éste ejerce su po

der. La existencia de los distintos regímenes forales no cuestiona la soberanía del monarca; de la misma forma que no lo hacen los distintos fueros de la nobleza, del clero o de las ciudades, en una sociedad caracterizada por la desigualdad jurídica. Por encima de todo particularismo, el elemento esencial de la comunidad política es la presencia de un soberano común.

No obstante, el régimen foral navarro proporciona a su nobleza unas ventajas que se resiste a perder; por un lado, un órgano representativo: las Cortes estatales, que aunque lejos de ser un auténtico legislativo, es un instrumento de presión sobre el monarca, sobre todo a la hora de conceder el "donativo" y por otro, unas indudables ventajas fiscales respecto a sus iguales castellanos. Sin embargo el orden institucional foral estaba lejos de conferir el autogobierno que la historiografía posterior con innegable intencionalidad política ha sostenido. El rey era tan absoluto en Castilla como en Navarra e ignorando limitaciones formales, siempre que sus necesidades políticas lo exigían hacía valer su poder de hecho por encima del poder que por derecho pudiera corresponderle.

3.-A lo largo del s.XVIII el mundo feudal entra definitivamente en contradicción con el mundo burgués. La

suerte de los regímenes forales estaba ligada a la del Antiguo Régimen y éste amenazaba arrastrar en su desaparición a un orden institucional incompatible con la nueva forma de Estado que comenzaba a formarse. La crisis del régimen foral navarro hay que contemplarla desde una doble perspectiva: por un lado la política ilustrada de los Borbones considera incompatible la modernización del Estado con las desigualdades fiscales y la autonomía foral aduanera; por otro, la propia nobleza navarra empieza a cuestionar la funcionalidad de su orden institucional foral a la vez que considera apremiante el traslado de las aduanas a la frontera con Francia para integrarse en el mercado nacional.

Ante el nuevo modelo de Estado y sociedad que la revolución burguesa articula la sociedad navarra a finales del siglo XVIII aparece claramente escindida. Mientras la opción política y económica de la nobleza terrateniente y de los grandes comerciantes pasaba por la realización de las reformas liberales; el nuevo régimen de la propiedad de la tierra con el cierre de fincas, libertad de arrendamiento y privatización de comunales incidía de forma negativa en las condiciones de vida del campesinado. Si a ello añadimos el encarecimiento del vestido y alimento que el traslado de las aduanas traía consigo, comprenderemos que la defensa del Antiguo Régimen encontrase en esta clase social su más firme bastión.

4.-La guerra de la Independencia interrumpe el proceso de abolición foral que ya se consideraba irreversible a la vez que corrobora que el marco político donde se juegan los intereses navarros es el de que la Monarquía española: por encima de las peculiaridades forales existe una unidad política real diferenciada estatalmente y tanto a la hora de articular reformas, como de coordinar la acción contra el invasor, como de llenar el vacío de poder producido por la ausencia del rey, elidando particularismos propios, se envían diputados a Bayona, representantes a la Junta Central, se da el visto bueno a las Cortes de Cádiz y se participa en las elecciones legislativas de 1813. Y si la respuesta armada de los navarros tiene mucho de resistencia antiliberal, en la medida que se recubre de una causa patriótica el único patriotismo por el que se vibra es español.

5.-Sin una causa patriótica que la encubra, es durante el Trienio 1820-1823 cuando la escisión de la sociedad navarra y su significado se ponen más claramente de manifiesto. Por un lado la oligarquía representada en la Diputación del Reino jura la Constitución de 1812 y acepta sin resistencia la unidad constitucional y la desaparición del régimen foral; la homologación administrativa de Navarra con el resto del Estado liberal español es total. Por otro lado, la oposi-

ción que se origina contra el nuevo orden de cosas es también totalmente homologable con la que se produce en el resto de la península. Si el liberalismo nada tenía que ofrecer al campesinado en general, la situación creada por los fueros y las consecuencias que el régimen liberal tenía sobre ellos lo presentaba como una alternativa francamente antipopular. La guerra realista no es más que la expresión armada del antagonismo entre el Estado liberal y el Antiguo Régimen y el primer acto de un conflicto del que la guerra carlista no será más que su continuación.

6.-Durante la última etapa absolutista de Fernando VII (1823-1833) la vuelta al orden institucional del Antiguo Régimen supuso la restauración de los regímenes forales; aunque siguiendo el proceso iniciado a finales del s. XVIII los contrafueros se suceden sin posibilidad de réplica y como la misma Diputación reconoce en 1830 "los fueros del Reino de Navarra no se observan y casi están reducidos a la nada". Los particularismos forales no sólo eran rechazados desde la política liberal, sino también desde la absolutista.

7.-La guerra carlista no es una guerra foral como la historiografía fuerista y nacionalista ha presentado, sino el último acto de la lucha entre el Estado liberal y el Antiguo Régimen; y ello tanto en el País Vasco

como en el resto de la península. El malestar del campesinado que se resistía a las transformaciones socioeconómicas liberales encontró en la pequeña nobleza rural navarra la canalización y dirección que faltó en otros lugares y en el clero la ideología necesaria para convertir el conflicto en "santa causa".

De las primeras proclamas carlistas que movilizaron al pueblo de las cuatro provincias vascas se deduce el significado antiliberal y reaccionario del levantamiento y la defensa del trono y del altar como su única justificación; el móvil foral y particularista no aparece por ninguna parte. Se trataba de una causa nacional española: "restaurar en la España el trono y el altar", y el marco político seguía siendo incuestionable para los dos bandos en que se hallaba escindida la sociedad navarra; no era un problema "de patrias" el que se planteaba; tanto para los liberales como para los carlistas no había otro patriotismo que el español; el conflicto se daba en torno al proyecto concreto de patria a realizar.

Por otro lado, poco podía interesar al campesinado y a la pequeña nobleza rural navarra el mantenimiento de unas instituciones forales en las que ni unos ni otros participaban y que además desde las Cortes de 1817 venían apoyando la liberalización de la propiedad de la tierra (privatización de comunales, cierre de campos, libertad de arrendamientos...) con-

tra la que ellos se pronunciaban.

8.-Sólo a partir de 1836, tercer año de guerra es cuando los fueros aparecen más frecuentemente mencionados en el campo carlista. Varias son las posibles causas no excluyentes que pueden explicar este hecho. En primer lugar, los carlistas no tenían por qué no respetar unos particularismos que formaban parte del orden de cosas por ellos defendido; en segundo lugar, como preveía la Diputación vizcaína, la defensa explícita de los fueros podría añadir "un nuevo y poderoso estímulo a la causa" prueba evidente de que hasta entonces no lo era; en tercer lugar, el hecho de que entre 1834 y 1836 el gobierno liberal procediese sistemáticamente al desmantelamiento foral, ofrecía un cargo más que atribuir al enemigo revolucionario; pero sobre todo, la causa fundamental que provocó el "foralismo" carlista fué la necesidad de asumir la causa de los fueros para defenderse de las promesas que desde 1835 venían ofreciéndose desde el campo liberal de conservarlos bajo la Monarquía de Isabel II. El foralismo fué en gran medida inducido desde el campo liberal al carlista.

De todas formas, la ortodoxia foral estuvo lejos de ser observada entre los carlistas y ello tanto a nivel doctrinal e institucional como en lo relativo a "exenciones y privilegios". En el decir de un historiador nacionalista, Bernardino de Estella: "El par-

tido carlista quebrantó continuamente las constituciones de los estados vascos durante la guerra de los seis años."

- 9.-Si en 1820 la total homologación de Navarra con el resto del Estado liberal español se realiza sin resistencia alguna por parte de la clase política navarra, en 1833, a pesar de su posicionamiento a favor de Isabel II, la experiencia centralista del Trienio lleva a la Diputación del Reino desde el primer momento a mantener una política transaccionista respecto al régimen foral. Una vez conseguida la integración en el mercado nacional y la participación de los navarros en la formación de la voluntad general, pretenderán conservar "lo bueno del fuero"; es decir: alguna forma de control sobre la provincia y la autonomía fiscal. Si bien dentro insisten en las ventajas de la abolición foral, hacia afuera la presentan como un rasgo de "generosidad" en pro de la unidad de la patria, que bien merece una compensación.

A pesar de todo, durante los dos primeros años de guerra, sin una ley especial que los derogase, los fueros iban a ser sistemáticamente conculcados e ignorados y Navarra en 1837 era ya de hecho y de derecho una provincia más de la monarquía constitucional española.

10.-La radicalización de la revolución a partir de los sucesos de La Granja en agosto de 1836 iba a poner los destinos de Navarra en manos de los liberales exaltados, militares y magistrados en su mayor parte, más desligados de intereses económicos concretos, que renuncian a toda reivindicación foral y sólo exigen el cumplimiento estricto de la Constitución.

No obstante la política transaccionista que intentara la oligarquía navarra, aunque sin éxito, a través de la Diputación del Reino, no se abandona y desde el exilio varios de sus miembros, junto con los demás liberales moderados vascos participarán en la preparación de la empresa PAZ Y FUEROS, cuyos principios presidirán el Convenio de Vergara. El FUERISMO acababa de nacer: no sólo se trataba de separar la causa de D. Carlos de la de los fueros, fomentando a la vez el particularismo vasco y presentando la guerra como foral; sino lo que era mucho más provechoso todavía, la de separar la causa de los fueros de la del orden institucional del Antiguo Régimen del que formaban parte, para hacerlos compatibles, en la medida de lo posible con el Estado liberal moderno. El FUERISMO, pues, no es carlista; los carlistas no separaban la causa de los Fueros de la del Antiguo Régimen. El FUERISMO ES LIBERAL.

Y no se puede sostener que se trataba de salvar el principio de autogobierno por encima de las trans-

formaciones institucionales que los tiempos imponían. Los "fueros, exenciones y privilegios" se defienden con criterios pragmáticos y sobre todo INDIVIDUALISTAS. No podía esperarse otra cosa en un momento histórico en que la filosofía dominante lo imponía y el Individualismo era componente definidor del primer Liberalismo; por ello se renuncia sin resistencia a "aquellos fueros y libertades que han encontrado acogida en la Constitución de la Monarquía española".

11.-Al triunfo de la empresa PAZ y FUEROS contribuyeron el agotamiento y división irreconciliable de las fuerzas carlistas; la colaboración de Inglaterra y Francia, interesadas en contar con unas provincias autónomas para conservar su actividad mercantil en ellas y, sobre todo, el apoyo interesado de un Gobierno moderado, que la utilizará como arma política para mantenerse en el poder, intentar "abrir brecha" en la Constitución de 1837, que ya juzgaban excesivamente democrática, y provocar la disolución de unas Cortes, recién elegidas, de mayoría progresista, que se oponían a su programa de reformas en sentido regresivo.

El Convenio de Vergara, más que a un tratado entre iguales se acercó a una capitulación por parte carlista; y la Ley 25-X-1839 no fué la concreción de un pacto entre carlistas y liberales, sino entre liberales moderados vascos (FUELISTAS) y españoles;

o lo que es lo mismo: entre la oligarquía vasca y la central. El mismo hecho de que la Ley se hiciera extensiva a Navarra, a pesar de que los carlistas navarros no se habían acogido al Convenio y nada obligaba a la nación con esta provincia, es una prueba más de ello.

12.-El desigual interés por conservar el orden institucional tradicional, debido a la mayor adaptabilidad de la organización foral de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya a la nueva situación, la mayor presión en suprimir las barreras aduaneras e integrarse en el mercado nacional y el mal estado de las finanzas navarras, gravadas con una deuda pública que sólo podía ser satisfecha endosándosela al Estado, explica la mayor urgencia de los navarros en el arreglo foral, rompiendo el frente de negociación conjunta que se había intentado con las Vascongadas.

La Ley de modificación de fueros de 1841, que posteriormente ha sido rebautizada, con indudable intencionalidad política como LEY PACCIONADA, fué una ley ordinaria en base a un proyecto del Gobierno, que para conseguir una mejor aceptación de la ley, consultó, incluso negoció, como parte interesada, con la Diputación provincial de Navarra; pero que una vez conocidas sus pretensiones, rectificó y resolvió por su cuenta el proyecto definitivo que en-

vió a las Cortes; las cuales en uso de su soberanía legislativa, enmendaron el texto en la Comisión y tras un debate sobre el articulado fué aprobado en el pleno y sancionada por la Regencia sin más solemnidad que cualquier otra ley. Si jurídicamente no cabe la categoría de Leyes paccionadas; ni es posible un pacto entre órganos jerárquicamente desiguales, tampoco "históricamente se dió el pacto"; nadie pretendió pactar, ni nadie llamó entonces PACCIONADA a la ley.

13.-La NUEVA FORALIDAD implícita en la Ley de modificación de fueros de 1841, además de garantizar la deuda pública y conservar la autonomía fiscal, proporcionaba a la oligarquía navarra, que había controlado el proceso, un aparato de control sobre la provincia muy superior al que tuviera en el Antiguo Régimen, a la vez que ponía en sus manos el instrumento clave de la revolución burguesa, al convertir a la Diputación en árbitro de la desamortización.

14.-En definitiva: la forma armada que revistió la salida de la crisis del Antiguo Régimen en España, junto con las circunstancias que rodearon el final de la contienda, fueron la gran oportunidad con que contó la oligarquía navarra para mantener en un Estado de Derecho, jurídicamente igual por definición, unas de

sigualdades jurídicas, propias del Antiguo Régimen, que presentará como "resto de sus antiguos Fueros y Libertades patrias".

APENDICES

APENDICE Nº 1

ACTA DE NONBRANIMIENTO DE LOS COMISIONADOS QUE HAN DE REPRESENTAR A NAVARRA EN LA JUNTA SUPREMA CENTRAL (22-IX-1808)

En la Villa de Agreda a veinte y dos de Septiembre de mil ochocientos y ocho, la Illma. Diputación del Reyno de Navarra, compuesta de los Individuos que subscriben, hallándose en esse Pueblo, a resultas de su precipitada salida de la Ciudad de Pamplona, verificada el día veinte y nueve de Agosto último, por conservar ilesa su innata fidelidad a su legitimo Soberano el Señor Dn Fernando septimo, y librarse de las continuas extorsiones y violencias que sufría, y ha estado experimentando, especialmente los últimos tres meses del General Frances y tropas de su mando: teniendo noticia de que en la Villa y Corte de Madrid, Real Sitio de Aranjuez, u otro parage que se destine, ha de celebrarse una Junta Suprema central, compuesta de Comisionados de cada Reyno, o Provincia de España, con el objeto de nombrar un Regente, o Gobierno en quien se deposite y resida todo el ejercicio de la Soberanía, durante la ausencia de dho Señor Rey Don Fernando; y deseando S.S.I. que por parte del Reyno de Navarra, a quien inmediatamente representa, haya personas legitimas que en su nombre concurrán a un congreso tan respetable, en que a mas de desplegar todos los Reynos y Provincias, los sentimientos que les inspiraron lealtad al Soberano, han de tratar del gran objeto de salvar la Patria, y exterminar al tirano que la tiene oprimida; ha acordado nombrar, como por el presente auto nombra a sus dos Individuos los Señores Dn Miguel de Balanza y Castejon, y Dn Carlos de Amatria y sólo faltaría para que puedan asistir en su nombre a dha Junta, con voz y voto en ella, a exemplo de los representantes de los demás Reynos y Provincias; y a ese fin les confiere en quanto esta de mi parte, todas las facultades y el más cumplido poder que sea necesario, así para otros objetos, como para qualesquiera otros incidentes que puedan ofrecerse, queriendo como quiere, que sus dos comisionados, o qualquiera de ellos, usen de Poder en los mismos términos, y con igual franqueza que lo haría S.S.I. si enviara presente en dha. Junta: De todo lo qual se hizo esse auto, que lo firmó S.S.I. con mi el Secretario en pie de ello =

Miguel Escudero, Manuel Díaz del Río, Lizdo. D. Manuel Lestalde, Lizdo. don Francisco Ibañez, Lizdo Dn Alejandro Dolarea y Nieva

Con acuerdo de S.S.Illma.

AHN-ESTADO.Leg.83-B

Dn. Diego María Basset, Secretario.

APENDICE Nº 2

OFICIO DE MIGUEL DE BALANZA Y CARLOS AMATRIA, MIEMBROS DE
LA DIPUTACION DEL REINO Y DE LA JUNTA CENTRAL TRANSMITIEN-
DO A SU DIPUTACION UN OFICIO DE LA COMISION DE CORTES EN
QUE PIDEN NOTA DE LOS SUJETOS NAVARROS QUE PODRIAN SERVIR
DE DIPUTADOS EN LAS CORTES DE ESPAÑA Y CONTESTACION DE LA
DIPUTACION (18 y 24-XI-1809)

Illmo. Señor

El Secretario de Junta de Legislación y Comisión de Cortes Dn Manuel Abella nos comunica con fecha de 10 del Conxiente, lo que sigue.

"Exmos. Señores: Deviéndonse completar la representación nacional de las Ciudades y Provincias que se hallaren cautivas en poder del enemigo al tiempo de la Combo cación de las próximas Cortes por que todavía son partes integrantes de la Monarquía a la qual están moralmente unidas a pesar de la suerte desgraciada que las separa de ella; ha resuelto la comisión de Cortes suplir la falta de libertad en que se hallan dhas ciudades y Provincias de poder elegir Diputados que las representen. Y entretanto que S.M. determina y adopta el metodo en que atendidas todas las circunstancias deberá suplirse la elección para se aproxime al modo y forma en que han de hacerla las demás Ciudades y Provincias que se hallan en libertad; ha acordado pedir a V. Exas, Juntas Superiores, Tribunales, R.R. Obispos y demas personas Constituidas en alta dignidad, listar de los sugetos naturales de las Ciudades y Provincias que están ocupadas por el enemigo.

I de orden de la Comisión de Cortes lo participo a V. Exas. para que atendida la gravedad e importancia de este asunto en que tanto interesa el bien general de la Nación, remitan V. Exas por mi mano a la mayor brevedad posible nota de las personas naturales del Reyno de Navarra que se hallen fuera del poder de los enemigos espresando en ellas con toda individualidad el nombre de otras personas, su edad, lugar de su nacimiento, partido a que corresponde, empleo o profesión que tienen, pueblo en que actual

mente residen, y demás circunstancias por las quales sean acreedoras a la estimación y confianza publica. Dios que guarde a V.-Exmos Señores dn Carlos Amatria, y D. Francisco Valanza".

Y entendiendo que nadie mejor que V.S.I. puede desempeñar el objeto a que termina el oficio, nos ha parecido propio trasladarlo a su noticia para que tenga a bien proponernos los sujetos que en las circunstancias de no poder usar los Pueblos del voto libre de elección, entienda que por su conducta, patriotismo, y amor merecerían su confianza, en el concepto de que si da treguas el asunto, irán incluidos en la nómina que hemos de dirigir a otra Comisión a una con los que aquí se hallan acreedores a la misma confianza, limitándonos a estos reclamos. Si la necesidad nos obligare a no poder diferir por más tiempo la Conservación.

Dios que a V.S.I. ms. as. Sevilla

18 de Noviembre de 1809

Miguel de Valanze y Castejón, Carlos Amatria

Illma. Diputación del Rno. de Navarra o alguno de sus Individuos

Exmos. Señores

Recibimos seis dias ha el oficio de V.E. de 18 de Noviembre pasado, en que con inserción de otro dicho en lo del mismo comunicado a V.E. por el Secretario de la Junta de Legislación y Comisión de Cortes Don Manuel Abella se sirben encomendarnos la formación de una nota de las personas naturales de este Reyno, que se hallen fuera del poder de los enemigos, espresando en ella con toda individualidad el nombre de otras personas, su edad, lugar de su nacimiento, partido a que corresponde, empleo o profesión, que tienen Pueblo en que actualmente residen, y demás circunstancias, por las cuales sean acreedoras a la estimación y confianza publica: este encargo cometido a V.E. por la referida Junta, han tenido a bien trasladarle a nosotros favoreciéndonos cual siempre, y manifestando, que en la lista que V.E. habían de dirigir a la indicada Comisión incluirían a los sujetos estantes en esa Corte, dignos de la espresada confianza.

Dedicados al desempeño de la que V.E. nos dispensan hemos discutido detenidamente y encontramos que en la deplorable situación de este Reyno sojuzgado por el Enemi-

migo todos sus moradores yacen bajo su poder defraudado de la gloria de aspirar a concurrir a las próximas Cortes. Los demas Navarros ausentes de su Patria y merecedores de tan singular dicha, sirven a S.M. en las carreras Militar o política; y aunque no se hallen en esa Corte son mas conocidos por V.E. que han intervenido en el gobierno de los intereses generales de la Nación sobre los cuales habran desplegado sus luces y patriotismo; por lo que nos abstengamos de proponer alguno, intimamente persuadidos de que la elección de V.E. sera la de nuestro deseo.

A G N - Cortes - Leg. II - Carpeta 20

APENDICE Nº 3

ACTA DEL ACTO DE JURAMENTO DE LA CONSTITUCION DE 1812 POR
PARTE DE LA GUARNICION, EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y LA
DIPUTACION DEL REINO EN PAMPLONA EL 11-III-1820

El día 11 del corriente marzo sera glorioso en los fastos de la historia Navarra, pues que mi memoria recordará a la posteridad que quando se hara del bien general de la Nacion Española, nada omiten para lograrlo los que han tenido el honor de haber nacido Españoles: Convenidos los havitantes de esta Ciudad de Pamplona y la Tropa que guarnece su Plaza y Ciudadela, de que el obgeto de toda la España era tirar su propia felicidad, cimentándola en la Constitución establecida en Cádiz el año de 1812, ansiosos por Cooperar en la dicha unibersal pararon de bolberla a establecer con toda Solemnidad, y a ese fin, uniformados los animos de la Tropa y sus Gefes con los de todo el vecindario y los de la Diputación del Reyno y Ayuntamiento o su capital en concurso del Cuerpo de sus Consultores que se reunieron en la Casa consistorial de la Ciudad, salieron a las diez de la mañana en toda pompa a la gran plaza denominada del Castillo; en la que ya preparada la Tropa fueron recibidos con una musica marcial, y con los mas vivos aplausos. Inmediatamente se publico la Constitución, y prestaron el juramento para obserbarlo la tropa y sus Gefes, la Diputación de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona con el Cuerpo de sus Consultores. Concluido este acto pasó una Comisión compuesta de tres indibiduos Militares, y otros tantos de cada uno de los Cuerpos de Diputación y Ayuntamiento a manifestar al Exmo. Señor Capitán General de Navarra, Conde de Ezpeleta de Beyre, el juramento que se acababa de prestar, insinuándole al paso que la mayor Satisfacción de los tres Cuerpos que los Comisionaban sería que S.E. se uniese a sus ideas jurando igualmente la Constitución y efectivamente tubieron el gusto de lograrlo: a su consecuencia pasó la Comisión a participar a sus Comitentes tan agradable noticia que fue recibida con el mayor placer. En seguida corrieron todos estos Cuerpos a rendir las debidas gracias al Todopoderoso cantándose al eterno un solemne Te-Deum en la Sta. Iglesia catedral con asistencia del Illmo. Sor. Obispo y del respetable Cavildo de la misma; haviendose llenado tan basto templo por el religio-

sismo Concurso de una Ciudad conmovida con las dulzuras de la Religión, y con el magestuoso estruendo de la artillería que solemnizaba tan augustos momentos. Concluidos estos deberes de la piedad religiosa, pasaron los mismos Cuerpos a felicitar al Exmo Señor virrey por haberse unido a sus votos, Suplicándole al paso que contribuyese a la pública Tranquilidad, como por su parte lo harían las autoridades que se le presentaban: Con lo que todo quedó finalizado entre los vivas y aclamaciones a un Pueblo inmenso: por la noche dispuso el Ayuntamiento una general iluminación durante la qual se tubo el placer de anunciar al público por medio de un solemne bando haber llegado a las seis de la tarde por Correo extraordinario el Real Decreto de S.M. de siete del Corriente ofreciendo jurar la Constitución con lo que llegó a su colmo el regocijo publico: Y para que conste firman todos un acto en Pamplona a 11 de marzo de 1820 = El Conde de Ezpeleta = Antonio Morelló, Gobernador de la Plaza = El Barón de Armendariz = José de Ezpeleta, marques de Montehermoso. Segundo Cabo, Comandante General = El Brigadier Juan Bautista Mencos = Brigadier Alberto Sagastibelza = Brigadier Francisco Xavier Mendiri = Brigadier Ramon Lope, Director Sub-inspector de Ingenieros = Brigadier Rafael de Ansoategui = Brigadier Joaquin de Ribacoba, Coronel de Ingenieros = Teniente de Rey de la Plaza, Luis Carpintero = Teniente de Rey de la Ciudadela, Juan Pelayo Sanchez = Sargento mayor de la Plaza, Juan Bazquez Quebedo = Sargento mayor de la Ciudadela Carlos Camon = El coronel Comandante de Artilleria, Tomás Ximenez de Zerrarbe = Coronel Comandante de Ingenieros, Melchor de Silberne = Manuel Subiza Auditor de Guerra del Egercito y Rey no de Navarra = El Ministro de Hacienda de Navarra, José Joaquin de la Fuente = Coronel de Barcelona, Antonio Bray = El coronel segundo, Comandante del mismo, Felipe Sahabedra, Coronel agregado a Barcelona = Pedro Salas = Coronel agregado al E.M., José Boder = Comandante agregado a Barcelona, Francisco Mercado = El Teniente coronel, Capitan Comandante del Destacamento de Cavalleria de Sagunto, Rafael Casellas = Capitán Comandante de las Compañías de Inbálidos de esta Plaza, Timoteo Sanchez = El It. Sr. Tiburcio Ordoñez, Abad de Marcilla; Diputado = El Conde de Guendulain, Diputado = Blas de Echarri, Diputado = José María Vildarre, Diputado = Fausto Galdiano Diputado = Pedro Almeine Lignes, Diputado = Angel Sagaseta Iluzdor Sindico = José Basso Secretario = Cristobal Maria de Ripa Jaureguizar, Alcalde = Regidor, Julián Maria Ozcariz = Reg. Benito Antillon = Reg. Luis Ituarte = Reg. Juan Luis Cortaberría = Reg. Juan Iraizoz = Reg. Victoriano Esain = Reg. Francisco Xavier de Olla = Reg. Pedro Xavier Astrain = Reg. José Antonio Arzegui = Reg. Pedro Juan Larasa = Consultor, José Leon de Biguria = Consultor, José Maria Gastañaga = Luis Serafin Lopez, Secretario.

APENDICE Nº 4

ALOCUCION A LOS NAVARROS DEL ANTIGUO DIPUTADO DEL REINO PEDRO CLEMENTE LIGUES Y NAVASCUES AL SER NOMBRADO JEFE POLITICO DE LA PROVINCIA

NAVARROS

Al anunciaros que el Rey se ha servido nombrarme interinamente para las funciones de Gefe Politico de esta Provincia; mi deber es congratularme con vosotros por la nueva época de glorias y de felicidades que se prepara para todos bajo el gobierno paternal de un monarca constitucional. Libres hoy como todos los hijos del suelo español, no sereis el objeto de murmuraciones ni de una envidia infundada por las excepciones y fueros de los que algunos solo gozabais en apariencia. Los nuevos derechos y libertades que habeis entrado en posesion despues del juramento que habeis prestado á la Constitución Política de la Monarquía formada por las Cortes generales y extraordinarias, no están como vuestros antiguos privilegios, dependientes del capricho de un Ministro, que los atropellaba cuando bien les placia; ni necesitais tampoco de sacrificios pecuniarios para renovarlos, y mantener una posesión siempre aventurada y precaria. ¿Sentiais vosotros menos que los Castellanos, Andaluces ó Gallegos todo el peso del despotismo y arbitrariedad? ¿No se os arrancaba del seno de vuestras familias para sepultaros por años enteros en horribles calabozos, ó para expatriarlos sin causa alguna, y sin permitiros la menor defensa? ¿Bajo un gobierno semejante de que servían vuestros fueros?

La Constitucion que establece por ley fundamental del Estado en reconocimiento de la Religion Catolica, ofrece una verdadera garantía de vuestros derechos políticos y civiles. Ella protege vuestra seguridad personal, y vuestra propiedad: el libre ejercicio de vuestros talentos, y la publicación legal de vuestras ideas y pensamientos para ilustrar al gobierno y para reclamar las injusticias que pueden cometerse. Ella establece la publicidad de los juicios, y no estareis expuestos á delaciones secretas ni á que el favor ó la intriga influyan impunemente en las decisiones sobre vuestro honor, vuestras vidas y fortunas. Ella en fin

declara el modo como debeis contribuir para satisfacer las necesidades del estado, que se os deben conocer, presentando el presupuesto de los gastos, y manifestando la legitima inversión de vuestros caudales. Vosotros solos por medio de vuestros Diputados en Córtes con el Rey, podreis variar oportunamente los principios que habeis adoptado para vuestro Gobierno.

Vuestros fueros que en gran parte ya no existian sino en el nombre hubieran al fin perecido y desaparecido enteramente. Una Provincia limitrofe os presenta un ejemplo y una prueba de lo que os digo. Sin comparar los recursos que tenía Aragón, la fuerza y vigor de sus instituciones y el amor probado por sus fueros y libertades, yo os señalaré con la historia la causa de su rutina y decadencia, y vosotros convendreis que la principal de todas se encuentra en la división y separación en que estaba constituido del resto de toda la Nación. Unidos pues hoy como verdaderos hermanos marchemos por la nueva senda del honor y de la gloria que ha abierto para todos la resolución, y el patriotismo mas puro de los valientes defensores de la Pátria, se, dados por el sentimiento universal de la Nacion; y observemos religiosamente por nuestra parte el pacto social que sido solemnemente reconocido por el Monarca que debe regirnos.

Navarros: Yo debo aplaudir el zelo con que en todas partes han sido obedecidas las órdenes que se dirigian á mantener la tranquilidad pública, y al respeto á las autoridades que legitimaban las circunstancias y el interés general. No olvidaré jamás las honras que me habeis dispensado nombrándome en todos momentos para servir los primeros destinos de la Providencia. Yo acreditaré que no soy indigno de vuestra confianza; y para merecerla siempre, observaré y haré observar con toda puntualidad y escrupulosidad la Constitución de la Monarquia porque en ella veo cifradas la prosperidad y la felicidad de esta ilustre Providencia.

Pedro Clemente de Ligués

Agustin Armendariz,
Srio. Int.

APENDICE Nº 5

FELICITACION DIRIGIDA A LAS CORTES DE MADRID POR LA DIPUTA-
CION PROVINCIAL DE NAVARRA CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL
CONGRESO (17-VII-1820)

La Diputación Provincial de Navarra que ansiosa suspiraba por la instalación del Augusto Congreso Naciente ve ya con toda la efusion de su gozo verificado este feliz acontecimiento, memorable en nuestra historia, indeleblemente grabado en los pechos Navarros, y por el que felicita a los representantes todos de ambos mundos la mas completa enhorabuena ¡Que tiernos sentimientos! ¡que jubilo tan puro! ¡que inocente alegría la que manifestó el Pueblo Navarro luego que se le anuncio el primer acto del Congreso Nacional y el primer paso para su prosperidad! Humildes preces al todopoderoso, musicas marciales, repetidas vivas a la Religión, a la Nacion, y al Rey, iluminacion general fueron las señales con que los patentizó. Sí, Padres de la Patria, vosotros sois los que como sabios Pilotos habeis de conducir el zozobrante bagel del Estado al grandioso puerto de la publica felicidad. Navarra tiene puesta en vosotros sus ojos, y la Nacion entera se promesa los mas hermosos resultados de vuestras sabias Leyes y beneficos Decretos. La Provincia de Navarra, siempre adicta a un gobierno constitucional, y enemiga de la arbitrariedad, será la observadora mas exacta, y su defensora mas acerrima y jamas desmentira con sus obras este lenguaje que dirige a los representantes de la Nacion por el organo de su Diputación Provincial.

Pamplona 17 de Julio de 1820

La Diputación Provincial de Navarra

APENDICE Nº 6

MANIFIESTO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE NAVARRA AL REY

(30-XI-1.821)

SEÑOR

El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los Españoles y su infracción el mas sacrilego atentado, el crimen mas horrendo. Conducida la Diputación provincial de Navarra por este innato principio, vuela hoy animada de los mas vivos sentimientos, é impulsada por uno de sus mas sagrados deberes al Trono de V.M. se desentiende en este momento de los negocios mas arduos que tiene a su cargo, pues que se cree autorizada á suspenderlos por breves instantes para manifestar á vuestra Real Persona la espresion de la voluntad de sus conciudadanos.

Esta corporación Señor, (lo dice con lágrimas en los ojos) vé a su afligida madre España amenazada por una fracción de hombres que si bien quieren la Constitución, la prosperidad nacional y el órden público inerente á la mas estrecha observancia del Código precioso de nuestras libertades, al menos el camino que han emprendido y los medios que han adoptado, se apartan mucho de aquel noble y grandioso objeto.

Libres fueron siempre los Navarros, libres son, y libres serán a pesar de cuantos esfuerzos hagan sus malos enemigos para arrancar de sus manos su imprescriptibles derechos; pero siempre fueron son y serán fieles a la Constitución, que tiene sellada con el divino caracter del juramento; siempre fueron, son y serán obedientes á las leyes; y siempre respetaron, respetan y respetaran las Autoridades establecidas, porque conocen bien lo que es esa libertad tan proclamada por cientos espíritus, que la estienden mucho mas allá, que hasta donde llegan sus limites sociales.

No es, Señor, la primera vez que esta corporación situada al pie de los Pirineos reanimó á un ministerio rodeado de circunstancias nada agradables, y del que mereció una completa gratitud. Por desgracia, Señor, se observan síntomas indicantes de una fermentación política que pueden ser de funestos resultados, si la mano diestra de un Gobierno enérgico y activo no corta de raiz tamaños males: ¿y qué es lo que podrá oponerse al vigoroso desarrollo de sus atribuciones? Las Cortes, Señor, esos sábios patriotas y generosos representantes de una inclita, sensata y magnánima Nación

acaban de dar en la memorable sesión del 26 de este mes la prueba mas convincente de sus virtudes, de su adhesion, y de su amor á la Constitución y á la Real Persona de V.M.: ¡fausto día! en que reunidos los Españoles á su Rey constitucional han dado ya un golpe mortal a cuantos intentasen sumirnos en las mas horrorosa anarquía cargandonos las opresoras cadenas de las mas vergonzosa esclavitud. No, Señor, no: no serán los Españoles los que sucumban á tan vil y deshonoroso yugo; sus enemigos serían victimas de sus ambiciosos planes el mismo cuchillo que tuviesen afilado para asesinar la madre Patria, bien pronto se convertiría contra ellos mismos.

No vacile V.M.; no teman las Autoridades: doce millones de habitantes no se dejan sorprender de palabras tan hermosas como vanas: doscientos treinta y tres mil Navarros estan en acecho y observación contra los solapados enemigos de la Constitución y del orden, y prontos a cooperar con sus esfuerzos al cumplimiento mas estrecho de cuantas medidas dicten las Córtes y el Gobierno.

Este es, Señor, el lenguaje, estos son los votos de los Navarros reunidos y reconcentrados en la manifestacion que de ellos tiene el honor de presentar á V.M. la Diputación provincial de Navarra. Pamplona 30 de Noviembre de 1821.

SEÑOR

A L. R. P. de V. M.

En ausencia del Gefe superior político

Higinio García de Burunda Intendente	Juan Grisóstomo de Vidaondo y Mendinueta, Diputado
Cristobal María de Ripa Jaureguizar, Dipº.	Manuel José Lombardo de Teja da, Diputado.
Matias Octavio de Toledo Diputado.	José María Ezquerria y Bayo, Diputado.
Benito de Ochagavia y Cortés, Diputado.	

-556-

Con acuerdo de S. E.
Fermin Garcia de Galdeano
Secretº intº.

Pamplona Imprenta de P. Longán año 1821.

APENDICE Nº 7

BIENES DE LA IGLESIA EN NAVARRA POR MUNICIPIOS

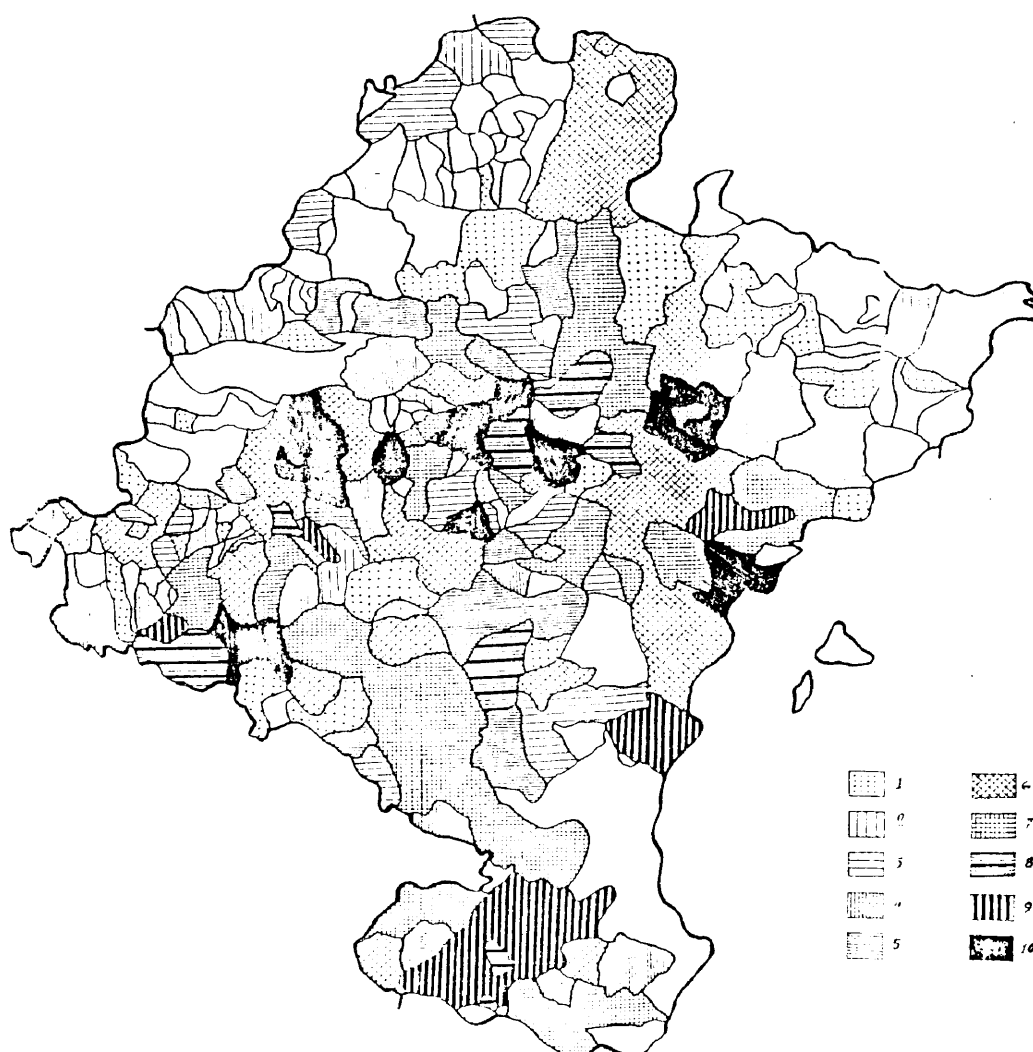
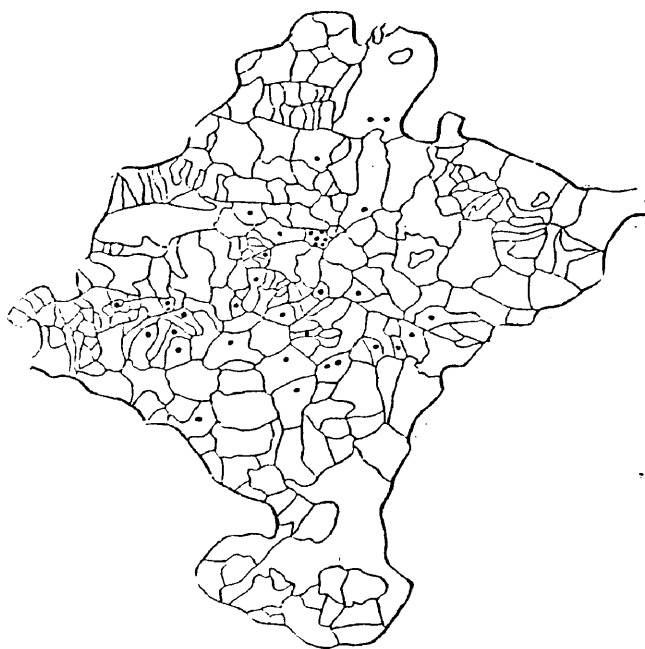


Gráfico 21. TOTAL DE BIENES DE LA IGLESIA EN NAVARRA POR MUNICIPIOS.—1, de 1 a 25 robadas; 2, de 25 a 50 rob.; 3, de 50 a 100 rob.; 4, de 100 a 150 rob.; 5, de 150 a 200 rob.; 6, de 200 a 500 rob.; 7, de 500 a 1.000 rob.; 8, de 1.000 a 1.500 rob.; 9, de 1.500 a 2.000 rob.; 10, de 2.000 a 3.600 rob.

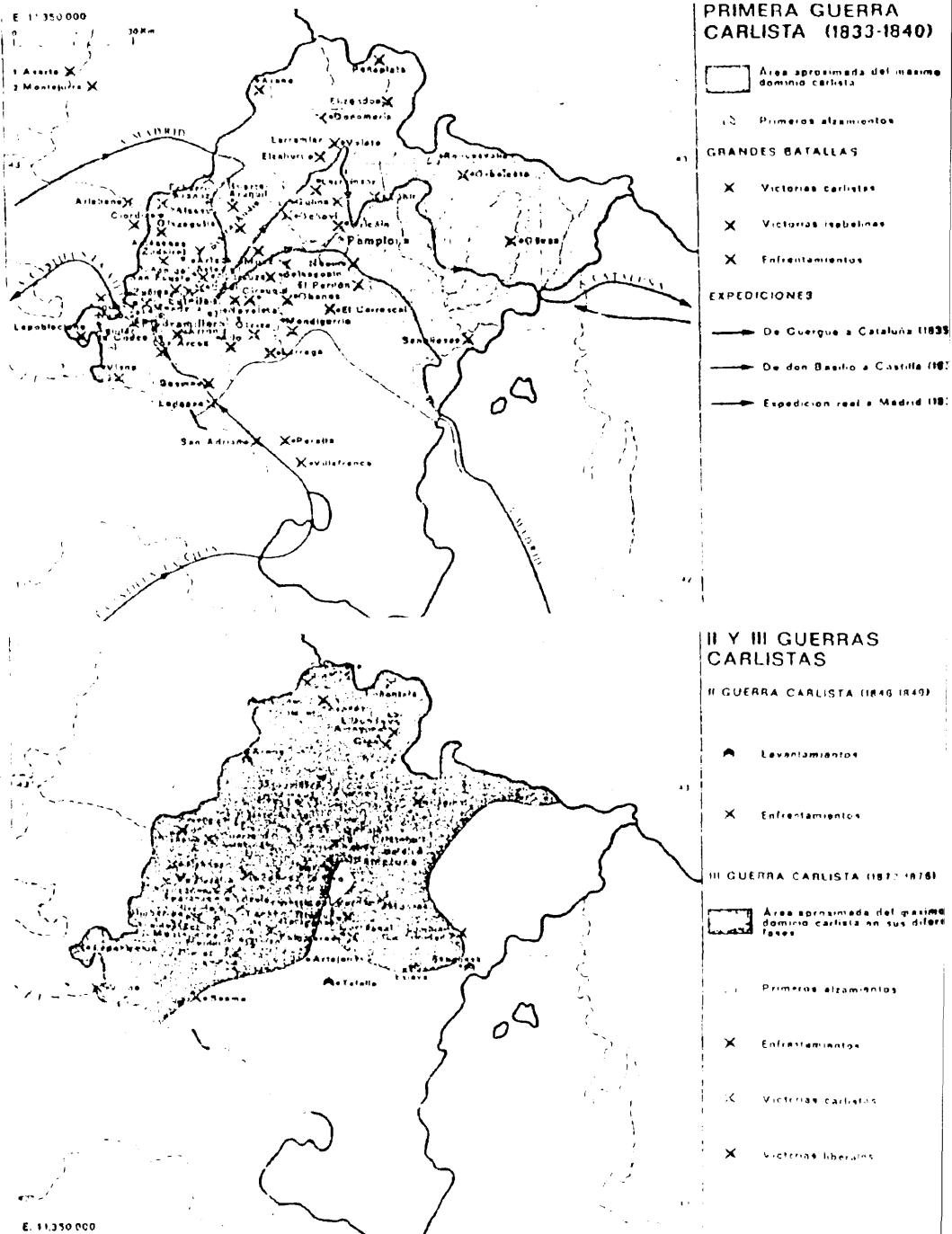
J. N. NUTILCA: La desamortización eclesiástica en Navarra: op. cit., pág. 192.

APENDICE Nº 8
PROCEDENCIA DE LOS JEFES CARLISTAS DE
LA PRIMERA GUERRA CIVIL



S.L.de Cegama ...	Lumbier	Uriz	Sada
J.A.Zaratiegui ..	Olite	L.Echevarria ..	Mañeru
F.B.Eraso	Garinoain	M.L.Echeverria	Barroeta
J.N.Sarasa	Ollo	J.C.Vidaondo ..	Pamplona
J.A.Guergué	Legaria	Goñi	Larraga
F.Iturralde	Arroniz	A.Lizarraga ..	Pamplona
J.B.Zubiri	Viscarret	Dz.de Rada ...	Andosilla
Eyaralar	Pte.La Reina	Ochoa de Olza	Olza
P.Sanz	Pamplona	J.B.Esain	Ulzama
F.L.Sanz	"	E.Iturmendi ..	Aberin
J.Elio	"	L.Zabaleta ...	Eslava
B.Dz.del Eio	Puente la	J.Lerga	S.Martín
	Reina		Unx
J.Marichalar	Añorbe	R.Leoz	" "
Peralta	Monreal	M.Irujo	Estella

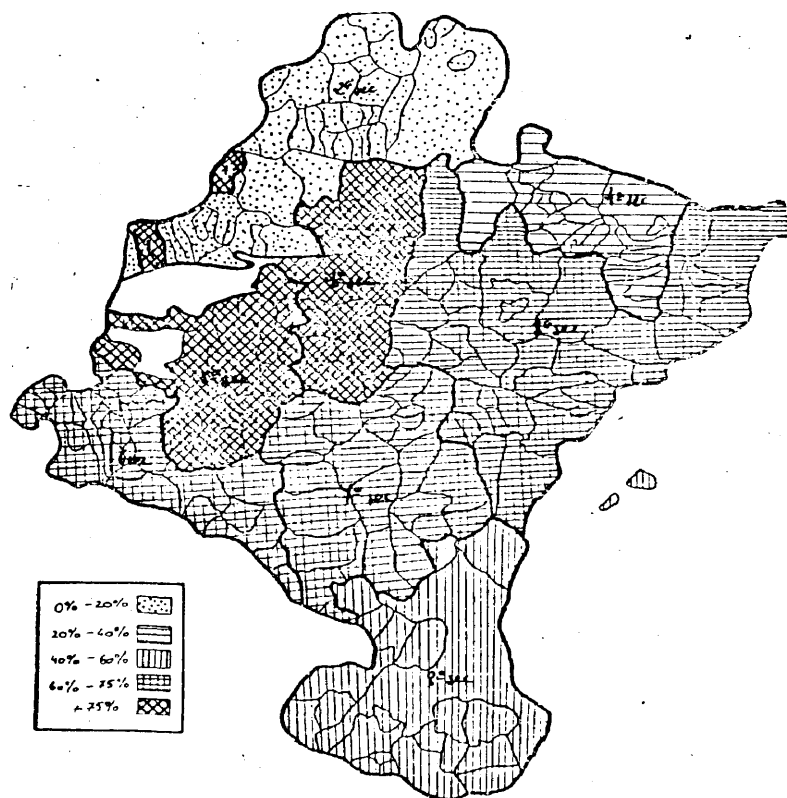
ESCENARIO DE LAS GUERRAS CARLISTAS



APENDICE Nº 10

LOS NEOCATOLICOS EN 1865

RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE DICIEMBRE DE 1865



	NEOCATOLICOS	LIBERALES
1ª Secc. Pamplona	6.018--77,6%	1.735 - 22,4 %
2ª " Santesteban	1.188--14,7%	6.913 - 85,3 %
3ª " Aoiz	2.976--71,9%	1.158 - 28,12 %
4ª " Abaurrera	7.16 --38,9%	1.122 - 61,1 %
5ª " Estella	4.997--77,8%	1.426 - 22,2 %
6ª " Los Arcos	2.399--66,7%	1.199 - 33,3 %
7ª " Tafalla	4.312--65,8%	2.246 - 34,2 %
8ª " Tudela	2.291--44,2%	2.899 - 55,8 %

(BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA Nº 67, 68 y 69: 4,6 y 8-XII-1865).

APENDICE Nº11

MEMORIA QUE LA DIPUTACION DEL REINO DE NAVARRA HA FORMAD
PARA INSTRUCCION DE LOS SEÑORES PROCURADORES EN LAS CORTES
GENERALES POR DICHO REINO SOBRE EL ESTADO DE SU HACIENDA
PUBLICA Y EL MODO DE ASEGURAR EL PAGO DE SU DEUDA

El Estatuto Real para la convocación de las Cortes generales del Reino de España, promulgado en 10 de Abril del año actual, al paso que va á regenerar la Monarquía, restableciendo en su fuerza y vigor las leyes fundamentales de la misma, con mejoras acomodadas al espíritu del siglo, adelantamiento de las luces y al desarrollo de los principios políticos, ha ocasionado de hecho, en la constitución y leyes fundamentales del reino de Navarra una alteración destructora de su existencia política legal.

Tal es la de haber comprendido á este Reino en la convocatoria á las cortes generales de la Nación, en las que, yá instaladas, tiene tres Procuradores que la representan. Este paso agigantado obstruye, por de pronto la marcha, jamás interrumpida, de nuestro sistema legal para la reunión de los tres Estados de Navarra en cortes generales.

Sus leyes tienen señaladas las épocas, ó tiempo, en que deben congregarse, y los monarcas han mandado su reunion con arreglo á esa dispositiva, y tambien cuando las circunstancias las han hecho necesarias. Era tan extenso, y apreciable el poder, de que estaban investidas, que no solo pedian á los reyes, con los que formaban un cuerpo místico, el desagravio de los fueros, y leyes violadas, bajo el título de contrafuero, sino que, en uso de la iniciativa que las competia, proponían las leyes que consideraban convenientes, y no pudiéndose imponer por el Rey contribución alguna en Navarra acordaban un donativo ó servicio voluntario, para los gastos del Estado, en la cantidad, á su juicio, competente, segun la riqueza y disposición de sus pueblos. Designaban plazos para su pago, y añadian la condición de que no pudiera exigirse á Navarra servicio alguno pecuniario que dificultase ó aumentara el prometido, hasta que se vencieran los plazos fijados para su solución y volviese á ser acordado por los tres Estados reunidos: en

cortes generales. Por último, era prerogativa de los tres Estados, retirar o no promulgar, cualquiera de las leyes, ya sancionadas por S.M. por ser necesario el otorgamiento de las cortes para que aquellas hiciesen parte de su código.

La alteración, en este punto, de la constitución Navarra, hace temer su tránsito á provincia de la corona de Castilla, en todas sus relaciones legales y políticas, dejando de ser un reino distinto y separado, como lo ha sido aun después de su incorporación á Castilla que se verificó en las Cortes de Burgos del año 1515 con union igualmente principal y á condicion de conservar sus fueros, su jurisdicción, su territorio, y formando por si sola una monarquía moderada: de modo que Castilla y Navarra han tenido un mismo rey físico, pero distintos reyes legales, verdad incontestable, garantizada por la práctica y juramentos de todos los monarcas y aun tambien reconocida en el discurso preliminar que en 24 de Diciembre de 1811 se leyó en las cortes generales, y extraordinarias de la Nacion, al presentar la comision de constitucion el proyecto de ella.

La Diputacion, pues, deve, prevenir, para el caso que ese cambio en lo legal sea anuncio de un cambio absoluto en la parte politica, el remedio, que por necesidad y justicia debiera aplicarse á sus acreedores naturales de este reino, y varios otros de fuera de él para que no queden sin las correspondientes garantias. Así que faltára esta incorporacion á los sagrados deberes que la imponen, sino los poderes que la confirieron sus cortes, al menos el honor y los lazos maternales que la unen con aquellos, si dejase de ilustrar, con los conocimientos practicos que ha adquirido en el ejercicio de su encargo, á los dignos Procuradores de Navarra, en las cortes generales de la Nacion, del estado de su hacienda peculiar en todos los ramos de que se compone.

Esta puede reasumirse en su deuda pública y en los expedientes establecidos por las leyes, sancionadas por los reyes, para la seguridad de sus atenciones y capitales, y pago de sus réditos ó intereses.

El Reino de Navarra que, como distinto y separado del de Castilla, debía proveer á los gastos y atenciones que naturalmente habían de ofrecérsele, tenía creados al efecto dos diferentes fondos: el principio conocido con el nombre de Vinculo, era y es destinado á los obgetos inseparables y precisos en un cuerpo representativo y administrativo, á saber para las proclamaciones de los reyes, obsequios y festejos debidos á la Magestad en su mansion ó tránsito por el Reino, recibimiento de señores vireyes, legacías indispensables por muchas veces en la Corte, gastos de pleitos, y últimamente á la satisfaccion de los sueldos de sus empleados necesarios, como lo son los letrados con el carág

ter de síndicos consultores, dotado cada uno de ellos, por las cortes, en veinte mil reales vellon anuales, y los demás que se especifican en el estado, que acompaña, relativo al ramo del Vínculo.

El segundo fondo es el de expedientes, establecidos tambien por las leyes, y llamados de caminos reales, por ser destinados para la construccion y conservacion de ellos.

Estos dos fondos ó ramos reconocen, respectivamente contra sí, diferentes capitales censales y otros á intereses, para cuya responsabilidad, y pago de sus renditos, les estan aplicados, por las leyes, determinadas rentas; lo que igualmente sucede por separado en respecto á la construccion y conservacion de un nuevo camino, recientemente hecho con la aprobacion Real, que dirige á la provincia de Alava y para su claro y perfecto conocimiento presentará, con la debida distinción, el cuadro relativo á las obligaciones y rentas de cada uno de ellos.

VÍNCULO.

Este tiene contra sí en la actualidad, en capitales, la deuda de dos millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos once reales vellon, y el montamiento de sus rentas anuales asciende á cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro reales vellon, como con la mas exacta especificación aparece del estado que acompaña con el núm 1 y en el que tambien se señala el importe de los renditos anuales que deben cubrirse y asciende á ciento siete mil setecientos cuarenta y cuatro reales vellon.

CAMINOS REALES ANTIGUOS.

Este ramo es responsable de la capitalidad de diez y seis millones setecientos catorce mil trescientos siete reales de vellon, y de quinientos veinte y cuatro mil trescientos cincuenta y dos reales vellón por réditos anuales, consistiendo sus ingresos ó rentas en novecientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta reales vellon, al modo que lo explica el estado que acompaña con el num 2.

CAMINO NUEVO PARA VITORIA

Este proyecto, ya realizado, es obligado á los capitales, intereses de acciones, gastos anuales y a la progresiva amortizacion de aquellos, segun se detalla clarisimamente en el estado del núm. 3, en la propia manera, se vé el montamiento de los espedientes que por Real órden le fueron aplicados para sus atenciones.

Sí, pues, el cambio futuro, que ocasionar pueda el gobierno establecido por el Restatuto Real, hiciese que no fuera dado que continuasen los mencionados espedientes, en la forma que hasta aqui, cree la Diputacion debe arbitrase el modo de sustituirlos con abundosas garantias que aseguren el derecho de los acreedores de Navarra, á imitacion de lo que llegó a resolverse por las cortes generales de España en 29 de abril y 16 de mayo de 1822, en razón á la deuda pública de Navarra y de las provincias vascongadas cuyo tenor literal de ambas resoluciones es el siguiente=" "Excmo. Señor.=Las Cortes, habiendo tomado en consideración lo espuesto en la adjunta instancia, por la Diputacion provincial de Guipuzcoa acerca del pago del capital é interes dela deuda de aquella provincia, la cual, segun liquidación ejecutada por un comisionado del Gobierno, asciende a trece millones ciento cincuenta y seis mil doscientos setenta y cinco reales y su interés anual á trescientos cuarenta mil ciento noventa y dos reales, han resuelto, que mediante á que la deuda espresada fue contraida, en su mayor parte, para la construccion del camino que desde el confin de Alava se dirige hasta Irun, y el resto para obgetos de utilidad pública, se apliquen del producto de las contribuciones territorial y de consumos, que anualmente se señalen á la expresada provincia de Guipuzcoa, seiscientos ochenta mil trescientos ochenta y cuatro reales al año, de ellos trescientos cuarenta mil ciento noventa y dos reales para pago de intereses, y el resto para luicion de los capitales. De acuerdo de las Cortes lo comunico á V.E. para su inteligencia, y á fin de que se sirva disponer su cumplimiento. Dios &c. Madrid 29 de abril de 1822.= Juan Oliver García, Diputado Secretario.=Vicente Salva, Diputado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de la gobernacion de la Península.

Los señores Diputados, Secretarios de la Cortes me dicen con fecha 12 del corriente lo que sigue "Las Cortes se han servido declarar que la resolución que comunicamos á V.E. con fecha de abril último, acerca de la deuda pública de la provincia de S. Sebastian, sea extensiva, con la debida proporcion, á las de las provincias de Pamplona, Vitoria y Bilbao. De acuerdo de las Cortes lo comunicamos á V.E. para su inteligencia y que se sirva disponer su cumplimiento. De Real orden lo trasladó á V.S. para su cumplimiento, en la parte que le toca, acompañando al efecto de la resolución que se cita y comunique al gefe político de la provincia de S. Sebastian en 2 del corriente. Dios guarde á

V.S. muchos años. Madrid 16 de mayo de 1822.=Moscoso.=Sr. gefe político de la provincia de Pamplona".

La deuda de Navarra, y los expedientes creados para su pago, traen un origen de respetable legitimidad; pues se abrió el credito, y se prometio su garantía, bajo un sistema de gobierno que los reyes habían jurado conservar y mantener, ante los tres Estados del Reino, de una manera la mas solemne y religiosa, y que por lo mismo presentaba el caracter de estabilidad sin que pudiera vacilarse acerca de su solidez y permanencia.

En buen hora, que el bien procomunal de la España haya hecho conveniente y necesario dar á su gobierno la reforma sancionada en el Estatuto Real; mas esta mejora no debe ser, ni entenderse en daño de los acreedores de Navarra, si acaso se la sujeta á ese sistema general eslabonándola con la Nación y el Estado; por que la justicia y la política se adunan para conservar aquella propiedades y garantías, que constituyen realmente su hacienda pública; de esa naturaleza privilegiada son los expedientes establecidos para atender á sus gastos ordinarios, cubrir las obligaciones que, en tiempo sano y hábil, contrajo con sus acreedores y prestamistas, bajo la égida de la ley, y para continuar la construccion y reparo de los caminos públicos; obra siempre de interes general, y que si desatendiera su conservacion perdería Navarra, y la España toda, las ventajas que proporcionan á costa de inmensos caudales, espéndidos por este Reino sin el menor auxilio del Gobierno de Castilla. No es imaginable se pretenda confundir esos créditos con los demás de la Nación, formando una masa general con estos; porque se irrogarían, en ese caso, á Navarra y sus acreedores, perjuicios de mucho bulto y se atacaría la esencia legal de un contrato solemne, celebrado en tiempo legítimo y con las seguridades que presta un gobierno legalmente constituido: fuera ofender la ilustración y justicia de los dignos representantes de la Nación Española, si se diese entrada al pesimismo de que puedan separarse de los principios espuestos.

La Diputación, no titubea en el buen éxito que han de conseguir los celosos Procuradores de este Reino en las Cortes, sobre este importante punto, proponiendo al Congreso y, si necesario fuese al Gobierno, como el medio mas sencillo y mas conforma a la ciudad y á la justicia, que se consiga á Navarra en el fondo de contribuciones ó en el de aduanas, aquel mismo haber que forma en el día sus fondos y rentas, para llenar las atenciones y obligaciones espresadas, y que deben ser acatadas, cualquiera que sea el cambio que sufra el estado legal y político de este Reino, convinien do, así mismo, que sobre iguales objetos se señale y aplique una cantidad proporcionada para la progresiva amortización de los capitales.

Los ilustrados Procuradores á cortes por Navarra hallarán un apoyo poderosísimo, para esa petición, en las mencionadas resoluciones de las Cortes, por las que se consignó la cantidad competente del producto de las contribuciones, territorial y de consumos, para pago de intereses de los capitales que constituían la deuda de Navarra, y al propio tiempo para su progresiva lucion.

Limita la Diputación, esta memoria instructiva, á solo la historia de la deuda pública de Navarra; porque además de ser un objeto de la mayor gravedad é importancia, y cuyo reintegro debe, de luego á luego, prevenir y preparar por su parte, sin dejar abandonados á los acreedores á sus propias fuerzas y reclamaciones, no pudiera hoy ocuparse en otros puntos, que tengan influencia en la suerte venidera de Navarra, porque ignora la marcha que seguirán las Cortes y el punto de vista, bajo el cual presentarán las cuestiones relativas á este Reino; y fuera muy aventurado, á la par que difícil, hablar sobre lo incierto con observaciones que no pudieran tener exactitud y segura aplicación. Pamplona 6 de septiembre de 1834.=La Diputación del Reino de Navarra.=José María Martínez de Arizala.=Fermin de Gaztelu.=José María Vidarte.= José María Recart de Landivar.=Manuel Cruzat.=José Yanguas y Miranda, Secretario Intº,

PAMPLONA

Imprenta de Francisco Erasun Rada

APENDICE Nº 12

PROCLAMA DEL GENERAL MAROTO - (30-VIII-1839)

VOLUNTARIOS Y PUEBLOS VASCONGADOS

Nadie más entusista que yo para sostener los derechos á el Trono de las Españas en favor de Sr. D. Carlos María Isidro de Borbon cuando me pronuncié; pero ninguno mas convencido por la experiencia de multitud de acontecimientos de que jamas podria permitir la felicidad de mi patria. Único estímulo para mi corazon; y por lo tanto, unido al sentimiento de los gefes militares de Vizcaya, Guipúzcoa, Castellanos y de algunos otros, han convenido para conciliar los extremos de una guerra desoladora, y procura do la Paz, la Paz, tan deseada por todos según pública y reservadamente se me ha hecho conocer. La falta de recursos para sostener la guerra después de tantos años, y la demostracion pública de odiosidad á la marcha de los ministerios, me han comprometido al último paso. Yo manifesté al Rey mis pensamientos y proposiciones con la noble franqueza que me caracteriza; y cuando debí prometerme una acogida digna de un Príncipe, desde luego se me marcó con la resolución de sacrificarme. En tan crítica posición, mi espíritu se enardeció y los trabajos para conseguir el término de nuestras desgracias se multiplicaron: por último, he convenido con el General Espartero, autorizado en debida forma por todos los gefes referidos, que en estas provincias se concluya la guerra para siempre; y que todos nos consideremos recíprocamente como hermanos y españoles, cuyas vases se publicarán; y si las fuerzas de las demas provincias quieren seguir nuestro ejemplo, evitando la ruina de sus padres, hermanos y parientes, serán considerados y admitidos; pero para ello es indispensable que desde luego se manifiesten, abandonando á los que les aconsejen la continuación de una guerra, que ni conviene, ni puede sostenerse.

Los hombres, ni son de bronce ni como los camaleones para que puedan subsistir con el viento. La miseria toda su extremo en todo el ejército, despues de tantos meses sin socorro: los gefes y oficiales tratados como de peor condicion que el soldado, pues á este se le dá su vestuario; mas á aquel una corta ración, mirándolos de consiguiente marchar descalzos, sin camisa, y en todos concep-

tos sufriendo las privaciones y fatigas de una guerra tan penosa. Si algunos fondos han entrado del extranjero los habeis visto disipar entre los que los recibian ó manejaban. El pais abrumado en fuerza de los escesivos gravámenes, ya nadie tiene con que atender á sus necesidades, y el militar que antes contaba con el auxilio de su casa, en el dia siente las angustias de sus padres, que lloran la generosidad de un pronunciamiento que solo la muerte y la desolacion les promete. Provincianos: sea eterna en nuestros corazones la sensación de Paz y union entre los españoles, y desterremos para siempre los enconos ó resentimientos personales: esto os aconseja vuestro compañero y General=Cuartel general de Villareal de Zumarraga 30 de Agosto de 1839. = Rafael Maroto.

APENDICE Nº 13

PROCLAMA DEL GENERAL ESPARTERO EN VERGARA (1-IX-1839)

EL CAPITAN GENERAL D. BALDOMERO ESPARTERO, A LOS PUEBLOS

VASCONGADOS Y NAVARROS

Seis años de una guerra que jamás debió entenderse en estas hermosas y florecientes provincias, las han reducido al lamentable estado en que hoy se miran. La flor de su juventud ha sido víctima de los combates. El comercio ha sufrido quiebras y menoscabos. La propiedad, siempre invadida ha reducido á la miseria á sus dueños y colonos. Las artes y oficios, han participado de la paralización que constituye la ruina de infinitas familias. Todo en fin ha experimentado el desconcierto y la amargura, haciendo cruel y precaria la existencia.

Contemplad vascongados y navarros, vuestra presente situación, comparadla con la felicidad que disfrutabais en otros tiempos; y no podreis menos de confesar que el azote de tan sangrienta lucha, cambió el bien por el mal: el sosiego por la zozobra: las costumbres pacíficas de vuestros mayores, por un deseo de esterminio: la ventura, por todas las desgracias. ¿Y contra quién y por quién se ha hecho la guerra? Contra españoles por españoles; contra hermanos por hermanos.

Vosotros fuisteis sorprendidos. Se os hizo creer en un principio, que los defensores de Isabel 2ª, atentaban contra la religion de nuestros padres y los ministros del Altísimo que deberían haber cumplido la ley del Evangelio, y su misión de proclamar la paz, cuidando de curar las conciencias, fueron los primeros que trabajaron por encender esa guerra intestina, que ha desmoralizado los pueblos donde las virtudes tenían su asiento.

Vosotros luego, fuisteis engañados por un principe ambicioso, que pretende usurpar la corona de España, á la sucesora de Fernando 7º, á su legitima Hija la inocente Isabel. ¿Y cuáles son sus derechos: ¿Cuál el justo motivo de haberos armado en favor de D. Carlos? ¿Qué ventajas positivas os habia de reportar su soñado triunfo? Persuadios navarros y vascongados del error, de la injusticia de la causa que se os ha hecho defender, y de que jamás hubie-

rais alcanzado otro galardón, que consumir vuestra ruina.

Yo sé que los pueblos están desengañados: que en su corazón sienten estas verdades; y que aman y desean la PAZ á todo trance. La PAZ ha sido proclamada por mí en Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, y esta palabra dulce y encantadora, ha sido acogida con entusiasmo y victoreada con enardecimiento. El general D. Rafael Maroto, y las divisiones Vizcaina, Guipuzcoana y Castellana, que solo han recibido desaires y tristes desengaños del pretendido rey, han escuchado ya la voz de PAZ, y se han unido al ejército de mi mando para terminar la guerra. Los campos de Vergara acababan de ser el teatro de la fraternal unión. Aquí se han reconciliado los españoles, y mutuamente han cedido de sus diferencias, sacrificándolas por el bien general de nuestra desventurada Patria. Aquí el osculo de PAZ y la incorporación de las contrarias fuerzas, formando una sola masa y un solo sentimiento, ha sido el principio que ha de asegurar para siempre la unión de todos los españoles bajo la bandera de Isabel 2^a, de la Constitución de la monarquía y de la Regencia de la madre del pueblo, la inmortal Cristina. Aquí se ha ratificado un convenio para el cual estaba yo suficientemente autorizado: convenio que abraza los intereses de todos, y que aleja el rencor, la animosidad y el vértigo de venganza por anteriores extravíos. Todo por él debe olvidarse, todo por él debe ceder generosamente ante las aras de la patria. Y si las fuerzas alavesas y navarras, que tal vez por no tener noticia, no se han apresurado a disfrutar de sus beneficios, quisiesen obtenerlos, dispuesto estoy á admitirlas, y á emplear todo mi esfuerzo con el Gobierno de S.M. la Reina para que muestre á todos su reconocimiento.

Vascongados y navarros: que no me vea en el duro y sensible caso de mover hostilmente el numeroso, aguerrido y disciplinado ejército que habeis visto. Que los cánticos de PAZ resuenen donde quiera que me dirija. Que se consoliden por siempre la unión; objeto de mis cordiales y sinceros votos, y todos encontrareis un padre y protector en

El Duque de la Victoria

Cuartel general de Vergara 1^o de Setiembre de 1839.

BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA n^o 70 - 15-IX-1839

APENDICE N° 14

EXPOSICION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE NAVARRA A S. M.

LA REINA GOBERNADORA (24-X-1839)

SEÑORA

Cuando la célebre cuestión de fueros de las provincias Vascongadas y Navarra está llamando la atención de la Europa entera: cuando todos tienen fija la vista sobre la marcha de las Cortes en la discusión de aquella: cuando todos hablan y dan su voto en la materia, ¿era conveniente que la Diputación provincial de Navarra guardase tan profundo silencio? razones de suma consideración la han hecho permanecer en ese estado, y aunque mas de una vez fue escitada para dirigir su voz á las Cortes ó al Trono, prefirió el silencio á todo, esperando que el tiempo y la opinión verdadera del pais vendria á superar las dificultades y á trazar la senda que en lo sucesivo deberia seguir en tan árduo y grave negocio. Así ha sucedido: la discusión adelantada del proyecto de ley de fueros ha descubierto hasta las mas recónditas intenciones, ha ilustrado la materia, ha difundido en todas las clases el conocimiento necesario sobre su tendencia, y ha uniformado la opinión del fiel Navarro. Debe pues la Diputacion provincial hablar ahora, y si en su esposicion ha sabido acertar con la opinion del pais, está segura de verla apoyada por sus comitentes que legalmente sabrán usar del derecho de petición.

La Navarra quiere la Constitución del Estado del año 1837: esto es lo que ante todas cosas quiere. Todo lo que tienda á tergiversar este hecho, es falso, y ademas perjudicial á Navarra. Miles de Navarros han derramado su sangre en los campos de batalla por ese Idolo y miles de navarros están dispuestos á derramarla de nuevo antes que se les arrebatase esa prenda de seguridad, esa garantía firme de las libertades públicas y del trono de Isabel 2ª. Tambien quieren los navarros sus fueros, pero no los quieren en su totalidad: no estamos en el siglo de los privilegios, ni en tiempos de que la sociedad se rija por las leyes del feudalismo: cuando se han proclamado los principios de una ilustrada y civilizadora legislacion, la Navarra no puede reusarlos. El pais quiere los fueros que sean compatibles con su conveniencia pública general, y ni quiere, ni puede querer leyes de pura y exclusiva aristocrácia

quiere aquellos fueros que conspiren á conciliar su interés con el general de la Nación, y con las sólidas bases que encierra en sí la Constitución de la Monarquía. Confírmense los fueros de Navarra salva la Constitución del Estado: quede ilesa y preservada en Navarra la Constitución de la Monarquía, y así habrá un lazo de union y un norte fijo que conducirá infaliblemente al puerto de salvacion, y evitará por siempre todo naufragio. Plantifíquense los fueros desde luego en la Navarra, pero sea siempre salva la Constitución, sea siempre ésta su primera ley fundamental. Si en esta plantificacion provisional y rápida pueden ofrecer se dudas y dificultades, no será tan difícil su solucion oyendo previamente á la Navarra, que no advierte en la materia ni en la union de la Constitución y de los fueros justos esa contradiccion, esa incompatibilidad que algunos se figuran: no es tan difícil presentar á la consideracion de las Cortes y del Gobierno un cuadro conciso y exacto en el que se demuestre que pueden existir y observarse con la Constitución los fueros racionales y útiles, que concilian do el interés de Navarra con el general de la Nación llenen las esperanzas y la ansiedad pública, las promesas solemnes, y los votos de la Patria por el acierto, la union, la paz y la prosperidad sucesiva de España, de quien es una parte integrante la Navarra.

Así pues, la Diputacion provincial de Navarra, puesta á L. R. P. de V. M.

Suplica que al sancionarse la ley de fueros de Navarra, se confirmen éstos salva la Constitución de la Monarquía. Pamplona 24 de Octubre de 1839=Siguen las firmas.

APENDICE N° 15

EDITORIAL DEL "ECO DEL COMERCIO" (28-VIII-1839)

En la proclama que el general en jefe, duque de la Victoria, ha dado al ejército despues de los repetidos triunfos que le han allanado la entrada en Durango, se leen estas notables palabras que creemos conveniente copiar aqui, aunque lo están en su lugar con todo aquel importante documento. Hé aqui como concluye:

"El enemigo desconcertado será batido si no se acoje á nuestra generosidad deponiendo las armas ó sosteniendo con ellas la constitución de la monarquía española, el trono legitimo de Isabel II y la regencia de su augusta Madre. Los que así lo hagan serán admitidos como miembros de una familia, con olvido de lo pasado y una reconciliación fraternal que haga duradera la paz que todos los pueblos apetecen. Vosotros, queridos compañeros de glorias y de fatigas, habeis dado un ejemplo de virtud inimitable con el habitante que se somete y espera tranquilo fiado en la generosidad y disciplina del ejército. Todos los que obren así serán protegidos en sus personas y propiedades; pero al mismo tiempo la reveldia será castigada como en Allo y Dicastillo".

"Aqui teneis, soldados, el resumen de los señalados triunfos adquiridos hasta el dia. Vuestro general en jefe siente un placer extraordinario, viendo cumplidos en parte sus deseos por el bien de esta desgraciada nación, y no DUDA QUE SIGUIENDO FIRMEMENTE LA SENDA QUE OS HA TRAZADO, DAREIS LA SUSPIRADA PAZ, afirmando el orden consolidando nuestras instituciones y el trono de nuestra inocente Reina, que son los objetos exclusivos de vuestro general: Espartero".

Parece que el victorioso general del Norte al dirigir la voz á sus soldados y manifestarles el verdadero medio de dar al pais la suspirada PAZ, ha sido inspirado por el genio del bien que preside á sus operaciones, para desbaratar los planes infernales de los que por acá quieren envolvernos en un caos de trastornos y discordias, encendiendo una nueva guerra, é inutilizando los esfuerzos victoriosos de nuestros valientes por acelerar el suspirado momento de la PAZ.

Bajo el pretexto de acelerar la paz, se han desemascarado los partidarios del absolutismo, pidiendo transacción á voz en grito pero sin fijar los términos en que haya de celebrarse, como á ello hemos provocado, para que se vea si es ó no conveniente, si es siquiera realizable,

y si su resultado seria la paz, ó encender una nueva guerra. Hemos dicho que deseamos la paz, y que no nos opondríamos á un arreglo en que con el trono de Isabel II quedase asegurada la constitucion de 1837, y se nos dice despues de esto por el periódico órgano de los transaccionistas á toda costa, que no queremos la paz, y que predicamos la anarquía; y acusa á la mayoría de las próximas córtes de enemiga de la paz de que se opóndrá á todo acomodamiento. Fundado en esta base, que él se ha creado, aconseja al gobierno la disolución de las próximas córtes. No usa de esta expresión, pero tanto vale, pues dice que "el gobierno debe abstenerse de someter esta cuestión á las proximas córtes, y buscar la autorización que necesite del poder legislativo, únicamente en lo que sea puramente necesario, de otras córtes, que representen sobre este punto la opinión de la nación".

La opinion de la nacion, y por consiguiente la de las próximas córtes, es la de trabajar por obtener una paz honrosa, duradera y útil para el país; y el modo de obtenerla es, como dice el señor general en jefe de los ejércitos reunidos, seguir la senda que ha trazado á sus soldados, que es tratar como hermanos á los que reconozcan el trono constitucional de Isabel II y las leyes del país, y escarmentar la rebeldía de los que se obtienen en seguir causando males á su patria. Otras córtes libremente elegidas, pensarían lo mismo: lo demás es una quimera.

Porque en cualquier transaccion, ó se habia de ceder concediendo á los enemigos la abolición de las instituciones liberales, ó manteniendo la dignidad y los derechos de la nacion. En este segundo caso ni el Eco se ha opuesto, ni se opondrán las córtes próximas, como no se oponen los que han profesado las opiniones de la mayoría. La cuestion es si la aceptaria don Carlos, y si aunque el príncipe rebelde entrase por un acomodamiento de esta especie cederian los del partido inquisitorial que le sostiene. Pero de cualquier modo que estos lo tomasen siempre seria ventajoso para el país, porque debilitaria las fuerzas enemigas y acercaria el momento de la paz.

No es esto sin embargo lo que quieren el Piloto y sus amigos; porque esto lo queremos los del progreso, y porque lo queremos nos apellida anarquistas y enemigos de la paz. Lo que apetece nuestro colega indudablemente es una transaccion en que triunfen sus ideas de retroceso, esto es el gobierno fuerte, que camine sin trabas ninguna especie, y en que nada tengan que temer por sus privilegios los que viven de los abusos. ¿es ésta la paz que apetece el país? Fácil le hubiera sido obtenerla desde que empezó la guerra; porque con ceder el campo á los que quieren el absolutismo; habria cesado la lucha, pues donde uno no quiere dos no riñen. Felizmente para el trono legítimo y para la libertad y el buen orden de la España, el caudillo que está encargado

de poner término á esa lucha, no contribuirá á ningun género de acomodamiento que inutilice los sacrificios del país y que manche los laureles que ha ganado con sus valientes tropas. No hay otra transacción posible que la que dice en su proclama: el gobierno no puede celebrar ninguna otra sin suicidarse, y hacer traición al trono; y las cortes próximas y cualquiera otras que se compongan de verdaderos españoles, como serán todas las que se elijan libremente, pensarán del mismo modo.

Esto es lo posible, lo conveniente.- Hablar de otra clase de transacción si algun efecto puede producir, es debilitar los esfuerzos del país para proporcionar al ejército los medios que necesita, y entorpecer de este modo los sacrificios de nuestros valientes, que con su heroísmo preparan la verdadera transacción, y nos darán las suspirada PAZ.

Pero para que esta sea sólida ó duradera, para que no contenga en sí misma los funestos jérmenes de una nueva guerra, es indispensable que reciba la sanción de las cortes pues aunque se respeten por la letra de los convenios los altos objetos cuya conservación inculca en su proclama el general en jefe, puntos quedarán todavía que necesiten la confirmación de las cortes. El dinero, por ejemplo, pues en dinero han de ser las pensiones que segun se dice tratan de concederse, ninguna garantía ofrece si no es la de los representantes del pueblo, en cuyas manos están las llaves del tesoro nacional, segun el código político; y aunque fuera esta sola consideración sería suficiente para que nada se pudiera dar por estable sin el concurso de los cuerpos representativos.

Véase, pues, cuán lastimosamente yerran los que juzgan ó aparentan juzgar necesario para la consecución de la paz el cerramiento de las cortes, apenas abiertas, ó tal vez antes de que se verifique su apertura.

Pero la mayor consideración es la que indica la necesidad de adoptar importantes providencias legislativas tan luego como tenga efecto la suspirada sumisión de las provincias. En ellas todo está desorganizado por efecto preciso del largo dominio de la facción y por la especie de anarquía, consecuencia de una lucha violenta en el territorio ha sido alternativamente presa de los soldados y de los rebeldes ¿Pero á qué insistir en la demostración de verdades, tan evidentes que solo el ponerlas en duda es una especie de traición á la ley fundamental que nos rige y á las palabras mismas del general que tiene á su cargo la conclusión de la paz apetecida y esperada?

Dejemos por lo mismo descansar este punto de peli-
grosa discusión en este momento, y esperemos por instantes la continuación de grandes y favorables noticias como las recibidas; en cuya esperanza nos quedaremos defraudados, si

son ciertos los rumores que corren acerca de los notables sucesos que se preparan en Tolosa, para donde marcha el ejército, según parece.

Y dejemos que continúe como en estos últimos días la confianza que va renaciendo y que acredita la subida rápida de nuestros fondos en la bolsa de Madrid, con la cual esperamos que coincidan dentro de muy pocos correos las bolsas extranjeras.

Pero estemos preparados al mismo tiempo para continuar los progresos de nuestras victoriosas armas en las otras provincias que además de las vascongadas ocupa la facción. Todavía les quedan á nuestros valientes peligros que arrostrar y laureles que adquirir: todavía le quedan al pueblo sacrificios que hacer; pero en los soldados y en el pueblo hay las virtudes que tan justas exigencias reclaman, y en las próximas cortes esperamos con fundamento que habrá el patriotismo y las decisiones necesarias para cuanto el bien de los pueblos conducir pueda, y para cuanto por penoso y difícil que al principio parezca, prometa resultados de paz, de ventura y de dignidad nacional.

APENDICE Nº 16

EDITORIAL DE "EL CORREO NACIONAL" (4-X-1839)

Después del despacho ordinario, el Congreso se ha ocupado de la constitución definitiva de su mesa, habiendo sido reelegidos los mismos señores que han ejercido los cargos provisionales de Presidente, vice-presidente y secretarios.

Apenas estuvo constituido el Congreso, anunció el señor Calatrava que se iba á dar principio á la discusión de los dictámenes presentados sobre el proyecto de ley relativo á la concesión de fueros á las provincias Vascongadas.

Grande fue el interés que en este momento se manifestó en el Congreso y en las galerías por darse principio á un asunto que casi exclusivamente absorbe la pública atención, y del que depende que la paz, cuyos cimientos ha echado el convenio de Vergara, sea una realidad bienhechora, ó una ilusión engañosa de la que nos saque la prolongación de una lucha, que solo puede terminar no poniendo obstáculo á la reconciliación de los españoles, universal y enérgico voto que hoy se eleva de todos los corazones.

Empezó la discusión por la adición del señor Vila, que apoyó su autor en un discurso metódico y bien espedido, pero que fué poco oído en las galerías por la debilidad de órgano que es propia al orador.

El señor Argüelles, como de la comisión, contestó al señor Vila y mereció el elogio raro en S.S. de ocupar al Congreso muy pocos momentos.

El señor Vila retiró su adición, en la que hizo un acto honorífico para este señor diputado y agradable al auditorio que vea en el debate una dilación al asunto principal.

Hoy continuará esta importantísima discusión.

Al fin ha llegado el día de que el Congreso de señores diputados empiece á ocuparse de la gravísima cuestión, que ha tenido suspensos los ánimos, y continúa manteniendo todavía empeñadas hasta un punto indefinible las esperanzas de toda la nación.

La voz de las Cortes va á oírse. De su fallo penderá tal vez la PAZ ó la GUERRA de los trabajados pueblos de España.

No habrá palabra, de cuantas pronuncien los hombres públicos llamados á dirigir en tan alta crisis la nave del Estado, que sea vana: ni pensamiento, ni frase, que recogida ávidamente por la opinion; no la lleven los ecos sonoros y múltiples de la prensa periódica, o á derramar el dulce bálsamo de la esperanza, ó á echar la funesta semilla de la inquietud y del temor sobre todos los ángulos de la monarquía.

No estará pues demas que nosotros que en tan delicado asunto hemos procurado dar desde su principio amplia prueba de sóbrios y de circunspectos, manifestando respetar las opiniones mas adversas, y temblando de comprometer con una palabra imprudente ó ligera la suerte de los poderosos intereses que van enlazados con esta cuestión, hagamos hoy que se halla empeñado el debate en su verdadero y legítimo terreno algunas consideraciones que pueden contribuir a derramar luz sobre ella, y á evitar tal vez, por falta de reflexion, y seguramente sin voluntad, determinaciones apasionadas y poco políticas que comprometan para muchos años la suerte y la tranquilidad del país.

El negocio es grave: justo y debido es oír á todas las opiniones. La de los redactores de El Correo Nacional será franca y esplicita, como lo exige el interés de la patria, y su propia conciencia se lo dicta.

Y empezando por una observacion general, diremos desde luego: que admira el que hombres que hacen justo alarde de profesar principios de LIBERTAD, quieran ahora combatir la que existe mas sólida, mas amplia, mas antigua y mas bien cimentada sobre la tierra; la que mas felicidad y ventura ha derramado sobre los pueblos á quienes ha alcanzado su benéfica influencia; la que mas valor, honradez, aplicacion, costumbres y virtudes ha producido en el suelo feliz que ha fecundado con su generoso jugo: en fin, la que en esta como en otras ocasiones ha desarrollado una vitalidad que parecerá fabulosa á las generaciones futuras.

Sabido es, y nuestros lectores no necesitan que les recordemos, que esta libertad viene desde los primeros hombres que poblaron las ásperas é inaccesibles montañas vescongadas. Augusto la encontró establecida, la combatió, y no pudo extinguirla. Ha sobrevivido despues á todas las dominaciones que se han sucedido en la península, y ha llegado á nuestros tiempos tan pura, tan acrisolada, tan vigorosa é inespugnable como nació, y como ha marchado por entre las mas terribles vicisitudes de los siglos.

En vano sería desconocerlo: este monumento precioso, este gran modelo de libertad social, ha llegado á interesar á todos los hombres generosos que lo han conocido, y asombra que en el año de 39, despues de tanta sangre como se ha derramado en este medio siglo por aclimatar en el mundo el árbol benéfico de la libertad, haya quien pretenda

cortar por sus raíces el que mas abundantes frutos ha distribuido sobre el feliz terreno que ha cubierto con sus frondosas ramas.

Pues hay todavía mas: esta LIBERTAD, tan respetable y digna de aprecio por su propio mérito, se presenta ahora á la sociedad española, recomendada por todos los sentimientos mas nobles que se conocen en el hombre: por un TRATADO DE PAZ, por la palabra de un guerrero que al empeñarla representaba la causa nacional; palabra articulada al frente de banderas; palabra que oyeron cien mil bravos; que sirvió de base á una nueva era de tranquilidad, de orden, de prosperidad y de esperanzas nacionales; que afianzó la legitimidad del trono; que protegió sus instituciones; que redimió víctimas innumerables.

El HONOR MILITAR marcha pues en esta cuestion al lado de los FUEROS: de estos FUEROS compatibles con la CONSTITUCION política de la monarquía: de estos FUEROS que en nada perjudican á los intereses ni á los recursos de la administracion interior del reino: de estos FUEROS que reúnen mas títulos que ninguna otra institucion humana de su clase, para ser respetados, y que servirían seguramente de vanidad á otras naciones mas ilustradas de Europa si tuviesen la dicha de abrigarlos en algun ángulo de sus dominios.

Estos FUEROS comparecen hoy ante el Congreso augusto de la nacion española acompañados del HONOR MILITAR. En vano se cansan sus enemigos en despojarles de esta noble investidura. El HONOR MILITAR está con ellos; participa de su suerte, y no puede sobrevivirles. Los dos van á perecer ó á conservarse juntos.

No tememos decirlo: una manchilla eterna recaería sobre la enérgica y franca palabra que ha oído la Europa, dada en el campo de batalla, al frente de numerosos estandartes, como prenda de paz, como garantía de union, como término del caos y de un derramamiento inmenso de sangre, si esta palabra no tuviese su verdadero cumplimiento, ó lo que es lo mismo, si se la quisiera engañar y cubrir con un manto hipócrita, que todo el mundo conoce y entiende.

El general Espartero en su expedicion desde Rangelles, fue llevando adelante una negociacion que al fin recibió su cumplimiento en los campos de Vergara. Los FUEROS, el sistema liberal por excelencia del país, fue la condicion principal de este tratado. Hubo nobleza, hubo dignidad, hubo pundonor y delicadeza en este punto esencial de la concordia.

El general en jefe era un militar interesado en asegurar la paz, y que para conseguirla accedia á lo que era noble, á todo lo que estaba en la opinion general de esta nacion célebre, manifestada por cien mil voces y demostraciones indubitables; de esta nacion que á nadie y en nin

gun tiempo ha cedido en generosidad, en la observancia de la palabra en la pureza de sus sentimientos: de esta nacion que jamás marchó en su política con reservas engañosas, que nunca se deshonró con una segunda intencion de perfidia.

En las comunicaciones que precedieron á la paz, en los actos de noble expansion y entusiasmo que acompañaron al abrazo inmortal que selló la felicidad pública, el general en jefe de nuestras tropas prometió la confirmación de los fueros con palabras explícitas y terminantes. Los tendréis, dijo, al frente de los guipuzcoanos. Juro que los tendréis, dijo a los vizcainos... Y a esta palabra y a este juramento, acompañó el ósculo de la buena fe, se exalaron aclamaciones, que ha oído la Europa, y que van llevando todavía sus ecos benéficos hasta los últimos rincones de la tierra, como los llevará la historia á las mas remotas épocas de la posteridad.

Y acentos tan sublimes, y aclamaciones tan interesantes, y escena tan rara en el curso de los siglos, espectáculo tan magnífico, cuadro tan envidiable, ¿sería ahora marchitado con una menguada é indigna interpretación? ¿Sería envilecido y privado de todo su brillo, por una falsía, que el honor nacional, que toda la España repelería con abominacion?

No, ciertamente, no. El convenio de Vergara no puede sufrir contradiccion en la inteligencia de su espíritu y de su objeto: y si la delicadeza no permitió consignar en él una seguridad positiva; si mediaron palabras de particular circunspeccion, palabras de arreglo á la naturaleza del documento, y á las altas partes interesadas en él, no fue seguramente para falsificar el pensamiento, no fue para recoger las armas de un pais tan valiente como noble al favor de un engaño; no, no cabía esto en la hidalguía del carácter español: fue solamente para hacer aquel acto, mas grande, mas legal, mas patriótico; fue para consagrar el respeto debido á los poderes del Estado: fue para estender á toda la nacion la confianza y generosidad que tanto embellecia el suelo y el nombre español en aquellos deliciosos momentos.

El general de nuestras armas no quiso pasar el Rubicon, ni acercarse siquiera á sus aguas. En el documento público, y como representante de la nacion en aquellos solemnes momentos, dió á los cuerpos legislativos el uso libre de sus funciones. Como militar dió su palabra de honor á los vascongados; porque sin ofender á su patria no podia dudar que los altos poderes de ella, haciéndose cargo de las circunstancias interesantísimas del acto, lo fallasen despues por las reglas de una sábia política, asegurando los grandes intereses que en él mediaban, sin comprometer las fuertes razones de estado que habfan en él intervenido, sin inclinar con el peso de la opresion una balanza que el honor, la confianza, la conveniencia reciproca y una sagrada

nimidad heroica de sentimientos habia mantenido en fiel á competencia.

¿Cómo entonces podía recelar nadie que saliese una sola palabra que menguase el mérito de monumento tan ilustre, que envileciese acto tan glorioso, que disipase el entusiasmo sobre que reposaban los destinos de la nacion entera, que llenase de sombras un cuadro en que se descubria luz tan brillante y encendida?

El general en jefe CONFIO y debió CONFIAR: y esta confianza estaba en su corazón. y le honra. ¿Se habrá engañado? No: nunca entrará en el espíritu de los españoles tan indigno recelo. El Gobierno ha dicho bien claramente que le adivinó su pensamiento. El SENADO es harto conocido para que se dude de él. El CONGRESO se ha explicado ya de una manera harto clara en su célebre mensaje, y está para resolver. ¿Será esta resolucion nacional? ¿Irá con los votos generales del país? ¿Podrá llamársela fiel intérprete y sostenedora de su carácter? ¿Será noble, justa y generosa? ¿Pondrá en este augusto monumento la corona de honor, de paz, de buena fé y de sabiduría legislativa? ¿Dejará un cimiento de arena en un edificio tan magnífico? ¿Podrá todavía quedar alguna alarma á imaginaciones angustiadas con el recuerdo de los males pasados?

Delito fuera sospecharlo. Injusticia insigne hacer el agravio solo de la duda, á quien por un acto espontáneo y unánime ha dicho á la España y al mundo, que la palabra del general Espartero era UNA GRAN DEUDA NACIONAL, que el Congreso procuraría pagar. no solo con la debida fidelidad, sino con noble GENEROSIDAD.

APENDICE Nº17

EDITORIAL DE "EL PILOTO" (6-X-1839)

La sesión del 4 del corriente ha puesto en claro el estado en que nos vemos. Ya un colega nuestro ha aludido á lo mas notable que ha pasado en el Congreso: á saber, la union de personas, cuyos pareceres suponía la opinión que estaban desconformes, en una liga contra los ministros. Así va sucediendo lo que previmos desde luego, y es que triunfaria el interés del total del partido pseudo-progresista sobre cualesquiera consideraciones, aun las mas poderosas. Nunca hemos fundado alegres esperanzas en personas cuya situación, si al parecer equívoca algunas veces, los fuerza al cabo á adherirse á aquella parte donde únicamente pueden estar sus méritos y su gloria. La mayoría de estas Cortes va saliendo lo que debía ser, lo que fué al nacer, lo que ha de ser forzosamente mientras viva, pues por doctrinas, por hábitos, por interés no puede ser otra cosa. Por eso nosotros nunca hemos entrado con ella en avenencia, que no habríamos rehusado si la hubiésemos creído posible.

El ministerio ha quedado en menoría en una cuestión importante, tras de una batalla reñida, con la solemnidad de una votación nominal. Y si al lado del ministerio aparece con él entre los vencidos la mayoría de la comisión, léase la lista de los vencedores, y calcúlese á qué fin va la victoria.

En las provincias exentas ha de causar gran dolor y miedo lo pasado si no ven que á remediarlo se acude. En valde será decir que no es muy contraria á la confirmación de los fueros la resolución tomada. Lo es, en efecto, cualquiera resolución obscura. La claridad y lisura del proyecto original del gobierno, ninguna margen dejaba á interpretaciones ni á sospechas. Con variarla se pone duda si lo que estaba cierto, y se dejan asideros por los cuales puede agarrarse y torcerse lo que se haya resuelto para ajustarlo á cualquier propósito ulterior. Además, hay un motivo de sospechas en semejante variación. Mala traza da de querer afirmar la paz quien tira á derribar al que la ha conseguido. Mala traza da asimismo de querer conservar la paz, la sube al poder de quienes la han repugnado. Poca seguridad ofrece á los vascongados y navarros ver triunfantes á los mas opuestos á la conservación de sus instituciones, y verlos en su triunfo con una ley en la ma

no que así puede aplicarse en pró de los fueros como para no dejar de ellos sino una corta porción que nada valga.

Pero, lo repetimos, si nos hemos declarado por la confirmación de los fueros, ha sido no como provincianos sino como españoles. Esto no debe alejar de nosotros á los naturales de las provincias exentas. Nuestro franco proceder en este punto, debe al revés persuadirlos del sincero empeño con que abrazamos la defensa de su causa, pues nuestros intereses diversos y no encontrados coinciden ahora completamente. Sin la confirmación de los fueros en su integridad por ahora, y sin la estipulación solemne de que no serán modificados sin oír á las diputaciones y tomar en cuenta su opinión y la de aquellos pueblos, no vemos la paz segura, ni posible el orden que de ella es forzosa consecuencia. Y por otro lado sin que triunfen los hombres que desean la paz y el orden, los fueros quedarán en el aire, é inquietos los ánimos de quienes á su conservación son adictos, viendo que cualquier soplo puede descomponer y aun destruir lo que ellos desean tener sólida y satisfactoriamente asentado.

Los que sin ser provincianos desean de todo corazón y con empeño vivo que se confirmen los fueros lisa y llanamente, y que lo desean no como cuestión única para ellos, sino como principalísima parte de un gran todo, han de haber visto con mayor pena y susto la votación de ayer tanto por lo que es ella en sí, cuanto por lo que promete.

Hay además de la cuestión de fueros alguna otra pendiente relativa al modo de completar y afirmar la paz, y los vencedores de ayer, son casi todos de aquellos cuyas opiniones seguidas llevarán á la continuación de la guerra ó á crear motivos que pongan la paz en peligro. Pendiente está la amnistía y la opinión á ella contraria domina en el Congreso de diputados. Por triunfo suyo canta la votación de ayer un periódico de influjo no escaso, que con visible afectación al publicar un escrito, ha suprimido el título de teniente general, que en él se daba al general Maroto. O hemos de cegar y ensordecer, ó hemos de conocer adonde caminan ciertas personas, las cuales, aun concediendo por un momento que obedecen á honradas preocupaciones, mal puede desconocerse que buscan como una felicidad lo que es peligro, y será acaso ruina de la patria.

El ministerio, en medio de esta situación, con su gloria innegable, pues todo vencedor la merece, con su poder, que fundado en la opinión casi general, y en el universal interés es el de un gigante, con sus obligaciones, que son altísimas y sagradas, ha visto alzarse contra él una liga guerrera, y en su encuentro con los enemigos coligados, ha padecido un revés. No creemos que por semejante desgracia se desaliente, pues no le juzgamos falto de discurso. Si al salir del Congreso, echa la vista al rededor de sí, si desde la altura en que está un gobierno, pu-

diendo registrar un horizonte vasto, ve la opinion que generalmente reina en España, conocerá que se espera de él, y que se ha menester, y como debe atender á satisfacer justas esperanzas, y á remediar las públicas necesidades. No se desanime, no, pero si no obrare como es necesario, el abatimiento, pues causará su propia vergüenza y perdición justamente con la desventura completa del Estado.

No hemos aludido á las palmadas que ayer sonaron en el Congreso. No diremos si fue gente apostada al intento la que las dió, pues no lo sabemos ni para afirmarlo ni para desmentirlo, y aunque algunos amigos nuestros hayan dicho otro tanto cuando sonaban aplausos á nuestros enemigos, no lo hemos dicho nosotros, no gustan lo de dar por verdades suposiciones. Quien dió las palmadas faltó á su obligación de espectador y oyente impasible en el cuerpo legislativo. Imitando lo malo de nuestros contrarios perdemos en vez de ganar. Y sin embargo de cuanto hemos dicho, no dejaremos de notar que la culpa fue de especie singular, pues hasta ahora no ha solido salir de las tribunas aplauso para un ministro, y aplauso para uno que sostenía el orden y la paz. La amenaza que sobre este punto hace un periódico á los palmoteadores es graciosa, pues prueba que no por la ley sino por la violencia se deben corregir los excesos, y acredita tambien que por una vez no estan dueños de la mayor fuerza allí donde la solian tener sobremannera poderosa.

¿Será esto síntoma de la situacion general? No lo creemos. No queremos dar una accion vituperable y hasta criminal por muestra de la opinion pública. Otro aplauso mas alto, de mas numerosa turba, y legalmente espresado es el que prometemos al ministerio si con brios y justicia de una vez vuelve por el decoro del Trono, por el honor nacional empenado, por la seguridad pública comprometida, en suma, por cuanto es precioso y apreciado, así respecto á lo presente como á lo venidero. Mucho valen los fueros, pero con ellos va ahora unido infinito que no menos vale, de suerte que en manos del ministerio actual está decidir si ha de vivir España pacifica adentro y respetada y amada fuera, o si cayendo en una revolucion, sobre fatal inútil, ha de seguir siendo objeto de odio y lástima, viendose que en esta desventurada tierra solo sabemos trocar un mal por otro mal para nosotros, y un peligro por otro peligro para el mundo.

APENDICE Nº 18

BASES PROPUESTAS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL DE NAVARRA
PARA LA MODIFICACION DE FUEROS

1º. "Gobierno político y militar: Habrá en Navarra un gobernador político, nombrado por S. M., cuyo cargo jamás podrá ser desempeñado por el jefe o comandante militar, que únicamente tendrá el mando de las armas. El Gobernador político desempeñará las funciones correspondientes a los jefes de las otras provincias en cuanto sean compatibles con el sistema provincial y municipal particular de Navarra.

2º. De la Diputación: La Diputación provincial se compondrá de siete individuos nombrados por las cinco merindades, esto es, uno por cada una de las tres, y dos por las de Pamplona y Estella, como de mayor población.

La Diputación será presidida por individuos de su seno, nombrados por la misma.

La elección de los vocales de la Diputación deberá verificarse por las reglas generales que se adopten para las demás provincias. Pero los diputados de Navarra no podrán renunciar, y recibirán un sueldo módico de los fondos de la provincia en atención a las mayores atribuciones y necesidad de la constante permanencia en las juntas.

Las atribuciones de la Diputación, serán las administrativas en todos los ramos provinciales y municipales, desempeñarán también las que antes tenía el extinguido Consejo de Navarra: los que ejerzan las demás Diputaciones provinciales, y sean compatibles con el sistema particular de Navarra; y, finalmente, será de su cargo exclusivo sin la menor intervención de ninguna otra autoridad, la distribución, recaudación y entrega en las arcas nacionales de la contribución o servicio que la provincia haya de hacer al Estado.

La Diputación actual se renovará inmediatamente a la sanción de la ley de modificación de fueros.

3º. De los Ayuntamientos: los Ayuntamientos se elegirán, y organizarán por las reglas generales que se adopten en lo sucesivo para toda la nación, conservando, entre tanto, las que hoy se observan en el país con las mo

dificaciones que la Diputación tuviese por conveniente.

Las atribuciones de los Ayuntamientos serán absolutamente las mismas que hoy tienen con exclusiva sujeción a la autoridad de la Diputación, y a las reformas que por ésta se adopten.

4º. Sistema judicial. El sistema judicial seguirá en Navarra en la forma que disponen o dispusieron los reglamentos generales; pero conservando del todo la legislación civil y criminal, usos y costumbres en la parte dispositiva, hasta que se publiquen los Códigos, en cuyo caso regirán también en Navarra, aunque sin efecto retroactivo, respecto de los derechos adquiridos.

5º. Contribuciones. Navarra contribuirá al Estado con una cantidad limitada a 1.500.000 reales, que corresponde a lo que en cada uno de los seis años dio en el último donativo de las Cortes de 1828-1829 y, a lo más, no podrá exceder de 2 millones. Esta contribución será única, y se encargará Navarra de pagar, por sí sola, la dotación del clero secular de la provincia, y el culto, según las gases generales que se acordaren por las Cortes.

6º. Tabaco: Navarra conservará el derecho del estanco del tabaco, aunque limitado a percibir del erario la cantidad que hoy paga, con título de arrendamiento, y no verificándolo deberá abonarle a la Provincia en cuenta de la única contribución.

7º. Servicio militar: el servicio militar, o contribución de sangre, se hará en Navarra, según su fuero, esto es armándose a sus expensas en caso de una guerra extranjera.

8º. Aduanas: Navarra accederá a la traslación de las Aduanas a la frontera bajo las condiciones siguientes, y no sin ellas. 1º. Que los contrarregistros se han de colocar a cuatro o cinco leguas de la frontera, dejando absolutamente libre el comercio interior sin necesidad de guías, ni practicar ningún registro en otra parte después de pasada aquella línea. 2º. Que la deuda de la Provincia y sus censos y gastos, quedarán consignados sobre las Aduanas, de cuyo producto y del de la única contribución recibirá y retendrá la Diputación lo que en el quinquenio que venció en 1833 produjeron los arbitrios de la Provincia en las Tablas, y además un 4 % anual para la amortización sucesiva de la deuda. 3º. Que los puertos de San Sebastián y Pasajes, serán francos para la extracción de sus frutos y manufacturas de Navarra, aún cuando no se trasladen las Aduanas a aquella provincia. 4º. Que el Gobierno hará la modificación correspondiente en los aranceles en favor de la extracción de las producciones agrícolas de Navarra al

extranjero, y contra el incentivo del contrabando. 5º y último: que verificada la traslación de las Aduanas en dicha forma, se sobreseerá en todas las causas de contrabando pendientes en aquel momento en Navarra.

9º. Derechos de montes y pastos: No se hará novedad alguna en el goce de los montes de Andía, Encía, Urbasa, Barcnas, ni otros comunes con arreglo a lo establecido en las leyes de Navarra y privilegios de los pueblos.

AGN. Actas Diputación - 1-IV-1840

APENDICE Nº 19

LEY DE MODIFICACION DE LOS FUEROS DE NAVARRA DE 16 DE

AGOSTO DE 1841

"Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las Españas, y en su Real nombre Don Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de Morella, Regente del Reino; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

GOBIERNO MILITAR

Artículo 1º.-El mando puramente militar estará en Navarra, como en las demás provincias de la Monarquía, a cargo de una Autoridad Superior nombrada por el Gobierno, y con las mismas atribuciones que los Comandantes Generales de las demás provincias, sin que pueda nunca tomar el título de Virrey, ni las atribuciones que éstos han ejercido.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Artículo 2º.-La administración de justicia seguirá en Navarra con arreglo a su legislación especial en los mismos términos que en la actualidad, hasta que teniéndose en consideración las diversas leyes privativas de todas las provincias del Reino, se formen los Códigos generales que deben regir en la Monarquía.

ORGANIZACION JUDICIAL Y LEYES PROCESALES

Artículo 3º.-La parte orgánica y de procedimientos será en todo conforme con lo establecido, o que se establezca para los demás Tribunales de la Nación, sujetándose a las variaciones, que el Gobierno estime convenientes en lo sucesivo. Pero siempre deberá conservarse la Audiencia en la Capital de la Provincia.

Artículo 4º.-El Tribunal Supremo de Justicia tendrá sobre los Tribunales de Navarra, y en los asuntos que en éstos se ventilen, las mismas atribuciones y jurisdicción que ejerce sobre los demás del Reino, según las Leyes vigentes o que en adelante se establezcan.

ELECCION, ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 5º.-Los Ayuntamientos se elegirán y organizarán por las reglas generales que rigen o se adopten en lo sucesivo para toda la Nación.

Artículo 6º.-Las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la administración económica interior de los fondos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación Provincial con arreglo a su legislación especial.

Artículo 7º.-En todas las demás atribuciones los Ayuntamientos estarán sujetos a la Ley general.

DIPUTACION PROVINCIAL

Artículo 8º.-Habrá una Diputación provincial que se compondrá de siete individuos nombrados por las cinco merindades, esto es, uno por cada una de las tres de menor población, y dos por las de Pamplona y Estella que la tienen mayor, pudiendo hacerse en esto la variación consiguiente si se alterasen los partidos judiciales de la provincia.

Artículo 9º.-La elección de vocales de la Diputación deberá verificarse por las reglas generales, conforme a las leyes vigentes o que se adopten para las demás provincias, sin retribución ni asignación alguna por el ejercicio de sus cargos.

Artículo 10.-La Diputación provincial, en cuanto a la administración de productos de los propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia, tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la Diputación del reino, y además las que, siendo compatibles con éstas, tengan o tuvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía.

Artículo 11.-La Diputación provincial de Navarra será presidida por la autoridad superior política nombrada por el Gobierno.

Artículo 12.-La vicepresidencia corresponderá al vocal decano.

GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA

Artículo 13.-Habrá en Navarra una autoridad superior política nombrada por el Gobierno, cuyas atribuciones serán las mismas que las de los Jefes políticos de las demás provincias, salvas las modificaciones expresadas en los artículos anteriores, y sin que pueda reunir mando alguno militar.

DISFRUTE DE LOS MONTES ANDIA, URBASA, BARDENAS Y OTROS COMUNES

Artículo 14.-No se hará novedad alguna en el go-

ce y disfrute de montes y pastos de Andía, Urbasa, Barde-
nas y otros comunes, con arreglo a lo establecido en las
leyes de Navarra y privilegios de los pueblos.

SERVICIO MILITAR

Artículo 15.-Siendo obligación de todos los espa-
ñoles defender la patria con las armas en la mano, cuando
fueren llamados por la Ley, Navarra como todas las provin-
cias del Reino, está obligada, en los casos de quintas o
remplazos ordinarios o extraordinarios del Ejército, a pre-
sentar el cupo de hombres que le corresponden, quedando al
arbitrio de su Diputación los medios de llenar este servi-
cio.

ADUANAS

Artículo 16.-Permanecerán las aduanas en las
fronteras de los Pirineos, sujetándose a los Aranceles ge-
nerales que rijan en las demás Aduanas de la Monarquía, ba-
jo las condiciones siguientes:

1º. Que de la contribución directa se separe a
disposición de la Diputación provincial, o en su defecto
de los productos de las Aduanas, la cantidad necesaria pa-
ra el pago de réditos de su deuda y demás atenciones que
tenían consignadas sobre sus tablas, y un tanto por ciento
anual para la amortización de capitales de dicha deuda, cu-
ya cantidad será la que produjeron dichas tablas en el año
común de 1829 a 1833, ambos inclusive.

2º. Sin perjuicio de lo que se resuelva acerca
de traslación de las Aduanas a las costas y fronteras en
las Provincias Vascongadas, los puertos de San Sebastián y
Pasajes continuarán habilitados como ya lo están provisio-
nalmente, para la exportación de los productos nacionales
e importación de los extranjeros, con sujeción a los aran-
celes que rijan.

3º. Que los contrarregistros se han de colocar a
cuatro o cinco leguas de la frontera, dejando absolutamen-
te libre el comercio interior sin necesidad de guías, ni
de practicar ningún registro en otra parte después de pasa-
dos aquéllos, si esto fuese conforme con el sistema gene-
ral de Aduanas.

RENTA DE TABACOS

Artículo 17.-La venta del tabaco en Navarra se
administrará por cuenta del Gobierno, como en las demás
provincias del Reino, abonando a su Diputación o en su de-
fecto reteniendo ésta de la contribución directa la canti-
dad de ochenta y siete mil quinientos treinta y siete rea-
les anuales con que está gravada, para darle el destino co-
rrespondiente.

IMPUESTO A LA SAL

Artículo 18.-Siendo insostenible en Navarra, después de trasladadas las Aduanas en sus fronteras, el sistema de libertad en que ha estado la sal, se establecerá en dicha provincia el estanco de este género por cuenta del Gobierno, el cual se hará cargo de las salinas de Navarra, previa la competente indemnización a los dueños particulares a quienes actualmente pertenecen, y con los cuales tratará.

Artículo 19.-Precedida la regulación de los consumos de cada pueblo, la Hacienda pública suministrará a sus Ayuntamientos la sal que anualmente necesitaren al precio de coste y costas, que pagarán aquellas Corporaciones en los plazos y forma que determine el Gobierno.

Artículo 20. Si los consumidores necesitasen más cantidad que la arriba asignada, la recibirán al precio de estanco de los toldos que se establecerán en los propios pueblos para su mayor comodidad.

Artículo 21.-En cuanto a la exportación de sal al extranjero, Navarra disfrutará de la misma facultad que para este tráfico gozan las demás provincias, con sujeción a las formalidades establecidas.

PAPEL SELLADO

Artículo 22.-Continuará como hasta aquí la exención de usar papel sellado de que Navarra está en posesión.

POLVORA Y AZUFRE

Artículo 23.-El estanco de la pólvora y azufre continuará en Navarra en la misma forma que actualmente se halla establecido.

RENTAS PROVINCIALES Y DERECHOS DE PUERTAS

Artículo 24.-Las rentas provinciales y derechos de puertas no se extenderán a Navarra mientras no llegue el caso de plantearse los nuevos aranceles, y en ellos se establezca que el derecho de consumo sobre géneros extranjeros se cobre en las Aduanas.

CONTRIBUCION DIRECTA Y DE CULTO Y CLERO

Artículo 25.-Navarra pagará, además de los impuestos antes expresados, por única contribución directa la cantidad de un millón ochocientos mil reales anuales. Se abonarán a su Diputación provincial 300.000 reales, de los expresados un millón ochocientos mil, por gastos de recaudación y quiebras que quedan a su cargo.

Artículo 26.-La dotación del culto y clero en Navarra se arreglará a la ley general y a las instrucciones que el Gobierno expida para su ejecución.

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.-El Duque de la Victoria, Regente del Reino.-Madrid, 16 agosto de 1841.-A don Facundo Infante".

APENDICE Nº 20

DOS EJEMPLOS DE LA REPRESENTACION POPULAR ACTUAL DE LA
HISTORIA DE NAVARRA

1.-NAVARRA Y LA CONSTITUCION (Triunfo nº 820. 14-X-1978)

Lo cierto es, por si algunos españoles aún no lo saben, que Navarra se unió a Castilla por vía de pacto y que esa vía no se ha obturado jamás; que la ley pactada de 21 de agosto de 1841, que castigó a Navarra recortándole seriamente los derechos forales, convirtió a nuestro viejo reino en una provincia foral, por vía de pacto, pacto que la Navarra oficial de entonces aceptó por salvar lo salvable.

Desde entonces, Navarra se ha autogobernado en largas zonas de su administración. Nuestros fueros no son -querido Enrique Tierno- fueros medievales; son, en lo fundamental al menos, derechos vivos, libertades vigentes, que no pueden cambiarse sino por vía de pacto. Si otros pueblos hispánicos hicieron dejación de sus fueros o prefirieron otra vía de libertad, allá ellos.

Por eso me parece de todo punto inadecuada la redacción de esa disposición adicional a la Constitución, que dice amparar y respetar los derechos forales, pero conteniéndolos, en el mejor de los casos, "en el marco de la Constitución, de los estatutos de autonomía". ¡Vieja redacción decimonónica!

Recuerden los que tan mal parecen conocer a nuestro pueblo que en el intento de estatuto, por los años 1931 y 1932, mientras la inmensa mayoría de las Vascongadas con esa precaria solución -para el PNV no era más que un primer paso-, en Navarra los socialistas, radical-socialistas, radicales, conservadores alfonsinos y muchos carlistas no quisieron saber nada del estatuto, entre otras cosas porque lo consideraban solución inferior e incompatible con nuestro régimen foral vigente. Ninguno de ellos era separatista y ni siquiera nacionalista.

Yo siento de verdad que muchas torpezas cometidas por los negociadores del PNV, que parecen "llevar" en exclusiva este tema, puedan desorientar a buena parte de la opinión española. Hay que distinguir bien las cosas. La inmensa mayoría de los navarros no somos separatistas. Ni amenazamos con los derechos de autodeterminación y menos con los de secesión, ni anunciamos que nuestro próximo grito de guerra vaya a ser: "Unamos Euskadi Norte con Euskadi Sur". Incluso la última actitud del fundador del PNV, Sabiñán de Arana, fundando la Liga de Vascos Españolistas, nos sir

ve de aliciente.

Nosotros queremos seguir siendo españoles. Queremos votar la Constitución de 1978, que nos parece un buen texto, muy superior al de 1931, donde no se hablaba para nada de los derechos forales.

Nuestros derechos forales no pueden estar sometidos a la Constitución, a sus varias interpretaciones, a la ley de las mayorías, a la voluble voluntad de los diputados. Deben estar amparados, respetados, por la Constitución. Asociados a ella. Su único límite debe ser eso que yo llamaría el "espíritu" del nuevo texto constitucional: la libertad de todos los españoles y la solidaridad entre todos ellos.

Hay que evitar, pues, una mala redacción de esa disposición adicional. Mejor sería dejar sólo su primer párrafo. Antes que la actual redacción, es preferible suprimirla entera.

Los navarros, que tenemos la única autonomía vigente en todo el Estado, queremos conservarla y potenciarla. Pero nunca aceptaremos una autonomía otorgada, concedida más o menos generosamente.

Nuestra vía sigue siendo el pacto. Cualquier imposición fuera de él, aunque viniera por la vía de la mayoría de votos, tendría unas consecuencias incalculables para nuestro pueblo.

VICTOR MANUEL ARBELOA (Barañain. Navarra) (1)

2.-¿EL FUERO EN PELIGRO? (Diario de Navarra. 6-IX-1979)

El primer punto del último párrafo con que termina la referencia que DIARIO DE NAVARRA hace del discurso de clausura del Seminario de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra pronunciado por el Presidente de la Diputación Foral D. J. I. Del Burgo, dice así:

Concluyó que "la mención constitucional ha comenzado a dar sus frutos" y dijo que estamos en vísperas de la reintegración foral, entendiendo por ésta no algo utópico sino "reducir al máximo la actuación del Estado en Navarra en todo aquello que sea materia de autonomía".

Esto puede estar en línea (no lo creo, más bien se me figura una coincidencia dialéctica) con la fatal y funesta actuación de la anterior Diputación que dejó las

(1) V. M. Arbeloa: pertenece al clero secular. Es senador del PSOE por Navarra y preside el Parlamento foral.

cosas de forma sorprendente para que pueda desaparecer el Régimen Foral de Navarra.

La "mención constitucional" hay que examinarla entera y compararla con otro precedente histórico-jurídico; la Ley de 25 de octubre de 1839.

Para la mejor comprensión del lector el tipo de letra identifica la similitud de estas dos disposiciones que dicen así:

Ley de 25 de octubre de 1839.

"Artículo primero. Se confirman los fueros de las provincias vascongadas y Navarra, SIN PERJUICIO DE LA UNIDAD CONSTITUCIONAL DE LA MONARQUÍA".

Constitución Española de 31 de octubre de 1978.

Disposición Adicional Primera.

"La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

LA ACTUALIZACIÓN GENERAL DE DICHO RÉGIMEN FORAL SE LLEVARÁ A CABO, EN SU CASO, EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA".

Para evitar el "perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía" desaparecieron, el Virrey, el paje foral, las Cortes, el Tribunal Supremo de Justicia, las fronteras, las aduanas, la moneda, etc. y se nos dejó "algo" en materia civil y económico-administrativo, que constituyen los "restos" de nuestro derecho originario a lo que llamamos Fuero, que como se ve no es privilegio, sino los residuos que nos dejaron del espolio o latrocinio que nos hicieron al haber sido vencidos en la primera guerra carlista.

Pues bien, ahora, ese "respeto de los derechos históricos" de la Constitución, equivale al "se confirman los fueros" de 1839 y "la actualización general de dicho régimen foral" es aún peor que el "sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía".

La cosa es clara. Con el engaño de 1839 se nos arrebataron las prerrogativas fundamentales de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Y ahora, con esta trampa se nos quiere quitar ese "algo" que nos queda, esos "restos" de nuestro derecho originario.

Porque claro, si por reintegración foral se entiende "reducir al máximo la actuación del Estado en Navarra en todo aquello que sea materia de autonomía", ello ha de conseguirse en virtud de alguna disposición legal y habrá de efectuarse con arreglo a un sistema. ¿Con ese que he señalado en mayúsculas y que es la puñalada traquera a nuestro Régimen Foral? ¿Con el mismo sistema que se está siguiendo con los estatutos que son concesiones del Estado

a los entes autonómicos?

Opino que a Navarra no nos hace falta que nos concedan nada, y si nos conceden, además de lo que en potencia tenemos debe ser por pacto.

Yo no entiendo, ni mucho menos, que reintegración foral es lo que dice el periódico que ha dicho el Sr. Del Burgo. Para mí, reintegración foral, además de ser lo que sentían Uranga, Cunchillos, Beunza, Aranzadi, Amorena, Domínguez Arévalo y demás patricios navarros, es la puesta en acto de las facultades y competencias que tenemos dormidas en la Ley Paccionada. Por tanto, eso de que "la mención constitucional ha comenzado a dar sus frutos" es un error, puesto que los frutos los tenemos que coger no del árbol de la Constitución, sino del árbol de la Ley Paccionada.

Los frutos de la "mención constitucional" serán verdaderos frutos cuando se actualice la Ley Paccionada; hasta tanto, todo será empeoramiento del fuero y camino rápido y seguro para la muerte y fin del Régimen Foral por muchas reducciones que se consigan a la actuación del Estado en Navarra, ya que las mismas, si tuvieran su causa en la Constitución, por otra Constitución se podrían derogar, cosa que no sucedería si se obtienen en base a la Ley Paccionada, por lo que no hay más remedio que actualizarla, ya que es la única solución legal de desvirtuar las "mayúsculas", es decir, el segundo párrafo de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y cumplir lo que dice la Constitución, o sea, lo que se afirma en el primer párrafo de la misma.

En este sentido es consolador que el actual Presidente de la Diputación Foral haya visto las orejas al lo bo y haya hecho una alusión aunque vaga y timorata, a la aspiración de actualizar la Ley Paccionada.

Si es verdad lo que dice la Constitución, que "ampara y respeta los derechos históricos", ya se sabe lo que hay que hacer; respetarlos y ampararlos y por tanto actualizar la Ley Paccionada, pues si no, tal amparo y respeto sería mentira.

Por el primer párrafo de la Disposición Adicional Primera, la Constitución responde y es consecuente con un Estado de derecho.

Si el "emejorameinto" (?) del Fuero viene por el segundo párrafo, es válida la comparación que hago con la Ley de 25 de octubre de 1839, y no hay inconveniente en afirmar que todos los parlamentarios que aprobaron la Constitución, con esas intenciones, son unos chantagistas, mentirosos, falsarios y embaucadores.

Esto lo dice y lo mantiene un navarro.

Francisco Beruete

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

1.-FUENTES MANUSCRITAS:

- Archivo Histórico Nacional (AHN). Sección Estado
- Archivo General de Navarra (AGN). Secciones:
 - Aduanas
 - Cortes
 - Diputación
 - Negocios eclesiást.
coi
- Actas de la Diputación Provincial
- Archivo Municipal de Pamplona (AMP)
 - Actas del Ayuntamiento

2.-FUENTES IMPRESAS:

- FUERO GENERAL DE NAVARRA. Edición realizada conforme a la obra de D. Pablo Ilarregui y D. Segundo Lapuerta, año 1869. Biblioteca de Derecho Foral. Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1964.
- NOVISSIMA RECOPILACION DE LAS LEYES DEL REINO DE NAVARRA (1512-1716), 3 vols. Biblioteca de Derecho Foral. Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1964.
- CUADERNOS DE LAS CORTES DEL REINO DE NAVARRA. 3 vols. Biblioteca de Derecho Foral. Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1964.
- DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES. CONGRESO
- DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES. SENADO

3.-PRENSA PERIODICA:

- BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA (BOP)
- EL PILOTO
- EL CORREO NACIONAL
- ECO DEL COMERCIO
- EL CATOLICO
- EL PENSAMIENTO NAVARRO

4.-LIBROS Y REVISTAS:

- AIZPUN SANTAFE, Rafael: Naturaleza jurídica de las leyes forales. Biblioteca de Derecho Foral. Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1966.
- ALONSO, José: Recopilación y comentarios de los Fueros y Leyes de Navarra. 1ª ed. 1848. Reed. Diputación Foral de Navarra. Pamplona, 1964.
- ARANA GOIRI, Sabino: Obras completas. Ed. Sabindiar-Baiza. Buenos Aires, S.A.
- ARGANASILLA DE LA CERDA Y BAYONA, J.: Nobiliario y armería general de Navarra. Madrid, 1899.
- ARIN Y DORRONSORO, Juan de: Problemas agrarios. Estudio jurídico-social de las corralizas, servidumbres, montes y comunidades de Navarra. Segovia, 1930.
- ARTAGAN, Barón de:
 - Carlistas de antaño. La Bandera Regional. Barcelona, 1910.
 - Cruzados modernos. La Bandera Regional. Barcelona.
- ARTOLA, Miguel:
 - Antiguo Régimen y revolución liberal. Ed. Ariel. Madrid, 1978.
 - La burguesía revolucionaria. Alianza Universidad. Historia de España. Alfaguara, V. Madrid, 1973.
 - Partidos y Programas políticos 1808-1936 (2 vols.). Ed. Aguilar. Madrid, 1974.

- AVIRANETA, Eugenio: Memoria dirigida al Gobierno español sobre los planes y operaciones, puestos en ejecución para aniquilar la rebelión en las provincias del Norte de España. Madrid, 1844. 2ª edic. (1ª edic. 1839).
- AZANZA, Miguel: Memoria sobre los hechos que justifican su conducta política desde marzo 1808 hasta abril 1814.
- AZCONA, José María:
 - "Clara-Rosa, masón y vizcaíno". Espasa-Calpe. Madrid, 1935.
 - Zumalacárregui. Fuentes históricas. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1946.
- BACON, Francisco: Historia de la revolución de las provincias Vascongadas y Navarra 1833-1837. Ed. Txertoa. San Sebastián, 1973.
- BARREIRO, José Ramón: El Carlismo gallego. Ed. Pico Sacra. Santiago de Compostela, 1976.
- BAZTAN Y GOÑI, Francisco:
 - Diputaciones provinciales de Navarra. Imprenta provincial. Pamplona, 1872.
 - Policía. Breves apuntes de cómo y cuándo se introdujo en Navarra. Pamplona, 1873.
- BELTZA (Seudónimo de Emilio López Adán): Del Carlismo al Nacionalismo Vasco. Ed. Txertoa. San Sebastián, 1978.
- BIELZA DE ORY, Vicente: Tierra Estella. Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1972.
- BORREGO, Andrés: El libro de las elecciones. Reseña histórica de las verificadas durante los tres períodos del Régimen Constitucional (1810 a 1814; 1820 a 1823; 1834 a 1873). Madrid, 1874.
- BURGO, Jaime Ignacio del: Origen y fundamento del régimen foral en Navarra. Tesis doctoral. Universidad de Deusto. Bilbao, 1966.
- BUEGOS, Javier de: Anales del Reinado de Isabel II (6 tomos). Madrid, 1850-51.
- CABALLERO, Fermín:
 - Fisonomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836. Madrid 1836.

- CAMPION, Arturo: Discursos políticos y literarios (1ª ed. 1907) reeditado por: La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1976.
- CAER, Raymond: España 1808-1839. Ariel. Barcelona, 1969.
- CALO BAGOJA, Julio: La hora navarra del XVIII. Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1969.
- CASTRO, José Ramón: Yanguas y Miranda. Ed. Gómez. Pamplona, 1963.
- CASES, José Antonio: Elecciones y Partidos en España 1834-1867. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Políticas. Universidad de Madrid, 1978.
- CASTILLO PUCHE, José Luis: Memorias íntimas de Aviraneta o manual del conspirador. Biblioteca Nueva. Madrid, 1952.
- CONELLAS, José Luis: Los Realistas en el trienio constitucional (1820-1823). Ed. Gómez. Pamplona, 1958.
- CONDICIONES Y SEMBLANZAS DE LOS DIPUTADOS A CORTES. LEGISLATURA 1820-1821. Madrid, 1821.
- COECUERA, Javier: Orígenes del nacionalismo vasco: su puestos ideológicos y socioeconómicos (1876-1903). Tesis doctoral. Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, 1978. Edit. por Siglo XXI. Madrid, 1979.
- CHRISTIANSEN, E.: Los orígenes del poder militar en España 1800-1854. Ed. Aguilar. Madrid, 1974.
- DOCUMENTOS RELATIVOS AL CONVENIO DE VERGARA PRESENTADOS OFICIALMENTE AL PARLAMENTO INGLÉS POR MANDADO DE S.M.B. EN 1840. Barcelona, 1876.
- DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen. Ed. Istmo. Madrid, 1973.
- ECHAVE-SUSTAETA, Eustaquio de: El Partido Carlista y los Fueros. Imprenta: El Pensamiento Navarro. Pamplona, 1915.
- EGANA, Julián de: Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias Vascongadas. Madrid, 1850.
- ELORZA, Antonio: Ideologías del Nacionalismo Vasco. Haranburu Editor. San Sebastián, 1978.
- ELLIOT, J. H.: La España Imperial 1469-1716. Ed. Vicens Vives. Barcelona, 1965. 3ª ed. 1970.

- ESPOZ Y MINA, Francisco: Memorias del General D. Francisco Espoz y Mina. 2 vols. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 1962.
- ESTADISTICA DEL PERSONAL Y VICISITUDES DE LAS CORTES Y DE LOS MINISTERIOS DE ESPAÑA. Desde el 29 de septiembre de 1833 en que falleció el Rey D. Fernando VII hasta el 24 de diciembre de 1879 en que se suspendieron las sesiones. Madrid, 1880.
- ESTECHA, José María de: Régimen político y administrativo de las Provincias Vasco Navarras. Imprenta provincial. 2ª edición. Bilbao, 1918.
- ESTELLA, Bernardino de: Historia Vasca (1ª ed. Buenos Aires, 1931). Ed. Izaro. Bilbao, 1977.
- ESTORNES ZUBIZAREETA, Idoia: Carlismo y abolición foral. Ed. Auñamendi. San Sebastián, 1976.
- EXTRAMIANA, J.: De la Paz a la Guerra: aspectos de la ideología dominante en el País Vasco de 1866 a 1873. VII Coloquio de Pau. Edicusa. Madrid, 1977.
- FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa: 1766-1833: cambio económico e historia. Ed. Akal. Madrid, 1975.
- FERNANDEZ PEREZ: Historia de la Iglesia y obispado de Pamplona. Madrid, 1820.
- FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco 1.100-1.850. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1974.
- FERRER, Melchor: Historia del Tradicionalismo español (29 vols.). Editorial Católica Española. Sevilla 1941-1960.
- FLORISTAN SANANES, Alfredo:
 - La desamortización de bienes pertenecientes a corporaciones civiles y al Estado en Navarra. En: Homenaje al Excmo. Sr. D. A. Melón. Zaragoza, 1966.
 - La Ribera tudelana de Navarra. Institución Príncipe de Viana. CSIC. Zaragoza, 1951.
- FONTANA, Josep:
 - La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820. Ed. Ariel. Barcelona, 1971.
 - Hacienda y Estado en la crisis del Antiguo Régimen

gimen español 1823-1833. Ed. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1973.

- GAMBRA, Rafael: La primera guerra civil de España (1821-23). Escelicer. Madrid, 1950.
- GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo:
FERNANDEZ, Tomás Ramón:
 - Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas, S.A. Madrid, 1977.
- GARCIA GALLO, Alfonso: Manual de Historia del Derecho Español. 4ª ed. Madrid, 1971.
- GARCIA TREVIJANO, José Antonio: Tratado de Derecho Administrativo. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1967.
- GARCIA DE VALDEAVELLANO, Luis: Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media. Revista de Occidente. Madrid, 1868 (2ª ed. 1970).
- GARCIA VENERO, Maximiano:
 - Historia del Parlamentarismo Español (1810-1833). Instituto Estudios Políticos. Madrid, 1946.
 - Historia del Nacionalismo Vasco (3ª ed.). Ed. Nacional. Madrid, 1969.
- GARRAN Y NOSO, Justo: El sistema foral de Navarra y Provincias Vascongadas. Ed. Gómez. Pamplona, 1935.
- GONI GAZTANBIDE, José:
 - La Diócesis de Pamplona en 1814 vista por su obispo. Revista Príncipe de Viana nº 128-129. Pamplona, 1972.
 - Un obispo de Pamplona, víctima de la Revolución. Fray Veremundo Arias Teixeira O.S.B. (1804-1815). Hispania Sacra. vol. XIX, 1966.
- GUZMAN, Martín Luis: Mina el Mozo, héroe de Navarra. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1932.
- HUICI GONI, María Puy: Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. Instituto Príncipe de Viana. Rialp, 1963.
- IBAÑERA, Javier:
 - Biografías de los Ilustres navarros del s. XVIII. Imp. Jesús García. Pamplona, 1952.

- Biografías de los Ilustres Navarros del s. XIX y parte del XX. Imprenta Jesús García. Pamplona, 1953.
- Historia del Monasterio de Irache. Revista Príncipe de Viana
- Historia de Roncesvalles. Ed. La Acción Social. Pamplona, 1935.
- IDOATE, Florencio:
 - La Comunidad del Valle del Roncal. Ed. Diputación foral de Navarra. Pamplona, 1977.
 - La merindad de Tudela durante la guerra realista. Revista Príncipe de Viana nº 104 y 105. Pamplona, 1966.
- ILARREGUI, Pablo: Memoria sobre modificación de los fueros. Pamplona, 1872. Reed: Diputación Foral de Navarra. Pamplona, 1966.
- IRIBARREN, José María:
 - Espoz y Mina. El guerrillero. Ed. Aguilar. Madrid, 1965.
 - Espoz y Mina el liberal. Ed. Aguilar. Madrid, 1967.
- IZUJO, Manuel de: Instituciones jurídicas vascas. EKIN. Buenos Aires, 1945.
- JIMENO JURIO, José María: Historia de Pamplona. Ediciones y Libros, S.A., 2ª ed. Pamplona, 1975.
- LABORIE ERROZ, María Concepción: Navarra ante el constitucionalismo gaditano. Revista Príncipe de Viana nº 112-113. Pamplona, 1968.
- LACARRA, José María: Estructura político-administrativa de Navarra antes de la Ley Paccionada. Revista Príncipe de Viana nº 92-93. Pamplona, 1963.
- LAFUENTE, Modesto: Historia general de España. 6 vols. Montaner y Simón editores. Barcelona, 1882.
- LALINDE ABADIA, Jesús: Iniciación histórica al Derecho Español. Ed. Ariel. Barcelona, 1978 (2ª ed.).
- LAERAYOZ, Javier: La segunda guerra carlista en Navarra. Revista Príncipe de Viana nº 63. Pamplona, 1956.
- LARONDE, Jean Claude: El Nacionalismo Vasco. Su origen y su ideología en la obra de Sabino Arana Goiri. Ed. Txertoa. San Sebastián, 1977.

- LOS ARCOS, Javier: Intervención del Exmo. Señor D. Javier Los Arcos en la discusión del proyecto de ley de presupuestos para el año económico 1893 a 1894 en los puntos referentes a la provincia de Navarra. 6n: Temas Forales. Biblioteca de Derecho Foral. Pamplona, 1966.
- LUCAS VEEDEU, Pablo: Curso de Derecho Político. II. Ed. Tecnos. Madrid, 1972.
- LLUIS Y NAVAS, Jaime: Las divisiones internas del carlismo a través de la Historia. Ensayo sobre su razón de ser (1814-1936). Homenaje a Vicens Vives. Universidad de Barcelona. Barcelona, 1967.
- MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España (16 vols.). Madrid 1845-1850.
- MARAVALL, José Antonio:
 - Las comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna. Revista de Occidente. Madrid, 1963.
 - El pensamiento político en España a comienzos del siglo XIX: Martínez Marina. Revista de Estudios Políticos nº 79, 1955.
- MARICHALAR, Amalio, y
MANRIQUE, Cayetano:
 - Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil en España. Madrid, 1861-1872. 9 vols. (Reeditado el t. II referente a las 4 provincias vasca bajo el título Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. Ed. Auñamendi. San Sebastián, 1971.
- MARTIN, Andrés: Historia de la guerra de la División Real de Navarra contra el intruso sistema, llamado constitucional, y su gobierno revolucionario. Imprenta Javier Gadea. Pamplona, 1825.
- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: Elecciones y partidos políticos en España 1868-1871. Ed. Taurus. Madrid, 1969.
- MARTINEZ DIEZ, Gonzalo: Fueros sí, pero para todos. Ed. Alce-Silos. Valladolid, 1976.
- MARTINEZ TOMAS, Antonio: La naturaleza jurídica del régimen foral de Navarra. Tesis doctoral. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1972.
 - El régimen financiero y tributario de Navarra. Centro de Estudios Constitucionales. Seminario: Aspectos económicos y financieros de las autonomías regionales. Madrid. 8-XI-1978.

- MARX, Karl:
ENGELS, F.:
 - Revolución en España. Ed. Ariel. 3ª ed. Barcelona, 1970.
- MENCOS, Joaquín Ignacio: Memorias de D. Joaquín Ignacio Mencos, Conde de Guendulain 1799-1882. Ed. Aramburu. Pamplona, 1952.
- MENSUA FERNANDEZ, Salvador: La Navarra media oriental. Institución Príncipe de Viana. Zaragoza, 1960.
- MIRANDA RUBIO, Francisco. La Guerra de la Independencia en Navarra. La acción del Estado. Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1977.
- MONTORO SAGASTI, José J.:
 - La propiedad comunal y la privada en la villa de Falces (Navarra). Ed. Acción Social. Pamplona, 1929.
 - La propiedad privada y la comunal en la ciudad de Olite. Ed. La Acción Social. Pamplona, 1929.
- MONTOLYA, Pío de: La intervención del clero vasco en las contiendas civiles 1820-1823. San Sebastián, 1971.
- MORAL, Tomás, O.S.B.: El monasterio de Leyre en el último período de vida cisterciense (1800-1836). Revista Príncipe de Viana nº 118-119. Pamplona, 1970.
- MORRAS, Angel: Memorias Tafallesas 1821-1898. Ediciones y Libros, S.A., Pamplona, 1974.
- MUGICA, José: Carlistas Moderados y Progresistas. Biblioteca Vascongada de Amigos del País. San Sebastián, 1950.
- MUTILOA POZA, José María:
 - La Desamortización eclesiástica en Navarra. EUNSA. Pamplona, 1972.
 - El priorato de YARTE (IART), origen, configuración y desamortización. Revista Príncipe de Viana nº 118-119. Pamplona, 1970.
- NAGORE, Leandro: Apuntes para la Historia (1872-1886). Ed. Gómez. Pamplona, 1964.
- NIDO Y SETALERNA, Juan del: Historia política y parlamentaria de S.A.D. Baldomero Fernández Espartero. Madrid, 1916.

- NOMBELA, Julio: Crónica de la provincia de Navarra. Madrid, 1868.
- OLAVE DIEZ, Serafín: El pacto político como fundamento histórico general de la nacionalidad española y es pecialmente como manifestación legal de la soberanía independiente de Navarra en unas épocas y en otras de su autonomía sin perjuicio de la unidad nacional. Madrid, 1878. Reeditada por la Diputación Foral de Navarra en Tomas Forales, 1966.
- OLCINA, Evarist: El carlismo y las autonomías regionales. Ed. Seminarios y Ediciones. Madrid, 1974.
- OLORIZ, Hermilio:
 - Fundamento y defensa de los Fueros. Pamplona, 1880.
 - Navarra en la Guerra de la Independencia. Pamplona, 1910.
- OROZ Y ZABALETA, Luis: Legislación administrativa de Navarra (2 vols.). Pamplona 1917-1923.
- ORTIZ (seudónimo de Francisco Letamendía): Historia de Euskadi: el nacionalismo vasco y ETA. Ruedo Ibérico. París, 1975.
- OTAZU Y LLANA, Alfonso:
 - Hacendistas navarros en Indias. Bilbao, 1970.
 - El igualitarismo vasco: mito y realidad. Ed. Txertoa. San Sebastián, 1973.
- OYABEZUN, Román: Historia del Carlismo. Alianza Editorial. Madrid, 1969.
- PAYNE, Stanley G.: Ejército y sociedad en la España liberal 1808-1936. Akal Editor. Madrid, 1976.
- PEGENAUTE, Pedro: Planteamiento de la represión política en Navarra durante el reinado de Fernando VII. Revista Príncipe de Viana nº 134-135. Pamplona, 1974.
- PILALA, Antonio: Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista (6 vols.). Madrid, 1889-1901.
- ECDEZNO, Conde de: Conmemoración de la Ley Paccionada de 1841. Revista Príncipe de Viana nº 4. Pamplona, 1941.

- RODRIGUEZ GARLAZA, Rodrigo:
 - Navarra de Reino a Provincia (1828-1841). EUNSA. Pamplona, 1968.
 - Tensiones de Navarra con la Administración central (1778-1808). Ed. Diputación Foral de Navarra. Pamplona, 1974.
- SALCEDO IZU, Joaquín: El Consejo Real de Navarra en el s. XVI. EUNSA. Pamplona, 1964.
- SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia del constitucionalismo español. Instituto de Estudios Políticos. 2ª ed. Madrid, 1964.
- SANZ CID, Carlos: La Constitución de Bayona. Ed. Reus. Madrid, 1922.
- SECO SERRANO, Carlos: Tríptico Carlista. Ed. Ariel. Barcelona, 1973.
- SEMBLANZAS DE LOS 340 DIPUTADOS A CORTES QUE HAN FIGURADO EN LA LEGISLATURA 1849 a 1850. Madrid, 1850.
- SOLOZABAL, Juan José: El primer nacionalismo vasco. Tucur Ediciones. Madrid, 1975.
- TIerno GALVAN, Enrique: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936). Ed. Tecnos. Madrid, 1972.
- TOMAS Y VALIENTE, Francisco: El marco político de la desamortización en España. Ed. Ariel. Barcelona, 1971.
- TOREAS, Jaime: Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823. Ed. Ariel. Barcelona, 1976.
- TUGÓN DE LARA, Manuel:
 - La España del s. XIX (3ª ed.) Librería Española. París, 1971.
 - El hecho religioso en España. París, 1968.
- URABAYEN, Leoncio: Biografía de Pamplona. Pamplona, 1952.
- URBISTONDO, Antonio de: Apuntes sobre la guerra de Navarra en su última época y especialmente sobre el Convenio de Vergara. Madrid, 1841.
- VICENS VIVES, Jaime: Historia económica de España (1ª ed. 1959). Ed. Vicens Vives. Barcelona. 4ª ed. 1977.
- VILLANTEVA, Joaquín Lorenzo: Mi viaje a las Cortes. Madrid, 1960.

- VIPEGON: Album político. Madrid, 1912.
- XAHO, Agustín: Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos (París, 1836). Reed. Txertoa. San Sebastián, 1976.
- YAGUAS Y MIRANDA, José:
 - Análisis histórico crítico de los Fueros de Navarra. Pamplona, 1838.
 - Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra (3 vols.). Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1964.
 - La contragerizonza o refutación jocoseria del ensayo histórico crítico sobre la legislación de Navarra, compuesto por D. José María Zuazna var. Pamplona, 1833.
- ZABALA, Angel de: La Constitución de Bayona. Yakintza nº 4 y 5. San Sebastián, 1933.
- ZABALA, Federico de: Munagorri y la bandera "Paz y Fueros". Muga nº 1. Bilbao, 1979.
- ZARATIEGUI, Juan Antonio: Vida y hechos de Don Tomás de Zumalacárregui, nombrado por el señor don Carlos María Isidro de Borbón capitán general del ejército realista, duque de la Victoria y Conde de Zumalacárregui. Imp. José de Rebolledo y Cía. Madrid, 1845.

5.-FOLLETOS:

- CARTAS DE UN LABRIEGO NAVAERO. Publicadas en el periódico "La Epoca". Madrid, 1872.
- DISCURSO QUE EN EL DIA 2 DE ENERO DE 1836 PRONUNCIO EL SEÑOR DON MODESTO DE CORTAZAR REGENTE DEL CONSEJO REAL DE NAVARRA EN LA APERTURA SOLENNE DEL MISMO. Imprenta Javier Goyeneche. Pamplona, 1836.
- EXPOSICION QUE AL CONGRESO NACIONAL DIRIGE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE NAVARRA SOBRE LA SITUACION POLITICA: ESTADO DE HACIENDA PUBLICA DEL ANTIGUO REINO: Y OBSERVACIONES ACERCA DE SU RIQUEZA. Imprenta José Domingo. Pamplona, 1820.
- EXTRACTO DEL DISCURSO SOBRE LAS VENTAJAS QUE PUEDE PRODUCIR LA EXPORTACION DE NUESTROS VINOS A LAS POTENCIAS DEL NORTE, PRESENTADO POR LA REAL SOCIEDAD TUDELANA DE LOS DESEOS DEL BIEN PUBLICO EN LAS FUNCIO-

NES PUBLICAS QUE CELEBRO EN LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE EL AÑO DE 1783. Impr. Joseph Longás. Pamplona.

- HISTORIA Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD TUDELANA DE LOS DESEOSOS DEL BIEN PUBLICO. Pamplona, 1778.
- MANIFIESTO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE NAVARRA AL REY (30-XI-1821). Imprenta Paulino Longás. Pamplona, 1821.
- MEMORIA DE LA REAL SOCIEDAD TUDELANA DE LOS DESEOSOS DEL BIEN PUBLICO. Imprenta Real. Madrid, 1787.
- REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD PATRIOTICA DE PANPLONA. Imprenta Xavier Gadea. Pamplona, 1820.
- RELACION SENCILLA DE LO OCURRIDO EN LA DEFENSA DEL FUERTE DE LA CIUDAD DE ESTELLA, POR SU GUARNICION, MILICIANOS NACIONALES VOLUNTARIOS Y PATRIOTAS, DE LA MISMA CUYA FUERZA CONSISTIA EN CIEN PROVINCIALES DE LOGROÑO, VEINTE SOLDADOS DE LOS REGIMIENTOS DE TOLEDO Y ORDENES MILITARES, Y OCHENTA Y CUATRO VOLUNTARIOS Y PATRIOTAS CONTRA LAS COLUMNAS DE FACCIOSOS MANDADAS POR LOS CABECILLAS GUERGUE, ZABALA, CUEBILLAS, ILZARBE Y OTROS VARIOS CUYO TOTAL DE FUERZAS SEGUN NOTICIAS ERA DE 2000 HOMBRES. Impr. José Domingo. Pamplona, 1823.
- ¡VIVA NAVARRA!. Firmado por: EL ALDEANO NAVAERO. 10 de junio - 1873.

